

— *Alternativas al* —

CAPITALISMO

COLONIALISMO

DEL SIGLO XXI

— *Alternativas al* —

CAPITALISMO

COLONIALISMO

DEL SIGLO XXI

Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo



Fundación
Rosa Luxemburg



2013

Alternativas al

CAPITALISMO / COLONIALISMO DEL SIGLOXXI

Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo

1era edición:

Ediciones Abya Yala

Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson

Casilla: 17-12-719

Quito-Ecuador

Teléfonos: 2506-247/2506-251

Fax: (593-2) 2506-255/2506-267

email: editorial@abyayala.org

diagramación@abyayala.org

www.abayayala.org

Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala

Fundación Rosa Luxemburg

Miravalle N24-728 y Zaldumbide

(La Floresta)

Quito – Ecuador.

Teléfonos: (593-2) 2553771 / 6046945 /

6046946

email: info@rosalux.org.ec

www.rosalux.org.ec

Compilación:

Miriam Lang, Claudia López y Alejandra Santillana

Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de la Región Andina

Edición:

Carmen Ortiz y Sandra Ojeda

Coordinación técnica:

Claudia López

Portada:

Luis Herrera

Diseño:

Ediciones Abya Yala

Imprenta:

Quito, Ecuador

ISBN:

978-9942-09-127-7

Impreso en Quito-Ecuador, febrero 2013

¿Por qué buscar alternativas?

A manera de introducción

Miriam Lang, Alemania/Ecuador..... 7

EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI

Con el tiempo contado

Crisis civilizatoria, límites del planeta, asaltos a la democracia
y pueblos en resistencia

Edgardo Lander, Venezuela..... 27

Las ropas verdes del rey

La economía verde: una nueva fuente de acumulación primitiva

Camila Moreno, Brasil..... 63

BUSCANDO ALTERNATIVAS A ESCALA REGIONAL

Dialéctica de la integración latinoamericana

Manuel Cerezal, Francia/Venezuela 101

Transiciones hacia un nuevo regionalismo autónomo

Eduardo Gudynas, Uruguay 129

Un nuevo modelo energético para la construcción del Buen Vivir

Pablo Bertinat, Argentina 161

Postextractivismo y alternativas al desarrollo desde la sociedad civil

Eduardo Gudynas, Uruguay 189

LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO ESCENARIOS

DE TRANSFORMACIÓN

Resignificando la ciudad colonial y extractivista

Mario Rodríguez, Bolivia..... 225

Horizontes de transformación del movimiento urbano popular

Alexandra Martínez, Venezuela..... 259

¡Una nueva política para el campo!

La agricultura orgánica y campesina: saludable, sustentable y generadora de empleo

Entrevista a Luis Andrango y José Cueva, Ecuador..... 277

EL ESCENARIO NACIONAL: ECUADOR

Salir del extractivismo: una condición para el *Sumak Kawsay*

Propuestas sobre petróleo, minería y energía en el Ecuador

Alberto Acosta, Esperanza Martínez, William Sacher, Ecuador..... 307

¿CÓMO CONCILIAR LOS DERECHOS LABORALES CON LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA? UN DEBATE PENDIENTE

De la fábrica al territorio

Dimensiones sociales y ambientales en las resistencias de los trabajadores colombianos

Tatiana Roa, Colombia 383

Tensiones entre la reivindicación de trabajo y la defensa de los derechos de la Naturaleza

Equipo CEDINS, Colombia 397

DEBATES SOBRE ALTERNATIVAS EN EUROPA: PUNTOS DE PARTIDA PARA UN NUEVO INTERNACIONALISMO

División sexual del trabajo, economía del tiempo y Buen Vivir

La perspectiva cuatro-en-uno

Frigga Haug, Alemania..... 417

Hay que dejar de crecer

Acerca del postcrecimiento

Karin Gabbert, Alemania..... 431

Crisis socioecológica y modo de vida imperial

Crisis y continuidad de las relaciones sociedad-Naturaleza en el capitalismo

Ulrich Brand y Markus Wissen, Alemania/Austria 445

Reacciones emancipatorias frente a la crisis

Kristina Dietz, Alemania 471

BIBLIOGRAFÍA 485

¿Por qué buscar alternativas? A manera de introducción

Miriam Lang¹

*Creo que todavía no tenemos una conciencia clara
de algo que me parece muy importante:
Y es que los derechos de la Naturaleza y los derechos humanos
son dos nombres de la misma dignidad.
Más de cinco siglos llevamos regalando los recursos naturales,
Otorgando a cambio de nada recursos naturales que después se van.
Se van sin decir adiós, sin decir gracias siquiera,
Dejando a sus espaldas inmensos agujeros, miles de muertos,
En los socavones, en las plantaciones.
Fantasmas, palacios vacíos.*

Eduardo Galeano, 2012²

¿Por qué buscar alternativas? Si uno mira las cifras oficiales de la CEPAL, le va bien a América Latina en estos últimos años. En 2012, la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del continente se estimó en 3,1%, frente a 2,2% de crecimiento mundial. “A pesar del deterioro de la economía mundial, la región mostró resiliencia”, se afirma (CEPAL, 2012:9). En muchos países de la región, las posibilidades de acceso al consumo se han ampliado considerablemente. Pero, ¿significa esto realmente que las y los latinoamericanos viven como lo desean y,

-
- 1 Miriam Lang trabaja como directora de la Fundación Rosa Luxemburg, Oficina Región Andina, que impulsó la conformación del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Es doctora en Sociología de la Universidad Libre de Berlín, con especialización en Estudios de Género, y tiene una Maestría en Estudios Latinoamericanos. Su experiencia incluye una amplia colaboración con organizaciones de mujeres e indígenas en América Latina.
 - 2 Transcripción de una intervención en video en: <http://nuestrouiversovivo.blogspot.com/2012/04/megamineria-saqueo-e-indignacion-por.html> [Consulta: 16 de enero, 2013]

sobre todo, que las futuras generaciones tendrán buenas condiciones para desenvolverse? ¿O, al contrario, es el crecimiento un cáncer que padece la humanidad, un cáncer del cual el cambio climático solamente sería uno de los múltiples síntomas, como lo afirma Dennis Meadows,³ en una entrevista a finales de 2012? ¿Adónde nos llevará la estrategia del crecimiento con una población mundial de 7 mil millones de personas, en un planeta cuya superficie no es extensible? Si todos los humanos aspiramos a aumentar nuestro nivel de consumo, a tener carro propio, ¿de dónde y cómo sacaremos tanta materia prima? ¿Cómo se supone que este planeta, que ya chilla, aguantará el nivel de contaminación y la montaña de basura que esto conlleva?

A la par que el discurso macroeconómico felicita al crecimiento como un éxito, los conflictos sociales aumentan en nuestro continente: marchas multitudinarias de cientos de kilómetros, bloqueos, presos, muertos. Estos conflictos surgen alrededor de proyectos que tienen un denominador común: extraer materia prima para abastecer la demanda del mercado mundial. Esto es lo que llamamos extractivismo, el modelo económico que ubica a América Latina en el lugar de los proveedores de materia prima para otros países, donde ésta será procesada o industrializada. En los últimos años, los precios ofrecidos por el cobre, el oro, el petróleo o el gas natural fueron tan atractivos, que gobiernos latinoamericanos de cualquier tinte ideológico optaron por el extractivismo

3 Autor principal del estudio “Limits to growth”, publicado en 1972 por el Club de Roma. Economista y especialista en gestión de sistemas por el Massachusetts Institute of Technology. Actualmente preside el Laboratory for interactive learning. Entrevista publicada en Frankfurter Allgemeine Zeitung, Alemania en diciembre 2012: <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/dennis-meadows-im-gespraech-gruene-industrie-ist-reine-phantasie-faz-11980763.html> [Consulta 14 de enero, 2012]

como eje estratégico de sus políticas económicas.⁴ Mientras Juan Manuel Santos lo ha declarado una de las “locomotoras” de la economía, para Rafael Correa es “la gran oportunidad que Dios nos ha dado para salir de la miseria”.⁵ Sin embargo, ¿es realmente una opción tan atractiva si miramos más allá del corto plazo? ¿Es un camino responsable con el futuro del continente? Al parecer, mucha gente piensa que no. Como lo describe Eduardo Gudynas en este libro, en todos los países de América del Sur crece el descontento con este modelo, y se articulan las resistencias.

Mientras Europa y Estados Unidos batallan para salir de sus respectivas crisis, las potencias emergentes como China, Brasil, Rusia o la India les alcanzan en una carrera cada vez más acelerada por el acceso a materias primas. En diversas partes del continente, encontramos nuevas riquezas que extraer de la Naturaleza y recurrimos a tecnologías cada vez más insólitas para no dejar ni un solo vestigio. Aunque muchos gobiernos, sobre todo los autodenominados progresistas, han aumentado sus ingresos fiscales mediante la renegociación de regalías y condiciones, no han actuado con transparencia en las negociaciones, por ejemplo, con China, lo que limitará el control democrático de la ciudadanía sobre las nuevas deudas que se están pactando, algunas de ellas, directamente con barriles de petróleo.⁶ En múltiples casos, ya no son multinacionales privadas –como las conocidas Occidental

4 Ver, por ejemplo, Maristella Svampa. “Consenso de los commodities y megaminería”. Marzo 2012. En: <http://alainet.org/active/53571&lang=es> [Consulta: 17 de enero, 2013]

5 Rafael Correa, en el enlace ciudadano del 11 de diciembre de 2011, en Macas. Ver: <http://www.youtube.com/watch?v=AVqTbetBY1Y> [Consulta 17 de enero, 2013]

6 Para el caso del Ecuador, el libro de Fernando Villavicencio: *Ecuador Made in China* (2013, Quito), documenta la falta de transparencia y las problemáticas inherentes a los negocios petroleros con China. Ver: “País petrolero made in China”, en *Revista Vanguardia*, No. 373, 7 al 11 de enero 2013, Ecuador, p. 24 y ss.

Petroleum o Chevron-Texaco— las que extraen los recursos, sino empresas públicas o semipúblicas de Estados “amigos”: Petrobras de Brasil, la venezolana PDVSA, o las chinas CNPC, Andes Petroleum o Petrooriental. Hasta los años noventa, frente a la arremetida neoliberal de privatizaciones, el canon ideológico de las izquierdas definía la necesidad de proteger y fortalecer a las empresas públicas—y pueden existir hasta hoy buenas razones para hacerlo—. Las condiciones de negociación con un actor estatal que está en el propio país, con representantes identificables, y quizás interesados en la reelección de su corriente política, siempre serán más favorables que aquellas con una empresa multinacional privada, con sede en algún paraíso fiscal. Y si la empresa pública es de otro país, puede ser que allá existan organizaciones solidarias que promuevan un reclamo. Sin embargo, determinadas empresas públicas de hoy —que en muchos casos ya tienen altos porcentajes de capital privado—, son también multinacionales, y están atravesadas por la misma lógica de gestión empresarial privada. En esas circunstancias, sus prioridades no apuntan necesariamente a la generación de empleo, a las condiciones laborales o ambientales, sino que están ancladas a un tipo de capitalismo altamente especulativo e irresponsable. Al operar con las mismas estrategias que las privadas, su principal preocupación es el precio de sus acciones en la bolsa de valores. En el caso de las empresas chinas, hay evidencias de que socavan las conquistas de los obreros latinoamericanos en cuanto a derechos laborales.⁷

7 Ver Sacher y Acosta, 2012, p. 31 y ss., o para casos más recientes, enlaces como los siguientes: <<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/huelga-de-obreros-de-empresa-china-chone-569732.html>>; <http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101342656/-1/Manab%C3%ADa%3A_Trabajadores_de_la_compa%C3%B1a%3AAda_china_Tiesiju_est%C3%A1n_en_huelga.html#.UPgXrfJJTXQ>; <<http://www.conflictive.org.ve/laboral/cara-bobo-transnacional-china-sinohydro-no-cancela-beneficios-a-personal-venezolano-en-el-palito.html>>; <http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=186105&um>

Finalmente, encontramos ahora una nueva retórica para legitimar estos emprendimientos. Ya poco se habla de ajuste estructural en América Latina. Más bien el discurso introduce elementos como “erradicación de la pobreza” y “responsabilidad social empresarial”. En palabras de Miguel Romero y Pedro Ramiro, la estrategia consiste en:

Convertir a las personas pobres en consumidoras y a la pobreza en un negocio rentable para las grandes corporaciones. Construir un relato que reemplace el ajuste estructural por la lucha contra la pobreza, las privatizaciones por las alianzas público-privadas, las trabajadoras y trabajadores por los emprendedores, la responsabilidad efectiva de las empresas transnacionales por la voluntariedad de la responsabilidad de todos los ‘grupos de interés’. (...) Es la era de la pobreza 2.0: no se trata de atajar las causas estructurales que promueven las desigualdades sociales, sino de gestionar y rentabilizar la pobreza de acuerdo a los criterios de mercado (Romero y Ramiro, 2012, p. 11 y ss.).

Los conceptos más antipopulares del discurso neoliberal han quedado atrás, mientras su lógica, de abordar todos los aspectos de la vida estrictamente con los instrumentos de la gestión empresarial, sigue más vigente que nunca. Estos y otros elementos culturales instalados en la época neoliberal también permean el estilo de gestión de algunos gobiernos progresistas, aunque éstos se propongan otras orientaciones en su política económica.

Otra continuidad importante: El capitalismo del siglo XXI, al igual que aquel de los siglos XIX y XX, se erige sobre la sombra del colonialismo. Pero este último ha cambiado de estrategia: las “conquistas” de hoy en América Latina son más que nada comerciales, y se asientan en tratados que aparentan ser legales –podría-

t=ministro_relaciones_laborales_comparecera_a_asamblea_miercoles_proximo_por_denuncias_trabajadores_coca_codo_sinclair

mos hablar, por ello, de un neocolonialismo—. No obstante, las venas del continente siguen abiertas, y su principal actividad económica es perfectamente funcional a las necesidades de los más ricos, en otras regiones del planeta. Aquí ni siquiera se ha abierto un espacio realmente democrático para debatir qué sería funcional a un futuro deseado por la gente diversa que vive en América Latina. Más bien, se colocan hechos, a una velocidad abrumadora, decididos por pequeñas, nuevas y viejas élites, cuyas consecuencias, sin embargo, en muchos casos serán irreversibles.

Pero también existen elementos nuevos. El capitalismo que nos rige en este nuevo siglo ha cambiado de ropaje: es, en primer lugar, un capitalismo financiero y especulativo. La expansión de la producción real ha pasado casi a un segundo plano. La acumulación, hoy en día, está basada sobre todo en el financiamiento de aspectos de la vida que generaciones anteriores difícilmente hubieran podido imaginarse como mercancías —o *commodities*—, para usar el neologismo correspondiente. Se especula con productos financieros, pero también con la base material que hace posible la vida humana, con los alimentos, con superficies cultivables, con el carbono que captan los bosques. Como dice David Harvey,

La explotación de los recursos naturales tiene dos dimensiones: la primera consiste en simplemente tomar el recurso sin remunerar a los que lo tienen, y la otra consiste en que una vez que se tiene el control sobre un recurso natural, se especula con él para extraer una renta.⁸

Toda actividad extractiva tiene esta doble cara: antes de pasar a la extracción real de un recurso, se especula con las reservas

8 Entrevista con David Harvey. Nuevo imperialismo y cambio social: Entre el despojo y la recuperación de los bienes comunes. En: <http://www.herramienta.com.ar/entrevistas/entrevista-con-david-harvey-nuevo-imperialismo-y-cambio-social-entre-el-despojo-y-la-rec> [Consulta: 17 de enero, 2013]

que hipotéticamente existen en un territorio determinado; y esta especulación ya arroja ganancias, y ya tiene impactos sociales y políticos.⁹ Puesto que debe recurrir a la mentira como estrategia, esta especulación despoja a los habitantes de ese territorio de la capacidad de decidir informadamente sobre su destino. En el extractivismo, cada dato, cada cifra o información proporcionada sea por las empresas o por los gobiernos, finalmente, responde a intereses. Así funciona el negocio de la especulación. Edgardo Lander y Camila Moreno desarrollan con más detalle estas características del capitalismo del siglo XXI, en la primera sección de este libro.

En muchos casos, esta metamorfosis del capitalismo ha rebasado a las izquierdas. Sus nuevas estrategias generan dudas y desorientación, y un amplio abanico de complicidades, a veces no muy conscientes. Así, por ejemplo, con la privatización de las jubilaciones en forma de fondos de pensión, ahora los ahorros de los trabajadores sindicalizados, en muchos casos, son invertidos en las multinacionales del extractivismo, por ejemplo en Petrobras, porque éstas generan intereses atractivos. Así, los trabajadores se convierten en cómplices de la destrucción ambiental y social que estas empresas puedan causar (ver Zibechi, 2012, 51 y ss.). Muchos campesinos acceden a firmar contratos que empeñan su tierra y sus bosques a la especulación financiera de los mercados de carbono, atraídos por este ingreso extra; con ello, terminan participando en una estrategia que concede nuevos permisos de contaminación a las empresas del Norte, y posterga la transformación necesaria de los modos de vida imperiales y depredadores, hacia otras vivencias que garanticen futuro. El nuevo capitalismo se presenta como sustentable, verde y benévolo con los pobres, y se asienta perfectamente en un sistema político cuyo

9 Para conocer más acerca del manejo fraudulento de cifras sobre reservas, ver Sacher y Denault, 2012.

horizonte temporal generalmente enfoca las siguientes elecciones. La inmediatez de las transacciones financieras en la bolsa, la vista corta y codiciosa de los *brokers*, va de la mano con el cálculo de los partidos políticos, que suelen pensar en un solo periodo legislativo, en una sola reelección; es decir, en un futuro que acaba en cuatro, cinco o máximo diez años. Podríamos hablar de la dictadura de las ambiciones particulares del presente sobre el futuro de la humanidad. Este cortoplacismo instalado en el corazón del mismo sistema hace muy difícil la construcción democrática de alternativas, que siempre requiere tiempo.

La velocidad con la que suceden las cosas y, con ella, el tiempo —o la ausencia del mismo— se convierte en un factor esencial, no solo de nuestro modo de vida, sino de nuestro destino como especie. Por ello, la autora invitada Frigga Haug, en un aporte desde la teoría feminista, nos propone descentrar la economía en nuestro pensamiento y colocar justamente el tiempo en el centro de nuestra atención, en lo que ella llama una economía del tiempo para el Buen Vivir.

Las generaciones futuras no votan; por ende, sus intereses no tienen representación en el sistema actual. Buena parte del territorio latinoamericano está siendo concesionado para la extracción, y cada nuevo emprendimiento se celebra en los medios como una nueva inversión extranjera, un éxito de la política económica. Existe evidencia en Argentina, en Perú, en Filipinas, incluso en Estados Unidos, de que la minería a gran escala genera devastación y pobreza, en el largo plazo; que sus fuertes impactos ambientales imposibilitan cualquier otra actividad económica en las regiones afectadas.¹⁰ Lo que puede parecer atractivo para el

10 Ver Horacio Machado, Maristella Svampa, et al. (2012). *15 mitos y realidades de la minería transnacional*. Quito, Abya Yala; así como los siguientes sitios web: <<http://earthjustice.org/blog/2013-january/the-poverty-of-mountain-top-removal-mining>>; <<http://hronlineph.com/2012/08/05/in-the-news-mining-causes-highest-poverty-incidence-sun-star/>>

futuro inmediato, se convierte en desastre en un lapso que no superará los 15 o 20 años. Pero las generaciones futuras no votan.

Por debajo de la superficie, los dogmas de la letanía económica neoliberal persisten y perduran: hay que siempre exportar, hay que atraer a inversores extranjeros, hay que reducir impuestos. Los gobiernos progresistas de la región sí acogieron los dos primeros dogmas, pero no el último: ellos apuestan a un Estado fuerte que requiere muchos ingresos e invierte mucho en lo social y en infraestructuras. Esto representa cambios notables en el día a día de muchas personas, sin duda; pero en cuanto al extractivismo, visto desde la depredación de las condiciones de vida futuras, no marca ninguna diferencia significativa.

Este modelo ha generado un intenso debate. Quienes lo defienden, entre ellos muchos gobernantes, lo consideran la única fuente de generación de riqueza posible en la actualidad, necesaria para la redistribución y los beneficios sociales. Se plantean una fase extractivista transitoria; incluso intensifican la actividad extractiva, para solamente después, y sobre esa base, crear una nueva economía no extractivista.¹¹

La redistribución es necesaria, no cabe duda, y saludamos cualquier avance logrado en este sentido. Solo que, para que sea duradera y no dependa de los precios variables de las materias primas en el mercado mundial, también es necesario desconcentrar las economías y dotar a las clases populares de sus propios medios de producción. El modelo extractivista, tal como se aplica, tiende a

11 Las Constituciones y los planes de gobierno, así como buena parte del discurso oficial tanto de Bolivia y Venezuela como de Ecuador plantean la salida y superación paulatina del extractivismo, y corroboran sus efectos nocivos, en términos sociales, ambientales y de subordinación a los intereses del mercado mundial. Sin embargo, las políticas implementadas hasta ahora profundizan y amplían la extracción de recursos (para datos más precisos ver Víctor Álvarez et al., 2013).

concentrar aún más las economías y la riqueza en pocas manos, y a configurar enclaves en los territorios.¹²

Lo que además se obvia en esta argumentación, es que la riqueza que produce el extractivismo es muy relativa y reversible: cada mina, cada pozo petrolero, cada monocultivo es un emprendimiento que desplaza a poblaciones existentes y les sustrae sus medios de subsistencia de forma definitiva. Destruye formas de vida que quizás tenían la virtud de informarnos cómo más se podría vivir, más allá de la ciudad, del supermercado, del centro comercial y de la tele.

Entonces, ¿sobre qué paisajes, sobre cuál biodiversidad, con qué salud, con qué comunidades construiremos esta otra economía no extractivista, si no existe evidencia alguna de que la devastación extractivista sea reversible? ¿No es entonces necesario limitar la extracción de recursos en una transición urgente hacia otro modo de vida, en lugar de expandirla? ¿Podemos conformarnos con este camino que se nos proclama como el único posible? Este modo de producción destruye las bases materiales, sociales y culturales que permitirían construir otro mundo. A nombre de la “libertad de elegir”, de la libertad del consumidor de elegir su producto en el mercado, se nos despoja de la posibilidad de elegir entre las opciones realmente relevantes. ¿Queremos realmente estos beneficios de hoy, si se están generando a costa de la vida de mañana? Esta es también la temática que busca explorar el colectivo de autores de CEDINS, en este libro. Las personas que colaboran en el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo han optado por no conformarse con esta disyuntiva perversa. Hay que buscar alternativas, y hay que hacerlo ya.

12 Para mayor información sobre los alcances y límites de la redistribución efectuada en Bolivia, Ecuador y Venezuela, así como sobre la concentración de las respectivas economías, ver Víctor Álvarez et al., 2013.

El aparato mediático privado y los discursos oficialistas coinciden en este punto: son excelentes voceros del viejo credo de Margaret Thatcher: *There is no alternative*. No hay alternativa al extractivismo, no hay alternativa a la modernización bajo parámetros occidentales, no hay alternativa a la democracia representativa que se limita a lo electoral, no hay alternativa al formato actual de globalización con su derroche insensato de energía y recursos, ni a las guerras por materias primas. O si es que hubiera alternativa, se nos hace creer que es o un modelo anglosajón neoliberal o un capitalismo autoritario como China, con algunos elementos nekeynesianos, quizás. Nos enfrentamos a un cartel de opinión sumamente poderoso, cuya hegemonía está, sin duda, más que afirmada. Y lo más perverso es que el discurso dominante nos vende sus actos como acciones para “erradicar a la pobreza”, mientras producen, sistemáticamente, nueva pobreza: pobreza por desplazamiento; pobreza por desposesión; pobreza por migración forzada; pobreza por contaminación ambiental y secuelas en la salud; pobreza porque personas que antes se abastecían, aunque modestamente, con su pedazo de tierra, ahora pasan a depender de las prestaciones concedidas por el Estado, al menos mientras dure la bonanza de los precios de las materias primas. No solamente se les despoja de la tierra, sino de su independencia y dignidad, de su capacidad de decisión, de su contexto social y político. Después, esta gente será simplemente pobre, y más pobre que antes.

Pensamos que es fundamental replantear, más allá de los indicadores usuales, qué es lo que entendemos por pobreza; y qué, por riqueza. Reformular cómo queremos vivir; enfrentar la centralidad del consumo; revalorar las relaciones sociales, la convivencia, el espacio público, lo espiritual, nuestros bienes comunes, nuestra capacidad de tomar decisiones informadas y de controlar los territorios en los que vivimos. Revalorar la Naturaleza, cuya

existencia es una condición necesaria para la nuestra, por más que esto no se perciba en el día a día de la ciudad.

El “combate a la pobreza”, en términos hegemónicos, significa la inclusión –aunque muy parcial– al mundo del consumo y de la posesión material, nada más. Ya se está hablando de “democratizar el consumo”. No importa si esto implica la pérdida de un pedazo de tierra, la pérdida de tradiciones y prácticas culturales, la pérdida de una convivencia armónica con la Naturaleza, la pérdida de comunidad frente a un individualismo solitario, pero mejor equipado materialmente. Si limitamos nuestro concepto de pobreza a medir el ingreso monetario de las personas, de nada más se trata. Sin contar que los nuevos compradores, en este segmento de mercado, destinado específicamente a los consumidores pobres, contribuirán a multiplicar las ganancias de las empresas, la “erradicación de la pobreza” se corresponde con la creación de un nuevo mercado, de nuevas oportunidades de negocio, con una mayor redistribución desde abajo hacia arriba. Parece inconcebible que los cientos de ancianos y ancianas que hoy en día fallecen en Europa o Estados Unidos, en la soledad más absoluta, sin siquiera solidaridad o acompañamiento, no nos parezcan pobres... O que la salud, entendida como la vida en condiciones saludables, con aire y agua puros, con alimentos que no nos enferman, no nos parezca una gran riqueza, irremplazable por ninguna posesión material.¹³ ¿Cómo queremos vivir

13 El discurso dominante suele interpretar el derecho a la salud como el acceso a instalaciones y equipos médicos. Sin embargo, en primer lugar, el derecho a la salud es el derecho a vivir en condiciones que no nos causen enfermedades, y solo en segundo lugar, el derecho a ser atendidos dignamente, cuando ya estamos enfermos. Algo similar sucede con el derecho a la educación, que con mucha facilidad se reduce al derecho a tener escuelas equipadas con computadoras, o a lo mejor a la acumulación de datos cuantificables y títulos; es decir, enfatiza en los aspectos materiales y cuantitativos, cuando debería, en primer lugar, contemplar que los jóvenes puedan desarrollar una conciencia crítica para entender y cuestionar el mundo en el que viven,

entonces? ¿A qué queremos conceder valor? Es el gran mérito de los debates sobre el Buen Vivir haber replanteado esta pregunta.

Va de la mano, con esta reflexión sobre riqueza y pobreza, otra acerca del crecimiento. En los viejos centros industrializados, como Europa y Estados Unidos, la aseveración que hace Dennis Meadows, sobre el crecimiento como cáncer, está encontrando adeptos. Muchos ya se desdican, como nos lo explica Karin Gabbert, en su texto *Hay que dejar de crecer*, del crecimiento como supuesta solución a todas las crisis, mientras se le identifica más bien como la causa de las mismas. Lo que vendría a ser deseable, en lugar de un crecimiento sin fin, que indudablemente llevará a la humanidad al colapso, sería la noción de suficiencia, de tener lo justo y necesario, sin más.

Lo que se nos ofrece es participar de una narrativa colonizadora, modernizadora, homogenizadora, invisibilizadora de lo diferente. Se nos promete un futuro como clientes –del mercado y, al mismo tiempo, del gobierno de turno, por lo general– sin demasiada capacidad de decisión; pero eso sí, rodeados de pantallas parpadeantes –televisores, tablets, celulares– que nos permiten pasar el tiempo de forma entretenida, sin enterarnos tanto de lo que sucede alrededor. Mucha gente, sin duda, está contenta con estas nuevas posibilidades de consumo, con formar parte finalmente de un mundo del que históricamente era excluida, y nunca ha considerado que esto pudiera conllevar un problema para sus hijos y nietos. Lo que perdemos, muchas veces es menos palpable que lo que compramos, pero no menos importante.

América Latina se está modernizando, y esto tiene aspectos positivos, sin duda. Pero más allá de las posibilidades de emancipación que la modernidad nos ha traído –como el laicismo, los derechos

ubicarse y aportar en su propia comunidad, conocer su propia historia, saber vivir y convivir en su entorno. (Ver sobre esto en De Sousa Silva, 2004.)

humanos, por ejemplo, o con el desarrollo tecnológico y médico que ha ayudado a la vida humana en muchos aspectos—, aparece la otra cara uniformizante, eurocéntrica, aplastadora y asesina, que da validez a una sola forma de concebir la vida, una sola forma de pensamiento, una sola civilización y un solo modo de producción: la capitalista. Es la cara que ha dado origen a las terribles guerras del siglo xx, al exterminio de múltiples culturas; es también la base de las terribles crisis que atraviesa el Norte global de hoy.

Con este segundo libro, el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo¹⁴ pretende profundizar su búsqueda de narrativas alternas posibles en las condiciones dadas, en un camino sinuoso y que no está exento de tropiezos, que se propone nada menos que pensar lo que se nos dice es impensable. Les invitamos a compartir este camino, junto con los múltiples grupos e iniciativas que ya se han conformado en América Latina y más allá, con el mismo propósito.¹⁵ Pensamos que es indispensable y urgente, a pesar del poderoso cartel de opinión que hemos

14 El grupo permanente es un espacio de debate, coordinado por la oficina andina de la Fundación Rosa Luxemburg, con sede en Quito, en el que participan activistas, intelectuales y políticos/as comprometidos/as con el cambio social, la justicia ambiental y climática, la justicia de género, y la interculturalidad o plurinacionalidad, según el contexto. Los integrantes provienen de 8 países, entre América Latina y Europa. Para mayor información y publicaciones anteriores, ver <http://www.rosalux.org.ec/es/ique-es-el-grupo-permanente-de-alternativas-al-desarrollo-.html>

15 En América Latina, hay varias iniciativas que persiguen objetivos similares e intercambian sus avances con el Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo. Algunas de ellas son: El Centro Latinoamericano de Ecología Social en Uruguay (<http://ambiental.net/claes/>) y la iniciativa transiciones (www.transiciones.org); la Red Latinoamericana Sobre Las Industrias Extractivas (<http://www.redextractivas.org/es/>), La Red Peruana por una Globalización con Equidad (<http://www.redge.org.pe/>), y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales de Chile (<http://www.olca.cl/oca/index.htm>). Ver también artículo de Eduardo Gudynas sobre la sociedad civil, en este libro. Para iniciativas similares en Europa, ver los artículos de Karin Gabbert y Kristina Dietz.

descrito, poner en circulación discusiones sobre alternativas y posibles caminos de transición.

En el primer libro, *Más allá del desarrollo* (diciembre de 2011), partimos de una crítica al desarrollo como *dispositivo de poder*, conformado por discursos, prácticas e instituciones, que consolida las jerarquías Norte-Sur. Planteamos una crítica al capitalismo y a su expresión neoliberal, tanto en términos de modelo económico como de la cultura neoliberal generada en muchos ámbitos de nuestras sociedades. Complementamos estos cuestionamientos con la crítica al neodesarrollismo y al neoextractivismo que caracterizan las políticas de los gobiernos progresistas. (Lo neo implica, sobre todo, la vinculación con el financiamiento de políticas sociales o redistributivas, y suele justificarse con un discurso progresista e, incluso, antiimperialista.) Hemos reflexionado acerca del Estado y los movimientos sociales, como posibles actores del cambio, y colocado al Buen Vivir o Vivir Bien como un horizonte posible de transformación, con algunas propuestas de transiciones posibles.

En este segundo libro, abordamos las alternativas en algunos ámbitos más concretos. Partimos del supuesto que, para superar el desarrollismo y el extractivismo, hay que buscar soluciones al menos a escala regional y hasta internacional. Por ello, los textos de Manuel Cerezal (autor invitado por el Grupo) y Eduardo Gudynas exploran las políticas existentes y las opciones de integración regional latinoamericana.

En un continente en el que más de 75% de la población vive en ámbitos urbanos (Lattes, 2000: 50), es indispensable colocar a la ciudad como un escenario que tenemos que transformar. Para ello, necesariamente hay que deconstruir ciertos mitos acerca de la ciudad que siguen vigentes, que la conciben como el lugar del éxito, de la modernización y del progreso, y reconocerla como un lugar excluyente, colonial, expropiado en gran medida. Mario Rodríguez de Bolivia y Alexandra Martínez de Venezuela nos

muestran dos maneras muy distintas de reapropiarse y resignificar la ciudad.

La ciudad, en su configuración actual, hace posible lo que Ulrich Brand y Markus Wissen llaman el modo de vida imperial, porque logra ocultar su dependencia del campo, de la Naturaleza, de las materias primas, del extractivismo. La ciudad oculta las condiciones que hacen posible el consumo de cada cosa, naturaliza su disponibilidad “en el mercado”. Es el lugar de las ilusiones, del simulacro, que dista del lugar de la devastación. Es más, en este mundo globalizado, la devastación se puede trasladar a lugares remotos, poco mediatizados, de preferencia en el Sur, que nos son narrados al máximo como “territorios vacíos”, aunque nunca lo son. Esta división entre campo y ciudad, entre el lugar de extracción y el lugar de consumo, es una condición para la supervivencia del sistema del mundo actual. Pensamos que una estrategia fundamental es superar la división, la dualidad entre campo y ciudad, tanto en los intercambios concretos como en nuestros imaginarios. Comprar alimentos a los productores en ferias locales, (re)construir comunidad en la ciudad, son pasos en este sentido. De ahí también la importancia de las resistencias urbanas contra el extractivismo, como las que se dan en Cuenca (Ecuador) o en Bucaramanga (Colombia), porque se plantean proyectos mineros cercanos que afectarían al abastecimiento de estas ciudades en agua potable (ver artículo de Tatiana Roa, en este libro). Si la conciencia sobre las implicaciones del extractivismo llegara a las ciudades del mundo, estaríamos ante otro escenario.

Pensar esta continuidad entre ciudad y campo también nos lleva necesariamente a idear otras políticas para el campo, como las propuestas por Luis Andrango y José Cueva, en la entrevista para este libro. Y nos lleva a pensar, al igual que los clásicos marxistas a principios del siglo xx, cómo construir sentidos comunes entre las luchas rurales, campesinas y comunitarias contra los megaemprendimientos extractivos y las luchas obreras de aque-

llos trabajadores que son empleados por las empresas del extractivismo. Ellos –por ejemplo, los trabajadores petroleros– suelen vivir en enclaves específicamente diseñados, gozar de ciertos privilegios y pertenecer prácticamente a una élite obrera en sus países, y suelen pensar en parámetros más urbanos, lo que dificulta su solidaridad con los afectados. La experiencia de algunos sindicatos de Colombia, descrita por Tatiana Roa, nos da esperanzas de que esta situación no sea irreversible.

Alberto Acosta, Esperanza Martínez y William Sacher exploran posibles transiciones a una era postextractivista en un escenario nacional concreto: el del Ecuador. Nos dan luces sobre cómo, a partir de la situación actual del país, se podría construir un Ecuador cada vez menos dependiente del petróleo. Un Ecuador que, manteniendo el espíritu de la Constitución de 2008, opte por no permitir la minería industrial a gran escala. Ellos abordan, aunque de manera incipiente todavía, la pregunta clave que cualquier alternativa tendrá que responder, al momento de implementarse: ¿qué modelo político es capaz de encaminar una transformación profunda de la sociedad sin aplanar las diferencias culturales y sin caer en un autoritarismo antidemocrático? ¿Cómo se pueden construir múltiples y diversos Buenos Vivires articulados y armonizados entre sí, a escala local, nacional y regional?

Otra pieza clave en este rompecabezas son las políticas energéticas, que el experto argentino Pablo Bertinat explora a nivel de continente, en otro texto.

El último apartado del libro informa sobre debates que tienen lugar en Europa, y que contienen posibles nexos con las búsquedas generadas desde varias iniciativas en América Latina.¹⁶ Resulta que, con la escasez de hidrocarburos convencionales y el

16 Para conocer otras iniciativas relacionadas con objetivos similares, ver, por ejemplo, <www.transiciones.org>; <<http://www.redextractivas.org/es/>>; <<http://www.redge.org.pe/>>; <<http://www.olca.cl/oca/index.htm>>

subsiguiente *boom* de la explotación de hidrocarburos no convencionales, el extractivismo y sus problemáticas están llegando a las metrópolis mismas: las arenas bituminosas de Canadá, o la fractura hidráulica o *fracking* en Estados Unidos y Europa, generan conflictos socioambientales, y despiertan a nuevos actores interesados en asegurar las condiciones de vida de las futuras generaciones. Hoy día, se enfrenta la misma problemática: falta de poder de decisión de la ciudadanía frente a tecnologías poco desarrolladas y con alto riesgo de contaminación del agua potable, en el caso del *fracking*, en la Ardèche francesa y en la Patagonia argentina. Pensamos que ha llegado el momento de construir un nuevo internacionalismo; uno que no se propone la solidaridad transfronteriza con una lucha específica, sino que colabora desde la izquierda en las problemáticas globales, en condiciones de ecología de saberes y sin eurocentrismos. Europa, actualmente, está mirando asombrada a América Latina, que ya pasó en las últimas décadas por la misma arremetida neoliberal que ahora sacude al viejo continente. Hay allí aprendizajes posibles, aunque las resistencias deberán darse en condiciones y conciencias muy diferentes. América Latina puede aprender de Europa la gran lección que dejó el fracaso del socialismo de Estado, para no caer en los mismos errores de una izquierda dirigista, vanguardista y antidemocrática. Las alternativas al neocolonialismo imperante requieren actores en todas las partes del mundo. En este sentido, este libro se propone también tender algunos lazos entre continentes.

Refleja, además, el afán de construcción colectiva que orienta al Grupo de Trabajo. Mientras algunos textos son trabajos colectivos, muchos otros han sido enriquecidos mediante comentarios y críticas de otros/as integrantes, lo que se pone en evidencia al principio de cada artículo. En el caso del presente texto, agradezco a Alejandra Santillana, Edgardo Lander, Dunia Mokrani y Alexandra Martínez por sus aportes.

EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI

Con el tiempo contado

Crisis civilizatoria, límites del planeta, asaltos a la democracia y pueblos en resistencia

Edgardo Lander¹

*No hay otro tiempo
que el que nos ha tocado...*

Joan Manuel Serrat

Lejos de proponer una caracterización acabada, cerrada, de las tendencias y características de la coyuntura actual de la humanidad, este texto intenta destacar algunas dinámicas importantes que deben ser incorporadas a los debates sobre el momento histórico que nos ha tocado vivir. Busca, igualmente, aportar fuentes de documentación para la discusión de estos asuntos.

Crisis del patrón civilizatorio hegemónico

El patrón civilizatorio antropocéntrico, monocultural y patriarcal, de crecimiento sin fin y de guerra sistemática contra los factores que hacen posible la vida en el planeta Tierra, atraviesa una crisis terminal. La civilización de dominio científico-tecnológico sobre la llamada “Naturaleza”, que identifica el bienestar humano con la acumulación de objetos materiales y con el crecimiento económico sin medida –cuya máxima expresión histórica es el capitalismo– tiene el tiempo contado. Su dinámica destructora, de mercantilización de todas las dimensiones de la vida, socava, aceleradamente, las condiciones que la hacen posible. La incorporación de nuevos territorios para la explotación de bienes, la

1 Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. Fellow del Instituto Transnacional (TNI), Ámsterdam. Involucrado en forma directa en la dinámica de los Foros Sociales Mundiales, de las Américas y Venezuela.

apropiación del conocimiento de otros, así como la manipulación de los códigos de la vida (biotecnología) y de la materia (nanotecnología), aceleran la aproximación a los límites, en un planeta finito. Ahora que la humanidad precisa incorporar la diversidad y multiplicidad de culturas, formas de conocer, pensar y vivir, dentro del conjunto de las redes de la vida (como alternativa para responder a esta crisis civilizatoria), paradójicamente pueblos y culturas indígenas y campesinas de todo el planeta están siendo amenazados por el avance inexorable de la lógica del proceso de acumulación por desposesión.

Hoy, el asunto no es si el capitalismo podrá sobrevivir o no a esta crisis terminal. Si en poco tiempo no logramos poner freno a esta maquinaria de destrucción sistemática, lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad frente al colapso final del capitalismo.

La crisis ambiental y los límites del planeta

Los sistemas climáticos y las condiciones que favorecen la vida en la Tierra registran alteraciones profundas: cambio climático, pérdida de diversidad biológica y de suelos fértiles, deforestación, contaminación de aguas, etc. Las comunidades científicas internacionales prácticamente coinciden al afirmar que la elevación de la temperatura del planeta es consecuencia del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero, de origen antropogénico. Pero estos fenómenos no solo se constatan en mediciones y consensos científicos. Centenares de millones de personas viven a diario los impactos de estas severas transformaciones: sequías, inundaciones, reducción de la disponibilidad de agua, pérdida de la diversidad genética, calores extremos, pérdidas masivas de cosechas, etc.

No obstante la abundante evidencia sobre el estado del planeta, persisten los argumentos corporativos que resguardan la producción/consumo de combustibles fósiles, al igual que las posiciones de los centros de pensamiento de derecha (*think*

tanks), que defienden el fundamentalismo del libre mercado y sus expresiones políticas (sobre todo en los Estados Unidos).²

Las negociaciones internacionales, orientadas a definir compromisos para reducir este impacto en los sistemas de vida del planeta, han sido hasta el momento un estrepitoso fracaso. La lógica mercantil ha condicionado todas las decisiones. En la Cumbre del Clima (COP 17), de Durban, en diciembre de 2011, el acuerdo más “relevante” consistió en crear un grupo de trabajo *ad hoc*, que negocie un nuevo tratado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2015, para que entre en vigencia en el 2020 (Convención Marco de las Naciones Unidas, 2011). A pesar de las urgencias que enfrenta la vida en el planeta, los compromisos obligatorios se posponen, prácticamente, por una década.

La Economía Verde, presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), no hace sino repetir promesas fantasiosas. Asegura que es posible lograr un mundo ambientalmente sustentable, con crecimiento económico más acelerado, empleo y bienestar para todos, sin necesidad de alterar las relaciones de poder ni la lógica de la acumulación ni las profundas desigualdades actuales. La magia está en ejecutar determinados mecanismos de mercado y soluciones tecnológicas (Lander, 2011).

2 36 de los 85 nuevos integrantes republicanos de la Cámara de Representantes, electos en noviembre de 2010, y 11 de los 13 nuevos senadores de ese partido, han cuestionado públicamente “la ciencia” del cambio climático (Center for American Progress Action Fund, 2010).

En muchos Estados y distritos escolares, el tema de la enseñanza del cambio climático, tal como sucedió con el tema de la evolución, está entrando crecientemente en debate. Los grupos conservadores exigen que el cambio climático y sus causas antropogénicas sean presentados como una teoría científica más, y que se incluya en los programas de estudio, al igual que los argumentos de quienes niegan el cambio climático (National Center for Science Education, 2012).

Aunque han transcurrido 20 años de negociaciones desde la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro de 1992, y actualmente las principales economías atraviesan una severa crisis económica que limita la producción y el consumo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos calcula que, en el 2010, se emitieron a la atmósfera 564 millones de toneladas de gases de efecto invernadero más que en el año anterior, que equivalen a un incremento de 6% en un solo año. Es el mayor del que se tenga registro (Borenstein, 2010). El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, sobre la base de nuevas investigaciones, afirma que algunas sequías, inundaciones y huracanes, que han afectado a millones de personas en los últimos años, son consecuencia del cambio climático (Gillis, 2011).

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, Río +20, demostró una vez más el nivel al que ha llegado el control corporativo sobre el sistema de Naciones Unidas y los gobiernos. El acuerdo final es una extensa colección de generalidades: menciona más de 280 veces el “desarrollo sostenible”, pero no contiene ni un solo compromiso vinculante (Naciones Unidas, 2012).

Profunda y creciente desigualdad

Todos los sistemas de vida del planeta están amenazados; sin embargo, en el presente inmediato y a corto plazo, los impactos son extraordinariamente desiguales. Los mayores responsables de las dinámicas depredadoras (los países industrializados del norte), se localizan en regiones templadas, en donde los impactos del cambio climático han sido, hasta ahora, moderados; además, disponen de recursos financieros y capacidades tecnológicas para responder. Esta menor afectación bien podría explicar el escaso interés por enfrentar estos asuntos, especialmente de los Estados Unidos. Mientras, otras regiones del planeta viven los efectos devastadores de este fenómeno, y carecen de medios y tecnología para combatirlos (American Progress Action Fund, 2010). Para

las poblaciones de estas regiones, ni siquiera la migración es una alternativa. Las políticas racistas de represión (militarización de las fronteras, construcción de muros para mantener afuera a las poblaciones “indeseables”), limitan severamente la opción de migrar.³ En lugar de la solidaridad humana, nos encontramos frente a serios intentos de construcción de un *apartheid global*.

La actual desigualdad en la distribución de la riqueza no tiene precedentes en la historia de la humanidad (The International Forum on Globalization, 2011). Es notoria la creciente concentración del dinero global en manos de una oligarquía. Varias empresas financieras han publicado, en años recientes, informes detallados sobre las tendencias principales en la distribución de la riqueza, en especial, de los sectores más ricos y ultraricos del planeta. Estos estudios, a diferencia de los análisis comparativos entre países, o de la distribución del ingreso, o de la riqueza al interior de los países, se centran en la distribución de la riqueza de individuos a escala global. Dos ejemplos bastan para ilustrar los niveles extremos de desigualdad, en el mundo actual.

El grupo financiero Credit Suisse ha empezado a difundir una publicación anual que analiza la distribución de la riqueza (bienes reales, como viviendas, más bienes financieros) de la población adulta de todo el planeta. Según sus cálculos, la mitad más pobre de la población adulta global es dueña de apenas 1% de la riqueza global. En contraste, el 10% más rico es dueño de 84% de la riqueza global y el 1% más rico es dueño de 44% de la riqueza global (Credit Suisse Research Institute, 2011).

La crisis económica de los últimos años, lejos de frenar esta concentración de la riqueza en una pequeña minoría, la agudizó.

3 No se trata solo de murallas para impedir la migración de pobladores del sur hacia el norte industrializado. India está terminando de construir una barrera de aproximadamente 2 mil kilómetros para impedir el ingreso de migrantes de Bangladesh a su territorio. Centenares de migrantes desarmados han sido muertos por agentes de seguridad de la India al intentar atravesar estas barreras.

Todos los años, las empresas Capgemini y Merrill Lynch Wealth Management publican un informe sobre el estado de los ricos del mundo (individuos con activos elevados: más de un millón de dólares disponibles para ser invertidos; e individuos con activos ultraelevados: más de 30 millones de dólares disponibles para invertir). El informe de 2010 revela que el número total de individuos con activos elevados en el mundo creció en 17,1% en el 2009, a pesar de la contracción global de la economía, equivalente a 2%. La riqueza total de estos individuos aumentó en 18,9%, que corresponde a 39 billones de dólares.⁴ El estudio mencionado indica que, en el mismo año, la riqueza disponible de los individuos con activos ultraelevados incrementó 21,5%. Del total de individuos con activos elevados, el subgrupo que posee activos ultraelevados representa menos de 1%, pero concentra más de 35% de la riqueza global de los ricos del mundo (Capgemini y Merrill Lynch Wealth Management, 2010).

Estas tendencias no solo se advierten en el “mundo desarrollado”, sino también entre los llamados “países emergentes”, en donde los porcentajes de ricos y ultraricos, así como los volúmenes de riqueza, han crecido en forma mucho más acelerada. En la India, país con la mayor cantidad de personas que pasan hambre en el mundo, el hombre más rico del país se ha construido una residencia familiar de 27 pisos que, entre otras cosas, tiene tres helipuertos. Se estima que costó mil millones de dólares (Yardley, 2010).

En los Estados Unidos, el ingreso familiar promedio del 90% de la población se mantuvo constante durante los últimos 40 años. Todo el aumento de la riqueza nacional, desde 1970, ha quedado en manos del 10% más rico de la población (Winters, 2011). Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Esta-

4 En la denominación utilizada en los Estados Unidos, esta cifra equivale a 39 trillones de dólares.

dos Unidos, la brecha entre el ingreso después de los impuestos, del 1% más rico de la población y el de los quintiles medios e inferiores, se multiplicó por más de tres, en el periodo 1979-2007. Esta concentración del ingreso en los estratos superiores es la más elevada desde 1928 (Sherman y Stone, 2010). El Centro de Investigación Pew, a partir de la información del gobierno federal de los Estados Unidos, afirma que, en 2009, la riqueza promedio de los hogares “blancos” era 20 veces superior a la de los hogares “negros”; y 18 veces superior a la de los hogares hispanos. Es la brecha más grande desde que se publican estas estadísticas, hace 25 años (Kochhar et al., 2011). El efecto inevitable de este fenómeno es el crecimiento del número de pobres en dicho país: de 25 millones de pobres en 1970, se pasó a 46,2 millones en el 2010 (United States Census Bureau, 2011: 14).

Estas desigualdades se vuelven progresivamente hereditarias. Según Paul Krugman (2012), en el grupo de las mejores universidades y más selectivas de los Estados Unidos, el 74% de los estudiantes pertenecen a la cuarta parte de la población que tiene el ingreso más elevado; solo 3% corresponde a la cuarta parte de la población de ingreso inferior. En estas universidades, las probabilidades de completar los estudios dependen más del ingreso familiar que de la capacidad intelectual de los estudiantes.

Estas extraordinarias y crecientes concentraciones del poder y la riqueza se evidencian en todas las actividades humanas. Así, la aparente democratización del acceso a las comunicaciones, a causa de la expansión masiva de la telefonía celular en todo el mundo, es engañosa; esconde otras formas de desigualdad. Se calcula que el 1% de todos los usuarios del mundo utiliza la mitad del ancho de banda disponible. Y la brecha sigue creciendo (O’Brien, 2012).

Por décadas, los países socialistas tuvieron las estructuras de distribución del ingreso más equitativas del planeta. Sin embargo, a raíz del colapso del bloque soviético y las reformas de mercado en China y Vietnam, estos países han experimentado procesos ace-

lerados de concentración de la riqueza. Algunas versiones señalan que en Rusia, hoy, existen más mil-millonarios que en cualquier otro país del mundo (Kouwenhoven, 2011). En China, el sostenido crecimiento económico de las últimas tres décadas ha sacado de la condición de pobreza a centenares de millones de personas, pero el costo ha sido un drástico incremento en la desigualdad. Las cifras disponibles señalan que China, actualmente, registra mayor desigualdad que Estados Unidos (Tobin, 2011).

Los datos de Naciones Unidas sobre la mortalidad de la población del planeta nos permiten tener una mirada más precisa sobre las implicaciones de estas grotescas desigualdades. La expectativa de vida al nacer, en los países “desarrollados”, era de 78 años para el 2011, mientras en África subsahariana, de 55 años. En ese año, la mortalidad infantil (menores de cinco años), en los países “desarrollados”, era de 8 por cada mil nacidos vivos y en África subsahariana, de 121; es decir, 15 veces superior (The United Nations. Department of Economic and Social Affairs, 2011).

La falta de acceso al agua potable y a servicios de saneamiento es causa y consecuencia en el círculo vicioso de la pobreza y la mala salud: “El 92% de los hogares que carecen de acceso a agua potable en el mundo y el 93% de los hogares que carecen de servicios de aguas servidas están en África y Asia” (The United Nations, 2003: 11-12).

Las diferencias descritas también se reproducen al interior de los países. La expectativa de vida de los residentes de Shanghai es 15 años mayor que la de los habitantes de la provincia de Guizhou (interior de China); y los ingresos promedio de los primeros son superiores a los de Guizhou, en un monto anual de 20 mil dólares (World Economic Forum, 2012: 19).

Por otra parte, las crecientes desigualdades conducen a la expansión de la esclavitud laboral y sexual; esta última incluye el tráfico de niños y niñas. Algunas estimaciones destacan que, en la actualidad, hay más gente obligada a cruzar las fronteras en con-

tra de su voluntad, que en ningún otro momento de la historia (Kapstein, 2006). En el 2005, el número de personas sometidas a trabajo forzado, en todo el mundo, incluyendo la esclavitud, ascendía a 12,3 millones; un total de 1,32 millones corresponden a América Latina (América Economía, 2011). Condiciones de trabajo similares a las de la esclavitud han sido detectadas en diversas partes del mundo, e involucran a algunas corporaciones encargadas de la confección de las marcas globales más conocidas, como el caso de la empresa española Zara (World Economic Forum, 2012).

El informe del Foro Económico Mundial (Davos) –basado en aportes de 469 reconocidos expertos de la industria, gobiernos, sociedad civil y academia del mundo– ha llegado a afirmar que, del conjunto complejo de tendencias que apuntan hacia un futuro de distopía, las profundas desigualdades constituyen el principal factor de riesgo que confrontará la humanidad en los próximos diez años. Esta realidad desplaza la preocupación por las transformaciones climáticas, que ocupaba el primer lugar el año anterior.

Los múltiples asaltos a la democracia

Las profundas desigualdades no son compatibles con la democracia. La concentración de la riqueza (y del poder político, que necesariamente la acompaña), es la expresión más dramática del carácter limitado de la democracia del mundo en que vivimos. En la mayoría de los países, más allá del régimen político (democrático, autoritario, autocrático, secular o religioso), las instituciones estatales operan como instrumentos de los dueños del dinero y no como representantes de los intereses ciudadanos. La contrarrevolución del capital, el proyecto neoconservador/neoliberal que se inicia, entre otras cosas, con la Comisión Trilateral y los gobiernos de Thatcher y Reagan, en la década de los setenta del siglo pasado, fue extraordinariamente exitosa. Cumplió a caba-

lidad sus objetivos principales: la reversión de las lógicas democráticas en las sociedades liberales y en el resto del mundo; una extraordinaria concentración de la riqueza; y, la destrucción de la socialdemocracia, como alternativa al neoliberalismo.

Toda alternativa a la actual crisis civilizatoria y a los efectos de la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida, debe incorporar como dimensión medular la lucha contra esta obscena desigualdad; de lo contrario, está condenada al fracaso. Solo la redistribución radical, acompañada de una transferencia extraordinariamente masiva de recursos y de acceso a los bienes comunes, permitirá reducir la presión humana insostenible sobre los sistemas ecológicos que mantienen la vida, y favorecerá el acceso de la mayoría de la población a condiciones dignas de vida.

La relación entre la concentración de la riqueza y la devastación de los ecosistemas planetarios ha sido estudiada con detenimiento por el Foro Internacional de Globalización, en su informe *Outing the Oligarchy. Billionaires who benefit from today's climate crisis*. Esta publicación analiza a un grupo de hombres y mujeres más ricos del mundo quienes, además de poseer cada uno miles de millones de dólares, invierten intensamente en actividades relacionadas con los combustibles fósiles y ejercen una poderosa influencia sobre las políticas públicas. El informe concluye que este grupo de multimillonarios (de Estados Unidos, Europa, Rusia, India, China, Brasil, México, etc.), es el que más se beneficia de las actuales políticas referentes a los combustibles fósiles, y es el principal responsable de las inversiones y políticas que destruyen los sistemas de vida del planeta.

Estrechamente imbricadas con estas tendencias a crear una oligarquía económico-financiera global, están las mutilaciones, cada vez más profundas, a la democracia. En forma creciente, estos sectores privilegiados no solo identifican intereses comunes (desregulación, bajos impuestos, preservación de los paraísos fiscales,

etc., y, en situaciones de crisis, rescates masivos por parte de los Estados), sino que actúan en forma concertada para defenderlos.

Son muchos los instrumentos con los que cuentan. Entre ellos, destaca el apoyo cómplice y prácticamente incondicional de la academia económica, tal como esta se practica en las principales universidades del mundo, cuyas prácticas y enseñanzas constituyen una fuente importante de sustento científico, que legitima estos procesos de concentración.

Las grandes corporaciones y los capitales financieros aumentan paulatinamente la capacidad de imponer su voluntad en las políticas públicas. En el año 2011, en la Unión Europea, los llamados “mercados” forzaron un cambio repentino, sin debate público, de la Constitución española, para limitar por esa vía el déficit fiscal. Las demandas ciudadanas de un debate nacional y un referéndum fueron rechazadas por los principales partidos (Público, 2011). En Grecia e Italia, impusieron el cambio de dos gobernantes electos democráticamente, por dos tecnócratas ligados con el grupo financiero Goldman Sachs, en lo que fue denominado como golpe de Estado financiero, o golpe de Estado de Goldman Sachs, o triunfo del Proyecto Goldman Sachs (Foley, 2012). ¡Qué lejos parecen los tiempos del Estado de bienestar y la socialdemocracia europea! “¿Se convertirán las democracias europeas en ‘democracias autoritarias?’”, se pregunta Ramonet (2011).

Las agencias evaluadoras de riesgo, en particular las tres más importantes, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, no han sido designadas para esa función por ninguna autoridad pública o democrática. No obstante, ahora fungen de jueces de la situación económica y de las políticas públicas de cada país.⁵ Estas agencias

5 Estas agencias, que se atribuyen este enorme poder en la evaluación del riesgo que presenta la deuda en los países, fueron absolutamente incapaces de prever el riesgo de algunas de las principales instituciones financieras hasta el día en que se produjo el colapso en el año 2007. “A lo largo de las últimas dos décadas quedó en evidencia la incapacidad técnica, la falta

no solo evalúan si las políticas públicas corresponden o no a los intereses del “mercado”, sino si contribuyen a generar “confianza en los mercados”. Se han transformado en formuladoras directas de políticas públicas: establecen exigencias precisas sobre las decisiones que los gobiernos deben tomar; o amenazan con aumentar la calificación de riesgo del país, si no se hace lo que ellas demandan.⁶ Sus evaluaciones negativas suelen producir incrementos en las tasas de interés que debe pagar el país para obtener nuevos créditos. Ello, a su vez, puede representar costos adicionales de centenares de millones de dólares, que incrementarán de inmediato los ingresos del sistema financiero privado.

El comportamiento de la dirección política de los Estados ante los dictámenes de estos jueces, ha demostrado que en momentos de crisis opera un nuevo modelo de “democracia”: las amenazas o disposiciones de las agencias pesan más en las decisiones de política económica, que la voluntad ciudadana.

Del mismo modo, cuando “los mercados” consideran que no hay condiciones de suficiente “confianza”, la sola amenaza de

de rigurosidad metodológica, la ausencia de un marco regulatorio efectivo y el fraude sistemático de las calificadoras de riesgo a la hora de analizar la capacidad de repago en tiempo y forma de los distintos instrumentos financieros que existen en los mercados. La debacle hipotecaria en Estados Unidos y su abordaje de la crisis estructural en la Eurozona son los episodios más recientes en una larga tradición de irregularidades y limitaciones de las calificadoras. Sin embargo, su prontuario es más profuso. Entre los eventos destacados figuran la calificación AAA, la más alta y segura, que otorgaron y preservaron hasta horas antes de la quiebra de Enron en 2001 y Lehman Brothers en 2008” (Lukin, 2011).

6 Son muchos los ejemplos de este tipo de exigencia. Una vez electo Mariano Rajoy, como nuevo jefe de Estado en España, la agencia Fitch le exigió que aprovechara la “ventana de oportunidad” que le otorgaba su “mayoría indiscutible”, para llevar a cabo un programa “ambicioso y radical” de reformas estructurales (Público, 2011). En enero de 2012, en el mismo momento en que anunciaba que la calificación de España había sido nuevamente rebajada, Standard & Poor’s amenazó con una rebaja adicional si el gobierno español no llevaba a cabo pronto una reforma del mercado laboral (Mantás, 2012).

movimientos masivos de capitales financieros hacia otros lugares más amables con los inversionistas, puede ser suficiente para alterar las políticas rechazadas por las instituciones financieras.

Una razón muy importante que explica la severa crisis capitalista actual, se refiere a la pérdida de la capacidad regulatoria del sistema. La globalización neoliberal ha creado nuevas condiciones para que los capitales puedan desplazarse libremente, sin obstáculo alguno. La capacidad de regulación de los Estados, aún de los más poderosos, está en declive. El logro de la tan ansiada utopía del mercado total se vuelve una verdadera pesadilla cuando no se dispone de instrumentos para moderar los inevitables excesos (Lander, 2002). Ello sucede, por ejemplo, cuando los intereses a corto plazo del capital especulativo tienen primacía sobre toda noción de interés general o de estabilidad del sistema. Una vez que este genio ha sido liberado, difícilmente podrá ser reintroducido a la lámpara.

El mercado de divisas especulativo y no regulado global ha limitado el control de los bancos centrales sobre el dinero, lo que, al mismo tiempo, debilita uno de los principales instrumentos de política monetaria. Con el argumento de que hay instituciones financieras “demasiado grandes para quebrar” (por los efectos que tendría sobre el conjunto de la economía), desde inicios de la crisis en el 2007, el sector público realizó masivas transferencias de recursos a los principales responsables de ella: los bancos y demás instituciones financieras. Las perspectivas de algunas modalidades de regulación, planteadas inicialmente por el G-20, como respuesta a la crisis financiera, se fueron diluyendo en la medida en que se asumió (sin fundamento alguno) la idea de que la crisis había pasado. Los bancos volvieron rápidamente a sus prácticas usuales; incluso utilizaron estos recursos públicos para situar las compensaciones de sus ejecutivos en los escandalosos niveles anteriores, y ejercer acciones de *lobby* que impidieran la introducción de nuevas regulaciones al sector financiero.

En estos años de crisis, la Unión Europea demostró la verdadera naturaleza de su pacto constitucional. El proyecto constitucional original, después de ser rechazado en las consultas referendarias en Francia y Holanda, incorporó leves modificaciones y fue rebautizado con un nombre menos amenazante: Tratado de Lisboa. Se trata un régimen político cada vez menos democrático, donde las decisiones trascendentales se alejan paulatinamente de los ciudadanos. Con la constitucionalización del neoliberalismo, los sueños de una Europa democrática e igualitaria fueron sustituidos por una dirección crecientemente autoritaria, que concentra el poder en el Banco Europeo (“autónomo”), en la Comisión Europea y en el gobierno alemán. Los parlamentos nacionales y el Parlamento europeo han sido dejados de lado. Países en profunda recesión, con tasas de desempleo muy elevadas,⁷ han sido obligados a tomar medidas de austeridad: despido de empleados públicos, aumento de la edad para las jubilaciones, reducción de los gastos sociales, privatización de empresas públicas y flexibilización del mercado laboral.

La defensa del euro (acompañada de una narrativa apocalíptica de lo que podría ocurrir si no se preserva el valor de dicha moneda), ha servido para dar nuevos pasos, en la perspectiva de buscar la cesión de mayores grados de soberanía de los países a estas instituciones no democráticas de la Unión Europea.⁸ En América Latina, ya pasamos por esto. Son bien conocidos los costos sociales de estas políticas de brutal ajuste estructural.

7 España, durante buena parte del año 2012, tuvo una tasa de desempleo de alrededor de 24% y un desempleo juvenil de 50%.

8 En palabras de Susan George: “Una de las razones por las cuales en Francia peleamos tan fuertemente en contra del Tratado de Lisboa era porque éste instalaba la política económica neoliberal en el corazón de Europa. Ahora la Comisión Europea quiere revisar los presupuestos nacionales de cada uno de los países antes de que estos sean votados por los parlamentos para garantizar que cumplan con ciertos criterios. Es esto un ataque descarado a la democracia” (Buxton, s/f).

En los Estados Unidos, donde el poder del dinero ha operado históricamente en una forma mucho más descarnada que en los países europeos, la Corte Suprema adoptó una decisión que incrementa, de forma extraordinaria, el poder de las corporaciones sobre todo el sistema político. A partir del insólito supuesto de que las corporaciones tienen los mismos derechos que las personas, en enero de 2010, esta Corte revirtió restricciones que tenían más de un siglo, así como doctrinas constitucionales que habían sido reafirmadas por diferentes decisiones de la Corte y del Congreso, a través del tiempo. Dictaminó que establecer limitaciones al gasto de las corporaciones y los sindicatos, en los procesos electorales, constituía una violación constitucional de la libertad de expresión, tal como fuera dispuesto en la primera Enmienda Constitucional.⁹ Dados los exorbitantes costos de las campañas electorales en los Estados Unidos, esta decisión fortaleció aún más el poder de los grupos de influencia, para comprar decisiones legislativas y ejecutivas que favorezcan sus intereses. La disposición fue celebrada por la derecha estadounidense como la restauración de los principios básicos de la república, al tiempo que ha sido calificada como un severo ataque a la democracia por sectores políticos progresistas y liberales (Spakovsky, 2010).¹⁰

Son múltiples los mecanismos de retroalimentación de la desigualdad y de las restricciones a la democracia. Las políticas impositivas de los Estados Unidos son ilustrativas al respecto. Gracias al creciente poder político corporativo, en las últimas décadas, la estructura de impuestos en dicho país se ha ido sesgando a

9 Es este el caso conocido como *Citizens United vs. Federal Election Commission*. Ver: Adam Liptak, “Justices, 5-4, Reject Corporate Spending Limit”, *The New York Times*, 21 de enero de 2010.

10 Para un análisis de las enormes consecuencias antidemocráticas de esta decisión, ver: Public Citizen, “12 Months After The Effects of Citizens United on Elections and the Integrity of the Legislative Process”, Washington, enero 2011. <<http://www.citizen.org/12-months-after>>

favor de los intereses corporativos, y en contra de la mayoría de los asalariados. Así, las tasas de impuestos que se pagan sobre los salarios son mayores, que las que se pagan sobre las ganancias provenientes de inversiones. En la medida en que esto acelera la concentración del ingreso e incide en las potenciales fuentes de financiamiento de las campañas electorales, cualquier intento de modificar las políticas impositivas encontrará un sinnúmero de obstáculos.

Otra amenaza, igualmente grave para la democracia en todo el mundo, proviene de las múltiples expresiones que adquieren, en la actualidad, las políticas de “seguridad nacional”. Este proceso, resultado de la convergencia de varias tendencias políticas, tecnológicas y económicas, tiene severas implicaciones antidemocráticas. El salto cualitativo en esta dirección ocurre a partir del ataque terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center, en Manhattan, en el 2001. Un estado permanente de miedo fue alimentado, de manera sistemática, por los medios de comunicación y la industria del entretenimiento: miedo al terrorismo, a las drogas, a la inseguridad personal, a los migrantes indeseados, a las amenazas representadas por los nuevos poderes globales. Como el enemigo puede estar en cualquier parte, hay que perseguirlo en todas partes. El autoritarismo del pensamiento político neoconservador privilegia el orden y la razón de Estado, sobre los derechos democráticos de los ciudadanos.

El Acta Patriótica, aprobada en forma abrumadora por las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, representó un asalto radical a los derechos civiles y políticos, supuestamente garantizados en la democracia liberal. Encontró su fuente de legitimación en este clima de miedo. Esta normativa legalizó la figura jurídica de combatientes ilegales, el no cumplimiento de las convenciones de Ginebra referidas a la guerra, al régimen de torturas sistemáticas en la prisión Abu Ghraib en Irak, y al establecimiento del campo de detención –y torturas– de Guantánamo.

Han sido igualmente serias las consecuencias sobre los derechos civiles y políticos al interior de los Estados Unidos, y no solo durante los gobiernos republicanos. Una investigación que tardó dos años, realizada por el Washington Post después del ataque a las Torres Gemelas, reveló la creación en el país de un aparato secreto de seguridad de tan enormes proporciones, que nadie sabe cuánto cuesta, cuántos programas incluye ni cuántas personas están involucradas. Entre otros resultados, este estudio explica que se trata de un entramado de 1 271 organizaciones gubernamentales y 1 931 empresas privadas, que trabajan en actividades de inteligencia y contraterrorismo; emplean a 854 mil personas; cuentan con un estatuto de “seguridad certificada” en diez mil localizaciones diferentes, a través de la nación; y, producen alrededor de 50 mil informes de inteligencia al año (Priest y Arkin, 2010).

En diciembre de 2011, como parte de la ley del presupuesto de defensa de los Estados Unidos para el año 2012, el Congreso autorizó a las fuerzas armadas a asumir investigaciones e interrogatorios sobre terrorismo en el territorio nacional. De este modo, permitió la detención de cualquier persona que el gobierno calificara de terrorista –incluso ciudadanos de los Estados Unidos– por un tiempo indefinido, sin derecho a juicio (National Defense Authorization Act for Fiscal Year, 2012). A pesar de las severas oposiciones de diversos sectores, que incluso calificaron a esta norma como un paso en dirección a un Estado policial, el presidente Obama firmó la ley, de la que aseguró tener “serias reservas” (Pace, 2012). El miedo y la inseguridad generados por los medios y los políticos de la derecha, operan como dispositivos que buscan reducir la resistencia al establecimiento de medidas que avanzan, a paso seguro, hacia una sociedad de vigilancia, con tecnologías más allá de todo lo que pudo imaginar Orwell. Surgen, en estas condiciones, enormes oportunidades comerciales que ofrecen las nuevas tecnologías de vigilancia para las empresas que trabajan en

lo que ha sido denominado el “complejo industrial de seguridad”. Ha sido ampliamente documentada la participación directa de las empresas dedicadas a estas actividades y sus *lobbies*, en la definición y expansión de políticas en el campo de la seguridad, tanto en Europa como en los Estados Unidos (Hayes, 2009).

Al respecto, Wikileaks ha divulgado documentos en los que aparecen 21 países con empresas privadas que brindan servicios de espionaje a las agencias de seguridad.¹¹ Estos servicios permiten interceptar masivamente conversaciones telefónicas, sin ser detectados; proporcionan monitoreo satelital, control de computadoras a distancia, intercepción de comunicaciones de Internet y redes sociales, análisis de voz y de “huellas vocales”; ofrecen servicios de seguimiento mediante localización de usuarios de teléfonos celulares, a través de GPS (aun cuando estos estén apagados), identificadores biométricos y diseño de virus que se pueden introducir para inhabilitar equipos (Hayes, 2006). La expansión acelerada de este “complejo industrial de seguridad” ha ido erosionando las fronteras tradicionales entre seguridad nacional (militar), seguridad interna (policía) y el cumplimiento de la ley (Ibíd.).

Esta sociedad de vigilancia total tiene muy poco que ver con el ideal del ciudadano libre, que despliega sus máximas potencialidades sin interferencia del Estado, en principio, el máximo valor del liberalismo.

11 “La última revelación del organismo que dirige Julian Assange desnuda el millonario negocio de las empresas de vigilancia que han convertido su negocio en la nueva industria de espionaje masivo (...). Wikileaks aporta los nombres de las compañías que en distintos países interceptan teléfonos, rastrear mensajes de texto, reconstruyen la navegación por Internet e incluso identifican por huellas vocales a individuos bajo vigilancia. Todo se hace en forma masiva con *softwares* que son vendidos a gobiernos democráticos y dictaduras” (CIPER, 2011).

Reacomodos globales y declive del poder imperial unilateral de los Estados Unidos

Los grupos gobernantes de los Estados Unidos, una vez que el colapso de la Unión Soviética desapareció a su rival estratégico, proclamaron que el xx sería “El Siglo Americano”. Ahora, Estados Unidos podría ejercer un dominio de amplio espectro sobre todo el planeta, con capacidad para impedir que cualquier país o alianza de países se desarrolle y ponga en riesgo su plena hegemonía. Este propósito encuentra su máxima expresión en el grupo neoconservador conocido como el Nuevo Siglo Americano,¹² que gobernó con George W. Bush en el periodo 2001-2009. Pero la ilusión imperial ha resultado de corto alcance: aún en el terreno militar, donde todavía mantiene un dominio global, las guerras en Irak y Afganistán han demostrado los límites de esta ambición. Después de más de una década de guerra continua, Estados Unidos se retira de Irak sin cumplir sus objetivos declarados de convertir al país en un ejemplo de democracia liberal para todo el Medio Oriente. Ni siquiera lograron un mínimo de estabilidad política. Por su parte, la guerra en Afganistán continúa empantanaada; se perdió el sentido de lo que podrían llamar una “victoria”, para justificar el retiro de tropas.

En el terreno económico, los desplazamientos de la hegemonía de los Estados Unidos en el sistema mundo, a causa de la emergencia de nuevos actores, ocurren a pasos vertiginosos. La diferencia entre las aceleradas tasas de crecimiento económico de las llamadas economías emergentes y el letargo de los países industrializados es tal, que el peso relativo de los diferentes grupos de países, en la economía global, está en permanente reacomodo. Ha sido particularmente rápido el surgimiento de China, y ahora se

12 Project for the New American Century. *Rebuilding America's Defenses. Strategy, Forces and Resources. For a New Century.* <<http://www.newamerican-century.org/>>

vislumbra como un serio rival a la hegemonía de los Estados Unidos, en el terreno económico. Después de tres décadas de tasas de crecimiento de 10% en promedio, a finales de la primera década del siglo XXI, China sobrepasó a Japón, la segunda economía del planeta, y a Alemania, como el primer país exportador. Según el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sustentable (ICTSD), en el 2011, China superó a los Estados Unidos como el país con la mayor producción industrial del mundo; de esta manera, recuperó la posición que había ocupado hasta mediados del siglo XIX (ICTSD, 2011).

Otra expresión de estos reacomodos globales está vinculada con Brasil. El Centre for Economic and Business Research (CEBR) de Londres, en el año 2011, afirma que Brasil sobrepasó al Reino Unido y se convirtió en la sexta economía del mundo. Asimismo, mientras en el 2011, la economía de China representaba menos de la mitad de la economía de los Estados Unidos, en el 2020, es decir, una década más tarde, representará 84% de la economía del país norteamericano. Se estima que en ese lapso, la economía rusa pasará del noveno al cuarto lugar en el mundo; y, la India, del décimo lugar llegará al quinto (CEBR, 2011).

Hace unos años, la empresa Goldman Sachs bautizó al grupo de grandes países emergentes con tasas de crecimiento más acelerados, como los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Desde entonces, realiza un seguimiento sostenido sobre el comportamiento de la economía de estos países. El análisis efectuado por dicha corporación, para evaluar el impacto de la crisis de los años 2007-2008, concluye que este grupo de países pudo superarla en mejores condiciones que el mundo desarrollado. Sobre la base de esos resultados, Goldman Sachs estima que la economía china probablemente supere a la de los Estados Unidos en el 2027, y que, para el 2032, la economía en conjunto de los BRIC será mayor que la economía del grupo G-7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) (Sachs, 2009). Esto

implica un desplazamiento formidable del consumo global hacia esos países. Se calcula que, para el año 2020, el número de personas pertenecientes a las clases medias (ingresos entre 10 mil y 30 dólares al año), en los BRIC, será el doble del número de personas de las clases medias en los países del G-7. China tendría, para ese año, una clase media mayor que todo el G-7 (Sachs, 2010).

Los desplazamientos no solo se refieren a los pesos relativos de las economías nacionales, sino al peso relativo de las corporaciones transnacionales de diferente origen, en la economía global. El Boston Consulting Group (BCG) ha venido produciendo informes anuales sobre el papel e impacto global de las corporaciones de las “economías en rápido desarrollo” (a las que denomina como “nuevos rivales globales”), que están sacudiendo el orden económico establecido. Estos nuevos rivales globales (provenientes, principalmente, de China, India, Brasil, Rusia y México), registraron una tasa de crecimiento de sus ventas equivalente a 18%, y tasas de ganancia promedio de 18%, durante el periodo 2000-2009 (BCG, 2011). Mientras tanto, las tasas correspondientes a las corporaciones basadas en los “países desarrollados” reportan un aumento entre 6% y 11%, durante el mismo periodo. Algunas de estas corporaciones se han convertido, en poco tiempo, en las mayores empresas globales en sus respectivas áreas de actividad. En el listado de las 500 mayores corporaciones globales de Fortune, el número de corporaciones de estos países pasó de 21 a 75 en la última década (Ibíd.).

Los retos que perciben los Estados Unidos frente a estos procesos no se limitan al terreno económico; también están vinculados con ámbitos como el tecnológico, educativo y militar. A finales del 2011, el gobierno chino anunció públicamente su programa espacial para los siguientes cinco años, que incluye el lanzamiento de laboratorios espaciales, naves tripuladas y pasos preparatorios para la construcción de estaciones espaciales. También se anticipa la puesta en marcha de un proceso de mejoramiento de los vehí-

culos de lanzamiento, de las comunicaciones, y el desarrollo de un sistema global de satélites de navegación que busca rivalizar con el lugar dominante de los Estados Unidos, en este campo, gracias al sistema de posicionamiento GPS (Watt, 2011). Este anuncio ocurre cuando ha concluido la vida útil de los transbordadores de los Estados Unidos y carece de vehículos de lanzamiento espacial propios. Al momento, depende de Rusia para enviar tripulantes y materiales a la estación espacial internacional.

Respecto de la educación, todos los años, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE (PISA), realiza un estudio comparativo de evaluación de estudiantes de 15 años, de los 34 países de la organización y de otros asociados al programa. Se evalúa un amplio espectro de asuntos: comprensión lectora, razonamiento, matemáticas, ciencias, etc. En el 2009, entre los 75 países participantes se incluyó, por primera vez, a la provincia china de Shanghai. Los estudiantes de esta localidad superaron a todos los demás en 6 de las 7 categorías utilizadas, y lograron la máxima puntuación en la evaluación global. Con ello, superaron a países como Finlandia y Corea del Sur, que en años anteriores habían ocupado los primeros puestos (OECD, 2009). En la mayor parte de las categorías, los estudiantes de los Estados Unidos ocuparon los puestos 23 o 24 (Dillon, 2010).

Otra manifestación de la progresiva pérdida de la plena hegemonía de los Estados Unidos en el sistema mundo, se expresa en los lentos, pero significativos pasos que se han dado con miras a reducir el papel del dólar como divisa de reserva internacional. El dólar ha sido un pilar fundamental de la hegemonía de los Estados Unidos, en especial, desde el momento en que, bajo la presidencia de Richard Nixon, el país abandonó el patrón oro.

Son diversas las señales que apuntan hacia una progresiva desdolarización de la economía global, sobre todo en los países integrantes de los Bric (Reuters, DPA y AFP, 2011). A finales del 2010, el presidente Vladimir Putin, de Rusia, y el primer ministro

de China, Wen Jiabao, anticiparon su intención de remplazar al dólar estadounidense, en sus intercambios bilaterales, por el rublo y el yuan (Chinadaily, 2011). Posteriormente, a finales del 2011, los primeros ministros de China y Japón negociaron un acuerdo para utilizar a corto plazo, en su comercio bilateral, sus propias divisas, sin el dólar. El acuerdo contempla que Japón podrá utilizar el yuan (moneda china) como divisa de reserva. Este acuerdo entre las economías número dos y tres del planeta podría ocasionar efectos trascendentales en relación con el papel internacional del dólar (Miller, 2011). En América Latina, los intercambios en moneda nacional entre Argentina y Brasil, y, en otra escala, el sucre, entre los países del ALBA, apuntan en la misma dirección.

La hegemonía militar de los Estados Unidos y el estado de guerra permanente

En el terreno militar, los Estados Unidos preservan una plena hegemonía; cuando es posible, con la participación de sus aliados,¹³ pero, con frecuencia, en forma unilateral. Es esta su principal ventaja estratégica, en la búsqueda de preservar su hegemonía global. En los últimos años ha demostrado –independientemente del partido de gobierno– la disposición a utilizar este poderío militar cada vez con mayor frecuencia.

Entre las evidencias de las ambiciones imperiales unilaterales, Estados Unidos mantiene aproximadamente 1 000 bases militares fuera de sus fronteras, que representan 95% de las bases militares existentes, en la actualidad, en el extranjero. Como señala el historiador Chalmers Johnson, se trata de una nueva forma de colonialismo que no está caracterizado, como sucedió en el caso

13 La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha ido dejando, paso a paso, su carácter regional para realizar operaciones militares en todas partes del planeta. Ver: Ivo Daalder y James Goldgeier, AGlobal NATO@, *Foreign Affairs*, septiembre-octubre 2006.

europeo, por la ocupación del territorio: la “...versión americana de la colonia es la base militar” (Johnson, 2004).¹⁴

Según el Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo (2010), uno de los centros más confiables de estudio de gasto militar, los Estados Unidos ejecutaron, en el 2010, el 43% del gasto militar total del planeta; porcentaje significativamente superior al de los siguientes nueve países con mayor gasto militar (32%). En el presupuesto federal global, el peso relativo del gasto militar varía según cómo se realiza el cálculo. Las estadísticas oficiales muestran un peso menor al real, pues excluyen una amplia gama de desembolsos directamente relacionados con el gasto militar que no están considerados en el presupuesto del Pentágono. De acuerdo con la organización antiguerra War Resisters League (2011), si al presupuesto oficial del Pentágono se le suma el gasto de los veteranos de guerra, la deuda pública atribuible al gasto militar y el costo de las guerras de Irak y Afganistán, el gasto militar total representa 54% del gasto federal.¹⁵

Un exhaustivo estudio realizado por el Watson Institute for International Studies, de la Universidad de Brown, muestra que el costo total de las guerras de los Estados Unidos, durante la última década, asciende aproximadamente a 3, 2 y 4 billones de dólares (trillones, según nomenclatura de los Estados Unidos). Los cálculos calificados como “conservadores” de este Instituto, indican que estas guerras, en diez años, han ocasionado la muerte de 236 000 personas; la mayoría, civiles de Irak, Afganistán y Paquistán. De estos, entre 40 mil y 60 mil corresponden a Paquistán, donde se supone que no hay una guerra. El estudio señala que por cada uno

14 De acuerdo con la propia lista del Pentágono, serían alrededor de 865 bases; pero si se incluyen las bases en Irak y Afganistán, son más de mil (Gusterson, 2009).

15 Este cálculo se refiere a lo que se denomina “gasto discrecional”. No incluye los gastos de la seguridad social, que se financian y gestionan al margen del presupuesto federal.

de estos muertos directos habrían perdido la vida cuatro personas más, en forma indirecta (hambre, degradación del ambiente y la infraestructura). Con ello, la cifra total equivale a 1 180 000 muertos. También se estima que entre refugiados y personas desplazadas, aproximadamente 7 800 000 personas adicionales han sido afectadas (Watson Institute for International Studies, 2011).

Para que este estado de sangrienta y costosa guerra permanente, o “guerra sin fin”, fuese políticamente sostenible en el tiempo, se incorporaron transformaciones fundamentales en las maneras de conducir la guerra. La experiencia de Vietnam demostró que no era posible sostener una guerra si ocupaba un espacio destacado y constante en la opinión pública, y si los sectores privilegiados de la sociedad sufrían en forma directa sus consecuencias. De ahí, la búsqueda de cambios que permitiesen mayores niveles de opacidad en relación con la guerra, y el desplazamiento de los afectados hacia otros sectores de la población. Estas medidas se han ido concretando a través de la aplicación de tres transformaciones esenciales en las formas de conducción del personal y en el uso de la tecnología.

La primera medida consistió en eliminar la recluta obligatoria y sustituirla por mecanismos de enlistamiento “voluntario”, basado en incentivos económicos. En la resistencia a la guerra de Vietnam, muchos soldados provenían de sectores privilegiados de la sociedad, incluso algunos eran estudiantes de las universidades más elitistas del país. Por eso, cada estudiante reclutado en contra de su voluntad y cada muerto que regresaba de la guerra, generaba una creciente oposición de la gente. Así, el enfrentamiento bélico se hizo políticamente insostenible. Pero a partir de la eliminación de la recluta obligatoria y la incorporación de modalidades de enlistamiento, basados en incentivos económicos, la carne de cañón de las guerras de los Estados Unidos provino casi exclusivamente de los sectores más pobres de la población, lo que disminuyó el impacto en la opinión pública.

La subcontratación o privatización de la guerra fue otra modalidad de reducción de la recluta. En 2011, estos mercenarios, denominados “contratistas militares privados”, llegaron a superar el número total de soldados uniformados activos en Irak y Afganistán (Shear, 2011). Con la privatización de la guerra, se amplió el ámbito de competencia del “complejo militar-industrial” y, con ello, los sectores corporativos y laborales dependientes de la continuidad y la ampliación de las guerras.

Las transformaciones tecnológicas del “arte de la guerra” implicaron cambios significativos. Las nuevas armas de alta tecnología, desarrolladas al costo de miles de millones de dólares, han permitido –en especial para los Estados Unidos– remplazar la participación humana directa en los campos de batalla, por nuevos armamentos que, además de incrementar el poder letal, viabilizan operaciones a distancia que no ponen en peligro a los soldados. El uso de estos nuevos instrumentos bélicos posibilita llevar a cabo una guerra sin poner un pie en territorio “enemigo”. De acuerdo con los voceros oficiales de la OTAN, la guerra en Libia, que condujo al derrocamiento del gobierno de Khadafi, no ocasionó ni una sola víctima mortal entre los “aliados”. Otra cosa, por supuesto, fue lo vivido por la población libia.

En estas condiciones, sin recluta y con pocos norteamericanos muertos, es factible naturalizar un estado de “guerra infinita” contra todos los enemigos imaginables: terrorismo, Estados fallidos, armas de destrucción masiva, piratas, drogas. A diferencia de épocas históricas anteriores, la guerra no es una sucesión de eventos discontinuos que comienzan y terminan, sino un estado permanente que pelea, en forma abierta o encubierta, en muchos frentes y en forma simultánea: Irak, Afganistán, Libia, Sudán, Somalia, Irán...

En vista de las crecientes limitaciones financieras y de los actuales reacomodos hegemónicos, el gobierno de Obama ha anunciado una nueva estrategia militar para preservar el lide-

razgo global de los Estados Unidos, en el siglo XXI. En esta reorientación, destacan dos aspectos: unas fuerzas armadas más reducidas, pero “más ágiles, flexibles, listas, innovadoras y tecnológicamente avanzadas”; y, la prioridad estratégica para contener a China, rival que es visto como una amenaza a la hegemonía global de los Estados Unidos (United States of America, 2012).

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha denominado a esta nueva orientación geoestratégica como el “Siglo del Pacífico Americano”. Según Clinton, el “futuro de la política será decidido en Asia, no en Afganistán o en Irak, y los Estados Unidos estarán en el justo centro de la acción” (Clinton, 2011). En su discurso ante el parlamento australiano, a finales del 2011, el presidente Obama anticipó que, después de las guerras de Irak y Afganistán, Estados Unidos estaban girando su atención hacia el vasto potencial del Asia Pacífico, lo que incluía “una fuerte presencia militar en la región”. Como parte del fortalecimiento de esta presencia militar, Obama anunció el acuerdo para establecer una nueva base militar naval en Australia; la primera expansión de estas características en la región, desde el fin de la guerra de Vietnam. Esto provocó una respuesta airada del gobierno chino, que acusó al mandatario estadounidense de estar agudizando las tensiones militares en la región (Calmes, 2011).

¿Estamos presenciando el inicio de una nueva época de guerra fría?

Pueblos en movimiento

Ante esta extraordinaria combinación de amenazas, no solo a la democracia, a la paz y dignidad humana, sino a la vida misma, hoy nos encontramos con pueblos en movimiento y resistencia. En el 2011, se produjeron sorprendentes movilizaciones en todo el mundo, en oposición a estos propósitos y en favor de la lucha por otro mundo posible.

América Latina, durante las últimas dos décadas, ha sido el continente más activo en este sentido. Continúan y, en muchos casos, se profundizan y radicalizan, las movilizaciones y luchas, especialmente en contra de las múltiples modalidades del extractivismo: minería a cielo abierto; extracción de hidrocarburos; monocultivos de soya transgénica, eucaliptos, pinos y palma africana; y, grandes represas hidroeléctricas. Entre las luchas más emblemáticas destacan las acciones contra la minería, en Argentina; la resistencia a la represa de Belo Monte, en la Amazonía brasileña; las grandes acciones de resistencia contra las corporaciones mineras, en Cajamarca (Perú); y, la oposición a la carretera que pretende atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), en Bolivia. Sin embargo, la lógica extractivista y la inserción primario-exportadora de estas economías han continuado, más allá de los profundos cambios políticos experimentados en el continente; y representan la fuente principal de las contradicciones internas y los desencantos con los gobiernos “progresistas” y de izquierda de la región.

Han reaparecido en escena, asimismo, otros sujetos y otros asuntos, entre ellos, las luchas estudiantiles chilenas, en reclamo por una educación pública y de calidad. En Chile, la dictadura de Pinochet había instalado una amplia hegemonía política y cultural del neoliberalismo, en la que predominaba el individualismo y la desvalorización de lo público y lo colectivo. No obstante, en los últimos años, las luchas de los mineros, de los mapuches y, sobre todo, de los estudiantes, parecen haber roto el hechizo de ese modelo de sociedad. Si bien las masivas y sostenidas movilizaciones estudiantiles del año 2011 –inscritas dentro de la defensa de las nociones democráticas de la equidad y lo público–, no han conseguido alterar el rumbo en las políticas gubernamentales, en cambio sí han logrado niveles de apoyo extraordinarios por parte de la población. El Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC, 2011), en su estudio nacional de opi-

nión pública correspondiente a diciembre de ese año, revela que 89% de la población apoya las demandas de los estudiantes; 77% opina que la educación debe ser gratuita; 78% considera que no deben existir instituciones de educación superior con fines de lucro; y, 82% asegura que las demandas de los estudiantes son las correctas para mejorar la educación. Este apoyo es abrumador, incluso entre quienes dicen simpatizar con los partidos de derecha. Apenas 21% de la población se identifica como partidaria del gobierno de Piñera.

En el mundo árabe se están produciendo cambios políticos que, hasta hace no mucho tiempo, parecían poco probables; ejemplo de ello son las multitudinarias y persistentes movilizaciones populares, la denominada “Primavera árabe”, que produjeron el derrocamiento de los dictadores Ben Alí, en Túnez, y Hosni Mubarak, en Egipto. Organizaciones antes ilegales, como la Hermandad Musulmana, han pasado a ocupar espacios políticos centrales. La negación de todo derecho democrático, junto con la profundización de las condiciones de exclusión, pobreza y desigualdad que acentuó el neoliberalismo, terminaron por hacer estallar este centro neurálgico de la geopolítica global y abrieron la puerta a una época de cambios profundos y de gran inestabilidad. El papel de la región, como fuente confiable de los hidrocarburos requeridos por los Estados Unidos y la Unión Europea, dejó de estar garantizado en la medida en que sus aliados (los gobiernos autoritarios de la región), están siendo cada vez más cuestionados. Los “aliados” responden a estas nuevas condiciones con acciones militares directas (Libia), o con amenazas de intervención militar y acciones encubiertas de sus agencias secretas (Siria e Irán). Israel, que ha perdido algunos aliados para su política de sometimiento sistemático del pueblo palestino, está poniendo en marcha políticas cada vez más agresivas, sobre todo en relación con Irán.

En Europa, el movimiento más amplio, consistente y sostenido es el de los llamados “Indignados”. Combinando acciones de ocupación en los centros de las ciudades, multitudinarias movilizaciones (especialmente en Madrid y Barcelona) y asambleas barriales, la demanda de “Democracia real YA” ha implicado un cuestionamiento profundo del sistema político español y de sus partidos, incluso de los partidos de izquierda. Entre las exigencias que constan en diversos manifiestos, destacan: eliminación de los privilegios de la clase política; contra el desempleo (reparto del trabajo fomentando la reducción de la jornada laboral...); derecho a la vivienda; servicios públicos de calidad (educación, salud y transporte); control de las entidades bancarias (prohibición de rescates bancarios: las entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas, para constituir una banca pública bajo control social; prohibición de inversión en paraísos fiscales...); régimen impositivo (aumento de las tasas impositivas a las grandes fortunas y a la banca, recuperación del impuesto sobre el patrimonio, control efectivo del fraude fiscal, tasa Tobin, etc.); libertades ciudadanas y democracia participativa (no al control de Internet; protección de la libertad de información y del periodismo de investigación; referéndum obligatorios y vinculantes para los asuntos de gran relevancia, que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos, y para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea; modificación de la ley electoral, para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social; independencia del Poder Judicial; establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos); reducción del gasto militar (Democracia real YA, s.f.). En su cuestionamiento a la política institucional, así como lo han hecho otros movimientos de diversas partes del mundo, los Indignados han privilegiado la democracia directa y las asambleas, como modalidad de debate y toma de decisiones.

En los Estados Unidos, el movimiento que se inició con Occupy Wall Street se extendió hacia unas mil localidades urbanas, en todo el país. La principal consigna del movimiento “Somos el 99%” reconoce, y a la vez coloca en forma abierta en la conciencia pública, la existencia de conflictos entre los “ricos” y los “pobres” de esa sociedad. Según el estudio de opinión pública nacional del Pew Research Center, 66% de los norteamericanos consideran que existen conflictos fuertes o muy fuertes entre los “ricos” y los “pobres”, lo que equivale a un aumento de 19 puntos en relación con los resultados obtenidos en el 2009 (Morin, 2012). Esta percepción se eleva a 74% entre la población negra. Asimismo, el porcentaje de personas que califican a estos conflictos como muy fuertes (30%), es el más elevado desde que esta pregunta comenzó a ser formulada en 1987, y duplica al porcentaje de personas que pensaban así en el 2009. Los conflictos de clase entre pobres y ricos también se expresan entre la población nativa y los inmigrantes; entre blancos y negros; entre jóvenes y viejos.¹⁶

En las plataformas programáticas que el movimiento ha ido elaborando destacan la lucha contra el racismo y el patriarcado, contra la desigualdad y por el derecho al trabajo y la contratación colectiva. Entre muchos otros asuntos, denuncian “que las corporaciones, que ponen por encima el beneficio a las personas, sus propios intereses a la justicia, y la opresión a la igualdad, son las que manejan nuestros gobiernos” (Ibíd.). Afirman que estas corporaciones han perpetuado la desigualdad y la discriminación en

16 Señala este estudio, sin embargo, que este incremento en la percepción de la importancia de los conflictos de clase no altera la percepción que se tiene sobre los ricos: “un 46% opina que la mayor parte de los ricos lo son porque tienen buenos contactos o porque nacieron en familias ricas y 43% considera que los ricos acumularon riqueza gracias a su propio esfuerzo, ni sugieren un aumento del apoyo a políticas gubernamentales dirigidas a reducir la desigualdad del ingreso” (Ibíd).

el entorno laboral, en función de la edad, el color de la piel, el sexo, la identidad de género y la orientación sexual (Declaración de principios de la ocupación de la Ciudad de Nueva York, 2011). Como en el caso del movimiento español, asumen la democracia participativa, directa y transparente, y rechazan las estructuras jerárquicas, así como las viejas formas de hacer política. Sus decisiones son ampliamente debatidas en asambleas y tomadas por consenso.

Estos encuentros de múltiples sectores sociales evidencian un importante proceso de repolitización, después del profundo desencanto que generó el gobierno de Obama entre millones de jóvenes y amplios sectores pobres de la población, que se habían movilizado en la campaña presidencial del 2008. El movimiento representa una alternativa de calle al populismo de extrema derecha del *Tea Party*, que ha contado con un generoso apoyo financiero por parte de las corporaciones.

Estos movimientos de diversas partes del mundo tienen mucho en común y muchas diferencias; varía, por ejemplo, la eficacia política en cuanto al logro de sus objetivos inmediatos. Los asuntos comunes, que aparecen en forma más reiterada, se refieren a la reivindicación de la democracia, en contra de la desigualdad, la exclusión y el desempleo, y en oposición a la destrucción ambiental. La desconfianza en la política institucional e, incluso, hacia los partidos de izquierda, es uno de los temas importantes para muchos movimientos, que demandan formas de democracia directa, no violenta, pero dispuesta a la desobediencia cívica y a la resistencia activa cuando son reprimidos por las fuerzas públicas. Asimismo, algunos coinciden en las modalidades de acción y de toma de decisiones democráticas, con frecuencia mediante debates asamblearios, hasta el logro de consensos.

En ciertos casos, como Túnez y Egipto, los movimientos lograron el derrocamiento de dictadores. En otros, en cambio, las políticas contra las cuales luchan no dejan de aplicarse. En Grecia, centenares de millares de griegos, día tras día, semana tras

semana, han expresado su absoluto rechazo en las calles de Atenas, Tesalónica y otras ciudades; sin embargo, no lograron detener los draconianos ajustes impuestos por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. En el Reino Unido, a pesar de las amplias y reiteradas protestas estudiantiles en contra del aumento de los costos de las matrículas universitarias, el Partido Conservador, que proponía aún mayores ajustes, ganó abrumadoramente las elecciones generales de 2010. En España, la amplia movilización de los Indignados, que tenía como uno de sus temas centrales la oposición a las políticas de ajuste neoliberales, no impidió la victoria del Partido Popular que –como era de esperar– una vez en el gobierno, impuso ajustes mucho más duros que los ejecutados durante el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Empero, los logros más importantes de estas y otras luchas parecen ser la politización de los jóvenes que no encuentran sentido alguno en la política institucional, así como los cambios en los sentidos comunes de la sociedad, en el contenido del debate público, en los desplazamientos políticos culturales significativos respecto de asuntos básicos como la democracia, la igualdad y el valor de lo público. Ese es el caso de las movilizaciones de los Indignados, de Occupy Wall Street y de las luchas de los estudiantes chilenos. Igualmente, han abierto perspectivas de debate y de acción política –de otra forma de hacer política–, ante la falta de opciones de cambio en la política institucional.

En los últimos años, los partidos socialdemócratas europeos se han convertido en cómplices plenos de las reformas neoliberales que han exigido “los mercados”. En consecuencia, son cada vez más incapaces de defender las conquistas del “Estado de bienestar social”, que había sido su proyecto histórico. Las organizaciones políticas de izquierda tampoco han sabido ofrecer alternativas ante la crisis: durante mucho tiempo afirmaron que una crisis

de estas dimensiones era inevitable; pero cuando ésta se vuelve realidad, la izquierda se ha quedado sin propuesta.

Las otras formas de hacer políticas, menos institucionales, más espontáneas, menos verticales, más democráticas, colocan sobre el tapete un conjunto de asuntos críticos que deben ser debatidos. Uno de ellos se refiere a las potencialidades de las nuevas tecnologías de comunicación e información (teléfonos celulares, YouTube, Twitter, Facebook), para promover una política radicalmente democrática. Por supuesto, estos instrumentos también han sido utilizados para fortalecer iniciativas de contenido autoritario y antidemocrático, en el marco de la “sociedad bajo vigilancia”, tal como ha sido destacado en otra parte de este texto. No obstante, en los últimos años, a través de todo el planeta, el uso de las nuevas tecnologías de comunicación ha sido incorporado de modo creativo a múltiples expresiones de lucha y movilización. También ha abierto, en muchos contextos, potencialidades de acceso a la información y comunicación: creación de espacios virtuales de debate público, de intercambio de experiencias y articulación en las luchas y movilizaciones sociales. En abril de 2002, en Venezuela, a través de los teléfonos celulares, la población compartió información y coordinó lugares de encuentro para las masivas movilizaciones, que lograron derrotar al golpe de Estado y el regreso de Chávez al palacio presidencial. Esto ocurrió en ausencia de organizaciones chavistas capaces de coordinar la resistencia al golpe, y en condiciones en que los golpistas intentaron un bloqueo total del acceso a la información. Todos los medios públicos fueron silenciados y los medios privados, en forma coordinada, dejaron de informar sobre lo que ocurría en el país: sustituyeron las noticias por telenovelas, comiquitas y series norteamericanas.

Estas tecnologías han permitido romper el monopolio de los medios corporativos y estatales. La represión, que cada vez es más divulgada, a veces prácticamente en tiempo real, por YouTube,

con frecuencia tiene efectos contraproducentes para las autoridades, ya que genera protestas aún mayores que las que buscaba sofocar. En China, donde se registra el mayor número de usuarios de Internet, el control estatal de sus contenidos es muy difícil.

Otro asunto clave, vinculado con viejos debates en el campo de la política transformadora, se refiere a la posibilidad o conveniencia de reconectar estas múltiples expresiones de la resistencia y protesta popular con la política institucional. No tiene sentido buscar una respuesta única, pero, ¿cuáles serían las condiciones (y experiencias) en las cuales podría incidirse, en sentido democrático, sobre la política institucional y sobre la acción del Estado, sin perder la autonomía y el horizonte utópico, sin ser capturado por la lógica reproductora y conservadora de la política y del poder constituido?

Desde el punto de vista de la amplia gama de movimientos y luchas asociadas con el Foro Social Mundial, es indispensable profundizar el debate sobre el sentido y potencialidades de estos nuevos movimientos. ¿Cómo debatir, confluir y articular estas nuevas oleadas de protestas, sin buscar apropiarse de ellas, como harían los partidos políticos?

Ante todo, es necesario partir del reconocimiento de la pluralidad y diferencias de los contextos en los que operan estos movimientos, así como de la diversidad de sus historias, objetivos y concepciones acerca del por qué se lucha y de las formas de lucha. En palabras de Raúl Zibechi:

Para las fuerzas antisistémicas (...) [se] hace imposible el diseño de una sola y única estrategia planetaria y hace inútiles los intentos de establecer tácticas universales. Aunque existen inspiraciones comunes y objetivos generales compartidos, las diferentes velocidades que registra la transición hacia el post-capitalismo, y las notables diferencias entre los sujetos antisistémicos, atentan contra las generalizaciones (Zibechi, 2012).

Las ropas verdes del rey

La economía verde: una nueva fuente de acumulación primitiva

Camila Moreno¹⁷

Miriam Lang, Claudia López y Alejandra Santillana, aportaron y comentaron al presente texto.

En carrera meteórica, el término *Green Economy*, o “economía verde”, a lo largo de los últimos años, y especialmente tras la crisis financiera de 2008, se ha constituido en un nudo central alrededor del cual se está reorganizando y resignificando el discurso hegemónico.

Aún no contamos con una definición canónica del concepto de economía verde, que nos dé luces sobre si se trata de algo enteramente distinto de la economía actual (también referida en estos días como economía “marrón”). Pese a eso, las agencias de las Naciones Unidas como el PNUMA,¹⁸ PNUD,¹⁹ UNCTAD,²⁰ orga-

17 Camila Moreno estudió filosofía y derecho. Tiene un doctorado en sociología en la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ), con la tesis: “La catequesis del carbono y las nuevas ecuaciones coloniales”. Ha trabajado como investigadora en Brasil y América Latina, junto con movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, en los temas de transgénicos, agrocombustibles y las políticas de clima y biodiversidad. Fue miembro del Grupo de Trabajo de Ecología Política de la CLACSO y fue becaria de la misma institución. Desde marzo de 2011, coordina el programa de sustentabilidad de la oficina Brasil de Fundación Heinrich Böll Stifting (HBS).

18 Ver UNEP. 2011. En <<http://www.unep.org/greeneconomy/>>

19 Ver UNDP. 2011. En <http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/climate_strategies/green_lecrds_guidancemanualsandtoolkits.html>

20 Ver UNCTAD. *The Green Economy: Trade and Sustainable Development Implications*. 2010. En <http://www.unctad.org/en/docs/ditcted20102_en.pdf>

nizaciones multilaterales como la OCDE,²¹ el Banco Mundial,²² bancos regionales de desarrollo,²³ el Parlamento Europeo,²⁴ consultoras internacionales,²⁵ coaliciones empresariales,²⁶ y otros actores han formulado propuestas, listado sectores prioritarios y definido agendas sectoriales; han establecido objetivos y metas cuantificables, así como recomendado nuevos instrumentos financieros e inversiones para lograr el cambio hacia un futuro “más verde”.

El G20, al tratar el tema *Green Growth* (Crecimiento verde), en su encuentro en México de junio de 2012, en los días que inmediatamente antecedieron a la Conferencia Río+20), incluyó, entre sus temas, “las reformas estructurales para promover el crecimiento y el empleo, incluyendo el crecimiento verde como detonador de la inversión”, y en el entendimiento que “el crecimiento verde puede estimular el crecimiento económico a través de varios canales”; por ejemplo:

(...) mejorando la asignación de recursos al destinarlos a las tecnologías de punta, induciendo un cambio en la demanda hacia productos y servicios verdes y mediante el fomento de

-
- 21 OECD. *Towards Green Growth*. 2011. En <http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37465_44076170_1_1_1_37465,00.html>
 - 22 WB. *Moving to a Green Growth Approach to Development*. 2011. En <<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,-contentMDK:22865936~menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282,00.html>>
 - 23 ADB. *Greening Growth in Asia and the Pacific*. 2011. En <<http://beta.adb.org/features/report-greening-growth-asia-and-pacific>>
 - 24 Europarl. 2011. En <<http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110929IPR27849/html/MEPs-call-for-global-green-economy-targets>>
 - 25 Price Water House. 2012. En <http://www.pwc.com/en_M1/m1/publications/Blueprint-Green.pdf>
 - 26 B20. 2012. En <<http://b20.org/documentos/B20-Complete-Report.pdf>>. El B20 es la reunión del sector de las empresas de los países miembros del G20; se reúnen paralelamente a los encuentros del G20, desde la reunión de este en Toronto, Canadá, en 2010.

la innovación y la creación de nuevos mercados; para activar dichos canales de fomento al crecimiento se requiere de políticas activas para flexibilizar el mercado laboral, para promover las políticas relacionadas con la innovación, incluido el apoyo directo del público para fomentar las nuevas tecnologías que no son inmediatamente rentables para los inversionistas privados, las políticas de competencia, las políticas fiscales, políticas de precios y políticas de adquisiciones (B20, 2012).²⁷

Para lograr el crecimiento verde, los Estados nacionales juegan un papel central como creadores e inductores de la demanda, como consumidores en escala; determinan el rumbo de muchos mercados y productos, a través de sus autoimpuestos criterios “verdes” para subastas públicas, en el apalancamiento de inversiones (*leveraging*), para garantizar a las mismas en las asociaciones público-privadas (PPP, siglas en portugués o lo que sería APP), para garantizar las inversiones en lo que “no es inmediatamente rentable para los inversionistas privados”. De hecho, la instauración de la economía verde es un proceso que solo es posible con la participación activa de los Estados y los gobiernos, pues su implementación depende de la centralidad de un régimen jurídico que asegure la creación de nuevas leyes, la reforma o ajustes de los parámetros normativos existentes, y la consecuente seguridad y validez jurídica de los contratos e inversiones.

El *greening of the economy*, o el “enverdecimiento” de la economía, configura hoy un proceso que ya está influenciando en gran medida la elaboración de políticas públicas en muchos países; ello incluye reformas y ajustes legales y de regulación en curso, para pavimentar el camino a una “transición verde”, justificada en nombre de fortalecer la capacidad institucional de los países a disparar un nuevo ciclo económico, en el cual el crecimiento y el

27 Ver Resumen, sesión 5. En <http://www.g20.org/index.php/es/component/content/article/39-g20/402-prueba>

desarrollo tengan en cuenta las preocupaciones de la sustentabilidad (clima, biodiversidad, energía, inclusión social y erradicación de la pobreza, etc.).

Así, en la práctica, y más allá de la retórica, la economía verde avanza hacia los ámbitos más diversos de nuestra vida económica y social: los criterios para las compras públicas (las subastas verdes); las “huellas” (*footprints*) ecológicas, de carbono y de agua, como referentes de competitividad comercial entre los *commodities*; la regulación para los bosques, manglares, suelos y océanos, y sus respectivos potenciales para el secuestro de carbono y otros “servicios ambientales”; la agricultura de bajo consumo de carbono o “climáticamente inteligente” (*climate smart agriculture*); las directivas obligatorias y progresivas para la incorporación de las energías renovables, entre ellas, los agrocombustibles; los seguros ambientales; los impuestos y tarifas verdes; las normas para las construcciones y predios verdes (*green buildings*); las normas de eficiencia energética; las patentes verdes; los programas de transición a las municipalidades verdes (*green cities*), etc.

En el repertorio de la economía verde también se ubican las políticas públicas de combate al cambio climático, el comercio de emisiones de carbono y mecanismos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la financiación para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación (REDD+); de la misma manera, las políticas de biodiversidad, que de forma creciente incorporan en el ámbito nacional los esquemas de “pagos por servicios ambientales”, las compensaciones (*offsets*) de biodiversidad, agua (*water bonds*), bancos de hábitat de especies amenazadas (*species banking*), y una vasta gama de nuevos “activos ambientales”, entre ellos, la creación de nuevos mercados internacionales, como el de carbono.

La “economía verde”, un eslogan eficaz

La diseminación de la economía verde, como un eslogan, ha sido muy efectiva –política y ideológicamente– para ayudar a forjar una potente narrativa unificadora y, al mismo tiempo, a catalizar el sentido de involucramiento, necesario en el período postcrisis financiera de 2008. La economía verde ganó creciente visibilidad y ha entrado en el *mainstream* del discurso político, de las palabras de jefes de Estado, de ministros de finanzas, en los comunicados del G20, especialmente a partir de octubre de 2008 y el llamado del PNUMA para un *Global Green New Deal* (*Nuevo acuerdo verde global*).²⁸ Concebida y diseñada como una respuesta oportuna y adecuada, en términos de políticas para la crisis financiera, la propuesta de un Nuevo acuerdo verde global fue uno de los primeros resultados de la Iniciativa para la economía Verde, de las Naciones Unidas, que involucra a más de 20 agencias del sistema de la ONU.²⁹

El llamado del PNUMA, en 2008, convocaba a “aprovechar la oportunidad histórica de traer la economía de mañana para el hoy”, frente a la “urgencia de pensamiento transformador” y el hecho de que los “modelos económicos del siglo XX están acer-

28 Resumen para formuladores de políticas, en http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf; informe completo, en http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/sdt_cc/cc_global_green_new_deal.pdf

29 La *Green Economy Initiative* es una de las nueve *Joint Crisis Initiatives* (JCI, por su sigla en inglés; Iniciativas Conjuntas para la Crisis), en donde están todas las agencias de las Naciones Unidas, lanzadas por el UN System's Chief Executives Board, a inicios de 2009. En este contexto, la Iniciativa incluye un amplio abanico de actividades y eventos de investigación y capacitación que involucra a más de 20 agencias de la ONU, entre ellas, las instituciones Bretton Woods (Banco Mundial, FMI y otros), así como un *Issue Management Group* (IMG, por su sigla en inglés; Grupo de Gestión del Tema), específico para la economía verde, lanzado en Washington, DC, en marzo de 2010. <http://www.unep.org/greeneconomy/>

cándose a los límites de lo que es posible”; no especificó, en todo caso, si estos “límites de lo que es posible” se refieren a la capacidad de soporte del planeta o, más bien, a lo que sería necesario para un nueva etapa de acumulación.

Esto se da en un contexto internacional donde políticas locales y nacionales son crecientemente racionalizadas, como parte de un esfuerzo concertado para un programa global de acción, asociado con la recuperación económica para algunos países, sobre todo del norte, y para la inclusión competitiva y estratégica en la economía mundial para otros, en especial los del sur y, entre estos, el rol clave y los intereses de las potencias emergentes que integran el bloque BRICS.³⁰ Es justamente el Brasil, apoyado por China, que propone en la Asamblea General de la ONU, en 2009, llamar a una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (UNCSD, por su sigla en inglés), para celebrar los 20 años de la más grande y representativa conferencia en la historia de las Naciones Unidas: la Conferencia de Naciones Unidas

30 El acrónimo BRIC fue creado, en 2001, por Jim O’Neill, economista senior de uno de los mayores bancos de inversión del mundo: el Goldman Sachs, en un artículo intitulado “Building Better Global Economic BRICS”. Argumenta que el Brasil, Rusia, India y China “—the BRICs economies— could become a much larger force in the world economy”. En <<http://www.goldman-sachs.com/our-thinking/topics/brics/brics-dream.html>>. Goldman Sachs prevé que la China y la India, respectivamente, van a convertirse en los principales proveedores mundiales de productos manufacturados y servicios, mientras que el Brasil y Rusia serán los países dominantes como proveedores de materias primas. El Brasil es dominante en la soya y en minería de hierro, y Rusia tiene enormes reservas de petróleo y gas natural. El término BRICS ha sido largamente utilizado como un símbolo del cambio del poder económico global, de las economías desarrolladas hacia el mundo “en desarrollo”. Con la inclusión del África del Sur (y del S oficial en el BRICS), en 2011, el grupo no se constituye como un bloque económico, sino más bien como una alianza que, desde 2009, se reúne en cumbres periódicas, en las que demuestra cada vez más su creciente poder económico, materializado, por ejemplo, en el aporte que hicieron al Fondo Monetario Internacional, con una mayor influencia geopolítica. En <<http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC>> y <<http://en.wikipedia.org/wiki/BRICS>>

sobre el Medio ambiente y el Desarrollo (UNCED, por su sigla en inglés), también conocida como Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992. La Río+20 fue originalmente convocada para debatir el futuro del desarrollo sustentable, a partir de dos temas centrales y complementarios: la economía verde, en el contexto de la erradicación de la pobreza, y el marco institucional necesario para una gobernanza ambiental global.³¹

Frente al desgaste ideológico y al vaciamiento de sentido del “desarrollo sustentable”, se presenta la “economía verde”, revestida como novedad y como una respuesta desde el propio sistema, con el énfasis, por parte de sus proponentes, sobre su carácter pragmático y de implementación de mecanismos: la economía verde no trata del qué hacer, pero sí del cómo hacer, y hacerlo ahora. La relevancia del evento de la Río+20³² y, en especial, el proceso oficial que tiene este evento, estriba en que marca, en definitiva, la instalación de la economía verde en la arena multilateral, como un tema de discusión, acuerdo de rutas de consenso y acción de los países hacia adelante, como un nuevo paradigma para la cooperación internacional.

Al considerar el peso que el tema adquirió en la agenda política internacional, cabe preguntarnos acerca del sentido de esta propuesta, llevada adelante al unísono por los principales actores del actual pensamiento hegemónico: ¿Qué puede ser considerado verdaderamente nuevo en la emergente economía verde? ¿Y en qué la economía verde desafía, reemplaza o refuta el paradigma económico vigente?

Para buscar las respuestas a estos interrogantes, esta exposición la he dividido en dos partes. En la primera, trato los antecedentes de la economía verde y de la emergencia del cambio climático, como nuevo paradigma de cooperación internacional. Aquí

31 Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/64/236, § 20, b.

32 Sitio oficial y documentos. En <<http://www.uncsd2012.org/>>

destaco la importancia del Informe Stern sobre la “economía del cambio climático”, como pionero de la nueva lógica donde la crisis ambiental entra al centro de la arena internacional, bajo el discurso de que representa una falla (y oportunidad) del mercado. A continuación, discuto los planes para “descarbonizar” la economía o, más bien, para reciclar el desarrollo y el crecimiento, y su efecto despolitizador. Con el fracaso de las negociaciones sobre el clima, hay un giro discursivo determinante donde las políticas climáticas negativas (bajo consumo de carbono y descarbonización) dan paso a la economía verde “positiva”, sin alterar sus propuestas.

En la segunda parte, abordo cómo la economía verde es presentada como un error del mercado, y de la cual depende la creación de nuevos mercados. De un modelo actual, donde las externalidades no son contabilizadas y valoradas, y donde el capital estaría fundamentalmente mal asignado, la introducción del concepto del capital natural se presenta como rasgo distintivo de la economía verde. Al analizar en qué consiste la creación e incorporación de esta nueva clase de activos y piso (base) de derechos de propiedad, identificamos la economía verde como una narrativa unificadora del capital financiero, a servicio de un nuevo paso de la acumulación.

Antecedentes de la economía verde

La trayectoria que nos ha llevado a una apuesta global en la economía verde es un proceso que se viene plasmando a lo largo de las últimas décadas. La incorporación concertada de los principales mecanismos y premisas de la economía verde en la agenda programática de los actores hegemónicos, es más reciente. Está íntimamente relacionada con la centralidad que el debate y las negociaciones sobre el tema clima alcanzaron en la agenda política internacional en los últimos tiempos, así como todo lo que conlleva los imaginarios de lo que sería un mundo de “bajo consumo de carbono” y los mecanismos para la descarbonización de la economía. De hecho, las políticas y leyes que combaten el cambio climático,

así como la discusión sobre financiación para el clima y sus instrumentos y fondos, constituyen una plataforma estructural donde están anclados mecanismos centrales a la economía verde.

En 2005, Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, en su papel de anfitrión de la reunión del G8, en Escocia, invitó a los principales países emergentes a la reunión del grupo. Tuvo la expectativa de que esto contribuiría a formar un grupo más representativo, que inyecte ímpetu renovado a la ronda de Doha sobre las negociaciones de comercio (OMC), y logre una mayor cooperación sobre el tema de cambio climático. Al final de este encuentro, los países del grupo G8+5 emitieron un comunicado conjunto, en el camino de construir “un nuevo paradigma para la cooperación internacional en el futuro”. Como resultado del G8+5, *Climate Change Dialogue* (Diálogo sobre el cambio climático), se organizó una reunión en el año siguiente, en febrero de 2007, en Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Allí, los países se comprometieron en un acuerdo no vinculante para cooperar con el cambio climático.³³ Fue en este encuentro y contexto que se lanzó la idea para una *Green Economy Initiative* (Iniciativa para la economía verde) de las Naciones Unidas, con financiación de la Unión Europea, Alemania y Noruega. Es en el ámbito de esta Iniciativa, que se produjo la propuesta para un *Global Green New Deal* (Nuevo acuerdo verde global), cuyo trabajo estuvo encabezado por el PNUMA y lanzado en medio de la crisis financiera de 2008.

La economía del cambio climático: pionero de la nueva lógica

A finales de octubre de 2006, se divulgó, con gran impacto mediático, el *Stern Review on the Economics of Climate Change*.³⁴ El

33 Ver en <<http://en.wikipedia.org/wiki/G8%2B5>>

34 Ver en <http://www.direct.gov.uk/en/N11/Newsroom/DG_064854>

Informe Stern: la economía del cambio climático fue un divisor de aguas y elemento central en la consolidación de la economía verde, como respuesta hegemónica y programática del capitalismo, teniendo en cuenta un salto a una nueva etapa de acumulación.

El Informe logró traducir en términos económicos los costos –pero también las oportunidades de negocios y ganancias– del cambio climático, y transformó la cuestión ambiental/climática en un caso económico serio. Según sus cálculos, la falta de acción y la manutención de los actuales patrones de emisiones podrían tener como costo una reducción de aproximadamente 5% de PIB mundial, y llegar a 20% de reducción del PIB, en el peor escenario. Los gastos para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero equivaldrían a 1% del PIB (Producto Interno Bruto) mundial al año, hasta el 2050.³⁵

Según el Informe Stern, los beneficios de una actuación rápida son considerablemente superiores a los costos. En valores de entonces (2006), el estudio encontró, entre sus principales conclusiones, que: cada tonelada de CO₂ que emitimos provoca daños de un valor de al menos US\$ 85, pero las emisiones pueden ser reducidas con un costo menor a US\$ 25 por tonelada. De cambiar el mundo hacia un bajo contenido de carbono podría, eventualmente, beneficiar la economía en hasta US\$ 2,5 trillones por año. Hasta el año 2050, los mercados de tecnologías de bajo consumo de carbono podrán valer por lo menos US\$ 500 billones. Basado en estas razones económicas, el Informe llamaba a una acción rápida: “lo que hiciéramos ahora puede tener un efecto limitado sobre el clima durante los próximos 40 o 50 años; pero lo que hagamos en los próximos 10 a 20 años podrá tener un efecto profundo sobre el clima en la segunda mitad de este siglo”.

35 Considerando que en ocasión del lanzamiento del informe, el parámetro fue estabilizar las emisiones bajo los 550 ppm (partes por millón de CO₂ en la atmósfera).

Sus principales recomendaciones fueron tres: poner precio al carbono (*carbon pricing*), políticas tecnológicas y eficiencia energética. El precio al carbono, más impuestos, el comercio de emisiones o regulación, mostraría a la gente el “verdadero costo” de sus acciones. El objetivo integrado debe ser un precio global al carbono, transversal a todos los países y sectores de la economía; esquemas de comercio de emisiones, como aquel que opera para toda la Unión Europea, expandidos y vinculados. Las políticas tecnológicas deben conducir al desarrollo y uso, en larga escala, de una variedad de productos de bajo consumo de carbono y alta eficiencia; normas o estándares internacionales pueden ser introducidos para clasificar estos productos. El cambio climático debe ser plenamente integrado a la política de desarrollo, y los países ricos deben honrar sus promesas para aumentar el apoyo, vía ayuda al desarrollo (*overseas development assistance*).³⁶

Se han formulado muchas críticas al informe; por ejemplo, sus recomendaciones técnicas, en cuanto al beneficio económico de inversión y adopción de tecnologías de bajo consumo de carbono, como se definían los agrocombustibles, han servido como detonador fundamental del *boom* de acaparamiento de tierras que le siguió, con obvias consecuencias de especulación, desalojos, expansión de los monocultivos, hambrunas, etc.

Pero tal vez la mayor crítica que se hace al Informe Stern es la forma lacónica en que cristaliza la mentalidad de su tiempo; una mentalidad moldeada por la cultura consumista. En la ocasión de su lanzamiento en Londres, en el segundo semestre de 2006, su autor principal, sir Nicholas Stern (miembro de la nobleza británica, su título es de barón Stern de Brentford y exvicepresidente del Banco Mundial),³⁷ declaró:

36 En <<http://www.guardian.co.uk/politics/2006/oct/30/economy.uk>>

37 En <http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Stern>

El cambio climático es resultado de la mayor falla del mercado que el mundo ha visto. La evidencia de la seriedad de los riesgos de la inacción o acción en retraso es hoy abrumadora [...] El problema del cambio climático involucra una falla fundamental de los mercados: *aquellos que causan daño a otros emitiendo gases de efecto invernadero en general no pagan por eso.*³⁸

¿Pero, el principio de que el que contamina paga no conlleva también la lógica de que aquel que puede pagar puede, entonces, también contaminar? ¿Hay algo como un “derecho a contaminar” que puede ser comprado?

A esta idea corresponde la creciente introducción de mecanismos de flexibilización, que permiten a los individuos cumplir con la norma (ley), sin la necesidad de los instrumentos clásicos de sanción. Bajo esta lógica, las políticas ambientales y climáticas ya no se basan en derechos humanos y colectivos, sino que consideran a los ciudadanos, ante todo, como consumidores, y el derecho a contaminar y degradar el ambiente como una mercancía más. Así, el tema de los derechos pasa a ser una nueva rama de provisión de “servicios” a cargo del mercado.

¿“Descarbonizar” o reciclar el desarrollo y el crecimiento?

Los retos y oportunidades para una economía de bajo consumo de carbono, en un mundo con recursos cada vez más escasos, ha sido un tema importante para agencias multilaterales y gobiernos, inclusive para “definir nuevas rutas y estrategias de bajo carbono

38 *“Climate change is a result of the greatest market failure the world has seen. The evidence on the seriousness of the risks from inaction or delayed action is now overwhelming... The problem of climate change involves a fundamental failure of markets: those who damage others by emitting greenhouse gases generally do not pay [...]”*. En <http://www.guardian.co.uk/environment/2007/nov/29/climatechange.carbonemissions>

para el desarrollo”.³⁹ El Banco Mundial, como su historia testifica, no es un actor legítimo para conducir o intermediar la transición necesaria de un modelo de sociedad a otro. Sin embargo, apoyó, por ejemplo, en 2008, a través de ESMAP (*Energy sector management assistant program*), “estudios de caso para el desarrollo de bajo consumo de carbono” para Brasil, India, Indonesia, México, Polonia y Sud África.⁴⁰ Las lecciones aprendidas fueron sistematizadas como un hoja de ruta para el “crecimiento del bajo consumo de carbono”, destinada a apoyar las estrategias nacionales y la construcción de las políticas nacionales sobre el clima.⁴¹ Como consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior, el Banco Mundial, junto con universidades e instituciones brasileñas, elaboró para el Brasil, un “plan de desarrollo de bajo consumo de carbono”.⁴²

El estudio del Banco Mundial refuerza el discurso que trata de las “oportunidades de negocios” del cambio climático, y pasa de un “escenario de referencia” (las tendencias de la actual economía marrón, basado en la proyección de las medias y tendencias históricas) a otro, identificado como de “bajo consumo de carbono”, sin que con eso realmente cuestione los temas estructurales.⁴³

39 UNEP/UNDP. *Charting A New Low-Carbon Rout to Development*. 2009. En http://www.undp.org/eu/documents/Charting_carbon_route_web_final.pdf

40 En <http://www.esmap.org/esmap/LowCarbonDevelopmentStudies>

41 En http://www.esmap.org/filez/pubs/63200985854_529200911857_FINAL_LCCS-bro_lowres.pdf

42 Banco Mundial. *World Bank Low-Carbon Development Plans. Brasil*, 2010. En http://siteresources.worldbank.org/BRAZILEXTN/Resources/Brazil_LowcarbonStudy.pdf

43 Comparando estos “escenarios” producidos a través del modelaje de datos, el estudio ofrece cantidad de gráficos y curvas de costo, que permiten comparar las “opciones de bajo carbono” frente a la proyección de las líneas históricas de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) –una forma de contabilizar y expresar el consumo (y dependencia) de energía fósil en cada país y en su economía actual–, que se traducen en los “escenarios de referencia” (*business as usual*).

El patrón actual de desarrollo de la economía “marrón”, extrapolado en los escenarios imaginados de tendencias, es decir, la expansión continuada del crecimiento económico y consumo de recursos que fundamentan un futuro especulativo, es la base con la que se compara la opción verde o de bajo consumo de carbono. Frente a eso, todo lo que hipotéticamente es reducido o evitado en la trayectoria de crecimiento asumida como inexorable del desarrollo, y sin considerar sus limitaciones físicas y ecosistémicas, se convierte en un “crédito”. Este crédito, a través de mecanismos y políticas para valorar y traer los activos ambientales a los mercados, a su vez, se convierte en un potencial título financiero para capitalizar los Estados nacionales y conseguir inversiones destinadas a financiar el mismo desarrollo.

Contra las dinámicas instaladas (como el agronegocio, la ganadería, etc., que el estudio no cuestiona), y los escenarios hipotéticos de tendencias, se presentan las ventajas de cambio de trayectoria hacia “tecnologías de bajo consumo de carbono”; un paquete que incluye, entre otros, las opciones de “reducir emisiones” vía mecanismos de mercado. Uno de ellos es el MDL, que a través de sus proyectos, como represas para hidroeléctricas, captura de gases metano de basureros, producción de biocombustibles, parques de energía eólica, etc., genera créditos de carbono válidos frente a las Naciones Unidas, para que los países del norte cumplan con sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Otro mecanismo es el REDD+, que genera créditos de este carbono reducido/secuestrado o que se evitó emitir. El paquete en mención integra, asimismo, tecnologías y servicios de bajo consumo de carbono, y sus oportunidades de proyectos y ganancias. En esto, se incluyen agrocombustibles (como el etanol y biodiesel), semillas modificadas para resistir mejor al cambio climático (climáticamente inteligentes/*climate smart*), plásticos “verdes” e incremento de fuentes energéticas renovables, como biomasa, etc.

¿“Descarbonizar” o despolitizar?

Una crítica estructural que se nos presenta es: ¿“estrategia” de bajo consumo de carbono, para quién? Bajo la métrica del carbono, la reducción de la realidad a una única narrativa hace invisibles los conflictos de intereses, los juegos de poder, las ideologías y las contradicciones de la realidad, así como los sujetos individuales y colectivos, la violencia estructural y la injusticia. La despolitización de este debate, operada por su reducción a la idea del “manejo” del carbono y sus opciones tecnológicas, tiene que ver con la forma en la cual, como señala Larry Lohmann (2008), “todos los problemas sociales y políticos que se derivan de los cambios climáticos (que se puede privatizar y poseer la atmósfera, como es el caso con el mercado de carbono, por ejemplo) han sido eclipsados por el lenguaje económico neoclásico”. A eso se suma el fetiche del convencimiento a partir de lo supuestamente “científico”, inmune frente a lo “ideológico”, que privilegia la presentación de datos “objetivos” que generan impacto visual y gráfico; un rasgo característico de la cultura política actual, en detrimento de lo político y de la argumentación crítica.

Adicionalmente, en procesos de formulación de directivas y leyes, los estudios y estrategias de bajo consumo de carbono se convierten en una especie de “plan de negocios país”, con bancos y consultoras que asesoran a los gobiernos como si éstos fuesen empresas.⁴⁴

El proyecto Catalyst, en este sentido, está asesorando a países como México, Indonesia y otros, para elaborar los planos de crecimiento de bajo consumo de carbono; en 2010, colaboró en la creación del Global Green Growth Institute, para apoyar a los

44 Ver McKinsey. *Estudio de Caso: Brasil*, 2010. En <www.mckinsey.com.br/sao_paulo/carbono.pdf>

países y gobiernos a elaborar sus estrategias nacionales de “crecimiento de bajo consumo de carbono”.⁴⁵

En esta línea, la firma de consultoría internacional McKinsey también ha jugado un papel importante al producir diversas guías (*Pathways*) de bajo consumo de carbono y proponer planes de transición para los países ricos en recursos forestales.⁴⁶ Sus estudios y curvas de costo, principal herramienta para apoyar la decisión sobre adopción (o no) del mecanismo de REDD+, fueron criticados por la (mala) influencia que tuvieron –y siguen teniendo– en la formulación de políticas en el ámbito nacional y provincial, en países como Indonesia, Guyana, Papúa Nueva Guinea y República Democrática del Congo, entre otros.⁴⁷ Por presentar escenarios siempre positivos, *win-win*, irrealistas, y que modelan oportunidades de inversiones y ganancias para convencer a la adopción de los mecanismos de mercado que se busca promocionar, sin tomar en cuenta los verdaderos costos de cambiar patrones de deforestación, los planes de asesoría de esta

45 El Project Catalyst define su misión como la reunión de “los expertos líderes de todas las partes del mundo para producir soporte analítico que ayude a definir un acuerdo climático internacional post Kyoto de éxito”. En <http://www.project-catalyst.info/focus-areas/low-carbon-growth-planning.html>; <http://www.project-catalyst.info/about-us/mission-statement.html>; <http://www.project-catalyst.info/about-us/project-catalyst-is-and-isnt.html>

46 http://www.mckinsey.com/en/Client_Service/Sustainability/Latest_thinking/Pathways_to_a_low_carbon_economy.aspx; El World Resources Institute ha producido estudios de caso para el “desarrollo de bajo carbono” para los países emergentes (Brasil, India, China, Indonesia y África del Sur), en <http://www.wri.org/project/low-carbon-development/>

47 Greenpeace. *Bad Influence: How McKinsey-inspired plans lead to rainforest destruction*. 2011. En <http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Bad-Influence/>.

empresa han sido criticados por promover la deforestación y la destrucción de los bosques.⁴⁸

Teniendo en cuenta que más o menos “carbono” es, en lenguaje corriente, la cuantificación y el control del contenido de energía y la relación con el recurso tras el cual esta energía es generada (fósil o “renovable”), en un horizonte más amplio, la economía verde nos da pistas de cuál es la transición que la civilización petrolera –y el capitalismo– tiene planificada para garantizar su reproducción.

De hecho, los desafíos y oportunidades para una economía de bajo consumo de carbono, en un mundo de recursos cada vez más escasos, es también objeto de reflexión de corporaciones emblemáticas de la economía actual, como la Shell (Scramble and Blueprints, y Signals & Signposts),⁴⁹ así como grandes coaliciones del sector empresarial, como el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (Visión 2050).⁵⁰ En estos informes, es común la consideración de 2050 como un horizonte de transición global en relación con los recursos fósiles, así como el año 2020, como una fecha marco para tener lista la arquitectura institucional que viabilice esta “transición”.⁵¹

Un giro discursivo determinante: de las políticas climáticas “negativas” a la economía verde “positiva”

A lo largo de los últimos años, el tema del cambio climático logró asumir un papel central en la agenda internacional. Éste, así como

48 Nathaniel Dyer y Simon Counsell. *McREDD: How McKinsey 'cost-curves' are distorting REDD*. UK, Rainforest Foundation, 2010. En <<http://rainforestfoundationuk.org/McREDD>>

49 Shell. 2011. En <http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/shell_global_scenarios/signals_signposts/>

50 Ver <<http://www.wbcsd.org/vision2050.aspx>>

51 Ver también guía para la descarbonización del sector de energía en la Unión Europea, en <<http://www.roadmap2050.eu/>>

la lucha contra el calentamiento global y la “justicia climática”, han sido incorporados en las agendas, discursos y movilizaciones de la sociedad civil global. Este proceso tuvo su momento cumbre en la Conferencia de Copenhague, en diciembre de 2009 (COP 15 de la UNFCCC, por su sigla en inglés),⁵² donde fracasaron las expectativas de concretar un acuerdo legalmente vinculante para frenar el cambio climático. De ahí en adelante, las negociaciones no avanzaron substancialmente para un nuevo acuerdo, y lo más reciente es un indicativo de elaboración de un nuevo acuerdo global hasta el 2015, para que entre en vigor a partir de 2020.⁵³

La capacidad movilizadora y mediática que tuvo la lucha para “salvar el clima”, tanto en la política cuanto en la opinión pública en el último período, decayó significativamente tras la crisis financiera, así como las expectativas de que los gobiernos, en un contexto de austeridad y recesión en las economías del Norte –las más afectadas por la crisis– adoptasen medidas para reducir la actividad económica, frenar o sobretasar el consumo energético, frente al imperativo político (y electoral) de mantener empleos y estimular el crecimiento. A su turno, los países emergentes del Sur, con tasas de crecimiento logradas, sobre todo, por la demanda extractiva y la oferta de expansión de energía (lo que también significa más emisiones y responsabilidades), no estaban de acuerdo con medidas que podrían contener o desacelerar la entrada de sus economías en el rango del primer grupo de los países.⁵⁴

52 COP 15 UNFCCC (5a Conferencia de las Partes de la *Convención Cuadro de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático*). En <http://unfccc.int/2860.php>

53 En http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/decisions.php

54 La China es hoy la segunda economía mundial y sobrepasa al Japón; Brasil ha sobrepasado a la de Inglaterra y ya es la sexta economía del mundo.

Es sintomático el cambio que sobrevino. El término, hasta entonces muy utilizado y diseminado, que se refería al proceso de transición como ir hacia una economía de bajo consumo de carbono, desarrollo de bajo consumo de carbono y hasta crecimiento de bajo consumo de carbono,⁵⁵ pasó a ser permanentemente remplazado, en los mismos contextos y por los mismos actores, por el término economía verde. Un giro aparentemente discursivo, pero determinante para la consolidación de la hegemonía.

Frente a la desmovilización de la opinión pública, superado el momento de ímpetu internacional en la lucha para salvar el clima, y ante la realidad ineludible de la crisis económica, los escenarios de bajo consumo del carbono y el reto imperativo de descarbonizar las economías evocaban el deshacer, disminuir, reducir, evitar, ideas no muy apelativas en tiempos de lucha contra la estagnación del crecimiento.

Allí es cuando las mismas propuestas se ven rápidamente incorporadas hacia una nueva agenda de convergencias y esfuerzos conjuntos, esta vez por la economía verde —un término amplio y abarcador, que se presenta bajo una aura positiva y de implementación—. De hecho, la principal metamorfosis ocurre cuando, de una manera más efectiva que el término “bajo consumo de carbono”, el lema “economía verde” parece capturar mejor las sensibilidades ecológicas de la sociedad y de los consumidores. Resulta mucho más plausible cuando, además, se conjuga el término “crecimiento verde”, que suena bastante mejor y más convincente que el “crecimiento de bajo consumo de car-

En <http://www.bbc.co.uk/news/business-17272716>; y, además, en <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/brasil-cresce-2-7-em-2011-e-se-consolida-como-6a-economia-mundial>

55 En <http://blogs.worldbank.org/climatechange/low-carbon-growth-only-sustainable-way-overcome-world-poverty>

bono” (que siguen siendo los términos utilizados en un lenguaje más “técnico”).

De la economía verde o cómo corregir una falla del mercado

El informe *Hacia una economía verde: guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza* (PNUMA, 2011), basado en los capítulos de trabajo del *Green Economy Report* (GER), el principal producto de la *Iniciativa de las Naciones Unidas para la economía verde*, fue lanzado como “Una hoja de ruta para la Río+20 y mas allá”. Fue el principal documento para la agenda de la Cumbre Río+20. La guía intenta una definición de trabajo para la economía verde, uno de los ejes centrales de la Río+20:

El PNUMA considera que una economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En su forma más básica, una economía verde sería aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente.

En este intento de circunscribir “en su forma más básica” lo que sería la economía verde, la formulación incorpora la centralidad que la métrica o “medición del carbono” ha jugado en las políticas climáticas: la referencia a las toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono (1 tCO_{2e} = a 1 unidad de reducción certificada de emisiones, o = a 1 “crédito de carbono”) como medida “objetiva” del logro (o no) de sus metas de bajar las emisiones, en relación con la economía marrón, y refrenda la descarbonización, como una dinámica estructural para “enverdecer” la economía.

En una economía verde, el aumento de los ingresos y la creación de empleos deben derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de carbono y la contaminación, a promover la eficiencia energética así como en el uso de los recursos, y a evitar la pérdida de diversidad

biológica y de servicios de los ecosistemas. *Dichas inversiones han de catalizarse y respaldarse con gasto público selectivo, reformas políticas y cambios en la regulación.* El camino hacia el desarrollo debe mantener, mejorar y, donde es necesario, reconstruir *el capital natural como activo económico fundamental* y fuente de beneficios públicos, especialmente para las personas desfavorecidas cuyo sustento y seguridad dependen de la Naturaleza.⁵⁶

¿Pero cómo podrán las medidas económicas producir una transformación social de esta magnitud? Según el PNUMA, aún “el concepto de ‘economía verde’ no sustituye al de ‘desarrollo sostenible’, pero hay un creciente reconocimiento de que el logro de la sostenibilidad requiere casi indispensablemente contar con una economía adecuada y correcta” (en la versión en inglés, *rests almost entirely in getting the economy right*).⁵⁷

Esta convicción de que hay una manera más “actualizada” de abordar el desarrollo sostenible y que reposa en la centralidad de eficientes mecanismos económicos (reduciendo la complejidad y la complementariedad de los tres pilares que originalmente conformaban el concepto, creado por la propia ONU), transforma la cuestión en meramente “contar con una economía adecuada y correcta”, sin entrar en temas considerados “ideológicos” o “políticos”, como si la economía fuera una ciencia objetiva.

La crisis ambiental, desde esta perspectiva, no sería una cuestión de la política—inextricablemente dependiente de las relaciones de poder que garanticen los regímenes de propiedad, acceso, uso y gestión de los recursos y territorios—, pero sí, en esencia, una falla del mercado; luego, una falla del mercado debe ser

56 PNUMA. *Hacia una economía verde: guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza*, 2011, p. 2. (Las cursivas son mías.) En <http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx>

57 Ibid.

corregida por una solución de mercado: incorporar e internalizar los costos de las externalidades, poner un precio a la contaminación, revertir subsidios perversos, apalancar inversiones (y ganancias) privadas con soporte y garantía de políticas públicas, aportar incentivos positivos (pagos/exenciones fiscales), promoción de inversiones en tecnologías apropiadas, “más limpias”, etc. El informe ha sido justamente criticado, por la ausencia absoluta de toda consideración del significado de las extraordinariamente desiguales relaciones de poder existentes en el mundo contemporáneo, y los intereses que están en juego en la operación de este sistema mundo. Habla el informe reiteradamente de políticas, pero nunca de política, nunca del poder.⁵⁸

En cuanto a lo que estamos analizando, que es una “economía adecuada y correcta”, el PNUMA, según el mismo informe, cree que para moverse hacia un “nuevo” paradigma económico, la principal acción debería ser tener 2% (dos por ciento) del PIB mundial, canalizado para financiar la transición desde diez sectores claves de la actual economía marrón: agricultura, energía, construcción, agua, bosques, recursos pesqueros, manufacturas, residuos/basura, turismo y transporte. Según los cálculos del informe, esta única medida podría proveer US\$ 1,3 trillón al año, para invertir en sectores estratégicos y conducirnos a la transición; mientras el 98% restante del PIB continuaría dependiente de la economía marrón-fósil.

La economía verde no es presentada como algo incompatible con la manutención o, hasta, la aceleración del crecimiento según los parámetros actuales. De acuerdo con esta lógica verde, cuanto más crece la economía marrón, más fondos estarían (hipotéticamente) disponibles para enverdecerla. A eso se podría argumen-

58 Una crítica detallada del informe del PNUMA, en Edgardo Lander, *La economía verde: el lobo se viste con piel de cordero*. TNI, 2011. En <http://www.tni.org/es/report/la-economia-verde-el-lobo-se-viste-con-piel-de-cordero>.

tar en la dirección opuesta: que cuanto más degradación ambiental y escasez de recursos hay, más valiosos (y caros en el mercado) estarán los títulos de cobertura boscosa, las compensaciones de biodiversidad, permisos de agua, los créditos de carbono, etc.

Las principales ideas detrás de estas propuestas, que hoy se presentan bajo el aura de novedad de la economía verde, no son enteramente nuevas; pero sí son consecuencia de intentos anteriores que, desde finales de los setenta, y en especial de los años neoliberales de los ochenta y noventa, vienen consolidando un campo de ideas y teorización, que tomó forma y nombre de “economía ambiental” o “economía ecológica”. ¿Cuál sería entonces el rasgo distintivo de la economía verde?

De la era del capital mal distribuido hacia la era del capital natural

El sistema económico actual es definido por el PNUMA como una *Era of Capital Misallocation* (Era del capital mal distribuido), en donde hemos “permitido” que los negocios sigan bajo “externalidades ambientales y sociales significativas, ampliamente no contabilizadas y no verificadas”; frente a eso, la idea de poner un precio a la contaminación (y al carbono, las compensaciones, permisos de agua, la biodiversidad, servicios ambientales, etc.) es presentada como un engranaje central para seguir adelante, “para traer los cambios en los patrones de inversión privada y lograr historias de éxito, especialmente en los países en desarrollo” (UNEP, 2011: 2).

Como ejemplo de esta valoración de las externalidades (costo de las emisiones resultantes de la deforestación y los créditos por evitarla o reducirla), la guía del PNUMA apunta al mecanismo de REDD+, que aún aguarda reglamentación definitiva bajo las negociaciones de la Convención del Clima, como el “régimen de REDD+”, pues quizás es “tal vez la mejor oportunidad en la

actualidad para facilitar la transición a la economía verde para el sector [global] de bosques” (Ibíd: 7).

Así como la contabilización de las externalidades sociales y ambientales es un engranaje central para seguir adelante en la economía verde, la creación de nuevos activos económicos es estructural.

Entre la constelación de temas que nos estarían llevando hacia una economía verde, está la incorporación de una nueva medición de la riqueza de los países, a través del “PIB verde”, que sería la cuantificación y contabilización de los llamados “activos ambientales” (como se definen el carbono, la biodiversidad, el agua, etc.). El carbono ya es un activo negociado bajo mecanismos internacionales, como el MDL, y en los mercados voluntarios ya están en desarrollo nuevos mecanismos que incorporen otros activos verdes. Estos activos, comercializados como los nuevos títulos verdes son de interés, por ejemplo, para los bancos y empresas, que necesitan cada vez más de titularización (o securitización) ambiental de sus emprendimientos e inversiones.

Los mercados de carbono (y un precio global al carbono) figuran como la principal apuesta de los gobiernos y de las macropolíticas de combate al cambio climático, así como la espina dorsal de las propuestas para una economía verde o de bajo consumo de carbono. El carbono, este nuevo *commodity* global –y el más emblemático de este momento de la acumulación, que apunta a los bienes y servicios intangibles–, ha reunido, desde su creación oficial en 2005 (cuando entra en operación el esquema de comercio de emisiones de la Unión Europea), un valor global de US\$ 142 billones de dólares (cifras de 2011, referentes al año 2010).⁵⁹ Este valor es obtenido del comercio de más de 7 billones de toneladas de CO₂, representadas en las *Certified Emission Reduction*

59 <http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/StateAndTrend_LowRes.pdf>

(CER o reducción certificada de emisiones), el principal título de la economía financiera del carbono. La falta de claridad sobre el marco regulatorio para el período post 2012 (cuando expira el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, que debe ser remplazado por un nuevo acuerdo global hasta 2015), es actualmente la principal traba para su expansión.⁶⁰

Las CER son el primer ejemplo de cómo se estructura la financiación y el comercio de los llamados activos ambientales. Su principal característica es la fungibilidad: en sí, una CER es un título negociable en el mercado financiero que representa la reducción de emisiones de 1 tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e).⁶¹

En el proceso de construcción del PIB verde, estos nuevos activos son paulatinamente transformados en una clase de variables macroeconómicas, como ya está ocurriendo con los inventarios de carbono y la incorporación de sus “stocks” en las cuentas nacionales. Se argumenta, por ejemplo, que la transformación del carbono en un indicador macroeconómico permitiría una apreciación o valoración “más verdadera” del nivel “real” de la economía y de la viabilidad del crecimiento en renta y empleo para los países.

Con el objetivo de “hacer para la biodiversidad lo mismo que el Informe Stern había hecho para el clima”, “hacer visible el valor de los servicios de la Naturaleza” y con eso, “influenciar negocios y decisiones adoptados por los países”, nace la encomienda para la elaboración del estudio *The Economics of Ecosystems and Biodiversity* (*La economía de los ecosistemas y de la biodiversidad*),

60 En función de eso, los precios de las CER cayeron cerca de 70%, a lo largo del último año, y alcanzaron su menor precio histórico (US\$ 3 por tonelada). En <http://www.reuters.com/article/2012/07/30/carbon-market-idUSL6E8IU8Q820120730>

61 En http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_equivalent

conocido por su sigla TEEB, una pieza clave de la arquitectura de la economía verde.⁶² El pedido para la realización del estudio surgió de la reunión del G8+5, en 2007, y fue coordinado por el economista hindú Pavan Sukdev, exdirector de Banco Mundial y, a la época, director de la división de nuevos mercados del Deutsche Bank (el Banco Alemán). Sukdev, en su año sabático, coordinó el estudio desde el PNUMA y con la legitimidad de la ONU.

El TEEB calculó que la destrucción de los activos de la Naturaleza, como bosques y humedales, entre otros, causa pérdidas anuales de por lo menos US\$ 2,5 trillones en el mundo; y que los costos para proteger la biodiversidad y los ecosistemas son más bajos que el costo de dejar que ellos disminuyan. Así se demostró el valor económico de bosques, agua, suelo y corales (entre otros), como también el costo ocasionado por la pérdida de estos recursos.

Uno de los principales logros del TEEB es que introduce metodologías de cálculo y una métrica para referencia internacional, con varias categorías de servicios ambientales, con capítulos distintos para cada uno de los diferentes sectores de la sociedad (diseñadores de políticas, sector de negocios, sociedad civil, gobiernos locales, etc.). Su objetivo general consiste en conocer el valor económico de lo que implica la pérdida de biodiversidad, como del retorno de inversiones por cuenta de la conservación de la biodiversidad.

El TEEB fue recibido oficialmente por los países, en el marco de la 10 COP de la Convención de Biodiversidad, realizada en octubre de 2010, en Nagoya, Japón. Hoy es la principal referencia internacional para subsidiar a los países que están estimando el valor de la Naturaleza y la adopción de políticas públicas de valoración del capital natural.

62 En <www.teebweb.org>

Este movimiento estructural, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, es indicativo del proceso a través del cual, concretamente, se está promoviendo la incorporación del “capital natural”; concepto central en este momento de la acumulación. En el lanzamiento del TEEB, el líder del proyecto, Pavan Sukdev, expresó: “estamos viviendo del capital de la Tierra, precisamos aprender a vivir de las ganancias”.

El Banco Mundial lanzó, el primer semestre de 2012, el informe *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development* (*Crecimiento verde inclusivo: El camino hacia un desarrollo sostenible*). El documento es presentado como un “marco analítico que tiene en cuenta las limitaciones del sistema marino, terrestre y atmosférico en planes para el crecimiento económico necesarios para seguir reduciendo la pobreza”, que pretende “desmitificar la concepción de que el crecimiento verde es un lujo que la mayoría de los países no se puede dar”, y cuyos principales obstáculos serían “las barreras políticas, los comportamientos muy arraigados y la falta de instrumentos financieros adecuados”. El crecimiento “verde e inclusivo”, a la moda Banco Mundial, se presenta como un incentivo a los gobiernos para “cambiar su enfoque en materia de políticas de crecimiento para una mejor medición no solo de lo que se está produciendo, sino también lo que se está consumiendo y contaminando en el proceso”; así, incluye las externalidades en el cómputo general del cálculo económico. Para este fin, según el Banco, es menester “asignar valor a las tierras de cultivo, los minerales, los ríos, los océanos, los bosques y la biodiversidad, y otorgar derechos de propiedad”, lo que “brindará a los Gobiernos, a la industria y a las personas suficientes incentivos para gestionarlos de una manera eficiente, inclusiva y sostenible”.⁶³

63 En la traducción oficial al español y francés del comunicado de prensa del Banco Mundial sobre esta publicación, el término verde (green) está tradu-

La economía verde como narrativa unificadora del capital financiero

El rasgo distintivo de la narrativa unificadora de la economía verde es la instauración del concepto de capital natural, que constituye hoy una demanda central del capital financiero y, en gran medida, la condición para la reproducción de este. Bajo el concepto estructurante de capital natural, activos antes invisibles en la economía tradicional, tal como los servicios ambientales (donde se incluyen carbono, biodiversidad, agua, y otros), son adecuados, medidos y valorados para su negociación en los mercados. En un momento en el que la economía mundial es absolutamente dependiente y controlada por el capital financiero, y con el mismo capital financiero en crisis, la creación e introducción de nuevos activos en el mercado financiero, a través de la expansión de la financiación, es la principal estrategia de apalancamiento de la economía verde.

La naturalización del capital natural como una realidad económica –pero también social, cultural y política– conlleva un nuevo momento de acumulación primitiva, con el *enclosure* o aislamiento de estos activos ambientales, al crear exclusión (separar componentes indivisibles de la biodiversidad y de los ecosistemas) y al asegurar que lo que antes era un bien común, pueda ser transformado en propiedad privada.⁶⁴ ¿Pero cómo privatizar y poseer el aire?

cido como ‘ecológico’. En <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSPANISH/0,,contentMDK:23190905~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html>.

64 Terra de Direitos. *Pagamento por Serviços Ambientais e Flexibilização do Código Florestal para um Capitalismo “Verde”*. 2011. En http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2011/08/Analise-PSA-CODIGO-Florestal-e-TEEB-_Terra-de-direitos.pdf; *Biodiversidade à venda?* En http://br.boell.org/downloads/pdf_teeb_final_05-12.pdf

Para eso, son necesarios mecanismos que vinculen los recursos naturales y los bienes comunes –en adelante llamados activos ambientales– a los mercados y a su lógica. Estos son cuantificados, monetizados y transformados en títulos o papeles verdes (como los créditos de carbono). Para que tengan un referente de su valor real, estos papeles verdes necesitan garantizar su seguridad jurídica; es decir, estos títulos deben representar nuevos derechos reales de propiedad privada.

Así ya está ocurriendo, por ejemplo, con los “derechos al carbono” (*carbon rights*), que se expresan bajo nuevas formas de control (como las metodologías para “medir/cuantificar, reportar y verificar” las existencias de carbono) y se regula mediante contratos el acceso y el manejo en los territorios donde estos “activos” efectivamente están –por ejemplo, un bosque, bajo un contrato de pago servicios ambientales o de REDD+–.

Para que esta clase de activos constituya capital natural, es necesario identificar los bienes y servicios ambientales –como se denominan bajo esta lógica el agua, la biodiversidad y el carbono, así como la belleza escénica, la polinización, etc.–, y el “valor” que tienen en el funcionamiento de los ecosistemas. Estas funciones ecológicas son clasificadas y divididas como “servicios”, según las categorías propuestas por el estudio TEEB, referido anteriormente: a) servicios de provisión, que incluye bienes ambientales, como agua, maderas, fibras; b) servicios de regulación, que incluye regulación del clima, de vectores de enfermedades, regulación del suelo, entre otros; c) servicios culturales y/o espirituales, que dependen de las percepciones colectivas de los humanos acerca de los ecosistemas y de sus componentes; y, d) servicios de sustento o soporte, que son procesos ecológicos que aseguran el funcionamiento adecuado de los ecosistemas; por ejemplo, la fotosíntesis.

El valor económico global de la actividad de polinización de los insectos fue estimado por el Instituto Nacional de Investi-

gación Agrícola (INNRA), de Francia, en 153 billones de euros anuales, lo que correspondería a 9,5% del PIB agrícola mundial para alimentación humana, relativo a los precios de los *commodities* agrícolas de 2005 (N. Gallai, J-M. Salles, 2008). El estudio cuantificó el impacto para los consumidores, en términos de la disminución de la producción y el aumento de los precios de los alimentos. Al mismo tiempo que este tipo de cálculo pretende reforzar los argumentos demostrativos del valor invisible de la biodiversidad (actividad de los insectos en la polinización y cuánto eso significa para la agricultura), una externalidad no contabilizada en el cálculo económico actual, lo hace traduciendo el valor en un precio, que (aún hipotéticamente) tiene como referencia un mercado, como la disposición de pagar para conservar este servicio que los insectos hacen “gratis”.

Los activos ambientales que conforman el capital natural, como el carbono, el agua y la biodiversidad, son como el lastre que garantizará este nuevo paso de acumulación, en el cual su incorporación en la contabilización de valor y riqueza de los países es un proceso ya en curso. Las experiencias locales y nacionales que desarrollan y amplían esta nueva frontera de la lógica de la mercancía, así como la perspectiva de constitución de un mercado global para estos “servicios”, ilustra en términos actuales la elasticidad y capacidad de acaparamiento y apropiación de las fuerzas productivas, que mueve la acumulación descrita por Rosa Luxemburg (1913:173):

La producción capitalista ha estado calculada, en cuanto a sus formas de movimiento y leyes, desde el principio, sobre la base de la Tierra entera como almacén de fuerzas productivas. En su impulso hacia la apropiación de fuerzas productivas para fines de explotación, el capital recorre el mundo entero; saca medios de producción de todos los rincones de la Tierra; cogiéndolos o adquiriéndolos de todos los grados de cultura y formas sociales. La cuestión acerca de los elemen-

tos materiales de la acumulación del capital, lejos de hallarse resuelta por la forma material de la plusvalía, producida en forma capitalista, se transforma en otra cuestión: para utilizar productivamente la plusvalía realizada, es menester que el capital progresivo disponga cada vez en mayor grado de la Tierra entera para poder hacer una selección cuantitativa y cualitativamente ilimitada de sus medios de producción. La apropiación súbita de nuevos territorios de materias primas en cantidad ilimitada, para hacer frente, así, a todas las alternativas e interrupciones eventuales de su importación de antiguas fuentes, como a todos los aumentos súbitos de la demanda social, es una de las condiciones previas, imprescindibles, del proceso de acumulación en su elasticidad.

La ingeniería va en camino de que esta nueva “riqueza de las naciones”, los activos que conforman el capital natural, puedan ser pronto monetizados, registrados, transformados en títulos financieros y negociados en el mercado financiero. El cómo evaluar las existencias de carbono en términos monetarios y su incorporación en las cuentas nacionales es la tarea que desarrolla actualmente el System of Environmental and Economic Accounting (SEEA, Sistema de Contabilidad Económico Ambiental), de la División de Estadística de las Naciones Unidas y el *adjusted net savings methods* del Banco Mundial (Banco Mundial, 2006:123).

En el lanzamiento de la Declaración sobre el capital natural,⁶⁵ uno de los puntos más destacados de Río+20, fue “una declaración y llamado a la acción del sector financiero para trabajar hacia la integración de las consideraciones del capital natural en nuestros productos y servicios financieros en el siglo 21”, que incluye una Hoja de ruta para la industria financiera, para contabilizar la Naturaleza.⁶⁶

65 Ver <http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wpcontent/uploads/2012/04/natural_capital_declaration_es.pdf>

66 Ver <http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wp-content/uploads/2012/07/NCD_Roadmap.pdf>

Treinta y nueve bancos, inversionistas y aseguradoras, junto con más de 60 países y más de 90 corporaciones privadas, como Unilever, Puma y Dow Chemical, entre otras, hicieron un llamado colectivo para la contabilización y valoración del capital natural en la Río+20.

El Banco Mundial también ha ayudado a varios países a contabilizar su capital natural en los sistemas nacionales de cuentas, a través de dos mecanismos: a) una asociación mundial llamada Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES o Contabilidad de la riqueza y valoración de servicios ecosistémicos, en traducción libre);⁶⁷ y, b) el intercambio de experiencias concretas a partir de su plataforma System of Environmental-Economic Accounting (SEEA, Sistema de contabilidad económico-ambiental, en traducción libre), en la región latinoamericana. Con este apoyo, Costa Rica y Colombia ya están implementando la metodología de valoración de sus activos ambientales.

En esta tarea de asesorar a los países en la tarea de contabilizar el capital natural en sus cuentas nacionales, la representante del Banco Mundial expresó que:

[...] el Capital natural es algo fundamental a lo que hacemos como Banco Mundial y al que queremos ser, [...] trabajar con el capital natural es volver a nuestro negocio original (*our core business*). Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, fuimos de país en país ayudándolos a colocar sus cuentas nacionales en orden. Hoy, ayudar a los países a poner el capital natural en las cuentas nacionales y hacer de eso una realidad es central a la respuesta a las múltiples crisis, del cambio climático y a la volatilidad de los precios de los alimentos.⁶⁸

67 Ver <<http://www.wavespartnership.org/waves/>>; <<http://www.worldbank.org/en/news/2012/06/20/massive-show-support-action-natural-capital-accounting-rio-summit>>

68 Ver Evento paralelo (*side event*) “Mainstreaming Natural Capital and the CBD objectives”, en el COP 17, CBD, Hyderabad, India.

A modo de conclusión

Quisiéramos destacar que esta nueva narrativa hegemónica “verde” ha logrado gran eficacia, al alentar y legitimar el camino hacia una nueva base de acumulación, que reposa fundamentalmente en el concepto del capital natural y en el plan ambicioso de contabilizar, valorar e incorporar a los mercados —a través de la compra-venta de los servicios ambientales, como ya lo apuntan los mercados existentes de carbono, biodiversidad y, progresivamente, el del agua—, esto constituye todo un portafolio de bienes y servicios ambientales (incluidos los intangibles, culturales, etc.), así como las “infraestructuras naturales” (como ahora denominan a los ríos, suelos, bosques, etc.),⁶⁹ que, hasta el momento, estuvieron “gratuitamente” provistos por la Naturaleza.

La economía verde, en este sentido, es una falsa solución, y es claro que no se presenta contraria a la continuidad de la actual economía marrón extractiva e intensiva en energía; sus mecanismos verdes son concebidos de tal forma que la creación de valor, bajo su lógica, es complementaria y interdependiente a la economía actual. Entonces, funciona como una forma de economía espejo: es justamente la escasez y contaminación de los recursos, generadas por la economía actual, lo que genera valor a los activos ambientales de la economía verde. Al final, ¿si el agua fuera abundante y limpia, quiénes estarían dispuestos a pagar por ella, aunque sea caro? ¿Si el aire fuera limpio sano y sin contaminación, se podría vender los servicios de los bosques como productores de carbono?

Frente a la crítica que la sociedad civil construyó a lo largo de la última década, en la confrontación, resistencia y creación de alternativas a la globalización, al libre comercio, al neolibe-

69 Véase por ejemplo el *survey*: Corporate EcoForum. *The Business Logic of Investing in Natural Infrastructure*. 2012. En <http://corporateecoforum.com/assets/pdf/CEF%20Finance%20&%20Investment%20Summary.pdf>

ralismo y al Consenso de Washington, es un enorme retroceso encontrarnos hoy frente a la cristalización de un nuevo consenso, un consenso verde. Bajo la nueva hegemonía verde, igual y reiteradamente, reaparece el discurso de que solamente tras los mecanismos económicos y la generalización de la racionalidad instrumental sobre decisiones vitales (en relación con el clima, el sistema alimentario, el agua, etc.), es posible lograr la transición necesaria que garantice la continuidad de la vida en el planeta. La Río+20 fue un momento crucial en el proceso de cristalización de este nuevo consenso. No fue el evento en sí mismo, pero sí una necesaria parada mediática: un momento de espectáculo visible, donde los medios de comunicación capturaron y publicitaron estos cambios como parte de una historia... de una trayectoria más larga. Los actores hegemónicos en este proceso están dando pasos concretos y estructurales para incorporar, de hecho, el capital natural a la realidad económica.

Considerando el contexto en donde la energía y los recursos son cada vez más escasos y disputados, con particularidades distintas en las últimas décadas –como la de la importancia que adquirió la cuestión del cambio climático– tenemos la tarea de la deconstrucción de la versión verde de las mismas políticas estructurales de ajuste, reformas legales, flexibilización de derechos y asalto a los bienes comunes, de la misma manera que la confrontamos cuando se instauraron las políticas neoliberales. En el contexto de la resignificación de las luchas y de la necesidad de enfrentar juntos a la crisis ambiental real, es urgente reflexionar en articulación con amplios sectores de la sociedad e, incluso, actores aliados, ¿Por qué este “verde”, no es tan verde como se presenta?, sin dejarnos caer en la trampa del reciclaje del discurso hegemónico sobre el desarrollo y el crecimiento.

En esta ruta, la denuncia y la resistencia al salto hacia la financiación y captura del capital natural, es un reto de imperativa urgencia, así como en el horizonte de movilización y construc-

ción de alianzas, está la construcción de una verdadera transición ecológica y energética, central e ineludible, como reto para superar el capitalismo.

Para hacer frente a esta tarea, está en nuestras manos la defensa y promoción intransigente de los bienes comunes y la construcción continua de formas comunales de gobernanza. Nos toca interpelar a nuestros Estados y gobiernos en términos de cómo están actuando para “comunalizar”, refrendar y asegurar los bienes comunes y las prácticas alrededor de estos. Necesitamos asegurar que los bienes comunes sean como un antídoto, como una idea fuerza, que sustente una narrativa nuestra, capaz de vincular las prácticas emancipadoras que existen, que resisten y que toman forma en el cotidiano, y que las afirmen como un modo de producción capaz de suplir las necesidades para el bien estar, pero, sobre todo, para el Buen Vivir, más allá del desarrollo.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
A ESCALA REGIONAL

Dialéctica de la integración latinoamericana

Manuel Cerezal¹

Este artículo recibió los aportes de Miriam Lang, Alejandra Santillana y Raúl Zelik.

El *modus operandi* de la economía neoclásica recuerda, en esto, a la religión católica que exige el sudor de la frente de los trabajadores, hogares y empresas, a cambio de la promesa de un equilibrio hipotético, por ahora jamás consumado. De ahí que las angustias que emanan de los epicentros del pensamiento neoliberal se asemejan a una crisis de la fe.

En octubre de 2008, el propio Alan Greenspan admitía que el mero manejo de la tasa de interés quizás no fuese suficiente para equilibrar la economía, lo que contradecía cuatro décadas de discursos ultraliberales:² en una suerte de absolución superficial del desorden moral del capitalismo financiero, cuyo resultado es que la doctrina neoclásica se haya mantenido en el Norte. En vez de “refundar” el capitalismo financiero, en palabras del expresidente Sarkozy, en la Cumbre del G20 de abril de 2009, terminaron recapitalizando el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 750 mil millones de dólares. En Estados Unidos, así como en Europa, los relajamientos monetarios (*Quantitative Easings*)³ se cuentan ahora en billones.

-
- 1 Magíster en Ciencias Económicas y Comerciales de la ESSEC, Francia. Profesor e investigador en el Centro de Estudios en Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ha asesorado la elaboración de propuestas de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, el Sucre y el Banco del Sur.
 - 2 “Estoy conmocionado por la magnitud del maremoto crediticio. Me equivoqué parcialmente. La crisis es más grande de lo que podría haber imaginado nunca”. En http://elpais.com/diario/2008/11/16/economia/1226790018_850215.html
 - 3 Este término hace referencia a una política monetaria usada por algunos Bancos Centrales para incrementar la cantidad de dinero a través del aumento de reservas del sistema bancario. Generalmente, esta medida se realiza mediante la compra de bonos al gobierno central para estabilizar o incrementar sus precios y, de esta manera, bajar las tasas de interés a largo plazo.

Posteriormente, se lanzó una potente “contrarreforma” en respuesta a las heterodoxias rusa y china que apelaban a la recomposición del sistema monetario internacional, lo que desató una extraña “cruzada” cambiaria contra China y su yuan “subvalorado”. En Europa, el FMI se lanzó, como parte de la troika, en una “cruzada” abocada a castigar las periferias de la Eurozona, a través de la reconcentración del capital y tierras y el cobro de impuestos a los Estados (aunque a tasa variable), en detrimento de la mayoría de la población.

Alterada la confianza, en ausencia del crecimiento y el empleo, el contenido queda intacto: el pensamiento “monoteórico” sigue predicando que el crecimiento se logra sobre la base de las exportaciones o sosteniendo el consumo, que endeuda a los hogares. Algunos aún fingen creer que la liberalización del comercio asegurará el desarrollo industrial.

La relativa calma de la que goza actualmente América Latina puede también tener correlatos negativos: no anticipar el coletazo de la crisis “central” del capitalismo y sufrir entonces una nueva desestabilización por ausencia de mecanismos de prevención; u olvidarse que, más allá de despejarse del yugo evangelizador del FMI, sus economías siguen influenciadas por un sincretismo de creencias que todavía les prohíbe apuntar a un modo equilibrado de reproducción de sus sociedades y sus riquezas; con el riesgo de engatillar, por todo lo anterior, sus aspiraciones a la integración plena.

El presente trabajo se propone superar los estados de inacción y de impotencia ante un sistema que se encoge sobre sí mismo. Pero alterar el ciclo plurisecular del capital exige sólidas aristas, sin las que nos arriesgaríamos a entrar en debates postmodernos mientras nuestro mundo regresaría a sus condiciones premodernas, cuasimedievales. Se trataría, en definitiva, de identificar algunas palancas impulsoras de la transición entre la integración del capital y una forma de complementación económica afín a la reproducción de la vida en general y humana, en particular.

Empezaremos por revisar elementos claves del metabolismo del capital y de su integración que sigue acelerándose, al antojo de sus esquizofrénicos promotores, divididos entre fases de negación y de racionalización de su crisis.

Esto nos permitirá interpelar, entonces, las experiencias de “convergencia” o de “unión” en curso, interrogarlas sobre sus métodos y saldos, a lo largo de sus respectivas inspiraciones y sucesivas transiciones: entre desarrollismo, neoliberalismo, y un semblante de humanismo que pudiese abrir el camino de ruptura con el capitalismo desencantado. Nos interesaremos por las iniciativas latinoamericanas, sin perder de vista la aventura europea, en tanto, ha fungido como referente para varias de las experiencias criollas.

Finalmente, haremos énfasis en las propuestas actuales y novedosas de nuestro continente. Solo así podremos valorar si los instrumentos emergentes como el Sucre⁴ o el Banco del Sur son suficientemente versátiles para sobrevivir en el actual ambiente crematístico y, a la vez, suficientemente potentes para sembrar pistas para la reorganización cualitativa de nuestro “oikos”.

El metabolismo del capital y su integración

Mientras cuestionan a los Estados, después de volverlos a endeudar, y arremeten contra sus proyectos de integración, los mercados financieros siguen consolidando aceleradamente su integración *de facto*, a escala planetaria. Presentados como una horda de empresas despiadadas en feroz competencia entre ellas, su poderosa alianza de intereses cristaliza, en realidad, el consenso más duro y sofisticado en la actualidad. Como “el diablo está en los detalles”, ponemos aquí la lupa sobre el *modus operandi* del capital, condición *sine qua non* para revertirlo o superarlo.

4 Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos.

Sobre los “súperpoderes” de la contabilidad

Mientras algunos se preocupan por los movimientos de las terceras y cuartas columnas militares en el tablero geoestratégico, el resto del mundo se organiza en dos: activo y pasivo. Cuando el pasivo contiene rastros de endeudamiento considerados excesivos, se desencadena una obsesión por recortes en el empleo de fondos (el activo). Mientras no se apacigüen los auditores obnubilados por reordenar el pasivo en sus balances, se trunca cualquier discusión interesante sobre la integración, que se trabaja desde el activo.

Otro acto de prestidigitación contable consistió en desvirtuar los planteamientos del informe Bruntland (1986), que buscaba equiparar exigencias económicas, ambientales y sociales, como lo sugerían los comités de ética y el Club de Roma. La contabilidad verde logró encerrar una reflexión paradigmática en las mismas dos columnas contables y en la sempiterna ecuación de maximización del lucro: en economía esta lógica lleva el dulce nombre de optimización con restricciones (ambientales y sociales, en este caso). En Río+20, el subterfugio se extendió del concepto de contabilidad al de economía verde.

A esto se suma una nueva casta de capitalistas mucho más versátiles que sus progenitores de la burguesía industrial y empleadora. Los *capital riskers* encontraron cómo interpolar la fórmula del lucro⁵ que habían usado sus predecesores durante siglos: comprar las empresas, acentuar su capacidad relativa de generar plusvalía —al impulsar las ventas, recortar costos, salarios, cuando no desinvertir, para venderlas realizando mayores plusvalías, bursáti-

5 Marx explicaba cómo el detentor del capital busca expandirlo a través del esquema D-M-D': transformando su dinero (D) en mercancías (M) que, transformadas a través del trabajo productivo, se revenden por una cantidad de dinero (D') mayor a la invertida (D'D), realizando así una plusvalía (Marx, 1859 (1969), p. 58).

les esta vez—. Álvarez, (2007: 9) explica cómo “la pugna distributiva entre capital productivo y capital financiero repercute directamente sobre el trabajo, que actúa como variable de ajuste”.

Universalización de deberes macroeconómicos...

La actual crisis, que prometía la inmoción de ese poderío contable y financiero sobre el altar de la ética pública, se transformó en su misma fuente de perpetuación. La oligarquía financiera puso a los Estados a asumir la crisis, y estos, a su vez, “socializaron” sus pérdidas entre sus contribuyentes. Para justificar estos subterfugios, recurrieron a fórmulas de convergencia macroeconómica: equilibrio presupuestario, endeudamiento contenido e inflación baja. Como contener los precios es del interés de la población, en tanto protege su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro, la lucha contra la inflación sirve para legitimar públicamente los otros mandamientos macroeconómicos.

Estas ineludibles e inaplazables tareas permiten, en realidad, maximizar la rentabilidad del capital financiero (Chang, 2011: 60). Como los títulos valores no están protegidos contra la inflación, entonces esta se ha de minimizar; como el capital siempre está en búsqueda de rentabilidades altas, debe ser libre para viajar y aprovechar diferenciales entre tipos de interés; finalmente, la exigencia de rentabilidad del capital en sus inversiones productivas restringe la posibilidad de salarios dignos. Esta situación ocurre en dimensión planetaria, y ha sido evidenciada por economistas como Lapavitsas (2011: 16) en Europa, Rivas (2011: 13), en América del Sur, y Weisbrot (2012: 2), en América del Norte.

Son los mismos mandamientos, impuestos a las naciones latinoamericanas durante las décadas de los años ochenta y noventa, que se cristalizaron en Europa con el Tratado de Maastricht, firmado en 1992 y reiterado en 2011. Curiosamente, en el año 2000, el Mercado Común del Sur, Mercosur, creó voluntariamente un grupo de monitoreo macroeconómico que, desde el acuerdo de

Florianópolis, también apuntaría a estas “reglas de oro” de la convergencia macroeconómica. Recientemente, quizás alertados por las manifiestas incongruencias del “modelo” europeo, los miembros del Mercosur se han puesto a repensar esos tres criterios calcados de Maastricht y proponer “otros”.

...a expensas de los derechos universales

El poderoso ejercicio positivista de la integración de mercados ha realizado la cínica proeza de convertir los derechos del capital en deberes universales. Flexibilización laboral, recortes salariales, privatización de la educación universitaria, desmantelamiento de sistemas de seguridad social universal, son los elementos más usados para saldar las crisis vividas de este lado como del otro del Atlántico, en total incumplimiento de la Declaración Internacional de Derechos con Vocación de Universalidad de Filadelfia, firmada en 1944 (Supiot, 2010: 11).

La máxima expresión formal de esta estafa en el derecho europeo se halla en la Constitución Europea, donde la mención a los derechos sociales fue literalmente sustituida por la de “derechos económicos de interés general”. Un subterfugio que Marx y Engels denunciaban en la *Ideología alemana* y aclaraban que, a diferencia del “interés común”, el “interés general” era una extrapolación de los “intereses individuales” de algunos. Como paliativo de esta subunción de los derechos sociales a los del capital, se han promovido derechos políticos engrandecidos hacia lo supranacional: el Parlamento supranacional sufre, sin embargo, de desafección democrática (con abstenciones superiores al 50%), y luce impotente ante las decisiones financieras de la Comisión Europea. Esos trueques resultaron deletéreos para los ciudadanos de a pie de la Unión.

Ahora, cuando Bolivia, Ecuador y Venezuela se han dotado de constituciones, fundamentadas en amplios e inclusivos procesos constituyentes, vemos emerger un movimiento de reconquista de derechos sociales que llegan, en el caso boliviano y ecuatoriano hasta

la novedad de afirmar derechos para la Naturaleza. La defensa de estos derechos de cuarta generación, en vez de chocar directamente contra los del capital, se enfrenta hoy, singularmente, con los otrora considerados derechos de segunda generación, como ocurre en el contencioso de los Tipnis en Bolivia. En el debate entre la lógica ética y la resolutiva-desarrollista, si se trata de evolucionar hacia un “extractivismo consciente” y, finalmente, “mínimo” (Lang, 2011: 17), no podemos desviar la atención de la agenda “depredadora” del capital respecto de los derechos de primera y segunda generación, comparable en intensidad a la que impone a la Naturaleza.

Los contundentes avances observados en la última década apuntan a que algunos gobiernos se centraron en procesos de integración “intranacionales” de sus sistemas socioeconómicos, vía la intensificación del papel redistribuidor de sus Estados. Pero son pocas las irrupciones de esas políticas en la agenda de lo que se pretende integrar o compartir. Quizás porque los movimientos no han podido incidir suficientemente sobre la agenda de la integración. No escasean las declaraciones en la materia, pero la actualidad de las negociaciones sigue distante conceptual y prácticamente de la centralidad de los derechos sociales para el futuro de (y entre) nuestras naciones.

La cola del diablo

Casi 740 mil millones de reservas internacionales⁶ que escasearon hace una década y la existencia de tasas de crecimiento positivas, nos conducen a pensar que las naciones suramericanas estarían aún fuera de alcance de la gran crisis que se atribuye al centro del sistema capitalista. No obstante, las masivas inyecciones de liquidez a las que procedieron tanto la Reserva Federal estadounidense como el Banco Central Europeo (BCE), incentivan a los inversores a refu-

6 Más de la mitad atribuibles al Brasil, dos tercios sumados Brasil y México.

giarse en los países “emergentes”, debido a las altas tasas de interés que ofrecen; y la versatilidad de estos capitales crea un potencial desequilibrio en las balanzas de pagos de dichos países emergentes. Si esta es la sombra de un potencial desequilibrio financiero, la crisis viene en realidad abultándose por el lado de la economía real, a medida que la caída de la demanda global disminuye las oportunidades de exportación de bienes desde los países latinoamericanos. A esto se suma la incertidumbre vinculada con la volatilidad de los precios de las materias primas, componente dominante de dichas exportaciones. Sería entonces poco riguroso asumir que América Latina no está expuesta al coletazo de la crisis central del capital.

Alerta también el repliegue de los gigantes enfermos sobre los mercados latinoamericanos –entiéndase, sobre la capacidad de consumo de nuestros pueblos–. Desde el estallido de 2008, se han venido intensificando las solicitudes de acuerdos de libre mercado o de tratamiento favorable a las inversiones europeas. ¿Cómo ignorar los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) con Colombia y el Perú, las negociaciones en curso entre la Unión Europea y Ecuador, o la urgencia por reanudar las negociaciones entre UE y Mercosur? En el fondo, la inconclusa Ronda de Doha podría estar reflejando una inédita cautela de las potencias centrales ante la sustancial alteración de sus ventajas comparativas. Cuidado con volvernos su próximo motor de crecimiento.

Entre metafísica y dialéctica de la integración

La “apuesta”

Los griegos en 1981, los españoles y portugueses en 1986, “esperaban a *Godot*”,⁷ el ensueño del estándar de vida de la dorsal

7 Véase Samuel Beckett (1952). *Esperando a Godot*, Tusquets, 15ª reedición, Barcelona, 2011, p. 1.

europea (Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Austria). Apostaron por la quintaesencia del mercado único, el euro, en una forma parecida a la que Pascal proponía la apuesta por la existencia de Dios: “Estimemos estos dos casos: si usted gana, usted gana todo; si usted pierde, usted no pierde nada. Apueste usted que Él existe, sin titubear” (Pascal, 1670: 233). Hoy embriagados entre elixires fiscales y exorcismos contra el endeudamiento, los ciudadanos mediterráneos de la Eurozona viven con la única perspectiva de una a dos décadas de ajuste. La “esperanza” ha sido reducida a su definición matemática y la calculan los mercados con algoritmos financieros. En estas condiciones, pareciera improbable que la alternativa provenga del Norte, aunque, si creemos a Pascal: “el corazón tiene sus razones que la razón desconoce”: con mayor razón, agregamos, el de los “indignados”.

Solo las palabras del Discurso sobre el Colonialismo, de Aimé Césaire, transpuestas desde su explicación del nazismo a las actuales circunstancias económicas, pudieran explicar el trasfondo epistémico del drama de los pueblos europeos:

Sujetos colonizados fuera de Europa han sufrido el exterminio, el genocidio, la esclavitud, y la violencia de la misma por varios siglos. Ante eso el «hombre europeo» se mantenía indiferente. Y no es sino hasta que le toca vivir durante un periodo intenso políticas parecidas a las coloniales en su propio seno, cuando se torna “espantado” y empieza a poner en duda de forma manifiesta elementos centrales de su civilización.⁸

Lo que quizá salva a América Latina de la actual desidia europea reside en que su apuesta por la integración no haya sido tan autocentrada. En contraposición con cierta dialéctica hegeliana

8 Véase Nelson Maldonado Torres N., “Aimé Césaire y la crisis del hombre europeo”. En Aimé Césaire, *Discurso sobre el colonialismo*. AKAL, Madrid, 2006, p. 13.

en la que el euro llegó a encarnar el “espíritu”⁹ de la integración europea, los países latinoamericanos han sido constantemente confrontados con sus condiciones objetivas: producción primaria para la exportación, importación de productos manufacturados y dólar como patrón cambiario cuando no, monetario (es el caso de Ecuador, en la actualidad). De allí que la dialéctica de la integración latinoamericana resultó más material, terrenal y en muchas ocasiones, pragmática –tanto para bien como para mal–.

Así, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), en 1963, y el Pacto Andino, en 1969, ambas “apuestas” acuñadas por aquel pensamiento estructuralista de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), nacieron como necesidad de reacción frente a las asimetrías hemisféricas y continentales que imponía la división internacional tecnológica y social del trabajo. Se apostaba, entonces, por una integración sostenida por los esfuerzos de sustitución de importaciones de los años 1970, como lo ilustran los acuerdos de programación industrial.

Pero estos avances fueron prematuramente rebatidos por la exacerbación de aquellas mismas relaciones de dependencia: cuando los “choques” petroleros (1973 y 1979) engendraron una acuciante necesidad de liquidez y solvencia en la triada, esta desencadenó desde el Club de París, la crisis de la deuda en América Latina. El cambio de las pautas para la “apuesta” por la integración obligaron a aquellas iniciativas a refundirse, respectivamente, en la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi, 1980) y en la Comunidad Andina de Naciones (1996), en un complejo andamiaje entre influencias neoestructuralistas, el naciente regionalismo abierto de la “nueva” CEPAL, y la mediación de las negociaciones arancelarias por el asentamiento de las transnacionales

9 Véase Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1807, “Fenomenología del espíritu”. Prólogo e introducción. *El saber absoluto*. Traducción de X. Zubiri, Madrid, 1935, p. 350.

en el continente suramericano. En esos años, apareció el Mercosur (1991), acuñado por el desarrollismo brasileño y argentino, y movió el baricentro de la integración en una nueva apuesta por la complementariedad comercial y productiva del cono sur.

En todo caso, tuvieron que pasar 16 años entre el primer ajuste estructural y la irrupción del primer gobierno abiertamente anti-neoliberal (Hugo Chávez, en 1998). En el crisol de las tensiones entre los acuerdos comunes de mercado de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur con el proyecto libre-cambista asimétrico estadounidense,¹⁰ juntándose la insurgencia de los movimientos sociales y de los gobiernos rupturistas del continente, se cristalizó el “No al ALCA” en la Cumbre de Mar de Plata en 2005. De ahí, la creación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), en 2006, y su respuesta del Sucre a la crisis del dólar, en 2008, también.

En esta cada vez más lujuriente selva de la integración latinoamericana, coexisten visiones difíciles de conciliar, con riesgo de contaminación de las más prometedoras por las conservadoras, y siendo quizás la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), (2006), la iniciativa más anquilosada por estas contradicciones. Mientras tanto, las hegemonías perduran: la Reserva Federal estadounidense sigue acuñando la moneda para trasladarla a los países dolarizados. Paradójicamente, la segunda independencia está en marcha, pero la regresión sigue estando a la vuelta de la esquina.

¿Qué es “integrar”?

Bolívar, en su Carta de Jamaica, decía: “La unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por esfuerzos bien dirigidos”. Si la fe

10 Asimétrico, en tanto la eliminación de barreras arancelarias no se acompañaría de la equiparación en las condiciones para la producción: en el capítulo agrícola, EE.UU. mantendría su política de subsidios a la agricultura nacional, pero la quería prohibir al resto de países.

ya no es de fiar, nos queda al menos la razón pura, matemática. Newton y Leibniz, en tiempos de Pascal, dieron luces sobre cómo integrar funciones matemáticas: se trata de que, a partir de una función dada, se proyecte gráficamente el área que separa el eje de las abscisas de su curva, sobre un intervalo dado. Para ello, se calcula la diferencia entre los valores de la función “primitiva” de la función a integrar. Transpuesto a la dinámica de la construcción de la integración regional, el sentido de este método matemático nos sugiere que quizás importe menos “cuántos” países se quieren integrar (una cuestión de intervalo en las abscisas), que el “qué” de estos países se pretende unir: la piedra angular sería la función a integrar y la precisión de su “primitiva”.

Europa eligió paz y bienestar como funciones primitivas para su integración, tras la Segunda Guerra Mundial. Pero el temor a las asimetrías comerciales y al proteccionismo, interpretados como causas de aquel conflicto, volcó rápidamente la agenda de integración hacia el mercado, el crecimiento del comercio y las “primitivas” del gran capital: libertad de movimientos de capital y convergencia macroeconómica. Si América Latina se dedicó a integrar las funciones del crecimiento de la producción y del intercambio durante décadas, desde una óptica complementaria y de corte industrial, es legítimo preguntarse ¿por qué estos acuerdos resultaron más funcionales a las empresas transnacionales que a los pueblos en sí?

Fuera del ALBA, cuyo núcleo de actividad está orientado a lo social y lo cultural –alfabetiza a millón y medio de personas, exporta la Misión Milagro–, los derechos del capital es lo que se sigue discutiendo en la región. No obstante la generalización del arancel “cero” a 95% de las partidas comerciadas en UNASUR para 2019, el comercio intrarregional no se intensificó. Esto justifica que los países de la recién estrenada Alianza del Pacífico luchen ahora contra las barreras pararancelarias. Singularmente, las propias negociaciones del Tratado de Comercio de los Pueblos

no pasan, por ahora, de acuerdos bilaterales de Venezuela con Bolivia y Ecuador, urgidos en realidad por la expiración de los acuerdos auspiciados por la CAN.

En definitiva, lo humano pareciera ser un asunto periférico en las políticas de integración, muy a pesar de la facilitada circulación de personas entre los países miembros de la CAN, la UNASUR y el Mercosur, o la total libertad de movimientos instaurada por los acuerdos de Schengen en Europa. ¿Cabrán todavía, en nuestro continente, erigir los derechos sociales y ambientales al rango de “primitivas” de nuestra integración?

¿Qué es converger? El mito del eterno retorno de las asimetrías

Entre intentos de perfeccionamiento de uniones aduaneras en mercados comunes¹¹ y acciones parciales de transformación productiva e industrial, resulta llamativo que, con el grado de desgravación arancelaria existente, el comercio intrarregional siga tan débil y la región, tan asimétrica. En 2011, el comercio intrarregional de la UNASUR solo representó 18% del comercio total de la región, diez puntos debajo de su máximo histórico registrado en 1998, que fue de 28%. Algunos seguirán argumentando que hay que radicalizar la agenda de liberalización del comercio para permitir el crecimiento del comercio; pero, en realidad, las razones se encuentran en la estructura de la oferta de los países del continente. La mayoría de las exportaciones latinoamericanas siguen enfocadas en la venta de productos primarios hacia los centros tecnológicos del hemisferio Norte, en proporciones contundentes: 65,7% de las exportaciones de los países de la UNASUR a EE.UU. son primarias, así como 54% de las dirigidas hacia Europa, y 64% de las orientadas a China.

11 Que se diferencian de las primeras al agregar una barrera exterior común a la agenda de desgravación arancelaria interna.

Tabla. UNASUR: Estructura de las exportaciones intra y extrarregionales, 2010 (en porcentajes del total)

	Exportaciones intrarregionales		Exportaciones extrarregionales		
	Intra-UNASUR	Extra-UNASUR	EE.UU.	U.E.	China
Primarios	26,7	39	67,3	54,7	67,7
Manufacturas	73,3	61	32,7	45,3	32,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Base de datos Comtrade, p. 10.

Esta es la traducción de un fenómeno de reprimarización de nuestras economías, huella del fracaso o desmantelamiento de las iniciativas de industrialización de los años setenta e inicios de los ochenta. La similitud entre las especializaciones de nuestros respectivos países explicaría la baja intensidad del intercambio. Por ello, también, el comercio intrarregional es principalmente manufacturero, intraindustrial y de baja intensidad tecnológica. Y si consideramos que el Mercosur concentra en sí un 43% del comercio intra UNASUR, entendemos cómo estas cadenas industriales regionales se articulan alrededor de Brasil y Argentina, principalmente.

El Mercosur es un buen reflejo de las asimetrías productivas del continente. Así, en 2009, Brasil producía 44,0% del valor agregado bruto manufacturero y 57,8% de las exportaciones de manufacturas. No sorprende, entonces, que las asimetrías más llamativas en términos productivos y comerciales se encuentren entre Uruguay y Paraguay, por un lado, y entre Argentina y Brasil, por el otro. Una realidad que quizás modere (visualmente) la entrada de Venezuela al bloque, sin forzosamente implicar una reducción de las brechas más allá de las estadísticas.

A las asimetrías comerciales y productivas, habría que agregar desequilibrios en materia de dotación de territorios y recursos, ventajas o desventajas absolutas que han justificado varias agendas de integración física; la más actual es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Impulsada por Brasil desde inicios del siglo, en el marco de las conversaciones entre la CAN y el Mercosur, la IIRSA plantea proyectos de gran envergadura y extraordinario potencial de conexión; pero según señalan varios analistas, se trata más de una herramienta de extracción que de convergencia: al trazar en el territorio latinoamericano “conexiones extravertidas”, funcionales a la exportación de recursos primarios hacia potencias industriales extrarregionales.¹²

Ahora, entre las acepciones de la convergencia estructural y los métodos barajados por estos organismos de la integración latinoamericana, encontramos rasgos y sesgos conocidos, por no decir provenientes del proceso europeo. El considerar la convergencia estructural sobre la base del indicador de ingreso medio (PIB per cápita),¹³ o la terminología con la que se articuló el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur: “convergencia estructural, competitividad y cohesión social”, coinciden con la política regional y de convergencia estructural de la UE.

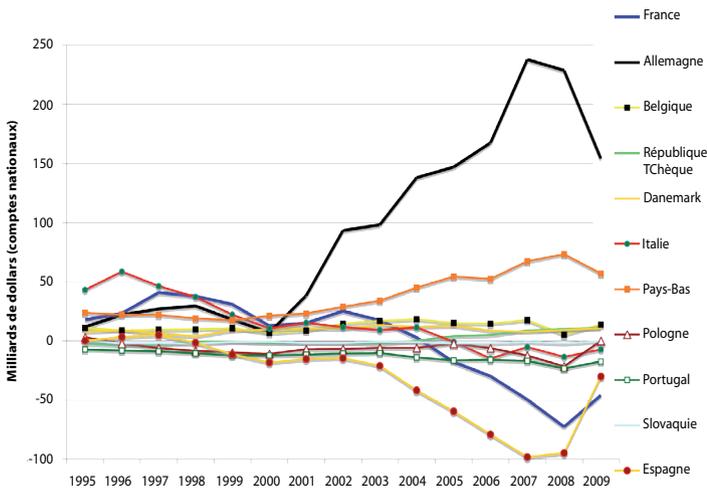
Dadas las conexiones conceptuales y metodológicas con la Unión Europea, no podemos sino detenernos un momento sobre sus saldos. Cuando nació el euro, en 1999, la fijación definitiva de

12 Según Buonomo y Gudynas (2007, p. 110), no se deben confundir los procesos de integración con procesos de “interconexión” (acuerdos entre países netamente comerciales o sobre infraestructura, claramente orientados a la extracción de recursos naturales). Ver también el análisis del IIRSA, por Ceceña (2011).

13 El PIB per cápita de Bolivia, en 2010, seguía casi diez veces inferior al de Argentina o Uruguay. Las diferencias entre Luxemburgo y algunos países de Europa del Este son similares.

los tipos de cambios y de los tipos de interés sellaron las condiciones para que los ajustes de competitividad –que antes desencadenaban desalineaciones entre tipos de cambio– se ejercieran de allí en adelante mediante ajustes salariales. Y considerando lo rígidas que resultan las modificaciones de salarios y productividades respecto de la simple depreciación de una moneda, se produjo un estallido progresivo de las asimetrías comerciales a lo largo de la década pasada.

Gráfico. Evolución de las balanzas comerciales de los países de la Eurozona



(Fuente: Sapir, 2011).

Ante estos resultados tan asimétricos y desprovistos de sentido humano, nos sorprende que los foros latinoamericanos sobre asimetrías y convergencia siguieran, durante esta misma década, insistiendo en las mismas fórmulas para la convergencia:

trato especial y diferenciado; garantía de acceso a los mercados; complementariedad y desarrollo competitivo, con énfasis en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y otras organizaciones productivas; infraestructura física: profundización del enfoque IIRSA; cooperación en políticas macroeconómicas; políticas de incentivos a las exportaciones e inversiones.¹⁴

Coincidiendo con López (2009: 7), la integración “habrá de trascender las limitaciones impuestas por la centralidad del comercio –la dimensión arancelaria como epicentro de las negociaciones–, para reivindicar el espacio de la producción como ámbito concreto de moderación y superación de las asimetrías”. A esto agregamos la necesaria discusión sobre las condiciones sociales que sustentan la producción.

“Al andar se hace camino”

Las iniciativas de integración más recientes, surgidas de ímpetus políticos y geopolíticos (UNASUR, hoy CELAC) en sus vertientes energética (Petrocaribe), o social y solidaria (ALBA), con disposiciones muy dispares para la transformación, se encuentran con el reto de definirse en el campo económico, al menos respecto de sus predecesores. Esto implica discutir visiones y principios, pero también mostrar números, elegir indicadores, para no ser burladas ni barridas lacónicamente por los “expertos”. Asimismo, resulta imperante abrir el compás a los pueblos organizados que, en tanto son destinatarios de las políticas de integración, también deben ser sus actores y constructores.

14 Véase Aladi, CAN, CEPAL, Organización de Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Mercosur, Foro de Reflexión “Un nuevo tratamiento de las asimetrías en la integración sudamericana”, Secretaría del Mercosur, La Paz, 2005, p. 12.

A la reconquista de derechos: ¿por y para quiénes?

El ALBA ha ganado, sin duda, el rango de pionera en apostar prioritariamente por proyectos sociales: parte de un principio de solidaridad basado en la redistribución, por los países miembros, de sus riquezas materiales y humanas más allá de sus fronteras nacionales. Petrocaribe, un año antes de que se creara el ALBA, aplicó ese principio de solidaridad en el campo de la transferencia de recursos energéticos hacia los pequeños países del Caribe, muy dependientes del financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), en materia de gasto corriente.

Tachadas de heréticas por los voceros del capital, por no ser rentables, estas iniciativas han planteado un principio hasta ahora residual en la integración latinoamericana: la posibilidad de subvencionar. Recordemos cómo Europa logró su autosuficiencia alimentaria tras financiar su sistema agrícola con cerca de dos tercios del presupuesto comunitario durante dos décadas (1962-1982). Chang (2002) aclara cómo las potencias mundiales se han encargado de “patear las escaleras” del desarrollo al satanizar el proteccionismo (que permitió a los EE.UU. convertirse en potencia industrial) y el financiamiento directo de los bancos centrales a sus respectivos gobiernos, entre otros. La integración requiere inversiones, con mayor razón si se centra en lógicas de repartición y si apunta a la vida que no es, en esencia, rentable.

Esos esfuerzos han sido posibles por la activación de dos palancas: el ejercicio de la soberanía sobre la propiedad y el uso de los recursos naturales, por un lado, y la re-exploración del papel del Estado garante y redistribuidor, por el otro. Se ha reconquistado la posibilidad de usar el ahorro para constituir provisiones (reservas) e invertirlas en la transformación del patrón de producción. Así lo están haciendo: Venezuela, que a partir de los excedentes en las reservas internacionales traslada fondos hacia su Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) para la inversión social y produc-

tiva; Bolivia, que dedicará 10% de sus reservas internacionales al financiamiento de la producción agroproductiva; Argentina, también, que mediante la disminución del encaje exigido por su Banco Central, libera fondos para la inversión productiva; y Brasil, a través del gigante Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Y todos ellos, junto con Ecuador, Uruguay, Paraguay se han propuesto confluir soberanamente en el proyecto del Banco del Sur.

Ahora bien, entre recuperar los mandos de la economía nacional y volcarla hacia una dinámica no capitalista (o menos ciegamente extractiva y acumulativa), podemos dudar del potencial del Estado por sí solo, al menos del Estado, tal como lo heredamos del siglo pasado, encogido sobre sí mismo. También se debe mirar críticamente al Estado por fuera de los mandamientos minimalistas del FMI: en una década, se ha vuelto paulatinamente más propietario y patrón, lo que exige cada vez más control social por parte del poder popular organizado, para poder confiar en el poder estatal de orientación y transformación.

La contradicción permanente entre el poder instituido y el poder popular constituyente es parte de la necesidad ambivalente de aporte y crítica. Algunos han llamado a mantener “irreverencia en la discusión, y lealtad en la acción”. Pero este planteamiento solo es aceptable si los pueblos organizados acceden a los espacios donde se “discute” la integración; un motivo para ocupar los consejos sociales de UNASUR y de los movimientos sociales del ALBA. Lo que está en juego no se restringe a discutir sobre políticas sociales ni a una simple agenda de intercambios de experiencias y saberes entre formas de organización socioeconómica; se trata de que estos consejos medien las discusiones de los respectivos Consejos de Economía y de Finanzas y de las personas jurídicas de la integración en general.

Nueva arquitectura financiera... ¿para qué?

Cuando finalmente Brasil se sume a las ratificaciones de Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el Banco del Sur deberá demostrar lo que viene planteando desde hace ya cinco años: construir un mecanismo de financiamiento libre de los condicionamientos de los organismos multilaterales (a diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Mundial). Anunciado en 2007, firmado en 2009 y creado jurídicamente en 2012, arrancará con una pequeña parte de los 7 mil millones de dólares de capital suscrito, que no le permitirá competir aún con las dinámicas de los anteriores ni mucho menos revertirlas.

Si no es cuantitativa, su irrupción en la arquitectura financiera regional deberá afirmarse cualitativamente, lo que recae en el actual proceso de discusión sobre los criterios para la selección de proyectos a financiar. Sirvan de alerta los intentos de volverlo funcional a la agenda IIRSA, para agudizar la necesidad de afirmar la originalidad del banco en términos de orientaciones estratégicas. Otra discusión pendiente atañe a las instituciones nacionales que le vayan a servir de relevo; un ámbito en el que las cooperativas e instituciones de microfinanciamiento deben posicionarse. Finalmente, será decisiva la negociación de su margen de maniobra relativo para financiar proyectos plurinacionales, para convertirlo en banco para la integración y la convergencia, y no solo en un fondo de desarrollo complementario a los que existen en los países.

Una apuesta certera podría consistir en financiar, por un lado, programas sociales, como lo viene haciendo el Banco del ALBA y programas de convergencia entre políticas sociales, si cabe. Por el otro lado, se debería centrar en respaldar financieramente a sectores productivos con directa vocación en la satisfacción de necesidades humanas fundamentales. El actual secretario de

UNASUR, Alí Rodríguez Araque, trae consigo la preocupación por el manejo mancomunado de los recursos naturales, un pretexto para introducir la discusión sobre el patrón productivo y su evolución hacia mayor soberanía y armonía (en las relaciones sociales que sustentan la producción, como en las condiciones ambientales de las que depende para perpetuarse). Entre los sectores prioritarios identificamos al menos tres de doble interés, inmediato y estructural:

El financiamiento a la pequeña actividad agrícola, para fines alimentarios como de encadenamiento agroindustrial. Se apuntaría prioritariamente a financiar a los sectores que hoy no acceden sino a la usura de la agricultura de contrato, para obrar a la dignificación del trabajo agrícola y de la clase campesina.

La apuesta por la biomedicina y la farmacéutica criolla, al menos con países libres del “patentado” de los TLC en materia de propiedad intelectual. Además de producir medicamentos para el pueblo, conlleva una potente apuesta hacia la investigación y la educación.

De ser visionarias las potencias petroleras, gaseras y mineras del continente, podrían también usar el Banco del Sur para volverse pioneras en energías renovables (eólica, solar, undimotriz, maremotriz, hidráulica), que abundan al estado bruto en la región.

El posicionamiento del Banco del Sur, en apoyo a los sistemas de financiamiento a las pequeñas estructuras, no debe interpretarse llanamente como la apuesta por una mayor integración de las pymes en las cadenas productivas regionales. La conveniencia de incorporarlas al comercio intrarregional debe diferenciarse de su enganche con cadenas globales, destinadas a la exportación extrarregional. El reto del que hablamos parte de la importancia de las estructuras cooperativas, comunales y de propiedad social, que hacen el tejido social de las sociedades suramericanas, muchas veces al margen de la economía formal y contabilizada.

Herramientas para alterar las condiciones objetivas: El Sucre

Este es un planteamiento que comparte otra herramienta novedosa y ya operativa: el Sistema Unitario de Compensación Regional, Sucre. Creado en 2009, este sistema de pago ha canalizado cuantías crecientes del comercio intraALBA: de 10 millones de sucres en 2010, ha pasado a 216 millones en 2011, y apunta a los 700 millones en 2012. Ahora bien, esta evolución positiva sigue fuertemente condicionada por el campo de acción limitado que le ofrece el comercio entre sus socios; unos 7 mil millones de dólares, de los que la mitad no son elegibles para el Sucre, por ser comercio petrolero. Esto ha motivado a los dos países (de cuatro) que más usan el Sucre, Venezuela y Ecuador, a activar reuniones con los sectores pequeños de sus economías, hasta ahora excluidos del comercio intrarregional.

La opción por la transformación cualitativa es la apuesta esencial del Sucre. En primer lugar, la unidad de cuenta común “Sucre”, compuesta por una canasta de las monedas de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Cuba, sirve para contabilizar las transacciones realizadas entre comerciantes de esos países. Su Cámara Central de Compensación, al contabilizar en sucres las importaciones y exportaciones que sus agentes operan en sus respectivas monedas, evita que los bancos centrales manejen dólares a lo largo de períodos de seis meses. Al final de los semestres, se liquidan los saldos resultantes del ejercicio, esos sí, en divisas duras, dólares o euros. De lograrse equilibrar los saldos de cada uno de los países dentro del sistema, no se desembolsaría ni un dólar por el conjunto del comercio realizado. Entendemos, entonces, la importancia de que cada país estructure una política comercial afín a este objetivo, para así maximizar el ahorro de divisas duras (Cerezal, Molero y Montero 2011: 9).

En la actualidad, Venezuela y Ecuador no han logrado equilibrar sus saldos, lo que implica un importante déficit para Vene-

zuela, que entonces desembolsa semestralmente dólares a favor de Ecuador. Esto ocurre porque se excluyen del Sucre las transacciones de hidrocarburos crudos; segunda apuesta cualitativa, destinada a estimular los esfuerzos de los países miembros por desarrollar sus sectores agrícolas y manufactureros.

Para ello, los países deficitarios podrán recurrir al Fondo de Reservas y Convergencia Comercial para financiar a los sectores productivos que se planteen exportar bienes hacia la zona del Sucre. Esto diferencia nuevamente al Sucre de un mero sistema de pagos. Y en última instancia, si los saldos siguieran arrojando fuertes desequilibrios, está previsto un mecanismo que a partir de cierta fracción del superávit (sobre la asignación inicial de sucres del país), se considerará a los excedentes como “excesivos”; así, se incita a la inversión de este *surplus* en actividades productivas de los países deficitarios. Aunque no sea bienvenido entre las filas de los economistas ortodoxos, este principio hace del Sucre el único sistema actual que haya recogido la sensatez del análisis de Keynes en su Plan.¹⁵

A los detractores del Sucre, que lo asocian con una pálida copia del euro, podríamos responder que se asemeja mucho más a la Unión Europea de Pagos que funcionó desde 1950 hasta el tratado fundador de la Comunidad Económica Europea a 1957: aquel, expiró precisamente por la ausencia de ese mecanismo corrector (Hart Landsberg, 2010: 9). Última y fundamental apuesta cualitativa y diferenciadora: el Sucre descarta de su funcionamiento

15 En 1944, el “Plan Keynes” (Keynes, 1943) proponía una Unión de Compensación Internacional que introdujera una unidad de cuenta mundial (el Bancor) y un mecanismo para “desalentar a los países acreedores que dejan inmovilizados saldos líquidos que pudieran destinarse para algún propósito positivo” (*op. cit.*: 473). Asumiendo que “los balances excesivos de crédito necesariamente crean balances decisivos de deuda para algún otro país” (*Ibid.*). El Plan Keynes fue descartado por el Plan White, que instauró la hegemonía del dólar sobre el sistema monetario internacional.

las transferencias puramente financieras; se limita ahora a transacciones resultantes del comercio de bienes (y servicios asociados). Así, cumple con “reducir la vulnerabilidad externa de las economías del ALBA”. Una apuesta diametralmente opuesta a la liberalización de los flujos de capital que motivó el euro.

En síntesis, el Sucre es una apuesta por facilitar el “intercambio comercial entre sus pueblos”: se emplea para reducir las barreras cambiarias y administrativas con las que chocan las pequeñas estructuras productivas; pero como pudimos apreciar, no se limita en abaratar costos de transacción ni en canalizar la mayor cantidad de operaciones comerciales posibles. Es una experiencia de reconexión de los instrumentos financieros con lo productivo y con los desequilibrios inherentes a las asimetrías productivas de los países que lo constituyen. Incluido dentro de la apuesta por construir una zona económica del ALBA, el Consejo Monetario Regional, el ente supranacional rector del Sucre, está apostando por una convergencia mucho más humilde que la macroeconómica, pero a la vez más rica: más productiva, inclusiva y unitaria, no única. Tampoco desmantela la hegemonía del dólar, pero al menos se le sustrae. Y quizá su mayor pretensión en la actualidad sea influenciar los otros sistemas de pagos¹⁶ con los que coexiste, para que dejen de ser funcionales a la realidad productiva del continente y también contribuyan a transformarla.

Complementación económica y convergencia social

Las dos herramientas descritas apuntalan una renovada forma de complementación económica, que supere las ventajas comparativas o competitivas que han convertido los otros bloques de integración en máquinas de perpetuar asimetrías.

16 Además del CPR de Aladi, que junta nueve países suramericanos, también se destaca el Sistema de Pagos en moneda local, que funciona entre Brasil y Argentina, e involucra mayoritariamente a pequeñas empresas fronterizas.

Las ventajas “cooperativas” que promueve el ALBA, por ejemplo, apelan a resignificar el intercambio alrededor de productos esenciales para la reproducción vital y social de sus pueblos, no sin aprovechar las posibilidades de intensificar las posibilidades de encadenar sectores productivos para crear valor e intercambiar saberes y tecnologías, todos destinados a la región.

Wexell (2011: 136), desde la óptica brasileña de la “integración productiva”, hizo el ejercicio de proyectar el potencial arrastre de las demandas de productos intermedios y primarios, asomando la posibilidad de encadenamientos productivos intrarregionales. Sobre este piso, las iniciativas del siglo pasado, que hoy confluyen en UNASUR, tienen el reto de entender que la complementariedad productiva entre eslabones del sector privado no garantizará beneficios sociales si el Estado, en su interlocución con los movimientos sociales, no traza apuestas estratégicas por encima de las metas cuantitativas del capital.

Luego, si es la complementación a lo que apuntamos en lo económico, creemos que la convergencia primaria debe radicar en lo social, o que la función primitiva de la integración (inter e intra nacional, de hecho) debe ser la equiparación de derechos socioeconómicos. Leyes del trabajo, sistemas de seguridad social, niveles de escolaridad, son puntos centrales para esta agenda. Así, las negociaciones económicas no solo se verían mediadas sino reestructuradas.

Lo que se ha logrado en materia de políticas sociales en Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador ha permitido avanzar en la lucha contra la pobreza y la reducción de desigualdades de ingreso. Ahora se impone un salto cualitativo hacia una agenda de políticas de mejor explotación y repartición de la riqueza (renta y riquezas naturales). He allí donde el pueblo organizado debe intervenir: discutir nuevos esquemas fiscales, tributarios y laborales.

Esto exige también lucidez en la selección de la letra pequeña de los indicadores de convergencia (Badhuri, 2009: 34). Y si lo social es la norma, deberíamos preferir el índice de desarrollo humano, o el de Gini, al PIB per cápita, o a las cifras agregadas de desempleo. Y si los tecnócratas no toleran las asimetrías de políticas cambiarias, aduaneras o fiscales, habría que contestarles que la corrección de asimetrías exige precisamente diseñar políticas asimétricas, de discriminación positiva a los menos favorecidos, y con especial énfasis en materia social y laboral.

Es ciertamente lo que le faltó priorizar con suficiente contundencia a la Unión Europea como bloque, para quien la llamada política de convergencia se resumió en invertir 3% de su PIB regional en los Fondos Estructurales que tienen la tarea de elevar todos los PIB per cápita de los países a 75% del promedio de la Unión; una causa perdida desde la entrada de los países del Este.¹⁷ La tarea de América Latina es volcar conceptual, metodológica y políticamente este “mundo al revés”.

Síntesis

En esta reflexión, hemos contrastado realidades cuantitativas y consideraciones cualitativas, con la intención de mostrar la importancia de los criterios y de los métodos para construir lo común, o al menos, las herramientas que lo sirvan. Es, a nuestro parecer, la única vía para romper con esta forma de positivismo que caracteriza la integración normada por el capitalismo; esta que cosifica las sociedades y espolia derechos humanos como extrae materias primas.

La “transición” no provendrá de una confluencia de mínimos denominadores comunes, como la que se anhela entre los

17 Lo que sí resulta digno de estudio en la política regional de la U.E. es el esfuerzo conceptual y estadístico que trabaja a partir de una nomenclatura de regiones, más que de países.

múltiples bloques latinoamericanos, aunque el acercamiento sea esencial para convertir libertades fundamentales, como la paz y “el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos”, en acuerdos “supranacionales”. UNASUR y la CELAC han asumido esta tarea. Valga, en todo caso, la advertencia europea sobre cómo la desconexión de un proyecto supranacional con lo social lleva aceleradamente al recurso de la autoridad arbitraria, no a una democracia económica arbitrada por todos.

Para que la agenda de integración regional revista un rostro humano y no se quede en una reversión del neoliberalismo hacia el desarrollismo, los bloques más reducidos y homogéneos son los decisivos. No se debe temer que nuestra América sea multipolar, máxime si así anhelamos el sistema mundo del futuro. Lo que sí cabría es una agenda mínima común de negociación con los actores determinantes del tablero internacional. Se impone entre los países de la región y Brasil, aunque sus imperativos “domésticos” no vuelvan la tarea fácil. Más allá, así como criticamos las apuestas de ojos vendados en Europa, creemos que la integración suramericana no puede asumir las suyas con ojeras: allende Occidente, China viene en camino... En época de transiciones, no basta con cuidarnos de neoextractivismos. Hemos de prevenir también la reminiscencia de neofeudalismos.

Transiciones hacia un nuevo regionalismo autónomo

Eduardo Gudynas¹⁸

Agradezco las discusiones desarrolladas en el Grupo Permanente de Trabajo, especialmente los comentarios recibidos de Edgardo Lander, Javier Gómez y Klaus Meschkat al presente texto.

Desde una perspectiva global, América del Sur sigue siendo una gran proveedora de materias primas. Para muchos, ese papel tiene consecuencias muy positivas, en tanto los altos precios de esos productos y la demanda sostenida permiten mantener el crecimiento económico. Pero también es cierto que esos estilos de desarrollo encierran serios impactos sociales, económicos y ambientales, y que, por ahora, siguen sin resolverse en su esencia los problemas de pobreza, marginación o violencia en el continente.

Esas y otras limitaciones motivan la exploración de alternativas frente a este desarrollo y, muy especialmente, frente al avance del extractivismo. No solo se busca reducir los efectos negativos, sino trascender la propia esencia de las actuales ideas dominantes sobre el desarrollo. Son, por lo tanto, propuestas de “alternativas al desarrollo”.

El presente capítulo analiza la dimensión internacional de esas propuestas, en particular para el caso sudamericano. Se estudia cómo debería reordenarse la integración sudamericana y cuáles deberían ser las posturas ante la globalización, para permitir un proceso de reducción de la dependencia extractivista. Este es un abordaje indispensable para cualquier opción alternativa continental, ya que el contexto internacional impone condiciones que,

18 Eduardo Gudynas es ecólogo social, investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), docente universitario y colabora con distintas organizaciones sociales.

por un lado, limitan esos ensayos alternativos y, por otro, refuerzan y reproducen las políticas convencionales.

El enfoque de alternativas al desarrollo sigue el marco conceptual del modelo de transiciones, presentado anteriormente (Gudynas, 2011), que incluye un conjunto amplio de medidas orientadas a erradicar la pobreza y detener la destrucción de la Naturaleza. Las secciones expuestas a continuación estudian estos componentes en América del Sur. Se insiste en la necesidad de construir un nuevo regionalismo autónomo y emprender una desvinculación selectiva de la globalización, donde varias secciones se basan, y se complementan, en un análisis reciente en Gudynas (2012).

Empujes globales

Desde el punto de vista del comercio global, el principal papel que desempeña América del Sur sigue siendo la provisión de materias primas y energéticos. Más allá de las distintas variedades de estilos de desarrollo de cada país, con mayor o menor presencia estatal e, incluso, bajo distintos discursos políticos, en todos los casos el desempeño es fuertemente extrovertido y primarizado. La incidencia de las materias primas en las exportaciones es muy alta en la Comunidad Andina (en el orden de 80% del total de exportaciones), y alta en el MERCOSUR (mayor a 50%).¹⁹ Este comercio está concentrado en unos pocos productos (por ejemplo, hidrocarburos, algunos minerales, o granos como la soja). Paralelamente, el continente sigue cumpliendo un papel menor en el comercio internacional (del orden de 3% del total global).

Este tipo de inserción internacional se debe a decisiones de los gobiernos, pero también a un contexto internacional muy parti-

19 Estos y otros datos, salvo indicación contraria, se basan en los cuadros estadísticos disponibles en Internet, del Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2011, de CEPAL (www.cepal.org).

cular que es necesario analizar, al menos brevemente. En el marco de una seria crisis económico financiera en los países industrializados, en los últimos años se observa un aumento del precio de minerales, energéticos y agroalimentos, y una demanda sostenida desde varios países, en particular del sudeste asiático.²⁰ Esa misma crisis en el norte genera un enorme volumen de capitales, que ahora se dirigen hacia otros destinos (entre ellos, América Latina) y, en lugar de usarse en emprendimientos productivos o financieros, ahora son colocados en materias primas, hidrocarburos o tierras de cultivo. La inversión extranjera directa que llega a América Latina se centra, sobre todo, en comprar activos ya existentes o en emprendimientos sobre recursos naturales (57% del total de inversiones se destinó a esos fines, entre 2006 y 2011, en América del Sur, excluyendo a Brasil; CEPAL, 2012). Este tipo de factores contribuye a una impactante proliferación de emprendimientos mineros, petroleros y agroindustriales; todos ellos representan distintas formas de extractivismo.²¹

El empuje integracionista de los últimos años no ha revertido esta orientación, ni siquiera con la llegada de los gobiernos progresistas. Paralelamente, la gobernabilidad internacional, especialmente en el plano comercial, refuerza todavía más estas tendencias. Recordemos que durante la década de los noventa se cristalizó una institucionalidad gubernamental de liberalización

20 Al respecto, véase, por ejemplo, FAO, 2011 y World Bank, 2012.

21 Este es entendido como una extracción intensa o de grandes volúmenes de recursos naturales que, en su mayor parte, son exportados sin procesamiento o con procesamiento limitado. Bajo esta definición, se incluyen emprendimientos territorializados, no solo en minería e hidrocarburos, sino también en otros sectores como agricultura, pesquerías, camaroneras, etc. El extractivismo, así concebido, no es una industria, sino una actividad primaria; no es sinónimo de economía primario exportadora, aunque éstas, sin duda, lo incluyen; y no está restringido a los países del sur, ya que se lo puede encontrar en naciones desarrolladas (por ejemplo, la minería de exportación en Canadá o Australia).

comercial y financiera, teñida de neoliberalismo, que se concretó, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio (OMC). El reciente protagonismo de otros “jugadores globales”, y en particular de China, no ha implicado cambios sustanciales en esa institucionalidad. Si bien este país se ha convertido en un importante socio comercial sudamericano, en particular como comprador de materias primas y proveedor de manufacturas,²² no ha promovido una estrategia de desarrollo alternativa, sea la prosecución de mayores estándares sociales y ambientales, o bien, mejoras en la transparencia. Así se llega a la paradoja bajo la cual el comercio sur-sur se incrementa, pero de todas maneras América del Sur no logra quebrar su tradición de exportador primarizado.

La provisión sudamericana de materias primas es parte de las llamadas “cadenas globales de mercancías” (*global commodity chains*), o “cadenas globales de valor”.²³ Estos encadenamientos parten de la extracción de los recursos naturales y su transporte a sitios donde son procesados; desde allí se insertan en otras etapas de manufacturación, para terminar en centros de distribución y venta. Son, por lo tanto, encadenamientos muy diversificados, en varios casos, muy “largos”, ya que esos procesamientos se dan entre varios países, para luego vender los productos terminados a escala planetaria. Esto hace que, en realidad, antes que cadenas, estemos frente a “redes de producción globales” (Henderson y colab., 2002). De todos modos, la apropiación de esos recursos es siempre local, y su expresión contemporánea más clara, en América del Sur, es el extractivismo.

Para poder exportar sus materias primas, los países tejen redes de transporte funcionales a esa inserción global; un claro ejemplo de esta extroversión es la Iniciativa en Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Todos estos factores explican que la región

22 Al respecto, véase Rosales y Kuwayam, 2012.

23 Para una revisión de estos conceptos, véase Henderson y colab., 2002.

quede atrapada en condiciones de comercio desigual, tanto en sus aspectos económicos convencionales, como en sus dimensiones sociales y ambientales (los precios de las exportaciones no incluyen los costos sociales y ambientales de su obtención).

Otra particularidad de la globalización reciente es la mayor evidencia de una crisis ambiental a escala planetaria, en especial por el cambio climático. La gobernabilidad global sigue sin poder manejar adecuadamente este serio problema (tal como ilustran las fallidas negociaciones de Copenhague o Cancún). Los países sudamericanos tampoco logran coordinar políticas internacionales en este frente, e incluso se observan sustanciales divergencias que van desde el aislamiento boliviano al unilateralismo brasileño. Como conclusión, la región no es un actor que lidere en el camino hacia otra gobernabilidad ambiental planetaria.

La deriva sudamericana

Al tiempo que se ha reforzado la exportación de recursos naturales hacia los mercados globales, se ha intentado fortalecer la integración sudamericana. Existe una retórica muy extendida sobre ese propósito, pero un examen desapasionado de los últimos años muestra situaciones muy contradictorias.

El comercio dentro de América Latina sigue siendo muy bajo. En efecto, el intercambio al interior de los distintos bloques es limitado (en el orden de 7% en la Comunidad Andina y de 15% en el MERCOSUR, según datos de la CEPAL). Aunque una de las metas más importantes de los procesos integracionistas es elevar el comercio intrabloque, esta no se ha logrado (la excepción más importante es la comercialización de gas boliviano hacia los países vecinos).

El estado de los acuerdos e institucionalidades regionales es, asimismo, problemático.²⁴ La Comunidad Andina y el MERCOSUR sufren serios problemas y limitaciones en el plano comercial y económico; entre ellos, constan incumplimientos de las normas, ausencia de políticas comerciales compartidas, tratos diferenciales, etc. En cambio, algunos avances se lograron en otras dimensiones, tales como acuerdos en migración o cultura.

Se ha intentado superar estas limitaciones al pasar a una escala mayor y cubrir todo el continente. No se resuelven los problemas en el bloque andino o mercosuriano, pero los Estados apuestan a la Unión de Naciones Sudamericana (UNASUR) y, más recientemente, a la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), con la esperanza de relanzar la integración. Estos grandes esquemas continentales han tenido algunos avances (por ejemplo, políticos); sin embargo, no sirven adecuadamente a las coordinaciones comerciales o políticas.

La conformación de otros agrupamientos, bajo otras perspectivas políticas, también ha tenido desempeños limitados. El caso más claro se refiere a la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), promovida por Venezuela, que es, sobre todo, una red de acuerdos de cooperación y financiamiento, y no tanto un proceso de integración.

Paralelamente, los países sudamericanos ganaron márgenes de maniobra frente a las grandes instituciones financieras globales, como el FMI o el Banco Mundial, y apostaron por sus propias “instituciones financieras regionales” (IFR). Entre estas, se incluyen la Corporación Andina de Fomento (CAF) o el Fondo de la Cuenca del Plata (Fonplata), y algunos bancos nacionales que actúan regionalmente (como el BANDES de Venezuela, o el BNDES de Brasil). En varios casos, estas IFR financian empre-

24 Para información complementaria, véase las revisiones en Altmann y Rojas Aravena, 2008; Malamud, 2004, 2009; y, Caetano, 2009.

dimientos que refuerzan la orientación extravertida y primaria del desarrollo; pueden ser proyectos mineros o petroleros, o las redes de transporte. Algunas de estas organizaciones, como la CAF, pero muy especialmente el BNDES, disponen de carteras de préstamos que superan largamente la del Banco Mundial; no obstante, su desempeño es convencional, no cuentan con adecuados controles sociales y ambientales sobre los proyectos apoyados, y son mucho más opacas en cuanto al acceso a la información, la transparencia y la participación.

Se ha intentado contar con al menos una IFR que sirviera a una perspectiva alternativa. Este ha sido el caso de las propuestas originales del Banco del Sur (financiador de otro tipo de proyectos), y de mecanismos de comercio y financiamiento regionales (expresado en la idea del SUCRE para el comercio dentro del continente).²⁵

Brasil está jugando un papel cada vez más destacado dentro del continente y a nivel global. A pesar de que las recientes administraciones se presentan a sí mismas como de izquierda (los dos gobiernos de Lula da Silva y el presente de Dilma Rousseff), el país se ha convertido en el mayor extractivista del continente, y en todos sus principales rubros (minero, petrolero y agropecuario). Esto resulta en que sus exportaciones se han primarizado (la participación de materias primas en las exportaciones brasileñas pasó de 42% en el 2000, a 63% en 2010; datos de CEPAL), y más allá de algunas intervenciones sectoriales, se repite un desarrollo convencional enmarcado en la estabilidad y ortodoxia macroeconómica (véase, por ejemplo, a Erber, 2011).

Al mismo tiempo, su política exterior no fortalece la integración, tanto en el MERCOSUR como en acuerdos continentales, debido a su rechazo al concepto de supranacionalidad. En algu-

25 Véase Paéz, 2010 y el artículo de Manuel Cereza, en este libro.

nos casos, Brasil parecería reproducir el esquema centro-periferia y espera que sus países vecinos se conviertan en sus proveedores de materias primas y energía para, a su vez, venderles sus manufacturas. A nivel global, Brasil no coordina con los países vecinos posturas sudamericanas; al contrario, se presenta a sí mismo como un *global player*, que acuerda en particular con otras “economías emergentes”, como China, India o Sudáfrica.

Este contradictorio papel se acentúa debido a la notable expansión de las corporaciones brasileñas en los países vecinos (por ejemplo, Petrobras, la minera Vale o la constructora Odebrecht), gracias a masivas ayudas financieras del gobierno, en especial desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES).

Las ideas sobre el regionalismo y la globalización

Así como América del Sur no ha logrado romper con el desarrollo basado en los recursos naturales, tampoco ha tenido mucho éxito en generar posturas muy distintas sobre su propia integración y la globalización. Puesto que, más allá de las variantes, prevalecen las ideas del desarrollo como crecimiento económico, se mantiene la defensa de la globalización comercial y económica como un hecho esencialmente positivo. En ciertos países, han persistido muchas de las reformas de mercado, propias de las décadas de los ochenta y noventa; en otros, aunque han existido cambios, a veces importantes, se preservaron algunos nichos de actuación ortodoxos, como pueden ser aquellos englobados bajo los equilibrios macroeconómicos o la liberalización comercial, los que permiten blindar las economías para, así, insertarlas globalmente. Estas posturas tienen claros antecedentes neoliberales y contribuyen a reducir el campo de la política. La prosecución de exportaciones sigue operando bajo la institucionalidad que provee la Organización Mundial del Comercio (OMC), y otros acuerdos en comercio e inversiones. En la medida que las transiciones hacia

las alternativas al desarrollo implicarán revisar estas formas de inserción global, de un modo o de otro, se vuelve necesario retomar la preeminencia de la política.

Paralelamente, en el terreno de la integración regional, si bien hay distintos abordajes (desde la insistencia con los TLC de Chile y Colombia, al bolivarianismo venezolano),²⁶ persisten las ideas básicas arraigadas en el llamado “regionalismo abierto”, promovido por la CEPAL.²⁷ Este es un regionalismo funcional a la globalización y asigna un fuerte papel a la liberalización comercial. En momentos agudos de la crisis económico financiera global, los países sudamericanos enfrentan tensiones en este campo, ya que por un lado reclaman la liberalización en la OMC, y, por el otro, intentan proteger sus economías domésticas por medio de aumentos arancelarios o restricciones a las importaciones (el caso extremo es Argentina).

Dimensión internacional de las alternativas al desarrollo

Las alternativas al actual desarrollo extrovertido y primarizado requieren cambios sustanciales, tanto hacia el interior de los países, como en sus relacionamientos continentales y globales; por lo tanto, dichas alternativas deben buscar superar, por ejemplo, la dependencia extractivista, e incluir cambios en esas dimensiones internacionales. Las actuales políticas de desarrollo no están acotadas al interior de cada país, sino que en todos los casos se articulan, refuerzan y reproducen en contextos internacionales. En ese sentido, si no se consideran esos contextos internacionales, cualquier propuesta de alternativa será incompleta.

Las propuestas que vienen siendo consideradas en los últimos años se enmarcan en las llamadas “transiciones hacia alternati-

26 Véase la revisión de Malamud (2004) o las entradas sobre “regionalismo” en Gudynas y Buonomo (2007).

27 Véase CEPAL (1994).

vas al desarrollo”. El concepto “alternativas al desarrollo” se contrapone al de “desarrollos alternativos”. Este segundo concepto alude a reformas de distinto tipo que, sin embargo, mantienen la esencia del desarrollo contemporáneo, entendido como progreso lineal, modernizante, de base esencialmente material, basado en la apropiación de la Naturaleza, mediado por la ciencia y la técnica, y apuntan al crecimiento económico como generador clave del bienestar. Desde esta perspectiva, el bienestar se logra mediante ingresos monetarios y consumo. Una de las expresiones más claras de estas posturas se expresa en el extractivismo, que se ha diseminado en casi todos los países latinoamericanos. La apuesta por las explotaciones mineras, petroleras y los monocultivos es presentada como necesaria para aumentar las exportaciones, atraer inversiones y, desde allí, alimentar el crecimiento económico. Es evidente que, en estos estilos, los componentes internacionales son factores determinantes; esto es, las demandas globales de materias primas o los flujos internacionales de capital.

En cambio, las “alternativas al desarrollo” cuestionan el propio concepto de desarrollo y abandonan esas posturas para transitar hacia nuevas alternativas. Consecuentemente, en esa búsqueda se otorga un papel central a las salidas postextractivistas. Estas alternativas deberán ofrecer medios para remontar las condiciones globales y, a la vez, generar un nuevo marco internacional que las haga posibles.

Las transiciones hacia las alternativas al desarrollo que se discuten, en este marco, incluyen un conjunto diverso de políticas, estrategias, instrumentos y acciones, en distintos planos, desde el económico al social. Ejemplos enfocados en el postextractivismo ya han sido presentados en otros sitios (por ejemplo, Gudynas, 2011). Estos son introducidos como “transiciones”, para reconocer, de esta manera, que deberán construirse en varios frentes. Algunos de ellos tendrán que enfrentar obstáculos sustantivos y necesitarán una amplia base de consenso democrático, en la

medida que no pueden ser impuestos. Como ha sido discutido en otros documentos, estas transiciones son, al mismo tiempo, postcapitalistas y postsocialistas, y apuntan a que el bienestar humano y la conservación de la Naturaleza recuperen su centralidad. Los cambios en discusión implican mucho más que un mero redireccionamiento del comercio internacional o la industrialización, ya que defienden otros patrones de producción y consumo.

Indiscutiblemente, uno de los aspectos a considerar es el contexto internacional. Las opciones de cambio deben encarar factores como los flujos de capital o los altos precios de las materias primas. Por ello, las transiciones hacia alternativas al desarrollo requieren que su base conceptual ofrezca opciones novedosas sobre integración regional y globalización.

El abordaje internacional de estas transiciones se basa en los siguientes postulados:

- 1) Los cambios nacionales deben ser coordinados entre conjuntos de países, para hacerlos posibles y asegurar su permanencia. La salida del actual patrón productivo, basado en el extractivismo y las exportaciones, requiere diversas estrategias y medidas nacionales, que implican desde altas y eficientes exigencias sociales, ambientales y territoriales, hasta una reforma tributaria. Para evitar que el país que aplique esas medidas quede aislado, sufra de asimetrías o enfrente *dumping* social y ambiental desde las naciones vecinas, es indispensable que los grupos de países vecinos tomen el mismo rumbo. A su vez, las medidas de transición se sostendrán en el tiempo si se coordinan y armonizan en el continente.

- 2) Recuperación de la autonomía frente a la globalización. Dado que la globalización convencional encierra muchas de las estructuras y procesos que imponen o condicionan el desarrollo, es necesario recuperar las capacidades para desacoplarse de esa subordinación. Factores como los precios de las materias primas, las demandas globales, la institucionalidad multilateral o

las corporaciones transnacionales, son parte de esa globalización. En ese sentido, un objetivo esencial debe ser alcanzar la autonomía frente a la globalización, ser capaces de lograr desvinculaciones en aquellas áreas en las que se considere necesario, y en los casos en los cuales persistan los vínculos globales, que éstos sean de otra cualidad y sirvan a otros tipos de estrategias. Este proceso se presenta aquí como una “desvinculación selectiva de la globalización”.

3) Transitar a un “regionalismo autónomo”, bajo una reorientación económica, productiva y comercial a escala continental. Puesto que las transiciones que proponemos incluyen una reducción sustancial de la extracción de recursos naturales, es fundamental un reordenamiento productivo y económico, en el que otros sectores adquieran mayor relevancia, en especial el agropecuario y la industria. Pero estos sectores deberían reordenarse bajo una escala regional, para potenciarse, lo que demanda un nuevo tipo de integración. Este nuevo regionalismo se basa en las aptitudes ecológicas y productivas de las distintas biorregiones en el continente, su complementación, la estructuración de cadenas de producción con eslabones compartidos entre los países, políticas sectoriales supranacionales y otras medidas. En tanto es un nuevo regionalismo, que además debe apuntar a desacoplarse de la globalización, se lo presenta aquí como “regionalismo autónomo”.

A partir de este marco conceptual, en las secciones siguientes se exponen algunos de los componentes destacados de un nuevo regionalismo sudamericano, para permitir las transiciones de salida al extractivismo. Como complemento, en la Tabla, se presenta una selección de medidas específicas para lograr estos cambios.

Cambios nacionales articulados con alternativas regionales

Las transiciones hacia alternativas al desarrollo incluyen un conjunto amplio de medidas en varios frentes, que se deberían aplicar de manera coordinada entre ellas. Sobre la base de esa visión

de conjunto, es posible comenzar el análisis que recupere, como ejemplo, algunas de las que son presentadas como medidas de “emergencia” y “urgencia”, para enfrentar cuanto antes las consecuencias más graves del desarrollo dominante actual. Éstas incluyen una aplicación rigurosa de las exigencias sociales y ambientales de los emprendimientos productivos, una corrección ecológica y social de los precios, y reformas tributarias sobre los recursos naturales. Medidas de este tipo son postuladas para la transición del actual “extractivismo depredador” a un nivel sensato de actividades extractivas.²⁸

Si estas medidas son aplicadas por un país, en forma unilateral, sus posibilidades de éxito son bajas, ya que fácilmente sería aislado de los flujos comerciales y financieros, varios emprendimientos productivos se mudarían a otros países, en búsqueda de exigencias más ligeras, y se reduciría el ingreso de inversiones. Estos y otros factores impactarían seriamente en la economía nacional. A su vez, países vecinos podrían flexibilizar todavía más sus requerimientos sociales y ambientales, para captar más inversores (aunque este tipo de *dumping* supondría mayores impactos sociales y ambientales). Por ello, es necesario que las medidas transicionales, como aquellas enfocadas en elevar las exigencias socioambientales o que internalicen las externalidades en los precios, sean llevadas adelante por conjuntos de países. Si esas mayores exigencias son defendidas por varios países, se reducen las opciones para las corporaciones transnacionales o los compradores globales y, en consecuencia, aumentan las capacidades de negociación para las naciones sudamericanas.

El problema radica en que una coordinación de exigencias “hacia arriba” es casi imposible en los actuales marcos regionales. Los gobiernos, en general, están flexibilizando sus requerimientos

28 Estos aspectos se describen en Gudynas (2011).

“hacia abajo” y, como consecuencia, los bloques regionales en sus dinámicas actuales, no pueden revertir ese proceso.

Por lo tanto, es indispensable generar un nuevo tipo de integración regional, que permita instalar altas exigencias sociales, económicas y ambientales, en conjuntos de países. Esto incluye la coordinación y armonización de los requerimientos, procedimientos equivalentes de monitoreo y control, y canales adecuados de acceso a la información y participación. Entre las medidas más urgentes, se encuentra el establecimiento de estándares sociales y ambientales mínimos regionales, para la explotación minera o petrolera. Este tipo de coordinación también debe prestar especial atención a las zonas de frontera y las cuencas compartidas entre países. Diversos emprendimientos extractivistas de alto impacto se ubican en esas zonas (es el caso de la minera Pascua Lama, en los Andes de Argentina y Chile), o bien existen impactos transfronterizos (por ejemplo, las represas brasileñas en el río Madera afectarán a Bolivia).

Estas medidas transicionales se deben complementar con otras que, a su vez, pertenecen a otros campos. Así, es necesario recuperar las capacidades de regulación y control sobre los flujos de capital, no solo en cuanto a sus destinos productivos, a fin de superar el actual énfasis extractivista, sino para evitar usos especulativos. Este objetivo también debe ser realizado de forma articulada por grupos de países, para evitar que cualquier nación quede aislada. Las actuales instituciones financieras regionales son la base para estos cambios, ya que manejan importantes financiamientos, muchos de ellos, de capitales propios del continente; no obstante, dichas instituciones deben abandonar sus actuales prácticas convencionales y optar por otras más transparentes, enfocadas en proyectos que cumplan altos estándares sociales y ambientales, de largo plazo, mejor articulados con las políticas públicas, etc.

Un nuevo regionalismo para recuperar la autonomía

Las medidas transicionales que se ejemplificaron anteriormente, expresan, tanto en sí mismas como en su conjunto, una perspectiva conceptual muy distinta a las ideas prevalecientes de un “regionalismo abierto”, en el que la integración continental es un proceso que ofrece mediaciones para adentrarse en la globalización. Esta última es una postura esencialmente comercial, que otorga poca relevancia a los aspectos socioambientales o a la intervención estatal. Es cierto que las posiciones sobre comercio e integración de muchos países son distintas; pero si se observa con atención, detrás de esas diferencias se encontrarán las coincidencias en el regionalismo abierto cepalino, en administraciones tan distintas como la de Chile o Brasil.

Un esquema de regionalismo abierto y, en especial, los TLC (tratados de libre comercio, como los firmados por Chile, Perú y Colombia con EE.UU.), hacen imposible una transición hacia las alternativas al desarrollo. Esta incompatibilidad se debe a que ese regionalismo se enfoca en aspectos comerciales, no otorga la relevancia necesaria a los componentes sociales, ambientales y políticos, y no permite articular los sectores productivos de los distintos países, etc. Tampoco ofrece alternativas para lidiar con la globalización, sino que apunta a profundizar los vínculos con ella. Al contrario, las medidas transicionales que proponemos buscan cambios sustanciales en los componentes socioambientales y el desacoplamiento de la globalización. El regionalismo abierto no asegura marcos institucionales supranacionales que puedan servir para coordinar regulaciones socioambientales y la producción, y esto es indispensable para salir de la dependencia extractivista (Gudynas, 2005).

El concepto alternativo defendido en las transiciones es el de un “regionalismo autónomo”. Resultó de los primeros análisis sobre alternativas en el Cono Sur, que estaban más enfocadas en

el desarrollo sostenible (Gudynas, 2002). De alguna manera, se opone al concepto cepalino, pues subraya la importancia de la autonomía frente a la globalización. La integración continental debe organizarse de forma que contribuya a la autonomía, y esto implica organizar la economía y la producción bajo otras condiciones. Se busca romper con la dependencia global, ya que ésta es un factor clave en la reproducción de un desarrollo subordinado, y un impedimento para la generación de alternativas. Este nuevo regionalismo, asimismo, permitiría reducir las exportaciones de materias primas, por medio de reconversiones productivas compartidas entre distintos países.

Esta es una estrategia regional muy distinta. Plantea que la apropiación de materias primas tenga como principal destino las necesidades y demandas continentales, y puesto que éstas son mucho más modestas que las actuales demandas globales, reforzaría la reducción extractivista. Así, la tasa de extracción de recursos sería menor y allí donde se mantiene, estos recursos podrían ser aprovechados por más largo tiempo a nivel regional. A su vez, esos recursos deberán estar directamente dirigidos a cadenas productivas, sean agroalimentarias como industriales, nacionales o regionales. Con esto, sería posible romper con el actual vínculo tortuoso de exportar a otros continentes enormes volúmenes de recursos naturales para, seguidamente, comprarles sus manufacturas.

En el regionalismo autónomo se parte de una perspectiva territorial basada en biorregiones. Estas son entendidas como regiones delimitadas por atributos ecológicos, sociales y productivos, que cubren más de un país, y se expresan en las grandes escalas continentales; ejemplos son los páramos, el Altiplano, Chaco o Pampas.²⁹ Cada una de estas bioregiones posee ciertas aptitudes productivas, entendidas como aquellas que resultan de

29 Esta idea estuvo inicialmente inspirada, en parte, en el movimiento “bio-regional”. Es importante subrayar que la definición de biorregiones que

las mejores opciones de aprovechamiento de los recursos naturales con los menores impactos socioambientales. En lugar de imponer usos productivos sobre la Naturaleza, bajo esta perspectiva es la producción la que se tiene que adaptar a las posibilidades ecológicas de cada biorregión. Sobre la base de estas condiciones, se pueden establecer complementariedades y articulaciones productivas entre las diferentes biorregiones.

De esta manera, el regionalismo autónomo no rechaza el comercio internacional, pero lo reordena a partir de las complementariedades y articulaciones de la producción entre esas diversas biorregiones. La relevancia del comercio global se reduciría y aumentaría la proporción del comercio intrarregional. Paralelamente, la composición del comercio, bajo estas medidas transicionales, permitiría reducir drásticamente la proporción de recursos no renovables y aumentar la de alimentos y manufacturas. Sin duda, ese tipo de comercio, a su vez, estará limitado por sus costes energéticos y ambientales, e involucrará distancias menores.

Bajo el regionalismo autónomo, los sectores productivos se organizan con eslabones o componentes compartidos entre los países. Su propósito es no repetir las asimetrías comerciales entre proveedores de materias primas y vendedores de manufacturas o bienes de capital. Expresado de otra manera, el papel de exportadores primarizados, como primer paso en cadenas globales de *commodities* o cadenas globales de valor, perdería su prevalencia; y, en cambio, se fortalecerían las redes productivas dentro del continente.

Este nuevo regionalismo encierra varias consecuencias en distintos sectores. Las vinculaciones comerciales con otros continentes se reducen drásticamente, a medida que aumentan las complementaciones dentro de la región. Eso requiere contar con

recoge el presente capítulo no se corresponde con algunas regionalizaciones ecológicas o paisajísticas que se han hecho dentro de algunos países.

estrategias continentales en agroalimentos, y la soberanía alimentaria pasa a ser una meta regional antes que nacional. Los recursos energéticos se utilizarán regionalmente antes que globalmente; por ello, es indispensable contar, asimismo, con una política energética supranacional. (Véase artículo de Pablo Bertinat, en este libro.) Propuestas similares se pueden derivar para otros sectores, desde este mismo tipo de razonamiento. Así, el regionalismo autónomo tiene algunas resonancias con las ideas de autosuficiencia a escala nacional, o de “vivir con lo nuestro” (para utilizar palabras del argentino Aldo Ferrer, 2002), aunque en este caso, aplicadas a grupos de países. Finalmente, no hay que olvidar que estas y otras medidas indicadas anteriormente se complementan con aquellas explicadas en la sección anterior.

La implantación de este nuevo regionalismo para apuntalar las transiciones hacia las alternativas al desarrollo impone cambiar las actuales posturas gubernamentales. Es necesario dejar atrás la insistencia en el papel de proveedores de materias primas. Para el efecto, será necesario coordinar la producción en varios sectores, entre varios países; y esto solo es posible con algún nivel de supranacionalidad. Ello supone dar un giro importante en las posiciones actuales que, aunque alaban la integración, rechazan las obligaciones supranacionales. Plantea desafíos, en particular para Brasil, ya que debería eliminar las medidas que reproducen relaciones de subordinación dentro del continente, para permitir la articulación de su industria con las de los países vecinos, y comenzar a negociar acuerdos vinculantes con sus vecinos.

Alternativas frente a la globalización

Las alternativas al desarrollo deben ofrecer opciones concretas de cambio, ante los principales factores por los cuales la globalización contemporánea condiciona el desarrollo, tales como los precios de las materias primas, las reglas de comercio o los flujos de capital (éstos y otros se describieron inicialmente, en el presente

capítulo). Sea por medio de agentes privados, como las empresas o los inversores, o a través de los gobiernos que participan en la gobernanza internacional, la globalización actual despliega mecanismos que orientan, condicionan y manejan aquellos flujos de capital, mercancías o información. Los estilos nacionales pasan a estar determinados por esos factores globales, incluso bajo los gobiernos de la nueva izquierda. Esta subordinación global acentúa las asimetrías económicas, reproduce términos comerciales desiguales y llega a impedir cambios estructurales en los países sudamericanos. Los reclamos ciudadanos, aunque tengan éxito en sus exigencias políticas, muestran enormes dificultades para revertir la institucionalidad y los compromisos multilaterales; de ahí que los países sigan atrapados en su papel de proveedores de materias primas, desde hace décadas.

Las transiciones propuestas requieren, por lo tanto, ofrecer una respuesta a estas condiciones. Se debe comenzar por señalar que aquí no se acepta que la globalización convencional sea un proceso en esencia positivo o indispensable. En ese sentido, las transiciones alternativas se apartan de las posturas propias de la liberalización comercial convencional y buscan ganar autonomía frente a esas condicionalidades internacionales.

Existen varias propuestas de ruptura con la globalización, entre ellas, la “desconexión” de Samir Amin (1988) o la “desglobalización” de Walden Bello (2002). Esas y otras propuestas ofrecen aportes significativos para la construcción de alternativas, pero también es importante reconocer sus limitaciones, especialmente porque en ellas se siguen manteniendo elementos típicos de la ideología del progreso. La apuesta por un orden policéntrico tiene muchas potencialidades, pero puede terminar atrapada en otro tipo de extractivismo o desarrollismo; por ejemplo, bajo el comercio sur-sur o, incluso, dentro de cada continente. Existen algunos síntomas de esa problemática, como las asimetrías en las relaciones comerciales con China o el papel de Brasil dentro

del continente. Es necesario, por tanto, ubicar las alternativas a la globalización como parte de una alternativa más allá del extractivismo, donde se rompa con la ideología del progreso económico.

La recuperación de la autonomía frente a la globalización no será concedida espontáneamente por los actores globales, sino que tendrá que ser conquistada desde el continente. Será una tarea difícil, aunque la actual crisis del capitalismo global abre nuevas oportunidades. Podría desplegarse más rápidamente si hay cambios sustanciales en otros continentes, que apunten en la misma dirección (por ejemplo, un vuelco en el balance político en los países industrializados, donde éstos inicien sus propias transiciones alternativas). Pero hay que estar preparados en la eventualidad de que esos hechos no ocurran, o bien, se inicien muy tardíamente. Para ello, la región debe estar dispuesta a desglobalizarse por sí sola. Tampoco puede desecharse la posibilidad de una crisis encadenada, que afecte a las economías asiáticas y desvanezca el actual auge de las materias primas, lo que, a su vez, limite drásticamente las opciones económicas para América del Sur. En este caso, un agravamiento de la crisis puede obligar a una desglobalización forzosa. Sea de una manera o de otra, esa desvinculación necesariamente deberá ser una tarea coordinada y acompasada entre conjuntos de países, para que pueda alcanzar un umbral que le permita fructificar.

Estas transiciones proponen una desvinculación selectiva de aquellos procesos y relaciones más negativos para la región, donde se originan y reproducen las asimetrías e imposiciones. Pero no se postula un aislamiento de los países o del continente. La selectividad también se centra en mantener vínculos globales en aquellas áreas que se consideren útiles o necesarias. Ejemplos posibles son la circulación mundial de expresiones culturales, programas de asistencia en ciencia y tecnología, distintos tipos de solidaridad internacional (que pueden ir desde la ayuda alimentaria hasta la asistencia para lidiar con el cambio climático), e incluso, el

comercio con algunos excedentes posibles, en aquellos sectores viables bajo las nuevas condiciones sociales y ambientales.

Para que esta desvinculación selectiva sea posible, es indispensable que los países sudamericanos recuperen su autonomía frente a la globalización. Dado que, actualmente, estos países están subordinados a la globalización en varios planos, en cuestiones como las reglas comerciales o los acuerdos sobre inversiones, las transiciones deben ofrecer los medios para romper con esas condicionalidades internacionales. A continuación, se comentan algunos elementos centrales en esta tarea.

Los países sudamericanos deben cambiar sus posturas sobre la institucionalidad que regula el comercio global, en varios frentes. Entre ellos, se pueden indicar algunos ejemplos ilustrativos. Primero, se debe abordar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y sus acuerdos, ya que éstos brindan las reglas básicas mundiales. Actualmente, todos los gobiernos sudamericanos reproducen el llamado a una liberalización generalizada del comercio y abandonan sus reclamos en sectores como inversiones o derechos de propiedad intelectual; incluso, rechazan el uso de medidas proteccionistas, a pesar de que éstas son necesarias en nuestro continente.

En segundo lugar, es necesario analizar los acuerdos comerciales con países de otros continentes; eso implica comenzar por la revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC) convencionales. Estos TLC, en varios casos, incluyen medidas de liberalización comercial y de protección de inversiones que profundizan la subordinación sudamericana.

Siguiendo estas posturas, deben implantarse reformas que operen en el mismo sentido en otros ámbitos, tales como las instituciones financieras internacionales (por ejemplo, el Banco Mundial o el FMI).

En tercer lugar, la institucionalidad global tejida por los países está, a su vez, articulada con agentes empresariales: corporaciones

transnacionales o fondos de inversión. Estos aprovechan continuamente las ventajas que consiguieron en el pasado reciente (en especial, durante la década de los noventa), y refuerzan un tipo de globalización que les resulta funcional, a través de acuerdos de protección de inversiones o normas de propiedad intelectual.

Este tipo de propuestas exigen, a su vez, identificar medidas concretas que permitan comenzar un proceso transicional. En ciertos casos es posible recuperar experiencias del pasado reciente, que permitirían avanzar en el sentido de las alternativas. Un ejemplo se refiere a la creación de organismos internacionales específicamente enfocados en materias primas, que fue lanzada en 1976, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en su Programa Integrado para las *Commodities*. Su objetivo era muy ambicioso: regular la producción, oferta, demanda y precios en los mercados globales. Se pusieron en marcha acuerdos para café, cocoa, caucho, entre otros, aunque su desempeño tuvo altibajos. A fines de la década de los noventa, se abandonó la intención de regular los mercados. En la actualidad, existe un conjunto de los llamados “organismos internacionales en bienes primarios” (International Commodity Bodies, ICB), pero solo cumplen funciones de información.³⁰ Estos organismos, por lo pronto, no desempeñan papeles decisivos en el comercio global; no obstante, toda esta iniciativa demuestra que existen muchos márgenes de maniobra disponibles para los gobiernos. Si hace unas décadas atrás los gobiernos estaban dispuestos a regular el comercio mundial de materias primas, nada impide relanzar esa idea.

30 Actualmente existen organizaciones o consejos, por ejemplo, sobre cacao, café, algodón, azúcar, granos y maderas tropicales; y, grupos internacionales de estudio sobre caucho, plomo y zinc, níquel, y cobre, entre otros. Véase en UNCTAD, en <http://archive.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intlItemID=5391&lang=1>

A propósito del ejemplo citado, cabe realizar un comentario: la experimentación de nuevos ordenamientos en una agencia de Naciones Unidas no fue un hecho aislado. En realidad, existen muchos otros ejemplos de ideas innovadoras que se intentó aplicar en las décadas de los sesenta y setenta. Es más, en algunos casos, las propuestas presentadas en aquel entonces están adelante de muchas de las ideas que se manejan en la actualidad. Así, en 1996, el BID presentó un reporte no oficial, aunque firmado por su presidente, el chileno Felipe Herrera, sobre una integración multidimensional que apunte a un “desarrollo autosustentado” y asegure que, para fines del siglo xx, los pueblos latinoamericanos gocen de los “niveles económico-sociales que hacen posible la tecnología contemporánea” (BID, 1966). Sus propuestas llegaban incluso a defender una “unidad monetaria” continental. El punto que deseo subrayar con este ejemplo es que existen muchas buenas ideas en el pasado reciente, y que, en algunos casos, brillan por su audacia e innovación; lamentablemente, muchas de ellas han quedado olvidadas, mientras que este espíritu integracionista no se ha recuperado plenamente.

Retomando la discusión de la institucionalidad global, es necesario rescatar las ideas y el espíritu de aquellas propuestas, actualizarlas y ponerlas en ejecución, para lograr otro tipo de regulación del comercio internacional y el flujo de inversiones. En cambio, temas más recientes, como el cambio climático, imponen transformaciones todavía más radicales en la gobernanza mundial.

En cuarto lugar, se debe impulsar cambios sustanciales en la gobernanza del flujo internacional de capitales. Esto es importante no solo para erradicar las prácticas especulativas, sino también para abandonar muchos convenios actuales, que otorgan prerrogativas desmedidas a los inversores (bajo el rótulo de “derechos” de los inversores), y la gobernanza actual que los sostiene (como el consejo global de arbitrajes de disputas CIADI o Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

Esos mecanismos son funcionales a la liberalización comercial, reproducen las asimetrías de la globalización y, por si fuera poco, imponen condiciones a los países, lo que limita sus capacidades de regularlas y controlarlas. Esta gobernanza global ha legitimado el reconocimiento de los “derechos” de los inversores (casi siempre empresas transnacionales), en un plano equivalente a los Estados; en consecuencia, los inversores pueden demandar a los Estados e, incluso, obligar a cambiar sus normas. Varios países sudamericanos están limitados por esos acuerdos y optan por no imponer más regulaciones sociales, económicas o ambientales, para evitar demandas internacionales. Tan solo para ilustrar la situación, los países latinoamericanos representan aproximadamente 10% de los miembros en el CIADI; sin embargo, son objeto de aproximadamente la mitad de las demandas.

Este tipo de gobernanza global es inaceptable. Las alternativas requieren cambios sustanciales en este frente. Algunos son urgentes, como abandonar el CIADI y otros acuerdos similares. Algunos gobiernos sudamericanos ya han dado este paso (por ejemplo, Bolivia y Venezuela), lo que demuestra que puede ser replicado. Otro cambio imperativo consiste en implantar mecanismos de transparencia, para acabar con la corrupción asociada con algunas megainversiones.

Estas y otras medidas deben articularse alrededor de un cambio fundamental de perspectiva en el tratamiento de la inversión extranjera. Los Estados deben volver a contar con todos los instrumentos y poderes para controlarla. No pueden estar sujetos a las imposiciones de los inversionistas, como sucede en la actualidad; al contrario, deben disponer de los instrumentos para decidir qué tipo de inversión desean recibir, cuáles son sus prioridades, y poder controlarla en su desempeño, sin ser acusados de “trato discriminatorio”. No basta con que las medidas transicionales postulen la recuperación del control sobre los flujos de capital; éste debe priorizar emprendimientos de alta calidad social

y ambiental, la diversificación productiva (en lugar de insistir, por ejemplo, en el extractivismo), con especial atención en los agroalimentos y la energía. A su vez, todo este esfuerzo debe encaminarse, en forma coordinada, por grupos de países, por las razones que se explicaron anteriormente.

Un aspecto destacado para lograr desvinculaciones selectivas de la globalización, consiste en generar alternativas a las cadenas y redes globales de producción. Esos encadenamientos organizan los flujos de recursos, mercaderías, servicios, capital e información, de una manera tan potente, que los esfuerzos de nacionalización productiva quedan atrapados. Una muestra de esto se encuentra en las empresas estatales sudamericanas, especialmente en las petroleras: el ser nacionales constituye un paso adelante; no obstante, han quedado atrapadas en esas cadenas globales de *commodities*. Es más, su eficiencia y rentabilidad son entendidas desde esos conceptos propios de las economías capitalistas; por lo tanto, terminan repitiendo la externalización de los impactos sociales y ambientales. Se asemejan cada vez más a las corporaciones transnacionales clásicas, lo que explica la oposición social que ya enfrentan varias de ellas.

Las transiciones postulan cambios sustanciales en el desempeño empresarial, para que los criterios de evaluación se enfoquen en los retornos sociales y ambientales; en la generación de empleo, antes que en los dividendos; y, en el largo plazo, antes que en la inmediatez. Al mismo tiempo, las medidas que proponemos deben impulsar encadenamientos productivos no solo muy distintos (en el sentido de generar otro tipo de productos), sino dedicados especialmente a Sudamérica. Por lo tanto, es necesario desvincularse de algunas cadenas globales de producción, y pasar de esas cadenas “largas” a otras más “cortas”, en tanto sus nodos se encuentran, sobre todo, en América del Sur. Paralelamente, antes que una organización del tipo “cadena”, debe priorizarse “redes”, para asegurar la mayor participación posible de distintos países.

Estas redes regionales de producción deben dar preferencia a otros sectores y estructurarse alrededor de otras mercaderías. No tiene sentido postular una alternativa global y regional, mientras se sigue un modelo de desarrollo apegado al extractivismo. Es necesario pasar a un postextractivismo, enfocado en otros sectores productivos, como el agroalimentario, y otros modos de producción. En ese caso, las redes productivas alternativas deberían avanzar, por ejemplo, en una agropecuaria menos intensiva en el consumo de agroquímicos e intensa mecanización; hacia prácticas orgánicas, mayor empleo y menor dependencia de hidrocarburos (ver entrevista con José Cueva y Luis Andrango, en este libro). La fase industrial, en este caso, debería organizarse, en primer lugar, alrededor de alimentos, entendidos como tales antes que como mercancías, y que contribuyan a la reducción de los déficits de nutrición que padecen varios países.

Autonomía, soberanía y supranacionalidad

Las propuestas de transición incluyen cambios importantes en la institucionalidad actual de los esquemas de integración. Es necesario lograr algún tipo de supranacionalidad y el establecimiento de políticas comunes regionales. Si bien esta posibilidad está contemplada en el marco de la Comunidad Andina, nunca fue efectivizada; y en el MERCOSUR es muy dificultosa, en tanto es un acuerdo intergubernamental. Aunque los gobiernos apelan a un discurso sudamericanista o bolivariano, e incluso se postula a la UNASUR como una “unión”, en realidad no se contempla la supranacionalidad ni una coordinación estrecha en cuestiones económicas o productivas. Estas resistencias a la supranacionalidad son comprensibles, en tanto se limita la soberanía nacional: cada país debería acatar normas de un nivel superior, y eso limitaría las opciones de desarrollo propias.

Es tiempo de comenzar a analizar estos argumentos desapasionadamente. Comencemos por aclarar que no es bueno man-

tener el rechazo a esa coordinación estrecha invocando al desarrollo, pues este es justamente el problema básico que se intenta superar. Asimismo, debe admitirse que la supuesta soberanía actual, que se dice debe protegerse, es en realidad muy limitada. Nuestros países mantienen una soberanía formal; son mucho más débiles de lo que usualmente se admite, en especial, en los temas económicos, comerciales y financieros (esto incluso sucede con Brasil).³¹ Un examen cuidadoso muestra que los apegos a la idea de soberanía clásica tienen un sustento limitado. Por eso, muchas veces, antes que expresiones sustantivas, se convierten en una excusa repetida para evitar profundizar la integración. A su vez, las nuevas condiciones ambientales sudamericanas y globales demandan que otros componentes de las viejas acepciones sobre la soberanía sean redefinidos, en tanto se comparten ecosistemas continentales e, incluso, un mismo ambiente global.

Las transiciones buscan superar esas tensiones al postular un nuevo balance entre soberanía nacional y autonomía regional. Se deben ceder porciones de soberanía de cada país, para lograr así mayores autonomías nacionales y como grupos de países. Dicho de otra manera, se deberían ceder elementos de soberanía nacional, para adquirir una autonomía regional que permita mantener una estrategia postextractivista viable.

La relevancia de la autonomía, un componente señalado repetidamente en el presente capítulo, no es un tema ajeno a los debates sobre la integración. Aunque no es posible revisar todas esas expresiones, es necesario rescatar al menos algunos antecedentes claves, útiles para las transiciones. Por ejemplo, una teoría de la autonomía fue pensada por el argentino Juan C. Puig y el

31 Aquí se entiende la soberanía enfocada en las capacidades de los Estados para actuar a nivel internacional, mientras aseguran ciertas estructuras y funciones dentro de su frontera. Véase esta perspectiva y sus críticas en Krasner, 2001.

brasileño Helio Jaguaribe (véase la revisión de Di Masi, 2002). A manera de ejemplo, Puig entendía que la autonomía es la capacidad de la nación para optar, decidir y obrar por sí misma. Bajo las transiciones, es posible alcanzar autonomía a partir de acciones coordinadas y complementadas entre grupos de países; un nuevo regionalismo, con las complementaciones y articulaciones descritas anteriormente, es necesario para alcanzar esa meta.

Es necesario advertir que aquí no postulo una supranacionalidad al estilo de la Unión Europea, en tanto ésta se centró en asegurar los flujos de capital y la expansión empresarial dentro de su propio territorio, a costa del debilitamiento de la construcción de ciudadanía y de democracia del bloque. La actual crisis que se vive en esa región deja en claro esos déficit democráticos y la imposición de medidas económicas, que recuerdan los ajustes neoliberales sudamericanos de décadas atrás.

El redimensionamiento de la soberanía y la autonomía contribuirá a alcanzar acuerdos vinculantes supranacionales, capaces de permitir, por ejemplo, el manejo coordinado de recursos claves o de cuencas compartidas; el aprovechamiento compartido de energéticos y alimentos; o el establecimiento de cadenas productivas con eslabones en todos los países. Esta tarea es compleja; sin embargo, el actual discurso integracionista ofrece algunas opciones que deberían ser profundizadas.

Este tipo de cambios de perspectiva no es sencillo. Un buen ejemplo es el reciente análisis del vicepresidente de Bolivia, A. García Linera, sobre la geopolítica y el desarrollo en la Amazonía (García Linera, 2012). Aunque la retórica invoca, una y otra vez, una geopolítica de reacción frente a condiciones externas, su propuesta concreta para la región es, por el lado económico, acentuar el extractivismo. Con ello, se reproduce la subordinación comercial y las economías de enclave y, por el lado político, se legitima ese desarrollo convencional, a partir de la captación de parte de los excedentes, para asistencias económicas a los pobres, mien-

tras se debe acallar las demandas ciudadanas y etiquetarlas como subordinadas a los intereses extranjeros. Estas posturas son muy contradictorias, ya que la insistencia en seguir vendiendo materias primas es, sin duda, funcional a la economía global, mientras que las demandas ciudadanas expresan casi siempre la resistencia a ella. Esto deja en claro la profundidad de las raíces de las estrategias convencionales del desarrollo.

Tabla. Ejemplos de medidas concretas de un regionalismo autónomo para las alternativas al desarrollo

<ul style="list-style-type: none"> • Exigencias ambientales y sociales, frente a emprendimientos productivos, armonizadas y coordinadas entre los países.
<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de corrección ecológica y social de los precios de las materias primas, coordinados y complementarios entre los países.
<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos compartidos y equivalentes para evaluar la inversión extranjera, siguiendo exigencias sociales, económicas y ambientales.
<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos regionales de acceso a la información y transparencia de la inversión extranjera.
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de planificación y ordenamiento territorial, consultados y participativos, con estándares regionales mínimos.
<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos específicos sobre cuencas comunes y zonas de frontera, y recursos naturales compartidos.
<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento de biorregiones delimitadas por atributos ecológicos, productivos y culturales.
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación productiva regional, basada en una complementación de las aptitudes ecológicas y opciones productivas de cada biorregión.
<ul style="list-style-type: none"> • Reformas tributarias que eleven las regalías sobre el extractivismo, en forma coordinada y acompasada, en los países de la región.

<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos similares para implantar impuestos a las sobreganancias.
<ul style="list-style-type: none"> • Priorizar y reorientar la apropiación de recursos no renovables a las necesidades y demandas del continente.
<ul style="list-style-type: none"> • Política ambiental regional, que incluya sistemas e instrumentos de protección de la biodiversidad a escala continental.
<ul style="list-style-type: none"> • Política agropecuaria y alimentaria regional, que oriente la producción agropecuaria con prioridad hacia las necesidades de alimentación continentales.
<ul style="list-style-type: none"> • Política energética regional, que encamine los energéticos a las necesidades continentales, antes que a la exportación global; acuerdos sobre uso eficiente de la energía y reconversión hacia fuentes alternativas limpias.
<ul style="list-style-type: none"> • Priorizar redes productivas regionales, con eslabones compartidos entre los países.
<ul style="list-style-type: none"> • Redes de comunicación e interconexión reorientadas hacia las necesidades de comunicación y transporte dentro del continente, y no hacia la globalización.
<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones financieras regionales, como CAF, FonPlata y otras, incorporando altos estándares sociales y ambientales, mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana, y controles transparentes de sus financiamientos y proyectos.
<ul style="list-style-type: none"> • Enfocar al Banco del Sur en el financiamiento de emprendimientos que no son abordados por la banca privada o las IFR tradicionales, y especializarlo en proyectos de largo plazo, con alto contenido social y ambiental.

Fuente: Elaboración propia

Un necesario cambio de rumbo

Las alternativas al desarrollo, tal como se las entiende en el presente artículo, deben necesariamente superar las condicionalida-

des que impone la globalización actual, y para lograr esto deben ser construidas por conjuntos de países. En ese sentido, esta dimensión internacional es un componente indispensable para estas alternativas.

Aquí se ofreció una breve revisión de distintos componentes en esas alternativas, que tienen implicancias directas en el escenario internacional. Estos componentes implican abordar diversos espacios, desde la coordinación y articulación de medidas nacionales con otras análogas en los países vecinos, un marco conceptual alternativo sobre el regionalismo, hasta una desvinculación frente a la globalización. Las distintas medidas se articulan entre sí para avanzar hacia la erradicación de la pobreza, mejorar la calidad de vida y garantizar la protección de la Naturaleza. Un proceso de cambios de este tipo debería permitir reducir las asimetrías entre los países sudamericanos, y encaminar la convergencia hacia un continente sin pobreza, que asegure los derechos de la Naturaleza.

Un resultado inicial de las transiciones propuestas aquí desembocaría en una caída en el volumen de los recursos naturales exportados. La composición de las exportaciones también cambiaría y se reduciría la proporción de bienes naturales. En las primeras etapas, una meta alcanzable para la región andina es bajar del actual 85% a menos de 50%. Simultáneamente, los destinos también se modificarían: se reducirían aquellos extracontinentales, para enfocarse en los mercados continentales, en donde la proporción de comercio intrabloque —que en el caso de los países andinos no supera el 10%— debería elevarse a más de 50%.

A partir de los diferentes componentes examinados en las secciones anteriores, es posible derivar medidas concretas; algunas de ellas se presentan en la Tabla. Ese breve resumen muestra que existen muchas opciones posibles; varias de ellas se expresan en medidas concretas, por lo tanto, pueden ser implementadas rápidamente. Como puede verse, los cambios propuestos abordan no

solo la extracción de recursos, sino el tipo de producción que se priorizará y cómo se la organizará regionalmente.

Las transiciones postuladas en este capítulo, asimismo, forman parte de un cambio sustancial en el abordaje de la globalización. Ha prevalecido una mirada que considera la globalización comercial y financiera como un hecho positivo, lo que ha provocado limitaciones sobre los Estados-nación y las políticas democráticas nacionales (en buena medida, esto corresponde al “trilema” de la globalización de Rodrik, 2007). La perspectiva que aquí se defiende consiste en fortalecer el entramado de las políticas democráticas para, desde allí, regular al Estado, al mercado y, con ello, a la inserción internacional. Está claro que esto demandará otro tipo de equilibrios entre los necesarios elementos de supranacionalidad y las particularidades de cada país.

Es apropiado advertir que cualquiera de los aspectos internacionales analizados, por sí solos, no desencadenarán la transición alternativa; éstos son condiciones de necesidad o posibilidad de transformaciones que se deben operar también en otros planos, como las concepciones del bienestar, los patrones de consumo y hasta el propio ordenamiento político. En otras palabras, estas transiciones muestran las facetas internacionales en un programa de cambio radical de los actuales basamentos culturales, políticos y éticos.

Bajo este propósito, la necesaria reformulación de la integración sudamericana no es un lujo para un futuro lejano y debe ser asumida inmediatamente. El estilo de desarrollo actual y, en especial, el dominado por un extractivismo depredador, se vuelven insostenibles en sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. A su vez, la volatilidad y fragilidad de la globalización exige que los países de América del Sur comiencen a explorar estrategias de autosuficiencia y autonomía a escala continental. El continente posee todos los recursos y las capacidades para lanzarse a labrar su propio camino.

Un nuevo modelo energético para la construcción del Buen Vivir

Pablo Bertinat³²

Javier Gómez, Miriam Lang, Claudia López y Alejandra Santillana contribuyeron con sus comentarios al presente artículo.

Apuntes sobre el diagnóstico

La producción de energía primaria en América Latina es 20% mayor al consumo. Esta diferencia marca las exportaciones fuera de la región, básicamente de petróleo crudo. Del total de la producción de petróleo de la región 40% es exportado. Por otro lado, la región es una importadora neta de derivados de petróleo (BP, 2011). Además de la exportación de energía de manera directa, América Latina exporta energía virtual incorporada en *comodities* y productos semielaborados o elaborados.

Sin embargo solo el 15% de toda la energía que se consume en América Latina corresponde al sector residencial. Más de 30 millones de personas no tienen acceso a la electricidad; muchos más tienen acceso en ámbitos urbanos, en condiciones indignas; y más de 80 millones de personas cocinan con biomasa, en condiciones que afectan a su salud. Los sectores más pobres pagan por la energía una proporción mayor de sus ingresos que los sectores más ricos (CEPAL, 2009). A esto se suma que, millones de personas son desplazadas y afectadas en América Latina por obras de infraestructura energética.

32 Ingeniero electricista (UTN FRRO), Magíster en Sistemas Ambientales Humanos (CEI-UNR). Docente e investigador, dedicación exclusiva, en la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional. Coordinador del área energía del Taller Ecologista (ONG) y del Programa Conosur Sustentable. Coordinador del Comité Editorial de la revista *Energía y equidad*. Ecologista, miembro de diversas redes y movimientos sociales de América Latina.

Al mismo tiempo, el de la energía es un negocio floreciente para un importante sector empresarial.

En las múltiples crisis reconocidas como crisis civilizatoria uno de sus componentes son problemas asociados al modelo de producción y consumo de energía imperante.

Pensar en alternativas requiere, en primera instancia, fortalecer el diagnóstico, revisar cuáles son las características del sistema energético actual y cuáles las restricciones a la hora de pensar en las opciones.

En este sentido, y desde el punto de vista físico, observamos un crecimiento exponencial de la producción y consumo de energía en los últimos dos siglos; crecimiento sostenido por la incorporación de fuentes fósiles a la matriz energética: en primer término, carbón, luego, petróleo y, finalmente, gas natural, que terminan de configurar una matriz energética mundial en donde estas fuentes representaron 81% de la oferta de energía en el año 2009 (IEA, 2011).

En el caso de América Latina, este porcentaje es algo menor debido al mayor peso que tienen las fuentes renovables de energía en la región.

El crecimiento exponencial de la utilización de energía se ha dado a la par de un crecimiento similar de la población planetaria. Sin embargo, a pesar del crecimiento indicado de la utilización de energía, más de 1 400 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y más de 2 600 millones, en todo el planeta, cocinan con biomasa.

Los impactos de este modelo energético son múltiples. Es difícil establecer un orden de importancia entre ellos, ya que afectan en diferente escala. De esta manera, y solo para establecer los alcances del diagnóstico del que se parte para este artículo, nombraremos:

- La directa relación, ya establecida sin dudas, entre la producción y consumo de energía y el proceso de cambio climático que encuentra, entre sus causas principales, las

emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la quema de combustibles fósiles.

- Los impactos de las grandes obras de infraestructura energética, en todos los eslabones de su cadena, sobre los territorios, la biodiversidad y las comunidades afectadas.
- La contaminación local producida por las cadenas energéticas de producción, transformación, transporte y consumo de la energía.
- Las inequidades relacionadas con las características de apropiación de la energía y sus beneficios en toda la cadena productiva.
- La apropiación privada y con fines de lucro de los bienes y servicios energéticos. La mercantilización de las cadenas energéticas en todas sus etapas.
- La ausencia de la participación ciudadana en la construcción de las políticas energéticas y, sobre todo, en la posibilidad de decidir sobre los usos del territorio, son una característica inherente al sistema energético vigente.

En este marco, las restricciones para pensar en alternativas al modelo energético vigente incluyen en primer lugar, la aceptación de los límites al crecimiento. Esto se refiere a la disponibilidad de los bienes de la Naturaleza, pero también al agotamiento de las capacidades de sumidero que posee el entorno natural. Esto es muy concreto, los recursos son limitados y la capacidad de absorber los impactos también.

Si bien el cambio climático provocado por el proceso de calentamiento global podemos pensarlo dentro de la restricción nombrada anteriormente, sus características demandan una atención específica, ya que establece límites más precisos en lo que se refiere a los escenarios futuros posibles y a los procesos de transición para alcanzarlos.

Otro rasgo característico del cambio climático, en cuanto al consumo de energía, tiene que ver con la imposibilidad de gene-

rar escenarios futuros distintos a los usuales. Una fuerte esquizofrenia se observa en las instituciones, tanto en las asociadas con el desarrollo como en las que se ocupan de la energía. Los documentos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), los informes de desarrollo humano, los informes de prospectiva de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 2011), o los regionales como los de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE) mientras, por un lado, advierten sobre los peligros de recorrer los senderos convencionales, por el otro, se muestran incapaces de desarrollar escenarios energéticos alternativos que quiebren la lógica imperante, al menos en términos físicos, de manera de mitigar el proceso de cambio climático. El desarrollo de escenarios distintos al tendencial es una de las tareas pendientes y todo indica que no serán construidos desde los espacios nombrados, salvo algunas excepciones; son parte de los desafíos que se presentan.

La construcción de las políticas energéticas, criterios de análisis

Una restricción importante debe ser tomada en cuenta a la hora de pensar acerca de la construcción de políticas energéticas de otras características. Se refiere a la concepción de las políticas energéticas como una política sectorial de las políticas de desarrollo. En este marco, la configuración actual de las mismas se asocia a la idea de establecer herramientas y mecanismos que garanticen el funcionamiento pleno de un modelo de desarrollo asociado con crecimiento material infinito. La mirada convencional intenta primordialmente garantizar una oferta suficiente ante una demanda creciente. La energía, en tanto mercancía, se configura, entonces, como una herramienta imprescindible para la reproducción del capital.

La restricción abordada plantea el desafío de poder pensar y desarrollar alternativas energéticas que puedan subvertir el orden

establecido, en el marco del mismo sistema, de manera que pueda servir de germen de un nuevo modelo energético en el marco de la construcción del Buen Vivir.

Una solución sencilla sería la de plantear la imperiosa necesidad de alcanzar otro desarrollo, de desplegar un modelo productivo de otras características para construir un modelo energético alternativo. Sin embargo, creemos que existen posibilidades y condiciones, además de la urgente necesidad temporal –por las restricciones ambientales y sociales– de generar alternativas que contemplen no solo variantes tecnológicas sustentables sino también mecanismos y formas de relacionamiento alrededor de la energía, que debiliten las relaciones capitalistas y permitan acumular experiencias asociadas con nuevos paradigmas como el Buen Vivir, el ecosocialismo u otras expresiones en tanto construcciones alternativas.

El contexto actual de la estructura de las políticas energéticas en América Latina sigue mostrando un predominio del paradigma neoliberal que se introdujo desde principio de la década de los noventa. Si bien algunos aspectos han sido parcialmente revertidos, como el tema de la propiedad sobre determinados sectores, el núcleo central de las políticas energéticas sigue siendo el mismo. La idea de mercados abiertos, segmentación vertical de las cadenas, privatizaciones en algunos segmentos, la profunda mercantilización, la idea de la energía como subsidiaria del sistema extractivo y demás reformas, no han sido revertidas aún por los gobiernos progresistas. Sí se visualiza una marcada vocación por retomar el comando de la definición de las políticas energéticas; no obstante, el curso de las acciones no muestra cambios estructurales.

Probablemente se superpongan dos miradas acerca de la energía. Una de ellas en tanto flujo o herramienta para satisfacer alguna necesidad que se extingue en el momento de su utilización o, dicho con más claridad, se transforma. La otra, en tanto potencial (en otras palabras podría ser un recurso, renovable, no

renovable, etc.); pero potencial como parte del ambiente-Naturaleza. En este sentido, se puede asumir como un patrimonio legado pasado y futuro.

Desde la perspectiva de la sustentabilidad súperfuerte (Gudynas, 2011), la construcción de la sustentabilidad energética requiere desarrollar alternativas a la concepción de la energía en tanto capital, para fortalecer la idea de patrimonio y de derecho. Desde este enfoque, se necesita para su análisis valoraciones múltiples (ecológicas, éticas, estéticas, culturales, económicas, sociales, políticas, etc.) y, por lo tanto, el reconocimiento de valores intrínsecos de la Naturaleza, por encima de las preferencias humanas y de las valoraciones crematísticas.

Se trata de entender la dinámica del sistema energético enfocando aquellas variables y relaciones que nos permitan explorar posibilidades de reorganización, con el objetivo de reducir la utilización de energía, hacer posible el reemplazo progresivo de fuentes, al tiempo que se construyen mecanismos, formas, estilos, que permitan alcanzar niveles de vida adecuados para todos los seres humanos según, sus contextos y culturas.

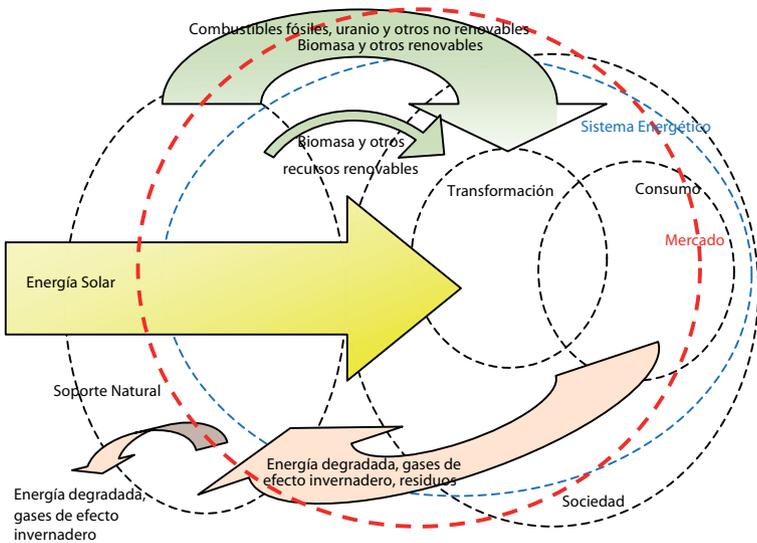
El enfoque para enfrentar este desafío debe permitir visibilizar no solo las relaciones correspondientes a los procesos de extracción, generación, consumo y degradación energética, sino también otro tipo de relaciones existentes entre éstos y los distintos componentes de los sistemas ambientales humanos considerados integralmente.

Para su comprensión y abordaje operativo, podemos considerar el sistema energético –como todo sistema– formado por una estructura estática –determinada por sus componentes o subsistemas y el rol que cumplen–, y una estructura dinámica conformada por flujos de energía, materia e información que relacionan las partes. Como mencionamos, el sistema posee una complejidad mayor que la correspondiente a la estructura conformada por los

recursos utilizados, los procesos de transformación y consumo final y la energía degradada.

Con el objeto de visibilizar aquellos componentes del sistema energético que resultan significativos, presentamos a continuación dos diagramas representativos de dos niveles de análisis.³³ Ambos diagramas deben ser analizados como un todo, solo los presentamos divididos, a fin de una mejor comprensión.

Gráfico 1
Estructura general del sistema energético vigente



Fuente: Elaboración propia.

33 Se representa la estructura general del sistema energético actual. En ella, se realizan algunas simplificaciones y omisiones intencionadas, de manera de no desdibujar las cuestiones que se estiman centrales. La representación gráfica suele dar una sensación de estatismo; sin embargo, debe ser pensada en un análisis dinámico de las variables y relaciones.

Adoptamos una definición virtual de los límites del sistema, que se determinarán en función de la escala abordada, ya sea esta mundial, regional, nacional o local. El sistema es abierto y con intercambios de materia, energía e información.

Las variables que aporta el ambiente al sistema son las entradas de materia, energía e información. En este caso, podemos sintetizarlas a través de los ingresos de radiación solar, que es el soporte de la vida y del sistema humano y fundamentalmente del soporte natural, a través del sostén de los procesos fotosintéticos.

Otras entradas muy importantes en el sistema actual son los combustibles no renovables, como los fósiles y el uranio, que se consideran un aporte del soporte al sostenimiento del sistema tal cual está estructurado.

Los factores o variables que el sistema entrega al ambiente como salidas, son básicamente energía degradada (calor), gases de efecto invernadero y residuos de diferente tipo. En caso de considerarse un sistema nacional, por ejemplo, podría también existir intercambio de energía, materiales e información.

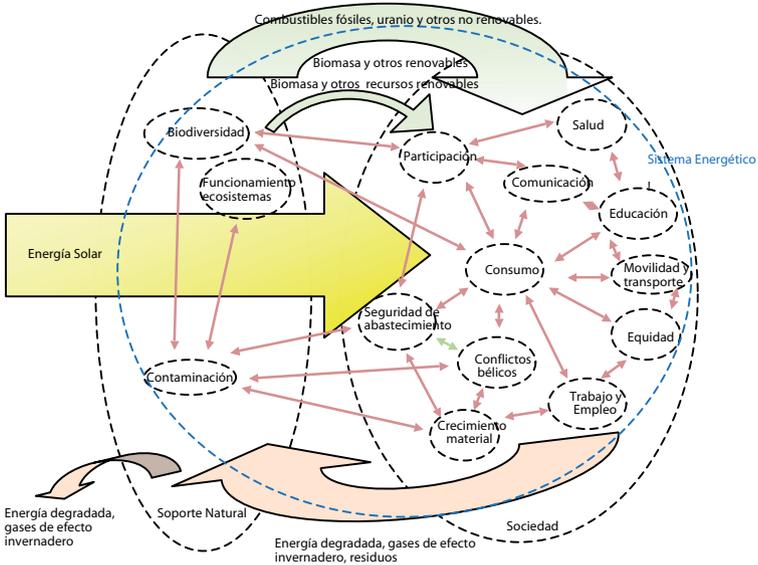
En esta primera interpretación, se representa el sistema energético interrelacionado con el sistema societario y el soporte natural o ecológico. Entre ellos existe un flujo de materia y energía, así como de impactos. En el marco del sistema societario, se ubican los subsistemas de generación y producción de energía (que en el gráfico se identifican como transformación, de manera que quede claro que solo se produce un cambio de calidad) y el subsistema de consumo integrado por todos los subsectores correspondientes (residencial, industrial, transporte, etc.).

Entre los componentes o subsistemas, se establece un conjunto de relaciones que pueden asumir diversas formas, desde transacciones comerciales, relaciones de poder, conflictos bélicos, etc. Los intercambios entre el soporte natural y el componente societario incluyen energía (por ejemplo, las dependientes de la biomasa, hídrica, etc.) y producen impactos positivos y negativos

que afectan a la sociedad y a la Naturaleza. En el sistema descrito, el mercado representa un papel muy importante.

Complementariamente, se presenta un diagrama del mismo sistema, pero considerando componentes y relaciones significativas para otro nivel de análisis, el inherente a las diferentes dimensiones de la sustentabilidad energética (Gráfico 2).

Gráfico 2
Representación del sistema energético actual (2^{do} nivel)



Fuente: Elaboración propia

Esta representación del sistema energético está conformada, de manera no excluyente, por un conjunto de variables consideradas relevantes para su sustentabilidad. Podemos considerar que el estado del sistema energético estará en gran medida determinado por el estado de dichas variables y este, a su vez, por la intensidad de las múltiples relaciones establecidas entre ellas. En el gráfico se plantean algunas de las consideradas más significativas.

La visión predominante solo contempla en la construcción de las políticas energéticas aspectos como la seguridad de abastecimiento o la estructura de la balanza de pagos. La construcción de políticas energéticas debe ser realizada desde una mirada compleja, que contemple no solo las variables sino la dinámica de las mismas, los actores y las relaciones de poder.

Pensando en alternativas

Los criterios de análisis expresados deben ser concebidos solo como una herramienta general. A la luz de ellos y teniendo en cuenta las restricciones planteadas, podemos delinear algunos ejes y aspectos que permitan pensar en alternativas al sistema energético dominante. Introducimos algunas de ellas.

Derecho y mercancía

Concebimos a la energía como parte de los bienes comunes, como una herramienta y no un fin en sí mismo y, en ese marco, parte de los derechos colectivos y en congruencia con los derechos de la Naturaleza.

Entre los procesos de largo plazo que se configuran como desafíos, podemos citar dos: La construcción social de la energía como derecho y la desmercantilización del sector de la energía.

En el primer caso, nos interesa pensar al “derecho” como la prerrogativa que tenemos el conjunto de los seres vivos, no solo los seres humanos. En esta definición incorporamos a la Naturaleza con todas sus especies, por considerar que es vital para el ejercicio de la vida digna presente y futura que los derechos de la Naturaleza sean preservados y respetados, porque existe una interdependencia entre el disfrute pleno de la vida del ser humano y el ambiente (Bertinat, Chemes y Moya, 2012).

Boaventura de Sousa Santos esclarece esta idea cuando dice:

[...] el derecho tiene tanto un potencial regulatorio o incluso represivo como un potencial emancipatorio, siendo este último mucho mayor de lo que el modelo de cambio normal jamás haya postulado. La manera en que el potencial del derecho evoluciona, ya sea hacia la regulación o la emancipación, no tiene nada que ver con la autonomía o reflexividad propia del derecho, sino con la movilización política de las fuerzas sociales que compiten entre sí (De Sousa Santos, 2009: 51-52).

La construcción del derecho a la energía, tal vez tomando como ejemplo las luchas por el derecho al agua, se presenta como uno de los grandes desafíos conceptuales pero fundamentalmente prácticos.

En el marco del actual sistema capitalista, los mercados son instrumentos al servicio de sectores cuya racionalidad es la acumulación de capital sin límites, más allá incluso de consideraciones acerca de los límites físicos o la vida. Los mercados no son lugares neutrales en los cuales todos los agentes intervinientes poseen los mismos conocimientos y acceso a la información. Para que este proceso se haya extendido del modo en que lo hizo, ha sido necesario que el mercado avance y colonice las esferas no mercantilizadas (Aguirrezábal y Arelovich, 2011).

Este proceso mercantilista, Karl Polanyi (2007) lo explica como una “gran transformación”, que se produce cuando el modo de producción capitalista se convierte en el modo de producción dominante y ocasiona el paso de una sociedad con mercado a una sociedad de mercado. Es decir que la fuerza de trabajo, la tierra y el dinero, al convertirse en mercancías, se incluyeron en el mecanismo del mercado y así se subordinó la sustancia de la sociedad misma a sus leyes.

El concepto de desmercantilización disputa la centralidad de los mercados para resolver las necesidades. Reconocer y potenciar otras instituciones y otros actores por fuera del mercado capita-

lista debe ser una opción. Coraggio (2007) plantea que toda economía real es una economía mixta compuesta de tres sectores: la economía empresarial capitalista, la economía pública y la economía popular. Cada una de estas esferas presenta una organización básica de análisis, cuyos comportamientos se guían por objetivos diferenciados sobre la base de diversas racionalidades. Fortalecer aquellas formas de la economía, asociadas a la reproducción de la vida es un camino a explorar en cuanto al lugar que juega la energía en ella y las posibles formas de apropiación.

En el marco del intenso proceso que impulsa la financiarización de la Naturaleza desde las propuestas de la economía verde, se hace indispensable prestar especial atención a la posibilidad de encontrar senderos que permitan un proceso de desmercantilización de la energía. Se trata de debatir acerca de la construcción de nuevas relaciones sociales en el plano de la producción, distribución y consumo de energía.

Un ejemplo que puede resultar interesante es el funcionamiento de las empresas de distribución de energía eléctrica. La mayoría de los países tienen regulaciones que vuelven una paradoja la idea de avanzar en la eficiencia energética, al tener establecidos sistemas de remuneración de las empresas distribuidoras atados a la cantidad de energía que venden. De esta manera, si realmente las empresas trabajaran para lograr una mayor eficiencia, en muchos casos no lograrían sobrevivir económicamente. Frente a esto se puede plantear, por ejemplo, la idea de reforma de los sistemas regulatorios de las empresas distribuidoras de electricidad, de manera que sus ingresos no dependan del crecimiento del consumo de energía sino de otros parámetros. Entre ellos, se pueden incorporar la cantidad y calidad de población abastecida, la calidad de servicio, la disminución de las pérdidas, la eficiencia en la gestión. En definitiva, tratar de desarticular la idea de mercancía para fortalecer la de acceso y derechos.

Energía y necesidades humanas

De acuerdo con lo expuesto, desarrollo se asimila, generalmente, a “crecimiento económico” y éste al crecimiento del conjunto de bienes y servicios que se producen, no importando el tipo de bienes, para qué y para quiénes son destinados. En definitiva, existe en esta concepción la siguiente idea mecanicista: El desarrollo de los seres humanos sería consecuencia del económico que, en realidad, se asocia con el acceso de la sociedad a un conjunto de bienes y servicios. En consecuencia, se anuda el desarrollo a la producción de bienes que, en los hechos, no están distribuidos equitativamente y que, además, experimentan –en la mayoría de los casos– un fuerte proceso de reducción de su vida útil, ya sea por cuestiones meramente técnicas como culturales, lo que los transforma en algún tipo de residuo. Esto demuestra que la lógica de este proceso es esencialmente pernicioso para la mayor parte de la población y, a mediano y largo plazo, destructiva para la humanidad en su conjunto (Bertinat, 2011).

En este contexto Elizalde plantea que:

[...] el modelo de “desarrollo” imperante, entendido como crecimiento sostenido, es tributario de un sistema de creencias anclado a la ideología del progreso y es (eventualmente) la culminación del paradigma científico moderno. Si queremos alcanzar la sustentabilidad, es imprescindible la modificación de tal sistema de creencias. En esta perspectiva, adquiere pleno sentido la propuesta de una nueva teoría sobre las necesidades humanas (Elizalde 2002: 114).

Considerando que la naturaleza humana ha permanecido inalterable a lo largo de la historia y de las culturas, Elizalde sostiene que existen necesidades fundamentales para el conjunto de los seres humanos, fuertemente vinculadas con lo que se conoce como derechos humanos.

Elizalde, Hopenhayn y Max Neef (1986), abordaron las relaciones entre los conjuntos que ellos denominan necesidades, satisfactores y bienes. Detectan a partir de su análisis, la fuerte dependencia de un número creciente de bienes para satisfacer necesidades humanas que se ha venido profundizando con el desarrollo del capitalismo. Trabajan también sobre las dimensiones asociadas con la culturalidad, como condición necesaria para el desarrollo de un futuro menos dependiente de materiales y energía.

Esto plantea la necesidad ineludible de trabajar alrededor de los procesos de construcción del deseo, referido a disputar la cultura dominante que plantea la necesidad de tener cada vez más bienes materiales y energía para alcanzar la felicidad.

Es un proceso difícil en un contexto de derrota respecto al consumismo dominante, pero existe la posibilidad de trabajar alrededor de la construcción de alternativas. Sin duda, las complicaciones mayores a la hora de pensar en estas alternativas se dan en los contextos urbanos. Correlativamente a esto existen experiencias incompletas e inconclusas que sería muy importante revisar para poder analizar y determinar cuáles son las barreras que están impidiendo un cambio de escala de las mismas.

Entre ellas, podemos citar muchos programas referidos a “ruralizar las ciudades”, por ejemplo, el de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) de Chile. Se trata de experiencias recientes, en donde se plantea como objetivo llevar valores relacionados con movimiento campesino rural, como la solidaridad, la complementariedad, la ayuda mutua, nuevas-viejas formas de intercambio, etc. al ambiente urbano. Existe una desconexión entre el ambiente urbano y la Naturaleza. Se ha construido un imaginario colectivo que plantea que la ciudad está separada de su entorno y solo es subsidiaria de los recursos materiales y energéticos. Visibilizar el “peso” en recursos natura-

les y energía que tiene el ambiente urbano, los impactos y su alta dependencia del entorno natural es un paso necesario.

Otra posibilidad se asocia con el desarrollo de los diversos programas de agricultura urbana y las redes de consumo sustentable existentes en diversas ciudades latinoamericanas. Estos programas que en la mayoría de los casos nacieron como forma de mitigar el hambre, en muchos casos avanzaron convirtiéndose en un germen de disputa contra la agricultura industrial contaminante, la destrucción de producciones locales y el desarrollo de los grandes centros de abastecimiento. Sin dudas, el balance energético de estas alternativas presenta innumerables ventajas por sobre el modelo industrial concentrado.³⁴

Las dificultades para cambiar de escala de este tipo de alternativas se deben claramente a una falta de acción proactiva de los Estados, para potenciarlas mediante legislación, normativa e intervención directa a favor de estas alternativas productivas.

La disputa, en el marco de la construcción de otros mecanismos de satisfacción de necesidades, se muestra como un proceso complejo y extenso en el tiempo. Sin embargo, la acción de los Estados puede permitir un avance más acelerado.

Energía y redistribución de la riqueza

Más de 30 millones de personas en América Latina no tienen acceso a la energía eléctrica; de estas más de 70% son pobres, y más de 80 millones cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud (CEPAL, 2009). No obstante, este no es el problema mayor, que se asocia con las condiciones indignas, inseguras e insuficientes en las que los sectores de menores recursos

34 No es intención del presente trabajo realizar un análisis de detalle al respecto. Sin embargo, existen numerosos trabajos, en general a partir de análisis energéticos que muestran las ventajas en cuanto a balance energético, de emisiones, etc., de las producciones agroecológicas frente a la agricultura industrial.

acceden a la energía en las grandes ciudades donde, por ejemplo, se ven obligados a sostener conexiones ilegales para acceder a la electricidad.

En el trabajo “Contribución de los servicios energéticos a los objetivos de Desarrollo del Milenio y a la mitigación de la pobreza en América Latina y el Caribe”, la CEPAL analiza los documentos de planificación energética de los países de la región. Entre sus conclusiones se subraya que el tema del acceso a la energía no es un eje prioritario. En los casos en que se aborda, se lo hace focalizado exclusivamente a sectores rurales. También se indica que en todos los casos analizados los sectores más pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos para pagar los gastos energéticos, que los sectores medios o altos. Esto se debe a la falta de políticas de precios y tarifas orientadas a estos sectores, así como a la falta de acceso a fuentes más eficientes y baratas (por ejemplo, gas distribuido por redes en lugar de gas envasado) (Ibíd.: 12).

Debemos agregar también que en los pocos trabajos que existen sobre eficiencia energética en el uso final, los sectores más pobres requieren más unidades energéticas para cubrir las mismas necesidades. Por ejemplo, utilizan más energía para cocinar, calentarse o refrigerarse que los sectores de mayores ingresos. Esto probablemente se deba a que disponen de equipamiento de menor calidad por su menor precio o a condiciones relacionadas con las características del hábitat u otras.

Un grado importante de inequidad se observa en las condiciones de acceso a la energía. Al mismo tiempo, podemos pensar a la energía como una herramienta fundamental a la hora de fortalecer mecanismos de redistribución de la riqueza aún en un marco convencional de relaciones alrededor de la energía. En este sentido revisar las tarifas de las diferentes fuentes es una condición indispensable para un proceso de transición. Esto requiere flexibilizar los sistemas tarifarios y asociarlos a parámetros como ingresos, condiciones del hábitat y patrimonio, de manera que

se pueda establecer mecanismos que castiguen el sobreconsumo suntuoso y subsidien un consumo digno para otros sectores.

Un paso más adelante sería poder avanzar en conceptos como el de “canasta energética” (Bertinat y otros, 2002), que significa poder construir, teniendo en cuenta pautas culturales y sociales, un conjunto de medios energéticos que garanticen una vida digna. Esto significa fortalecer la idea de energía como un medio y no como un fin en sí mismo.

Renovabilidad y sustentabilidad de las fuentes energéticas

Relativamente recientes son los trabajos de análisis de las fuentes y los emprendimientos energéticos que incorporan las dimensiones de la sustentabilidad en ellos.

Las estadísticas energéticas de CEPAL han incluido en el último decenio un doble estándar de análisis de las fuentes energéticas (CEPAL, OLADE, GTZ, 2003).

Se plantea, entonces, analizar las fuentes de energía desde dos atributos: la renovabilidad y la sustentabilidad de las mismas. Como sabemos, la renovabilidad se refiere a la posibilidad de que las generaciones futuras puedan disponer de las fuentes energéticas en idénticas condiciones a las actuales. El debate acerca de la sustentabilidad de las fuentes energéticas es sumamente reciente y abierto. La doble caracterización de las fuentes energéticas es un avance positivo que concibe al análisis de la sustentabilidad no como un fenómeno característico de la fuente en sí misma sino como un fenómeno antrópico, o sea, relacionado con los procesos de apropiación y utilización de la fuente.

Sin embargo, en el trabajo citado, el análisis desde la sustentabilidad se realiza desde una mirada claramente incompleta que alude solo a algunos aspectos parciales. Por ejemplo, solo caracteriza a las fuentes no renovables, como los combustibles fósiles, de no sustentables en caso que las reservas sean escasas, y obvia toda la posibilidad de análisis de los impactos de las mismas. De esta

manera, el doble estándar fue aplicado a las energías renovables y no a los combustibles fósiles. A nuestro entender, el solo hecho de su no renovabilidad las colocaría en una posición de no sustentabilidad. Caracterización que se vería reforzada si incorporamos dimensiones como los impactos sociales, ambientales y políticos de las mismas.

La motivación declarada por CEPAL para avanzar en este análisis se relaciona con los impactos que determinados emprendimientos energéticos tienen sobre la sociedad, en particular el desarrollo de grandes represas hidroeléctricas y su consecuente desplazamiento de población entre otros impactos.

Sin embargo, en el caso de los trabajos de CEPAL, más allá de las motivaciones originales, solo fue aplicada esta doble clasificación para el caso de la leña; caracterizó de no sustentable a aquellos usos que no garanticen la reproducción de la misma. Esto muestra, en definitiva, un sabotaje al intento inicial de establecer claramente aquellas formas de apropiación de fuentes renovables que producen impactos inaceptables sobre la sociedad y el ambiente como no sustentables.

Ha habido otros intentos de generar indicadores de sustentabilidad energética, entre ellos, la experiencia más reciente es de la Organización Internacional de Energía Atómica y la Unión Europea (OIEA, 2008).

Es un desafío el poder establecer una metodología de análisis de los emprendimientos energéticos que contemple una mirada desde la concepción súperfuerte de la sustentabilidad (Gudynas, 2004) y (Gudynas, 2011), con mayor énfasis en el actual momento de fuerte embestida para consolidar la idea de los bienes de la Naturaleza, en particular los energéticos como una forma de capital. El análisis desde las dimensiones social, ecológica, política y económica puede ser una herramienta metodológica útil, en la medida que se comprenda la imposibilidad de alcanzar un equilibrio natural entre las mismas. Estas dimensiones se presen-

tan en modo de conflictos y es clave para su resolución el generar relaciones de fuerza favorables y lograr un accionar del Estado en este sentido.

Son innumerables las herramientas desarrolladas por la sociedad civil; por ejemplo, para poder encaminar estos procesos y empoderar a los sectores afectados por megaobras. Entre ellos, es importante revisar los realizados en el marco del desarrollo de las redes de justicia ambiental. En particular, una herramienta indispensable la encontramos en el trabajo “Proyecto de evaluación de equidad ambiental, como instrumento de democratización de los procedimientos de evaluación de impacto de proyectos de desarrollo” (FASE, ETTERN, 2011). Estos trabajos se proponen como objetivos la creación de instrumentos para la democratización de los procesos de evaluación de impacto de proyectos de desarrollo. Estos instrumentos permiten tener en cuenta la diferencia de percepciones existentes sobre el territorio, la participación no se asocia con negociación sino con poder de decisión, la discusión se debe focalizar en el producto y no solo en la obra de manera de poder pensar alternativas reales, etc. (Mello, 2011).

En definitiva, diferentes niveles de disputas son necesarios en el ámbito de las fuentes energéticas y los proyectos específicos. En primer lugar, una disputa conceptual respecto de la sustentabilidad de las fuentes energéticas y sus emprendimientos asociados. En segundo lugar, existe un espacio para la construcción de herramientas que mejoren las condiciones de las luchas por la defensa de los territorios y por las alternativas energéticas.

Es importante destacar, en el marco del análisis de las fuentes energéticas, el panorama relacionado con la eficiencia energética. Es indispensable superar la trampa de la “ecoeficiencia”, que es un paso necesario, pero no suficiente. Jevons (1865), ya en el siglo XIX, planteó la idea de que al aumentar la eficiencia de algo disminuye el consumo específico, pero tiene un efecto de incre-

mento del uso total, lo que provoca en definitiva un balance neto de incremento de uso de energía.

Un camino aún poco explorado es el de la concepción de la eficiencia energética como una fuente de energía. Esto requiere desarrollar procesos de prospección y exploración de esta fuente como tal. De la misma manera en que se busca petróleo o gas, se debería buscar eficiencia. Es importante, por ejemplo, el poder construir un análisis comparativo de los beneficios económicos, ambientales y sociales de hacer prospección de eficiencia energética en comparación con la exploración hidrocarburífera. Sobre este asunto hay un gran déficit.

Hay muchos trabajos en América Latina respecto de las políticas de eficiencia energética; sin embargo, su puesta en práctica efectiva requiere un análisis crítico respecto de los caminos posibles para desarticular la concepción mercantil de la energía, ya que bajo este paradigma no puede resultar atractivo el impulso para no vender energía o ahorrar energía.

Pensar alternativas sectoriales

En América Latina, la porción de la energía que consume el sector residencial ronda el 15% del total de la energía que consume el subcontinente. En definitiva, de manera directa, llega a la población solo 15% de toda la energía que se consume. Los sectores de mayor consumo son el transporte y la industria (Arelovich, Bertinat, Salerno y Sánchez, 2008).

Existe un rango importante de variación entre subregiones y países. Así, en la región andina, el transporte tiene un mayor peso que la industria, a diferencia del Cono Sur en donde esto se invierte.

Pensar en modificar la estructura de consumo de los diversos sectores requiere un análisis pormenorizado que contemple las particularidades regionales y nacionales; análisis que habitualmente no se hace, ya que la mirada dominante pone un mayor énfasis del

lado de la oferta, o sea en la idea de perseguir un consumo fatalmente creciente.

Independientemente de los análisis de eficiencia posible, de acuerdo con lo explicitado anteriormente, se trata de poner atención a los aspectos estructurales de los sectores de consumo. En este sentido, y debido al peso que tienen en la estructura energética, es imperioso trabajar sobre el transporte y la industria.

En el caso del sector industrial, un análisis de los consumos industriales en los países donde su desarrollo es mayor, nos muestra que los sectores industriales que mayor consumo presentan son aquellos en los cuales los productos elaborados tienen como destino prioritario la exportación. A esto debemos sumar que en la mayoría de los casos, se trata de grandes grupos empresariales controlados en un alto porcentaje por empresas transnacionales.

Se encuentra ya sumamente probado el proceso de transferencia de determinado tipo de industrias desde países desarrollados hacia países en desarrollo (CEPAL; OLADE; GTZ, 2003). Industrias como la siderurgia, la petroquímica, la celulosa, el papel, el aluminio y otras sufrieron un proceso de relocalización hacia países emergentes.

Los sectores industriales más intensivamente consumidos en Brasil, uno de los países más industrializados de América Latina, son el aluminio, la siderurgia, la pasta, el papel y las ferroleaciones. Estas industrias exportan en promedio, la mitad de lo que producen, la mayoría de ellos con destino extrarregión (Bermann, 2011).

En el caso de Argentina, otro de los países industrializados, los sectores de mayor consumo son el de aceites vegetales, siderurgia, metales, petroquímica, papel, etc., también asociados con las exportaciones y el control de las transnacionales (Arelovich, Bertinat, Salerno y Sánchez, 2008).

El análisis de esta situación nos lleva a pensar en un proceso de exportación virtual de energía incorporada en productos ela-

borados o semielaborados, en muchos casos utilizados como insumos en países desarrollados para incorporar mayor valor. Este proceso se ha mantenido debido a que, en nuestros países, la energía es abundante y barata en términos relativos frente a otras regiones del planeta. A esto debemos agregar la existencia de legislaciones laxas y falta de controles ambientales y sociales, sumado a la apetencia de los gobiernos de la región de las últimas décadas, que abrieron las puertas de manera acrítica a propuestas de industrialización desplazadas de sus países de origen.

Se trata de poder evaluar integralmente los beneficios y perjuicios de este tipo de desarrollos en América Latina, e incorporar en el análisis no solo las externalidades, sino aspectos que tengan que ver con el análisis de las matrices insumo-producto, de tal manera que se pueda evaluar el peso de la energía tanto en su aspecto físico como económico, o los aspectos asociados con la infraestructura energética necesaria, que habitualmente es desarrollada con dineros públicos, y que resultan una transferencia de renta hacia sectores transnacionales.

En el sector del transporte se observan aspectos similares. Mientras se destruyeron en todo el subcontinente las redes ferroviarias, una de las formas más eficientes de transporte, en particular el de cargas, se desarrolló la industria automotriz tanto en lo que se refiere al automóvil individual, símbolo cultural, como al transporte de carga.

Uno de los proyectos emblemáticos del neoliberalismo, hoy llevado adelante por los gobiernos de la región, es el de la Iniciativa para el desarrollo de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Este contempla el uso de ingentes recursos públicos para el desarrollo de corredores a lo largo del continente destinados a mejorar las condiciones de transporte de materias primas hacia los puertos. El desarrollo de estos proyectos implica una transferencia multimillonaria a las empresas extractivas de

manera de reducir sus costos de transporte, además de generar la posibilidad de hacerlo.

En los últimos diez años, los proyectos IIRSA utilizaron 55 390 millones de dólares para el sector transporte; 89% con financiamiento público o público-privado en proyectos asociados con los llamados corredores bioceánicos y 40 684 millones de dólares para el sector energía (BID, CAF, Fonplata, 2011).

La destrucción de las cadenas locales de producción y la concentración productiva son un potenciador de las distancias y kilómetros que incorporan en su haber los diferentes productos que se consumen. La descentralización productiva, el fortalecimiento de las cadenas y circuitos locales son una alternativa al incremento del tiempo de circulación de las mercancías y a la reducción de la necesidad del transporte.

Se han estudiado cabalmente cadenas como la láctea o la frigorífica; por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina ha desarrollado diseños y procesos de microfrigoríficos que permiten fortalecer el desarrollo local al reducir ampliamente el consumo de energía por transporte. Estas mismas alternativas se pueden observar para la industria láctea. El beneficio central es la posibilidad de evitar la pérdida de población rural, y fortalecer las cadenas locales de producción y consumo.

Innumerables ejemplos se pueden citar para cada uno de los sectores; por ejemplo, la irracionalidad del sector comercial con el desarrollo de grandes “shoppings” o “malls” que consumen en muy poco espacio más energía que ciudades enteras, y que son solo un modo de comercialización para el cual, incluso sin salir del paradigma consumista, existen alternativas mucho más racionales desde el punto de vista energético.

Es necesario prestar atención a cada sector y tener alternativas para ellos, tanto para la etapa actual como para un proceso de transición hacia otro modelo energético. En este sentido, Gerardo

Honty (2012) aporta también una serie de medidas posibles entre las que se contemplan la incorporación de normas de obsolescencia, normas de eficiencia en los diversos sectores, desde el etiquetado de productos hasta utilización de materiales reciclados y renovables en las construcciones, fortalecer el reciclado de residuos y los sistemas cerrados, establecer normas en las compras públicas, desarrollar el concepto de eficiencia asignativa y otros.

Las políticas energéticas locales

A diferencia de otras políticas sectoriales, las políticas energéticas son, en la mayoría de los casos, delegadas en los Estados nacionales. Por lo tanto, las mismas tienen una fuerte impronta de concentración y centralización. Si sumamos a esto la preocupación de los Estados nacionales solo por el abastecimiento sin prestar atención a las características del consumo y otras dimensiones de las políticas energéticas, se configura una situación preocupante. También debemos realizar el análisis en un contexto continental fundamentalmente urbano, en el cual son pocas las experiencias de desarrollo de políticas energéticas locales.

La concentración de las políticas energéticas en manos de los Estados nacionales y dentro de estos en círculos de “especialistas”, configura una preocupante situación de la falta de debate alrededor del desarrollo de éstas. Los debates quedan restringidos a sectores de elites del gobierno, algunas consultoras y expuestas al intenso *lobby* de los sectores empresariales interesados en el área.

No solo es posible, sino necesario, avanzar en la democratización y descentralización de las políticas energéticas.

En este marco, propuestas como las agencias municipales de energía presentan algunas potencialidades a destacar. Concebidas como espacios abiertos, conformadas por los gobiernos locales pero también por actores sociales, sindicales, educativos, permitirían la apropiación, por parte de la ciudadanía, del comando sobre las políticas energéticas. Concebida la energía, no solo por

los aspectos físicos, sino por sus consecuencias sociales, ambientales y políticas, estas herramientas pueden generar condiciones para abordar las políticas energéticas, desde concepciones como la de satisfacción de necesidades, garantizar el acceso a la misma, transformar al Estado local en un ejemplificador como consumidor y también como generador, descentralizar las fuentes energéticas e involucrar a la sociedad en el debate de esta problemática.

El desarrollo de estos espacios democráticos presupone formación y debate para la toma de decisiones. Persiguen, a su vez, la idea de incorporar a la energía en los debates transversales diversos como la eliminación de la pobreza, el sistema de transporte urbano, los códigos de edificación, las políticas de residuos, la eficiencia, las modalidades del comercio, temas todos en los cuales la energía es un protagonista, hoy silencioso, y que debemos lograr explicitar.

Existen innumerables experiencias de legislaciones locales que impulsan la planificación energética o el desarrollo de la energía solar, o la eficiencia en la construcción; experiencias que pueden servir como base para desarrollar algunos aspectos de la democratización de las políticas energéticas.

La transición energética

Un camino de transición energética plantea estrategias diversas, etapas que se solaparán, procesos que aún no conocemos. Seguramente serán procesos en los cuales se superpongan reformas con procesos de cambios estructurales.

En este largo camino, se presentarán tareas permanentes o de largo plazo, al mismo tiempo, que tareas aparentemente “técnicas”. De la capacidad de involucrar a la sociedad en su conjunto en los debates energéticos, dependerán en parte los logros que se obtengan.

Pensar en una transición presupone poder tener en claro un diagnóstico, acordar al menos qué es lo que nos parece inco-

recto en el desarrollo energético, cuáles son los aspectos críticos y comenzar, a partir de allí, a fortalecer las alternativas planteadas y disputar su centralidad.

Uno de los mayores déficits, tal cual fue expresado, es la ausencia de escenarios energéticos alternativos que puedan disputar a los generados por las instituciones del sistema. Es posible avanzar en el desarrollo de escenarios para una transición energética que dispute los escenarios técnicos convencionales. En este caso, nos referimos a escenarios que, basados en la aceptación de los límites al desarrollo, visualicen senderos de reducción en el uso de energías y emisiones e incremento de la participación de las energías renovables sustentablemente. Existen experiencias llevadas adelante en Europa, por Ecofys o Greenpeace, y en América Latina, la realizada por la actividad de Escenarios Energéticos en Chile y Argentina. Si bien son experiencias que muestran estilos de construcción diferentes y limitaciones en cuanto a su alcance, son un gran paso en la disputa no solo conceptual sino práctica a la hora de pensar alternativas.

Estos ensayos nos muestran que es posible disputar la concepción de futuro, en este caso desde un punto de vista físico o técnico.

Otro déficit se asocia con la falta de debate alrededor de las políticas energéticas desde una concepción como la que planteamos. Los actores habitualmente involucrados son los afectados por obras energéticas, que en su afán por evitar la ocupación de sus territorios, realizan el esfuerzo de pensar alternativas. Se hace necesario poder incorporar en la transición a otros actores sociales, de manera de disputar la construcción de las políticas energéticas a los *lobbys* establecidos. Esto requiere ampliar el debate, aspecto esencial para un desarrollo cabal de las alternativas y construir alianzas de diverso tipo.

La transición tiene procesos urgentes y de largo plazo superpuestos. Los límites al crecimiento, el calentamiento global, la equidad socioambiental marcan las urgencias.

Entre algunas de las muchas acciones que deberíamos trabajar encontramos:

- Implementación de mecanismos de eficiencia energética que se asocien a la disminución absoluta y no relativa del consumo de energía.
- Incorporación de energías renovables sustentables de manera efectiva en la matriz energética.
- Intervención por parte del Estado a fin de corregir las “anomalías” de mercado.
- Determinación de restricciones y planes de eliminación progresiva de fuentes no renovables y no sustentables de energía.
- Fortalecimiento del papel del Estado como ejemplificador en el uso de las energías.
- Reforma de los sistemas de subsidios a las fuentes fósiles y la industria extractiva.

A esto deberíamos incorporar:

- Promoción del debate sobre la viabilidad del actual modelo productivo.
- Construcción de herramientas que fortalezcan la concepción de energía como derecho.
- Fortalecimiento de pautas de consumo de bajo contenido energético y restricción de consumos excesivos.
- Acceso a los bienes energéticos y sus servicios en condiciones dignas.
- Desarrollo de políticas energéticas locales, comunales, municipales, provinciales, etc.
- Incorporación en el análisis de las políticas de desarrollo de la variable energética.

En palabras de Enrique Leff, el problema pasa por “¿Cómo desactivar el crecimiento de un proceso que tiene instaurado en su

estructura originaria y en su código genético un motor que lo impulsa a crecer o morir? ¿Cómo llevar a cabo tal propósito sin generar como consecuencia una recesión económica con impactos socioambientales de alcance global y planetario?”

Y agrega:

[...] esto lleva a una estrategia de deconstrucción y reconstrucción, no a hacer estallar el sistema, sino a re-organizar la producción, a desengancharse de los engranajes de los mecanismos de mercado, a restaurar la materia desgranada para reciclarla y reordenarla en nuevos ciclos ecológicos. En este sentido la construcción de una racionalidad ambiental capaz de deconstruir la racionalidad económica, implica procesos de reapropiación de la Naturaleza y reterritorialización de las culturas (Leff, 2008).

Es necesario construir otra economía que garantice la preservación de los ciclos naturales, que aborde cíclicamente los procesos. Es necesario discutir los mecanismos y formas a través de los cuales satisfacemos nuestras necesidades.

Pero no hay dos tiempos. Es necesario avanzar en la lucha contra la pobreza, contra la indigencia, al mismo tiempo que se construye otra economía y otro modelo productivo. Lo que está claro es que el neodesarrollismo instaurado en la región no podrá, en ese marco, resolver el tema de la energía y tampoco el de la gente.

Postextractivismo y alternativas al desarrollo desde la sociedad civil

Eduardo Gudynas³⁵

Estas y otras ideas han sido discutidas en el marco del Grupo Permanente de Trabajo del que estoy agradecido; en especial los comentarios de Miriam Lang, Pablo Ospina y Maristella Svampa

Introducción

Desde la sociedad civil se está desplegando una gran variedad de iniciativas y reacciones políticas frente al amplio campo del desarrollo. Llama la atención que se discuta sobre los objetivos del desarrollo, se denuncien sus impactos sociales y ambientales, y hasta se reclamen estrategias alternativas, mientras que América del Sur disfruta de cierta bonanza económica. En efecto, en el continente se mantiene el crecimiento económico, aumentan las exportaciones y se reduce la pobreza. Es también destacable que esto ocurra bajo gobiernos llamados progresistas, que se presentan a sí mismos como alternativas.

Muchas de esas reacciones ciudadanas se levantan contra uno de los principales motores de ese desarrollo: el extractivismo. Es también en ese terreno donde surgen alternativas para trascenderlo, no solo a él, sino también a las propias ideas de desarrollo que lo explican.

En el presente artículo se ofrece un apretado resumen, por momentos casi esquemático, de diferentes expresiones de la sociedad civil frente al extractivismo, y en particular las alternativas a éste, en América del Sur. Algunos contenidos de esas descripciones han sido tomadas de mis aportes al estudio realizado junto con Alejandra Alayza (disponible en Alayza y Gudynas,

35 Eduardo Gudynas es ecólogo social, investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), docente universitario y colabora con distintas organizaciones sociales.

2012). Incluyo, además, algunas observaciones sobre las dinámicas ciudadanas, las respuestas gubernamentales y empresariales, y una sistematización de las disputas en juego.

Reacciones frente al desarrollo dominante

Las ideas convencionales acerca del desarrollo lo entienden como un continuado progreso que se desenvuelve en varios planos, todos vinculados entre sí, como el crecimiento económico, el avance de la ciencia y la tecnología, o una construcción política y cultural a imagen de los países industrializados. El desarrollo es, por lo tanto, un conjunto de conceptos, sus institucionalidades y prácticas, tal como se analizó en un aporte anterior (Gudynas, 2011). Entendido en esa pluralidad, el desarrollo es una idea dominante, donde una de sus expresiones actuales más vigorosas es el extractivismo.³⁶

Frente al desarrollo en general y al extractivismo en particular, existen posturas de todo tipo. Hay quienes lo ambicionan e, incluso, lo reclaman; los gobiernos lo prometen; y, distintos grupos empresariales lo implantan. Es común la defensa del extractivismo minero o petrolero, pues son vistos como una bendición que aseguraría enormes exportaciones, muchos empleos, y otros beneficios económicos.

En el caso particular del extractivismo, distintos sectores de la sociedad civil se han encontrado con graves impactos sociales y ambientales, escasos beneficios económicos —cuando no perjuicios— y hasta diversas formas de violencia sobre sus comunidades. Esas experiencias no solo explican la resistencia al extractivismo,

36 Aquí se define extractivismo en un sentido preciso y acotado: extracción de grandes volúmenes de recursos naturales, que en su mayor parte son exportados, sin procesar o con un procesamiento limitado. Bajo esta definición, el extractivismo incluye los sectores de explotación minera y petrolera, algunos monocultivos de exportación y varios rubros tradicionales como el banano, la caña de azúcar o los camarones.

sino también los recelos frente a las promesas del desarrollo, al encontrar que éste encierra inequidades e impactos de todo tipo.

Las denuncias y resistencias frente al extractivismo han ganado en intensidad y, al menos en el caso sudamericano, se han difundido a todos los países. Esta nueva situación, a su vez, determina la línea de base desde la cual ahora se discute el desarrollo. Algunos puntos destacados en esos conflictos deben ser señalados, sin pretender resumir toda su diversidad.³⁷

Comencemos por señalar que esas resistencias se expresan de maneras muy distintas. En los países andinos, dichas manifestaciones tienen una larga historia. En Perú, el incremento de la actividad minera y petrolera han provocado el aumento radical de conflictos sociales; algunos de ellos se han convertido en referentes internacionales (como sucedió, por ejemplo, en Tambo grande o Majaz; véase Scurrah, 2008; De Echave y colab., 2009). Más recientemente, el conflicto en Minas Conga (Cajamarca) ha escalado en intensidad, y entre sus expresiones incluyó una larga marcha hacia Lima, de más de un millar de militantes, en contra de la megaminería y en defensa del agua.

En Ecuador, esos conflictos han girado, sobre todo, alrededor de los impactos de la explotación petrolera y, en especial, la contaminación y los daños a la salud en zonas amazónicas. Entre los casos más conocidos, se encuentra la demanda judicial contra la empresa Texaco- Chevron. El inicio de actividades mineras también ha generado oposición: en marzo del 2012, tuvo lugar una marcha nacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. Esta movilización empezó en el sur del país y llegó a Quito.

37 Las descripciones y evaluaciones del presente artículo se basan en la participación del autor y de otros integrantes de CLAES, en distintas actividades, redes o colectivos, especialmente en América del Sur, que incluyen no solo la participación en varios de los procesos que se describen, sino también la defensa de ciertas propuestas, en algunos de esos espacios.

En Bolivia, la situación se ha vuelto más compleja, debido a que hay posiciones a favor, y otras en contra del extractivismo. En estos conflictos están involucrados grupos de mineros (especialmente cooperativistas), que desean profundizar esa actividad e, incluso, llevarla adelante desde empresas estatales; al mismo tiempo, distintos agrupamientos ciudadanos reaccionan por los impactos ambientales de esa minería tradicional y alertan sobre los efectos de nuevos emprendimientos (como la proyectada explotación de hierro de El Mutún). A esto se suman denuncias sobre el manejo petrolero en el sur del país (véase la revisión de Ribera, 2010). Recientemente, ha escalado la resistencia indígena en el oriente del país (TIPNIS) a la construcción de una nueva carretera que, en parte, obedece a los temores frente al ingreso de empresas mineras y petroleras. Así, se cristalizaron dos marchas nacionales hacia la Paz, en 2011 y 2012.

En algunos de estos países, la resistencia al extractivismo involucra a las organizaciones indígenas, de distintas maneras. Una de las expresiones más contundentes son las marchas, tal como ha sucedido en Ecuador (con la participación de su Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) y en Bolivia (en especial, desde la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, y con apoyo de algunos sectores del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ).

Situaciones similares se observan en Colombia, donde grupos indígenas y locales resisten a la expansión de empresas mineras; por ejemplo, lo que sucede en el páramo de Santurbán, o el enfrentamiento a la empresa minera Vale, en el departamento César. En Venezuela, también se registran denuncias por derrames y contaminación, por el deterioro de fosas de contención y por la infraestructura petrolera, etc. (Entre los ejemplos de derrames recientes, se encuentran los vertidos en el río Guarapiche, en febrero de 2012, y el derrame de crudo en el municipio Anaco, en agosto de 2012.) Aunque en menor grado, ocurren protestas y

resistencias contra la minería. (Es el caso de la oposición indígena a la explotación de carbón en la Sierra del Perijá, en el occidente del país).

En Chile, las reacciones ciudadanas frente al extractivismo tienen una larga historia. Entre los conflictos recientes están, por ejemplo, las denuncias por los impactos del proyecto minero de Pascua Lama, la oposición al emprendimiento El Morro y las crecientes movilizaciones en la región de Calama. Por diversos motivos, entre ellos, el contexto político y la consolidada minería, las reacciones experimentan una menor intensidad, en comparación con las observadas actualmente en otros países andinos.

La situación en los países atlánticos presenta algunas diferencias. Allí, una de las principales manifestaciones del extractivismo son los monocultivos de exportación. El ejemplo más conocido es la expansión de la soja en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo que acarrea serios impactos sociales y ambientales. Existen distintas reacciones ciudadanas contra el avance de la frontera agrícola, alertas sobre la deforestación y pérdida de biodiversidad, el uso de agroquímicos y el desplazamiento de pequeños agricultores, campesinos o indígenas (véase, por ejemplo, a Seoane y Tadei, 2011).

Brasil es seguramente uno de los casos más complejos, ya que no solo es un gran exportador agrícola, sino un gigantesco productor minero. A pesar de la existencia de varias acciones ciudadanas frente al avance agropecuario, especialmente en las zonas tropicales, los conflictos sociales ante la minería son más localizados y de menor intensidad respecto de los países andinos, y experimentan mayores dificultades para lograr coordinaciones entre sí.

La minería también se está expandiendo en Argentina, lo que desató intensas reacciones ciudadanas. Se han registrado movilizaciones ciudadanas en por lo menos 12 provincias, con algunos conflictos importantes (obstaculización de carreteras, por

ejemplo) (véase Colectivo Voces de Alerta, 2011). En Uruguay, los planes gubernamentales de promover la megaminería de hierro desencadenaron la oposición de un amplio abanico ciudadano, desde hacendados rurales a grupos ambientalistas. El conflicto se desenvuelve al margen de los partidos políticos, aunque éstos también participan del debate.³⁸

Finalmente, es necesario incluir en este repaso continental lo que sucede en Guyana y Surinam. Allí también se registran protestas en contra de la minería, lideradas, en especial, por comunidades y grupos indígenas. En Guyana, por ejemplo, se registran diversas denuncias y protestas contra la minería de oro de pequeña y de gran escala (IHRC, 2007).

En varios casos, cabe destacar las coordinaciones nacionales. El caso peruano ofrece varios ejemplos sustantivos: existe una red enfocada en el extractivismo en la sierra, que se llama Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI). Una asociación de pueblos indígenas amazónicos aborda esas mismas cuestiones; es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP). Por otra parte, entre sus enfoques temáticos, la red peruana sobre alternativas a la globalización (RedGE) se ha dedicado intensamente a estos temas. Finalmente, algunas de estas cuestiones son atendidas por la Red Muqui. En otros casos, las redes nacionales ya existentes se han volcado a estos temas. Ejemplos de ello son el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) y la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA). Estas dos redes con distintos énfasis, han atacado la problemática extractivista.

Un caso particular se observa en Argentina. Allí, los grupos locales mantienen la red denominada Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Entre sus temas se encuentra el extractivismo.

38 Se conformó el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Véase <www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/06/por-un-uruguay-sustentable/>

Esta asociación se presenta como un espacio de articulación e intercambio, sin autoridades estables; avanza a través de encuentros nacionales.

Finalmente, también existen redes continentales enfocadas en el extractivismo. Destacan el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), con más de 30 instituciones,³⁹ y La Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas, donde participan varias ONG.⁴⁰ El Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, coordinado desde 2011 por la oficina andina de la Fundación Rosa Luxemburg, es otra iniciativa en este sentido. Entre las organizaciones internacionales que se han enfocado estos temas, destaca OXFAM, por su apoyo a grupos locales, estudios y publicaciones. Existen redes de información y coordinación a escala global, donde se incorpora a América Latina; entre ellas sobresale, para el caso de la minería, Minas y Comunidades (MaC),⁴¹ y, para la explotación petrolera, OilWatch.⁴²

La dinámica de la resistencia y el horizonte de las alternativas

Este esquemático repaso permite dar un paso adicional en la caracterización de estas manifestaciones que parten desde la sociedad civil: su heterogeneidad. Algunas de esas expresiones se resumen seguidamente.

Los participantes son muy diversos, desde asociaciones campesinas hasta ONG estructuradas; desde federaciones de nacio-

39 Véase www.conflictosmineros.net

40 Participan CEDLA (Bolivia), Fundación Jubileo (Bolivia), IBASE (Brasil), TERRAM (Chile), Foro Nacional Colombia, CDES (Ecuador), Grupo FARO (Ecuador), FUNDAR (México), Grupo Propuesta Ciudadana (Perú), DAR (Perú), Cooperación (Perú); promovida por Revenue Watch.

41 Véase www.minesandcommunities.org

42 Véase www.oilwatchesudamerica.org

nalidades indígenas hasta redes vecinales. Por lo tanto, el origen social, e incluso étnico, de los actores de estos debates y resistencias es muy diversificado. La discusión actual sobre el desarrollo no tiene un contenido clasista, en el sentido clásico del término. Las acciones colectivas se organizan en estructuras diversas: unas son muy difusas y laxas, propio de un movimiento con mucha permeabilidad en los ingresos y egresos de integrantes; en otras, en cambio, su composición es muy formalizada. Las dinámicas también son muy distintas. En algunos casos son muy activas, y en otros oscilan entre periodos de baja y alta movilización.

La expresión política en los espacios públicos también es muy heterogénea. Algunos transitan sobre todos los canales institucionalizados, tal como se observa, sobre todo, en países del Cono Sur; mientras, en otros casos, la debilidad del Estado y la ausencia de un sistema de partidos estable, hace que, para muchos, esa política apunte a otros canales, mientras que otros intentan constituir agrupamientos partidarios propios.

Más allá de esta diversidad en la estructura y expresión, hay de todos modos ciertas coincidencias notables, que se articulan alrededor de la resistencia al extractivismo actual. Sin duda, la organización comunitaria kichwa de Sarayacu, de la Amazonía ecuatoriana, es muy distinta a la asociación de vecinos de Esquel, en la Patagonia de Argentina; pero las dos representan prácticas políticas de organización desde la sociedad civil, que denuncian, reclaman y resisten con éxito al avance del extractivismo. Esto se repite en todo el continente. Surge desde contextos culturales, políticos y territoriales muy distintos, y atraviesa a muy diferentes movimientos sociales. Estas coincidencias son tan llamativas como la propia diversidad de los actores involucrados.

Esta política, que se expresa desde la base, responde a factores muy diversos, donde se mezclan componentes vinculados con la calidad de vida, los sentidos otorgados a los territorios, las expectativas de beneficios económicos, el papel del conocimiento

experto, formas de participación y reconocimiento, y distintas perspectivas éticas (entendidas como formas de valoración). Esto hace que algunas de las clasificaciones intentadas (de los actores o de los conflictos), no sean satisfactorias para describir estas situaciones.⁴³

Desde un abordaje muy general, es posible identificar dos tipos de dinámicas. En algunos casos, las resistencias de la sociedad civil están enfocadas en emprendimientos locales, y lidian con formas de reforma, participación o compensación de los posibles efectos en juego. Los ejemplos clásicos residen en aquellos conflictos para acceder a la información, el reclamo de cambios tecnológicos en un emprendimiento para reducir sus impactos, o de compensaciones, que pueden ser sociales, laborales, económicas, etc. (incluyendo desde medidas como una bolsa de trabajo, hasta cambios en las regalías). El punto clave para el presente análisis es que en estos casos, casi siempre, lo que se discute son distintas alternativas para hacer viable un emprendimiento extractivo. Por lo tanto, las expresiones políticas están en el campo de los

43 Un buen ejemplo de estas limitaciones es la propuesta de Bebbington y Humphreys Bebbington (2009) de cinco tipos de ambientalismo en los conflictos mineros de Perú. En esa clasificación se separan, por ejemplo, un ambientalismo “nacional populista” de un “ecologismo de los pobres” y éstos del “ecologismo profundo”. Un examen de conflictos recientes muestra que los atributos de una categoría se mezclan con los de otras, y hay expresiones que no responden a ninguna de ellas, de donde esas divisiones se desvanecen. Es muy discutible que los conflictos ante la minería sean “ambientales”, concebidos como diferentes formas entender el ambiente, la sociedad y el mercado. En realidad, en esos conflictos se mezclan diferentes cuotas de componentes que podrían llamarse sociales y ambientales; y entre estos últimos no todos son propiamente ecológicos (como es el caso de las concepciones sobre territorialidad). Asimismo, esa tríada “ambiente/sociedad/mercado” es más un artefacto impuesto desde afuera, propio de ciertas corrientes académicas y políticas, que una expresión que parte desde esos movimientos sociales. El propósito de este ejemplo es advertir, por lo tanto, que algunas clasificaciones recientes no representan adecuadamente las dinámicas de esos movimientos sociales, lo que las hace muy débiles.

“desarrollos alternativos” (entendidos como aquellos que representan distintas corrientes dentro de la hegemonía del concepto de desarrollo, en el sentido precisado en Gudynas (2011) y, a su vez, siguiendo a Escobar (1998).

Pero en otros casos, los grupos involucrados consideran que las reformas o compensaciones no son posibles, y, por lo tanto, los efectos negativos ya no se pueden resolver apelando a cambios tecnológicos o por medio de indemnizaciones económicas, ni bajo la institucionalidad política disponible. Esto sucede a causa de dos factores: los grupos locales entienden que están en juego aspectos de su salud y de su entorno, que son invaluableles, no monetarizables; los grupos locales han modificado la posición de los umbrales que separan los impactos tolerables de los inaceptables, para pasar a niveles de mucha mayor exigencia. Aquí aparece un rechazo al extractivismo, que se expresa en un plano más relevante que los anteriores, lo que permite concluir que es una estrategia inviable e insostenible.

En estos últimos casos se gesta una situación particular, ya que sus expresiones políticas no se detienen en emprendimientos específicos; al contrario, se discute sobre el extractivismo como un componente inseparable de un tipo de desarrollo. Dicho en otras palabras, los debates y conflictos sobre el extractivismo se vuelven inseparables de las disputas sobre el sentido del desarrollo. Es en este campo donde se expresan las opciones críticas al desarrollo. Desde aquí aparecen aquellas que postulan alternativas postextractivistas.

De acuerdo con el marco conceptual que se sigue en el presente capítulo, este segundo tipo de discusiones corresponde a las “alternativas al desarrollo” (también en el sentido de Gudynas, 2011, y a su vez siguiendo a Escobar, 1998). Bajo esa mirada, se ponen en discusión las propias bases de las ideas del desarrollo y sus expresiones concretas; las alternativas al extractivismo, para

ser efectivas, necesariamente deben ser también alternativas al desarrollo que lo sustenta.

Alternativas postextractivistas desde la sociedad civil

En muchos casos, las reacciones frente a proyectos de desarrollo en general y al extractivismo, en particular, incluyeron distintas propuestas en temas como control ambiental, ordenamiento territorial, canales de participación e información, o compensaciones económicas. Aquí se expresan los llamados “desarrollos alternativos”; las discusiones o disputas se enfocan en aspectos instrumentales, como reducir la contaminación u obtener una mayor coparticipación económica.

Poco a poco, en muchos de esos conflictos se comenzaron a incorporar nuevos aspectos que apuntaban el sustento de los emprendimientos de desarrollo. Por ejemplo, la discusión ya no quedó restringida a cómo reducir la contaminación de una mina, sino que se pusieron en entredicho las fundamentaciones bajo las cuales se defendían las estrategias mineras. Esa perspectiva se centra, por lo tanto, en las “alternativas al desarrollo”. En el caso específico del extractivismo, se discuten tanto sus implementaciones específicas (por ejemplo, los proyectos mineros o petroleros), como los conceptos, las instituciones y prácticas que lo hacen posible. Así, el postextractivismo es un conjunto de propuestas de cambio que buscan construir alternativas al desarrollo en sí.

Cuando las demandas populares siguen ese camino, se vuelve un hecho común que, desde ámbitos gubernamentales, empresariales, e incluso desde varios espacios ciudadanos, una y otra vez, se diga que si el extractivismo es tan negativo, sus críticos deberían presentar alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Es la pregunta que busca defender el desarrollo dominante, y asimismo, desafiar a la sociedad civil. Más allá de entender si este reclamo es adecuado o no, lo cierto es que dado el nivel de adhesión cultural que tienen las posturas extractivistas, es inevitable elaborar esas

alternativas con más detalle si se quiere ampliar la base social que reclama cambios.

Existen varios antecedentes de propuestas postextractivistas. Entre los más tempranos, se debe destacar la idea de un Ecuador postpetrolero para poder, por ejemplo, asegurar la protección de la Amazonía (Martínez, 2000). Esa idea fue retomada años después con la iniciativa de la no explotación de las reservas petroleras ubicadas en la zona del Parque Nacional Yasuní, y una moratoria petrolera en otras regiones de la Amazonía, lo que a su vez permitió la subsiguiente iniciativa gubernamental Yasuní-ITT. Más allá de la suerte de esa propuesta, lo cierto es que la discusión en Ecuador cambió sustancialmente. Ya no quedó enfocada en la validez que pudiera tener la renuncia a la explotación petrolera, sino que pasó a considerar cómo llevarla a la práctica (véase la recopilación de las diferentes posturas, en Martínez y Acosta, 2010). Algunas de las ideas ecuatorianas pudieron avanzar más en tanto aprovecharon los cambios políticos en marcha en el país. Destaca la aprobación de una nueva Constitución, donde se reconocen los derechos de la Naturaleza y un régimen enfocado en el Buen Vivir.

En cambio en Bolivia, la situación fue distinta. Si bien se intentó una refundación estatal, la estrategia gubernamental apuntó a acentuar todavía más la estrategia extractivista de su economía. Allí, el debate se centró en distintos desarrollos alternativos. Los actores estuvieron particularmente preocupados sobre el control Estatal y la proporción de excedentes que se pudieran captar. La nueva Constitución, a diferencia de lo que sucedió en Ecuador, brindaba menores oportunidades para transitar hacia el postextractivismo (por ejemplo, no reconoció los derechos de la Naturaleza, y el Buen Vivir no pasó de ser un mandato ético). La situación se complica aún más, cuando el gobierno de Evo Morales despliega una fuerte retórica a favor de los “derechos de la Madre Tierra” a nivel global, especialmente en

relación con el cambio climático, pero no los defendía dentro de sus propias fronteras. Más recientemente, el gobierno hostigó a las marchas indígenas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécore (conocido como TIPNIS). Actualmente, la discusión sobre el postextractivismo se ha potenciado gracias a los talleres patrocinados por LIDEMA en La Paz, y por distintas organizaciones de la sociedad civil en Cochabamba (destaca el papel del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB).

En Colombia, si bien existen varios ejemplos de resistencias ciudadanas al extractivismo, su contexto interno, asolado por altos niveles de violencia y un gobierno conservador, limita el surgimiento de un movimiento orientado al postextractivismo. A pesar de ello, los primeros pasos están en marcha, bajo una red que se autodefine como “alter-extractivista”.⁴⁴

En los países del Cono Sur, la discusión de las alternativas se enfocó, por ejemplo, en el sector agropecuario, a inicios de la década del dos mil, tanto en el seno de la sociedad civil como en algunos foros académicos. Se exploraron las salidas de los monocultivos de soja, para impulsar una agricultura diversificada de base orgánica, como parte de un proceso de desmaterialización y regionalización de las economías (véanse, por ejemplo, los casos de estudio en Gudynas, 2002). Más recientemente, en Argentina se dieron pasos iniciales hacia el postextractivismo, que incluyen

44 El grupo de organizaciones que discute estrategias postextractivistas incluye a la Corporación Mujeres y Economía, Fundación Comunidades Unidas Pto. Boyacá, Viva la Ciudadanía, Grupo de Investigación Política y Derecho Ambiental CAMPO, Ciase; las universidades Minuto de Dios, Nacional y la Salle; CENSAT; etc. En el caso de la red colombiana frente a la gran minería transnacional, RECLAME, existen posturas diversas en su seno, tanto aquellas que corresponden a los desarrollos alternativos como aquellas que postulan alternativas al desarrollo.

la consideración de los derechos de la Naturaleza (un tema que hasta hace poco era esencialmente andino).⁴⁵

Entretanto, en Uruguay, la discusión de las alternativas a los planes mineros gubernamentales también se enfocan en reorientar lo agropecuario y el turismo, e incluyen un renovado interés en las estrategias de desarrollo del país. En ese marco, por ejemplo, tuvo lugar una aplicación muy interesante de un instrumento de democracia deliberativa.⁴⁶

En cambio en Brasil, por ahora, no existe una discusión significativa sobre estos temas, a pesar del reciente proceso de reforma de su ley de minería y del análisis del régimen de explotación de su petróleo en la plataforma oceánica. La situación en ese país es muy particular, ya que por momentos parecería que no se ha tomado conciencia dentro de Brasil, que es el más grande explotador en minería de América Latina. A su vez, entre las pocas organizaciones que abordan el tema del extractivismo, hay un énfasis en discutir mecanismos posibles de gestión tecnológica, acceso a un mayor nivel de compensaciones económicas o el papel de un fondo soberano para invertir las regalías. Existen algunas redes nacionales, como la de los afectados por la empresa minera Vale, aunque prevalece una mirada neoextractivista que, más allá de disputas sobre emprendimientos puntuales, está a tono con las posturas gubernamentales. Se han llevado a cabo algunos eventos puntuales sobre alternativas postextractivistas. Se lanzó un observatorio ciudadano sobre la explotación petrolera en la plataforma

45 Entre las instituciones más activas se encuentran una asociación de abogados ambientalistas (AADI), ONG como CEPPAS y Jóvenes por la Igualdad, y un colectivo de académicos y militantes, Voces de Alerta. Véase <<http://postextractivismo.blogspot.com/>>

46 El instrumento era un “juicio ciudadano”, promovido por la universidad estatal, y que por su dinámica y contenido obliga a discutir la minería en el contexto de los desarrollos posibles. Véase <<http://www.juiciociudadano.org/mineria/>>

oceánica y sobre minería.⁴⁷ Algunos académicos o militantes los han promovido (por ejemplo, Verdum, 2009). Pero las grandes redes ciudadanas u ONG todavía no han incorporado como un elemento central una discusión postextractivista.

Haciendo posible la idea de alternativas: el caso peruano

Es oportuno ofrecer una descripción un poco más detallada del caso peruano, por su éxito en lograr pasar, en poco tiempo, de una situación donde la idea de una “alternativa al extractivismo” era casi una herejía, a una situación donde esa postura se instaló en el debate nacional.

En el marco de un país con una enorme cantidad de conflictos sociales frente a la minería y petróleo, un puñado de actores comenzaron a discutir posibles vías alternativas. Debe tenerse muy presente que en el pasado reciente de Perú, postular que existen “alternativas” al extractivismo no era sencillo, y en general no cosechaba respaldos. En efecto, la cultura peruana siempre ha estado embebida por la minería desde los tiempos coloniales, y todavía más, bajo la república. La discusión que enfrentaba a ese extractivismo clásico apuntaba, sobre todo, a reducir sus impactos, a un mayor protagonismo estatal y al incremento de regalías. En otras palabras, el horizonte de lo que eran las alternativas se encontraba en distintas variedades de neoextractivismo, recostado sobre el Estado; de alguna manera, similares a las reformas efectuadas en los sectores petroleros en Bolivia o Ecuador. Pero en esa posición no se discutía la esencia del extractivismo, sino sus formas de instrumentación.

Pero ese mismo contexto permitió dar otros pasos adicionales. En efecto, desde distintos actores se insistió en los serios impactos del extractivismo en Perú, la desatención gubernamental en

47 Promovido por IBASE, FUP, Greenpeace Brasil y Justicia nos Trilhos. <www.observatoriodopresal.com.br>

resolverlos y distintas dosis de prepotencia empresarial. A su vez, los conflictos sociales son muy intensos en ese país; un ejemplo es la crisis en Bagua, Amazonas (2009), con su saldo de muertos. Al mismo tiempo, parte de la opinión pública aparecía más receptiva a las alternativas postextractivistas.

Aprovechando estas circunstancias, diversas organizaciones ciudadanas peruanas, entre ellas, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), iniciaron un trabajo conjunto para instalar la discusión de “alternativas al extractivismo”.⁴⁸ Esta campaña incluyó varios componentes que se desplegaron más o menos simultáneamente (analizados en detalle en Alayza y Gudynas, 2012).

Por un lado, se instaló un grupo de trabajo de expertos que analizó la situación del país en sus sectores extractivos, y generó distintos análisis sobre las posibilidades de transiciones postextractivistas (que abarcó opciones en agricultura, minería, hidrocarburos y pesca; las implicancias para la política económica; el papel de los gobiernos regionales y los territorios, etc.). Los aportes fueron recopilados en un libro sobre alternativas al extractivismo en el Perú (Alayza y Gudynas, 2011), que fue utilizado en talleres y debates públicos.

Paralelamente, en el marco de la campaña electoral presidencial, se conformó un colectivo de 20 organizaciones y redes nacionales, que lanzaron actividades de incidencia para presentar la idea de alternativas al extractivismo, a la opinión pública y a los partidos políticos. En este flanco, se concretaron varias iniciativas. Distintas organizaciones acordaron una “Agenda Mínima para las Alternativas al Extractivismo”, que cubría sus distintas dimensiones sociales, económicas y ambientales. También se consensuó una “Guía de preguntas a los candidatos para las Alternativas al Extractivismo”, que se presentó a los partidos políticos. En este

48 Informaciones, reportes y documentos sobre la campaña en <<http://alternativasalextractivismo.blogspot.com/>>

caso, el propio proceso de confeccionar las preguntas permitió reforzar el sentido de las alternativas postextractivistas. Finalmente, se confeccionó un “Pronunciamiento Público”, donde se reclamaba que el nuevo gobierno asumiera acciones prioritarias en la gobernabilidad del sector extractivo y para las transiciones postextractivistas.

Todas estas actividades se desplegaron en seminarios, talleres, mesas redondas e, incluso, bajo un activo programa de incidencia con la prensa. Se destacó un masivo encuentro público, donde se presentaron las preguntas a los partidos políticos, y los representantes designados por los candidatos presidenciales hicieron públicas sus respuestas.

Actualmente, las acciones en Perú siguen su marcha. Se han sumado talleres sobre alternativas postextractivistas por sectores (por ejemplo, agricultura) o regionales (por ejemplo, en Cusco y Apurímac). Se han sumado nuevos materiales de divulgación popular de estas ideas (un folleto y un video).

El empuje internacional

A medida que se fortaleció la discusión nacional en algunos países, también avanzaron las coordinaciones internacionales. Como resultado de los talleres, cursos y otros eventos, realizados por CLAES, especialmente en las naciones andinas, se concretó recientemente la plataforma “Transiciones”, que es un agrupamiento abierto de organizaciones ciudadanas.⁴⁹ Los participantes exploran opciones de alternativas al desarrollo actual y le otorgan especial atención al postextractivismo. Vienen desarrollando

49 Participan la RedGE, DAR (Derecho, Ambiente y Recursos naturales) y PDTG (Programa de Democracia y Transformación Global) de Perú; LIDEMA, CEDIB, Casa y CENDA de Bolivia; CEDA de Ecuador; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de Argentina; y, CLAES de Uruguay. Esta red fue lanzada en Cuzco en 2011. Véase <www.transiciones.org>

encuentros regulares en distintos países, cursos de formación y distintas publicaciones.

En ese marco, en 2012, se organizó un taller de expertos andinos para considerar las opciones del extractivismo a nivel regional (sus resultados se publicarán próximamente); y se concretaron distintos talleres y mesas redondas en Bolivia.

Paralelamente, el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, convocado por la Fundación Rosa Luxemburg, donde participan intelectuales y militantes de varios países, tiene en su agenda de trabajo las transiciones postextractivistas.

Académicos y sindicalistas

El rol de las instituciones y los actores académicos, en particular las universidades, debe ser considerado. Éstos juegan papeles muy importantes, ya que en muchas ocasiones las empresas y gobiernos apelan a ellos para invocar certezas científicas que fundamenten el extractivismo. Entretanto, las organizaciones de la sociedad civil recurren a otros académicos para desmontar esas fundamentaciones.

La situación actual muestra que, en general, distintos espacios académicos están alejados de estos debates, y otros, en cambio, apoyan decididamente al desarrollo y, con ello, al extractivismo. En efecto, la formación y reproducción de técnicos y profesionales en esos temas, y los vínculos que desde allí se generan con los espacios empresariales, son innegables. A su vez, en algunos países (Argentina y Bolivia), una parte de los excedentes extractivistas captados por el Estado son redistribuidos a universidades.

En paralelo a esas tendencias, hay actores académicos que, desde universidades u ONG, participan activamente en las resistencias al extractivismo y en la discusión de propuestas postextractivistas.⁵⁰ En Argentina, llama la atención el caso de una red

50 Ejemplos ilustrativos son las investigaciones de antropólogos o el Diplomado en industrias extractivas de la Pontificia Universidad Católica del

de académicos de varias universidades y distintas disciplinas, que son muy activos en estos temas, tanto en publicaciones como en seminarios y charlas, en todo el país (Colectivo Voces de Alerta). Esa vinculación es, además, cultivada por algunos movimientos sociales. Se logran construir “contra-saberes” comprometidos con las urgencias de la sociedad civil. Las alternativas al extractivismo también apelan a ese tipo de conocimiento experto.

Las relaciones con el movimiento sindical son posiblemente más tenues, sino más complicadas, que las observadas con los académicos. En efecto, muchos de los sindicatos tradicionales apoyan directa o indirectamente, al extractivismo; de ahí que sus abordajes recientes abandonan las discusiones sobre las estrategias de desarrollo y se enfocan en urgencias muy concretas, tales como salario o acceso al empleo. El apoyo a actividades como la explotación minera o petrolera es muy evidente en las centrales sindicales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. A su vez, desde allí se generan apoyos políticos a los planes extractivistas de los gobiernos progresistas y, por si fuera poco, algunos de estos sindicatos tienen sus fondos de pensión en ese tipo de empresas (en Brasil invierten en empresas como Petrobras y Vale). Bajo esas condiciones, estos actores tienen enormes dificultades para poder discutir las alternativas al desarrollo. Sin embargo, en Colombia existen algunas experiencias positivas de alianzas entre sindicalistas petroleros y comunidades afectadas por el extractivismo (ver artículo de Tatiana Roa en este libro).

Resistencias al postextractivismo

Las alternativas postextractivistas generan diversas reacciones en los gobiernos, empresas y algunos sectores ciudadanos. En el caso

Perú; el grupo de ecología política en la Universidad Nacional en Bogotá; y, el Centro de Investigaciones sobre Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor San Andrés de La Paz.

gubernamental, las administraciones conservadoras, pero también las de la nueva izquierda, desde distintas posiciones ideológicas, rechazan estas alternativas, en tanto implican una reducción drástica de las explotaciones mineras, petroleras o monocultivos. Esto se realiza apelando a un amplio abanico de posiciones.

En varios casos se desatienden los reclamos locales. Se sostiene que el extractivismo no implica serios impactos sociales o ambientales, o que estos pueden ser superables o compensables. Un siguiente paso es burlarse de los reclamos e intentar deslegitimar a los actores sociales, al calificarles de “infantiles” o “ignorantes”. O bien atacarlos directamente, aduciendo que en realidad esconden otros intereses “políticos”, o que serán agentes imperialistas o colonialistas. En algunos casos, se ha llegado a condicionarlos legalmente y se intenta cortar sus financiamientos. Se ataca personalmente a los líderes, por ejemplo, al demandarlos judicialmente. Con ello, quedan atrapados en los laberintos judiciales.

Distintos ejemplos de estas reacciones gubernamentales se pueden encontrar en casi todos los países sudamericanos; en algunos, como Bolivia, Ecuador o Perú, son muy expresivos, mientras que en Brasil o Uruguay son más acotados (algunos casos en Gudynas, 2009). También hay situaciones en las que el propio gobierno desmonta avances, como ha ocurrido con la reforma a la consulta previa en Bolivia, o el veto presidencial de Cristina F. de Kirchner a la ley de defensa de los glaciares andinos (que parecería haber sido una concesión a las corporaciones mineras; Bonasso, 2011).

Cuando los conflictos persisten, los gobiernos comienzan a responder de manera más enérgica. Eso incluye intentos para cooptar y dividir organizaciones ciudadanas (como se registra con la embestida del gobierno Morales contra la asociación indígena CIDOB), el uso de distintos tipos de violencia (con el concurso de fuerzas policiales, militares o de seguridad, decretar “estados de emergencia”, como ha ocurrido en Perú), o la nueva ley de

terrorismo interno de Argentina, que puede ser usada contra la movilización ciudadana.

En todas estas reacciones, la defensa del extractivismo también se juega en el plano de los discursos. Los gobiernos lo defienden abiertamente como una forma indispensable para asegurar el desarrollo y, por lo tanto, refuerzan las visiones clásicas del progreso económico, social, cultural y tecnológico. Se insiste en que es necesario e inevitable intensificar la apropiación de la Naturaleza para promover el desarrollo, y así asegurar el bienestar social. De esta manera, los gobiernos y sus apoyos sociales terminan colocando al extractivismo en el centro de sus estrategias de desarrollo.

Al asumir una posición como esta, comienzan a caer en contradicciones con sus propias promesas de alternativas. Por ejemplo, en Ecuador, el mandato constitucional postula redimensionar el desarrollo bajo un régimen del Buen Vivir, y el Plan Nacional de Desarrollo incluso llega a postular una salida de la dependencia extractivista (SENPLADES, 2009). Sin embargo, las acciones concretas de la administración Correa apuntan en sentido contrario: la profundización del extractivismo y, en especial, la reciente promoción de la megaminería. De manera similar, en Bolivia, la nueva Constitución invoca al Vivir Bien, y por ello se esperaba una agenda que comience a explorar el postextractivismo. Pero allí tampoco ocurrió eso; al contrario, el gobierno Morales apoyó todo tipo de aventuras extractivistas, mientras cuestionaba y hostigaba a los movimientos de la sociedad civil.

Entretanto, las empresas o sus asociaciones, sin duda, apoyan el extractivismo. Utilizan medios menos estridentes, que incluyen articulaciones con las cámaras empresariales nacionales, o asociaciones con universidades, para impulsar profesiones técnicas necesarias para sus actividades; desarrollan distintos programas de relaciones públicas, que pueden ir desde el uso de las etiquetas

de la “responsabilidad social empresarial”, hasta el financiamiento de obras sociales, como puestos de salud o escuelas.

Es también muy importante advertir que, en muchos casos, las empresas no tienen necesidad de una gran exposición pública en defensa del extractivismo, ya que ésta es realizada por los propios gobiernos. En muchos casos, como sucede, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Chile, Perú o Uruguay, son los ministros quienes defienden a viva voz al extractivismo.

No solo eso, sino que el Estado ni siquiera busca soluciones efectivas frente al extractivismo, y cuando hay mucha presión social, apenas cede en aceptar compensaciones económicas, siempre y cuando no pongan en riesgo la viabilidad comercial y productiva del extractivismo. Son Estados que buscan equilibrios entre el capital y las demandas ciudadanas, aceptan el extractivismo como necesario para el crecimiento económico, y buscan amortiguar sus efectos negativos, al apelar a un asistencialismo monetarizado. Estos Estados, y con ellos los grupos partidarios que los sostienen, abandonaron la búsqueda de alternativas al desarrollo. En administraciones conservadoras, esto puede ser entendible, pero para el progresismo es una renuncia sustantiva.

La dinámica de las políticas sobre las alternativas al desarrollo

Comencemos por una evaluación comparativa del estado de las discusiones sobre postextractivismo en los distintos países de América del Sur. Considerando las campañas y acciones realizadas, la diversidad y el protagonismo de las organizaciones involucradas, su repercusión en los debates públicos, y los contenidos de las propuestas, es posible comparar la situación entre distintos países.

Las actividades más intensas sobre postextractivismo se encuentran en Perú y Ecuador, seguidos por Bolivia; en una situación intermedia, se ubican Argentina, Uruguay y Colombia. Les siguen Chile y Paraguay, y considero que la situación de

mayor debilidad se observa actualmente en Brasil y Venezuela. Este marco comparativo es, sin duda, esquemático y subjetivo (está basado en las percepciones del autor sobre las actividades recientes), pero de todos modos ofrece puntos de referencia para una discusión.

En Brasil se observa una evolución que, por ahora, es distinta a la de sus vecinos. Si bien se registra un número importante de conflictos por actividades extractivas (mineras, petroleras, agropecuaria y forestales), éstas son muy localizadas y circulan bajo andariveles separados (por ejemplo, unas se enfocan en minería y otras, en monocultivos). Además el nivel de coordinación nacional es más bajo (no existen redes análogas a CONACAMI de Perú, con un peso público similar). A diferencia de lo que se observa en los países vecinos, las grandes ONG y grupos académicos, por ahora, no han logrado promover el paso cualitativo de una discusión generalizada sobre las alternativas al desarrollo. Muchos de ellos siguen centrados en cuestiones como el papel del Estado, el nivel de regalías que se aplicará a las nuevas explotaciones petroleras, etc., y no tanto en las alternativas postextractivistas.

Seguidamente se puede abordar la composición y dinámica de las acciones que, desde la sociedad civil, abordan el postextractivismo. Como es de esperar, muchas de las características descritas anteriormente para los movimientos de resistencia se repiten en este caso. En efecto, se observa una gran diversidad de participantes, que va desde actores clásicos, como pueden ser aquellos que provienen de las ciudades junto con organizaciones indígenas, de académicos a líderes del mundo rural, etc. Estos se organizan también de una manera heterogénea, desde redes muy laxas e informales o movimientos, hasta otras que están nucleadas en ONG muy formalizadas.

El debate político ha avanzado significativamente hacia el postextractivismo en aquellos espacios donde la coordinación y cooperación fue más fuerte. En Perú se logró conformar coordinaciones

o redes con miembros que eran de distinto tipo y que, incluso, no necesariamente coordinaban entre sí en otros temas. Allí, la coordinación fue amplia y plural, no cayó en disputas sobre el liderazgo y, de esa manera, las campañas avanzaron sustancialmente.

Las coordinaciones estables también se enfocan en que ese papel sea asumido con energía, y que su función articuladora y moderadora sea aceptada por los distintos participantes. Esta legitimación del liderazgo se observó en la campaña peruana, mientras que en otros países, como Bolivia y Ecuador, no ha sido posible, en tanto hay al menos dos corrientes con distintos enfoques sobre los temas del desarrollo, ambiente y sociedad. Ese tipo de divergencias entre dos perspectivas en la acción ciudadana suele ser común en varios países. En esos casos, el problema es que muchas veces resulta difícil remontarlas, para ganar en una mayor adhesión ciudadana. En Argentina ocurre una situación inusual: una de las redes más importantes (conformada por asambleas ciudadanas), explícitamente evita implantar una coordinación nacional, contar con voceros, etc.

Los problemas para articular demandas locales y campañas nacionales reducen las capacidades de implantar debates sobre alternativas al extractivismo. Este puede ser uno de los factores detrás del retraso brasileño. En ese país hay coordinaciones y movimientos nacionales muy potentes en otras cuestiones, como los enfocados en las represas hidroeléctricas o de los sin tierra;⁵¹ no obstante, esto no se logró en los temas del extractivismo y postextractivismo.

El papel de los liderazgos personales también es clave. Por ejemplo, en Ecuador, la prédica del economista Alberto Acosta genera un fuerte impulso a esta temática. Acosta desempeña

51 Véase Movimento *dos Atingidos por Barragens* (MAB), <www.mabnacional.org.br>; y Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), <www.mst.org.br>

un papel clave por sus múltiples facetas: es un economista, ha desempeñado cargos de enorme importancia en el gobierno de Rafael Correa (fue ministro de Energía y Minas, y presidente de la Asamblea Constituyente). Se alejó de ese gobierno y ahora lidera la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas. Tiene una larga historia de militancia social junto a muy diversas organizaciones sociales e indígenas.

Por otro lado, en Perú, no existe un liderazgo personal tan fuerte; en cambio, hay un conjunto más numeroso de intelectuales y militantes volcados a estos temas. Varios de ellos participaron en la campaña de alternativas sobre el extractivismo; algunos se desempeñaron en la fase inicial de la administración de Ollanta Humala, pero retornaron a las organizaciones ciudadanas, como resultado de diferencias sobre la estrategia minera gubernamental (los casos más claros son José de Echave y Hugo Cabieses, quienes fueron viceministros dentro del Ministerio del Ambiente, pero renunciaron por la agudización del conflicto frente al proyecto minero Conga). Esas renunciaciones son raras en el contexto latinoamericano y, a mi juicio, tienen una enorme importancia, ya que legitiman las demandas que, desde la sociedad civil, se elevaban frente al extractivismo.

Otra renuncia conocida es la de la militante social brasileña Marina Silva, quien fue ministra del ambiente bajo el gobierno de Lula da Silva. Si bien Silva dejó el gobierno y denunció el debilitamiento de la agenda ambiental, en sus funciones siguientes, especialmente como candidata a la presidencia por el Partido Verde, no defendió una agenda de alternativas al desarrollo ni una postura postextractivista.

En otros casos, y en otros países, muchos militantes o intelectuales accedieron a los gobiernos y, al contrario del caso peruano, permanecen allí, para promover activamente el extractivismo, defender el desarrollo dominante y criticar a las organizaciones sociales. Un caso impactante es el del vicepresidente

Álvaro García Linera, quien no solo alaba al extractivismo, sino que ataca a las organizaciones indígenas.⁵²

Estos casos refuerzan la necesidad de tener presente que plantear alternativas al desarrollo en general, y sobre el postextractivismo en particular, no es sencillo. Demandar una reducción de la minería en un país andino, o de los monocultivos en el Cono Sur, enfrenta muchas resistencias. En momentos iniciales, las discusiones sobre ese tipo de alternativas aparecen en ámbitos acotados, con participación de pocas organizaciones y solamente algunas redes. El concepto de una “alternativa al extractivismo” tiene un alcance limitado en la opinión pública, y es necesario justificarlo una y otra vez.

Pero en algunos casos parecería que se superan las barreras y el debate público se amplía. Se suman nuevas organizaciones a estas discusiones, la base social se pluraliza y participan redes nacionales. Un sector significativo de la sociedad entiende que el desarrollo convencional está encontrando sus límites y considera válida la idea de explorar alternativas a éste. En ese enfrentamiento al extractivismo hay una crítica al desarrollo dominante. Esto no quiere decir que desaparezcan las posiciones enfrentadas, sino que el tipo de debate público ha cambiado en forma sustantiva.

Estos procesos se pueden describir de manera somera al apelar al reconocimiento de tres tipos de disputas políticas⁵³ (que además

52 Es notable advertir las diferencias de opinión de A. García Linera sobre la situación del TIPNIS. Mientras que en el pasado defendía a las comunidades indígenas y su participación directa en la gestión territorial (Orozco Ramírez, García Linera y Stefanoni, 2006), una vez en el gobierno insistió en la intervención de esa zona y la apertura al extractivismo.

53 Se utiliza aquí el término “disputa” en sentido genérico para referirse a debates llevados adelante con vehemencia y energía, y que pueden incluir o no componentes de altercados o conflictos, expresados en el ámbito público y por actores colectivos. El concepto de “política” se lo utiliza también de forma genérica como las expresiones en la arena pública sobre los asuntos colectivos. Reconozco que existen otros aspectos de esta dimensión

se ilustran en el gráfico. Las disputas tipo I o “enfocadas” responden a cuestiones acotadas, que pueden ser casos localizados o temas específicos. Los ejemplos clásicos van desde los reclamos vecinales sobre una fábrica, al rechazo de un emprendimiento minero en particular. La disputa está circunscrita en el sentido que se enfoca, por ejemplo, en resolver la contaminación de una fábrica o cambiar la ubicación de una mina, pero no se discute la validez de los procesos productivos en juego, en cada uno de los casos. De esta manera, el debate está enfocado en los emprendimientos, sea en los procesos en juego o sus ubicaciones; de allí que los cambios y las posibles soluciones solo involucran a éstos.

En las disputas tipo II, las discusiones pasan a abordar el discurso sobre el desarrollo. En estos casos, las cuestiones son colocadas como parte o expresión de un modelo de desarrollo. Por lo tanto, las posibles soluciones (la remediación ambiental o la participación ciudadana), son entendidas como partes inseparables de las ideas que existen sobre el desarrollo. No se excluyen las discusiones ni conflictos sobre casos puntuales; pero esto es ahora parte de un debate más amplio. No están acotados a un proyecto específico, pero terminan involucrando a todos los que corresponden a ese mismo tipo de procesos; por ejemplo, todos los emprendimientos mineros o las regulaciones nacionales sobre participación. En estas disputas tipo II, la discusión se enfoca a los “desarrollos alternativos”, de donde lidia, por ejemplo, con las formas de instrumentalizar el extractivismo, pero no la esencia de ese estilo de desarrollo. La disputa política más común en estos casos reside en abordar el papel que debería tener el Estado en regularlo o cómo aumentar la captura de excedentes. Los cambios que aquí están en juego no sólo afectarán a los proyectos específicos que dispararon las discusiones, sino

“política” enfocada en el desarrollo, pero no es posible discutir las aquí por limitaciones de espacio.

que tendrán consecuencias más allá de éstos; incluso afectarán emprendimientos en sitios donde no hay oposición activa. Esto se debe a que los cambios sobre las prácticas del desarrollo potencialmente afectan a todo un país.

Por último, las disputas tipo III exploran las alternativas al desarrollo. En este caso, el horizonte de las alternativas cambia sustancialmente, y la disputa gira en torno a la propia validez de la idea del desarrollo. La agenda postextractivista es un caso emergente de las disputas de este tipo. En ellas se pone en discusión a todos los emprendimientos extractivos en todo el país; se considera que los instrumentos políticos, institucionales y científico-técnicos actuales son insuficientes para revertir sus impactos. Consecuentemente, una alternativa postextractivista es inseparable de una crítica radical al desarrollo contemporáneo, y la orientación de las prácticas políticas se coloca ahora en el objetivo de trascenderlo.

En las disputas tipo I se puede encontrar una amplia diversidad de actores, y éstos pueden avanzar en forma más o menos independiente entre ellos, con bajos niveles de asociación y coordinación. Este es el caso de varias resistencias al extractivismo en Brasil. En ellas prevalecen los conflictos que pueden encontrar soluciones negociables, sea por reformas técnicas, como por distintas vías de compensaciones (una distinción que se presentó más arriba en este artículo). En las disputas tipo II, al comenzar a abordarse la temática del desarrollo, algunos de los actores envueltos en resistencias al extractivismo encuentran equivalencias en otros actores que están envueltos en cuestiones muy distintas. Por ejemplo, grupos que protestan contra la minería pueden encontrarse con asociaciones campesinas que resisten pérdidas territoriales, y si bien los casos específicos son muy distintos, pueden avanzar en sus diálogos y en la construcción política al debatir sobre los sentidos del desarrollo, en tanto es un campo temático muy amplio que los involucra a todos ellos. Una situa-

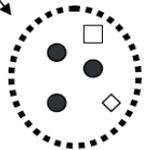
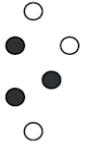
ción similar se encuentra con las disputas políticas tipo III, ya que allí se refuerza todavía más la crítica al desarrollo. Por lo tanto, el tránsito desde disputas tipo I hacia las tipo II y III fortalece las coordinaciones colectivas para la construcción política. Bajo disputas tipo II y especialmente III, los grupos afectados, por lo general, consideran que no existen opciones viables de reformas tecnológicas o compensaciones; así, el debate se trasloca a otros marcos conceptuales.

Solo algunos de los actores envueltos en disputas tipo I pasan a un debate del tipo II, y son todavía menos los que abordan los del tipo III. Por ejemplo, en Perú existen centenas de conflictos ambientales alrededor del extractivismo, pero el grupo de organizaciones que aborda cuestiones de desarrollo es más acotado, y el número que está activamente participando de las iniciativas en postextractivismo es todavía menor. No existe una secuencia necesaria entre estas tres opciones y, de hecho, hay casos donde comunidades locales envueltas en conflictos muy acotados, en poco tiempo aparecen involucradas activamente en disputas tipo III. Posiblemente ejemplos de esos “saltos” se encuentran entre algunas organizaciones indígenas (como en el pueblo Sarayaku en Ecuador). A su vez, los actores que se encuentran en disputas del segundo y tercer tipo pueden permanecer activos en las de tipo I; no existe una exclusión necesaria con ellas. Estas relaciones posibles se esquematizan en el gráfico.

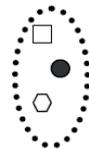
Por otro lado, los conglomerados y articulaciones posibles en las disputas tipo II y especialmente tipo III, permitirían construir mejores alianzas con movimientos ciudadanos de otros continentes, que también buscan alternativas al desarrollo dominante. Estos aportes son importantes, ya que la reducción de extractivismo podría tener mejores posibilidades si se instala una estrategia de decrecimiento del consumo de materia y energía en los países industrializados.

Gráfico. Tipos de disputas políticas sobre extractivismo y desarrollo

DISPUTAS I: ACOTADAS



DISPUTAS II: DESARROLLOS ALTERNATIVOS



DISPUTAS III: ALTERNATIVAS AL DESARROLLO

Representación esquemática de tres tipos de disputas políticas sobre el extractivismo en particular, y el desarrollo en general. Las disputas tipo I están acotadas a casos o temas específicos, y pueden ocurrir sin vínculos entre ellas o con articulaciones limitadas. Las disputas tipo II abordan los desarrollos alternativos y tienden a conformar conjuntos laxos, debido a equivalencias y articulaciones en explorar opciones de desarrollo. Las disputas tipo III expresan alternativas al desarrollo, y entre ellas se encuentran las del postextractivismo. Los símbolos representan distintos tipos de actores sociales organizados; las líneas punteadas engloban de coordinación y vinculación más estrechas.

Fuente: Elaboración propia

Los sentidos de las ideas sobre “futuros posibles” son distintos en cada una de esas disputas. La política de las disputas tipo I y II está enmarcada en un horizonte de reformas instrumentales, dentro de ese desarrollo convencional. Sin duda, se amplían notablemente cuando se consideran las alternativas al desarrollo. En esos casos, un empuje decisivo proviene del aporte de los conocimientos indígenas: sus saberes y sensibilidades son ingredientes claves para poder criticar y desmontar las ideas de desarrollo, en tanto éstas se presentan como naturales y permanentes.

Varios ejemplos ilustran esta cualidad emergente en esa política de las alternativas al desarrollo. Por ejemplo, el reclamo de una moratoria petrolera en la Amazonía se basa tanto en razones tomadas de los saberes expertos convencionales (como la pérdida de biodiversidad o los riesgos ambientales), como en otros argumentos que provienen de una sensibilidad indígena, expresadas en el Buen Vivir o los derechos de la Pachamama.

Los gobiernos, en general, “ven” estas disputas como si todas ellas fueran del tipo I. Es más, las consideran a todas revertibles y compensables. La situación es más dramática para la izquierda gobernante, ya que en el pasado alimentaba los debates sobre el desarrollo; sin embargo, una vez ocupada en la gestión estatal, tiene enormes dificultades para entender las discusiones contemporáneas sobre estos temas. Pero no puede olvidarse que procesos análogos ocurren en el resto de la sociedad, donde la satisfacción por medio del consumo, la seguridad en el empleo y otros componentes, hacen que vastos sectores apoyen esas estrategias de desarrollo convencionales.

Desde la mirada estatal o de los conglomerados políticos, también causa preocupación que las disputas tipo II y III discurren por crecientes niveles de organización y coordinación. Para el aparato estatal y los conglomerados político partidarios en el poder, es importante mantener a las oposiciones políticas divididas y desarticuladas, cuestionar una y otra vez que éstas representen una alternativa, en tanto ese papel es defendido por los propios gobiernos. De esa manera, se evita la concreción de opciones partidarias que podrían conquistar el gobierno. Sin duda, desde las disputas tipo II y III se tejen articulaciones hacia el campo político partidario (por ejemplo, en Perú, con relaciones diversas con Tierra y Libertad; o, en Ecuador, bajo la candidatura de Alberto Acosta, desde la coordinación de las izquierdas). Esas potencialidades determinan que tales expresiones se vuelvan “visibles” para los gobiernos de turno, lo que provoca reacciones

contrarias cada vez más enérgicas. Allí no está en juego solamente unos pocos proyectos específicos, sino que se discute la esencia de las estrategias de desarrollo y el papel de las alternativas.

Alternativas al desarrollo y renovación política

El breve resumen presentado en este capítulo permite afirmar que están en marcha nuevas expresiones políticas alrededor de la temática del desarrollo. No sólo se está remontando el retroceso y quietismo de los últimos años, sino que ahora también se exploran las alternativas a las apreciaciones convencionales del desarrollo. Una de las expresiones más claras de estos cambios reside en las disputas alrededor del extractivismo, y se ejemplifica en las alternativas postextractivistas. Reaparecen las ideas de otros futuros posibles, así como la necesidad de pensarlos y promoverlos.

El impulso de estos cambios no se origina en los gobiernos o en partidos políticos convencionales, sean de izquierda o derecha; ni siquiera en muchos de los viejos movimientos sociales. Ese impulso proviene, en especial, desde la sociedad civil involucrada y organizada en distintas formas de denuncia o resistencia frente al extractivismo, y desde otros actores que acompañan esas expresiones. El concurso de las organizaciones indígenas se ha vuelto clave, especialmente para proveer contenidos que refuerzan los sentidos de alternativas que están más allá del desarrollo convencional de base occidental. De ahí que este empuje proviene de expresiones políticas desde la sociedad civil, bajo un signo intercultural.

En el caso específico de las agendas postextractivistas, se observan avances de distinta índole en muchos países. En todos los casos, ha sido muy importante contar con niveles crecientes de organización, apelar a fuertes dosis de innovación, y volver a tender puentes entre diferentes movimientos sociales. A pesar de todas las resistencias con las que deben lidiar, incluso el hostigamiento gubernamental, la temática postextractivista se está posicionando en varios países. Con ello, no solamente se ofrecen nue-

vas formas de superar la dependencia de los emprendimientos mineros, petroleros o agrícolas, sino también de explorar otras opciones de vida más allá del desarrollo. Este proceso está contribuyendo a una renovación de la política bajo nuevos términos.

**LA CIUDAD Y EL CAMPO
COMO ESCENARIOS DE TRANSFORMACIÓN**

Resignificando la ciudad colonial y extractivista

Mario Rodríguez Ibáñez¹

*“Para poder encontrarse,
primero hay que tener el coraje de perderse”
(Grafiti pintado en la década de los noventa, en la ciudad de La Paz)*

La ciudad se encaramó en el simbólico dominante, como el lugar privilegiado de distanciamiento de la Naturaleza, como el lugar de la civilización, como el lugar del éxito moderno, como la materialización del progreso y del desarrollo. La ciudad se identificó como distanciamiento de lo campesino, y en nuestro continente invadido eso significa, también, distanciamiento de lo indígena, en oposición a lo rural que se relaciona con “dependencia” de los ciclos de la Naturaleza. La ciudad se hizo, así, el lugar privilegiado para no ser nosotros ni nosotras, para dejar de mirarnos al espejo y, al contrario, tratar de vivir una mascarada de imitaciones a lo externo, a lo “civilizado”, a lo “desarrollado”, a lo moderno-colonial.

Las ciudades son el corazón de la reproducción de los modos de vida dominantes, coloniales, modernos, capitalistas. Las ciudades son el lugar donde se alimentan las subjetividades que consolidan nuestro histórico saqueo y el extractivismo primario al que nos condenó la colonia. Y, sin embargo, nuestras ciudades no escapan de su sino; no pueden no ser habitadas por nuestros otros modos de vida profundamente indígenas u originarios, que disputan desde “lo popular” sus significados y sus configuraciones.

Sí, hay que tener el coraje de perderse de lo que hemos venido normalizando como espacio y modos de vida urbanos; perderse de esas características con las que hemos venido aceptando nuestras

1 Integrante del equipo de Wayna Tambo - Red de la Diversidad de Bolivia. Educador con profundizaciones en temas referidos a la interculturalidad, el tema urbano y el desarrollo moderno.

vidas en las ciudades o, al menos, con las que hemos creído que deberíamos urbanizarnos, sinónimo de civilizarnos. No hay otra manera de encontrarnos, de reencontrarnos...

Este artículo pretende contribuir en ese debate, a partir de las conversaciones y experiencias que venimos compartiendo en la Red de la Diversidad,² complementadas con intercambios con otras experiencias del país y del continente, entre ellas, las de grupos de Venezuela,³ en especial del Movimiento de Pobladores y Pobladoras, con quienes, a través de un cómplice compartir, nació la idea de este texto. Podríamos, en principio, recoger los resultados de esos intercambios con Venezuela; no obstante, decidimos que resulta más pertinente y coherente que el presente artículo se refiera a lo que venimos debatiendo y criando en la Red de la Diversidad de Bolivia, y dejar espacio para una voz propia desde Venezuela. Así, este texto no intenta ser un trabajo riguroso sobre el tema urbano o un recuento histórico; más bien, se ubica en el lugar de los sentidos de resignificación y reconfiguración de la ciudad, desde ese horizonte que denominamos Vivir Bien/Buen Convivir. Tiene un carácter más de búsquedas que de verdades, más de provocaciones que de recetas, más de preguntas que de respuestas. Desde aquí hablamos, desde aquí compartimos estas palabras.

2 Red de la Diversidad en Bolivia, conformada por Wayna Tambo, de la ciudad de El Alto; Yembatirenda, de Tarija; Sipas Tambo, de Sucre; Yaika Pox, de Santa Cruz; e, Imillas-Kasa Kamasa, de Cochabamba.

3 Visitas de intercambio que incluyeron, en Bolivia y Venezuela, a las siguientes organizaciones venezolanas: Movimiento de Pobladores y Pobladoras, Tiuna el Fuerte, Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), Red de Trueques y los Gabinetes Populares del Municipio Sucre, del Estado de Barinas.

La configuración de las ciudades

No realizaremos un recuento histórico de la configuración de nuestras ciudades, al menos de aquellas que constituyen las capitales departamentales; pero sí destacaremos, de manera muy general, tres características claves para comprenderlas desde el imaginario dominante: su carácter colonial, los procesos de modernización y la aceleración contemporánea del consumo.

Lo colonial: marca de nacimiento de nuestras ciudades

La invasión colonial fundó ciudades. Fueron el escenario de la penetración externa y de la desposesión de las poblaciones locales y originarias. Esas ciudades nacieron coloniales y esas características, como la colonialidad en nuestras vidas, permanecen en la actualidad.

Las ciudades se construyeron como invasoras: penetraron un territorio, por lo general, ya habitado por indígenas originarios; es decir, se edificaron a partir de la desposesión de los territorios de los habitantes originarios, y consolidaron lo externo como penetración violenta, no dispuesta a conversar, sino a imponer su presencia.

Las ciudades se edificaron siguiendo dos criterios básicos: tener la proximidad de un “recurso natural”, para ser explotado y saqueado en beneficio de los invasores y de la potencia colonial; y, en segundo lugar, contar con agua cercana para resolver las necesidades básicas de sobrevivencia. Esas ciudades coloniales no pueden ser comprendidas sin estas características fundantes, constitutivas de su espíritu. Al saberse como invasoras de un territorio no propio, que obligaba a la desposesión de los pueblos originarios, se construyeron desde una lógica de protección, de defensa militar ante ese enemigo que se iba constituyendo en el “otro” a batir por la dominación colonial: lo indígena-rural. Esa fue la marca inicial de nuestras ciudades. Casi todas las que nacieron

en esa etapa configuraron su arquitectura a partir de una plaza central que aglutinaba el poder simbólico y real de la época: la administración política, la iglesia, el comercio, que luego sería sustituido por los bancos. Desde esa plaza central, se contorneaban las viviendas de las familias colonialistas invasoras; detrás de ellas, el espacio militar de defensa, al que debemos la nominación de “cuadras”, cuando nos referimos a la estructura organizativa urbana; lenguaje militar que habita nuestra organización urbana. Después de esas caballerizas y sistemas de defensa, estaba el espacio permitido para que lleguen esos “otros” y “otras”: las poblaciones indígenas. Ahí, hacia la cuarta o quinta cuadra respecto de la plaza central, por ese entonces, se instalaban los mercados para la llegada de campesinos-indígenas con sus productos. Hoy, en ese lugar se encuentran, casi siempre, los “mercados centrales” de nuestras ciudades, que se forman desde su herencia colonial. Tarija, La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro o Potosí evidencian ese esquema.

En Tarija, como en otras ciudades, por ejemplo, solo se denomina popularmente “plaza” a la central; las otras son “plazuelas”. Estas expresiones muestran precisamente la concentración del poder simbólico y real en torno a las plazas centrales, así como la concentración del poder en las castas coloniales, que se convertirían en élites locales. Es tan significativo este poder simbólico en torno a las plazas centrales —o “plazas de armas” como dirían en otros países—, que ya en la época republicana, las élites locales construirían allí las sedes de los “clubes sociales”, para acentuar ese poder simbólico de una estructura colonial que junta desigualdades de clases con estratificación étnica. Esos “clubes sociales” eran solo para “la sociedad”, es decir, para los sectores portadores de la colonialidad dominante: élites blancas y enriquecidas desde la lógica del saqueo de las riquezas del país y la apropiación del erario público. Las plazas, hasta después de la revolución nacionalista de 1952, eran territorios prohibidos para indios e

indias; éstos requerían permisos y autorizaciones para transitar por dichos espacios. La ciudad colonial nació segregadora.

Hasta hoy se encuentra en el atrio de la iglesia de San Francisco, en La Paz, una placa que señala el límite entre la ciudad española y la ciudad de indios. La frontera interna estaba servida y todavía permanece así, con diferentes variantes. Recordemos, por ejemplo, que la fiesta del Gran Poder, en La Paz, era de indios y nació por la zona de indios, en la ladera oeste de la ciudad. Esta fiesta solo se podía desarrollar por ese territorio de indios. Recién en la década de los sesenta, dicha festividad ligada con el ciclo ritual agrícola andino pudo consolidar su penetración en el centro de la ciudad, territorio hasta entonces sagrado para las élites coloniales del país. Al respecto, vale recordar lo sucedido en el 2001. En ese año, falleció Víctor Paz, ex presidente de Bolivia por tres ocasiones y fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), pocos días antes de la entrada del Gran Poder. Ante la declaratoria de duelo nacional por el deceso, la Alcaldía de La Paz, gobernada por la izquierda moderada de Juan del Granado, trató de impedir o postergar la fiesta. Después de largas negociaciones —que ahora no detallaremos—, las fraternidades organizadoras consiguieron que la entrada se realice, pero el acuerdo fue que no ingrese al centro de la ciudad. Esa izquierda moderada en la Alcaldía paceña reproducía las lógicas coloniales: los “indios” podían bailar y beber, mientras no ingresen al centro colonial, para no manchar el duelo. La fiesta no solo se realizó, sino que rebasó la barrera de guardias municipales, tomó el centro y alargó su recorrido. Simbólicamente se estaba disputando el poder sobre la ciudad; un poder que ya los sectores aymaras acompañaban con creciente presencia económica.

En la actualidad, las plazas centrales siguen siendo ese símbolo colonial, blanco, dominante y anti indio. Cuando, en 2008, la ofensiva conservadora y oligárquica en el país se vio derrotada, y sectores campesinos e indígenas iban cercando Santa Cruz y ame-

nazaban con “tomar” la ciudad, las dirigencias cívicas y prefecturales de derecha llamaron a defender la plaza como su último reducto, donde “no podrá entrar nunca un indio”. Igual sucedió simbólicamente con la humillación de indígenas en la plaza central de Sucre, el 24 de mayo de ese mismo año, o en Cochabamba, un año antes. Para cerrar algunos ejemplos, cabe recordar lo ocurrido durante la IX Marcha indígena en defensa del TIPNIS. En esa ocasión, los pobladores de San Ignacio de Moxos, opuestos a la marcha, decidieron que permitirían el paso si ésta no ingresaba a la plaza y contorneaba el pueblo. La plaza sigue siendo el simbólico del poder colonial; sigue causando estratificación y segregación.

El simbólico urbano del poder no solo es colonial, como expresión de la discriminación étnica y de clase, también es patriarcal. Las plazas, ya en la época republicana, se llenaron de monumentos de los hombres que fundaron esas ciudades, de héroes de la independencia o de “insignes” personajes intelectuales o emprendedores casi siempre masculinos, poseedores y guerreros. Las ciudades han sido construidas desde la dominación masculina. Basta con observar cómo, desde su nacimiento, el espacio público urbano (calles, plazas y espacios deportivos) se caracteriza por ser peligroso para las mujeres. Lo que hoy se denomina “inseguridad ciudadana” tiene como víctimas principales a las mujeres. El espacio urbano contribuye a ello, porque su organización está pensada desde las necesidades y formas masculinas.

La ciudad colonial –ya se mencionó– nació segmentando, fragmentando, estratificando la población en su ordenamiento urbano. Barrios para indios, para pobres, para oficios considerados de baja valoración, casi siempre vinculados con el trabajo manual que aproxima más a la Naturaleza; otros barrios, para ricos, para élites, para blancos. Esa característica persiste. Hasta ahora se recuerda en Tarija los cuatro barrios de su origen, cada uno para un segmento de la población, claramente estratificada.

Por ello, no es casual que el Club Royal Obrero, con su camiseta con los colores de los sindicatos anarquistas, se haya fundado en el barrio San Roque, el destinado para obreros y artesanos. Tampoco es casual que los planes de reordenamiento urbano contemporáneos tiendan a expulsar a los sectores populares, de los nuevos márgenes que son copados por las élites que abandonan el centro de las ciudades. Se busca estratificar y segmentar. La convivencia entre diferentes es mal vista; no es “civilizada” para la ciudad colonial que nos acoge.

La ciudad, heredera de los burgos europeos, se constituyó en esa lógica colonial, como el lugar privilegiado del consumo. Allí se consumen los alimentos producidos por otros, las familias campesinas-indígenas; pero, al mismo tiempo, se consume la riqueza que beneficia al centro urbano, la riqueza expoliada en el territorio colonial; en aquella época, minerales, principalmente, y madera; hoy, también hidrocarburos y monocultivos. La ciudad como consumidora se beneficia, de manera estratificada por sectores de clase –que, en nuestro continente, se asocian con sectores étnicos también–, del extractivismo primario y del saqueo de nuestras riquezas y de seres humanos; a esas dinámicas nos condenó el orden mundial establecido desde la colonia. Los sectores dominantes de las ciudades y del país requieren sostener ese extractivismo saqueador para acceder a servicios y beneficios que ofrece la vida urbana. Esa relación es fundamental para comprender cómo nuestras élites reproducen el extractivismo y la economía primaria exportadora; desde ahí reproducen las formas coloniales y extraen sus beneficios, a costa de lo que se desposesiona, se invade, se penetra, se saquea.

La ciudad colonial instauró en el imaginario colectivo la idea de que la civilización, la superioridad, se vive en las ciudades. Si bien gran parte de nuestro periodo colonial tuvo una fuerte presencia de la vida en hacienda (gente más obligada a convivir, aunque sea en tensión, con los indígenas), la ciudad pasó a ser el

referente de poder y dominación, el centro de la noción de civilización y superioridad, en contraposición con lo rural, lo campesino, lo indígena, lo atrasado.

Las modernizaciones: los sentidos “modernos” de las ciudades

A fines del siglo XIX e inicios del XX, el continente entero, y nuestro país en particular, vivió una euforia por la llegada del “progreso”. La luz eléctrica, el posterior arribo de los automóviles, una incipiente industria, el recambio tecnológico en la minería y, poco a poco, el *boom* petrolero integraron este escenario que entusiasmaba los discursos de alumbramiento del nuevo siglo. Este fervor emergía paralelo al declive del sistema latifundista y de hacienda, y a una mayor concentración urbana, con el respectivo auge de formas de vida asociadas con ese progreso. Las “luces de la ciudad” encantaban, prometían ese nuevo paraíso. Las imágenes de las capitales europeas y norteamericanas se consolidaban como el objetivo a imitar. El siglo XX nació de la mano de un oleaje de crecimiento urbano. Recordemos que, en tiempos de la colonia, Potosí pasó a ser una de las ciudades mayores del mundo, con población más grande que París o Nueva York. Pero durante el siglo XIX, en la etapa republicana, Potosí decreció a causa del debilitamiento de la minería de la plata. En general, las ciudades se estancaron o tuvieron un crecimiento poco significativo. El siglo XX se estrenó con un repotenciamiento de las ciudades vinculadas con las nociones de éxito, a las que invitaba el progreso.

Existe una coincidencia histórica que articula este proceso de urbanización y los intentos de consolidar los Estados-nación en el continente y en nuestro país. Se asume que nuestros Estados republicanos no consiguieron construir una nación fuerte, moderna, industrial, verdaderamente independiente. Nuestro atraso ya era considerado como algo constitutivo, medido sobre la base del “progreso” de Europa y de los Estados Unidos; estos

últimos, para entonces, ya tenían una fuerte presencia hegemónica en el continente. Se estaba viviendo la transición de la hegemonía inglesa-europea a la norteamericana. Incluso los modelos de ciudad se debatían entre las tendencias norteamericanas y las europeas. En el imaginario urbano, París seguía siendo el referente estético y de ordenamiento; pero, sin duda, el ideario colonial europeo dominó entre nuestras élites señoriales.⁴ Dos construcciones símbolo de nuestra colonialidad se edificaron a finales del siglo XIX: el castillo de la Glorieta, en Sucre, y la Casa Dorada, en Tarija. Estas construcciones coloniales señoriales no fueron fruto de la época colonial, sino de las élites del republicanismo conservador del siglo XIX. Las ilusiones que traía el progreso estaban cargadas de imitaciones coloniales.

Lo mismo ocurría en ámbitos tan diversos como la educación, la economía, las artes o los sistemas políticos. En la educación, por ejemplo, se discutía la creación de un sistema nacional que imitase lo “mejor” de la Europa culta. Eso significa “civilizar” al indio campesino, a través de la acción redentora de la educación. En ese sentido, la ciudad asumía con mayor fuerza la centralidad del conocimiento; ella era su portadora, porque estaba más próxima a las imitaciones del norte progresista, y desde ahí se podía desarrollar una cruzada civilizatoria hacia el área rural. En

4 En el presente artículo no profundizaremos en la noción de “modo de vida señorial”; de manera sintética, se trata de las formas que adoptaron las clases dominantes y las élites de nuestros países republicanos, que mezclan complejamente idearios de modernización con un sentido colonial de la imitación bastante burdo. Ello ha ido configurando unos modos de vida y estéticas muy peculiares, anclados en la colonialidad, el patriarcado y la estratificación social; fenómenos que están acentuados en nuestras sociedades y sirven como cultura que reproduce nuestro lugar primario exportador y extractivista, en el orden económico mundial. Esos modos de vida señoriales de las élites dominantes también han penetrado en todas las capas de la sociedad y conviven con los otros modos de vida provenientes de las culturas originarias, lo que produce un abigarramiento que hace parte de nuestra complejidad.

la economía, el modelo industrializador urbano era el camino a seguir. Sin embargo, ese modelo dependía de la transferencia de recursos del extractivismo extremo, la minería, ya por entonces desplazado del eje de la plata al del estaño, y de la creciente producción petrolera. El discurso era muy parecido al contemporáneo: necesitamos arreciar la explotación de materias primas para su exportación, ya que gracias a esa riqueza podremos obtener los excedentes suficientes para poder industrializarnos. El liberalismo en sus diferentes vertientes y matices configuraba el horizonte político correcto.

Las ciudades concentraron ese imaginario modernizador-civilizador, profundamente colonial. El éxito, el acceso al conocimiento, las posibilidades ilimitadas para las iniciativas económicas, la creatividad artística, el contacto con “el mundo”, la experimentación, se concentraban en ellas. La posibilidad de ascenso, de civilizarse, convergía en la ciudad, como espacio de realización. La ciudad se distanciaba aún más de lo rural, de lo indígena, aunque tuviera que cohabitar con ese “otro”, esa “otra” indígena. Sin embargo, lo indígena iba penetrando las ciudades, recomponiéndolas y disputándolas, aunque en los discursos y los imaginarios persistía la ciudad como sinónimo de progreso y de “cultura civilizadora”, por imitación de lo colonial.

El discurso modernizador, acrecentado a mediados del siglo xx, en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial y del proceso del nacionalismo revolucionario, se vinculó con una idea de lo cosmopolita y de lo mestizo como superior a lo indígena originario. Nuestras élites coloniales y republicanas no consiguieron derrotar a lo indio y debieron aceptar su presencia, incluso mayoritaria, en las ciudades. Entonces, puesto que no fueron eliminadas, al menos había que integrarlas al carro del progreso, civilizarlas o, al menos, invisibilizarlas a través del combate a la tradición y la folclorización de sus prácticas culturales diferentes; es decir, vaciarles de sentido, como otros modos de vida, e inte-

grarlas en una noción amorfa donde todo cabe: el mestizaje. Las ciudades se cargaban de imaginarios y modos de vida funcionales al capitalismo y a una versión moderna de progreso. La ciudad se hacía cada vez más capitalista, aunque desde la colonia ya estuvo ligada a dicho sistema en expansión.

Las ciudades, desde el proceso de modernización, también significaron una ampliación de las posibilidades de acceso, parte del discurso “democratizador” liberal: acceso más sencillo y barato a servicios como agua, alcantarillado, redes de energía eléctrica o transporte; acceso a sistemas de educación y salud estatales que iban consolidándose poco a poco, en la segunda mitad del siglo xx; acceso a fuentes de empleo con relación salarial, lo que permitía “disfrutar” del consumo más libremente; acceso a espacios de “diversión”, como el cine y los campos deportivos. Hay que recordar que mucho de esta ampliación del acceso y del consumo tuvo mejores condiciones en los centros mineros, durante varias décadas del siglo xx; pero el imaginario asociado con esta “democratización” se identificaba con la ciudad, con los modos de vida urbanos modernos y, al mismo tiempo, profundamente coloniales.

La producción industrial nunca terminó de despegar y fracasaron todos los proyectos para construir una burguesía nacional. Se reprodujeron las élites extractivistas, saqueadoras de materias primas para la exportación. Simón Patiño, imagen del éxito minero, vivía y se movía en la Europa del progreso; construía sus palacios en Bolivia e imitaba las formas imperiales de ese “viejo” continente, como reproducción señorial de su colonialidad. No fue propiamente un burgués ni un industrializador, sino un personaje señorial que generaba un simbólico urbano, a contramano de la mayoría de la población de esas ciudades, cada vez más indígena. Las ciudades seguían dependientes de la apropiación del excedente que provenía de las prácticas extractivas fuera de la ciudad, la minería y el petróleo; de la apropiación del trabajo indígena campesino, por el consumo barato de los alimentos; y, de

un sistema tributario que descansaba en el aporte rural. Las ciudades se consolidaban como el lugar del consumo, cada vez más acelerado y de más bienes, lo que incrementaba los criterios de necesidad; pero no eran ciudades productoras, como hasta hoy.

Las ciudades afianzaron sus centros urbanos. Los nuevos oleajes migratorios hacia las ciudades, especialmente en las décadas de los cincuenta (fruto de la reforma agraria) y de los setenta (como efecto del nuevo *boom* petrolero y la crisis provocada por esa reforma agraria), colocaron a las nuevas poblaciones urbanas en los cordones pobres no planificados. Se reafirmó la idea del centro-periferia marginal: un modelo que pronto entraría en crisis, porque la periferia era cada vez mayor, más envolvente, más penetrante de los centros, más amenazadora.

Nuestras ciudades empezaron a pensar en la “planificación urbana”, típico modelo de la modernidad controladora. Pero dichos criterios planificadores nunca pudieron controlar los rebalses populares crecientes, desafiantes, atrevidos. Las ciudades se recompondrían y las élites irían abandonando los centros como lugar habitacional, para desplazarse hacia los márgenes; en el proceso desposesionaron, otra vez, a los excluidos de siempre, a los herederos de los pueblos indígenas que habían sido desplazados desde la época colonial. Sin embargo, esa descomposición y recomposición de la noción de centro de las ciudades no erosionó en nada el ideario de las ciudades como el centro del progreso, del desarrollo y de la modernización. Las ciudades siguieron siendo ese eje imaginario del éxito y la civilización. Para dejar de ser indígena, para dejar de ser excluido y humillado, había que ser urbano, al menos para empezar.

La aceleración contemporánea del consumo: la consolidación de las ciudades

La segunda mitad del siglo xx es el escenario del acelerado crecimiento de las ciudades. Las poblaciones, en su mayoría rurales,

llegan a tener buena parte de sus habitantes en las ciudades. Es el despegue de nuevas configuraciones urbanas, que no necesariamente reproducen las formas coloniales-modernizadoras de las capitales departamentales. Sin duda, El Alto es el ejemplo más notable de esas otras ciudades. Ahora no nos detendremos en ello, sino en mostrar algunas características de esa explosión urbana, desde la lógica dominante capitalista y neoliberal, en gran parte de este periodo, asociadas con la aceleración de los procesos de consumo.

Las ciudades abandonan al ciudadano y se concentran en el consumidor y en la consumidora. Se aceleran los modos de vida relacionados con la cultura de lo desechable, de lo efímero. La noción de comunicación se desplaza de la idea de espacio para compartir y poner en común, hacia la de aceleración del desplazamiento para facilitar los consumos y lo efímero, que ya no comunica sino que consume. Las calles dejan de ser medios de comunicación, como lugar de convivencia pública. Recordemos que las aceras eran un espacio de encuentro, con los bancos en los portales de las casas, o las piedras puestas para sentarse a ver pasar la gente y saludarse. Ahora las calles pasan a ser vías de “comunicación”, en la medida que permiten acelerar los tránsitos de los autos y los peatones. Ya no son un lugar para quedarse, sino para pasar de un lugar de consumo a otro. Lo mismo sucede con el criterio de plaza que, en sus modelos de construcción, cambia: de lugar de encuentro, para días de “campo de domingo”, de lugar para estar, se convierte en espacio de paso o bien para permanecer cuando alguien organiza un evento a ser consumido. Las plazas de San Francisco y la plaza del bicentenario de La Paz son un ejemplo de esta tendencia. Las plazas se limpian de sombras, por eso no es posible permanecer en ellas, a menos que alguna institución organice un evento y ponga su infraestructura para ser consumida. Así, se abandonan los bancos, se busca expulsar

a los comerciantes al menudeo que detienen la circulación, y se reorganizan las calles para facilitar el tráfico vehicular.

La ciudad acelerada en sus consumos no pierde su carácter colonial y modernizador, a la vez, señorial e imitativo. Nuestras ciudades se parecen, entre ellas, cada vez más: las mismas nociones de viaductos, de mercados modelo, de plazas, de multicentros comerciales y de diversión, de sistemas de transporte. Se van perdiendo las singularidades, y las pertenencias a lo propio entran en crisis: se sustituyen por modelos de consumo que generan la ilusión de campo compartido por lo que se compra.

Se quiere eliminar las ferias y mercados populares, que no solo son lugares de transacciones mercantiles, sino de relaciones complejas y ricas, para reconstruirlos con criterios de supermercado, sin dejar de ser mercados con decenas de pequeños comerciantes. Se levantan construcciones funcionales para el comercio acelerado, para la noción de mercancía y consumidores en circulación; y, sin embargo, esos mercados se vacían o son rehabilitados de otras maneras, como veremos más adelante.

Ese tipo de ciudad sostiene y profundiza aceleradamente la estratificación, la fragmentación y la segregación, al provocar nuevas jerarquizaciones. La ciudad contemporánea ya no necesita tocarse desde su diversidad. Existen grandes territorios, sin relacionarse con el resto. La ciudad contemporánea pierde esos lugares que eran inevitablemente de la convivencia, aunque sea tensa, con los otros diferentes: los centros históricos habitados y no solo comerciales, los mercados populares y ferias, los espacios de diversión familiar y otros. Se privatiza y encierra el “tiempo libre”, lo que genera fragmentación por el consumo. Se borran los lugares de encuentro, se deshabetiza la calle y se privatiza la reunión. Se consolida el consumo por grupos de edad, lo que rompe las nociones de comunidad que integra las relaciones intergeneracionales.

La aceleración, el desecho creciente, el consumo multiplicado son las marcas de esta ciudad contemporánea que no abandona lo de antes, sino que se erige justamente desde sus matrices coloniales. La ciudad concentra el consumo, pero también la basura. Consume gracias a lo que se apropia del extractivismo y de la producción campesina; lo que desecha lo deposita en el campo, en lo rural. No logramos salir de este modelo que identifica lo urbano como lo opuesto a lo rural, enfrentado a lo campesino.

La población de las ciudades sigue creciendo y es mayoritaria. Las grandes ciudades concentradas son las formas del mundo contemporáneo; mayorías crecientes, cargadas de imaginarios de consumo capitalista, de desarrollo, de modernidad colonial, de modos de vida señoriales. Por ello, no es posible pensar en alternativas al desarrollo sino deconstruimos las ciudades, las reconfiguramos, las rehabitamos desde otros modos de vida que conviven en ellas.

Unas ciudades enfrentadas a lo campesino-indígena: lo urbano globalizado señorial/colonial modernista

Una característica central de las ciudades, desde su constitución colonial, es que se comprenden a sí mismas desde su diferenciación, su distancia, su enfrentamiento con lo rural campesino e indígena. En nuestro continente, con mucha fuerza, pero todavía más en Bolivia, lo rural campesino es indígena, y esta es una característica clave para comprender la configuración de nuestras ciudades.

No existen criterios únicos y consensuados para definir a las ciudades en el mundo. Se habla de algunas características centrales, entre ellas, poblaciones concentradas, con alta densidad y un mínimo de 10 mil habitantes. No obstante, existe una característica llamativa al momento de definir las ciudades, en los foros internacionales: no más del 25% de su población se dedica a actividades agrícolas o pecuarias. Este es un ejemplo claro de cómo

la ciudad se constituye, en su imaginario, desde una noción de distanciamiento con lo rural, con lo campesino, que en nuestro caso es indígena.

La ciudad, así, consolida algunos imaginarios y mitos centrales del progreso y el desarrollo, como crecimiento infinito, ilimitado. La ciudad es entendida como el lugar central de la civilización; es el espacio que nos aproxima a los países y a las culturas más “desarrolladas” y “civilizadas”. Por ello, inevitablemente, reproduce el carácter colonial y adquiere modos de vida señoriales, porque modernizarse significa sostener la colonialidad, el deseo infructuoso de ser el otro dominante, externo. Ejemplos grotescos encontramos en nuestras ciudades señoriales, con estatuas de la libertad gigantes sobre centros comerciales, en Santa Cruz; techos de doble agua muy pronunciados, que sirven para que las nieves se deslicen sin causar daños en el norte europeo, pero que en ciudades tropicales y amazónicas sirven como concentradores del calor, de por sí abrumador; estatuas de quienes nos invadieron y asesinaron sin contemplación, como adornos centrales de nuestras plazas; multicentros de cines y plazas de comidas idénticos a los de cualquier ciudad del mundo; u ofertas de comida cada vez más estandarizadas y globales.

Las ciudades también concentran la noción de éxito, de centralidad del poder y de acceso a los conocimientos y la “cultura”.⁵ Esta centralidad se consolida en la medida que la vida urbana representa el distanciamiento de los ciclos de la Naturaleza; de ahí, la importancia de mostrarse como opuesta a lo rural. Se es más moderno, más civilizado, cuanto más urbano en los modos de vida. Eso impacta. Incluso la vida rural se tiñe de “urbanismos”, porque ese es el sentido del ascenso social. No hay mejora posible si la vida se campesiniza, se ruraliza, se indigeniza.

5 Noción cultivada en los albores de la modernidad, para distinguir el conocimiento erudito, culto y universal, del folclore y las tradiciones campesinas.

El imaginario del desarrollo ilimitado se asocia con el consumo acelerado, y la ciudad es el lugar de las oportunidades para ello: facilita la circulación del capital y los imaginarios vinculados con el capitalismo mercantil. Pero para que se produzca esa capacidad acelerada de consumo, determinados sectores de las ciudades, los que siempre se apropian del excedente colectivo, requieren profundizar el extractivismo exportador de materia prima; es decir, la desposesión de territorios de otros, fuera de la ciudad. Por ello, nuestros modelos de ciudad, no productivos, sino burocráticos y de servicios, son funcionales a esa cultura colonial, que requiere el orden económico mundial dominante. Para colmo, la ciudad de consumos crecientes y acelerados descarga sus desechos sobre ese mundo rural de donde extrae la riqueza. El círculo se completa.

No obstante, nuestras ciudades no son solo eso. Están habitadas por otros modos de vida, se resignifican y se recontextualizan, se reconfiguran de otras maneras, también como continuidades entre campo y ciudad.

Las ciudades abigarradas y en disputa por sus sentidos

Cuentan las crónicas que cuando llegó la primera avanzada colonial a lo que hoy es la ciudad de Tarija, el grupo apenas superaba los 50 españoles, todos varones. Con ellos, llegaba más de un centenar de indígenas chichas de habla aymara. La ciudad, fundada bajo la misma estrategia de invasión colonial que comentamos al inicio de este artículo, nació con una población mayoritariamente indígena. Ese, su destino; esa, su marca inevitable.

Las élites coloniales y republicanas en nuestro país se constituyeron desde la frustración de nunca haber podido derrotar a lo indio; desde la inevitabilidad de tener que convivir con “ellos” y “ellas”. Demarcaron territorios, estratificaron las ciudades, pusieron límites visibles y simbólicos, segmentaron su geografía y, sin embargo, no pudieron impedir la penetración de lo indígena en

esa ciudad, la reocupación de los espacios; incluso, la disputa por el control de la economía urbana, en especial la del comercio.

La zona sur de La Paz es considerada hoy el área residencial de los sectores ricos, económicamente hablando, de las élites. Su avenida principal es ocupada, cada septiembre, por los sectores aymaras, que bordean la zona: poblaciones migrantes del área rural escenifican la toma de la ciudad a través de las fiestas (las denominadas entradas); en este caso, la fiesta de Exaltación. Cada año surgen quejas para llevar la fiesta hacia otras calles, fuera de la avenida central (otra vez, la noción de centro como último refugio de la colonialidad urbana). Se argumenta que impide el tráfico vehicular y el libre flujo de la gente; que afecta la limpieza de la zona (recordemos que uno de los imaginarios más importantes de la modernidad es la noción de limpieza, precisamente como distanciamiento del polvo propio de la Naturaleza); que hay mucha borrachera o lo que fuera. Pero no hay caso. La fiesta sigue y rehabilita el lugar de las élites, lo ocupa y lo disputa.

Lo mismo sucede en las calles, en la forma de ocupar las plazas, en los mercados y ferias, en el paisaje urbano, en las maneras de edificar las casas y organizar los barrios, en las formas de convivencia, en las relaciones que se establecen. Nuestras ciudades son diversas, plurales, complejamente convivientes entre distintos modos de vida que emergen desde lo que se denomina “lo popular”, en nuestro caso indígena; con rasgos de su matriz rural de nacimiento. Nuestras ciudades son complejas y abigarradas.

Lo indígena y popular es penetrado también por las lógicas de la colonialidad, de los imaginarios de modernización, de los consumos acelerados y el capitalismo contemporáneo. Pero estas características dominantes, asimismo, son habitadas por lo “otro”, lo “popular”, lo indígena. Esa complejidad y ese abigarramiento es el marco en el cual podemos deconstruir nuestras nociones de ciudad, y cultivar la posibilidad de alternativas al desarrollo y al modelo hegemónico de dominación capitalista.

Se entiende por campo cultural abigarrado, desde la perspectiva de René Zavaleta Mercado, la reconstrucción permanente de:

(...) una diversidad múltiple: es diversidad de tiempos históricos y diversidad de historias; diversidad de formas políticas o estructuras de autoridad que implica diversidad cultural o, en un sentido más general, de civilización que, sin embargo, coexisten o forman parte de lo que hoy se reconoce como una sociedad más o menos nacional o país (Tapia, 2002: 312).

El campo cultural abigarrado permite observar y comprender las singularidades culturales diferenciadas que, al mismo tiempo, a través de la disolución de fronteras estables y demarcadas, reconstruyen permanentemente configuraciones culturales, donde es posible advertir los aportes de las fuentes originales y el brote de lo inédito. Lo abigarrado se refiere a un mosaico compuesto por múltiples colores que se mezclan entre sí, que mantienen un cuadro altamente heterogéneo y variado, sin que por eso se pierdan los colores originales, pero en el que también se van mezclando y dan paso a nuevos colores.

Hay conflicto, pero también hay convivencia no necesariamente conflictiva. Las relaciones son asimétricas y desniveladas, pero esto no significa que necesariamente sean contradictorias. Hay momentos de alta contradicción, lo que no implica que las culturas encontradas no tengan un poco de la otra. Hay procesos de intercambios, de préstamos y conjunciones, y, a la vez, espacios de continuidad de la singularidad de cada cultura. Hay espacios para la germinación de nuevas culturas, al tiempo que hay otros de vigorización de las ya existentes. Este es el escenario del abigarramiento cultural.

Las diferentes matrices culturales que entran en relación son portadoras de diferentes condiciones de poder. Los modos de vida coloniales modernizadores, señoriales, gozan de la aceptación oficial y de discursos que los asocian con el desarrollo y el

crecimiento; en cambio, las culturas indígenas y “populares” son vistas como expresiones del atraso. Por ello, no se puede hablar de abigarramiento sin hablar de relaciones de poder.

La pregunta que nos hacemos se refiere a si esta condición compleja, que habita nuestras ciudades y disputa sus sentidos configuradores, permite el brote de alternativas al desarrollo colonial-modernizador capitalista dominante en el mundo, desde ese horizonte que hoy denominamos Vivir Bien/Buen Vivir, y que se hace presente a través de los modos de vida de los sectores indígenas y “populares” que habitan esas ciudades. No tenemos respuestas definitivas, pero sí algunas experiencias y vivencias que pueden ayudarnos en este debate.

Vivir Bien/Buen Vivir desde contextos urbanos

En Bolivia, se suele situar en el 2000 el hito que inició el llamado proceso de transición⁶, que colocó a Evo Morales en la Presidencia y al Estado Plurinacional (totalmente novedoso en el planeta), como la marca principal de la nueva Constitución, promulgada en el 2009. Esa transición, sin embargo, tiene unas características

6 Se habla del año 2000 como un hito que marca el inicio de ese proceso de transición, debido a dos eventos políticos fundamentales de la historia contemporánea de Bolivia. Por un lado, la llamada Guerra del Agua que provocó una movilización popular articulada entre sectores urbanos y rurales en contra de las políticas de la transnacional Bechtel a través de su subsidiaria “Aguas del Tunari”. Luego de varios días de duros enfrentamientos que paralizaron toda la ciudad de Cochabamba, el conflicto provocó la reversión de esa empresa a manos del Estado boliviano. Se considera a esta victoria, como la primera derrota de las políticas neoliberales y la visibilización de la crisis de ese modelo estatal. Por otro lado, ese mismo año, ocurrieron dos grandes bloques de caminos nacionales liderados por campesinos y productores de hoja de coca. Esos hechos colocaron de manera visible el cuestionamiento sobre el sistema política y la articulación creciente entre la lucha de esta etapa concreta con la memoria histórica que cuestionaba el Estado colonial republicano. Estos dos eventos de principio de siglo expresan ese hito que se suele señalar como la visibilización del inicio del proceso de transición contemporáneo.

peculiares respecto de otras crisis y transiciones que ha vivido el país, y que vale la pena observar, ya que se trata de una suerte de simultaneidad de crisis que le dan esa singularidad.

El sistema político en crisis fue la punta del iceberg. La población perdió confianza en las personas que conformaban la llamada “clase política”, y en la capacidad del sistema político para encontrar soluciones ante los graves problemas del país. Las dirigencias políticas perdieron legitimidad y se generó un vacío de representación. Este deterioro del sistema político expresaba el límite: ya no era posible buscar salidas con lo existente.

La crisis del sistema político confluyó con la crisis del modelo neoliberal; en rigor, neoliberal en lo económico, pero neoconservador en lo político y cultural. En Bolivia, el modelo de “ajuste estructural” (eufemismo usado para disimular la ortodoxia tecnocrática neoliberal), se instauró en 1985, pero fue recién en 1994 cuando se consolidó en su carácter privatizador, con las denominadas reformas de segunda generación. El ingreso generado por la venta (casi de regalo) de las empresas estatales a manos privadas, transnacionales en su mayoría, duró poco y no pudo soportar la presión generada por la implementación de algunas políticas sociales compensatorias; menos aún, consiguió despegar una economía sostenida que genere empleo.

Estas dos crisis, la del sistema político y la del modelo económico-político del Estado, estuvieron siempre presentes en las transiciones, a lo largo de la historia del país. No obstante, la novedad del presente proceso estriba en que éstas coincidieron, en lo que podemos llamar simultaneidad, con otras dos más profundas: una, fuertemente interna y otra, global. La interna cuestiona el Estado colonial, que configuró un país a espaldas de la mayoría indígena; que en su afán imitador terminó construyendo un país anclado en el extractivismo primario, en el saqueo de la riqueza propia para el beneficio externo y de unos pocos al interior del propio país; que necesitaba una estructura polí-

tica y simbólica que encubra lo propio, que trate de despojarle de sus modos de vida, para quedarse en cáscaras folclóricas; que busque asimilarlo funcionalmente a las lógicas del capitalismo. Mientras tanto, la crisis global o mundial es múltiple: ecológica, alimentaria, energética, política, financiera, etc.; se condensa en lo que se denomina “crisis civilizatoria” o de los modos de vida que se mundializaron hegemónicamente como “cultura occidental moderna”.

Estas múltiples crisis, que dieron paso al proceso transicional en Bolivia –y su simultaneidad–, permitieron abrir el debate más allá del recambio del modelo estatal. Emergió en el análisis el horizonte civilizatorio y, allí, el Vivir Bien/Buen Vivir se constituyó en la denominación alternativa. Existen múltiples, a veces complementarias y otras veces contradictorias, interpretaciones sobre lo que es el Vivir Bien/Buen Vivir. No es propósito de este texto explicar en detalle esas tendencias; no obstante, resulta pertinente señalar algunas características más o menos comunes, que nos ayudarán a colocar el debate desde los contextos urbanos.

El Vivir Bien/Buen Vivir es, sobre todo, un horizonte de sentido; un indicativo de que se puede transitar hacia otros modos de vida y formas civilizatorias que nos permitan salir del entrapamiento de la modernidad y del desarrollo hegemónico, expresados en su forma más radical en el capitalismo, aunque no únicamente.

No se trata de un modelo o un proyecto claro, sino de un sentido que exige capacidad de construir, inventar, criar y permitir el brote de lo existente, que reconfigura la dominación hacia otros horizontes. No es posible sin diversidad y pluralidad; por ello, no permite hablar de un modelo a seguir.

El Vivir Bien/Buen Vivir desafía a repensar nuestras maneras de relacionarnos entre seres humanos y con la Naturaleza, para favorecer una vida que fluya para todos y para todas, no solo humanos sino todas las formas de vida, desde una noción de

redistribución orientada a la igualdad, equidad y/o armonía entre los diferentes. Las relaciones entre seres humanos y Naturaleza es uno de los dispositivos más fuertes para deconstruir las lógicas del desarrollo y el crecimiento ilimitado.

Subraya que las fuentes para identificar esos modos de vida alternativos provienen de los pueblos indígenas originarios; culturas nacidas desde la relación ancestral con los ciclos de la Naturaleza, a través de prácticas agropecuarias o de recolección, de alguna manera agrocéntricas. De la vida rural de estos pueblos se extraen las fuentes principales para pensar en el Vivir Bien/Buen Vivir, desde lo concreto.

Desde estas perspectivas, las ciudades casi no aparecen en el horizonte. Sin embargo, la mayoría de la población habita en centros urbanos y otra gran parte considera como su referente de vida a esos estilos urbanos, aunque viva en localidades rurales. Además, buena parte de la población –incluso la mayoría, en muchas ciudades– es indígena. Por eso, se torna inevitable e imperioso abordar algunas conversaciones sobre el Vivir Bien/Buen Vivir, desde contextos urbanos. Y decimos desde contextos urbanos porque no se trata de resignificar la ciudad desde la vida exclusiva en las ciudades, sino desde el estar allí de manera conectada y articulada con lo rural, no como separación y distancia, sino como continuidades y reciprocidades complementarias. El último censo realizado en Bolivia, en noviembre de 2012, evidenció cómo un número significativo de personas vive y habita simultáneamente varios contextos, y relaciona permanentemente la ciudad y el campo. Pero las preguntas del censo no captan el fenómeno; solo miran, como fotografías, el tránsito de la gente, el movimiento, las trayectorias y cartografías. Mucha gente que ya habita varios espacios y territorios simultáneamente, reproduce sus modos de vida y origen indígenas y rurales en las ciudades. Reocupan la ciudad con sus formas propias. Incluso los llamados “sectores populares”, que no contienen con fuerza sus identida-

des indígenas, desde su lugar económico y social construyen la ciudad como albañiles, pero también incorporan nuevas configuraciones que disputan a la ciudad señorial, colonial y modernizadora. Lo hacen desde el abigarramiento complejo, no como alternativas separadas de lo existente y hegemónico, sino complejamente interrelacionadas con ello y, al mismo tiempo, como posibilidades de salida de lo dominante.

Desde nuestra experiencia, solo es posible pensar en las alternativas desde lo existente, así de abigarrado y complejo. El horizonte de sentido que llamamos Vivir Bien/Buen Vivir no es un modelo a conquistar: es crianza y brote de aquello que difiere de lo dominante y hegemónico, pero desde lo que hay en las prácticas y modos de vida de la gente que posibilita las alternativas al desarrollo y la modernidad dominantes. Desde ahí compartimos algunas intuiciones, asombros y dudas: desde lo existente, que nos ayuda a vigorizar ese horizonte de sentido frente al modo de vida y la civilización mundializada y en crisis. A eso denominamos Vivir Bien/Buen Vivir.

¿Otras ciudades son posibles? La experiencia de nuestras culturas indígenas originarias y “lo popular” en la reconfiguración urbana contemporánea, desde el horizonte del Vivir Bien/Buen Vivir

A continuación, apenas compartiremos algunas intuiciones, experiencias, convivencias, maneras de estar que, desde lo existente, creemos que aportan en estas conversaciones sobre el Vivir Bien/Buen Vivir desde contextos urbanos. No expresan una totalidad, sino campos que van emergiendo y provocan nuestros debates, así como la construcción de propuestas. Los siguientes puntos son, apenas, un borrador de trabajo, una invitación a la conversación.

El territorio, el suelo y el hábitat urbano

Los últimos años estamos viviendo un proceso acelerado de recomposición del territorio y el suelo urbano. Hay especulación inmobiliaria y, otra vez, se busca desplazar a los sectores “populares”, para beneficiar las lógicas del capital y la reocupación de las élites urbanas de espacios antes despreciados. Este es un escenario común en la mayoría de nuestras ciudades; no obstante, el suelo y el reordenamiento territorial también se disputan.

Los sectores “populares” reocupan los territorios segregados, sea por la vía de la incursión a través de diversas actividades – muchas de ellas económicas–, sea por la fiesta que irrumpe en la calle prohibida, o bien por la disputa de la propiedad del suelo. En Venezuela, es significativo el movimiento de campamentos de pioneros que ocupan predios inútiles, producto de la especulación inmobiliaria; desde ahí proyectan nuevos modos de vida, en medio del centro de la ciudad, de barrios acomodados. No aceptan la segregación y replantean las convivencias y las relaciones. Se trata del ejercicio del derecho a la ciudad, pero a otra ciudad. No es simplemente incursionar en el modelo dominante de urbe, sino pensar de otra manera los modos de vida y de convivencia.

En Bolivia, no tenemos grandes movimientos que trabajen el tema del suelo urbano. Hay algunas asociaciones o sindicatos de inquilinos, pero todavía no se han manifestado fuertemente, como propuestas de disputa de la propiedad urbana, que vayan a recomponer la estratificación y segregación que consolidan el modelo colonial de ciudad. Las propuestas para organizar los territorios y la vivienda, desde un enfoque diferente de los modos de vida y de las relaciones, tampoco son fuertes; aunque hay algunos casos en Cochabamba, como la comunidad María Auxiliadora, o lo que intentó ser el barrio Luis Espinal, en Tarija.

Sin embargo, a pesar de que todavía la temática es débil en Bolivia, en el contexto continental adquiere relevancia, y es uno

de los debates que nos puede llevar a una discusión más global del tema urbano, de la configuración de las ciudades.

La ciudad como circulación para facilitar la mercantilización de las relaciones y/o como territorio plural de encuentros y convivencias

Las ciudades contemporáneas se organizan, en gran parte, para facilitar la aceleración del tráfico vehicular y de las personas. Con ello, consiguen apresurar los consumos y despersonalizar las relaciones. Ese es el modelo dominante, y en Bolivia se muestra claramente en los proyectos de modernización de las ciudades. La Paz es el ejemplo más evidente de ese proceso. Se corta el centro histórico, donde confluían todos los sectores sociales de la ciudad, y se habilita ese espacio para el flujo acelerado del vehículo, lo que quiebra el espacio de encuentro. La misma lógica sustenta la reconstrucción de los mercados históricos del centro urbano; aísla, encierra, acelera la circulación e impide la relación: la reorganización de los puestos de venta produce el encierro de cada vendedor o vendedora y su cliente; se pierde el espacio compartido de la conversación y el encuentro, propios del mercado viejo.

Sin embargo, la mayoría de la gente recompone y transgrede esos espacios. Para los sectores “populares” e indígenas, el lugar relacional tiene preeminencia sobre el de la circulación acelerada. Los mercados “modelo” se desbordan y recomponen las ferias, no diarias, sino con sus momentos, casi de ciclos. En las ferias fluyen los sentidos de caseros y caseras, las fidelidades y complicidades. Las vendedoras y vendedores retoman sus formas comunitarias de cuidado colectivo de los hijos, de convivencia familiar en el “puesto de trabajo”.

En El Alto, la más aymara de las ciudades de Bolivia, se construyó una plaza de comidas en un centro hotelero y de diversión, de acuerdo con los estándares de homogenización de cualquier ciudad. Esos espacios están vacíos, mientras a la misma hora, la

calle se llena de comidas diversas, los “agachaditos”, como se dice en Bolivia. Allí no hay mesas y se come en bancos bajitos, con el plato entre las piernas y agachándose para aproximar la cuchara a la boca. Esos puestos están llenos. En parte, tiene que ver con el precio de la oferta, pero también –de acuerdo con algunas entrevistas que realizamos–, con la convivencia, con el establecimiento de lógicas de caseros, con la posibilidad de relacionarse con la gente que pasa, con no estar encerrados.

Podríamos citar decenas de ejemplos como los anteriores. En todo caso, intentamos visibilizar estas formas de habitar la ciudad que, desde el imaginario dominante, aparecen como prácticas poco “urbanas”, que requieren civilizarse y ordenarse. Al interior de ellas, no solo hay situaciones de pobreza y marginalidad, sino otros modos de vida que, a su manera, reinterpretan las relaciones y convivencias, y ponen en cuestionamiento los modelos de aceleración de la circulación para el consumo estandarizado; no escapan a ello, pero al menos colocan otras opciones. Es interesante observar cómo sectores aymaras, que ascendieron económicamente, no modifican radicalmente sus formas de convivir y relacionarse en la ciudad; cómo disputan el uso del espacio público, con otros fines que no son necesariamente los de la aceleración de la circulación. Ahí hay algo que sucede, algo que resiste, algo que reconfigura.

Los consumos urbanos y los modos de vida

La ciudad es, sin duda, el lugar privilegiado del consumo. Uno de los temas que trabajamos como Red de la Diversidad es el consumo de alimentos y bebidas. La estandarización de estos consumos ha desencadenado un proceso acelerado de industrialización, que afecta la producción campesina local y erosiona significativamente la diversidad y la variabilidad de lo que se come y se bebe. La industria de alimentos y bebidas embotelladas se ubica entre los negocios más rentables en el mundo contemporáneo.

A partir de nuestras observaciones, identificamos que, si bien las tendencias generales afianzan el deterioro de la calidad alimentaria de las personas y la estandarización de los consumos, todavía existen bolsones grandes de población que prefieren la diversificación y la variabilidad, que suele provenir de los consumos tradicionales, como la quinua, el amaranto, la cebada, la alfalfa, diversos pescados locales, los refrescos de pitos, los refrescos de frutas y otros. Para sorpresa nuestra, encontramos que el consumo de estos productos –bajo formas de oferta artesanal y de pequeña escala, que acostumbra ocupar las aceras y mercados populares– está en crecimiento y tiene un público juvenil importante. Esta mayor demanda no ha generado procesos de monopolio o de modificación de las formas artesanales de la oferta; al contrario, rigen fuertes criterios de relacionalidad, expresada en la noción de caseros y caseras.

El consumo de alimentos y bebidas diversificadas y tradicionales sigue siendo muy extendido y, al mismo tiempo, permite la convivencia con las nociones de ciclo. Los alimentos y bebidas artesanales tienen su tiempo, se asocian con fiestas rituales ligadas con el calendario agrícola; rompen con el tiempo lineal o de consumo estandarizado. Esto es muy importante en el horizonte del Vivir Bien/Buen Vivir, ya que restituye maneras de compartir con los ciclos de la naturaleza.

Los consumos de alimentos y bebidas en las ciudades de Bolivia aún constituyen un campo de disputa, que deja entrever otros modos de vida, de alimentarse y de convivir. Esto, según nuestras observaciones, ocurre en ciudades tan dispares como El Alto, Santa Cruz o Tarija, con diferentes modalidades, pero con las mismas tendencias. Nosotros trabajamos mucho en la oferta de desayunos en carritos ambulantes, de mates terapéuticos en las mañanas y en las noches, los refrescos en mercados y ferias, las comidas de calle y mercados. Nos ha llamado la atención que, en medio de la estandarización, la diversificación y la calidad alimentaria

—aunque precaria—, sigan presentes y, con ellas, las formas propias y las relaciones que se establecen en torno a estos consumos.

Economía de mercado capitalista y “otras economías”

La economía mercantil capitalista domina las ciudades. Sus formas y sus mecanismos nos inundan. No obstante, en medio de esas relaciones, aparecen otros mecanismos que nos permiten intuir relaciones diferentes. No se trata de economías paralelas, que no se tocan; pero tampoco son formas de relaciones económicas marginales.

Las convivencias urbanas de sectores “populares” están inundadas de mecanismos de reciprocidad que desmonetizan los intercambios, establecen la circulación del excedente y contribuyen a la redistribución, más o menos equilibrada, entre pares. Son sistemas de *ayni*, que posibilitan la circulación del beneficio. Un ejemplo de esto es el *pasanaku*, un mecanismo que incentiva el ahorro colectivo, con aportes iguales de toda la red de reciprocidad. El *pasanaku* permite que, mensualmente, una persona por turno se beneficie del total recaudado. Esto ayuda a generar un “capital” de inversión o a cubrir un gasto fuerte, sin tener que recurrir al préstamo bancario. El *pasanaku* es ampliamente difundido en sectores “populares” y, si bien no produce otra economía, establece formas de convivencia algo diferentes, en las relaciones económicas.

Los sistemas de trueques se están vigorizando nuevamente en las vidas urbanas, y entre éstas y los espacios rurales. En Venezuela, hay una creciente red de trueques con monedas propias; en Brasil, existe una red extendida de trueques de agrupaciones musicales urbanas, que han generado un movimiento de dinero propio bastante notable. En Bolivia, muchas ferias todavía tienen su sección de trueque bastante activa. El trueque no se restringe a las mercancías; también es de servicios.

Aunque los ejemplos anteriores no cambian la economía capitalista dominante, sí resignifican las relaciones económicas. Al mismo tiempo, plantean que si se conectan con otros aspectos de los modos de vida diversos y plurales que habitan las ciudades, pueden contribuir a erosionar el imaginario dominante y globalizado, y permitir la búsqueda real de alternativas.

Maneras de habitar los espacios públicos urbanos: el caso de las plazas

En Bolivia, en los últimos años se advierte una tendencia a asociar las plazas públicas con la inseguridad ciudadana; el discurso se dirige en contra de la presencia de jóvenes que, en las noches, beben y forman pandillas. Eso ha provocado un proceso de enrejamiento de las plazas. Muchas de ellas han quedado bloqueadas a la circulación diaria; otras, solo durante las noches.

A lo anteriormente mencionado, hay añadir que ya desde hace muchos años, las plazas son entendidas como un elemento ornamental del paisaje urbano; por ello, los jardines son una parte importante de su estética. Se cuida que los jardines no se toquen, solo se miren. Eso hace que las municipalidades destinen muchos recursos para conservar las plazas y alejar a la gente del mal uso de ellas.

Sin embargo, la gente reocupa las plazas desde otros sentidos. Ingresa a los jardines y hace “día de campo”, convive en familia, come, juega, enamora, hace grupos. En las culturas indígenas, los objetos y las cosas no tienen fines ornamentales en sí mismos; pueden ser estéticamente hermosos, pero deben tener una utilidad práctica para ser verdaderamente “lindos”. La belleza es una suerte de conjunción entre sentido estético y sentido de utilidad. La plaza es linda si permite convivir; el jardín es lindo si permite ser usado para esas convivencias y relaciones.

A pesar de los múltiples intentos de “civilizar” el uso de las plazas, éstas siguen siendo un campo de disputa de modos de

vida diversos. Emergen otras maneras de habitar las plazas que, posiblemente, aportan en el brotar del Vivir Bien/Buen Vivir, como horizonte reorganizador de nuestro convivir.

Pluralidad y diversidad: la reconfiguración de los imaginarios urbanos

A pesar de que la pluralidad emerge como parte de los discursos contemporáneos –en Bolivia constitucionalizamos el Estado Plurinacional–, hasta ahora esa diversidad y pluralidad no terminan de irrumpir con fuerza, cuando conversamos sobre la ciudad.

Solo desde la pluralidad podremos cuestionar el imaginario dominante sobre la ciudad. Dicen que prosperidad viene del latín *pro espere*, que significa “vivir de acuerdo a la esperanza”. Si observamos esos modos de vida diversos, que habitan la ciudad y la disputan desde diferentes posicionalidades en las relaciones de poder, podremos advertir la existencia de muchas “prosperidades” que conforman los imaginarios sobre las ciudades. La mayoría de ellas no aparece en el campo discursivo, incluso de los sectores que viven de otras maneras, porque hay una suerte de “pensamiento único” sobre la ciudad. Si conseguimos abrir mejor nuestras sensibilidades, podremos identificar esta pluralidad que habita la ciudad. Desde ella podremos reestructurar los imaginarios sobre la ciudad y plantearnos alternativas.

Pero la pluralidad no alcanza. Nos exige otro debate que ligue pluralidad con igualdad, porque las ciudades no solo son predominantemente monoculturales; también son injustas en la distribución de los bienes y riquezas. El desafío está en profundizar ese debate, articularlo y compatibilizarlo. Y eso solo es posible si somos capaces de incidir sobre los cotidianos de las convivencias urbanas y sus continuidades con lo rural, en el tejido organizativo e institucional y, claro, también en las políticas públicas.

A manera de conclusión

Este artículo es apenas un pretexto para conversar sobre Vivir Bien/Buen Vivir desde contextos urbanos. Es apenas un borrador para provocar. Los ejemplos compartidos solo cobran sentido si, en su articulación, nos ayudan a salir de la “maldición” del extractivismo y del saqueo incesante de nuestras riquezas, nuestros bienes comunes, nuestra madre tierra. Eso exige desmontar los imaginarios dominantes sobre la ciudad, resignificar la vida urbana, recontextualizarla, reconfigurar nuestras vidas y convivencias. Las ciudades producen imaginarios funcionales a nuestra colonialidad, a nuestra modernización señorial, a nuestra aceleración del consumo, bajo lógicas mercantiles del capitalismo contemporáneo. Las ciudades profundizan la artificialización de la vida y el distanciamiento de los ciclos de la Naturaleza. No obstante, estas ciudades también son rehabilitadas desde otros modos de vivir y convivir. Sin la población de estas ciudades y sus continuidades con lo rural, no es posible pensar alternativas viables desde el horizonte del Vivir Bien/Buen Vivir, que nos permitan salir del desarrollo moderno dominante y hegemónico en el mundo. Por ello, trabajar sobre la ciudad parece un desafío urgente; no el único ni el central, sino simultáneo con tantos otros temas que emergen, fruto de estas crisis simultáneas y complejas.

Dejemos que sean las voces urbanas que cierren este artículo. Se trata de Nina Uma, una hermana que interpreta hip hop, del equipo de Wayna Tambo, Red de la Diversidad, quien nos dice, en un fragmento de una de sus canciones:

Ciudad se enamora de progreso
 Y como típica enamorada
 Está cegada
 No piensa nada más que en él
 No le importa quién
 Le da de comer

¿Qué hacemos con ciudad?
¿Será que se puede repensar?

Úselo y tírelo
El cielo es moderno
Úselo y tírelo
Ciudad casos de la vida real

Progreso es un tipo muy racista
A muchas comunidades las sacó de su lista
Él es muy interesado
Los billetes verdes son su sueño dorado
Su madre la ambición no le enseñó
Sobre el corazón

Ciudad ama a progreso
Él no le es fiel
A muchas tiene tras él
Padre Inti y Madre Tierra
Los observan
En el fondo una esperanza conservan
Que termine ese romance
Y así la paz por fin los alcance

Esta historia aquí no termina
Todos la germinan
Cada quien le pone su final
¿Cuál quieres tú crear?
El destino de tus hijos está en tus manos
Escucha y mira tu futuro, tu pasado
Ahora dime ¿a dónde vamos?

Noviembre, 2012

Horizontes de transformación del movimiento urbano popular⁷

Alexandra Martínez⁸

En Venezuela el capital se desarrolla estelarmente en espacios urbanos donde habitamos cerca del 90% de la población, espacios improductivos donde el modo de acumulación de capital financiero se centra en la ciudad como lugar de la redistribución de la renta petrolera hacia los circuitos concentrados especulativos: inmobiliarios, constructivos y comerciales, por vía de un esquema de consumo que apunta al infinito. El epicentro de la lucha contra el modelo de civilización (imperial, capitalista, patriarcal y colonial) que está en crisis, se libra día a día desde las ciudades; son éstas donde nuestros modos de vida, producción y consumo hacen posible el sistema mundial que incrementa desigualdades, guerras, y que amenaza con extinguir la vida en el Planeta. Es aquí donde las pobladoras y los pobladores urbanos que confrontamos la avanzada neoliberal salvaje del siglo pasado, tenemos ahora por delante este reto, que es el mismo reto histórico acumulado de la lucha del pueblo por la verdadera y definitiva liberación y la construcción de alternativa.”

Consejo Patriótico Sectorial de Vivienda, Hábitat y Ciudad.

Aportes al Programa de la Patria 2012

(Movimiento de Pobladores y Pobladoras)

Venezuela, como país dependiente de la renta petrolera, vivió en el siglo pasado un gran éxodo campesino que recompuso la distribución de su población, actualmente urbana en 90%. Los pobladores que llegaron a las ciudades, se ubicaron en asentamientos improvisados, no planificados, en los alrededores de la zona plana

7 Este escrito forma parte de un conjunto de reflexiones que vienen elaborando, construyendo y luchando las organizaciones populares urbanas. La autora agradece a Miriam Lang por sus comentarios al presente texto.

8 Alexandra Martínez. Tesista, Escuela de Sociología Universidad Central de Venezuela. Coordinadora de Proyectos para Venezuela, Fundación Rosa Luxemburg. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo.

de la ciudad, en las montañas que la bordean (las periferias en las zonas geográficamente más riesgosas, menos estables y menos accesibles). El éxodo masivo del campo a la ciudad ocurrió en el marco del auge, construcción y hegemonización del imaginario desarrollista, en el cual la renta petrolera y las promesas de la redistribución del ingreso construyeron un discurso de bonanza, riqueza y progreso; de definitiva entrada a la “modernidad”.

En estos “márgenes” de las ciudades se conformaron las amplias zonas populares. Allí, los habitantes comenzaron a construir algo más que viviendas o ranchos; comenzaron a construir ciudad. Por un lado, levantaban la ciudad “moderna”, en calidad de mano de obra; esa ciudad de la riqueza proveniente de la renta petrolera. Pero, por otro lado, montaban la ciudad informal, la ciudad “otra”, la que hasta hace algunos años no aparecía en los mapas, la de los márgenes; la ciudad de la exclusión, pero también la ciudad cantera para posibles transformaciones.

Con el empuje de las políticas neoliberales, en los años ochenta, empezaron a fraguarse espacios de organización popular desde esos grandes colectivos excluidos, los pobladores y pobladoras de los barrios. Así, se conformaron las Asambleas Barriales de Caracas; espacios asamblearios, amplios, populares y diversos, donde las formas de construcción política se alejaban de manera radical de los espacios de participación política formal.⁹

Como ejemplo, podemos mencionar cómo desde la Caracas “otra” se fraguó uno de los estallidos sociales de mayor relevancia en la historia política reciente del país. El 27 de febrero de 1989, ocurre “el caracazo”; un levantamiento popular sin direccionamiento político clásico de ninguna organización, que cuestionó

9 Cabe destacar que en Venezuela, en las décadas de los ochenta y noventa, se produjo una crisis de legitimidad de los partidos políticos existentes, y sus formas de construcción. Así, las formas organizativas se comienzan a configurar al margen de estos partidos tradicionales, y también al margen de la búsqueda de representatividad política en términos clásicos.

profundamente los cimientos de lo que se suponía era el modelo de “democracia liberal” latinoamericano, en el que se promulgaba la coexistencia, complementariedad y cooperación entre las clases sociales, como mito pacificador y encubridor de las profundas desigualdades existentes. Fueron los pobladores y pobladoras urbanas quienes protagonizaron esta revuelta.

Durante los noventa, se fueron articulando distintas expresiones de organización, debate y construcción, que cuestionaban las lógicas de exclusión de una ciudad capitalista marcada por la mercantilización de los servicios, la vivienda y los espacios de recreación.¹⁰

El barrio como lugar de transformación

El barrio compone y significa a este amplio sector de la población que se ha constituido a partir de las luchas urbanas por el acceso a los servicios, a la vivienda, a la educación y, también, a la participación política.

Así, los barrios —que desde el discurso hegemónico de la ciudad son espacios empobrecidos, excluidos, marginales y marginados, carentes de cultura—, son construidos y (re)significados por sus pobladores como un espacio de vida, de cultura propia, de solidaridad, de resistencia y de alternativa.

Los barrios son producto de un modelo de segregación social y espacial. Desde el punto de vista urbanístico suponen una situación irregular. Irregularidad jurídica, pues sus pobladores carecen de seguridad legal sobre la posesión de los suelos en que habitan. Irregularidad urbanística, pues carecen de normas y regulaciones. Irregularidades en las condiciones de vida, pues su equipamiento es deficitario (Rodríguez, 2008).¹¹

10 Así, el suelo urbano, el acceso a la vivienda son una mercancía a alto costo, lo que genera la segregación de quienes no pueden acceder a ella por medio de la compra.

11 Juan Carlos Rodríguez, militante de la organización Campamento de Pioneros. Arquitecto y profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, los barrios se han conformado en el contexto de procesos de ocupación, cuya característica fundamental es la autoconstrucción progresiva a partir de ocupaciones de terreno que no pertenecen, de derecho, a sus pobladores.¹² Estos asentamientos urbanos populares han sido la respuesta desde la gente; la solución habitacional, al margen del financiamiento de planes públicos y privados.

En su exclusión simbólica, por muchos años se consideró al barrio como sinónimo de atraso y error en el camino del progreso, como algo que no es propiamente la ciudad. (Aún algunos sectores de la población lo consideran así). Fue visto como una “minoría” económica que no debía decidir sobre lo público porque no le pertenecía. Hasta hace muy poco, la mayoría de barrios de Caracas no aparecía en los mapas. Eran representados como zonas uniformes verdes o grises, pero nunca reflejados como asentamientos humanos. El proceso de catastro popular empieza, en buena parte, a raíz de la constitución de las organizaciones barriales. Ello significó no solo el levantamiento catastral de los barrios populares, sino, en muchos casos, la reconstrucción de la memoria histórica del lugar y de sus pobladores.

Los barrios, estos espacios autoproducidos al límite, al margen, desde lo no formal, desde la exclusión,

(...) son en grado extremo, manifestaciones que expresan la diversidad cultural de la ciudad y germinan en su seno las maneras alternativas creativas de relación social, organización, producción y comercialización consideradas informales, y que son el ejercicio de la sobrevivencia como principio y valores comunitarios en base a la solidaridad (Rodríguez, 2008).

Esta reflexión forma parte de una ponencia presentada en 2008, en el Foro Social Catalán.

12 Esta experiencia acumulada en autoconstrucción es una condición, una semilla, que posibilita las formas autogestionarias de producción social del hábitat.

En gran medida, desde los barrios, las luchas por la democratización de la ciudad surgen con fuerza, en un doble movimiento. Por un lado, exigen el acceso a la ciudad: a la tenencia de la tierra, al acceso a la vivienda, a los servicios básicos (luz, agua, transporte). Son luchas por la inclusión (en algunos casos, en términos de acceso a la redistribución de la renta, para tener la posibilidad de tener un nivel de consumo que nunca han experimentado). Por otro lado, las luchas apuntan al reconocimiento y la identidad: el reconocimiento del barrio como espacio territorial, generado desde sus pobladores y pobladoras, con construcciones culturales, saberes, formas de organización, de resistencia y de vida. Es la pelea por la existencia de un modo de vida distinto al impuesto por el imaginario desarrollista, capitalista y neoliberal.

Estos procesos han cuestionado profundamente las políticas públicas (y las nociones de desarrollo y progreso para superar la pobreza), asociadas con “eliminar el barrio”, “educar a la gente”, “salir de abajo”. Confrontan el discurso de la marginalidad, de la pobreza cultural y del modo de vida estandarizado.

La articulación de las luchas barriales en clave de movimiento

Este contexto puede servirnos para entender someramente dónde surge el Movimiento de Pobladores y Pobladoras y qué implica repensar la ciudad capitalista y aspirar a transformarla. Este movimiento surge como herencia y expresión de las luchas populares urbanas que ocurrieron en los territorios no formales de la ciudad, en los límites, en los márgenes, en los bordes. Sostiene distintas banderas de resistencia, al tiempo que configura una crítica a la ciudad capitalista, articulada en torno a la democratización y el derecho a la ciudad y apuesta hacia otros horizontes.

La conformación de los Comités de Tierra Urbana (CTU), en el 2004, fueron claves para la futura articulación de este movimiento. Los CTU son organizaciones barriales que comienzan

a vincular distintas políticas populares y propuestas. Al principio, el eje era la titularidad del suelo urbano; pero dichos debates fueron integrando otras temáticas como la democratización y el derecho a la ciudad; la lucha por la tenencia de la tierra urbana; el acceso a la vivienda como un derecho, y no como una mercancía; la lucha contra la especulación inmobiliaria, contra los desalojos arbitrarios y forzosos y la construcción de nuevas comunidades (a su vez, estos debates repercutieron en la cualificación de los sujetos colectivos que configurarían organizaciones en lucha).¹³

Si bien las reivindicaciones han sido los fundamentos que han movilizado y aglutinado a los sectores populares en distintas oportunidades, los CTU lograron avanzar en clave de movimiento: dejaron de ser apuestas organizativas meramente locales, para articularse entre sí en una plataforma nacional; construyeron propuestas y políticas propias, que se desmarcan de las políticas construidas desde el Estado (históricamente homogeneizantes, excluyentes, en muchos casos burocratizadas e ineficientes), y de las políticas del sector privado, radicalmente mercantilizadas.

Hoy día, el Movimiento de Pobladores y Pobladoras es una plataforma de articulación de las siguientes organizaciones urbanas:

Movimiento de Inquilinos. Se articulan en torno a las luchas contra la especulación inmobiliaria y a los desalojos arbitrarios.

Comités de Tierras Urbanas. Además de la lucha por la regularización de la tenencia de la Tierra, se organizan por impulsar

13 Cabe señalar que este impulso se da a partir del contexto político que se vive en Venezuela desde 1999, con la elección de Hugo Chávez Frías como presidente de la República, y el inicio del proceso bolivariano (o Revolución Bolivariana). En este marco, el proceso constituyente, así como el paso de un modelo de democracia representativa a uno de democracia participativa y protagónica, abren el espacio de debate y conformación de distintas formas organizativas locales y barriales; si bien muchas de esas formas organizativas fueron impulsadas, en principio, desde el Gobierno, algunas lograron proyectarse autónomamente y existir con un direccionamiento y construcción de agenda propia. Tal es el caso de lo Comités de Tierra Urbana.

una política popular y autogestionaria de Transformación Integral del Barrio.

Trabajadoras y Trabajadores Residenciales. Su lucha se orienta a la dignificación de este sector (anteriormente denominado conserjes) y sus familias, que son actualmente sometidas a lo que se ha definido como una forma contemporánea de esclavitud. Tienen como trabajo el cuidado y mantenimiento de los edificios y, a la vez, los habitan. Por tanto, su lucha ha estado enmarcada en la consecución de derechos laborales y en sus derechos como pobladoras y pobladores.

Movimiento de Ocupantes. Luchan contra la criminalización de las ocupaciones que, desde hace años, han existido en nuestras ciudades; reclaman el reconocimiento legítimo del derecho de familias excluidas a recuperar los inmuebles abandonados por el capital inmobiliario y acondicionarlos organizadamente como espacios de vivienda.

Frente Organizado por el Buen Vivir. Es el resultado de la organización de familias damnificadas, víctimas de los desastres climáticos. Este frente busca recuperar edificios abandonados en la ciudad para que, mediante autogestión, las familias puedan readecuarlos para la vida.

Campamentos de Pioneros. Es la lucha por recuperar territorio en la ciudad y apropiarlo para desarrollar nuevas comunidades autogestionarias. Los campamentos se conforman con grupos familiares que se articulan para la toma de un terreno ocioso, y apuntan a construir una nueva comunidad desde la autogestión.

Las organizaciones de este movimiento han aportado, además, elementos sobre una nueva forma de construir política desde las comunidades; así, la construcción asamblearia y organizativa de base no pasa por coordinaciones centralizadas o espacios de dirección vertical, sino espacios de dirección y orientación colectiva, desde grupos territoriales y barriales.

De igual forma sucede con el fortalecimiento del papel de las vocerías, en lugar de “representantes”, “delegados”, o dirección de la organización. La asamblea se configura como el espacio donde se definen acciones y se delegan tareas a algunas compañeras y compañeros, en comisiones de trabajo que luego deben rendir cuentas sobre las responsabilidades que les fueron asignadas.

Esta construcción colectiva de las propuestas y políticas parte del siguiente principio: para que una política popular tenga fuerza debe ser gestada al calor de las luchas y los debates de base. Por lo general, los documentos y políticas construidas son producto de la investigación y estudio del tema urbano por parte de los militantes, y de la sistematización de los debates locales y nacionales.

Otra de las apuestas a resaltar es la articulación con diversas organizaciones con luchas similares en América Latina, y con otras organizaciones urbanas; entre ellas está la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular (SELVIP), que articula a organizaciones de Argentina (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, MOI, y la Federación de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat, FTV); de Uruguay (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAM); de Brasil (Unión Nacional por Moradía Popular-UNIAO); de Chile (Movimiento de Pobladores en Lucha de Chile).

Asimismo, se llevan a cabo acciones orientadas a la articulación política y a la generación de diálogos en temas centrales, con otras organizaciones; por ejemplo, el diálogo con organizaciones campesinas, o el intento de incorporar la perspectiva de género y los debates feministas populares en las miradas del movimiento.

La formación es otro elemento central en la apuesta de estas organizaciones. El proceso está centrado en el análisis crítico de las prácticas, como eje permanente que se traduce en espacios de escuelas en momentos puntuales; dedica especial énfasis a los procesos permanentes de debate y organización.

En esta reconfiguración política cabe destacar la reapropiación y resignificación de las políticas públicas que llegan al barrio. Esto está relacionado con un cuestionamiento profundo a las prácticas estatales y burocráticas. Las lógicas organizativas de las comunidades populares desarticulan, en muchos casos, los intentos de control que provienen del Estado. Así, por un lado se elevan propuestas al Estado y, por otro, se reapropian políticas que llegan a la comunidad.

La construcción de una identidad propia reivindica el barrio como espacio de vida, con profundas desigualdades y necesario a transformar; pero también como lugar de resistencia, de alternativas, de otras formas, de maneras de vida colectiva y común.

Por ello, la autogestión se eleva como principio motor en la transformación urbana. Según Hernán Vargas, militante del movimiento de pobladores y pobladoras, la autogestión podría ser definida como:

La necesidad de fortalecer la capacidad de hacer del pueblo organizado para cristalizar un modelo de gestión colectivo comunitario en las distintas esferas de lo público, y que por lo tanto se constituye en alternativa ante los modelos liberales de mercado y burocráticos estatales que han prevalecido en nuestras ciudades. En el caso de pobladores tiene un fuerte énfasis en el modelo autogestionario para el desarrollo de políticas de vivienda y la producción social del hábitat (Vargas, 2012).

La autogestión, en este contexto, es una apuesta que está en construcción; se articula con elementos de ayuda mutua y de propiedad colectiva, que incluyen el diseño participativo, el trabajo familiar y el ahorro colectivo. No se ciñe solamente a una fase constructiva ni debe confundirse con la autoconstrucción. Sugiere una forma colectiva y organizada de gestionar lo público, y con esto, construir nuevas formas políticas, económicas y sociales.

Relación con el Estado: posibilidades y tensiones

Teniendo como marco el proceso político venezolano, la relación con la institucionalidad forma parte del campo de tensiones en el que se desarrolla la organización urbana y la apuesta por la construcción de otra ciudad; pero, al mismo tiempo, constituye una disputa permanente a la gestión única estatal. Por una parte, es innegable que distintas políticas y propuestas organizativas promovidas desde el gobierno, han generado y permitido amplios espacios de movilización y participación, antes inexistentes.¹⁴ No obstante, estas mismas propuestas pueden llegar a institucionalizar y burocratizar la expresión popular. En la experiencia del movimiento de pobladores, el desafío ha sido pasar de la organización promovida desde el Estado a la construcción de movimiento social, con espacios de autonomía, de construcción y orientación colectiva y propia, donde la relación con el Estado sea desde el diálogo entre sujetos políticos. Por ello, para las organizaciones urbanas las ideas de autogestión, cogestión y cogobierno pasan a ser apuestas fundamentales para pensar cualquier transformación.

Durante estos años, el movimiento ha planteado diversas propuestas a las instituciones encargadas de elaborar políticas públicas, en materia urbana y de vivienda. Sin embargo, no ha sido posible construir instancias orgánicas y permanentes entre el movimiento y los sectores institucionales. Según Vargas (2012), esto

(...) ha generado en la mayoría de los casos políticas de origen popular que son asumidas nominalmente por el Estado, para luego ser despojadas de su esencia política y progresiva-

14 Que va desde la propuesta de organizaciones barriales, como Comités de Salud, Mesas Técnicas de Agua, Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, hasta la configuración de Consejos Comunales, en el marco de la propuesta de construcción de un Estado comunal.

mente burocratizadas, dejándolas paralizadas o simplemente trasmutadas hacia políticas reformistas.

Asimismo, aun cuando han emergido distintas iniciativas de articulación entre los sectores del movimiento popular, para impulsar políticas propias, y ciertos sectores del gobierno intentan construir un Estado distinto a la propuesta neoliberal, se evidencia, en algunos casos, el fortalecimiento de un Estado paternalista y asistencialista.

Por ejemplo, las políticas públicas actuales asociadas con la vivienda están enmarcadas en el impulso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuya meta es construir tres millones de viviendas en los próximos seis años (en muchos casos, estas construcciones se realizan con apoyo de empresas extranjeras, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación con China, Rusia, Bielorusia e Irán, y también con empresas nacionales). Las viviendas son edificios de apartamentos unifamiliares estándar, cuya construcción debe estar en manos de empresas que manejan la tecnología y los medios para establecer un modelo de producción mercantil, y cuyo mantenimiento difícilmente podrá ser asumido por la gente que no participa ni en su diseño ni en su construcción.¹⁵ Sin intentar negar la importancia de solventar el problema de vivienda, sobre todo para las familias damnificadas que viven en refugios, esta Misión entra en tensión con la apuesta del movimiento popular urbano. En efecto, el movimiento plantea la construcción de nuevas comunidades socialistas, no desde la construcción de viviendas, sino desde la construcción de comunidad. Sus debates incluyen la discusión sobre la propiedad (apuestan por la propiedad familiar y colectiva) y plantean la

15 Cabe también destacar que, en estos momentos, el impulso de un plan de esta envergadura solo es posible desde la dependencia a la extracción petrolera.

ayuda mutua y la autogestión, como elementos fundamentales de esta propuesta de transformación urbana.

Desde el movimiento popular, la construcción de viviendas va de la mano con el uso de los espacios ociosos o subutilizados de la ciudad; por ello, implica realizar diseños participativos, generar fondos para la autogestión (con recursos propios y préstamos del Estado) y construir con el aporte del trabajo familiar. Desde esta lógica, el saber técnico se encuentra al servicio de la comunidad; las familias involucradas son los sujetos orientadores del proceso; la vivienda es un elemento, cuya perspectiva es la configuración de comunidades participativas, que impulsen propuestas productivas en la ciudad.

Más allá de estas tensiones, se han logrado avances en el diálogo entre el movimiento popular y el gobierno. Producto de años de lucha y movilizaciones de calle, fue posible presentar propuestas de políticas públicas en materia urbana y se consiguió el apoyo gubernamental. Estas propuestas se convirtieron en leyes aprobadas (bien sea por la Asamblea Nacional o vía Habilitante), en políticas públicas impulsadas desde el Estado o desde el mismo movimiento popular.

Tres son las líneas claves para impulsar las políticas populares en materia urbana:

- Lucha contra el latifundio urbano y la especulación inmobiliaria. Democratización de la ciudad.
- Transformación de barrios y ciudad: poder popular, justicia territorial y reivindicación del hábitat popular.
- Producción popular del hábitat: producción socialista de la ciudad.¹⁶ (Aportes al Programa de la Patria, 2012).

16 Estas tres líneas son los ejes centrales propuestos por el movimiento de pobladores y pobladoras al programa de gobierno de Hugo Chávez Frías, para el periodo presidencial 2013-2019.

Al mismo tiempo, en el 2011, se logró concretar, por vía habilitante, una serie de leyes relacionadas con la temática:¹⁷ la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los asentamientos urbanos y periurbanos; la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales. Por su parte, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Estas tres leyes fueron debatidas, sistematizadas y propuestas desde el movimiento popular urbano.

Imaginario desarrollista e imaginario popular urbano Tensiones, contradicciones, ¿alternativas?

Más allá de los avances en el debate sobre lo urbano y los logros legislativos obtenidos desde el movimiento popular, Venezuela, como país dependiente de la renta petrolera, está profundamente anclado en prácticas desarrollistas y extractivistas. Una de las reflexiones o preguntas que cabría analizar es cómo las organizaciones del campo popular urbano se inscriben, o no, en las posibilidades de construir nociones de Buen Vivir/Vivir Bien, o de construir alternativas al modelo capitalista en clave emancipatoria.

En Venezuela, el debate crítico sobre las prácticas extractivistas tiene poca fuerza. La ciudad está configurada y atravesada por amplias expresiones capitalistas y desarrollistas: una separación radical con la Naturaleza, con el campo, altos niveles de consumo, falta de planificación, ausencia de espacios públicos, prácticas violentas, altos de niveles de exclusión social.

El campo popular urbano como espacio de lucha, resistencia y existencia, como parte fundante de la ciudad en su construcción

17 Según la Procuraduría General de la República: “La Ley Habilitante es una herramienta jurídica de rango constitucional que faculta al Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo a las necesidades y/o emergencia del país”.

cultural, aporta claves para lo que podría ser una alternativa cultural con propuestas de participación política y de afirmación de identidades populares, en contraposición con el imaginario desarrollista, que entremezcla discriminaciones en una mirada clasista, racista y patriarcal. No obstante, las organizaciones urbanas tienen serios desafíos al momento de aspirar la construcción de un horizonte transformador.

Existen tensiones entre campo y ciudad, y en la relación con la Naturaleza. Más allá de los esfuerzos de articulación realizados con organizaciones campesinas, el espacio urbano venezolano se encuentra profundamente separado de los espacios campesinos, del ciclo productivo. Asimismo, es difícil transversalizar los debates en torno a la democratización de la ciudad, con una mirada crítica de la relación que tenemos con la Naturaleza. Es un eje poco abordado, que no aparece con fuerza en el discurso ni en las políticas actuales del movimiento popular urbano. Sin embargo, en los aportes realizados al programa de gobierno aparece la necesidad de construir nuevas formas de relacionamiento con la Naturaleza

(...) a través de cuestionar nuestro modo de vida en las comunidades urbanas para promover alternativas al modelo civilizatorio. Estos cuestionamientos deben ser a nuestros esquemas de consumo general de mercancías, nuestros medios de transporte, el uso indiscriminado de combustible, nuestra alimentación, el consumo de energía y de agua; todos estos son elementos que sustentan desde la ciudad el sistema capitalista. (Consejo Patriótico Sectorial de Vivienda, Hábitat y Ciudad, 2012)

Otra de las tensiones se refiere a la opresión sexual, la identificación del patriarcado, o el reconocimiento de las relaciones de opresión entre hombres y mujeres, en el barrio y en la ciudad. Aunque las mujeres participan mayoritariamente en las bases, su jornada no ha modificado y siguen asumiendo doble y triple jornada. Por otra parte, existe una fuerte violencia contra las muje-

res y el mandato de la maternidad en las comunidades populares es algo que poco se problematiza, frente al derecho de las mujeres a decidir.

Asimismo, la creación de espacios de participación y de inclusión de los jóvenes urbanos populares constituye otro desafío. Las comunidades y barriadas están atravesadas por prácticas violentas, expresadas en algunos casos por sectores juveniles, sobre todo masculinos, que han sido excluidos de los espacios materiales y simbólicos de la ciudad: excluidos de un sistema educativo que no reconoce sus necesidades y la situación en la que viven, y de un sistema laboral formal para el que no se encuentran calificados; altamente estigmatizados por su condición racial y de clase. En varios procesos de participación y organización barrial-comunitaria, los jóvenes urbanos populares no se sienten reconocidos ni identificados, ya que desde los movimientos tampoco existen propuestas que logren incorporar la mirada juvenil. La articulación de las organizaciones urbanas con los sectores juveniles es clave para pensar una propuesta de transformación urbana.¹⁸

Existe una fuerte contradicción entre el discurso crítico al capitalismo y los altos niveles de consumo: en general, la ciudad de Caracas consume gran parte de lo producido en el resto del país. Incluso, en las comunidades populares, el fetiche por las marcas, los teléfonos, las tecnologías de última generación, tiene una presencia permanente. La ciudad venezolana se configura en un patrón de consumo infinito, que solo puede ser cubierto a costa de una economía fuertemente extractiva primario exportadora y una economía urbana informalizada, explotada y precarizada.

18 Se destacan las experiencias de Tiuna el Fuerte y de la naciente Red Nacional REDADA. Es un espacio de construcción alternativa de jóvenes de sectores populares de Caracas, que apuntan a la transformación y a la inclusión política desde la afirmación de las prácticas culturales de estos sectores excluidos y estigmatizados. Así, las artes urbanas son una herramienta clave para la participación de estos jóvenes.

Finalmente, otro punto de tensiones se ubica entre la inclusión, la reivindicación y la emancipación. Las políticas propuestas y construidas desde el movimiento popular urbano contemplan ámbitos y planos vinculados con la inclusión, la reivindicación y, en algunos casos, también con la emancipación, que coexisten en muchos casos desde la complementariedad y, en otros, desde las contradicciones. Aunque se empujan con fuerza políticas autónomas, un sector de la cultura política refuerza la idea de un Estado rico, paternalista, que debe responder a nuestras necesidades con solo “pedirle”. La necesidad, la reivindicación y la inclusión, por una parte, moviliza; pero, por otra, paraliza, desmoviliza y despolitiza. En algunos casos, la autonomía política de lucha es entendida desde la perspectiva de control al Estado, para vigilar la distribución de la renta petrolera y no necesariamente como cuestionamiento y transformación de las estructuras. Este es un reto fundamental de las organizaciones urbanas que plantean la autonomía, la autogestión, el cogobierno y la cogestión, como modelos para la transformación.

Así, entre estas tensiones y contradicciones está presente el desafío de promover un proceso de cambio en los contextos urbanos, con espacios de discusión amplios, múltiples y diversos, donde se puedan encontrar distintas expresiones organizativas para debatir el tema de la ciudad, sus posibilidades y límites en la transformación y construir articuladamente las alternativas.

Algunas ideas no concluyentes

Los procesos de inclusión que ha vivido la sociedad venezolana en estos años han generado un contexto de movilización popular; pero, asimismo, han consolidado una idea de inclusión en cuanto a acceso al consumo, y de participación que, en muchos casos, se limita al ámbito local.

Sin embargo, para pensar la ruptura y el cambio de la ciudad capitalista, creemos necesario señalar que los pobladores y pobla-

doras urbanos participan en calidad de sujetos políticos. Ellos, desde sus luchas cotidianas, han construido una apuesta cultural alternativa en la que se cuestiona la relación con el Estado, las formas de ejercicio político, el modo de producción capitalista, y donde además se conservan las relaciones de reciprocidad y solidaridad. La organización de este sujeto urbano ha posibilitado el mantenimiento y construcción de otra mirada, distinta a la suscrita en el imaginario hegemónico.

En este sentido, las políticas urbanas fraguadas desde el movimiento popular, cuestionan profundamente las miradas clientelares y viviendistas, y reivindican la necesidad de construir el hábitat y la comunidad; de no fragmentar, sino conservar el espíritu de cooperación y autogestión que caracteriza a los sectores populares. Desde esa perspectiva, se rescata la transformación del barrio, no su eliminación ni su negación.

La necesaria construcción de comunidad implica la reconstrucción de la memoria histórica de pobladores urbanos (donde la mayoría de los abuelos y abuelas venían de comunidades campesinas, se asentaron en los barrios y transmitieron estas prácticas y costumbres); también supone caracterizar las causas de la segregación y exclusión urbana, y potenciar las capacidades productivas que se anclan en los saberes populares. Construir comunidad sugiere un elemento central en las posibilidades de pensar una ciudad distinta.¹⁹

El modelo autogestionario, al que se apuesta desde el campo popular urbano, desarrolla posibilidades de hacer en distintos niveles; entre ellas, fortalece las capacidades para la producción social del hábitat, desde los principios del apoyo mutuo y de la propiedad colectiva, que implica la organización de la fuerza de trabajo, la apropiación-reapropiación del conocimiento y de la

19 En el caso del movimiento de pobladores, construir nuevas comunidades implica también el debate del socialismo como horizonte de transformación.

tecnología, la administración de recursos financieros y la adquisición de medios de producción.

Las posibilidades de pensar en otra lógica más allá de la propiedad privada, es otra de las apuestas en la construcción de nuevas comunidades, que fortalece lo común por encima de lo individual, promueve “la diversidad de formas de propiedad y tenencia social de la tierra y la vivienda distintas a la forma tradicional de propiedad privada individual burguesa (Propiedad social directa e indirecta, propiedad colectiva, comunal, multifamiliar o familiar)” (Consejo Patriótico Sectorial de Vivienda, Hábitat y Ciudad, 2012).

Todas estas propuestas se incluyen en un contexto político transformador. Se trata de transformar la ciudad desde el barrio, desde la ocupación, desde el sujeto oprimido y excluido, lo que implica no solo un cambio sustancial en la infraestructura física, sino en las relaciones sociales, a partir de las aspiraciones y luchas de los territorios y sujetos, que desde sus resistencias apuntan a la posibilidad de un horizonte anticapitalista.

¡Una nueva política para el campo!

La agricultura orgánica y campesina: saludable, sustentable y generadora de empleo

Entrevista a Luis Andrango²⁰ y José Cueva²¹

La migración desde el campo hacia las ciudades sigue a diario en América Latina. El crecimiento de las grandes urbes exacerba la contraposición del campo y la ciudad –los habitantes urbanos no conocen acerca de la procedencia y producción de sus alimentos, cuya comercialización se concentra en manos de grandes cadenas de supermercados–. Estos a su vez imponen los precios a los agricultores, lo que genera dependencia y dificulta las condiciones de vida en el campo. Así se alimenta el círculo vicioso de la migración, poniendo en peligro al mismo tiempo la soberanía alimentaria de nuestros países. Claudia López, Alejandra Santillana y Miriam Lang conversaron con Luis Andrango y José Cueva acerca de la necesidad de otra política radicalmente distinta para el agro.

20 Se vinculó a las organizaciones sociales desde la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC). Egresado de Ingeniería Gerencia y Liderazgo de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. En el 2008 fue electo Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN). Desde el 2010 es Secretario Operativo de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC).

21 Dirigente del Colectivo de Organizaciones Sociales, Corporación Toisán. Agricultor orgánico cafetalero, hace quince años comprometido con el proceso organizativo de Intag y con los campesinos productores de café del Ecuador. Realizó sus estudio de Ingeniería Agropecuaria de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de Guayaquil.

¿En qué medida la agricultura campesina aporta a la humanidad hoy?, y ¿en qué proporción nos provee de alimentos en comparación con la agroindustria?

LA: Tal vez empezar dando algunos datos que se han recogido en la Vía Campesina,²² sobre quiénes alimentan al planeta. Se encontró que el 60% de la alimentación mundial sigue viniendo de las agriculturas campesinas. De ese porcentaje, casi el 80% de la población está conformado por mujeres dedicadas a la producción. En el Ecuador, según los datos del Ministerio de Agricultura, alrededor del 64% de la alimentación del pueblo ecuatoriano proviene de la producción de pequeños agricultores. Algunos datos básicos muestran que el 80% de las papas, el 45% de la leche y el 60% del maíz, aproximadamente, proceden de estos cultivos. En ese contexto surge tu pregunta y de hecho, la pequeña agricultura, la familiar, la orgánica y la agroecológica son las responsables de la producción destinada a la mayoría de ecuatorianos. A pesar de todas las políticas que promueven la agricultura empresarial durante varios años, la alimentación sigue en manos de las mujeres y hombres del campo que están dedicados a la pequeña agricultura.

JC: Actualmente la agricultura convencional alimenta a una parte de la población, solo una parte de la nutrición de la población mundial está basada en esta agricultura, pero es una agricultura cuya energía primaria depende del petróleo en un 90%.²³

22 Investigación realizada por la CLOC Vía Campesina, en <http://viacampe-sina.org/downloads/pdf/sp/mali-report-2012-es1.pdf> y <http://viacampe-sina.org/downloads/pdf/sp/paper6-ES-FINAL.pdf>.

23 La agricultura industrial moderna depende completamente de los combustibles fósiles. La mayor parte de los tractores utilizan diesel o gasolina. Las bombas de riego utilizan en su mayor parte gasóleo, gas natural o electricidad procedente de centrales térmicas. La producción de fertilizantes también depende en gran medida de la energía. Se utiliza gas natural para sintetizar el amoníaco de los fertilizantes basados en nitrógeno. El transporte de los fertilizantes también depende de los combustibles fósiles. Por eso, se suele decir que los ciudadanos ricos del mundo “comemos petróleo”.

Eso necesariamente, tiene que cambiar, porque no existe otra respuesta que una agricultura orgánica. Entonces la agricultura orgánica no es una alternativa, es una necesidad que con el tiempo va a convertirse en una realidad.

¿En qué medida es verdad lo que suele decirse, que es imprescindible que la agroindustria se convierta en el modelo productivo generalizado porque la población mundial crece a tal ritmo que si no industrializamos todo, nos vamos a morir de hambre y que la agroindustria es mucho más productiva? ¿cómo encaja este argumento con el discurso de incrementar la productividad?

LA: En la CLOC hemos dado un debate importante sobre los mitos que se van construyendo alrededor de la agricultura, y la expansión de la agricultura agroempresarial industrial. Encontramos algunas contradicciones alrededor del tema: Primero, es falso que la agricultura agroempresarial combate el hambre. Las políticas para la agricultura de la llamada *revolución verde*, es decir la mecanización e industrialización del campo, lo que han hecho es profundizar la alteración de los ciclos naturales, lo que contribuye al calentamiento global; es decir, la lógica de elevar los niveles de producción termina generando mayores niveles de contaminación, de destrucción del medio ambiente, y no resuelve el problema fundamental de la alimentación.

Es falso también que una empresa agroalimentaria genere mayores niveles de bienestar y producción. Es decir, nosotros hemos comparado la lógica productiva de una empresa agroalimentaria frente a otra de economía campesina en el Ecuador, y lo que se descubre es que la agricultura empresarial intenta industrializar cada vez más la agricultura, lo que implica disminuir el uso de mano de obra en la producción. Mientras, este falso discurso sigue afirmando que las empresas agroalimentarias son las que producen, las que dan empleo en el campo. Esta lógica tendiente a la industrialización elimina el rol de los campesinos y

campesinas en la agricultura y deja la agricultura en manos de la industria, de las máquinas.

Por otra parte, cuando se compara las dos formas de hacer agricultura –agricultura industrial y campesina– en cuanto a si generan ingresos o riqueza, podemos ver que una tiene el objetivo de acumular en pocas manos, de explotar a los campesinos; mientras que la otra genera la redistribución de riquezas y garantiza la sobrevivencia familiar. La agricultura industrial está basada en la explotación del trabajo campesino, en cambio la otra es una forma de sobrevivencia campesina.

JC: Para mí, todo viene desde un cambio de paradigma, es decir, mientras la ciudad sea un “sumidero” –no solo de energía–, mientras sea el paradigma y el sueño de la gente en el campo, es difícil que la vida campesina retome su importancia y su centralidad en la alimentación de la gente.

El tema demuestra que finalmente, después de 60 años en los que este pensamiento sobre la agroindustria ha primado, actualmente hay mil millones de personas que no han comido todavía, un séptimo de la población mundial no comió hasta este momento; entonces desde la agricultura industrial no hay una respuesta al hambre, ni la va a haber. Porque el objetivo de la agricultura industrial es simplemente el negocio, y es probablemente uno de los negocios más grandes. La producción de alimentos para la humanidad pasa por ese modelo industrial para que deje ahí sus ganancias, utilidades en la industria para la producción de químicos, semillas, transporte, distribución y venta. Es un modelo monopólico que tiene acaparada la producción de alimentos, igual que otro modelo lo hace con la fabricación de armas, o la fabricación de carros o textiles, todo está monopolizado. La agricultura no está fuera de eso, de ahí a que el modelo industrial sea una respuesta al hambre es mentira, es falso.

El Ecuador, por ejemplo, fue un lugar de megadiversidad agrícola, jamás ha sufrido situaciones de hambruna. La agricul-

tura industrial en el Ecuador no ha servido para alimentar a los ecuatorianos, aquí sirve para exportar productos de lujo. La producción de alimentos en Ecuador ha estado tradicionalmente en manos de pequeños productores, de familias productoras, especialmente indígenas, o de los pequeños productores de la Costa, todos ellos sumamente diversificados. Y durante un largo tiempo muchos de ellos no han estado vinculados al gran mercado, sino que el excedente de estos productos es el que alimentaba al resto de la población. El modelo de producción familiar y orgánico y de pequeña escala para la producción de alimentos es –pienso yo– casi insustituible, porque es diverso, sostenible, barato y porque es de fácil distribución y de fácil acceso.

Por el contrario, los países que han perdido esa capacidad de producción, por un lado dependen en gran parte de la agroindustria, y por otro, afrontarán serias crisis alimentarias en el futuro. El problema de la alimentación en el mundo no es tanto un problema de producción y de acceso, sino de dinero, quien lo tiene compra la comida y el que no, se queda sin comer. Así de sencillo.

Pienso que en el Ecuador, hay condiciones suficientes para mantener aún una agricultura campesina, una agricultura de pequeña escala, pero de alta productividad y diversidad para la población. Pero insisto que el tema del paradigma es clave, porque cada día se demanda menos de esa producción en las ciudades, cada día la alimentación está más concentrada en alimentos procesados, industrializados e importados, y eso va en desmedro de la calidad de la alimentación. Cada vez, la gente se alimenta peor, depende más de un reducido grupo de alimentos que son de producción industrial –por ejemplo, la soya, el maíz, el trigo, las grasas, las oleaginosas, etc.–, y de la producción de animales a gran escala, cerdos y pollos. En cambio, la agricultura tradicional va por otro lado, va por la diversidad en la alimentación, especialmente de legumbres, frutas, granos – que fueron la base de nuestra alimentación toda la vida, y que ahora ya no lo son.

Existe una posición en el discurso hegemónico, de que la vida campesina es algo que pertenece al pasado y que es opuesta a la vida “moderna” de la ciudad. La ciudad es el lugar imaginado del éxito y de la civilización. Este imaginario legitima esas políticas que finalmente apuntalan a descampesinizar el campo. ¿Cómo ven ustedes esa posición entre campo = atraso, ciudad = modernidad, subsistencia = más atraso, aún, en el contexto del debate sobre la soberanía alimentaria y las políticas públicas que se están llevando a cabo?

LA: Nosotros vemos que en este contexto de crisis, hay una ofensiva nueva del capital hacia la agricultura y hacia la alimentación. Es decir, los grandes capitales internacionales empiezan a darse cuenta de que la alimentación deja de ser un derecho, y puede convertirse en un enorme negocio. Existe una impresionante ofensiva del capital que promueve lo que nosotros llamamos “agronegocio”, es decir una lógica empresarial vinculada a la agricultura y a la producción de alimentos, que a la larga promueve políticas de mayor dependencia alimentaria de los países con las empresas, y de concentración –tanto en la producción de alimentos como en su comercialización– en manos de las transnacionales. Esta ofensiva de los capitales y de las transnacionales de apropiarse de todo el sistema de producción y comercialización de alimentos convierte al agronegocio en una válvula de escape de la actual crisis.

Un efecto concreto de esta ofensiva es que estamos viviendo un proceso de acaparamiento de la tierra, con un giro de los capitales y de las inversiones. Porque los capitales que antes estaban en la Bolsa de Valores ahora se hacen más rentables comprando tierra y luego especulando con ella, o comprando tierra para producir agrocombustibles. Según el estudio de la CLOC Vía Campesina, esta ofensiva no solo proviene de las transnacionales, también están involucrados los gobiernos de varios países de Asia, África, también Arabia Saudita y China, que se encuentran

en procesos de acaparamiento de la tierra; y otros gobiernos, de los países donde se encuentra la tierra, les facilitan estos negocios. Esta ofensiva del capital no es solo económica, es también ideológica, sostiene justamente la perspectiva de que el campo es lo atrasado.

Por esa razón, se termina generando una conciencia que en el campo, lo que necesitamos son políticas de asistencia a los “grupos vulnerables”, que somos minorías, y se va creando una dependencia, no solo económica sino ideológica, con el objetivo de quitarle el rol protagónico a la sociedad campesina. Esta ofensiva ideológica apunta a que las lógicas económicas campesinas no le son favorables al sistema capitalista, entonces se crean condiciones para que se las conciba como retrógradas, inviables. Lo que intentan en el fondo, es matar la dignidad de esos pueblos y convertirlos en miserables.

JC: La orden es clara: abandonar, desalojar el campo, porque en algunos lugares el campo tiene que estar en manos de industrias agroexportadoras, en otros de mineras, hidroeléctricas, petroleras y madereras. Los campesinos son realmente un estorbo en estos territorios. Frente a ese panorama, las políticas públicas han servido principalmente para fomentar ese modelo, hasta hoy sigue siendo así. Empecemos por el tema educativo: la educación es para sacar a la gente del campo, los valores que se enseñan a los niños en el campo son valores urbanos, los imaginarios de la gente que está educando a sus hijos en el campo son de desalojo. Porque además existe una concepción creada de pobreza, de miseria en el campo. Desde hace 20 años, esta concepción ha hecho que la gente eduque a sus hijos para que no repitan, ni vuelvan a sufrir lo que ellos han sufrido, y eso significa irse a la ciudad.

En la práctica es terrible, porque la gente del campo con las bases de educación que tiene —esa educación que les saca del campo— no llega muy lejos en la ciudad, los que migran se convierten en masa de esclavos para favorecer ese mismo sistema, y

dejan el campo disponible. En el caso del Ecuador, se abandonan las zonas de montaña que servirán para la minería. Las plantaciones forestales y el mercado de carbono están llegando, y las zonas agroindustriales, obviamente, se destinarán para desarrollar la agroindustria, en el Oriente para el petróleo y la madera, etcétera. Es mucho más rentable para el Estado manejar así el tema de tierras. En este momento, el camino para el campesino es absolutamente cuesta arriba, y yo diría que más que nunca, debido a la agresividad con la que se maneja la información que provoca la aculturación actual en el campo; a mi parecer es más fuerte que antes. En la actualidad, aunque el ideario de la modernidad está llegando atrasado a Ecuador, está llegando con más fuerza, el consumo, las vías, los carros, celulares, computadoras, y estas cosas están como nunca en la mente de la gente; ahora el tener cosas es algo importante.

Ante esta situación, veo pequeños polos, núcleos pequeños de resistencia en el campo que tienen las cosas claras y ven como alternativa resistir, aunque sean minoría, se trata de pequeños grupos, pequeñas organizaciones, pequeños movimientos sociales del campo. A mi parecer, todo eso va a pasar por un momento muy difícil en el corto plazo, alrededor del proceso de descampesinización. Los primeros perjudicados van a ser la gente que al dejar el campo va a enfrentar otra realidad, que es la vida urbana cada vez más compleja. Por ejemplo, en relación a la migración internacional, vemos como la gente regresa de España con una mano adelante y otra atrás, porque perdieron todo y ya jamás van a regresar a agarrar un machete o un azadón.

Se está construyendo una nueva identidad en el campo, no una identidad campesina, percibo que hay una lucha interna en algunos casos, de gente perteneciente a los núcleos de resistencia a esa modernidad pasa por una lucha interna fuerte frente al modelo, y por otro lado, esa nueva identidad campesina, que en realidad es una des-identidad. Significa el abandono y entierro de

esa cultura de supuesta miseria construida ideológicamente, de pobreza, de trabajo duro y físico.

LA: Otro tema de debate es la crítica a la izquierda por parte del movimiento campesino, porque siempre ha habido un nivel de debate sobre el partido y la vanguardia, el lugar de los movimientos sociales y la fuerza de masas; hemos hecho una crítica fuerte a la lógica vanguardista y el lugar que ocupan los cuadros y la masa, debido a que quienes han enfrentado con fuerza a la ofensiva del capital han sido siempre los grupos indígenas y campesinos, porque combaten desde su cotidianidad la imposibilidad de seguir sosteniéndose en el campo. Por otro lado, la cooperación también ha jugado un papel en la transformación del rol de la sociedad campesina indígena, y los dignos pequeños productores, contribuyendo con la lógica de que son grupos a los que hay que apoyar porque están “excluidos”. La perspectiva de inclusión en el sistema viene con el discurso de los negocios inclusivos, provocando la destrucción de formas dignas y autónomas de sobrevivencia en el campo.

Quisiera que profundicen un poco en eso que se llama “políticas de desarrollo rural”, específicamente, y la “revolución verde”, sobre toda esa arremetida de industrialización a gran escala, mecanización y tecnificación del campo que se hizo a nombre del desarrollo y del progreso. ¿Qué balance harían ustedes sobre lo ganado y lo perdido?

JC: Podríamos ponernos a enlistar una cantidad de políticas públicas que podrían ser beneficiosas para el campo, pero todo eso pasaría por tener un Estado que parta de un pensamiento distinto, un Estado que deje de ser un instrumento y que pase a ser en los hechos un Estado que sirva a su pueblo. Actualmente estamos en una etapa en que el Estado —por lo menos en el campo— es concebido como el que viene a regalarnos algo o a entregarnos algo de lo que nos pertenece. Pero sobre todo viene a abrir el camino

a la gran industria, es decir, el Estado sigue siendo el facilitador de la gran industria, en este caso la minera, la hidroeléctrica, las multinacionales agroquímicas; lastimosamente el Estado tiene como papel principal el ser facilitador. Una cosa es el discurso, pero la práctica es otra, en la práctica tenemos un Estado que, desde todos sus departamentos, desde todos sus brazos, está trabajando para facilitar el ingreso y la permanencia de la industria. El Ministerio de Agricultura es un brazo de las multinacionales agroquímicas, quieran o no, el único trabajo del Ministerio de Agricultura ha sido fomentar la siembra de cultivos “mejorados”.

El Estado ecuatoriano se cree en capacidad de entregar a los *pobrecitos* campesinos conocimientos, tecnologías, semillas, herramientas y regalos. Es un Estado absolutamente paternalista, absolutamente creído de sí mismo y se cree superior para mejorar las condiciones de vida de estos *pobres campesinos ignorantes*. Esta visión se ha traducido en los principales proyectos del Estado en el ámbito agrícola, en Ecuador tenemos el proyecto de las ERA, –las Escuelas de la Revolución Agraria– en el que jóvenes ingenieros titulados van a capacitar a *tontos* campesinos que no saben nada, ese enfoque de política pública desplaza el conocimiento campesino con la intervención externa, sin ningún resultado. Por ejemplo, en nuestra área, en el tema del café, hemos tenido que entrar a formar parte del Estado, fuimos funcionarios del Ministerio para sacar algún proyecto de fondo. Logramos un proyecto que se inauguró 40 veces, pero que hasta el día de hoy no arranca porque fue diseñado por los campesinos. Llevamos tres años intentando arrancar, pero la lógica con la que los grupos de caficultores que diseñaron este proyecto no encaja con la del Estado paternalista, subsidiador, superior al campesino, entonces, como el proyecto está fuera de ese enfoque, no logra avanzar. Por otra parte, las políticas del Estado siempre se han reducido a comprar cosas y a regalar, y punto. Frente a esas políticas, ¿qué se puede esperar del Estado?

A mi parecer son necesarias y urgentes varias políticas públicas, imprescindibles para el Estado, empezando por el tema de la educación, tenemos que cambiar ese paradigma de educación estúpido que tenemos en el campo, una educación alejada de la realidad, una educación de castigo, donde los profesores que llegan al campo van al campo como castigo; los profesores sueñan con que les quiten el castigo para volver a la ciudad, y con dar clases en las escuelas urbanas. Estos profesores tienen una carga emocional negativa. Por otro lado, la infraestructura en la que estudian los niños en el campo es precaria. Pero en esos espacios se desenvuelve la educación, por ahí empieza todo. En ese tema, la intervención del Estado aquí en Ecuador ha sido nula, el aporte para la educación ha sido regalar uniformes sin lograr ningún impacto, o estandarizar el desayuno escolar con soya transgénica: papilla, galletas y granola de soya, algo terrible. Su gran proyecto le hace el juego a la agroindustria y no incluye mejoras en la infraestructura. Las políticas públicas deben proveer al campo de los servicios necesarios para que la gente no tenga que irlos a buscar a la ciudad; educación y salud principalmente. La salud ha sufrido un tremendo retroceso: mientras en la ciudad se mejora la atención, en el campo se han eliminado las pocas facilidades existentes, por ejemplo, nosotros perdimos nuestro hospital y nuestras ambulancias, no sé si esto sucedió también en otros lugares.

Con relación al modelo productivo, el Estado tendría que fomentar un modelo distinto, pero actualmente no se plantea este cambio, así, sigue fomentando el mismo modelo causante del problema.

LA: Si volvemos al debate campo-ciudad antes mencionado, la ofensiva ideológica y los valores que se sustentan alrededor de lo urbano, este debate está aliado a valores que son contrarios a los valores campesinos. Por ejemplo, si en el campo, la forma de producir y sobrevivir está basada en la solidaridad, en la ciudad prima el individualismo; si en el campo, las lógicas de producción

son de complementariedad, en la ciudad son de competencia. Esta ofensiva ideológica afecta a las formas y valores de la cosmovisión que son la base de la sobrevivencia de los pueblos indígenas campesinos. Otra de nuestras críticas, por ejemplo, fue que todas las políticas de desarrollo rural invisibilizaban el tema agrario, este enfoque planteaba otros elementos como el turismo comunitario, o las formas de asociación empresarial para incluirse en los mercados; por lo tanto, esta lógica de desarrollo rural intentó invisibilizar la fuerza agraria del campo, porque la fuerza no está en las lógicas de servicios que promueven las políticas sociales. La tesis era que el problema era la productividad –como se lo plantea en el debate actual– y la receta fue la inclusión de paquetes tecnológicos o agroquímicos para elevar los niveles de producción en el campo y en la agricultura ecuatoriana. Estos paquetes agroquímicos venían asociados a semillas modificadas, y a ciertos cultivos específicos. Toda esta lógica creó una dependencia total de la agricultura campesina con la agroindustria de la alimentación, –lo que nosotros llamamos la agricultura de contrato–. Es decir, el campesino sigue siendo dueño de su tierra, y de su mano de obra, pero está siendo explotado por una industria agroalimentaria que le da la semilla, los agroquímicos, los abonos y el crédito, y que al final le compra su producción a un precio impuesto. Por otra parte, los monocultivos determinan que existan cien campesinos en la misma zona, produciendo el mismo producto con los mismos insumos, y cuando se llega al final de la producción, el precio está por los suelos, así el campesino pierde su dignidad de sobrevivencia en la agricultura con esa nueva forma de explotación, traducida en el despojo de su mano de obra y trabajo. Tras un período de cinco años, nosotros no utilizamos al paquete tecnológico, sino que el paquete tecnológico termina usándonos a nosotros, bajo una lógica nueva de explotación y despojo del campo. Esos son los resultados del discurso del desarrollo rural y

de la revolución verde, que tenían como objetivo elevar los niveles de productividad.

Otro ejemplo concreto es el valor actual de los insumos en la producción. El peso de la semilla y los agroquímicos llegan por lo menos al 40% del total de la inversión en la producción; así se crea una nueva dependencia económica, porque el campesino trabaja para pagar ese 40% a la misma empresa que le vende las semillas, que le da crédito, agroquímicos y es quien finalmente compra el producto.

Sus organizaciones y algunas otras frente a este panorama se están planteando la alternativa de la agricultura orgánica. ¿En qué términos sería ventajosa? En términos de fertilidad del suelo, de biodiversidad, es decir, ¿cuáles son los criterios que ustedes aplican para decir que es mejor?

LA: Nosotros hemos visto con preocupación que algunas políticas estatales favorecen la producción orgánica, sin químicos, la agricultura limpia, culturalmente adecuada, pero que cuesta tres veces más que lo normal, y nosotros los campesinos nos preguntamos ¿caemos en esa lógica de producción para la gente pudiente o mantenemos nuestra consigna de alimentar a la gente pobre, a la gente que demanda alimentos? En ese punto surge la necesidad de acuñar la tesis de la agricultura agroecológica, es decir, nuestra tesis es que la alimentación agroecológica no tiene que ser más cara y no tiene por qué adaptarse a la lógica del consumo elitista, en el que solo puede consumir la gente que tiene dinero. Nuestra propuesta implica la generación permanente de mecanismos de comercialización solidaria alrededor de la producción agroecológica. Por otra parte, descubrimos en lo concreto, ya en la práctica, que el salir de esta agricultura convencional y pasar a una agricultura agroecológica en un principio tiene costos muy fuertes para el campesino, y salir de esta dependencia de la agricultura convencional significa, por lo menos, una transición de

tres a cinco años. Sin embargo, luego de ese tiempo se pueden lograr condiciones dignas para vivir, porque permite tener educación, salud, para la familia. Esta fase de transición de la agricultura convencional a la agroecológica implica una recuperación de la capacidad de fertilidad de la tierra, porque la ofensiva de la agricultura convencional dependiente de los agroquímicos ha eliminado la fertilidad de la tierra. Por ejemplo, en un año y en una hectárea, los campesinos utilizaban para el arroz un quintal de urea. Al siguiente año la misma producción necesita tres quintales, al siguiente necesita seis, y así esta agricultura elimina la fertilidad de la tierra, por lo tanto el salto de esa agricultura a una agricultura agroecológica implica un momento de declive de los niveles de producción, de unos tres años al menos. En esta fase, sería sensato el apoyo del Estado.

Una de las contradicciones de los países industrializados es que en nuestros países promueven el libre comercio sin la presencia del Estado y sin subsidios, mientras en los países del Norte, la agricultura es uno de los sectores en el que el Estado pone más recursos e invierte más subsidios. Nosotros hicimos una comparación con los compañeros campesinos de Francia, de la Vía Campesina, ellos más o menos recibían el 60% de subsidios de lo que cuesta la producción alimentaria. Acá en cambio, las barreras son enormes: este tipo de agricultura cada vez tiene menos condiciones para riego, el agronegocio va acaparando las tierras, y los precios de los insumos para la producción son cada vez más altos, afectando a la economía campesina. Por otra parte, la producción compite con los productos de importación de otros países. Por ejemplo, en Ecuador, la mayor parte de la fruta es importada, lo que llevó a los campesinos de Tungurahua a eliminar su producción local de manzanas. Considero que existe una enorme responsabilidad del Estado para asumir a la agricultura como parte de un elemento crucial de defensa. No solo es responsabilidad de la Vía Campesina, sino que deben implementarse políticas

públicas que garanticen la soberanía alimentaria, para la defensa de nuestra alimentación, y así evitar la dependencia alimentaria.

JC: Lo que pasa es que la agricultura orgánica es la única agricultura que ha existido siempre, no tiene porque llamarse agricultura orgánica, era agricultura: agro y cultura, era la sociedad del campo haciéndolo producir, y aprovechando los excedentes —que le daba su vida en el campo— para alimentar a la sociedad. Con la revolución industrial llegan excedentes industriales de otro lado que encuentran en el campo una aplicación, un mercado, y como son parte de una industria monopólica, hacen todo lo posible por generar una dependencia y que la gente entre a ese sistema de entrega de dinero. La agricultura industrial, o agricultura química empezó a reemplazar lo más importante, la energía, empezó a reemplazar la fuente primaria solar en el campo, al punto que hoy día comemos petróleo. El 90% de lo que nos alimenta es petróleo, y esta trampa no se la contaron a la gente.²⁴ La película completa tiene que ver con el carácter finito de esta energía primaria y hoy nos enfrentamos, entonces, a crisis alimentarias, climáticas, ambientales, económicas por esa dependencia de un producto finito que sirve como fuente primaria de energía.

Ante este panorama, más que una alternativa, repito, es una necesidad volver a la agricultura. Esa transición que tenemos actualmente ha hecho de la agricultura orgánica una agricultura enfocada a mercados elitistas o de gente que se preocupa por la salud, y entonces paga un poco más por la agricultura orgánica. Sin embargo, me parece que la agricultura orgánica, la agricultura verdadera es un imperativo en los próximos años. Los países que no estén en la capacidad de asumir y de implementar una producción de este tipo a mayor escala, con un mayor alcance, van a tener serios problemas de costos, serios problemas productivos. Hemos

24 Ver nota 4.

visto cómo la agricultura orgánica en los hechos es bastante más productiva: lo primero es empezar a aprender a calcular bien los costos de producción, que es algo que nos ha fallado siempre. Al igual que en todos los otros renglones de la economía, los costos de producción son calculados a medias, ocultan muchos de los costos y no asumen externalidades, lo mismo sucede en la agricultura, y cuando en la finca calculamos bien los costos de producción, la agricultura orgánica es absolutamente más barata y más rentable. En el momento que tenemos una mirada integral, nos damos cuenta de la importancia que tiene el suelo, el mantener la fertilidad natural del suelo tiene un impacto positivo sobre otros aspectos como el cambio climático, el agua, sobre la misma economía de la gente y por tanto sobre la migración y los problemas sociales. Al final del día, todo puede reducirse a que si logramos recuperar y mantener la fertilidad natural del suelo, podríamos evitar una serie de otros problemas, económicos, sociales, y ambientales.

Si podemos comprender eso, luego observamos que las prácticas de la agricultura orgánica no son inventos de última hora, sino más bien son prácticas que se han hecho toda la vida, desde que el ser humano se hizo sedentario; por ejemplo de una u otra forma, los avances del conocimiento en la microbiología han permitido acelerar ciertos procesos, entender mejor y mejorar procesos tradicionales campesinos, para poder replicarlos en lugares donde ya se ha perdido la oralidad, la tradición, el traspaso de ese saber. Sin embargo, la base de esa agricultura es el suelo, por ello, se debe mantener la fertilidad de los suelos de forma tradicional, para eliminar toda esa otra carga del modelo industrial, del modelo monopólico que tiene subsumida a la gente.

La industrialización del campo lleva a que la gente tenga que trabajar como jornaleros o peones. En muchos casos las condiciones laborales son malas, y esta gente se proletariza, o termina

migrando a la ciudad, donde también van a vivir en condiciones precarias y en trabajos precarios, porque no tienen calificación. Así se vuelven dependientes de las prestaciones sociales del Estado, de los bonos y de otras cosas, mientras hubieran podido quedarse en el campo trabajando su parcela y vivir de esto, a lo mejor. ¿Qué significa, en ese sentido, la propuesta agroecológica en términos de política social, de empleo y de reducción de la pobreza?

LA: Tal vez en ese punto nosotros estamos a contracorriente porque la tendencia mundial es tener menos presencia de gente en el campo, es parte de los resultados de todo este discurso de desarrollo rural. Pero a la final, no resolvió el hambre ni resolvió la pobreza, y lo que provocó fue un terrible proceso de descampesinización general. Actualmente la ofensiva de la agricultura empresarial lo que hace es convertir a los campesinos en asalariados quitándoles su rol protagónico e incluso la dignidad, porque un campesino que vive de su parcela, es dueño de su tiempo, es de alguna forma el sostén de su familia, —generalmente son las mujeres las que están de agricultoras y sostienen la vida comunitaria—. Solo en la perspectiva de la agricultura agroecológica es posible sostener un proceso de organización campesina y popular, porque uno de los efectos negativos de la expansión de la agroindustria ha sido la incapacidad de mantener procesos organizativos en los territorios donde se asienta, porque la agroindustria además de convertir al campesino en asalariado, le resta el tiempo para la organización comunitaria, lo explota, este no tiene condiciones laborales, se aísla de su proceso comunitario, y finalmente se convierte en un explotado más, cuando antes vivía con dignidad, era dueño de su tiempo y de sus prioridades.

Además, la lógica industrial logra la expropiación de la tierra del asalariado. Nosotros hicimos mapas de lo que eran las zonas florícolas o bananeras, por ejemplo, y observamos que antes existían asentamientos campesinos alrededor; hoy han desaparecido, a causa de la expansión de la frontera agroindustrial.

JC: Considero que es un encadenamiento. Si se logra que la gente alcance productividad con rentabilidad en el campo, si se recortan otros gastos, se podría construir un verdadero modelo de desarrollo campesino, se recuperaría la agricultura, la cultura de la gente en el campo, la civilización del campo, porque de su lado están la educación y la salud. Una agricultura de este tipo requiere otro modelo de infraestructura, otro modelo de apoyo productivo. La agricultura orgánica implica una verdadera transformación social, cambia la dinámica centralizadora de los Estados, porque las políticas se generan desde abajo, esta agricultura permite descentralizar la toma de decisiones y las hace mucho más eficientes, más reales. Alrededor de la agricultura orgánica se podría generar todo un modelo de des-intervención en el campo y no un desarrollo, sino una recuperación de la vida campesina que le ahorraría gastos y problemas al país. No sería necesario construir el metro de Quito, o hacer tantas obras donde se invierten miles de millones de dólares, que en realidad son simplemente producto de una mala política agraria. Considero que la gente está llenando las ciudades innecesariamente.

Hablando de Reforma Agraria, ¿cuánta superficie necesitaría una familia aquí en el Ecuador para poder vivir dignamente de la agricultura orgánica, combinando su autosustento con alguna venta para tener ingresos económicos?

LA: Nos tocó intentar definir los límites de tenencia de la tierra en el Ecuador, y ahí surgió la reflexión sobre el tema para entender y explicar el tema de la redistribución de la tierra. Nos preguntamos cuántas hectáreas tendríamos que redistribuir, a cuántos campesinos y campesinas se entregaría tierra, y en función a eso cuáles serían los límites dentro el territorio con el objetivo de que la cifra no sea arbitraria

En la Sierra, la extensión debería ser de 25 ha, esta extensión permite garantizar la sobrevivencia con dignidad; en la Costa y en la Amazonía entre 50 a 75 ha, aproximadamente. Consideramos

que se necesitan entregar alrededor de dos millones de hectáreas en el Ecuador para cambiar el Índice de Gini en dos puntos y así beneficiar alrededor de un millón de campesinos y campesinas.

JC: Es un poco relativo hablar de superficies porque existen otros condicionamientos: el tipo de suelo, la topografía, el clima. En una zona de montaña se requiere de más tierra que en una zona interandina plana; en la zona montañosa una familia puede tener 10 ha, superficie dedicada a la alimentación y para producir un excedente; en la Sierra o en una zona plana, no se necesitan muchas más hectáreas. No se trata de que mayor superficie automáticamente te permita producir más. Si tu objetivo es el mercado, obviamente nada será suficiente. En cambio, si el objetivo es la producción, los cultivos de calidad, la fertilidad, la educación y la cultura en tu medio, el fin es otro.

En el clásico esquema de desarrollo rural, se considera el proyecto exitoso únicamente si se logra exportar. ¿En qué medida una política pública para el campo debería realmente fomentar la exportación, o en qué medida debería, quizás, fomentar el mercado local en primer lugar y después la exportación o los otros mercados nacionales que no son locales? ¿Qué significa esta priorización del mercado internacional en términos de escasez de combustibles fósiles y de gasto en energía – cuando por ejemplo una manzana de Chile se transporta al mercado alemán, y al mismo tiempo la manzana crecida en Alemania se transporta a Chile a lo mejor - porque hay que exportar, y se nos hace creer que los productos importados siempre son mejores que los locales?

LA: En un estudio, la Vía Campesina indica que el 15% de los gases de efecto invernadero se producen por la comercialización de alimentos provocada por las transnacionales de la alimentación.²⁵

25 Ver <http://www.cloc-viacampesina.net/images/stories/documentos/paper5-SP.pdf>.

Con el planteamiento de la soberanía alimentaria propuesta en la agricultura campesina agroecológica, se está combatiendo, por ejemplo, el calentamiento global y el cambio climático en general.

El otro tema es que el ideario del desarrollo rural siempre fue el generar la producción para la exportación y los resultados han sido un fracaso total, todo el mundo se proyectó a la exportación pero en los hechos los países demandan un nivel de producción que ni aún asociados todos lograrían alcanzar las demandas de *stocks* para la exportación. Les pongo un ejemplo, el caso concreto de la cebolla ecuatoriana. En Cayambe, Tungurahua y en el sur abrieron un proceso para la exportación al mercado Chino, se encontraron con una demanda de miles de toneladas semanales y tuvieron que unirse. Posteriormente, se vieron afectados por los criterios de calidad. El discurso suena bien, pero las experiencias concretas fueron un fracaso porque las empresas alimentarias terminan imponiendo los precios y la calidad (vista no como calidad en nutrientes para la alimentación, sino como norma industrial de tamaño, aspecto, forma etc.), dentro de una lógica perversa de explotación y ganancia alrededor de la alimentación. Pero el problema no se queda ahí. La comercialización tiene un nivel de intermediación donde un intermediario gana por lo menos el 30% del costo del productor y el consumidor. Por ese motivo, el generar una política de comercio justo, de intercambio, no solo garantizaría la sobrevivencia campesina, sino que además alivia el bolsillo del consumidor.

JC: Las preguntas son ¿Para qué quiere un agricultor ser un exportador?, ¿para qué producimos?, ¿para qué quiere plata un agricultor? ¿Para pagarle al hijo la escuela o el colegio en Quito y acabar con su cultura campesina? Debemos hacernos todas esas preguntas, si queremos dinero, si queremos exportar. Queremos recursos económicos en el campo para ser sostenibles, crear una cultura en el campo, para hacer una vida mejor o ¿es para sacar nuestro dinero del campo? Hay que preguntarse a quién se le deja

el terreno porque todos quieren ser exportadores, pero ¿a quién le van a dejar el negocio de la exportación?

Debemos ir paso por paso, primero se requiere que la gente recupere la conciencia sobre la importancia del consumo de alimentos, y entender qué es alimento y lo que significa consumirlo. Existe otro problema, y es que la gente no está consumiendo alimentos, consume basura, razón por la cual no hay demanda de alimentos. Inclusive en el mismo campo, en las fincas la gente compra fideos, arroz blanco, harina, azúcar blanca y ya no come sano; con la acidificación de su cuerpo está desarrollando enfermedades terribles.²⁶

El agricultor debe empezar a comer alimentos nutritivos desde la misma finca, y cuando tenga excedentes los entregará para la venta. Debe existir una demanda de esos alimentos para la venta, hoy en día en cualquier ciudad o país los mercados tienden a desaparecer, los mercados tradicionales y populares son cada vez más pequeños y marginales, uniformizados y están siendo reemplazados por los supermercados, donde todo se encuentra en el mismo espacio y donde los productos orgánicos son caros.

Debe recuperarse el patrón de consumo para que la gente empiece a consumir alimentos, por ejemplo, tengo unos compañeros en Cotacachi que tienen una finca orgánica y sus únicos clientes son extranjeros, porque los cotacacheños no comen productos orgánicos, solo comen arroz, y las políticas públicas fomentan mayores cultivos de arroz regalándoles urea a los productores de arroz. Las políticas públicas deben fomentar y recuperar el consumo de alimentos nutritivos, la gente tiene que conocer la importancia de un alimento y conocer la diferencia entre

26 El diario ecuatoriano *El Herald* informa el 28 de noviembre de 2012: “Cerca de 20.000 pequeños de 10 cantones de Chimborazo sufren desnutrición crónica, porque sus padres los alimentan con harinas y gaseosas en vez de los productos que cosechan”.

consumir harinas y consumir minerales, entre consumir carbohidratos y consumir proteínas, porque se consumen alimentos que no tienen minerales, que no nutren y que están haciendo cerebros vacíos que solo reaccionan a estímulos, lastimosamente.

Luego viene la comercialización, si existe una demanda interna, no es necesario pensar en la exportación, porque no es para nada la solución para los campesinos, yo no conozco ejemplos o experiencias de exportación que hayan sacado a los campesinos de la pobreza. Los ricos son los grandes exportadores quienes realizan exportaciones de cacao, bananos, camarones, flores y brócolis. Por ejemplo empezaron con la agricultura de contrato en Chimborazo, pero los campesinos siguen en las mismas condiciones y sus suelos están envenenados, pero a algunos ricos les va muy bien con la exportación de estos productos.

¿Cuál es el mayor obstáculo para la comercialización local de productos campesinos? ¿Qué papel juegan en eso los registros sanitarios, las normas fitosanitarias y todos los requerimientos burocráticos que influyen también en los mercados y en la comercialización?

LA: La infraestructura, es decir, la mayoría de tierras y lugares donde se producen los alimentos, están distantes de las ciudades, entonces como las familias no tienen infraestructura, quienes terminan haciendo el traslado de los alimentos son los comercializadores. Las normas sanitarias son para nosotros parte de las barreras que se intentan poner en los sistemas de comercialización, y frente a eso se han planteado alguna forma de recuperar lo agroecológico, pero con un sello comunitario que se constituya en la misma comunidad. Yo no conozco mucho de experiencias en concreto sobre eso, pero lo que sí conozco es que todas estas medidas que imponen para los productos agrícolas en los procesos de comercialización son un pretexto para explotar a la producción campesina.

Pongo el ejemplo de Supermaxi, Pronaca.²⁷ Hay varios campesinos, sobre todo del sur de nuestra zona que entregan productos a Pronaca y claro, ahí les ponen todas estas condiciones de los sellos, garantías, calidades y todo eso. Los compañeros nos contaban que les devuelven más o menos el 25% de los productos que entregan, una vez que ya está dañado, les dicen que no cumplieron los registros y solo les pagan por una parte –y el resto realmente pierden–, entonces la gente dice: nosotros siempre tenemos que estimar un nivel de pérdida concreta en eso, porque ya es irrecuperable lo que nos devuelven. Todo esto bajo el discurso de que estos son los sellos y así tiene que estar.

En realidad como dije anteriormente, en todo lo vinculado al tema de sellos y certificaciones de que sea “orgánico” etc., nuestra principal preocupación es que termine siendo una cuestión elitista, y a la final –es lo mismo que sea orgánico o no orgánico, mientras el sello es una barrera en el acceso a los mercados–, es una barrera y de hecho es así.

JC: Sobre la demanda, el asunto es que el mercado local no está demandando una producción, el mercado local se conforma con la comida industrial, la comida barata, etcétera ¿no?, o sea, ese es el obstáculo, por eso hay que pensar a otra escala, hay que empezar a reconstruir circuitos locales de comercialización, hay que pensar en ferias pequeñas, ferias en las ciudades chiquitas antes que pensar en las grandes ciudades y pensar mucho en la diversificación para no depender de la necesidad de precios muy altos, sino más bien de una gran cantidad y diversificada a precios bajos, es decir la gente en las ciudades no está dispuesta a pagar más. Frente a eso la agricultura, en lugar de esperar precios más

27 Pronaca es la mayor empresa de producción agroindustrial (sobre todo carne) en Ecuador y Supermaxi la mayor cadena de supermercados que encadenan a muchos campesinos en sus redes de comercialización.

altos, tiene que pensar en diversificar su producción y aumentar su productividad.

¿Qué políticas favorecerían la inclusión de los pequeños productores? Según entendemos el Gobierno del Ecuador está entregando urea a los campesinos y que eso es un fomento para la producción. También entrega casas y otras prestaciones sociales, en esta visión de que el campesino es un receptor de ayuda social, pero a su criterio, ¿qué debería hacer?, ¿cómo masificar una agricultura campesina orgánica?, ¿cómo hacer de ella el modelo de producción del país? ¿qué políticas necesitamos para eso?

LA. Lo primero es que hay que combatir un mal que arrastramos desde la época colonial, que es la concentración de la tierra y el agua en pocas manos. Esto es crucial para generar primero las condiciones concretas de sobrevivencia en el campo. Es decir, hay que generar políticas de redistribución enfocadas en tema tierra, hay que desprivatizar el agua privatizada en estos últimos años.

Luego, creo que hay que acompañar un proceso serio de transformación de la matriz productiva agraria y eso implica, políticas del Estado: Primero, para favorecer la agricultura campesina, crear condiciones de apoyo para este tipo de producción, que en concreto significa masificar la producción de abonos orgánicos, lo cual es viable y concreto. Cuando yo decía, el 40% de la producción se queda en los agroquímicos, si sustituimos esos agroquímicos por abonos orgánicos el algo realmente viable, tenemos experiencia en eso. Los abonos orgánicos pueden ser producidos por los mismos campesinos y así estamos apoyando a eliminar esa dependencia del 40% del costo en relación a la producción.

Lo segundo, es que hay que seguir garantizando que las semillas sean un patrimonio de los campesinos y no sean más un elemento de compra y venta, una patente, o una mercancía. Porque en el momento en el que las semillas se convierten en

una mercancía, se genera un ciclo de dependencia y de privilegios en relación al uso de la semilla.

Lo tercero, es que hay que crear una política de crédito adaptada a los ciclos de la agricultura, es decir, nosotros hicimos un análisis de los créditos que existen, incluso el 5-5 que lanzó el Estado ecuatoriano, todos estos tienen una lógica crediticia en la perspectiva mercantil, comercial, no en la perspectiva productiva, ni en los tiempos que plantean ni en sus lógicas generales. Entonces, todo el crédito en el Ecuador está enfocado en esa perspectiva, y no dentro de la perspectiva productiva campesina. Hay que definir una política crediticia que se adecúe a la lógica de la producción agropecuaria.

Hay que generar, de hecho, políticas de capacitación y de intercambio de saberes, investigación, acompañamiento, en términos más concretos para deconstruir toda la formación desde el agonegocio. Porque el problema en el tema de la formación es que la educación formal para la agricultura capacita exclusivamente para la agricultura del monocultivo y de la agroexportación, y es lo único que hay. Entonces claro, tenemos que crear un sistema, un proceso de formación que combata esa forma de cultivo y que promueva la agricultura campesina, y eso pasa por esa disputa ideológica de la que hablábamos al principio.

También hay que exigir mejoras en las condiciones de infraestructura rural, ese es un tema clave, no es suficiente con las carreteras que unen las ciudades.

¿Debería haber una especie de intermediarios públicos, encargados de ir a buscar los productos y llevarlos a los mercados en las pequeñas ciudades por ejemplo, como servicio del Estado?

LA: Sí, el Estado tiene que apoyar en un sistema de comercialización de todo el proceso alimentario, eso antes teníamos aquí, se llamaba Emprovit, ¿sí se acuerdan? Antes el Estado tenía tiendas, un sistema de comercialización de alimentos, eso fue des-

mantelado totalmente. En la Costa, el Estado tenía silos hace 15 años, todos fueron desmantelados y muchos fueron privatizados. Entonces lo que se necesita es la promoción de silos estatales porque la explotación en el campo se ha generado con un proceso de sobreproducción, pero como los campesinos no tienen la infraestructura para almacenar, entonces quiénes terminan siendo los responsables del almacenamiento son las grandes empresas que están ahí, y luego, estas mismas empresas son las que terminan comercializando los productos de los campesinos.

De hecho tiene que haber una política del Estado de subsidio y promoción de esta agricultura en el proceso de transición, porque si no, de verdad que resulta complejo cambiar la lógica y yo diría que a medida que se van generando las condiciones de producción de abonos orgánicos, —que como digo son viables e incluso en términos económicos hay una diferencia enorme—, a medida que avanza una política de recuperación de abonos orgánicos, progresivamente, debería ir en decremento la política de fomento a la agricultura con químicos. Ahora tiene que haber un proceso de transición, necesariamente.

Ahora, no solo hay que trabajar en cambiar el modelo productivo, también hay un modelo de consumo que sustenta ese modelo de producción.

JC: Yo empezaría por lo primero, por readecuar todo el tema educativo en el campo, es que es por ahí; no es tanto un tema tecnológico ni nada, tampoco un tema de crédito, capital, aunque sí de financiamiento, por supuesto que habrá que tomar algunas medidas en el tema, pero hay que empezar por lo educativo. Empezar a trabajar alrededor de los núcleos, en las comunidades, en la escuela, con la gente, con los padres de familia, crear profesores, educar gente para que sean profesores de ahí mismo para autoeducarnos todos en el campo.

Yo creo que de la misma gente del campo van a ir saliendo las respuestas, no las traes de afuera, sino que las encuentras con

la gente, hay que saber encontrarlas, hay que saber plantear las preguntas, y luego encontrar esas respuestas, y generar, desde la educación, desde los niños y los jóvenes, las respuestas para la vida campesina. Las políticas públicas deben responder a esas respuestas para satisfacer principalmente la educación, la salud, la infraestructura que verdaderamente necesita la gente del campo, para producir, para vivir, para recrearse y reproducirse. No se pueden postergar más y más esas cosas primordiales.

Y luego, políticas secundarias que resuelvan el tema de financiamiento. La Reforma Agraria no es tierra, no, la Reforma Agraria debe ser integral, porque de nada sirve entregar tierra para tener un esclavo más con minifundio. Si se entrega tierra en los contextos actuales, se está fomentando un nuevo espacio para que las industrias hagan más negocios de agroexportación o de cualquiera de las industrias. Estas industrias tiene el poder para tomar la tierra, yo creo que la Reforma Agraria no puede ser solamente tierra, tiene que ser básicamente educación, tiene que ser salud en el campo, pero desde abajo, desde la respuesta misma de la gente, la Reforma Agraria tiene que ser independencia tecnológica. Tenemos que sacar el conocimiento de las esferas académicas y de la industria y socializarlo, devolverlo al campo. La gente tiene en sus manos el poder de la tierra, si le agregas el poder del conocimiento, le das un biopoder que puede ser altamente transformador.

**EL ESCENARIO NACIONAL:
ECUADOR**

Salir del extractivismo: una condición para el *Sumak Kawsay* Propuestas sobre petróleo, minería y energía en el Ecuador

Alberto Acosta,¹ Esperanza Martínez,² William Sacher³

*Aportaron con sus comentarios al siguiente texto,
Pablo Ospina, Eduardo Gudynas y Miriam Lang.*

Abandonar las prácticas extractivistas no es posible sin una ruptura con los procesos de acumulación, los cuales dependen en gran medida del control de la información, de la tecnología y de los mercados. Este abandono, sin embargo no se hará sin el rechazo a los principales mitos e imaginarios que legitiman el extractivismo, tal como las nociones de bienestar vinculadas al crecimiento y desarrollo. Implica apuntar a nuevos modelos de producción y consumo basados en la equidad y la justicia. La disputa de estos imaginarios pasa por procesos de educación y reflexión sobre las necesidades y las formas de satisfacerlas, sobre

-
- 1 Economista ecuatoriano; profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador; exministro de Energía y Minas; expresidente de la Asamblea Constituyente. Autor de numerosas publicaciones.
 - 2 Esperanza Martínez, bióloga y miembro de Acción Ecológica. Coordinadora de la campaña “Amazonía por la vida / El Yasuní depende de ti”.
 - 3 PhD en Ciencias atmosféricas y oceánicas de la Universidad McGill, Canadá. Obtuvo su Maestría en Geofísica en la Universidad Joseph Fourier, Francia. Es ingeniero en Hidráulica e Hidrología del INPG, Francia. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en Economía del Desarrollo de FLACSO-Ecuador. Es coautor de numerosos libros sobre el extractivismo minero: *Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique* Ecosociété, Montreal, Canadá, 2008; *Imperial Canada Inc. Legal Haven Of Choice for the World's Mining Industries* Talonbooks, Vancouver, Canadá, 2008; *Le Paradis Sous Terre (El paraíso bajo la tierra)*, Rue de L'Échiquier, París, 2012; y, *La minería a gran escala en el Ecuador*, Abya-Yala, Quito, 2012. Es autor de numerosos artículos en revistas académicas, periódicos de prensa internacional y nacional.

los derechos de las personas y colectividades así como los derechos de la Naturaleza (siendo estos reconocidos por la constitución ecuatoriana), y sobre la diversidad de oportunidades, prácticas y tecnologías que desarrollen fuerzas productivas no destructivas.

Emprender desde ahora un proceso de salida del extractivismo implica escoger entre los caminos posibles hacia una meta consensuada. Una propuesta de camino de salida para el Ecuador es el propósito del presente texto.

Este ejercicio nos impone contestar a tres preguntas centrales: ¿a dónde queremos llegar?, ¿dónde estamos?, y, tal vez lo más difícil, ¿cuál es el camino? Aunque esta forma de plantear el problema es necesariamente reductora –se hace camino al andar como dice el poeta– nos permite darle una estructura básica a nuestra propuesta. Si bien nuestros elementos de respuestas a estas preguntas son transversales y se encuentran a lo largo de todo el documento, empezaremos por plantear los elementos teóricos principales del horizonte que nos proponemos alcanzar. Este horizonte, es el Sumak Kawsay, cuyos principios están muy brevemente expuestos en la primera sección.

La segunda sección detalla rasgos –relevantes para el tema a nuestro juicio– de la situación económica y política del país, el creciente protagonismo del Estado en la promoción del extractivismo, y su inserción en el *sistema-mundo* actual, el cual se encuentra en plena recomposición con la emergencia de nuevas hegemonías.

En la tercera sección, proponemos un conjunto de estrategias y medidas concretas de transición hacia una sociedad y economía postextractivista y el Sumak Kawsay. Por transiciones, entendemos un conjunto de medidas y acciones que nos parecen adecuadas para desde ya encaminar una salida del desarrollismo actual hacia el Sumak Kawsay.

Para un país como el Ecuador, donde el petróleo representa el 17% del PIB y el 55% de las exportaciones, y en el cual se avizora

una nueva era extractivista con la apertura inminente de mega-proyectos mineros, el análisis de los sectores petrolero y minero aparece prioritario. Por ello hemos privilegiado aquí estos sectores, además del energético.

Sin embargo, el extractivismo no se limita a estas actividades y esperamos que las propuestas desarrolladas se apliquen a otros sectores como la madera y la pesca. En particular, el sector agrícola no es objeto de análisis en el presente documento. Estamos conscientes, sin embargo, del papel clave que este último está llamado a jugar en la transición hacia y en el modelo postextractivista. La producción agrícola, soberana y localmente gestionada es un eje clave en la promoción de dicho modelo (ver entrevista con José Cueva y Luis Andrango en este libro).

¿A dónde queremos llegar?

*El Sumak Kawsay como alternativa al desarrollo, meta y ruta hacia el postextractivismo*⁴

Partimos de la necesidad de rechazar la categoría de “desarrollo” al buscar, más bien, *alternativas al desarrollo*. El contexto latinoamericano actual es particularmente propicio para la construcción de tal paradigma alternativo. En efecto, a partir de una renovada crítica al desarrollo, nuestra región se encuentra actualmente en un proceso de rencuentro con sus orígenes.

Se ha mantenido y recuperado una tradición histórica de críticas y cuestionamientos a la modernidad occidental, al desarrollo y al crecimiento como metas que fueron elaboradas y presentadas hace mucho tiempo desde esta región, pero que quedaron rezagadas. Estas críticas han desatado una serie de reflexiones que invitan a crear nuevos discursos y representaciones por fuera de aquellos

4 Agradecemos a Michelle Báez por su aporte en esta sección.

construidos alrededor del desarrollo, y que proponen distanciarse de conceptos ambiguos como el “desarrollo sostenible”.

Por sus altas potencialidades frente a la necesidad de definir el postextractivismo, proponemos aquí definir al Sumak Kawsay como el horizonte al cual queremos apuntar. El Sumak Kawsay no es una teoría acabada, y se puede concebir como un nuevo escenario de discusiones sobre economía, política, justicia, cultura, etc. Queda claro que la idea no es intentar reproducir tal cual las prácticas de los pueblos ancestrales, pues en muchos casos (e.g. los grandes centros urbanos), es muy difícil. Se trata más bien de inspirarse de los grandes principios del Sumak Kawsay para establecer un nuevo paradigma adaptado a la realidad social, económica y política del país.⁵

El Sumak Kawsay es una crítica al capitalismo y todas sus formas de acumulación, a los procesos de despojo, al crecimiento económico y a la reducción de la Naturaleza a “recurso” o “capital”. El Sumak Kawsay concibe al ser humano como una de las partes integrantes del cosmos y se afirma sobre la idea de la armonía con la Naturaleza, a diferencia del pensamiento occidental antropocéntrico y eurocéntrico. Esta crítica es sumamente compatible con la perspectiva de una sociedad libre de extractivismo. La fuerza de esta compatibilidad nos lleva a adoptar el Sumak Kawsay como meta a alcanzar.

Según la propuesta actualmente promovida por los pueblos indígenas, la comunidad representa una potente fuente de inspiración para construir una economía y una sociedad postextractivista. La comunidad basada en relaciones de equidad, solidaridad y complementariedad supone una gestión desde lo local y

5 Los pueblos y nacionalidades distinguen su propuesta del Sumak Kawsay del discurso del Buen Vivir incorporado en las políticas gubernamentales ya que este último no supera el paradigma del desarrollo, ni el antropocentrismo occidental (Macas, 2011).

por lo tanto, una descentralización de los poderes de decisión. Es, además, una forma de concebir las relaciones sociales radicalmente opuesta al individualismo occidental. El Sumak Kawsay lleva entonces al establecimiento de nuevos modos de producción, basados en la equidad, la colaboración y el respeto, y el abandono de lógicas mercantiles.

Estas relaciones sociales deben basarse en la práctica de la interculturalidad que implica el reconocimiento mutuo de los diferentes pueblos y naciones y el diálogo entre ellos. Una condición indispensable para el cumplimiento de esta interculturalidad es la construcción de un Estado plurinacional, es decir reconocer que no hay una única nación ni nacionalidad.

Ya existen varias propuestas de transición hacia el postextractivismo, como por ejemplo la propuesta del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 del gobierno ecuatoriano, del cual nos distanciamos aquí, o del llamado a una racionalidad ambiental de Enrique Leff, quien plantea que “desconstruir la economía insustentable significa cuestionar el pensamiento, la ciencia, la tecnología y las instituciones que han instaurado la jaula de racionalidad de la modernidad” (Leff, 2008). Cabe destacar al respecto el trabajo de Eduardo Gudynas, quien en *Más allá del desarrollo* (Gudynas, 2011b), ha expuesto un proyecto de transición que se asemeja al nuestro. Gudynas enfoca sus objetivos en dos dimensiones principales: la erradicación de la “pobreza”⁶ e impedir nuevas pérdidas de biodiversidad. Si bien coincidimos en la validez de estos objetivos generales, pensamos que la búsqueda del Sumak

6 Colocamos entre comillas el término de pobreza porque nos parece discutible el concepto en su apreciación hegemónica y corriente, ya que se refiere de forma reduccionista y positivista a ingresos monetarios o la tenencia de servicios básicos; por ejemplo, pero no contempla el vivir en un ambiente sano y biodiverso, el contar en forma autodeterminada con medios de producción, no contempla el estar inserto en una comunidad armoniosa, y otros aspectos que podrían determinar la riqueza en un discurso crítico.

Kawsay no se puede centrar en ellas. Es preciso ir mucho más allá al proponer una transformación radical del Estado liberal, de la relación ser humano-Naturaleza y la búsqueda de relaciones sociales que implican la reciprocidad, la complementariedad, la solidaridad basándose en la figura de la comunidad.

¿Dónde estamos?

Rasgos dominantes del extractivismo

Para empezar, recordemos brevemente un conjunto de características de las actividades extractivas en términos físicos, económicos, ambientales y sociales que son relevantes en el marco de nuestro estudio:

- Los nuevos yacimientos se encuentran en general en zonas de difícil acceso, y por lo tanto requieren de mega-infraestructuras (carreteras, aeropuertos, etc.); exigen alto abastecimiento energético (lo que implica megainfraestructuras de producción de energía) y grandes cantidades de agua;
- Generan rentas significativas; demandan altas inversiones (son capital-intensivas) y generadoras de un empleo escaso (e.g alrededor del 1% del empleo en el caso del petróleo en Ecuador, 1% en el caso de la minería en el Perú, por gran parte especializado, el resto siendo peligroso y sobreexplotado);
- La extracción está mayoritariamente a cargo de grandes empresas transnacionales, lo que implica la salida masiva de utilidades al extranjero. Representa un alto porcentaje de las exportaciones (e.g más del 60% en el caso del petróleo en Ecuador (Ospina, 2012), o de los minerales en Perú (De Echave, 2011));
- Los productos de transformación desde las materias primas a productos de consumo son mayoritariamente controlados por tecnologías, capitales e industrias transnacionales; para los países del Sur, consisten en exportar materia prima bruta no procesada;

- El precio de los recursos en el mercado internacional es altamente volátil, lo que genera una alta vulnerabilidad fiscal (e.g el aporte tributario del sector minero en Perú bajó de 24,7% al 10,7% entre 2007-2009, a raíz de la crisis económica (De Echave, 2011);
- La mayor parte de la producción es para la exportación, existiendo en esto una estrecha relación con la deuda externa;
- El país tiene una elevada dependencia de tecnología propia y no tiene la capacidad de determinar siquiera su potencial;
- El desarrollo de las actividades extractivas imposibilita la diversificación económica y lleva potencialmente a problemas de enfermedad holandesa;
- Provocan destrucciones considerables sociales y ambientales, a menudo irreversibles;
- Pueden llevar a la destrucción cultural e incluso la desaparición de comunidades o pueblos indígenas.

De las experiencias conocidas del extractivismo petrolero o minero, podemos concluir que no hay ni una explotación petrolera, ni una minería que sean “bien hechas”, para usar el eslogan del actual Ministerio de Recursos Naturales No Renovables del Ecuador.⁷

Estas características tienen implicaciones muy importantes en la evolución del marco institucional del sector. Condicionan las relaciones contractuales entre gobiernos, compañías y consumidores, y las relaciones entre las empresas, territorio, poblaciones locales y Estado. Numerosas análisis sobre temas de costos, contratos, marco institucional, evidencian la pérdida de soberanía sistemática ya sea en la forma de los contratos, o en las renunciaciones en materia de derechos, en fin la subordinación de los gobiernos al poder de las empresas transnacionales.

7 Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 2011.

El Estado como promotor del extractivismo

En los últimos años, varios gobiernos de la región autoproclamados progresistas (Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, y recientemente el Perú) empezaron a alterar las reglas de juego neoliberales impuestas desde los años 80 del siglo pasado. Algunos países han logrado un regreso importante del intervencionismo estatal al obtener un mayor protagonismo en la regulación de las actividades extractivas, y mayores ingresos de las estas actividades, particularmente en la minería y la extracción petrolera. Esta mayor participación del Estado en la renta permite financiar masivos programas sociales y puede considerarse como un avance respecto a la situación vivida en la época neoliberal, cuando la renta se destinaba mayoritariamente al pago de la deuda externa y al enriquecimiento personal de las élites. Cabe señalar que esta mayor participación estatal es facilitada –y probablemente mejor tolerada por parte del capital– por los altos precios del petróleo y de los minerales. La minería, por ejemplo es en este momento la actividad industrial que genera los mayores rendimientos (De Echave, 2011).

A este extractivismo, ciertos autores le denominan “neextractivismo”,⁸ para distinguirlo del extractivismo de la época neoliberal en el cual se promovió el Estado mínimo. Cabe señalar que esta categoría es objeto de debate. Existen autores que identifican al extractivismo actual como una continuación del extractivismo neoliberal (e incluso de las épocas precedentes) por lo que rechazan la distinción entre el extractivismo actual y el pasado.⁹ Sin embargo, si bien la caracterización del extractivismo actual es un objeto de debate, es imposible ocultar el mantenimiento de las herencias de raigambre colonial.

8 Eduardo Gudynas (2011a), De Echave (2011), Nadal (2012).

9 Raúl Zibechi (2011) ve en el extractivismo de estos gobiernos progresistas una segunda fase del neoliberalismo.

Que haya evolucionado o no, el extractivismo goza de buena salud. En los hechos, se continúa apostando a las prácticas y la economía primaria-exportadora de las épocas anteriores. En otro ámbito, ni siquiera existe la perspectiva de que las empresas contraigan la obligación de refinar el mineral en el país para romper con el estatus de país productor de materias primas baratas. En palabras del economista mexicano Alejandro Nadal: “a pesar de una retórica nacionalista, el neoextractivismo no ha alterado la forma de la inserción en la economía global” (Nadal, 2012).

Es así que en los países de la nueva izquierda, “se vive la extraña paradoja por la cual la izquierda actual de gobiernos progresistas, concibiéndose como agentes de cambio, ahora se congela, rechaza pensar en transformaciones, se atemoriza con las alternativas, y por lo tanto erige defensas conservadoras” (Gudynas, 2011b: 270).

Al mantenerse inalterada la lógica de acumulación dominante, los grupos más acomodados de la sociedad, particularmente vinculados directa o indirectamente a los intereses de las empresas extractivas, no dejan de obtener cuantiosas utilidades. Apenas han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”. Mientras tanto, si bien los segmentos tradicionalmente marginados de la población aprovechan mejor los crecientes ingresos generados por las actividades extractivas, no se da paso a una real redistribución de los activos. Los derechos colectivos de varias comunidades indígenas y campesinas son atropellados para ampliar las fronteras petrolera y minera.

Es más, a raíz de esta redistribución fingida, el extractivismo asegura nuevas fuentes de legitimación social, pues los gobiernos le presentan como indispensable para combatir la “pobreza”. No se toma en cuenta la agravación de la devastación social y ambiental más marcada que nunca, por la tendencia al gigantismo de los emprendimientos industriales. Todo ello a pesar de

que en el Ecuador la Naturaleza es sujeto de derechos según la Constitución de 2008, y que el mismo gobierno plantea el Buen Vivir como una alternativa al desarrollo convencional en su Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.

Con el llamado neoextractivismo, los gobiernos “progresistas” pretenden superar el Estado mínimo del neoliberalismo al reconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado. Empero, siendo posiblemente mayor el control por parte del Estado de estas actividades extractivistas, el control real de las exportaciones nacionales continúa en manos de los países centrales o los países emergentes y sus empresas transnacionales, ya sean corporaciones privadas o empresas estatales.

El punto neurálgico de la actual discusión, sin que se mini-mice para nada lo anteriormente expuesto, radica en un ámbito no suficientemente abordado en esos años. El centro de la atención recae primero en el agotamiento de los “recursos” y en la devastación social y ambiental que está provocando su explotación. Las políticas extractivistas de los actuales gobiernos de América Latina muestran que estos asuntos no se resuelven con el control nacional de dichos recursos. En resumen, a pesar de sus reivindicaciones de corte nacionalista, los llamados gobiernos progresistas mantienen y reproducen los elementos clave del extractivismo clásico de raíces coloniales, sosteniendo una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización del capitalismo transnacional.

Es más, en el caso del Ecuador, el involucramiento del Estado nacional en el ámbito discursivo (el desarrollo de una *narrativa extractivista* (Antonelli y Svampa, 2009)) demuestra que el extractivismo se ha convertido en política de Estado. Como en el caso de Argentina, analizado por las académicas Mirta Antonelli y Maristella Svampa, “el Estado asume una narrativa desarrollista, en consonancia con las grandes empresas transnacionales, en busca de la legitimación social del modelo y en nombre de

una ‘responsabilidad social’, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de tales emprendimientos” (Antonelli y Svampa, 2009:17). Esta narrativa desarrollista se puede identificar en el discurso del presidente Rafael Correa, quien ha presentado en numerosas ocasiones la megaminería como indispensable para que el Ecuador salga de la pobreza, particularmente a través del mantra “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”, a través de la promoción de un modelo de minería “limpia” y “responsable”, pero también aislando a las críticas a este proyecto (tildando a los opositores de infantiles, fundamentalistas, extremistas o charlatanes) (Ospina, 2009, Enlace ciudadano 249).

Hacia nuevos monopolios en la extracción petrolera y minera del siglo XXI

El caso del petróleo

En cuatro décadas, a pesar de altibajos destacables, el petróleo ha llegado a ser el principal sector de actividad de la economía ecuatoriana, en términos de ingresos (34,6% del presupuesto general del Estado en 2011) y de producción (17,8% del PIB en 2011), con una extracción diaria media estabilizada de alrededor de 500 000 barriles y el 55% de las exportaciones (Ospina, 2012). Si bien la tasa de renovación de la reserva del país apunta a un agotamiento de los recursos en un horizonte de unas tres a cuatro décadas, las reservas actuales en el subsuelo ecuatoriano fluctuarían entre 3,5 y 4 mil millones de barriles.

A escala mundial, el agotamiento de los crudos “baratos” ha desatado una carrera por el control de esta materia prima, principal mercancía del mercado mundial y factor esencial para la expansión y globalización del capitalismo, en donde viejas y nuevas hegemonías compiten por su acceso. América Latina está en el escenario de acceso a las materias primas que necesita la China

para su crecimiento económico, quien disputa el control de estas riquezas en condiciones ventajosas. El dominio de las empresas de este país en el sector petrolero ecuatoriano es evidente. La China invierte mucho en campos petroleros, operaciones portuarias y oleoductos.

Hay un virtual monopolio de las empresas chinas en materia petrolera, con las negociaciones con la canadiense Ivanhoe, con la italiana Agip, la compra de Amodaimi Oil Company, filial de la española Repsol, y el derecho a más de la mitad de la producción de las empresas estatales ecuatorianas Petroecuador y Petroamazonas por la venta anticipada de crudo.¹⁰

En el ámbito de la exploración, la BGP, subsidiaria de la empresa estatal china (China National Petroleum Corporation) (CNPC) es una de las empresas con mayor número de contratos en el país. En diciembre de 2008, la empresa Petroproducción, filial de Petroecuador, firmó un contrato de 6'896 mil dólares con una subsidiaria local de la empresa China Sinopec para realizar trabajos de exploración en la Costa ecuatoriana (Almeida, 2010).

La megaminería del siglo XXI o la tendencia al gigantismo

El sector minero transnacional se encuentra actualmente frente a una paradoja. Por una parte se están agotando los yacimientos de alta concentración, es decir las vetas ricas que se han venido explotando a lo largo del siglo XX. Por otra parte, la demanda en

10 China dio un primer préstamo de US \$ 1 000 millones a cambio de 69.12 millones de barriles. La tasa de interés era de 7,25%. En 2010 se comprometió la entrega de US \$ 36 000 barriles diarios de crudo. China exigía que el dinero se destinara a obras de infraestructura y energía. El gran proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair se efectúa con empresas chinas. En 2011, Petroecuador entrega 96 000 barriles diarios a la China contra un crédito cuya tasa de interés es de 7,08%. Este contenido ha sido publicado originalmente en *El Comercio*, <http://www.elcomercio.com/editorial/china-deuda-condiciones_0_754724692.html>.

todos tipos de minerales se incrementa de manera exponencial, a raíz, principalmente, del crecimiento de la China. A lo largo de las dos últimas décadas, muy particularmente en el Sur global, el sector minero ha extendido considerablemente su frontera extractiva para responder adecuadamente a esta nueva sed de minerales. Esta extensión fue favorecida por los marcos legales permisivos elaborados bajo gobiernos neoliberales.

En el Ecuador, a pesar de la voluntad afirmada por el gobierno de romper con estas políticas, cerca del 4,5% del territorio nacional queda concesionado (Sacher y Acosta, 2012), y actualmente existe en el país un conjunto de aproximadamente 20 proyectos mineros a gran escala, principalmente metálicos, los cuales están en manos de empresas mineras transnacionales, principalmente de origen chino y canadiense (Sacher y Acosta, 2012).

Las técnicas de extracción proyectadas siguen la tendencia actual: recurrir a la megaminería, sumamente voraz en energía y agua, y generadora de pasivos económicos, ambientales, sociales y culturales cuya escala corresponde a la magnitud de este mismo modelo extractivo y no es para nada comparable a la extracción minera tradicionalmente realizada en el Ecuador. Esta megaminería es la segunda respuesta del sector minero a la paradoja previamente citada. Las experiencias de las empresas transnacionales originarias de Canadá y China muestran que son actores capaces de evadir ilimitadamente sus responsabilidades frente a los múltiples impactos nocivos que provocan, y se enfrentan con un récord de conflictos ambientales, económicos, sociales y laborales (adentro tanto como afuera de sus fronteras) (Deneault *et al.*, 2008; Sacher y Acosta, 2012).

Con la firma del contrato para el proyecto Mirador, el 5 de marzo de 2012, se abrió oficialmente una nueva etapa extractivista en el país, dentro de la que la minería está destinada a reemplazar al petróleo como fuente principal de ingresos. Este nuevo paso se da en el marco de un contexto legal y político, favorable a

las mineras transnacionales, que se ha venido elaborando y estableciendo desde la promulgación de la nueva Constitución, y en un período de auge minero que sigue hasta la fecha.

Cabe señalar que la ley de minería y sus reglamentos son contradictorios a la Constitución en muchos aspectos (Sacher y Acosta, 2012; Latorre, 2010), y conserva muchos rasgos del marco neoliberal anterior. Por ejemplo, solo prevé consultar a los pueblos afectados, en vez de una verdadera obtención del consentimiento previo, libre e informado. También usa de la figura de la servidumbre, la cual permite virtualmente el acceso libre al subsuelo para los emprendedores mineros, cualquier sea la afectación del territorio en superficie.

Además, nunca se cumplió a cabalidad el mandato minero (expedido en el marco de la Asamblea Constitucional), el cual reclamaba una serie de garantías para proteger las fuentes de agua y evitar la especulación alrededor de las concesiones.

Finalmente, el gobierno ha respondido a la presión de empresas transnacionales en reformar los puntos del marco legal que no convenía a sus intereses. Fue el caso de la modificación de la ley de minería acerca de la recaudación de impuestos a las ganancias extraordinarias. “Es razonable lo que nos ha pedido Kinross, y preparamos una reforma legal para que cualquier utilidad extraordinaria vaya a amortizar la inversión”.¹¹

Las incoherencias de la iniciativa Yasuní

No se puede hablar de postextractivismo en el Ecuador sin mencionar la iniciativa Yasuní-ITT. Esta constituye probablemente una de las más destacables propuestas prácticas de alternativa a la explotación de petróleo en todo el planeta. Recordamos aquí su

11 “Cambios en normativa minera para acuerdo entre Kinross y el Estado”, *El Comercio*, viernes 20 de julio de 2012.

carácter pionero, la necesidad de profundizarla, pero también las incoherencias de su aplicación dentro de la política.

La región del Yasuní, ubicado en la parte amazónica del Ecuador, alberga a unos 850 millones de barriles de crudo, es decir el 20% de las reservas petroleras identificadas del país.¹² Está regido por un conjunto de figuras legales de conservación de alcance nacional e internacional: es reserva de la biosfera en el sistema Unesco, mientras que en el país se beneficia del régimen de protección más fuerte al ser área intangible en el sector sur y en el extremo norte del territorio. Es parque nacional y además es territorio indígena debidamente legalizado. Yasuní es una zona en donde se vive la interculturalidad, pues conviven en este territorio poblaciones waorani, kichwa y colonos provenientes de diferentes regiones del país, así como pueblos en aislamiento voluntario.

La Iniciativa Yasuní-ITT (siglas de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini), demandada por la sociedad civil y hecha realidad por el gobierno de Rafael Correa, consiste en dejar las reservas de crudo identificadas bajo tierra a cambio de contribuciones financieras internacionales. El punto de partida radica en la tesis de la corresponsabilidad compartida, pero diferenciada, como un principio básico de la justicia ecológica global: unos países, los desarrollados, son mayormente responsables de la debacle ambiental, y por lo tanto deben contribuir mucho más para proteger la Naturaleza.

La Iniciativa Yasuní-ITT se basa en cuatro pilares:

- Conservar una biodiversidad inigualable en todo el planeta.
- Proteger el territorio y la vida de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los tagaeri, los taromenane y quizás también los oñamenane.

12 Carlos Larrea, *Yasuní ITT una iniciativa para cambiar la historia*. UNDP. GTZ Quito, s.f. (documento oficial de la iniciativa Yasuní ITT).

- Cuidar el clima para todo el mundo, evitando la emisión de 410 millones de toneladas de CO₂.
- Dar un primer paso hacia una transición postpetrolera.

Un quinto pilar podría consistir en asumir la posibilidad de encontrar colectivamente –como humanidad– respuestas concretas e institucionales a los problemas globales derivados de los cambios climáticos.

Por su parte, los réditos que produjera el fondo de capital levantado (supervisado por las Naciones Unidas) servirían a diversos proyectos definidos en el año 2010 por el gobierno:

- Transformación de la matriz energética desarrollando el potencial de fuentes alternas de energía disponibles en el país.
- Conservación de las áreas protegidas y reforestación.
- Desarrollo social sustentable particularmente en la misma Amazonía e inversiones en investigación tecnológica.

Esta Iniciativa plantea cambios profundos en el relacionamiento de todos los pueblos del mundo con la Naturaleza, al propiciar la construcción de una nueva institucionalidad jurídica global sustentada sobre el principio de la justicia ecológica global, y va mucho más allá de la clásica lógica de cooperación internacional pensada como “ayuda al desarrollo”.

La idea de esta Iniciativa no tiene gerente-propietario alguno; más bien fue construyéndose poco a poco desde la sociedad civil, siendo esto uno de sus valores fundamentales. La propuesta fue iniciada por las comunidades amazónicas en resistencia contra la explotación petrolera en su territorio y prosperó hasta constituirse en una demanda de varios sectores de la sociedad ecuatoriana, y en un reclamo jurídico de moratoria petrolera de trascendencia internacional. La idea se plasmó en un documento de posición de Oilwatch en junio de 2005 y entró con fuerza en la vida política al formar parte del Plan de Gobierno 2007-2011 del Movimiento País (luego Alianza País) elaborado en 2006. A inicios de 2007, la

Iniciativa ITT fue institucionalizada al ser oficialmente propuesta por el Ministro de Energía y Minas de aquella época.

El carácter revolucionario de la propuesta generó euforia en el Ecuador y en muchos países alrededor del mundo. A poco de su presentación en sociedad, las voces de aliento se multiplicaron rápidamente. Inmediatamente se registraron ofertas de apoyo en los parlamentos y los gobiernos de varios países, y desde otros sectores.¹³ En el ámbito doméstico, la propuesta ha recogido un amplio apoyo popular.¹⁴ Este eco positivo se expandió aceleradamente en tanto posibilidad cierta de enfrentar el calentamiento global. El presidente del Ecuador, al presentar como su “proyecto estrella” la posibilidad de proteger la Amazonía para evitar un mayor impacto en el ambiente global, cosechó aplausos en las Naciones Unidas, la OPEP, el Foro Social Mundial, entre otras muchas cumbres internacionales.

Sin embargo, la Iniciativa ITT revela, por otra parte, la complejidad y las contradicciones de la política gubernamental en estos primeros años de postneoliberalismo. Si bien provocó un cierto entusiasmo, generó a la vez estupor en ciertos cenáculos nacionales e internacionales. Además, germina en su seno una gran contradicción con el remozado extractivismo que se vive en

13 Cabría destacar el apoyo temprano recibido de Alemania. En su parlamento, representantes de todas las fracciones del *Bundestag*, en junio de 2008, se pronunciaron públicamente a favor de la Iniciativa ITT e instaron a su gobierno a apoyarle decididamente. Ese posicionamiento abrió muchas puertas. Sin embargo, la Iniciativa ITT padeció de la decisión ulterior (en septiembre de 2010) del ministro alemán de la cooperación Dirk Niebel de finalmente renunciar a este apoyo. Esta renuncia mermó las posibilidades de conseguir respaldos efectivos, pues muchos potenciales contribuyentes asumían como sólido el compromiso alemán.

14 De conformidad con una encuesta de Perfiles de Opinión, difundida en enero de 2012, la Iniciativa ITT es el evento más importante durante los cinco años de gobierno del presidente Correa. En el ámbito nacional, el interés por la conservación se ha expresado en diferentes consultas populares, y se encuentra en un 80% a favor de la no explotación del crudo.

la actualidad. Cabe señalar que desde el inicio de su existencia oficial, a comienzo de 2007,¹⁵ siempre han existido dudas respecto al proyecto. En una economía adicta al petróleo, no extraer el 20% de las reservas de crudo del país, aparece como una locura a tiempo completo. La propuesta de dejar el crudo en el subsuelo chocó con resistencias dentro del mismo gobierno.

El enfrentamiento se dirimió con la intervención del presidente Correa en el directorio de Petroecuador el 31 de marzo de 2007. Allí se determinó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo, es decir 3,5 mil millones de dólares a valor constante. Frente a la posibilidad de que esta Iniciativa fracase, quedó planteada la opción B que tiene como objetivo extraer el crudo, algo que estaba previsto desde mucho tiempo atrás.

En la medida que el proyecto comenzaba a proyectar claras señales de éxito, fue despertando más reacciones en su contra por parte de los intereses petroleros y sus intermediarios. Incoherentemente ha sido el propio presidente Correa quien le ha propinado los golpes más duros. Él con sus contradictorias declaraciones y decisiones sembró dudas, que debilitaron la credibilidad de la Iniciativa en el ámbito internacional. El presidente fue, sin lugar a dudas, el mayor promotor de la Iniciativa y a la vez su mayor amenaza.

En la actualidad, las promesas de contribuciones no representan ni el 1% de la cantidad fijada como objetivo: las promesas y depósitos efectuados desde 2010 son de 9¹⁶ millones de dólares. A pesar de todo, venciendo las amenazas existentes, alimentadas por

15 La Iniciativa ITT fue propuesta oficialmente por el ministro de Energía y Minas.

16 Sitio en Internet del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo <<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3EYCO>>

las incoherencias del gobierno ecuatoriano¹⁷ y la voracidad demostrada por los representantes de los intereses petroleros, la Iniciativa ITT demuestra algunos resultados satisfactorios aún antes de cristalizarse. El tema se ha posicionado en el debate nacional e internacional en sus múltiples aristas. Dentro del Ecuador hay quienes incluso reclaman con poderosos argumentos un plan C, que consistiría en dejar el crudo en el subsuelo aún sin que se consiga la contribución financiera internacional. Estudios realizados desde una perspectiva multicriterial (Vallejo *et al.*, 2011) ratifican las ventajas de esta Iniciativa, que no se reducen a las económicas.

Esta decisión colectiva de no explotar una cantidad de petróleo, que la humanidad consumiría en nueve u once días, permitirá procesar el indispensable reencuentro de los seres humanos con la Naturaleza. La idea es propiciar muchas iniciativas de este tipo en el mundo. De esta manera se abriría la puerta para caminar hacia una transición energética que permita superar la fase de los combustibles fósiles, cuyos límites biofísicos están a la vista, y se podrá dar paso a una efectiva descarbonización de la atmósfera con el fin de prevenir la vida de la Humanidad sobre la Tierra. Desde esa perspectiva, superando visiones estrechas y egoístas, se espera que muchas iniciativas de este tipo florezcan en el mundo: ¡la consigna es crear dos, tres, muchos Yasunís!

¿Cuál es el camino?

Escalas de intervención. Articular lo local, lo nacional y lo internacional
La primera y natural escala de intervención es el Estado. Este se encuentra en la conjunción de varias escalas, locales y regionales,

17 Es probable que el gobierno en un momento determinado, dependiendo de la coyuntura política, acelere el fracaso del proyecto bajo la excusa de que la nueva comisión negociadora conformada por el presidente finalmente no funcionó. También se podría endilgar el fracaso a los países desarrollados e incluso a los ecologistas, por no haber conseguido el financiamiento necesario...

y tiene que promover una articulación a estos diferentes niveles. Esta articulación tiene que darse en el marco de la plurinacionalidad, es decir, el respeto y reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades, a sus propias formas de organización política –autogobierno– y el derecho a decidir sobre las actividades que se realizan en su territorio –consentimiento previo, libre e informado–. Sin embargo, el Estado no es el único espacio estratégico de acción. Es más, planteamos que en una transición postextractivista, el Estado tiene que ser una herramienta al servicio de lo local. Los gobiernos locales pueden jugar papeles determinantes en la organización, administración, distribución, y participación de las diferentes medidas que se apliquen para una transición transformadora. Las políticas nacionales tanto de *hacer* como de *no hacer* son fundamentales pues establecen los rumbos y las condiciones para las posibles transformaciones.

En cuanto a lo estatal, la concentración de recursos financieros y humanos permite la construcción de entes de regulación fuertes de los sectores extractivos (e.g. el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables), al servicio de los pedidos de los pueblos y nacionalidades. Además este fortalecimiento de la capacidad de regulación de los sectores extractivos debe acompañarse de la creación o del refuerzo de otros entes del Estado, como una agencia independiente de monitoreo y de control ambiental, social y sanitario de las actividades extractivas.

Al igual, el Estado puede intervenir en la gestión territorial al implementar un control estricto de las autorizaciones de exploración y explotación de los yacimientos. Por ejemplo, el Estado debe ser un promotor de mecanismos de obtención del consentimiento previo, libre e informado para las eventuales nuevas explotaciones y para decidir si las explotaciones existentes tienen que ser desmanteladas.

Con el despliegue de la actividad extractiva industrial, el territorio se ha vuelto un espacio de conflictos políticos y económicos. Las actividades de exploración han implicado campañas extensivas

que abarcan a centenas de miles e incluso millones de hectáreas, mientras que los mismos emprendimientos industriales implican la ocupación destructiva de miles de hectáreas de territorio. Esta ocupación por empresas –a menudo transnacionales extranjeras– y el reordenamiento asociado a la actividad minera han implicado una desterritorialización y una fragmentación del mismo territorio.

Desde el Estado, se debe emprender una operación de reterritorialización, la cual consiste en establecer un nuevo sistema de planificación, en donde la figura de la propiedad comunal y colectiva debería ser legalmente legitimada, y el punto central de decisión. Por lo tanto un nuevo sistema de gestión del territorio deberá ser descentralizado y apuntar a la preservación o recuperación de las identidades y valores territoriales existentes.

En el ámbito regional, el Estado puede emprender negociaciones con naciones vecinas para promover la convergencia de los marcos de regulación de los sectores extractivos, tanto en lo económico, social como ambiental y rumbo a la salida del extractivismo. Como lo menciona Gudynas en este libro, es preciso romper con una integración desventajosa a los mercados globales, basada en la promoción del libre mercado. Sin embargo, es preciso limitar en los diferentes países el comercio hacia afuera de ciertos bienes que pueden favorecer el abastecimiento local de las necesidades. En cambio, cabrá incentivar las colaboraciones regionales en el ámbito de mecanismos de superación del extractivismo, a través de intercambios de conocimientos, experiencias, etc.

Fortalecer la transición “desde abajo”

Rescatamos aquí lo local como otro espacio estratégico clave, por la posibilidad que ofrece de construir procesos sólidos y anclados en la participación. La promoción de lo local necesita la descentralización de un conjunto de competencias: financiera, de provisión de servicios, de planificación territorial y de gestión de los bienes naturales.

Existe en la Constitución ecuatoriana una serie de propuestas sobre cómo avanzar en este camino, que se expresan como derechos. Entre otros, citamos al derecho a la participación en los diseños presupuestarios,¹⁸ determinando roles, obligaciones y derechos para el gobierno central, para los gobiernos locales, para las comunidades y los individuos. Al igual, al menos en un período de transición, es preciso rescatar elementos de las teorías del desarrollo local como el soporte en las potencialidades endógenas, por ejemplo en el sector urbano informal o bien en el mundo microempresarial, por ser un importante generador de empleo, renta y eslabonamiento productivo (Torres, 2007: 13), e incentivar la figura de la empresa cooperativa en el marco de una economía social y solidaria (*Ibid.*: 10-11).

La escala local es adaptada para el desarrollo de mercados inmersos en la esfera social, controlados y regulados por ella, implicando lógicas de solidaridad y reciprocidad en conformidad con los principios del Sumak Kawsay.

La escala local tiene que ser pensada como un foco de instrumentación del postextractivismo, llamado a difundirse hasta la dimensión nacional y con proyección internacional, de otra manera se quedará como esfuerzo marginal que no resuelve las relaciones de poder ni se puede proyectar en el tiempo. Esta convergencia/confluencia en el escenario nacional desde los diversos movimientos o “formas de transición” que parten de lo local, implica un proyecto político nacional-popular capaz de articularse a otros esfuerzos similares en otras regiones del mundo.

Propuestas de transición “desde abajo” hay en muchos lugares

La mayoría son respuestas organizativas lideradas desde la sociedad y centradas en comunidades que se esfuerzan por intentar encontrar soluciones prácticas en contextos locales, desarrollando

18 Art. 100.

sistemas de mercado y de producción alternativos. Estos incluyen sistemas de alimentación local, al igual que de transporte y manufactura. En muchos casos, estas propuestas y la revalorización de proyectos sustentables provienen de comunidades que han debido protegerse de proyectos extractivistas que las amenazan. En ese sentido, una fuente importantísima para rastrear proyectos sustentables son justamente los argumentos de las comunidades en resistencia. Las propuestas de transiciones inspiradoras surgen de movimientos sociales y tienen especial relevancia. En el Ecuador, vale mencionar como ejemplos la comunidad kichwa amazónica Sarayaku y su “Plan de Vida”¹⁹ o el de las comunidades de Íntag con una serie de propuestas alternativas de manejo y conservación territorial.²⁰

Otra fuente de propuestas importantes está en otros países que han debido enfrentar la limitación de energía y de otros recursos, debido a la histórica intrusión y explotación colonial, así como a distintos tipos de conflictos políticos y regímenes de sanciones. En estos lugares se desarrollaron estrategias eficaces para enfrentarse a unas carencias, por ejemplo es el caso de Cuba en varios aspectos.²¹

Enfocar las transiciones desde lo local permite alcanzar una alta diversificación de los procesos y posibilidades de conexión de las herramientas desarrolladas para transitar hacia el postextractivismo. Para resaltar la importancia de lo local en la solidez del proceso de transición, vale recordar el pensamiento del inglés Rob Hopkins, fundador del proyecto “Ciudades en transición”. Su concepto de “resiliencia”, es decir la capacidad que tiene un proceso de resistir a un choque exterior, implica

19 En <http://www.sarayaku.com/>

20 En <http://toisan-intag.org/> y <http://www.hidrointag.org/>

21 Destacamos el portal <http://www.cubasolar.cu/>, para la promoción de las fuentes renovables de energía, la eficiencia energética y el respeto ambiental.

tres características íntimamente vinculadas al desarrollo diverso de iniciativas locales: diversidad de componentes, modularidad (intensidad de los vínculos entre los diferentes componentes) y la rapidez de respuesta de un componente en particular al cambio de uno o otros componentes (Hopkins, 2008). El “choque” exterior al cual se refiere Hopkins puede tomar muchas formas en los ámbitos económicos, políticos, ambiental, etc.

La escala local no solamente se refiere a lo rural, pues también se concibe desde espacios urbanos. El Sumak Kawsay no puede circunscribirse al mundo rural, aunque reconocemos que sus principios básicos provienen especialmente de este espacio. Esta inclusión del urbano es imprescindible, dada la alta concentración urbana actual y la creciente aglutinación de amplios grupos humanos marginados y explotados en las ciudades, como consecuencia del éxodo rural. Cabe señalar que la precariedad de las condiciones de vida en los suburbios urbanos marginales implica patrones de consumo y de desarrollo poco respetuosos del ambiente. Por esta razón, uno de los grandes desafíos de la transición es incentivar prácticas desde y para las ciudades. La tarea pasa por repensar las ciudades, rediseñarles y reorganizarlas, al tiempo que se construyen otras relaciones con el mundo rural y se aprovecha los lazos que existen entre estos dos tipos de espacios (ver los artículos de Mario Rodríguez, Alexandra Martínez y Hernán Vargas, en este libro).

Camino hacia soberanías

La construcción de las transiciones requiere la reformulación de las estrategias políticas y culturales, para recuperar la capacidad de decidir de manera decisiva en condiciones históricas excepcionales. La construcción desde lo local no se hará sin alcanzar –en el ámbito nacional– la soberanía en varios aspectos: la económica, financiera y monetaria, energética, alimentaria, en salud, cultural, tecnológica, etc. Estas soberanías son imprescindibles para

determinar las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las localidades y del país en su conjunto.

La soberanía económica consiste en recuperar la decisión sobre los modelos económicos a aplicarse y el tipo de inserción a nivel local, nacional e internacional. En materia energética, la construcción de soberanía energética se puede entender como el acceso a, el control y decisión sobre las fuentes y usos de la energía. La propuesta es abastecer las nuevas necesidades en el marco del Sumak Kawsay con fuentes limpias, descentralizadas y de bajo impacto.

En materia alimentaria se requiere entregar el control sobre los factores productivos (tierra, agua, semilla campesina, energía, etc.) y los procesos de producción de alimentos a unidades de pequeña escala. De esta manera se garantiza el derecho humano a la provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados. Este proceso se complementa con la necesaria recuperación e hibridación de modos de producción y tecnologías alternativas, locales y ancestrales con prácticas modernas de impacto mínimo. La fertilidad de la tierra es central para la soberanía alimentaria que debe ser entendida como un ser vivo que necesita y provee. Es imprescindible también recuperar hábitos y patrones de consumo saludables, nutritivos (ver también la entrevista con José Cueva y Luis Andrango en este libro).

En cuanto a la soberanía en salud, el principio central es reconocer que la pérdida de salud depende de una serie de condicionantes sociales y ambientales que tienen que ver con la alimentación, la degradación del entorno, y con la presencia de actividades industriales que provocan enfermedades en zonas aledañas como son las actividades extractivas. Recuperar la soberanía en la salud implica además mantener y recuperar los conocimientos locales y tradicionales, lo cuales apuntan más a una convivencia en armonía con la Naturaleza.

Como ejercicio de recuperación de la soberanía cultural, se requiere enfrentar la multiculturalidad y las diferencias de los pueblos que viven en el país. La transición en este sentido requiere fomentar sinergias entre el conocimiento local y ancestral y el conocimiento tecno-científico, entre las culturas del pasado, del presente y del futuro, entre saber y tierra.²²

Soluciones y propuestas de transición

*Repensando el modelo energético*²³

A pesar de algunos ajustes introducidos en los últimos años, el sistema energético nacional presenta señales alarmantes. Los síntomas del deterioro son evidentes:

1. La falta de inversiones en el mantenimiento y renovación ha acelerado el proceso de obsolescencia de complejos tecnológicos que en la actualidad operan bajo niveles precarios de eficiencia.
2. Se mantienen inalterados hábitos de consumo energético dispendiosos en un sistema energético que funciona con un desperdicio enorme de recursos.
3. Los márgenes de maniobra ante contingencias técnicas y/o naturales son muy limitados. La falta de diversificación del abastecimiento y de la demanda y la concentración de los procesos de transformación de energía en pocas unidades y tecnologías restringen su capacidad de respuesta ante eventos no programados. El sistema energético se vuelve extremadamente vulnerable.

22 En sus arts. 385, 386 y 387, la Constitución señala que la producción de ciencia, de tecnología y de innovación como un todo debe tener como objetivo la realización del Sumak Kawsay.

23 Este texto se construye a partir del trabajo de Arturo Villavicencio y Alberto Acosta, (Coordinación técnica); Agenda energética 2007-2011 - Hacia un sistema energético sustentable, Ministerio de Energía y Minas, Quito, 2007.

4. A pesar de ser el Ecuador un país exportador neto de energía, su abastecimiento interno depende cada vez más de importaciones de derivados de petróleo y de electricidad, que afectan la balanza de pagos.
5. Las distorsiones en la estructura y nivel de precios ponen en juego la viabilidad misma del sistema energético. Los precios y tarifas de los energéticos no corresponden a la realidad de los costos y de la capacidad de producción, y en lugar de contribuir al financiamiento de la expansión del sector, socavan su capacidad de inversión. Por otro lado, el diferencial de precios con los países limítrofes es el origen de un drenaje de recursos cuya intensidad ha alcanzado niveles insostenibles.
6. Los efectos destructores sobre el tejido social de comunidades enteras y sobre el entorno natural provocado por las actividades hidrocarburíferas e hidroeléctricas son alarmantes y han afectado el bienestar y la vida misma de los ecosistemas.
7. El marco legal y normativo de soporte del sistema energético presenta serios vacíos y desajustes en relación con la estructura institucional. Las instituciones que norman, controlan y regulan el sector no han logrado adaptarse plenamente al funcionamiento y operación del resto de agentes y actores del sector energético.
8. Se deploran diversos procesos de acumulación, corrupción, privatización que han despojado al Estado de sus riquezas, y a las comunidades de sus territorios.

Un reto estructural

El reto principal para el abastecimiento de energía es hacer posible el establecimiento de esquemas locales, nacionales y regionales que se sustenten en una mayor participación de la sociedad, y que excluyan el patrón actual en el cual la producción de energía queda centralizada alentando prácticas autoritarias y represivas.

Requerimos apuntar a la autosuficiencia energética, la cual es la mejor garantía de soberanía energética. Al igual requerimos un proceso plural de transición que significará ir decreciendo sistemáticamente el aporte de los combustibles fósiles aprovechando, en el marco del Sumak Kawsay, de las reservas de energías renovables: hídrica, solar, geotermia, eólica, mareomotriz, fuentes por las cuales necesitaremos de un apoyo por parte de las autoridades públicas.

Al igual, se necesita implementar una vigorosa infraestructura, descentralizada y de pequeña escala, en la que las comunidades rurales y urbanas están convocadas a formar parte. La energía debe ser utilizada en el punto de generación para ahorrar la energía perdida a través del transporte de larga distancia de electricidad y las emisiones de carbono asociadas.

Todo intento por construir una alternativa energética a largo plazo obliga a una visión global de la estructura y de la dinámica de la sociedad, de la economía y de sus interdependencias con el sistema energético, por lo que el sector energético genera o fortalece encadenamientos con otros sectores productivos (ver también el artículo de Pablo Bertinat en este libro). Este proceso queda además íntimamente relacionado a una necesidad de transformar los patrones de consumo.

Una descentralización generalizada de la energía es una condición necesaria para democratizar los sistemas de acceso y distribución atravesados por una serie de deformaciones estructurales, subsidios inequitativos (como el que se registra con el gas de uso doméstico en Ecuador) y una falta generalizada de su conceptualización. De la misma manera, faltan muchos esfuerzos para fomentar el uso racional y eficiente de la energía. La legislación para promover el ahorro de energía y las emisiones de carbono se debe poner en su lugar y cumplir a través de la inspección de edificios, por ejemplo.

En resumen, el sistema energético postextractivista requiere una descentralización y regionalización de la generación, transporte y consumo de la energía, así como el creciente control comunitario del sistema energético. Este nuevo patrón es coherente con la necesidad de considerar la energía antes de todo como un derecho, y no simplemente como una mercancía. Se desprende la necesidad de desarrollar una visión diferente del abastecimiento de energía. Un punto importante es entender cuáles son las fuentes y alternativas para cada uno de los recursos energéticos disponibles. El Ecuador posee un alto potencial en energías renovables. La tarea pasa por definir este potencial con precisión y planes adecuados de aprovechamiento.

Los ejes de acción de una estrategia de transformación para las políticas energéticas

Cabe reconocer que los desafíos que enfrentamos para reorientar el sistema energético son enormes. En esta tarea, los principios que deben seguir una estrategia energética se articulan alrededor de seis ejes fundamentales:

1. Un sistema energético viable como horizonte;
2. Una nueva política de precios y tarifas de la energía;
3. El fortalecimiento institucional;
4. El uso eficiente de energía;
5. La integración energética a nivel regional; y,
6. La integración de las propuestas desde la sociedad.

El horizonte: hacia un sistema energético viable

La propuesta es abastecer las necesidades locales con fuentes limpias, descentralizadas y de bajo impacto. Esto plantea un primer reto: identificar las necesidades energéticas existentes en la zona e identificar como suplir estas necesidades a partir de fuentes y procesos no entrópicos.

La red eléctrica, por ejemplo, debe ser reestructurada para todos los niveles de la producción integrada local que permitiría

a las comunidades vecinas suministrar electricidad unas a otras en momentos de necesidad (a través de dispositivos de conmutación electrónica), lo que maximiza la estabilidad del suministro de electricidad en toda la red, al ofrecer la mejor protección contra apagones.

La energía no puede ser considerada solamente como un factor de producción más y fuente de recursos financieros, gracias a las exportaciones de petróleo y a los ingresos que produce la venta de derivados. La energía debe mirarse también como una posibilidad para crear a lo largo de la cadena energética nichos de innovación tecnológica, aprovechando de sinergias tecnocientíficas entre prácticas alternativas locales y ancestrales y prácticas modernas.

Política de precios y tarifas de la energía

La definición de una política nacional de precios de la energía como herramienta de política energética, económica y social es una tarea urgente. La ausencia de políticas y estrategias en este ámbito han conducido a una situación insostenible: los precios y tarifas están muy lejos de cubrir los costos de producción (en el caso de la electricidad, las tarifas han sido siempre inferiores a los costos de generación, acumulando un déficit de proporciones alarmantes). La oferta nacional no guarda ninguna relación con el perfil de la demanda, las importaciones de energía representan un elevado porcentaje del presupuesto nacional, la presión de las importaciones de derivados de petróleo y de electricidad gravitan sobre la balanza de pagos, la estructura de precios ha generado ineficiencias y desperdicio de la energía, y la indiscriminada política de subsidios ha beneficiado a los estratos económicos más favorecidos.

Sería utópico pensar que estas profundas distorsiones puedan ser solucionadas en el corto plazo. Un alza indiscriminada de precios y tarifas podría tener repercusiones muy graves sobre el apa-

rato productivo y el tejido social. La política de precios de la energía debe apuntar hacia una corrección gradual de la estructura y nivel de precios de la energía en conjunto. El caso del gas licuado de petróleo es ejemplar. Aunque en principio, el subsidio a este combustible está focalizado en los diversos usos domésticos, en la realidad son los usos industriales, suntuarios y de transporte los beneficiarios de alrededor del 25% del subsidio (Villavicencio y Acosta, 2007). Para el año 2007, se estimó que los subsidios a los productos derivados de petróleo alcanzarían la suma de 2.300 millones de dólares; es decir, alrededor del 20% del presupuesto del gobierno (*Ibid.*).

Los subsidios a los combustibles fósiles generan un aumento no solo del consumo, sino del crecimiento en general de los bienes que usan fósiles, carros, sistemas de calentamiento de agua. El tener combustibles subvencionados permite que se mantengan e incrementen los modos de vida que suponen grandes desplazamientos: trabajar lejos, estudiar lejos, consumir productos distantes.

En resumen, es indispensable la focalización de los subsidios hacia los estratos de la población menos favorecidos y la implementación de subsidios cruzados como mecanismo de redistribución del ingreso.

Hay necesidad de disminuir el costo de generación de electricidad mediante el aumento de la oferta de generación hidroeléctrica. Un programa de desarrollo hidroeléctrico descentralizado permitiría una reducción importante del costo por Kwh generado y por consiguiente, del déficit que actualmente enfrenta el sector eléctrico en donde hay una elevada generación de energía térmica (el 46%, según Castro, 2011).

Alternativas concretas 1

HidroIntag: modelo alternativo de generación hidroeléctrica

Íntag es una zona subtropical de la provincia de Imbabura en Ecuador que posee 44.000 hectáreas de bosque, 27 ríos y 13.696 habitantes.

HidroÍntag, Compañía de economía mixta, está conformada por seis juntas parroquiales de la zona rural de Íntag. Consiste en nueve pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas repartidas a lo largo de la cuenca del río Íntag, en las siete parroquias de la zona (cuatro entre [0-5Mw], cuatro entre [6-10Mw] y una mediana de 60Mw) con un potencial de energía media anual neta de 582,42 GWh.

El modelo prioriza la armonía entre la generación de energía y actividades turísticas y agrícolas ya existentes en una zona. El criterio de ubicación de las centrales aplicó estrictamente el principio de precaución en lo cultural y ambiental, evitando la intervención de todas aquellas zonas y usos de agua tradicionales. Propone una tecnología y metodologías de construcción que combinan el uso de maquinaria liviana y mano de obra de la zona, en puestos de trabajo de calificación media y superior. El sistema permite crear un total de 1 206 puestos de trabajo directos permanentes, tanto vinculados a la fase de construcción, operación y administración de las centrales hidroeléctricas, como al fortalecimiento de la economía local mediante el uso social de los beneficios obtenidos de la producción de energía.

El proyecto tiene un costo estimado de 175 291 151 dólares americanos. Esto corresponde al 0,01% del costo del megaproyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair impulsado por el gobierno ecuatoriano, con cuyo presupuesto se podrían financiar 10.000 proyectos de las dimensiones de HidroÍntag.

Contribución a la soberanía energética

El modelo es descentralizado, consiste en una red de pequeñas centrales, bajo un modelo de gestión democrático. Se sustenta en el manejo integral de las cuencas hídricas para preservar tanto la producción del agua para la generación hidroeléctrica, como los bosques, la biodiversidad, y fomenta la economía local:

- Incluye manejo y protección de una la cuenca hidrográfica.
- Aporta a la necesidad de aprovechar los recursos hídricos al oeste de los Andes en la época de estiaje (o menor caudal) en la vertiente del río Amazonas. Justamente ésta es la época con mayor hidraulicidad del río Íntag.
- Evita el riesgo de la falta de energía en momentos de daño o paralización que siempre existe con una gran represa.
- Permite disminuir las pérdidas de energía.
- Permite contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono en un volumen de 365.052 toneladas de CO₂ al año.

Contribución a la soberanía alimentaria

El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de 2.555 familias agricultoras de la zona de Íntag y en su área de influencia directa, para el mantenimiento de los niveles de producción agropecuaria necesarios para el suministro en alimentos de la zona.

Con los beneficios generados desde la venta de energía, se apunta al desarrollo de la economía local, en torno al fomento del tejido agrícola, pecuario y artesanal existente, complementarios a la soberanía alimentaria.

- Producción de café orgánico en sistemas agroforestales.
- Reforestación y forestación con una vocación de servicio ambiental y/o de producción maderera.
- Agroindustrias (lácteos, frutas, caña de azúcar, fibras, piscicultura, etc.).
- Turismo en sus distintas variantes: (familiar, aventura, grupos). El potencial de desarrollo regional abarca la zona de Íntag y su área de influencia directa (Noroccidente de Pichincha, otros cantones de Imbabura).

Fuente: <www.hidrointag.org/>

También falta impulsar procesos de substitución interenergéticas con el fin de disminuir los costos del insumo energía en la generación térmica de electricidad, en primera instancia, y luego en otros sectores de consumo. Como primera medida de transición, convendrá establecer un plan de reconversión temporal de

centrales térmicas en centrales de *fuel oil* y de gas natural. Esta medida permitiría evitar la exportación del *fuel oil* excedentario a precios baratos, y la generación –menos contaminante– de energía a partir del gas natural.

Fortalecimiento institucional

En la era neoliberal, las instituciones de gestión, control y manejo del sector energético experimentaron un proceso gradual de debilitamiento. Las unidades de planificación fueron reducidas a su mínima expresión, imposibilitándoles cumplir las tareas para las cuales fueron establecidas. Si bien algunas de las dificultades han sido revertidas en los últimos años, aún persisten algunos problemas heredados y creados desde la división del Ministerio de Energía.

La reunificación y el fortalecimiento institucional del Ministerio de Energía es una condición indispensable para que el Estado pueda retomar el control del sector energético y adoptar las decisiones sobre la evolución futura del sector. Una visión integradora y descentralizada de la problemática energética, de las alternativas posibles y sobre todo, de las interacciones entre los diferentes subsectores, son los ejes alrededor de los cuales necesariamente tiene que articularse la política energética del país. Para cubrir esta necesidad, el Ministerio requiere consolidar sus funciones en las áreas básicas siguientes:

- Información: generación y publicación periódica de estadísticas energéticas, consolidadas y por subsectores, que reflejen de manera objetiva los flujos de energía a lo largo de las cadenas energéticas, desde la etapa de producción de la energía hasta los usos finales. Esta actividad incluye la capacidad de monitoreo sobre el comportamiento y las tendencias de las diferentes actividades energéticas.
- Planificación y prospectiva: desarrollar la capacidad de análisis de estrategias de largo plazo, de proponer planes

y políticas de eficiencia y sustitución de energéticos, de coordinar las políticas subsectoriales, la capacidad de inversión de la economía y los requerimientos energéticos del aparato productivo y de la sociedad.

- Fortalecimiento de las unidades de control, dotándolas de recursos humanos y materiales y la autonomía necesaria para que puedan cumplir las funciones de fiscalización y control de las actividades energéticas, así como de las empresas energéticas estatales.
- Promoción de la descentralización de la producción energética a través de la diversificación de las modalidades de participación, y control social en la producción de la energía desde gobiernos locales, juntas comunitarias de producción y control de la energía.
- Iniciar un programa de desarrollo nacional de una industria de construcción de equipos de micro-centrales hidroeléctricas.
- Promoción del desarrollo de tecnologías para generación de electricidad, sustentadas en una sinergia tecnocientífica entre las prácticas locales alternativas y ancestrales y las modernas, usando la radiación solar, la energía eólica, la biomasa, etc., y construir las capacidades tecnológicas locales adecuadas para la producción y el aprovechamiento de esta energía.
- Favorecer la creación de entidades locales públicas, comunitarias y auto-suficientes de gestión de la energía.
- Incluir como parámetros en la aplicación del nuevo modelo energético, la minimización de impactos negativos a los ecosistemas, el bienestar de los pueblos directamente afectados por las actividades energéticas, y la preservación de las fuentes renovables de energía.
- Desarrollar propuestas de una canasta básica energética, en tanto derecho humano.

El uso eficiente de energía como nueva fuente energética

Es urgente dar paso a una estrategia específica de largo plazo para la transición que posibilite el aprovechamiento eficiente de la energía. Se requiere fomentar el conocimiento y la aplicación de tecnologías adecuadas para conseguir este cometido. El desarrollo y fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y manejo de estas tecnologías es una tarea primordial. La transformación no viene desde arriba, tiene que ser impulsada y sostenida desde abajo. Esto implica usar reforzadas instituciones estatales y de las autoridades políticas a diversas escalas para potenciar los siguientes ejes programáticos:

- Establecer, coordinar y promover políticas y normativas nacionales que fomenten la eficiencia energética y las fuentes renovables de energía.
- Preparar y coordinar los planes, programas y estrategias nacionales de eficiencia y energías renovables y realizar su seguimiento y evaluación continua.
- Constituirse en el punto focal de coordinación, promoción, apoyo, información y difusión de las energías renovables y eficiencia energética a escala local.
- Promover la investigación, el rescate, y desarrollo de las tecnologías asociadas con las fuentes nuevas y renovables de energía y la eficiencia energética, en sintonía con las tecnologías locales, alternativas y ancestrales.
- Coordinar y promover la cooperación internacional en el área de las energías renovables y eficiencia energética incluyendo acciones relacionadas con la energía y la mitigación del cambio de clima.

En lo concreto será necesario reducir las pérdidas de transmisión y distribución de electricidad, poner en marcha un programa de uso eficiente de energía que para empezar debe disminuir la demanda de electricidad en las horas de punta. Las pérdidas de energía podría reducirse si la “energía” se genera más cerca de

donde se la utiliza. Esto no solo permite reducir las pérdidas en la transmisión y el transporte, sino que también reduce la cantidad de energía necesaria para construir la infraestructura de las redes. El ahorro generado a raíz de la mayor eficiencia en el uso de energía permitirá también futuras correcciones de los precios.

Integración energética regional

En el art. 423 de la Constitución de Montecristi, se establece que la integración es un objetivo estratégico. La tarea pasa por hacer realidad la unidad y la integración latinoamericana a partir de la convergencia de sus políticas energéticas. No se trata solo de unir cables y tubos. Se busca la complementariedad y la solidaridad regional. Se precisa una integración diferente, autonómica, sustentada en bases económicas, sociales, políticas, ecológicas y culturales propias, a partir de las diversas realidades ambientales existentes en la región y particularmente en las zonas fronterizas. Para hacer realidad este regionalismo autónomo, sustentado cada vez más en el biocentrismo y cada vez menos en el antropocentrismo, hay que alentar la constitución de soberanías regionales —energética, alimentaria, financiera, monetaria, tecnológica, ambiental, etc.—, a partir de los ahora estrechos márgenes nacionales.

Uno de los mayores escollos de la integración ha sido su conceptualización como un ejercicio económico, mayormente de tipo mercantil. La integración no debe servir para relanzar una estrategia exportadora de inspiración transnacional o para conseguir un simple acercamiento a la economía norteamericana o europea en medio de un proceso de reordenamiento geopolítico complejo, cuyo resultado no está claro. De lo anterior se desprende un mandato imperativo: cerrar la puerta a cualquier forma de “tratado de libre comercio” (TLC) sea con los EEUU, con Europa o con cualquier otro país del planeta, tratados en esencia depredadores de la soberanía (ver también artículo de Eduardo Gudynas en este libro).

Propuestas desde la sociedad

Resaltamos la importancia de dar visibilidad a formas alternativas existentes de producción y manejo de energía. Un primer esfuerzo sería de inventariar las experiencias comunitarias de energías limpias. El cambio hacia fuentes limpias puede hacerse y de hecho en muchos lugares ha comenzado desde esfuerzos familiares y comunitarios. El ejemplo del desarrollo de la energía eólica en Dinamarca en los años 80 y 90 del siglo pasado lo ilustra perfectamente. En este país, la energía eólica despegó a raíz de cooperativas de turbinas eólicas en las que estaba limitada la participación a los moradores. El modelo de propiedad dio lugar a una alta aceptación de la energía eólica. Cabe desatacar que este modelo entró en crisis precisamente cuando el gobierno eliminó las restricciones, dándose paso a la construcción de turbinas cada vez más grandes, que se destinaban ya no a las necesidades locales, sino a fines industriales (Maegaard, 2010).

Al igual, formas artesanales de producción o aprovechamiento de energías limpias valen ser exploradas. En este ámbito, existen prácticas que no requieren las costosas inversiones y tecnología de los proyectos de mayor escala. Estas incluyen los sistemas de calentamiento de agua, de producción de biodiesel a partir de aceites de cocina usados y otros desechos alimenticios, industriales y diesel a partir de los residuos plásticos que no pueden ser fácilmente reciclados. Otro ejemplo incluye el desarrollo de combustible a partir de gas natural.

Las universidades y escuelas politécnicas podrían tener un papel fundamental en dar visibilidad, formalizar y contribuir a desarrollar estas tecnologías de “segunda generación”. Es necesario incentivar la investigación académica alrededor de estas formas alternativas de producción de energía. Su rol en la promoción de experiencias pilotos –e.g las granjas “cero emisiones”–²⁴

24 Mae-Wan Ho, Institute of Science in Society Dream Farm 2 – Integrated Food and Energy Rich Farm. ISIS Report 10/07/07.

podría ser fundamental en mostrar el potencial innovador de un nuevo paradigma tecnológico sobre la base de la interculturalidad: combinar de manera óptima las tecnologías alternativas, comunitarias o ancestrales con las de la tradición industrial.

Promoción de energías alternativas

Habría que destinar un porcentaje de los ingresos petroleros para la conformación de un fondo orientado al financiamiento de las energías alternativas. En concreto, las energías fósiles, en esta fase de transición deberían financiar el desarrollo de las energías alternativas.

Políticas petroleras

Necesidades y escenarios posibles de superación de la dependencia petrolera

La meta de las políticas petroleras transicionales será la superación de la dependencia a los combustibles fósiles. Antes de lanzarse a la definición de tales políticas como herramientas de esta superación, la primera tarea consiste en establecer las reservas y los niveles de consumo actuales del Ecuador en petróleo y sus derivados.

Un análisis del comportamiento de los campos petroleros en el Ecuador permite afirmar que se encuentran en un franco proceso de declinamiento en términos de extracción. La extracción de las reservas declinó al 6% anual (Reyes y Ajamil, 2005), entre 1995 y 2005, una tasa de declive que probablemente no disminuirá en el futuro, por la fracasada búsqueda de nuevos yacimientos.²⁵

Por otra parte, existen indicios de sobreexplotación de yacimientos, por ejemplo mediante el uso de bombas para acelerar

25 *El petróleo en Ecuador*, versión 2010, <www.eppetroecuador.ec/BibliotecaVirtual/001138>

la extracción. La creciente producción de agua de los yacimientos en detrimento del petróleo, provee una evidencia física de un manejo inadecuado de los yacimientos. Históricamente, en el período que va desde el comienzo de la extracción hasta 1992, de cada 100 barriles extraídos, 70 corresponden a crudo y 30 a agua, en la actualidad la relación ha cambiado a 46 de crudo y 54 de agua (Reyes y Ajamil, 2005).

El escenario es aún más complejo si se considera el acelerado crecimiento de consumo interno de combustibles. El crecimiento registrado entre 2005 y 2009 es mayor que el crecimiento registrado en el PIB. La tasa de crecimiento del PIB ha llegado a ser de 4,68%, mientras que la del consumo de combustibles llegó a ser de 5,74%. El crecimiento del consumo en el sector transporte es particularmente marcado, con cerca del 9% en promedio anual (Avilés Pazmiño, 2010), un sector que representaba el 55% del consumo en 2008 (Castro, 2011).

Los ejes de acción de una estrategia de transformación para las políticas petroleras

Articulamos la estrategia de transición alrededor de nueve grandes ejes:

- Disminución progresiva de la cantidad, la velocidad y las áreas de extracción.
- Mejora de la capacidad de refinamiento.
- Eliminación y/o focalización de los subsidios al sector petróleo y al consumo.
- Auditoria integral del sector petróleo.
- Recuperación y democratización del control público.
- Reparación integral.
- Disminución de la dependencia a los combustibles fósiles.
- Acciones desde la sociedad.
- Profunda reforma tributaria.

*Disminución progresiva de la cantidad, la velocidad
y las áreas de extracción*

La estrategia consiste en instituir una moratoria sobre la extensión de la frontera petrolera. No se pueden sacrificar nuevos territorios a la actividad petrolera, visto que estamos a una fase de abandono de la actividad. Recordemos además que las actividades de exploración se han convertido en una fuente de egresos y pérdidas para el Estado, de conflictos sociales, y de amenazas para la soberanía alimentaria. Por esta razón, el Ecuador debe conservar libres tanto de exploración como de explotación los territorios susceptibles de albergar hidrocarburos en su subsuelo.

Dado los niveles actuales de extracción (500 000 barriles diarios), las reservas —4 000 millones de barriles— dejan al Ecuador una cantidad de petróleo para 2 a 4 décadas. En estas condiciones, cabe gestionar las reservas de las cuales el país dispone, adecuándose a las necesidades nacionales proyectadas para la transición hacia el Sumak Kawsay. A partir de estos niveles, es preciso definir el ritmo deseado del abandono de la extracción siguiendo una curva en declive conforme a las metas establecidas, en función de las posibilidades reales de salida de la dependencia al petróleo. Este ritmo deseado definirá las cuotas de extracción a aplicar.

Para establecer la validez de tal medida, cabría llevar a cabo un análisis análogo al de Sotelo y Francke (2011) sobre el sector minero industrial en Perú, es decir estimar el impacto económico, por ejemplo que hubiera tenido una moratoria sobre nuevos proyectos petroleros y una gestión de las candencias de extracción desde hace unos cinco o diez años.

Cabe recordar que la minería tiene en el Perú un peso económico comparable al del petróleo en el Ecuador, por lo que representa al 6% del PIB (17,8% para el petróleo en Ecuador), 60% de las exportaciones (63,1% para el petróleo en Ecuador), menos del 1% del empleo (alrededor de 1% para el petróleo en el Ecuador),

y un 20% de impuestos a la renta (34 % para el petróleo en el Ecuador).²⁶

Los resultados de Sotelo y Francke muestran que una moratoria sobre los nuevos proyectos mineros de Perú desde el año 2007 –con una reforma tributaria que implicaba una recaudación adecuada de los impuestos a ganancias extraordinarias– no hubiera tenido efecto alguno sobre el nivel de empleo, e incluso hubiera llevado a un superávit fiscal (con un nivel de impuestos recaudados equivalente a los gastos en educación). En cuanto al sector externo, si bien se hubiera observado una disminución sustancial del influjo de divisas, esta hubiera sido compensada con un impuesto adecuado a las ganancias extraordinarias, impidiendo la salida de utilidades y llevando a un efecto positivo sobre la balanza de pagos.

El estudio muestra la importancia de llevar a cabo una reforma tributaria adecuada y concluye que “en 2007 [el Perú] tuvo una gran oportunidad de iniciar responsablemente un cambio en materia de las actividades extractivas y está fue desaprovechada” (Sotelo y Francke, 2011: 139).

Los resultados de este estudio se revelan útiles para la situación del Ecuador, en cuanto a la necesidad de una reforma tributaria adecuada, la revisión de los contratos existentes, y la generación de ahorros mediante la eliminación de los subsidios “perversos”, para compensar las pérdidas de ingresos que implicaría la disminución progresiva de la cadencia de extracción y una moratoria sobre los nuevos proyectos de explotación.

Mejorar la capacidad de refinamiento

Es necesario responder a la demanda nacional en función de la producción de los derivados internos, para romper con el

26 Las cifras son las del año 2010 en el Perú y 2011 en el Ecuador. Fuentes: Ospina (2011), De Echave (2011), *El Comercio* del Perú.

absurdo de ser a la vez un país productor y exportador de petróleo, e importador de derivados, que luego son quemados en un elevado porcentaje para producir energía eléctrica. Durante una primera etapa de transición, esto invitará a mejorar e incluso posiblemente a ampliar el sistema de refinación existente, sin menospreciar las potencialidades de una verdadera integración energética con los países vecinos.

La insuficiencia de la capacidad de refinación, en un escenario de incremento del consumo, constituye el nudo más crítico del sector petrolero ecuatoriano. A los casi seis años de gestión del actual gobierno los resultados en este campo son muy pobres. Por ejemplo, la reconversión de la refinería de Esmeraldas ha sido sistemáticamente abortada. En el Ecuador, el sector transporte representa más del 55% del consumo nacional de energía,²⁷ por lo que cualquier política de gestión energética debe necesariamente considerar formas más eficientes de movilidad.

Eliminación y/o focalización de los subsidios al sector y al consumo

La industria petrolera es la que más se beneficia de subsidios, cuando el Estado asume la construcción de infraestructura que sirve sobre todo a las actividades petroleras o cuando brinda seguridad a las empresas. Estos pueden ser subvenciones directas como indirectas, económicas o ambientales. Es necesario transparentar todo el negocio petrolero, identificando a los beneficiarios directos de cada una de las fases y los procesos de enriquecimiento ilícito.

Como lo menciona Gudynas (2011), existen además subsidios escondidos o “perversos”, proveídos por el Estado, como pueden ser el financiamiento de la remediación ambiental, la construcción de infraestructuras de transporte y energéticas, las tarifas preferenciales por el consumo de agua o electricidad, etc. Pro-

27 35 millones de barriles equivalentes de petróleo en 2008 (Castro, 2011).

curemos eliminar estos subsidios “perversos”. Gudynas (2011) propone ventajosamente que el Estado transforme estos subsidios “perversos” en subsidios “legítimos”, al invertir los ahorros generados en el desarrollo de otros tipos de actividades productivas con menor riesgo de impacto ambiental, y que generarían más empleo y destinadas a abastecer las necesidades locales. En el Ecuador, los fondos así liberados podrían servir para incentivar la agricultura biológica, pero también la minería artesanal y de pequeña escala (véase más adelante).

En lo relacionado al consumo, se requieren medidas para eliminar o focalizar los subsidios. Por ejemplo se requiere eliminar el subsidio para uso vehicular privado y suntuario, para uso industrial y comercial, y focalizar el del sector residencial. Es necesaria también la eliminación del contrabando, lo que implica un control de las fronteras y focalizar el subsidio a los combustibles marinos, protegiendo a los sectores de la pequeña pesca artesanal, pero evitando la fuga por estas rutas.

Al igual, la focalización del subsidio al GLP²⁸ ha sido identificada como una medida urgente. Esto podría realizarse con un mecanismo similar al de la “tarifa de la dignidad” manejada para el sistema eléctrico, de tal manera que se garantice un consumo promedio de 1,4 cilindros de gas por mes. Para las zonas rurales, se debería efectuar un levantamiento de información, tal como se lo realiza para el bono de desarrollo humano, para que puedan ser destinatarios del subsidio (Avilez Pazmiño, 2010).

28 De acuerdo con Petroecuador, el consumo de GLP llegó a 11 226 429 barriles en el 2009.

Alternativas concretas 2

Focalización del subsidio al gas

El Ecuador en la actualidad subsidia todo tipo de consumo de gas, lo que implica altos costos para el Estado. Se propone focalizar el subsidio al GLP al sector que hace uso domestico y que se clasifique como necesitado del subsidio mediante la planilla o factura de energía eléctrica. Esta planilla o factura es un medio efectivo de clasificación que permite al usuario de bajo consumo de electricidad convertirse en beneficiario del subsidio al gas. En el caso del Ecuador, la referencia es un tanque de GLP de 15 KG, que es lo que utiliza una familia en promedio al mes.

La propuesta consiste en que mediante un desplegable en la factura eléctrica sea posible reclamar los tanques de gas subsidiados. Para el vendedor de GLP, los desplegables recibidos por concepto de gas subsidiado le servirían como facturas para la conciliación de cuentas con el Estado al final de un periodo determinado. Para las personas que no dispongan de energía eléctrica, sobre todo en zonas rurales, se debería efectuar un levantamiento de información, tal como se lo realiza para el bono de desarrollo humano, para que puedan ser destinatarios del subsidio.

Este programa de focalización de subsidios generaría un ahorro de 300 millones de dólares para el presupuesto del Estado, retirando el subsidio a 38 millones de cilindros de gas.

Cilindros de 15 kg despachados	73 318 060
Beneficiarios tarifa de la dignidad	2 044 832
Cilindros por familia al año	17
Total de cilindros subsidiados	34 353 178
Reducción de cilindros subsidiados	38 964 882

Con esta medida, no solo se lograría ahorrar dinero al Estado y focalizar el subsidio a quienes realmente lo necesitan, sino que se también frenaría el contrabando de este combustible.

Auditoría integral

Es urgente una auditoría integral: de los contratos, los procesos de privatización, los criterios técnicos aplicados y en general las decisiones en torno a la actividad petrolera.²⁹ Varios casos están siendo ya investigados: Palo Azul, Libertador, Shushufindi, Sacha, en donde se han identificado procesos irregulares de asignación de contratos en perjuicio del Estado (Villavicencio, 2012).

Al igual, ha habido subsectores históricamente beneficiados: proveedoras de servicios, empresas de limpieza. Estas ejercen a menudo un monopolio sobre mercados claves de la actividad. Estos mercados deben regresar a manos del Estado, incluso recurriendo a expropiaciones en casos de enriquecimiento ilícito.

El Estado tiene que declarar nulos los contratos con las empresas que no cumplen con el marco legal vigente o la Constitución. Incumplimientos ya registrados implican: situación de monopolio (e.g el caso de empresas chinas),³⁰ irregularidades y traspasos respecto a los contratos establecidos (una situación generalizada en el sector (Villavicencio, 2010), o el hecho de recurrir, de una manera u otra, a contratos con empresas registradas en paraísos fiscales.

En esta auditoría, también será preciso revisar el aspecto tributario (ver más adelante), y sometería los contratos existentes a un proceso de consulta popular con las comunidades afectadas para establecer su voluntad o no de seguir explotando los pozos en operación.

Para llevar a cabo esta auditoría y de manera general la regulación y el monitoreo ambiental, destacamos la necesidad de cons-

29 Procuramos, por ejemplo, inspirarnos de la auditoría realizada en Bolivia el 2008, encabezada por Enrique Mariaca.

30 Las empresas chinas están presentes como operadoras en el bloque 14, 17, y Tarapoa, en el bloque 16, a través Nomenco, segunda en el consorcio con Repsol, se encuentra en negociación con Agip en el bloque 10. Tiene los contratos más grandes de servicios petroleros con Sinopec BGP, CPBE. Y el manejo del comercio del crudo Ecuatoriano por parte Petrochina.

truir una autoridad estatal de gestión ambiental que sea independiente de las decisiones tomadas en los otros sectores, por ejemplo desde el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.

Recuperar y democratizar el control público

Sector de la extracción

Para que el Estado recaude su papel regulatorio en el sector petrolero, es imprescindible la recuperación y democratización de la empresa nacional, EP Petroecuador, la cual nació en 2010 de la fusión de Petrocomercial, Petroproducción y Petroindustrial.

A nivel de la extracción, cabe recordar aquí que las reformas del período neoliberal llevaron a la asfixia económica del sector público y a debilitarle técnicamente. Con esta estrategia se cumplió un doble objetivo: crear las condiciones que justifiquen ante la opinión pública la venta de las entidades públicas, y desvalorizar sus activos para aumentar los márgenes de ganancia del proceso privatizador. La desarticulación institucional ocasionada ha afectado seriamente a las capacidades de control y regulación del Estado. La fragmentación del sector equivalió a quitar al Estado la capacidad de establecer una visión estratégica integral que permita resolver las contradicciones e inconsistencias y cumplir con los objetivos de su gestión.

Además, la empresa pública está infiltrada –tanto en los niveles ejecutivos de decisión como en los operativos– por intereses transnacionales y privados, capaces de influir sobre las decisiones de esta entidad. Esta situación da lugar a una corrupción endémica con varios hechos denunciados ante los órganos de control (e.g el caso de la empresa de servicios petroleros Sertecpet, cuyo gerente pasó a ser gerente de la PetroEcuador).³¹

31 En julio de 2004, la Comisión Cívica Anticorrupción denunció un conflicto de intereses y un presunto tráfico de influencias de parte del ministro

Por esta razón, es preciso democratizar la empresa estatal y someterle a procesos transparentes de control democrático en cuanto a su gestión ambiental, salarial, financiera y social. Por esta razón, la recuperación de la empresa pública debe además involucrar a diferentes actores, debe reconocer la autonomía y participación de los trabajadores así como de las comunidades de las áreas de influencia, tareas que serán facilitadas con la creación de un directorio integrado encargado de definir la política de la empresa. En 2002, los consejos de un equipo de profesionales de la Federación de Trabajadores Públicos Ecuatorianos (Fetrapec) para un proyecto de Ley de empresa pública, implicaban la definición de una contratación colectiva sobre objetivos, en la cual los trabajadores son corresponsables de la empresa y la creación de una superintendencia de hidrocarburos.³²

Sector de la distribución

Por estar totalmente ausente en este sector, el Estado es incapaz de ejercer control sobre él. En este ámbito, proponemos como medida urgente revertir el transporte vía la entidad privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a manos del Estado, y apuntar a una gestión de la distribución que involucre a los gobiernos locales, en particular el manejo del transporte terrestre.

Reparación integral

Contaminar es más barato que prevenir la contaminación, y mientras esta dualidad esté desequilibrada, seguirán dándose devastaciones ambientales. Planteamos que la postura de la economía ambien-

de energía, Eduardo López, en vista del incremento de los negocios entre Sertecpet, empresa a la que estaba vinculado antes de llegar a la petrolera estatal Petroecuador, y que pasó de una facturación de US \$ 21 517 entre mayo y diciembre de 2002, a US \$ 81.673 de enero a diciembre de 2003, a US \$ 870 743 de enero a junio de 2004; es decir, un incremento del 1 066%.

32 Proyecto de ley de Empresa Pública Petroecuador. Elaborado por un equipo de profesionales de Fetrapec de 2002.

tal (neoclásica) no es válida: en el caso de las industrias extractivas, una negociación *coasiana* entre contaminador y contaminado no puede evitar impactos ambientales y sociales catastróficos. Las restricciones por parte de las autoridades públicas son imprescindibles. Solo cuando contaminar sea carísimo por multas o pago de reparaciones integrales justas, las empresas invertirán en prevención.

Esta podría consistir en la inclusión de una cláusula en los contratos privados existentes: en caso de daño ambiental y del abandono de la explotación, el Estado intervendrá de manera inmediata y subsidiaria, proveyendo la reparación integral y aplicando una multa equivalente al 100% de lo invertido.³³

Recordemos que la situación actual de las zonas de explotación abandonadas es catastrófica. En muchos casos, las empresas transnacionales han salido del país sin beneficio de inventario. Existe casos de empresas extranjeras que, por el contrario, están demandando al Estado ecuatoriano por errores en los procesos de caducidad (es el caso de Occidental y Perenco, empresas que provocaron severos impactos ambientales y sociales).³⁴ Existen centenas de pozos abandonados no sujetos a acciones de reparación.³⁵ Es primordial sellar y limpiarles, a fin de lograr procesos reales de restauración de esos sitios. La reparación supone restaurar las zonas de tal manera que otras actividades de autosustento puedan realizarse. Aquí la comunidad juega un papel central, la cual tiene que tener el derecho a decidir cómo y quién hace la reparación.

33 Interim clean water act settlement penalty policy, 1 de marzo de 1995.

34 Tanto Perenco como Occidental tienen una causa contra el Estado (por un monto de 400 millones y 2 300 millones respectivamente, más intereses) Procuraduría General del Estado: Caso Perenco, Caso Occidental, <www.pge.gob.ec/es/patrocinio-internacional.html>, ambas empresas tienen denuncias por daños ambientales y sociales.

35 Inventario de Pasivos Ambientales de Petroecuador, actualizado al 4 de mayo de 2012, facilitado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador., dentro del trámite defensoría 5168-2011-JMR.

Disminución de la dependencia a los combustibles fósiles

Un cambio de patrones de consumo es indispensable para favorecer y hacer posible una transformación a un Ecuador postpetrolero: reducir paulatinamente el consumo del plástico, de los combustibles fósiles, de derivados de la fase química del petróleo, optar voluntariamente por fuentes energéticas diversas, de bajo impacto, así como por una reducción del consumo energético en general.

Reducir la dependencia a los combustibles fósiles necesita una serie de cambios estructurales profundos en los patrones de consumo, los imaginarios, los modos de vida urbanos, etc. El transporte es un eje importante de estos cambios para bajar el consumo de combustible por persona. Es necesario desincentivar la circulación de vehículos privados mediante un cambio modal hacia alternativas de transporte colectivo de mejor calidad y mayor cobertura, así como del uso seguro de transporte no motorizado, a través del mejoramiento de las condiciones de circulación peatonal y la habilitación de rutas exclusivas para las bicicletas.

Alternativas concretas 3**Movilidad eficiente y limpia para ciudades montañosas como Quito: El Metroférico**

El Metroférico es una propuesta de transporte público urbano masivo por teleférico conectando el valle de Tumbaco con el hipocentro de Quito, donde la geografía accidentada dificulta la construcción de vías de acceso desde suburbios cada vez más poblados hacia el centro de la ciudad. El Metroférico puede construirse en un tiempo de 12 meses y podría financiarse al 100% con tarifas competitivas del medio sin subsidio alguno. La demanda inicial calculada para el año 2014 es de aproximadamente 50 000 personas en las 18 horas del día, con una tendencia al aumento de 5% anual, y por lo tanto, con una proyección de 12000 /h total en ambas direcciones para los próximos 25 años. El costo estimado por viaje sería de 0,75 USD para la amortización total de los costos de inversión y operación.

La propuesta incluye

- Aplicar la última tecnología de 3 S (3 cables) en 15-18 torres con una longitud de 7,4 km para poder pasar el desnivel de 450 m de altura entre Tumbaco a Quito.
- Hasta 110 cabinas, que viajarán con una velocidad de 26 km/h y con 38 personas en una cabina.
- 2 plantas de generación de luz eléctrica: hidroeléctrica en el río Machángara (que de paso puede ser limpiado) combinada con luz solar en los techos amplios de los 3 grandes parqueaderos *park & ride* previsto (sustentabilidad total: 4-5 Mwh de los cuales se podría vender hasta la mitad a nuestra misma comunidad lo que supondría un ingreso para nuestro Metroférico).
- Parqueaderos modernos y su sistema de acceso.
- Sistema inteligente y potente de alimentadores, que podemos elaborar para el valle de Tumbaco y Cumbayá entre buses, buse-tas, taxis, bicicleta, a pie y con auto.

Impactos estimados

- Disminución de la congestión vehicular en carreteras y espacios públicos urbanos en una proporción de 20 000 vehículos por día ya en los primeros años del funcionamiento del metroférico.
- Disminución del transporte público en bus en una proporción de 1500 viajes por día en un tramo poco atractivo para servicios en carretera.
- Afectación muy limitada de espacio útil y necesario para vivir; educar y producir (solamente corredor de máximo 30 metros de ancho para torres, parqueaderos y estaciones), menos contaminación, menos accidentes, menos gasto para la construcción y el mantenimiento de vías.
- Menos pérdida de tiempo en la congestión vehicular, menos ruido.
- Menos endeudamiento público para obras ligadas al mantenimiento y expansión de la infraestructura, hasta ahorros en el subsidio actual de combustibles.

Responsable para la propuesta: Richard Resl, Tom Jungh, API (2010-2013)
 Estudio de prefactibilidad: Richard Resl y Equipo Técnico Internacional (2012)

Fuente: Asociación de Profesionales Independientes. *El Metroférico*. API, 2011. Ver también: <http://iniciativametroferico.wordpress.com/tag/metroferico-quito-di-fusion/>, [Consulta: 6 de diciembre de 2012].

La reorganización del espacio urbano y rural es clave en cuanto a las potencialidades de reducir drásticamente las necesidades de viajes motorizados. El desarrollo de servicios locales y barriales (salud, educación, etc.) y la promoción de una gestión pública descentralizada y comunitaria de los servicios es un componente clave.

Otro gran reto consiste en sustituir los derivados de petróleo como los plásticos, los plaguicidas, los fertilizantes, los compuestos sintéticos, etc. Hay que reconocer que los derivados son actualmente absolutamente indispensables en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, existen soluciones de reducción a corto plazo en muchos sectores. Además de las numerosas formas obvias de abandono de derivados (e.g reemplazar las fundas plásticas por contenedores durables), es preciso incentivar la investigación en materiales locales, naturales, durables y proveniente de fuentes naturales renovables capaces de suplir a las necesidades. Al igual que para las fuentes de energía, es necesario un diálogo entre capacidades tecnológicas industriales y las formas alternativas locales existentes.

Adicionalmente, es importante eliminar las formas voraces de consumo conspicuo. A través de políticas adecuadas, se tiene que desincentivarlo, evidenciando la contribución nefasta del consumo de bienes posicionales.

Experiencias autónomas de rechazo de la extracción y del uso insensato de petróleo y sus derivados existen en el país. La comunidad indígena de Sarayaku, por ejemplo, representa una fuente de inspiración para enfrentar y bajar la dependencia en el consumo, al limitar o eliminar el ingreso de derivados del petróleo como son los agroquímicos, envases plásticos y adecuando sistemas de energía alternativos para el transporte y el consumo doméstico. Estas iniciativas tienen que ser apoyadas moralmente por las autoridades públicas. Al igual, estas tendrán que promover *regiones modelos* libres de energías fósiles, iniciativas de alto

valor educativo. Es preciso inspirarse de proyectos pasados tal como *Cero combustibles fósiles en Galápagos*. Este programa, diseñado por el Ministerio de energía el año 2007, preveía que en un plazo de 10 años no se utilicen combustibles de origen fósil en Galápagos, salvo en el caso de los aviones y de los buques grandes.

Este tipo de iniciativas permite experimentar y adelantar alternativas sin fósiles para zonas urbanas o rurales, no solo por la contaminación que se ha provocado, sino como escenarios para superar la dependencia (Villavicencio y Acosta, 2007). El programa comprendía la construcción de plantas fotovoltaicas, eólicas y de biocombustibles provenientes de pequeñas siembras de piñón. *Cero combustibles fósiles en Galápagos* exigía la eliminación del diesel en la generación de energía eléctrica en las islas, la conversión gradual de los motores de vehículos en eléctricos o híbridos y el cambio de combustibles en las embarcaciones.

Acciones desde la sociedad

Un primer aspecto tiene que ver con la protección del territorio. En el ámbito comunitario, la resistencia no debe ser solamente respetada, sino promovida, en la medida que representa una forma de protección de territorios. La resistencia no es solo un derecho de protección, sino que es un ejercicio de participación, pues permite hacer visibles otras formas de producción de consumo, otras visiones en relación al territorio: “solo los Estados estrechamente vinculados con las grandes empresas criminalizan a los ecologistas. Los Estados realmente democráticos celebran estos activistas”, anota con razón la destacada ecofeminista Vandana Shiva.³⁶

Segundo, el monitoreo, la vigilancia y el control social, cuanto más independientes sean son mejores y en estos procesos la parti-

36 Encuentro internacional sobre los Derechos de la Naturaleza, CIESPAL, Quito, 22 de agosto de 2012.

cipación de las comunidades y de la sociedad son indispensables. Constituyen una garantía para fortalecer las regulaciones y a los organismos reguladores.

En los sistemas de monitoreo, regulación y control, la participación de los trabajadores y de los sindicatos es, en particular, clave dentro del sistema regulador y es una manera de democratizar la industria. Una condición necesaria para tal sistema es que la unión es libre, independiente y democrática. Los trabajadores organizados pueden ser una herramienta eficaz para controlar el proceso de producción desde adentro y desde abajo, dado su conocimiento la tecnología y su exposición a los efectos negativos de la producción petrolífera (accidentes, derrames crónicos, etc.). Los trabajadores tienen la posibilidad, y este debería ser un derecho protegido, de parar la producción y otras actividades operacionales inmediatamente si él o ella consideran que la situación es peligrosa (ver también el artículo de Tatiana Roa en este libro).

Reforma tributaria

Como hemos señalado, la cuestión de la reforma tributaria sería clave en el sector petróleo para compensar la pérdida de flujo de divisas debido al decremento de las exportaciones de petróleo, así como por el arribo de inversiones orientadas a este sector.

Si bien la disminución de la producción implicará una caída de los ingresos, tendríamos como efecto compensador una mayor recaudación de impuestos y la generación de ahorro a través de la eliminación de los subsidios “perversos”.

En el marco de la auditoría planteada anteriormente, se necesitará una revisión de los beneficios tributarios y de los diferentes subsidios eventualmente acordados a la industria petrolera, una mayor y mejor controlada recaudación de regalías.

Requerimos la caducidad de los contratos en caso de que la empresa esté registrada (directamente o mediante una de su subsidiaria) en paraísos fiscales notorios.

Al igual requerimos la transparencia total en la publicación de los montos pagados por las empresas al Estado ecuatoriano.

Políticas mineras

Si bien se impone de entrada la prohibición de todo tipo de minería a gran escala,³⁷ la sociedad ecuatoriana en su conjunto está atada al consumo de productos asociados a la vida moderna. A pesar de que se prevé incentivar cambios profundos en los patrones de consumo para caminar hacia una economía donde el dominio de estos productos será mínimo, estos patrones no cambiarán de un día para el otro. Aun en el horizonte más lejano de una economía postextractivista, una economía del Sumak Kawsay, se tendrá que mantener un cierto nivel de producción de minerales.

En este camino hacia un Ecuador postextractivista, la minería artesanal y de pequeña escala es destinada a tener un papel clave. De ella provendrá gran parte de los minerales indispensables a la nueva sociedad ecuatoriana, y la transición hacia ella.

Los pasivos de la minería artesanal y de pequeña escala son bien conocidos en el país: destrucción irreversible de ecosistemas, afectaciones graves a la salud humana, etc.³⁸ Dan cuenta del carácter nefasto y trágico que puede tomar la minería para la

37 Cabe señalar que son numerosas las jurisdicciones latinoamericanas en las cuales se legisló en contra de la minería a gran escala, e.g la prohibición de la minería a cielo abierto en Costa Rica, véase <<http://af.reuters.com/article/metalsNews/idAFN0912629920101110>>; el proyecto de prohibición de la minería metálica en San Salvador, véase <<https://nacla.org/article/mining-ban-el-salvador>>, y las diversas provincias argentinas que legislaron en contra de un aspecto u otro de la minería a gran escala, véase *15 Mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina, Guía para desmontar el imaginario prominero*, Colectivo Voces de Alerta, El Colectivo / Herramienta, p. 224, Buenos Aires, 2011, y también <<http://www.maristellasvampa.net/archivos/period42.pdf>>.

38 *Minería, ambiente y salud en la cuenca del río Puyango*. Funsad, Quito, 2007.

humanidad. Los desastres ocurridos con explotaciones de escala tan reducida son buenos avisos para la amplitud de lo que pueden ser los impactos en el caso de la megaminería, cuyas dimensiones son definitivamente incomparables con la minería artesanal y de pequeña escala.

Intentamos aquí definir un conjunto de lineamientos para establecer lo que sería la minería artesanal y de pequeña escala en el Ecuador postextractivista. Abordamos, al mismo tiempo, la cuestión de los procedimientos posibles para entablar la transición de la minería artesanal y de pequeña escala existente en el país hacia esta meta.

Contexto político y legal

Al igual que muchas otras actividades productivas locales y artesanales, la pequeña minería y la minería artesanal han sido duramente golpeadas por las reformas neoliberales de los marcos de inversión minero en muchos países (Campbell, 2004). Una de las características de los códigos mineros impulsados por el Banco Mundial ha sido la implementación de marcos legales en los cuales se criminaliza a la actividad minera de subsistencia o de pequeña escala (Campbell, 2004).

El objetivo de las nuevas figuras legales impuestas fue claramente debilitar a este sector para privilegiar a la minería industrial. Es obvio que los pequeños mineros se asentaron en regiones geológicamente ricas y que sus asentamientos corresponden con los yacimientos buscados por la gran minería. Es un patrón de despojo que se repite invariablemente en los países del Sur que siguieron las recetas del Banco Mundial.

La política del gobierno ecuatoriano actual no difiere en este sentido de cualquier gobierno neoliberal. Por una parte, se ha concentrado en la promoción intensiva de la megaminería y de sus actores principales, las grandes transnacionales mineras, y, por otra

parte, en la marginalización, e incluso la criminalización y persecución militarizada de las actividades mineras de origen local.³⁹

La marginalización consiste, entre otro, a estigmatizar la minería artesanal y de pequeña escala por sus impactos desastrosos sobre los ecosistemas aledaños y la salud pública. Si bien es preciso recordar los abusos cometidos en este ámbito, la megaminería es una actividad de alta tecnología y con riesgos que superan los de la minería artesanal y de pequeña escala en varios órdenes de magnitud. Controlarla requiere un personal calificado que no existe en el Ecuador. En cambio, las técnicas empleadas en la minería artesanal y de pequeña escala son más conocidas en el ámbito nacional, e incluso permiten una vigilancia ampliada que no solamente implique expertos.

¿Qué entendemos por minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)?

Existen varias formas de clasificar a la minería artesanal y de pequeña escala. Si bien existe un amplio espectro de actividades mineras en términos de tamaño de las explotaciones, de técnicas usadas y de actores, se divide generalmente la actividad minera en tres grandes categorías: la minería artesanal o de subsistencia, la minería de pequeña escala y la minería a gran escala.

Proponemos usar aquí esta clasificación útil aunque simplista y posiblemente inadecuada en ciertas circunstancias. El indicador de referencia para distinguir estas categorías es el volumen de roca tratado diariamente, o bien el volumen de roca desplazado diariamente. Se considera tradicionalmente como megaminería o minería a gran escala la que desplaza a más de 3.000 toneladas diarias, como pequeña minería a aquella que requiere un des-

39 E.g en Ecuador, en las provincias de Zamora y Esmeraldas. Ver “Desalojo a mineros deja siete heridos y tres detenidos en Paquisha Zamora Chinchipe”, Erdwin Cueva, *El Universo*, 15 de septiembre de 2010; Fuerte operativo militar en dos zonas mineras de Esmeraldas, *El Comercio*, 23 de mayo de 2011.

plazamiento de 100 toneladas diarias o menor, y como minería artesanal aquella que no desplaza más de 10 toneladas diarias (al igual existe criterio en función de la superficie abarcada y del monto total de inversión).⁴⁰

Cabe señalar que al interior de cada categoría existen grandes variaciones. Por ejemplo, a pesar de las impresionantes cantidades de desechos que generará, el proyecto cuprífero Mirador en el Sur del Ecuador se puede clasificar como megaminería de tamaño medio según los estándares internacionales. Mirador prevé el desplazamiento de 54 000 toneladas diarias, mientras que existen proyectos que desplazan hasta 80 000 toneladas diarias (Banks, 2002). Seguiremos sin embargo aquí incluyendo en la categoría megaminería a todo proyecto que rebase las 3 000 toneladas diarias.

Es útil incluir a la pequeña minería y la minería artesanal en una sola categoría (*minería artesanal y de pequeña escala*) para distinguir estas actividades de la megaminería, por lo que cabe discernir las actividades mineras de tipo local y las actividades mineras industriales a gran escala. El mismo uso de la palabra minería para designar a estos tres tipos de actividades induce a veces a error, pues da la impresión que son actividades comparables, cuando existen diferencias esenciales en cuanto a sus posibilidades de afectación a la economía y la política doméstica así como de destrucción del orden social y cultural y de los ecosistemas. Identificamos a dos factores de distinción preponderantes:

- a. El tamaño de los emprendimientos, el cual implica distintas magnitudes en términos de cantidades de insumos necesarios (energía, agua, químicos) y de desechos generados (sólidos, líquidos, tóxicos). Las diferencias se cuentan en varios órdenes de magnitud. Por ello, implican contaminaciones de extensiones espaciales y temporales, así como

40 “El ABC de la minería en el Ecuador”, Ministerio de Energía y Minas, Vice-ministerio de Minas, Quito, junio 2007.

afectaciones a los ecosistemas y a las fuentes de agua muy distintas.

- b. Las diferencias de poder económico y político que existen entre las Pymes familiares y locales y las empresas transnacionales. A cargo de la megaminería se encuentran generalmente corporaciones transnacionales privadas o públicas quienes disponen de una alta capacidad para incidir sobre las políticas mineras de los gobiernos nacionales. Las conexiones con redes financieras internacionales y el peso político de estos actores imposibilitan, a menudo, cualquier control institucional sobre ellos. En cambio, los actores a cargo de la MAPE no se mueven a la misma escala, por lo que no gozan de la misma impunidad y tampoco de la misma fuerza de *lobbying*, pues son más susceptibles de ser controlados tanto por las autoridades públicas como por la ciudadanía.

Tanto en la etapa de transición como en el horizonte a alcanzar, no se tolerará ningún tipo de megaminería. La minería artesanal y de pequeña escala, sin embargo, será un actor clave en la transición hacia una economía postextractivista, y cabe definir los límites dentro de los cuales procuremos tolerar esta actividad. Es el objetivo de este capítulo. Se busca el establecimiento de redes de producción de escala reducida, destinadas a abastecer el mercado local. La nacionalización de las grandes explotaciones y la descentralización de la producción permitirán un control soberano y democrático sobre los emprendimientos mineros y los actores a cargo de la explotación.

En cuanto a la oferta de empleo, cabe recordar que la megaminería es capital-intensiva, mientras que la *minería artesanal y de pequeña escala* tiende a ser más trabajo-intensiva. La mina de Bulyanhulu en Tanzania era el sitio de trabajo de al menos 400 000 mineros artesanales antes de pasar a manos de una minera transnacional. Hoy en día, la mina emplea 2 700 trabajadores.

En el Ecuador actual, se estima que son más de 80 000 el número de empleos en el sector minero artesanal y de pequeña escala,⁴¹ mientras que el gobierno nacional prevé la creación de 2 315 empleos directos con la implementación de los cinco proyectos estratégicos a gran escala en el Ecuador (Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 2011).

Poderes políticos locales y minería

Existen regiones del país, como en la provincia de Esmeraldas, donde la actividad minera ha implicado la formación de un conjunto de poderes locales que en muchos casos operan fuera del control estatal y tienen el control del territorio.⁴²

En ciertos casos, se observa una suerte de versión local de la “maldición de la abundancia”, donde el sector minero capta una renta que representa la única fuente de ingreso. Poderes locales asimilables a mafias se han desarrollado en las regiones mineras, en las cuales la distribución de la renta es sumamente desigual, los trabajadores laboran en condiciones precarias y peligrosas y la población en general padece de efectos directos de la contaminación del agua y la destrucción de los ecosistemas.⁴³ La presencia de estos poderes representará sin duda un obstáculo para la implementación de un nuevo modelo minero porque será contrario a sus intereses. El desmantelamiento de estas redes de poder estará a cargo del Estado pero deberá evitar, mientras sea posible, el enfrentamiento y el uso de la fuerza. La transición se impondrá más fácilmente desde el poder popular, lo que implicará campa-

41 Ibid.

42 “Guerrilla se aprovecha de minería ilegal”, *El Comercio*, Quito, 19 de septiembre de 2012.

43 En <http://www.tvecuador.com/index.php?option=com_reportajes&view=showcanal&id=1698>

ñas de educación y de sensibilización de la población local a la posibilidad de otro modelo.

La lucha contra la minería informal contaminante es una tarea que tiene que emprenderse en todo el país. Si bien el Estado tiene que apoyar iniciativas diversas, este problema se tendrá que resolver a raíz de campañas educativas, demostrando el carácter nefasto de aquella actividad en caso de prácticas contaminantes.

Los ejes de acción de una estrategia de transformación para las políticas mineras

Desarrollamos la propuesta de transformación en ocho ejes principales:

1. Nacionalización de las megaexplotaciones existentes.
2. Acotar los niveles de producción y de agresión a la Naturaleza.
3. Definir los minerales prioritarios y transformar la matriz minera productiva en consecuencia.
4. Definir los territorios libres de minería.
5. Asegurar una transición suave para las regiones mineras condenadas a interrumpir su actividad.
6. Organizar del sector.
7. Implementar una vigilancia de carácter democrático.
8. Incentivar el reciclaje.

Nacionalización de las megaexplotaciones existentes

Para empezar, habrá que dar paso a una auditoría integral de los contratos existentes para ver si cumplen o no con la Constitución, el Mandato número 6 de la Asamblea Constituyente y las leyes.

De ninguna manera, los actores a cargo de la minería a gran escala podrán ser empresas extranjeras. Es una condición necesaria para que el Ecuador ejerza su soberanía sobre el manejo de sus recursos minerales. Por lo tanto, en el caso de las megaexplotaciones no-metálicas existentes, como los materiales de construcción a cargo de la empresa francesa Lafarge, o la producción de

piedra pómez, estas deberán ser nacionalizadas y probablemente modificadas, para entrar en las categorías de minería autorizada que definiremos a continuación.

Hacia una minería artesanal y de pequeña escala controlada

Puesto que necesitaremos minerales aún en una economía postextractivista, y más aún en la etapa de transición hacia ella, es imprescindible planificar la organización de la minería artesanal y de pequeña escala, la cual será la única puesta a contribución para obtener los recursos necesarios.

Es obvio que la primera tarea consistirá entonces en establecer las necesidades del Ecuador en minerales (tipos de minerales y cantidades) según el horizonte que nos preocupa alcanzar y el camino transitorio que nos proponemos tomar, para definir de manera más fina la importancia que cabrá darle a la minería artesanal y de pequeña escala. Es necesario señalar de entrada que existe un amplio conjunto de minerales cuya utilidad es casi nula en una economía postextractivista: un metal precioso como el oro, un metal radioactivo como el uranio y numerosos otros metales raros que sirven principalmente en las industrias del armamento.

Una vez esta evaluación efectuada, necesitamos determinar el potencial de la minería artesanal y de pequeña escala existente en condiciones de explotación tolerables y evaluar su posible adecuación a las necesidades determinadas. A partir de ello, se definirá hacia el largo plazo los niveles de producción deseables para abastecer estas necesidades.

Necesitamos, sin embargo, definir un conjunto de condiciones y de fronteras dentro de las cuales la minería artesanal y de pequeña escala será declarada tolerable, siempre teniendo en cuenta su carácter destructor, así como sus modos de organización y los mecanismos de control adecuados.

Modificación del patrón tecnológico: acotar los niveles de producción y de agresión a la Naturaleza

Dado el carácter extremadamente destructivo de la minería, y en el afán de reducir sus impactos de manera drástica, una primera y gruesa aproximación consistirá en acotar los niveles de producción de la minería artesanal y de pequeña escala, para limitar la minería respecto a sus cantidades de insumos y desechos producidos. Se recomendará por ejemplo imponer un volumen máximo a ser desplazado diariamente a unas cuantas centenas de toneladas diarias.

Otros tipos de restricciones se aplicarán en cuanto a las técnicas de extracción. Procuramos promover una minería que use tecnologías libres de químicos tóxicos (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, etc.) siguiendo iniciativas existentes en la materia (en Turquía, varias provincias de Argentina, República Checa, Alemania, Estados Unidos, y Hungría) (Sacher, 2010), y en general que minimice el uso de productos sintéticos. Por ejemplo, hay experiencias exitosas de uso de técnicas de centrifugación para separar los minerales. Será preciso investigar sobre las técnicas existentes tanto en el ámbito local como en el extranjero, su potencial y su aplicabilidad. El papel de las universidades y otros centros de investigación será clave al respecto.

En cuanto a los desechos producidos, procuramos usar técnicas para enterrar los minerales “estériles” inmediatamente después de su remoción, así como las técnicas de tratamiento más desarrolladas para los otros desechos líquidos y sólidos.

Definir los minerales prioritarios y transformar la matriz minera productiva en consecuencia

La producción de ciertos minerales (e.g el oro) no tiene mayor utilidad fuera de la joyería y se deberá reducir drásticamente. Por el contrario, existe un conjunto de minerales de base (e.g

materiales de construcción, cobre, bauxita, hierro, etc.) de los cuales será imposible prescindir totalmente.

Una tarea importante consistirá entonces en adecuar la producción, y transformar la distribución de la matriz productiva, de manera a apuntar a las necesidades definidas. Procuramos, sin embargo, evitar la apertura de nuevas explotaciones.

Definir los territorios libres de minería

Será necesario identificar los territorios donde la minería artesanal y de pequeña escala es intolerable: zonas de alta biodiversidad u áreas protegidas, zonas de páramo y otras zonas de formación de fuentes de agua, zonas de alta actividad agropecuaria, zonas urbanas, zonas de afectación a la soberanía alimentaria, etc. En estos casos, se tratará de eliminar la actividad minera existente. Será preciso definir amplios perímetros de amortiguamiento alrededor de estas zonas, adentro de los cuales tampoco se tolerará actividades mineras. Es obvio que esta zonificación reducirá de manera considerable las zonas posibles para la actividad minera. Será preciso establecer un mapeo detallado de estas áreas, por lo que estarán destinadas a cumplir con las necesidades del país en minerales.

Sin embargo, los criterios de rechazo de la minería no serán exclusivamente ambientales. También se podrán fundamentar en consideraciones económicas, políticas y culturales. Por ejemplo, pueblos indígenas reivindicando la soberanía sobre sus territorios y promovedores de un manejo de la Naturaleza fuera de lógicas extractivistas tendrán la posibilidad de declararse zona libre de minería. Esta posibilidad deberá tenerla cualquier comunidad, campesina, semiurbana y urbana. A estas regiones, cabría añadir las zonas de fronteras nacionales.

En las regiones en la cuales la minería será declarada tolerable, será preciso delimitar con cuidado los límites de extensión locales

de las actividades mineras en función de los componentes sociales, físicos y bióticos existentes y sus interacciones.

En caso de agotamiento de los yacimientos que se encuentran en regiones autorizadas, se necesitará posiblemente emprender actividades de exploración. Los límites de extensión y las técnicas usadas para estas obedecerán a los mismos criterios, y su grado de actividad corresponderá a una renovación las cantidades necesarias según el tipo de economía de transición a seguir y el horizonte postextractivista definido.

Para evitar cualquier actividad especulativa alrededor de las propiedades mineras, se otorgará la posibilidad de explorar a las empresas mineras solamente después de haber determinado la necesidad de encontrar a nuevos yacimientos. El número de títulos mineros por persona, legal o física, quedará limitado.

Regiones mineras condenadas a interrumpir su actividad

Bajo estos lineamientos, existirá un conjunto de regiones en las cuales quedará prohibido desarrollar actividades mineras. Después de haberlas identificado, cabrá diferenciar los territorios de fuerte tradición minera de aquellos en los cuales la actividad se inició recientemente.

En las regiones de alta tradición minera será preciso tomar en cuenta que no se podrá proceder a un cierre automático de las explotaciones que no cumplen con las exigencias de restricción territoriales. A menudo, en el caso de la minería artesanal y de pequeña escala, se trata de empresas familiares o de tamaño modesto que han desarrollado una capacidad y una cultura a lo largo de varias generaciones, por lo que será preciso definir períodos largos de transición hacia actividades productivas distintas. Queda claro que no se tratará de destruir de un día para el otro un tejido sociocultural que se ha construido alrededor de estas prácticas, por lo que ocasionaría tragedias humanas.

Por lo tanto, en caso de que no se pueda cumplir con las necesidades de la economía ecuatoriana sin violar las reglas que acabamos de exponer, se procurará de manera excepcional que siga durante un tiempo limitado la minería existente en zonas prohibidas, o bien importar los minerales necesitados.

En el corto plazo, la medida prioritaria consistirá en imponer prácticas de minería que correspondan a los estándares precedentemente definidos, es decir la transición hacia técnicas de extracción minimizando el carácter destructor de la minería.

En el largo plazo, para las zonas declaradas libres de minería, procuraremos sin embargo apuntar en estas regiones hacia una sustitución total de la minería por otras actividades productivas. Caminos de salida relativamente rápidos no son impensables. Se han observado comunidades donde la matriz productiva cambió en una década hacia actividades menos depredadoras. Es el caso de Mindo, donde la población, mayoritariamente maderera hace no más que 15 años, giró hacia el ecoturismo con un éxito palpable.

El caso de la minería es más complejo por lo que en muchos casos la contaminación ocasionada por años de prácticas no reglamentadas ha imposibilitado el desarrollo futuro de otras actividades productivas, por lo que las alternativas posibles serán limitadas. Es posible sin embargo aprovechar de las mismas operaciones de rehabilitación, las cuales podrían generar empleos para un tiempo de transición. Las operaciones de rehabilitación podrían involucrar a sectores más amplios de la población a través de mingas “desmineras”, bajo la supervisión de los antiguos mineros, de expertos en el ámbito, así como de autoridades y movimientos sociales locales.

La minería, a pesar de sus impactos nefastos y durables sobre los ecosistemas y la salud humana, es parte de un patrimonio y sería oportuno hasta mantener su memoria visible en forma de

turismo minero, adaptando las explotaciones existentes en centros de educación y de sensibilización a los efectos del extractivismo.

En los casos extremos, el Estado podrá comprar las tierras e instalaciones mineras correspondientes, siempre con el consentimiento informado de los pequeños mineros.

Queda claro que estas operaciones tienen que insertarse en un proyecto público de concientización a gran escala. La promoción de estas prácticas estará a cargo del Estado y de las autoridades públicas locales, quienes podrán establecer mecanismos políticos y financieros adecuados para alcanzar estas metas, financiar los procesos de rehabilitación (en caso de que sea posible) de los territorios gravemente afectados, talleres de formación de mineros hacia técnicas que no recurren a productos tóxicos, de tratamiento de los desechos líquidos y sólidos de tratamiento, y de entierro rápido de los desechos estériles, incentivar la organización de los pequeños mineros y el intercambio de saberes. Será, por ejemplo, útil establecer intercambio con Bolivia y sus sistemas de cooperativas mineras, las cuales funcionan con un amplio sistema de comercialización descentralizada.

Además, se proyectan campañas nacionales de sensibilización a las prácticas más nefastas y de sus impactos a fin de contribuir a una toma de consciencia general de que aun la *minería artesanal y de pequeña escala* puede poner en peligro la salud y el bienestar de las generaciones futuras.

Organización del sector

Será oportuno incentivar la organización de los mineros en cooperativas cuando no existen, o de fortalecerlas donde existen. Esta figura permitirá a los pequeños mineros desarrollar sus actividades en una forma financieramente menos riesgosa, adquirir maquinaria (e.g de fundición) de manera compartida y competir más eficientemente con capitales mineros más importantes.

Se necesitará organizar el sector de la minería artesanal y de pequeña escala para que esta incluya todas las etapas de la producción de los minerales.

El Estado se propondrá comprar un conjunto de empresas mineras existentes para desarrollar una red de MAPE públicas, la cual podrá ser una gran herramienta de promoción de prácticas nuevas y minimizadoras de impactos, así como de la necesidad de producir minerales dentro de los rangos impuestos por las necesidades domésticas.

La necesidad de una vigilancia de carácter democrático

Al contrario de los actores transnacionales a cargo de la megaminería, la minería artesanal y de pequeña escala le corresponde a las Pymes nacionales, en ciertos casos de tamaño muy reducido. Estas últimas son menos capaces de evadir las leyes ecuatorianas que actores transnacionales.

Sin embargo, será preciso establecer un sistema estricto de control de la minería artesanal y de pequeña escala. Los mecanismos de control deberán implicar expertos del gobierno e independientes, así como una amplia gama de representantes de la sociedad civil (comunidades posiblemente afectadas, movimientos sociales locales y nacionales, pueblos indígenas, etc.).

De nuevo, el papel del Estado y de las autoridades públicas regionales será la promoción de estos espacios de validación de las actividades mineras.

Nos parece clave la transparencia de las autoridades públicas y de la comunidad de productores. Se deberán publicar de manera periódica los registros de la producción de minerales, y en qué medida esta se adecua a las metas propuestas, las cuales deberán al igual ser difundidas de manera regular. Al igual que en el sector petróleo, se necesitará una transparencia completa en las recaudaciones por concepto de regalías e impuestos.

Al igual las empresas y el Estado deberán publicar de manera regular los presupuestos asociados a las diferentes actividades de promoción de la minería minimizadora de impactos, a la financiación de proyectos de rehabilitación de los sitios cerrados o de equipamiento de los sitios existentes, así como las diversas rentas sacadas por la producción mineral.

Incentivar el reciclaje

Existe en el Ecuador una gran variedad de productos importados con altos contenidos de varios tipos de minerales. Estos productos podrían representar una fuente posible de abastecimiento de las necesidades ecuatoriana en minerales. Pensamos por ejemplo en la posibilidad de reciclar el aluminio o el cobre contenidos en los bienes de consumo corrientes.

Cabría evaluar el potencial de dicho medio, pero en ciertos contextos, se habla ya de “yacimientos urbanos” para calificar a los desechos y sus contenidos en minerales, principalmente metales. Sería preciso promover, dentro de sistemas locales de clasificación de los desechos domésticos, favorecer la recuperación de los elementos susceptibles de proveer cantidades sustanciales de minerales útiles.

La instalación de tal sistema presenta seguramente retos en términos de salud ocupacional. Para favorecer la aplicación de las mejores condiciones, así como una gestión local de la clasificación –y posiblemente de la transformación del material a reciclar– podría implementarse un sistema cooperativista. Esta actividad podría también ofrecer una fuente apreciable de empleo.

La gestión pública, por ejemplo, de los aparatos tecnológicos y automóviles usados generaría oportunidades para producir cantidades sustanciales de minerales. El establecimiento de tal sector será sin embargo una tarea complicada, ya que el Ecuador por el momento no cuenta con los recursos humanos y técnicos para desarrollarlo.

Una parte de las operaciones de beneficio de estos productos podrían ser trasladadas a las zonas mineras forzadas al cierre.

Conclusión

Del desarrollismo senil al postextractivismo

En este documento, nuestro tema de fondo radica en empezar por no seguir extendiendo y profundizando un modelo económico extractivista, es decir primario-exportador. Se trata de salir de este modelo que cumple con esa modalidad de acumulación, que sobrevalora la renta de la Naturaleza y no el esfuerzo del ser humano, que destroza sistemáticamente el medio ambiente y afecta gravemente las estructuras sociales y comunitarias, que prefiere el mercado externo y descuida el mercado interno, que fomenta la concentración de la riqueza y margina las equidades.

El Sumak Kawsay, el proyecto de sociedad que rescatamos en estas páginas, es la vía que identificamos para esta urgente salida. Se basa en una serie de principios que entran en contradicción con el pensamiento y la vida moderna. El reto consiste en establecer una estrategia de transición que converge hacia este ideal, sabiendo que será difícil –y tal vez imposible– alcanzarle plenamente. Tampoco es necesariamente deseable, ya que el Sumak Kawsay es un concepto dinámico cuyas metas concretas pueden variar a lo largo del tiempo.

Los principios fundamentales, sin embargo, no variarán. La equidad, solidaridad y complementariedad son los principios sociales que nos guían en la búsqueda del Sumak Kawsay. Estos principios suponen una gestión desde lo local y una descentralización de los poderes de decisión. La unidad fundamental desde la cual queremos al final que se gestione la vida política, económica y social es la comunidad, una unidad inserta en un Estado plurinacional, el cual implica un verdadero respeto y reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y naciones, a sus propias

formas de organización política –autogobierno– y al derecho a decidir sobre las actividades que se realizan en su territorio.

El abandono de la dualidad ser humano/Naturaleza para una concepción del ser humano como parte de la Naturaleza es también una condición necesaria de la implementación del Sumak Kawsay. Esta ruptura con el antropocentrismo implica el abandono el más pronto que posible del extractivismo y de la renuncia inmediata a remitirse a los viejos conceptos de desarrollo. El marco conceptual del Sumak Kawsay provee más bien una alternativa al desarrollo, una alternativa que nos permite plantear un camino coherente hacia una salida definitiva de una economía extractivista dependiente, no sustentable y desindustrializada, orientada a la exportación sistemática de materia prima barata y sobre orientada al mercado externo, con masivas exclusiones y pobreza, concentradora del ingreso y la riqueza, depredadora y contaminadora.

El Sumak Kawsay nos permite plantear los pilares de una economía verdaderamente sustentable, diversificada en productos y mercados, industrializada y terciarizada con capacidad de generación de empleo de calidad, equitativas, respetuosas de las culturas y en armonía con la Naturaleza.

En este texto, planteamos algunas pistas que siguen estos principios, tomando en cuenta la urgencia de salir de la trampa del neoextractivismo actualmente promovido en el Ecuador, el cual asegura meramente una continuidad en los modos de acumulación y la división internacional del trabajo. Necesitamos una ruptura con el neoextractivismo vigente que no sale del viejo paradigma del desarrollo, y sigue concibiendo a la Naturaleza como una fuente de recursos para aprovechar y un espacio a dominar. Por la vía del “desarrollismo senil” (Martínez Alier, 2008), es decir manteniendo y peor aún profundizando el extractivismo, no se encontrará la salida.

El camino de transición hacia un postextractivismo del Sumak Kawsay que proponemos recoge iniciativas existentes, como la de iniciativa Yasuní-ITT, que parte de una necesidad de mantener, sin destruir, aquellos territorios que poseen gran cantidad de valores ambientales y sociales, donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de biodiversidad. La iniciativa Yasuní-ITT necesita sin embargo de una voluntad política fuerte para imponerse como un proyecto pionero e inspirador para el resto del mundo. Proponemos, también, enfocar la acción sobre el fortalecimiento de lo local, dándole un papel de protector/impulsor de proyectos locales a un Estado soberano con una institucionalidad reforzada. Requerimos un esfuerzo de descentralización del Estado y una organización de la institucionalidad destinada a fortalecer las propuestas desde abajo, al mismo tiempo que coordina la transformación a nivel nacional y la articula con procesos regionales.

Nos hemos enfocado en tres sectores claves que se necesitaría embarcar en prioridad en un proceso de transición hacia el Sumak Kawsay. Primero, planteamos repensar el modelo energético, a través de una modificación de la matriz energética, basada en la producción local y descentralizada a partir de microcentrales usando tecnologías y fuentes de energía alternativas, en el uso eficiente de la energía disponible, en una mejor gestión de los precios. En un segundo tiempo, repensamos el modelo petrolero, a través de una democratización y una auditoría integral del sector, de una disminución de la explotación y de un moratorio sobre las nuevas explotaciones, de la producción local de derivados, la eliminación de subsidios, disminución de la dependencia a los combustibles fósiles, el rescate de experiencias locales y una necesaria reforma tributaria. Finalmente, planteamos la elaboración de un modelo minero a partir de la estructura existente del sector —es decir, una minería artesanal y de pequeña escala— que permita el abastecimiento de las necesidades locales. Este modelo

implica la prohibición de la minería a gran escala, y una serie de restricciones a en términos físicos, ambientales y económicos.

Para lograr poner en marcha la transición, requerimos en todos los casos una nueva y vigorosa institucionalidad estatal, apuntando a un marco institucional nacional reforzado, que permita una gestión descentralizada, democrática y transparente de la salida del extractivismo. También requerimos una concepción estratégica para participar en el mercado mundial, y por lo tanto esquemas y organizaciones reguladoras, así como mecanismos debidamente establecidos que permitan procesar estas transiciones.⁴⁴

En la mira está, entonces, la consecución de un nuevo perfil de especialización productiva para tener países con sostenimiento interno, en base a un consenso amplio de los diversos intereses. Para lograrlo hay que robustecer el mercado interno y el aparato productivo doméstico, así como generar estrategias de transición productiva que permitan que la actividad extractiva pierda importancia económica.

De igual manera, se precisa una amplia y verdadera participación social para enfrentar el reto del extractivismo a gran escala. Esto conlleva imperativamente a procesar una profunda y radical redistribución de los ingresos mineros y petroleros, tanto como de los otros ingresos y activos existentes en una economía. Las

44 En los últimos años se ha empezado a discutir cada vez más sobre cómo impulsar estas transiciones. Son varios los autores que han aportado diversas ideas y sugerencias en este campo, entre otros: Eduardo Gudynas, Joan Martínez Alier, Enrique Leff y Roberto Guimarães. A modo de ejemplo concreto, véase el aporte múltiple editado por Alejandra Ayarza y Eduardo Gudynas en Perú (2011). Algunos aportes sugerentes para construir estas transiciones se podrían obtener del informe sobre el tema elaborado por OXFAM (2009). El autor de estas líneas también ha planteado algunas reflexiones para la construcción de una economía postpetrolera (Acosta, 2000 o 2009). Cabe anotar que en el año 2000 se publicaron, por parte de varios autores, varias propuestas para construir un “Ecuador postpetrolero”.

inequidades⁴⁵ deben ser abatidas, puesto que estas son la base de los autoritarismos de todo tipo en todos los ámbitos de la vida humana.

En resumen, el Sumak Kawsay sintetiza una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano, en diversidad y armonía con la Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en el mundo. La parte intrínseca de esta propuesta, con proyección incluso global, está en dar un gran paso revolucionario que nos infunda a transitar de visones antropocéntricas a visiones sociobiocéntricas, con las consiguientes consecuencias políticas, económicas y sociales.

45 Inequidades del tipo económica, social, intergeneracional, de género, étnica, cultural, regional, especialmente.

**¿CÓMO CONCILIAR LOS DERECHOS
LABORALES CON LOS DERECHOS
DE LA NATURALEZA?
UN DEBATE PENDIENTE**

De la fábrica al territorio

Dimensiones sociales y ambientales en las resistencias de los trabajadores colombianos

Tatiana Roa Avendaño¹

A la memoria de Aury Sará Marrugo

Tal vez Colombia sobresale en el continente por el hecho de que trabajadores y trabajadoras se han vinculado de manera activa y crítica a las luchas contra el extractivismo o a las problemáticas desatadas por él. De allí la importancia de reflexionar al respecto. Durante décadas, sus resistencias, principalmente las de los obreros del petróleo, se centraron en la defensa del patrimonio nacional y en impulsar una industria propia que atendiera las necesidades del país, pero en los últimos años, se han renovado, al incluirse en sus contenidos la presión contra el modelo extractivo.

Esas nuevas formas de resistencia se han nutrido con los cambios de la dinámica social general: se suman actores a las acciones en torno al patrimonio natural del país y hay demandas y narrativas inéditas como la defensa de la Naturaleza, particularmente del agua, y de la vida de los afectados por la actividad petrolera, el rechazo a la contaminación y al saqueo, la protesta por el despojo de sus tierras, la exigencia de no explotación al petróleo por ser la sangre de la Tierra, la defensa del territorio y otras.

En síntesis, se complejiza el panorama de enfrentamiento social por la extracción de bienes de la Naturaleza en el país, especialmente por la creciente dinámica de los movimientos sociales en los que la presencia de los trabajadoras y los trabajadores de los sectores

1 Ambientalista colombiana, coordinadora general de Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia.

petroleros y mineros es fundamental. Al respecto, la Unión Sindical Obrera (USO), organización sindical de la industria del petróleo creada hace 60 años, ha desempeñado un rol definitivo en conflictos de altísimo interés nacional, como las actuales denuncias sobre lo que sucede en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, donde se produce cerca de la mitad del hidrocarburo del país. Lo particular en esta ocasión es que la USO ha denunciado, junto a condiciones de explotación de los trabajadores, el despojo de tierras a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas, y los conflictos ambientales que bullen en esta región.

También se destaca el papel del sindicato que aglutina a los trabajadores de la industria del carbón, la organización sindical Sintracarbón, particularmente el de los obreros que laboran en el complejo carbonífero más grande del continente, El Cerrejón, situado en la península de La Guajira, al norte del país. El sindicato Sintracarbón ha liderado, conjuntamente con comunidades locales e indígenas, la oposición al desvío del río Ranchería, proyectado por las transnacionales mineras dueñas del complejo, para duplicar sus reservas carboníferas y ampliar en 30 años más la producción actual de la mina.

Los sindicatos Sintramincercol (Sindicato de trabajadores de la minería colombiana) y Sintraemsdes (Sindicato de trabajadores de las empresas de servicios públicos), son otras dos organizaciones sindicales que es útil presentar en este panorama. La primera, donde se agrupaban los trabajadores de la extinta empresa minera estatal, Minercol,² denunció la forma en que las empresas transnacionales impusieron al país los últimos códigos de minas.³

2 Aunque el Estado colombiano liquidó la empresa Minercol en el año 2004, los miembros del sindicato lo mantienen vivo y además crearon la Corporación Trabajadores por la Tierra para el impulso de dinámicas en defensa de la vida.

3 Las investigaciones que sustentan sus denuncias han sido promovidas especialmente por Francisco Ramírez, abogado y líder de esta organización.

El sindicato Sintraminercol reveló cómo estos códigos mineros se diseñaron para el beneficio de las empresas mencionadas y que las zonas del conflicto armado colombiano “casualmente” coinciden con las regiones mineras. Entre tanto, en la organización Sintraemsdes, los trabajadores, se articularon a grupos ambientalistas, maestros, organizaciones barriales, de servicios públicos, de profesionales de la ingeniería y la geología y de medianos grupos económicos como los comerciantes, en torno a la defensa del páramo de Santurbán, respondiendo oportunamente a la amenaza de explotación de oro a cielo abierto que pretendía avanzar en el departamento de Santander, al nororiente del país, amenazando el suministro de agua potable de la ciudad de Bucaramanga y la región circundante.

Entender el por qué de estas luchas, los motivos que llevan a los trabajadores a oponerse a un proyecto extractivo aún cuando esto pueda afectar su fuente de trabajo, la inclusión en sus narrativas de cuestiones como la defensa del ambiente, el respeto por las relaciones armónicas entre sociedad y Naturaleza, la articulación con sectores ambientalistas, indígenas y campesinos, podría darnos elementos para ampliar los debates sobre el extractivismo y posibilitar un papel activo de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Este texto buscará dar algunas pistas, a partir de la reflexión sobre las experiencias entre ambientalistas, comunidades locales, organizaciones sociales y organizaciones de trabajadores en Colombia, en escenarios que han permitido su articulación.

La USO: en defensa de la riqueza energética

En Colombia, las pocas conquistas de una política petrolera soberana y en favor del país son obra de los trabajadores de la industria del petróleo. Por años, su sindicato actuó en la clandestinidad, pues fue duramente perseguido dados sus propósitos: crear una empresa nacional que garantizara que la riqueza petrolera se quede en el país para beneficio del pueblo colombiano, y no para

seguir regalándola a las empresas transnacionales que se establecieron en Colombia desde inicios del siglo xx. En 1951 lograron constituir la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, después de una prolongada huelga, en la que demandaban la reversión de una concesión petrolera: la concesión de Mares.

Muchos obreros entregaron su vida en ese empeño, hecho de la mano del movimiento social de Barrancabermeja, primera ciudad petrolera del país, que ha acompañado muchas otras huelgas. La USO ha defendido a la empresa Ecopetrol como patrimonio público ante las acciones que desde finales del siglo xx la empezaron a desmembrar para luego privatizarla parte por parte. Pero también ha denunciado otras situaciones como la destrucción de la laguna de Lipa, en el departamento de Arauca, y el despojo del territorio de las comunidades indígenas Sikuanis, para fin de que la empresa Occidental pudiera explotar allí el petróleo. La USO expuso además las consecuencias de las lesivas cláusulas económicas de ese contrato con la empresa estadounidense, las terribles condiciones ambientales y sociales que impuso el proyecto sobre sus pobladores y el territorio, el incremento del conflicto y las violaciones cada vez más acentuadas a los derechos humanos con la llegada del proyecto petrolero. El informe que algunos de sus dirigentes regionales escribieron sobre como poco a poco, se fue destruyendo la laguna considerada un santuario de fauna y flora de los pueblos indígenas de esta región, ha sido un referente para diversos trabajos de investigación y denuncia.

A finales del siglo xx, la USO también acompañó la resistencia del pueblo U'wa asentado en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá, contra la misma transnacional estadounidense que opera el Campo Caño Limón. Esta se constituyó en su momento en una de las más emblemáticas luchas contra el extractivismo en el mundo. En agosto de 2004, el Ejército de Colombia asesinó a tres sindicalistas que acompañaron las movilizaciones sociales de Arauca en solidaridad con el pueblo U'wa

en Caño Seco, municipio de Saravena (Arauca). Este estamento pretendió que el hecho pasara como un combate.

Los indígenas U'wa que habitan una región cercana a Caño Limón vieron en Arauca el espejo de lo que podrían sufrir y levantaron una interesante lucha con fundamentos culturales y espirituales, que logró movilizar a todos los sectores sociales de Arauca. Y encontraron en la USO, seccional Arauca, un aliado importante. Esta resistencia cultural atrajo a gran parte de la juventud del país e impulsó a los movimientos sociales colombianos que luchan contra la presencia de las empresas transnacionales mineras y petroleras. Sin embargo, cuando la Occidental abandonó el proyecto y éste quedó en manos de la estatal Ecopetrol, no fue igual el apoyo, sin duda reflejando las contradicciones internas dentro del sindicato. Pero no por esto deja de tener importancia este proceso social.

Recientemente, la USO ha denunciado las condiciones del despojo en Puerto Gaitán, departamento del Meta, donde está el proyecto petrolífero más grande del país. Con sus acciones y movilizaciones han defendido a los trabajadores petroleros contratistas que laboran en condiciones que recuerdan las primeras décadas de la industria petrolera (y que por las mismas precarias condiciones laborales no están sindicalizados), y también a comunidades campesinas e indígenas locales afectadas por la actividad extractiva. La empresa Pacific Rubiales, dueña de los campos, levantó luego de estas jornadas que tuvieron impacto y resonancia, una agresiva campaña publicitaria para mejorar su deteriorada imagen. El significado de estas últimas jornadas es la lucha contra el enclave petrolero moderno y el despojo; aspectos que se expresan en la expulsión de indígenas y campesinos de sus tierras y vida y en la pérdida de parte de lo que han sido lo que ha caracterizado su trabajo con todas las conquistas logradas en décadas anteriores.

¿Cómo entender el interés de la USO por los asuntos ambientales, sociales y culturales? La respuesta a esta interrogante puede comenzar a buscarse en la interpretación de Renán Vega Cantor, estudioso de esta organización. La USO, dice, no puede catalogarse como una institución exclusivamente sindical. “Desde sus comienzos, fue denominada Sociedad Unión Obrera o la Unión (de) Obremos, con lo cual se enfatizaba que la lucha de los trabajadores iba más allá de una reivindicación puramente gremial y sindical, ellos encarnaban un proyecto laboral y vital propio, que los diferenciaba de otros sectores sociales” (Vega, 2009). Ese punto de vista ayuda a comprender su identificación con las demandas de los pobladores de Barrancabermeja por servicios públicos, acceso al agua, mejores condiciones de vida para las gentes que llegaron a este enclave petrolero y ayuda también a entender el por qué del impulso para la participación del pueblo colombiano en los procesos de paz: mediante una negociación colectiva la USO consigue la creación de una *Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz* (Asapaz)⁴ como un espacio amplio que dio cabida a varios sectores de la sociedad colombiana, incluidos los empresarios nacionales.

Sintraminercol y “el dedo en la llaga”

En 2004, el sindicato Sintraminercol publicó el libro *La gran minería en Colombia. Las ganancias del exterminio*, trabajo serio,

4 “La Asamblea [...] surge en una coyuntura muy específica, donde los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Sindical Obrera se preocuparon por el tema de la paz, en un momento histórico que era muy importante para el país, cual fue el período de 1996 a 1998, fundamentalmente en el gobierno de Pastrana, cuando nace la propuesta de negociación con las FARC en el Caguán. Ahí se pretendió que la sociedad civil se organizara para que presentara sus propuestas frente a la solución política y negociada al conflicto, que no era solamente asunto de decisión de los actores armados y el gobierno, sino también de la sociedad civil. Esta Asamblea nacional, tuvo la participación de más de tres mil personas y una multitud de organizaciones para proponer una agenda mínima de paz”, en <<http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/>>

riguroso y crítico sobre el poder de las empresas mineras y su relación con el conflicto social y armado del país. En él se encuentran elementos contundentes que develan los intereses económicos de la guerra colombiana. En sus propias palabras, se hacen evidentes “las relaciones entre la industria, el gobierno colombiano, sus fuerzas militares, sus paramilitares, el gobierno de los Estados Unidos, sus multinacionales, sus mercenarios, su Ejército y sus agencias, y el entramado que todas han tejido para garantizar la inversión extranjera” (Sintraminercol, 2004: 19-20).

La organización Sintraminercol ha sido uno de los sindicatos más activos en el acompañamiento tanto de los trabajadores mineros formales e informales, como de las comunidades y autoridades locales ante los abusos frecuentes en las regiones mineras. Su amplio conocimiento sobre el sector y la formación académica de muchos de sus dirigentes puesta al servicio de las comunidades afectadas por la minería, ha sido muy valorada por las organizaciones sociales colombianas.

El libro sobre la gran minería fue resultado de una investigación de varios años ligada a la intervención directa en el sur del departamento de Bolívar. Aquí se implementó desde finales de los noventa un proyecto financiado por la Corporación Eco-fondo, para mejorar las condiciones técnicas y ambientales de los pequeños mineros. Sintraminercol, dice el sacerdote jesuita Javier Giraldo en el prólogo del libro,

(...) [es un] conocedor [por] oficio de la política minera del Estado [que quiso] extender una mirada libre de presiones y condicionamientos sobre la trágica realidad que nos envuelve, para poner al descubierto las profundas relaciones que se dan entre las violaciones a los derechos humanos y la política minero-energética del Estado colombiano (Giraldo, Javier, 2004: 17 En Sintraminercol, 2004).

La defensa del páramo de Santurbán

La defensa de Santurbán hay que entenderla como una resistencia por el agua. A la vez, debe verse como el momento que recoge los acumulados de las organizaciones ambientalistas, sindicales y de defensa de los servicios públicos por hacer del agua un derecho básico de los seres humanos y de los demás seres vivos. La máxima expresión de esa saga es el referendo sobre el agua, que como “proceso pedagógico y de participación, indudablemente reforzó la defensa de los páramos y el no rotundo a la extracción minera a gran escala, promovido por diversos movimientos comunitarios, rurales y urbanos en varias partes del país” (Roa, 2012: 407).

Los trabajadores de Sintraemdes dan el primer paso en iniciar la resistencia de Santurbán, convocando a organizaciones ambientalistas y sociales del departamento y alertando sobre las implicaciones que tendría este proyecto minero sobre la vida de la ciudad. Poco a poco confluyen diversos actores sociales en este espacio, particularmente pobladores urbanos, y se constituye el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán (hoy Comité en Defensa del Agua), formado por ambientalistas, jóvenes, mujeres, sindicatos, movimientos estudiantiles, barriales y académicos.

Posteriormente, en un espacio más amplio que el Comité, acuden la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, y algunos partidos políticos y se hace una alianza muy fuerte que consigue poner frenos temporales a los proyectos mineros. Esta experiencia introduce otro repertorio en la contienda social, en el que el agua es el elemento movilizador, particularmente para las jornadas antimineras en los páramos de Santander.

Son muchos los aportes del sindicato en esta lucha: de un lado, sus investigaciones han entregado argumentos a la contienda. De

otro, es en su sede donde se dan cita semanalmente los activistas que defienden el páramo. Todo esto hace que Sintraemdes sea uno de los actores más relevantes en la defensa del páramo de Santurbán, donde se destaca la unificación de sectores que antes no lo habían estado y que se juntan con el único objetivo de detener la embestida y el inicio de los trabajos de extracción de oro en el páramo.

La defensa del río Ranchería

En 2010, el gobierno colombiano decidió modificar el régimen de regalías y recuperó el control sobre ellas para la administración central. Esto significó despojar a las regiones del control que hasta ese momento tenían sobre los recursos provenientes de las regalías. La medida provocó la movilización en todas las zonas productoras de riquezas mineras y energéticas.

En el departamento de La Guajira, se creó el Comité Cívico Departamental en Defensa de las Regalías, en el que participaron varias organizaciones sociales, entre ellas, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, el del magisterio, el de los trabajadores del Sena (ente de educación aplicada) y el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La presencia de los trabajadores de El Cerrejón⁵ fue determinante y fortaleció una articulación amplia y plural que permitió romper desconfianzas entre los sectores. Hubo varias actividades y acciones como un paro departamental de 24 horas, que también paralizó la producción de

5 El Cerrejón propiedad de las transnacionales BHP Billington, Anglo American y Xstrata es el más grande complejo carbonífero del continente, está ubicado en el departamento de la Guajira. De acuerdo a información de la empresa, laboran alrededor de 10 mil trabajadores, está compuesto por una mina a cielo abierto que produce anualmente 32 millones de toneladas de carbón, un ferrocarril de 150 km de largo desde la mina hasta Bahía Portete, al norte de la Guajira, y un puerto marítimo con capacidad para buques de hasta 180 mil toneladas, en <www.cerrejon.com>

carbón. Aunque se dieron diversas movilizaciones en el país contra la ley de regalías, el Congreso de la República terminó aprobándola.

Las alarmas se prenden nuevamente en el departamento con el anuncio en 2011 por parte de la Empresa El Cerrejón de ampliar la producción de carbón a 60 millones de toneladas, para lo cual se requiere desviar el cauce del río Ranchería en un trecho de 26 kilómetros. Los nuevos tajos mineros están en el lecho del río y ello convoca nuevamente al comité, que amplía su nombre a Comité Cívico de Defensa del Río Ranchería, el Manantial de Cañaverales y las Regalías. La articulación no fue nada fácil porque, igual que antes, había que generar confianzas entre las organizaciones y superar desconfianzas. El comité lo conformarían sindicatos, organizaciones sociales, académicos, organizaciones indígenas y personajes del mundo político.

Se destaca la decisión que toma Sintracarbón en Asamblea General de Delegados, cuando la mayoría se opone a la desviación del río. Aunque su postura podía perjudicar su futuro como trabajadores, para los sindicalistas pesó más su condición de habitantes de un territorio al que han visto destruir en tres décadas a consecuencia del desarrollo minero, mientras su pueblo se hunde en la miseria.⁶

Pero los trabajadores han visto más: el destrozo del río y de sus bosques, y el deterioro de sus propios cuerpos. Desde cuando el complejo carbonífero inició explotación hay en la actualidad “más de 800 trabajadores con patologías resultantes de la actividad minera [...]. Pero lo más grave es que solo al 20% de ellos se les ha reconocido sus patologías como de origen profesional. El resto adelanta litigios jurídicos para demostrar que éstas son producto del trabajo que realizan en la mina” (Escuela Nacional Sindical, ENS, s.f.).

6 La Guajira es considerado uno de los departamentos con más pobreza en el país.

Aunque la empresa anunció recientemente que suspenderá temporalmente los estudios de la desviación del río Ranchería, la dinámica social logró movilizar a amplios sectores sociales regionales y nacionales y construir una firme oposición a este proyecto, que podrá fortalecerse en caso de que se retome.

Reflexiones finales

Desde tiempos remotos, el Estado colombiano ha puesto las riquezas nacionales al servicio del capital transnacional, incluso poniendo estructuras militares legales e ilegales para destruir toda expresión social que se oponga a esta lógica económica. De esta manera, las políticas gubernamentales mineras y energéticas se han formulado en favor de las empresas transnacionales, mientras a los pueblos mineros y petroleros solo les queda miseria, destrucción y abandono. Es una realidad que no puede ocultarse, está en los ríos destrozados en el sur del Cesar, en los humedales desaparecidos de nuestra Orinoquia, en los pueblos abandonados del Pacífico, en la miseria de la Jagua de Ibírico y la Loma en el Cesar, en los cuerpos enfermos de los trabajadores mineros, en las vidas perdidas en accidentes laborales de los trabajadores petroleros. Esta condición de expoliación ha radicalizado en los trabajadores del sector su conciencia de clase, por ello han luchado por hacer que la riqueza minera esté en función del bienestar de las mayorías pobres del país, han demandado políticas y contratos más favorables para la nación, pero en los tiempos más recientes han tomado decisiones incluso más radicales, como llegar a oponerse a un proyecto porque éste provoca nefastas condiciones para los pueblos o para la Naturaleza, como el caso de Santurbán o la desviación del río Ranchería.

Es decir, de la defensa de las reivindicaciones propias de los trabajadores, se pasó a la defensa de la riqueza minera para el desarrollo del país y de ahí, a la defensa del territorio.

¿Qué otras cosas sugieren estas luchas?

Para comenzar, es importante resaltar la histórica lucha de los trabajadores colombianos en la defensa de su salud, que en algunos casos derivó en la creación de secretarías de Salud y Ambiente en ciertos sindicatos y en la del Departamento de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Fueron muchas las organizaciones que acompañaron estos procesos de los trabajadores, como Cestra (Centro de Estudios del Trabajo), Censat Agua Viva (Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo, Agua Viva), la ENS (la Escuela Nacional Sindical), el Grupo Ferguson, el Instituto Nacional Sindical (INS), que durante los pasados años 80 convocaron conjuntamente con los trabajadores los foros por la salud de los trabajadores.

Al pensar en la problemática de su salud, los trabajadores dieron un primer paso para avanzar en una perspectiva más amplia: ir de la fábrica al territorio. Este esfuerzo fue apoyado en varios casos por organizaciones del ambientalismo popular como Censat Agua Viva y los Grupos Ecológicos de Risaralda (GER), que han tenido una historia de trabajo con organizaciones sindicales. Este enfoque del trabajo ambientalista colombiano es particular en la región, donde han sido pocas las experiencias de articulaciones de organizaciones de trabajadores con organizaciones ambientalistas para trabajar conjuntamente.

También es importante destacar el papel que ha desempeñado desde hace varios años la formación que impulsa en particular la USO para sus afiliados y otros trabajadores, sus escuelas han incluido siempre temáticas ambientales y muchos de los dirigentes de hoy adelantaron investigaciones que en algunos casos permitieron profundizar en los análisis ambientales. Más recientemente, estos ámbitos han abierto espacios para otros públicos, orientados por su organización para la formación: la Corporación Aury Sará incorpora también la temática ambiental en los cursos que ofrece, abriendo así un diálogo entre trabajadores y

dirigentes del movimiento social y estudiantes que son fundamentalmente su público.

Sin embargo, puesto que las organizaciones sindicales no son monolíticas, en su interior se expresan las tensiones de las diversas fuerzas políticas que hacen presencia en ellas, y de esta misma manera, es posible entender las dificultades para la construcción de consensos o avanzar.

Un punto a favor en el caso colombiano es la dinámica de articulación del movimiento social del país en espacios amplios como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Coordinadora de Movimientos Sociales Colombianos (COMOSOC) y la Minga Comunitaria Indígena, Negra y Campesina, que han permitido la articulación y la construcción de agendas comunes en las que diversos sectores sociales, incluidos los trabajadores, construyen alianzas y avanzan en la comprensión del por qué de ciertas demandas que reclaman la defensa del territorio y la lucha por la tierra. De esta forma, los trabajadores además han logrado dimensionar en las luchas ambientales una lucha política en la que ellos también pueden y deben ser sujetos activos y transformadores.

Finalmente, es necesario recordar que todas estas luchas han producido un costo enorme a los trabajadores y las trabajadoras colombianas. Han muerto asesinados miles de sindicalistas, otros han sufrido atentados que los han obligado a exiliarse, sindicalistas de base han tenido que desplazarse forzosamente, han sufrido la estigmatización política, la USO fue perseguida durante muchos años y varios de sus dirigentes estuvieron presos ilegalmente hasta que finalmente fueron declarados inocentes, luego de haber debilitado a la organización sindical para poder avanzar en la privatización de Ecopetrol. Además, la USO fue proscrita en Casanare cuando la British Petroleum operaba los campos de Cusiana y Cupiagua, y los intentos de abrir una subdirectiva en esta región costaron la vida de varios trabajadores; el presidente

de Sintraminercol ha recibido varias amenazas contra su vida y tres dirigentes sindicales de Arauca fueron asesinados en 2004 luego de las luchas contra la Occidental. Grupos paramilitares asesinaron a varios trabajadores de la Drummond y estos casos se han denunciado en los Estados Unidos por la presunta vinculación de la empresa minera.

Los aprendizajes que nos puedan ofrecer las experiencias de los trabajadores colombianos pueden resultar provechosos para avanzar en las discusiones continentales sobre el modelo extractivista en la región. La presencia de los trabajadores es más que nunca necesaria e indispensable.

Terminando de escribir este artículo el 11 de diciembre, fue asesinado el trabajador petrolero Milton Enrique Vivas Parra. El líder sindical de la USO venía denunciando las condiciones de explotación de trabajadores y comunidades en Puerto Gaitán, Meta.

Tensiones entre la reivindicación de trabajo y la defensa de los derechos de la Naturaleza⁷

Equipo CEDINS

Miriam Lang y Alejandra Santillana aportaron con comentarios al presente texto.

Una pregunta se extiende por las regiones de Colombia: ¿Cómo salir del extractivismo? Esta cuestión se discute con creciente urgencia al interior de las organizaciones campesinas, comunidades afro e indígenas, de los ambientalistas y de los sindicatos de los sectores minero y energético. La pregunta sobre las alternativas al extractivismo no se puede abordar con ligereza pues obliga a repensar los programas de las organizaciones populares, sacando a flote tensiones y discusiones que habían permanecido sumergidas durante años.

La causa de esta urgencia es la necesidad de responder a la intensa ofensiva de las industrias extractivas contra los territorios de América Latina. Nuestra época está marcada por los proyectos de acumulación de capital que tienen la pretensión de explorar, extraer o apropiarse de diversos bienes de la Naturaleza: minerales, hidrocarburos, madera, biodiversidad, carbono, oxígeno, agua y cultivos, afectando la vida y el habitar en los territorios.

Las amenazas latentes y manifiestas del extractivismo no generan las mismas reacciones en todos los casos, por el contrario, las visiones y las alternativas de los grupos sociales tienden a diferir. Encontramos, por ejemplo, a pequeños y medianos empresarios

7 Este ensayo es el resultado del trabajo colectivo convocado por la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular-Instituto Nacional Sindical (CED-INS) (<www.cedins.org>) y el Grupo Permanente de Trabajos sobre Alternativas al Desarrollo, particularmente de los debates realizados entre Alexandra Bermúdez, Alfredo Burbano, Andrea Cely, Andrés Idárraga, Alejandro Mantilla, Elizabeth Martínez, Milena Ochoa, Sandra Rátiva y Cristóbal Silva.

angustiados por la inminente competencia foránea. A pequeños mineros y aserradores que consiguen su sustento de la extracción a pequeña escala, rechazando las grandes explotaciones. Comunidades campesinas que denuncian todo tipo de minería, en pequeña, mediana o gran escala, por los daños a los suelos y al agua. También encontramos ambientalistas que se oponen a cualquier iniciativa que busque la extracción.

Estos debates tienen serias implicaciones al momento de construir alternativas políticas, organizativas y de movilización. En el sur de Bolívar, región ubicada al norte del país, o en el departamento del Chocó, ubicado al occidente, las comunidades de pequeños mineros se enfrentan al mismo tiempo a medianos empresarios y a la transnacional Anglo Gold Ashanti, pero reciben críticas de ambientalistas que cuestionan sus prácticas extractivas tradicionales. Los trabajadores carboneros y petroleros denuncian la agresiva política antilaboral y antiecológica de empresas como la Drummond o la Pacific Rubiales. En los departamentos del Cauca y Nariño, al suroccidente del país y en la región del Catatumbo, al nororiente de Colombia, comunidades campesinas e indígenas se oponen a la minería. En el Cauca, diversas comunidades campesinas, afro e indígenas se enfrentan entre ellas por la propiedad y uso de la tierra, que incluye en más de una ocasión, extracción artesanal de oro.

Las discusiones mencionadas no se circunscriben a la defensa de distintos intereses frente al territorio, pues el extractivismo también ha cuestionado varios puntos clave de los programas clásicos de la izquierda. En buena medida esos programas se estructuraron sobre el discurso de la nacionalización y la estatización de los recursos naturales sin poner en duda el modelo productivista; en su base estuvo la concepción de la Naturaleza como objeto a dominar y los territorios como espacios a transformar para alcanzar el anhelado progreso. Estos planteamientos hoy parecen obsoletos a la luz de las nuevas realidades.

Así encontramos dos líneas de discusión. En primer lugar, las reacciones generadas por los intereses amenazados por el extractivismo. En segundo lugar, la urgencia por replantear los programas clásicos de transformación social y política que parecieran obsoletos ante las realidades de nuestro tiempo. Este ensayo pretende discutir estas dos cuestiones para mostrar la complejidad de las alternativas al extractivismo.

De las criaturas a los objetos

En el párrafo que abre *El Capital*, Marx sostiene dos afirmaciones complementarias: a) La riqueza de las sociedades capitalistas se presenta como una inmensa acumulación de mercancías y b) la mercancía individual se presenta como la forma individual de esa riqueza (Marx, 2001: 43). Pensemos en una persona cualquiera en algún lugar del mundo, lo más probable es que esa mujer o ese hombre esté rodeado de artículos que se pueden comprar y vender: necesita ropa para cubrirse, vivienda para habitar, utensilios para preparar sus alimentos, aparatos electrónicos para comunicarse. En la mayoría de los casos, esos objetos son mercancías. Incluso estos ejemplos valen para buena parte de las comunidades indígenas o campesinas que viven en regiones apartadas de los grandes centros urbanos.

La gran discusión radica en explicar cómo los objetos útiles, que usamos a diario, dejan de ser meros utensilios para convertirse en mercancías. Aquí entra la famosa distinción entre *valor de uso* y *valor de cambio*. Un objeto es útil para las personas que lo pueden aprovechar para algo, su utilidad se define por sus propiedades. Un lápiz sirve para escribir y para dibujar, pero es inútil para esculpir el mármol; todos los objetos son diferentes de acuerdo con el propósito al que sirven, de eso se trata su *valor de uso*. En las sociedades capitalistas donde vivimos, los diversos objetos pueden ser tratados sin tener en cuenta sus propiedades, ello ocurre en el momento del intercambio. Cuando el artista va

a comprar un lápiz a la tienda, al vendedor no le interesa si el lápiz sirve para escribir o para dibujar, al vendedor le importa vender un objeto que tiene un precio. Cuando los objetos dejan de ser considerados de acuerdo con su utilidad para valorarlos de acuerdo a un precio en el mercado, entra en juego el *valor de cambio*.

En los grandes supermercados de nuestros días hay víveres, libros, ropa y teléfonos móviles, etc., cada uno de esos objetos se usa con diferentes propósitos, pero todos esos objetos tienen inscrito un código de barras que permite conocer su precio en el mercado. Para el individuo que acude al supermercado, los víveres le permiten nutrirse, los libros educarse, la ropa vestirse y los teléfonos comunicarse, en eso radica su valor de uso. El código de barras es una consecuencia del valor de cambio, donde sin importar su utilidad o sus propiedades, los objetos son reducidos a lo mismo: todos son mercancías, en ese aspecto no tienen ninguna diferencia.

En un texto de la misma época Marx hace una claridad que a menudo es soslayada. Al leer el programa de un partido obrero de la época, Marx se encontró con la frase: “El trabajo es la fuente de toda riqueza y de toda cultura”, a la que reaccionó con énfasis:

El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso [...] Por cuanto el hombre se sitúa de antemano como propietario frente a la naturaleza, primera fuente de todos los medios y objetos de trabajo, y la trata como posesión suya, por tanto su trabajo se convierte en la fuente de valores de uso, y por consiguiente, en fuente de riqueza (Marx, 1974:9).

El nexo entre Naturaleza y trabajo se enmarca en una concepción de la Naturaleza que tiene un carácter sociohistórico, pues, como acabamos de ver, la Naturaleza se comprende en relación con la actividad humana y la sociedad aparece en su contexto

natural. Para Alfred Schmidt, la mercancía refleja la relación entre Naturaleza y proceso histórico, pues la producción de mercancías implica un tratamiento de la Naturaleza como fuente de la riqueza social (Schmidt, 1983:73).

La Naturaleza se comprende de dos maneras: a) como fuente de la riqueza social y b) como límite inmanente de la producción de riqueza. Aquí encontramos una ambigüedad de difícil tratamiento, pues la Naturaleza es susceptible de ser modificada para los propósitos de los humanos, pero al mismo tiempo la Naturaleza es el límite que no puede ser rebasado en la actividad productiva. Así los humanos no están afuera de la Naturaleza, pero sí son la única especie susceptible de transformarla de manera consciente para la producción de objetos útiles. En el capitalismo, esa producción tiende a desbocarse cuando los objetos dejan de ser meras cosas útiles para convertirse en mercancías.

La concepción de Marx no coincide con las concepciones modernas que posibilitaron lo que Max Horkheimer llamaría la razón instrumental. Descartes, por ejemplo, al final del *Discurso del método*, afirma que el aprendizaje de las ciencias permite que:

(...) conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos, y de todos los demás cuerpos, que nos rodean, tan distintamente como conocemos los oficios varios de nuestros artesanos, podríamos aprovecharlas del mismo modo, en todos los usos a que sean propias, y de esta suerte hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza (Descartes, 2006: 118 y 119).

También podría decirse que la verdadera fuente de esta concepción se encuentra en el libro bíblico del Génesis, pues al final de su primer capítulo se habla del hombre como un individuo que tendrá poder sobre el resto de animales en la Tierra, pero solo hasta la modernidad se genera una ruptura fundamental: las criaturas pasan a ser objetos, y los objetos pasan a ser susceptibles de domi-

nación. La razón instrumental justificaba el dominio técnico de la naturaleza, incluyendo a la naturaleza humana al dominar la fuerza de trabajo. En palabras de Horkheimer, el “dominio sobre la naturaleza incluye el dominio sobre los hombres. Todo sujeto debe tomar parte en el sojuzgamiento de la naturaleza externa –tanto la humana como la no humana– y, a fin de realizar esto, debe subyugar a la naturaleza dentro de sí mismo” (Horkheimer, 1969: 108).

Las sociedades de nuestro tiempo han heredado la razón instrumental que fundamenta el dominio de la Naturaleza y la explotación de las personas que trabajan. No obstante, nuestra época “postmoderna” indica una transformación crucial: hemos pasado de la ética del trabajo a la estética del consumo (Bauman, 1998). Así la acumulación de capital precisa tanto de la explotación del trabajo como de la promoción del consumo como clave de la generación de ganancia.

Es claro que todo individuo que trabaja, por sus propias necesidades biológicas, también es consumidor, pero la transformación crucial radica en que hoy el consumo les permite a las personas que trabajan nuevas formas de identidad que configuran incluso sus proyectos de vida. La extraña complicidad de los usuarios de los aparatos electrónicos de *Apple* por ejemplo, o la identidad juvenil producida por ciertas marcas de ropa, son muestras de cómo las mercancías dejan de ser objetos intercambiables para el consumo, a definir proyectos de vida de los individuos.

La sociedad ya no solo es una inmensa acumulación de mercancías, ahora también los individuos construyen su identidad como una inmensa identificación con mercancías. Así que dejan de ser individuos que definen su existencia gracias a sus habilidades o propiedades, para consolidar su vida como parte del patrón de intercambio que anula las particularidades de lo humano.

La estética del consumo acelera la producción de mercancías que solo pueden elaborarse violentando la Naturaleza. La Natu-

raleza ya no solo es transformada para satisfacer necesidades humanas, más bien es violentada para la producción de objetos inútiles cuyo único valor es ser mercancías, objetos que tienen valor de cambio, pero muestran un valor de uso reducido.

La persistencia de la crisis y la acumulación por desposesión

Aunque la estética del consumo juegue un rol clave para dinamizar la producción de mercancías, la realidad del capitalismo y su crisis nos continúa acompañando. Hoy buena parte de los países europeos tienen crecimiento económico negativo, mientras asciende el desempleo y los gobiernos imponen graves recortes al presupuesto destinado a las políticas de bienestar social.

La crisis genera una serie de reacciones por parte de los capitalistas, quienes, entre otras estrategias, recurren a lo que David Harvey (2001) ha llamado la “solución espacial”. Esta estrategia consiste en expandir las inversiones buscando nuevos territorios para acumular ganancias y a la vez evitar la devaluación de sus actividades bursátiles. Esta nueva extensión del capital implica especialmente tres tendencias: a) la ampliación de inversiones hacia territorios antes inexplorados, b) la aceleración del ritmo global de la acumulación de capital, facilitando infraestructuras de transporte y aumentando los tiempos de la producción de mercancías y c) la reducción de los costos de la fuerza de trabajo, buscando mayor rotación de los trabajadores gracias a la reducción de las garantías laborales.

En muchas ocasiones estos tres procesos coinciden con la *acumulación por desposesión*, esto es, la “liberación de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos casos nulo)” (Harvey, 2003: 119). La acumulación por desposesión en el siglo XXI es la actualización y perfeccionamiento de aquel proceso que Marx llamó “acumulación originaria del capital” pues la precarización de la vida y el trabajo pasan por la violencia que soporta la búsqueda de ganancias.

Así la violencia que implica la sobreexplotación de la Naturaleza para producir cosas inútiles se complementa con la violencia sobre los humanos para despojarles de sus territorios. Las personas que trabajan, los habitantes de los territorios destinatarios de la inversión y la Naturaleza, son directamente afectados y sacrificados en esta espiral de acumulación.

En América Latina la solución espacial a la crisis está ligada a las industrias extractivas, un buen ejemplo es la expansión de la minería. La extracción de minerales a gran escala cumple dos funciones cruciales: 1. Generar espacios seguros para situar la inversión en tiempos de crisis financiera y 2. Asegurar la extracción de minerales en un contexto de decrecimiento de las reservas en el ámbito mundial. En ese marco la minería a gran escala implica dos tipos de consecuencias: ecológicas y económicas.

Las consecuencias ecológicas se ligan a la contaminación inherente que conlleva la minería a cielo abierto, donde no solo se retira la capa vegetal de territorios extensos, además se remueven toneladas de tierra para obtener unos cuantos gramos de oro, plata o cobre y se utilizan a gran escala químicos tóxicos como cianuro o mercurio (Delgado-Ramos, 2010). Al respecto Claudio Garibay Orozco ha mostrado cómo en los ejidos mexicanos dispuestos para la minería se disponen extensos territorios, no solo para extraer material, también para ubicar desechos contaminantes, utilizar inmensas reservas de agua que han provocado escasez hídrica para consumo humano en esas zonas, así como la utilización de grandes cantidades de energía eléctrica (Garibay, 2010: 133 y s.). A pesar de sus evidentes amenazas el modelo extractivo se expande por buena parte de los países de África, Asia y América Latina.

Las tensiones de la justicia social

La discusión sobre la justicia social se replantea, pues pasa por la búsqueda de *justicia socioeconómica* y por la lucha por la *justicia*

ambiental. Lo anterior cobra sentido si tenemos en cuenta que la acumulación por desposesión implica tanto el control de los territorios para desarrollar las nuevas dinámicas de la inversión, así como la precarización del trabajo que aumenta las ganancias y vulnera los derechos de quienes laboran.

No obstante, se abre una pregunta ¿Pueden fusionarse sin conflicto las reivindicaciones por el trabajo digno con la defensa de la Naturaleza y los territorios? Annie Leonard ha planteado el siguiente panorama:

Con la generación actual de volúmenes mundiales de bienes y servicios ya estamos produciendo más de cinco veces (cerca de 6, en realidad) el nivel de emisiones de CO₂ que necesitaríamos reducir hacia 2050 para evitar el caos climático total [...] Sí, estamos en problemas. Y a eso es preciso agregarle el impacto necesario para elevar el nivel de vida de los pobres del mundo (que implica inevitablemente el aumento de sus emisiones de CO₂). Con la sobrecarga de dióxido de carbono que ya causamos en la frágil atmósfera terrestre, sumada a nuestra demanda de todos los otros servicios y recursos vitales que nos brinda la tierra, estamos presionando el planeta más allá de sus límites” (Leonard, 2010: 25).

Los inconvenientes van más allá del cambio climático, pues otros problemas amenazan seriamente los ecosistemas hasta tal punto que la propia raza humana se encuentra en riesgo, como lo ha planteado el científico Jared Diamond (2005), varios fenómenos son la causa de la crisis ambiental que aqueja al planeta: deforestación y destrucción del hábitat, problemas del suelo (erosión, salinización y pérdida de la fertilidad), problemas de gestión del agua, abuso de la caza, la pesca y la introducción de nuevas especies, el crecimiento de la población humana y aumento del impacto *per cápita* de las personas, la concentración de productos químicos tóxicos en el medio ambiente y escasez de fuentes de energía.

En ese orden, parece que la reivindicación por la justicia socioeconómica entra en tensión con las exigencias que implica la justicia ambiental, pues elevar el nivel de vida de los trabajadores, aumentando los salarios, garantizando los derechos laborales y todos los derechos económicos y sociales que permitirían lo que hoy se considera una vida digna, implicaría un aumento de su capacidad de consumo. Reivindicar un mejoramiento de las garantías laborales implica mejores salarios, lo que redundaría en una mayor demanda de mercancías, y de aquello que Diamond denomina aumento del impacto *per cápita* de las personas, profundizando las presiones sobre la Naturaleza y los problemas ecológicos de la humanidad.

Así pareciera que la justicia socioeconómica riñe con la justicia ambiental, y viceversa; o en los términos en que se ha presentado el debate en América Latina (Gudynas, 2009; Acosta, 2011) los derechos de la Naturaleza entran en tensión con los derechos de los seres humanos, y más concretamente de los trabajadores.

Demandar y alcanzar los derechos laborales implicaría la superación de la precarización, elevar los ingresos, disfrutar plenamente de la seguridad social y acceder a consumos hasta ahora negados por el capital. Lo anterior, desde una perspectiva relacional y pensando dentro de la lógica del capitalismo, presionaría directamente los ciclos de la Naturaleza profundizando el impacto ambiental que implica la sobreproducción de mercancías.

Una pregunta se abre gracias a la anterior reflexión: ¿Debe renunciar el trabajo a sus derechos para salvar el planeta? Responder positivamente a esta pregunta, parte de pedir a los trabajadores que dejen de consumir para salvar el ambiente. Este tipo de agendas políticas y ambientales, al asumirse dentro del capitalismo en cualquiera de sus modelos, profundiza la injusticia social, pues les niega a las personas que trabajan el acceso a los bienes de los que históricamente han sido privados.

Otra cara de la moneda la encontramos con la expansión del *capitalismo verde*, es decir, la promoción de prácticas ecológicamente sustentables que generan ganancias para los grandes capitales. Aquí se asumen las premisas de los límites naturales de las actividades económicas y se aboga por disminuir la población, reducir el consumo energético o el tamaño de las ciudades. En el extremo de esta posición se encuentra la recuperación de la vieja tesis de la privatización de bienes comunes como alternativa ambiental, retomando las reflexiones que sostiene que el acceso universal a los bienes comunes conlleva a una tragedia ecológica, pues si todos los individuos pueden tener acceso al agua o a los bosques, entonces los recursos tenderían al agotamiento. De ahí la expresión «tragedia de los comunes» acuñada por Garrett Hardin (1977).

La tensión de las alternativas al extractivismo

Tenemos entonces dos caminos encontrados, pareciera que la garantía de derechos laborales implica más consumo de bienes, situación que profundizaría la crisis ambiental. Por otro lado, encontramos que esa crisis ambiental pareciera solventarse con la privatización de bienes comunes y con la promoción de actividades ecológicas que generan ganancias para el capital. ¿Hay alguna salida ante semejante panorama?

La tensión mencionada no es sencilla, pero consideramos que este debate es necesario para repensar alternativas, pues aquí se encuentra un eje clave de las discusiones contemporáneas sobre la justicia social. Tomemos como punto de partida un ejemplo. En las regiones del Chocó y el sur de Bolívar en Colombia, muchas familias pobres derivan sus sustento de las pequeñas actividades mineras. En el marco de la crítica al extractivismo, tiene sentido la necesidad de detener definitivamente las extracciones mineras, es decir, cerrar los proyectos y las empresas. Pero eso no resuelve la pregunta ¿Qué hacer con los trabajadores, sus familias

y los territorios? ¿Qué actividades ejercerán para obtener su sustento diario?

En Colombia hemos visto como la bonanza de los megaproyectos generan formas de vida transitorias en territorios de explotación minera o cocalera, produciéndose a la vez un grupo inmenso de trabajadores migrantes, sin apego al territorio y sin esperanza de vida. Una vez que declina la actividad que genera esa bonanza pasajera, esas formas de vida desaparecen para migrar a otros territorios donde se ampliará la frontera agrícola y ambiental. ¿Podemos imaginarnos esa masa multiplicada por miles al momento de parar las labores extractivas?, quizá, y en consonancia con los debates latinoamericanos, es preciso ampliar y matizar la pregunta y cuestionarnos si ¿Podemos imaginarnos la vida de estas personas en la transición al estadio de superación del extractivismo?

Tomemos otro ejemplo. En los últimos años en Colombia se perfiló un debate crucial, pero hasta cierto punto no explícito, entre los trabajadores de la industria del petróleo y algunas organizaciones campesinas e indígenas. Los trabajadores consideraban que la discusión fundamental radicaba en quién se beneficia de la explotación del petróleo, así que en el centro de su programa estaba el rechazo de las empresas transnacionales petroleras y la defensa de la nacionalización de los hidrocarburos. Los indígenas y campesinos de algunas regiones sostuvieron que la extracción misma era un crimen ambiental (y para algunos indígenas era incluso un crimen espiritual), sin importar si la extracción de petróleo la hacían empresas nacionales o extranjeras. En nuestro tiempo las dos posiciones han buscado dialogar en pro de agendas comunes, y aunque las diferencias no se han terminado completamente, hoy las posiciones tienden a analizar el problema buscando conjugar la defensa de la soberanía con la defensa del ambiente.

Al respecto es crucial reflexionar sobre cómo las alternativas al extractivismo se tejen en el marco de un proyecto de transición que no solo supere las relaciones económicas dominantes. También es crucial pensar nuevas formas de relación entre humanos, y entre humanos con la Naturaleza, de tal manera que se redefinan los parámetros de la extracción, producción, distribución, intercambio y consumo como momentos de una totalidad orgánica, y no se limite a transformar uno o dos de los eslabones de la cadena.

El debate no se limitaría a la necesidad de detener el modelo centrado en lo extractivo, o en pensar la transición posible, más bien debemos asumir esos momentos como partes de la discusión sobre un nuevo modelo de civilización que incluya la reflexión sobre un nuevo modo de producción más justo e igualitario.

Ir más allá del capital

Consideramos que la anterior tensión puede resolverse si renunciamos al marco de sentido que la posibilita, pues la tensión se genera precisamente si se asume desde la lógica del capital. Nosotros no creemos ni en un nuevo sacrificio de los trabajadores, en la privatización de bienes comunes o en la inevitabilidad del colapso ambiental. La solución estriba en ir más allá del capital para pensar una posible transición que permita romper la tensión entre quienes ponen el acento en la distribución de la riqueza, o quienes ponen el acento en la defensa del ambiente.

La garantía de derechos sociales para las personas que trabajan debe pensarse superando la sociedad salarial y la racionalidad capitalista, pues en caso contrario, esa garantía de derechos se convierte en una excusa para que, en lugar de generar transformaciones reales de la forma de vida, se alimente la sociedad de consumo.

En primer lugar, es crucial cuestionar las reivindicaciones propias de la sociedad salarial, implica redefinir y resignificar las necesidades, así como pensar en otras formas de acceder a los

bienes que sostienen las sociedades humanas. No tiene sentido garantizar derechos laborales si los trabajadores encuentran su redención en la estética del consumo, por eso nuestra primera tarea es redefinir las necesidades sociales.

En segundo lugar, es necesario ensayar múltiples y creativas formas de producción, distribución y consumo, superando las actuales matrices de sostenimiento planetario: insistir en otras formas de acceder a la energía, de producir los alimentos, de gestionar los materiales para la construcción en las ciudades. Apuntar a la transformación de la sociedad, o a salir del extractivismo sin pensar en estas salidas, sería soslayar la base misma del problema de la crisis ambiental de nuestro tiempo.

En tercer lugar, ante la extensión de la relación social capitalista que convierte en valores de cambio los bienes de la Naturaleza, es imperativo construir perspectivas desde los valores de uso. Aquí los planes de vida o de desarrollo alternativo, los procesos de justicia ambiental, los nuevos mercados solidarios y justos, la defensa de los bienes comunes y una economía del trabajo tienen mucho que decir y aportar.

En cuarto lugar, debemos abandonar la famosa tentación ecologista que sostiene que “lo pequeño es hermoso”. Las apuestas por los pequeños proyectos y las microconstrucciones económicas resuelven los problemas a muy pequeña escala, pero no plantean alternativas para los grandes conglomerados de personas que hoy viven en las grandes ciudades. Las transiciones que impliquen otras gobernabilidades tienen que enfrentar duras realidades como por ejemplo cómo proveer alimento, energía, agua o materiales a millones de personas.

Civilización ecosocialista

Consideramos que en nuestra época es preciso ganar otro sentido de la vida y la sociedad. Es ahí cuando una concepción renovada,

ecológica y democrática del socialismo recobra su potencialidad transformadora.

A nuestro juicio, el ecosocialismo es un referente de sentido para construir otra manera de habitar con la Naturaleza, retomando el debate y la crítica al modelo civilizatorio y sus modelos de desarrollo. Retomando otro horizonte como sentido de vida y sociedad, y construyendo otras lógicas en la organización de la economía, la política y las relaciones ambientales.

Cierta interpretación del marxismo consideró el desarrollo de las fuerzas productivas como la vía privilegiada para generar condiciones de vida digna. Tal vez el origen de estas apuestas la encontremos en la *Crítica del programa de Gotha* de Marx (o *Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán*), donde se afirma que la satisfacción de las necesidades humanas se alcanzará cuando “con el desarrollo de los individuos en todos los aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva” (Marx, 1974). Este planteamiento, que indirectamente alumbró la construcción del (mal llamado) socialismo real en el siglo xx ya no tiene solidez. Es claro que hoy no puede sostenerse esa tesis, pues sabemos intuitivamente que un desarrollo de las fuerzas productivas que satisfagan las necesidades humanas bien puede conllevar la profundización del cambio climático, la crisis energética, alimentaria y las amenazas a la biodiversidad.

La civilización soporte del capitalismo se levantó con una racionalidad que implica la búsqueda de formas de explotación cada vez más agresivas y sofisticadas de la fuerza de trabajo y la Naturaleza. Ello no se pudo lograr sin la constitución de instituciones que hoy aparecen como estáticas e insuperables: el Estado y el mercado. Instituciones que merecen ser cuestionadas para asumir otras formas de vida.

Construir lógicas distintas implica superar los modelos de socialismo ya probados y fracasados en el siglo xx, especialmente

sus variantes economicistas, burocráticas y antidemocráticas. Estos modelos reprodujeron las lógicas de desarrollo de las fuerzas productivas, la fe en el crecimiento económico, impulsaron la estatización (centralización de las decisiones políticas y económicas) y la estatalización (irrupción del Estado en la cotidianidad, la vida privada y la cultura) y utilizaron la Naturaleza como fuente inagotable de recursos (Rauber, 2010).

Existen ricas y múltiples experiencias de construcción socialista de las cuales hay que aprender, pero para asumir otra perspectiva de la transición hacia el socialismo. Esta transición debe pensarse desde otras lógicas en las esferas de la economía, la política y las relaciones con la Naturaleza sin esperar a conquistar el poder o el gobierno para emprender transformaciones u otras lógicas de construcción.

En el terreno de la economía habría que impulsar diversas y articuladas acciones que impliquen:

- La reorientación del Estado hacia una función social, frenando y revirtiendo, en un primer momento, el neoliberalismo.
- La gestión comunitaria, público-comunitaria y social de los bienes comunes.
- La recuperación del trabajo como enfoque y categoría central de actuación y gestión económica. Esto es hacer economía desde las lógicas del trabajo en todo el circuito económico: abastecimiento de materiales, producción, distribución y consumo.
- Buscar la convivencia y la articulación de múltiples y diversas formas de producción, desde la local-comunitaria, hasta la industrial. En todas ellas hay que romper con la racionalidad instrumental capitalista.

Tal vez la tarea más urgente e importante sea *redefinir las matrices que hacen funcionar la sociedad: la matriz energética, la alimentaria, la de infraestructura, la de movilidad*. Estas nuevas matrices

deben llevar incorporadas nuevas relaciones sociales de producción y de estas con la Naturaleza. Es aquí donde los retos se vuelven concretos y son mayores: por ejemplo, ¿Cómo dar energía a todos, desde otra matriz, sin destruir irremediabilmente la Naturaleza, con manejo soberano y con eficiencia?

En las esferas sociales y políticas se trata de profundizar la democracia, superar las jerarquizaciones surgidas del poder y hacer de la participación un ejercicio social permanente y sobre lo fundamental. Un socialismo no antropocéntrico, que se comprenda en relación y dependencia de la Naturaleza y por ello busca la existencia y pervivencia integral del planeta.

La dimensión comunitaria como base de una política emancipadora

La razón instrumental también ha considerado que la política es un ejercicio de dominación. Comprenderla así es acercarse a lógicas en las cuales no existe o no se reconoce una comunidad política, sino una masa amorfa a la cual gobernar y explotar.

Para cambiar el mundo hay que cambiar el Estado, aunque no necesariamente cambiando el Estado se cambia el mundo. Pero los procesos sociales deben apropiarse del Estado, transformándolo. Para las transiciones productivas, políticas y culturales de las cuales hemos vislumbrado su necesidad, el Estado puede cumplir un papel importante, garantizando una vida digna, fomentando, subsidiando, valores de uso y reduciendo los valores de cambio. Pero transformar el Estado no es suficiente. La estadolatría ha mostrado sus propios límites y es imperativo construir un poder propio que emprenda de forma a la vez paralela, confluyente y simultánea las transiciones buscadas, procurando construir una sólida esfera pública no-estatal desde las comunidades en clave de poder popular.

Una mirada desde el trabajo que transforme la Naturaleza sin violentarla le da sentido a los procesos emancipatorios y permite

reducir la tensión entre justicia ambiental y justicia socioeconómica. Esta visión permite una retroalimentación para generar nuevas formas de vida, cooperación y alegría entre los humanos y las criaturas que habitan el planeta.

Ese proyecto bien merece llamarse ecosocialismo.

**DEBATES SOBRE ALTERNATIVAS
EN EUROPA: PUNTOS DE PARTIDA
PARA UN NUEVO INTERNACIONALISMO**

División sexual del trabajo, economía del tiempo y Buen Vivir

La perspectiva cuatro-en-uno

Frigga Haug¹

El 29 de enero de 2009, el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, objeto de la esperanza de muchos, firma su primera ley, que garantiza igual remuneración para igual trabajo, independientemente del sexo, raza, religión y edad. La ley lleva el nombre de Lilly Ledbetter, una mujer que luchó largo tiempo por esta causa: en diecinueve años de trabajo, Ledbetter había perdido alrededor de 197 550 dólares a causa de la desigual remuneración en iguales condiciones de trabajo. Este monto no incluía las pensiones perdidas que, según la nueva ley, le tuvieron que ser reintegradas.

Generalmente, este tipo de desigualdad se expresa en porcentajes (por cierto, a escala global, las mujeres siguen ganando 23% menos que los varones); pero, de vez en cuando, conviene referirse a estos desequilibrios en montos de dinero e imaginarse una persona concreta. La victoria de Lilly Ledbetter alimenta la esperanza de que todas podemos hacer y ganar algo, de que sí es posible cambiar el estado de las cosas. Es una traducción práctica de lema *Yes, we can*, que le dio hegemonía a Obama,² porque con él consiguió despertar y emocionar a las personas, devolverles la fe en sí mismas.

En Alemania, nos sentimos conmovidas y, al mismo tiempo, resignadas, pues ya sabemos que la reducción e, incluso, la eli-

1 Frigga Haug fue catedrática de sociología en la Universidad para Economía y Política de Hamburgo hasta el año 2001. También enseñó como docente invitada en Kopenhagen, Innsbruck, Klagenfurt, Sydney, Toronto y Durham (EEUU). Coeditora de la revista de pensamiento crítico *Das Argument* en Alemania y a partir de 2006 del diccionario histórico-crítico del marxismo. Militante de varias iniciativas feministas de izquierda.

2 El eslogan *Yes, we can* proviene de la película *Bread and Roses*, que relata la increíble unión y victoria de un grupo de mujeres de limpieza, que luchaban por sus derechos.

minación de la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, lamentablemente, no se consigue con la sola promulgación de una ley que diga “igual remuneración para igual trabajo” (nuestra consigna en las décadas de los sesenta y setenta). De hecho, existe una variedad de artimañas para imponer la desigualdad de salarios. Por ejemplo, los incontables criterios que en trabajos desiguales permiten fijar los salarios de tal forma que a las mujeres siempre les toque la remuneración más baja. Es evidente que las correcciones por sí solas no son suficientes para compensar la desigualdad. Por ello, para analizar de dónde viene este persistente menosprecio del trabajo de la mujer, necesitamos analizar el tema desde un orden superior y retroceder en el tiempo.

¿Mujeres fabriles, hombres domésticos?

Hace 170 años, luego de viajar por toda Inglaterra, Friedrich Engels escribió su informe sobre la situación de la clase trabajadora que, dicho sea de paso, le proporcionó bastante material a Marx para su obra *El Capital*. Durante este viaje, Engels también vio el trabajo de las mujeres en las fábricas y en los hogares. Tras analizar una gran cantidad de estadísticas, llegó a la conclusión de que en el año 1839, del total de trabajadores en las fábricas inglesas, por lo menos dos tercios eran mujeres. Calificó este fenómeno como un “desplazamiento del trabajador masculino”, como una “inversión del orden social”, que llevaría a la disolución de la familia y al desamparo de la niñez. En aquel momento, no reflexionó con mayor detalle sobre la división del trabajo entre hombres y mujeres; en consecuencia, percibía a la clase obrera como genuinamente masculina.³ De todos modos, me parece instructivo analizar cómo Engels describe el fenómeno:

3 Engels, Federico. “La situación de la clase obrera en Inglaterra”. 1845. En http://www.archivochile.com/Mov_sociales/mov_mujeres/doc_gen_cl/MSdocgencl0007.pdf [Consulta: 10 de diciembre, 2012]

En muchos casos, la familia no es enteramente disgregada por el trabajo de la mujer pero allí todo anda al revés. La mujer es quien mantiene a la familia, el hombre se queda en casa, cuida los niños, hace la limpieza y cocina. Este caso es muy frecuente [...] Se puede imaginar fácilmente qué legítima indignación esa castración de hecho suscita entre los obreros [...] (Engels, 1845:216)

Poco tiempo después, Engels descubre que la división social del trabajo en trabajo doméstico y extradoméstico, sin importar el sexo, implica que quien realiza el trabajo en casa siempre es dominado por el que trabaja fuera del hogar. Este fenómeno refleja un patrón de dominación básico, característico de las relaciones de género que rigen bajo el régimen capitalista. Sin embargo, la indignación de Engels por la situación de las trabajadoras fabriles alude, sobre todo, a categorías de moral (decadencia de valores morales); lo cual impide visualizar al fenómeno como una consecuencia de las relaciones de género explotadoras, típicas del capitalismo. Engels continúa:

Y sin embargo, esa situación que quita al hombre su carácter viril y a la mujer su feminidad sin poder dar al hombre una verdadera feminidad y a la mujer una verdadera [masculinidad], esa situación que degrada de manera más escandalosa a ambos sexos y lo que hay de humano en ellos, es la última consecuencia de nuestra civilización tan alabada [...] (Op. cit.: 217-218).

Leer a detalle a los clásicos siempre es instructivo. Podemos ver cómo caen en las trampas más insólitas –como aquí Engels, con lo de la mujer y el hombre–. Al mismo tiempo, nuestra propia indignación nos hace ver que nosotras mismas no llevamos hasta el final las reflexiones sobre cómo escapar de este concepto metafísico de hombre-mujer, sin jugarnos el potencial liberador que encierra la crítica del hombre que barre la casa y su castración.

Entonces, sigamos a Engels con humor, pues finalmente él también reconoce que

[las relaciones de género han sido falseadas desde el comienzo]. Si la dominación de la mujer sobre el hombre, que el sistema industrial ha engendrado fatalmente, es inhumana, la dominación del hombre sobre la mujer tal como existía antes es necesariamente inhumana también” (Engels, 1845:218).

Para Engels, el problema está en la comunidad de bienes y en la desigualdad de los aportes a ésta. Así, concluye que lo que descompone la relación entre hombres y mujeres es la propiedad privada y, a la inversa, considera que la familia proletaria, al no tener propiedad, es libre de este tipo de dominación. Esta visión fue uno de los ideales éticos del movimiento obrero, pero como explicación de la realidad siempre fue contraproducente. De hecho, no acierta respecto de la función de la división de trabajo entre hogar y fábrica y, por consiguiente, tampoco atina en cuanto a la función de las relaciones de género para la reproducción de la sociedad capitalista.

La división de “hogar” y “trabajo”

Trataremos, entonces, de buscar otra vía para descubrir por qué la discriminación de la mujer en la vida laboral, su baja valoración y remuneración persisten a través de los siglos, con tanta tenacidad. Revisemos la división del trabajo de la sociedad, a escala global. Para ello, alejémonos del concepto de que aquello que ocurre fuera del hogar es trabajo y lo que se hace en el hogar no lo es o es calificado despectivamente como trabajo del hogar. Fijémonos en cuáles son las relaciones que existen entre las diferentes actividades humanas. Hablando de género y de trabajo femenino, lo primero que nos llama la atención es la peculiar posición del sector productivo, en el sentido amplio de la palabra, frente al sector de la reproducción. En este último, se trata de la vida humana

misma, de procreación y crianza, de la atención de personas con discapacidad, enfermos y ancianos, del bienestar de las personas y –por qué no decirlo– de la reconstrucción de la Naturaleza. Sin embargo, bajo la perspectiva capitalista, todo eso es marginal, no tiene importancia; hasta es un factor perturbador o, si no, es visto como un área de consumo que ojalá genere buenas ganancias. Dejando de lado la complicación que supone la existencia de un sector financiero separado, que agudiza aún más la crisis, podemos decir que sobre el sector reproductivo crece todo el sector productivo, en el cual se producen medios de vida, y también el sector de servicios que, entre otras cosas, organiza la distribución de estos medios de vida –y ambos se vuelven dominantes. El sector de producción se torna dominante porque genera lucro, objetivo de la economía capitalista. Asimismo, no hay vida sin medios de vida, de manera que surge una especie de “vínculo separador” entre ambos sectores –pues ninguno puede sin el otro. Los límites entre los sectores son precisos y están bajo estricta custodia. “Uno no vive donde trabaja, y donde uno vive no se trabaja”, dijo Marx en el análisis del trabajo enajenado; y resumió, así, en pocas palabras, la brecha entre el desgaste de fuerzas en el trabajo asalariado y la búsqueda de la felicidad en el hogar. Ahora bien, esta afirmación acaloró a las feministas, porque evidentemente, ellas sabían que lo que se hace en el hogar sí es trabajo (aunque, claro, trabajo hecho por mujeres, no por hombres). Lo que no comprendió la crítica feminista en aquella época es que la frase de Marx se refería primordialmente a la relación de separación. Lo que quiso decir fue que el trabajo debía ser de tal forma que uno se sintiera “en casa” con él y que el hogar debía ser de tal forma que allí se hiciera buen trabajo. De hecho, esa comprensión hubiera cambiado las dos cosas, el trabajo y el hogar, y, sobre todo, hubiera sugerido atravesar los límites y dejar de lado esa costumbre de oponer el uno al otro.

Analizar las relaciones o, mejor dicho, la subordinación de la reproducción a la producción, nos permite determinar dónde se encuentran ubicados en la sociedad el tema de género y la persistencia de la discriminación de la mujer, y precisarlos: las relaciones de género son relaciones de producción.⁴ La conclusión global se refiere al curso de la historia que está marcado por dos tipos de dominación sobrepuestos: el dominio de unos pocos sobre la fuerza laboral de muchos, en la producción alimentaria; y, el dominio de (la mayoría de) los hombres sobre la fuerza laboral de las mujeres, su capacidad de dar vida y el cuerpo sexual de la mujer en la “familia”. Esta imbricación contradictoria hace que el desarrollo de la colectividad vaya de la mano con la destrucción de sus fundamentos, al apoyarse en relaciones de género que, por razones de dominación, naturalizan lo socialmente transformado y someten, junto con la naturaleza, la sustancia sensual-corporal. Dicho de manera más sencilla: mientras una sociedad no resuelva el tema de su reproducción a nivel de sociedad, la discriminación de la mujer persistirá. Tiene suficientes anclajes en la moral, para ello.

Vivir en plenitud

Nuestra mirada ya no se fija solamente en el trabajo asalariado, pues ahora, el trabajo reproductivo también es discutido como trabajo. Una vez abierta la mirada hacia el trabajo de reproducción, nos percatamos de que existen actividades que atribuiremos al trabajo social global; de esta manera, podremos sugerir otra distribución del trabajo. Todos y todas sabemos que aprender es

4 Para mayor detalle ver la explicación de las relaciones de género que Frigga Haug da en el diccionario histórico- crítico del marxismo. Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, editado por Institut für Kritische Theorie, en permanente actualización. Revisado en noviembre 2012, en: <http://www.inkrit.de/hkwm/hkwm-index.htm>

trabajo duro. De hecho, el aprendizaje es uno de los trabajos que se nos escapó de la vista, pero no es el único. Está, asimismo, el trabajo en uno mismo y la posibilidad de desarrollar todas las habilidades y capacidades humanas inherentes a cada individuo. Se trata de que cada persona tome las riendas de su vida en sus propias manos y no se deje conducir por el consumismo, como si ser consumidor fuera una posible forma de individualidad.

En el debate sobre la discriminación de la mujer en el trabajo y en la remuneración, todavía no aparece el objetivo de que la persona utilice sus potenciales creativos, muy a pesar de que todas y todos sabemos que los libros de historia están impregnados del arte y las hazañas de “grandes hombres”, mas no de mujeres. Al mirar este tema con más detalle, sabemos que la sobrecarga que implica “conciliar profesión y familia” –muy fácil de decir, por cierto–, en todo caso, solo hace pensar en la imposibilidad de realizar alguna actividad artística creativa, por ejemplo, tocar un instrumento, cantar, pintar, practicar la danza o hacer poesía, teatro, etc. Ni hablar de seguir aprendiendo de por vida. Es un escándalo que tantas personas –en especial, mujeres– no estén en condiciones de aprovechar plenamente su vida. Al dividir la actividad humana en diferentes campos o áreas, surgen límites y divisiones de trabajo que las mujeres, como individuos, han respetado y, a partir de ellos, han organizado su vida. Encerradas en las áreas de profesión y en la familia (cada una requiere conductas diferentes), se dan cuenta de que el desenvolvimiento personal es un lujo que está fuera de su alcance; un lujo que deben guardarse para “después”. Ahora bien, lo que hace que estas áreas queden disciplinadamente delimitadas y separadas, son las normas y los valores; es decir, la moral con sus reglas de conducta internas: nada de niños y nada de sexo en el trabajo; el trabajo del hogar meticulosamente repartido por sexos (véase Engels, op. cit.); y, el desarrollo personal como un lujo alcanzable solo para los más

ricos, cuyas normas y pautas no tienen nada que ver ni con el trabajo remunerado ni con la familia.

Pero, ¿qué hace que estas áreas se perciban y conciban de manera tan distante y delimitada? La separación estricta de la política del resto de la vida social. A más tardar con la crisis económica mundial, quedó al descubierto que la organización de la sociedad es vista como una función aparte, que termina siendo un negocio para especialistas, en el que la gente “pequeña” mejor no se mete. Sin embargo, irrumpe en la vida de los individuos como un desastre natural, ellos sufren las consecuencias de decisiones que otros han tomado, sin siquiera percatarse de que esta división es inconcebible. La separación entre la economía y la política – como si lo uno no tuviera nada que ver con lo otro – es el motivo por el que tantas personas viven en una sociedad en donde carecen de voz, y cuyas injusticias deben soportar pasivamente.

Una nueva economía del tiempo

Para que toda esta situación no se prolongue ni eternice, hacen falta amplias y profundas reestructuraciones. En el proyecto “Perspectiva cuatro en uno”, sustento de manera histórica la tesis referente a que hoy en día, y desde una perspectiva femenina, hacer política implica unir las cuatro áreas de la actividad humana, derribar los límites entre ellas y cambiar las respectivas conductas.

Se trata de comenzar a considerar el trabajo de producción de medios de vida en un sentido amplio (trabajo asalariado o remunerado), cuyo objetivo sea: a) asegurar la participación en la riqueza social, un derecho humano; b) la participación en el trabajo en torno al ser humano mismo y a la Naturaleza (trabajo de reproducción); c) el desarrollo de múltiples capacidades y habilidades propias, como esfuerzo o como placer; y, d) sobre todo, la actividad política. La participación en cada una de estas áreas es un derecho humano fundamental. El proyecto supone una intervención en el régimen de tiempo de la vida cotidiana y

en el imaginario: supuestamente la división existente de la carga global de trabajo es justa; al mismo tiempo, dicha iniciativa transforma el concepto dominante de dignidad humana: de categoría meramente moral pasa a significar una vida en plenitud; y, finalmente modifica el concepto de democracia, pues no se restringe al ámbito de la representación, sino que incorpora la participación de todas y todos en la vida política de la sociedad.

Es un proyecto que se apropia y desarrolla la “*Realpolitik* revolucionaria” de Rosa Luxemburg, ya que vincula una perspectiva –la vida integrada en la totalidad de las cuatro áreas– con la política real. En este sentido, aumenta la capacidad de acción política en las luchas cotidianas por reformas y, al mismo tiempo, las integra y transforma, al enfocarlas desde esta perspectiva integral.

Mirando la vida en su totalidad y sus expresiones humanas, es imperativo que las políticas de trabajo reduzcan el tiempo, que todo individuo dedica al trabajo remunerado, a una cuarta parte de su tiempo activo; es decir, a aproximadamente cuatro horas diarias. De esta manera, se solucionarían los problemas de desempleo (tendríamos menos personas que puestos de trabajo) e, inclusive, la precariedad, la tercerización y los contratos por obra, pues todas y todos tendrían un trabajo a tiempo parcial. Así, el término trabajo a tiempo parcial dejaría de tener significado, y todas y todos podrían concentrarse en la calidad del trabajo y en su adecuación para el desarrollo de las esencialidades humanas.

De igual manera, todas las personas tendrían un ingreso suficiente para vivir (renta básica) y se desempeñarían en todas y cada una de las cuatro áreas mencionadas anteriormente: trabajo remunerado, trabajo de cuidado de uno mismo y de otros, desenvolvimiento de sus habilidades y capacidades ocultas y, finalmente, militancia político-social. Por lo pronto, podríamos decir que cada persona estaría en condiciones de organizar su vida, de tal forma que cada día se desempeñe cuatro horas en cada una de las áreas. Por supuesto, no hay que tomar todo esto como un

dogma e imaginar que pasaríamos de área en área, con el cronómetro en la mano, sin sentirnos a gusto o “en casa” en ninguna de ellas. Más bien, al contemplar la vida en estas dimensiones, no tardamos en darnos cuenta de que los límites entre estas áreas no son fijos, sino que las áreas se entrecruzan y sobreponen; existe un vínculo, una relación interna entre ellas. La distribución de cuatro veces cuatro horas debe entenderse como un modelo que sirve de brújula para orientar y enfocar las estrategias de transformación. Para el trabajo de reproducción o en la familia, esto significa que nadie queda al margen del trabajo remunerado, y nadie está fuera del trabajo de reproducción. Todas las personas, hombres y mujeres, pueden y deben desarrollar sus habilidades humanas y sociales en esta área. La cantidad de noticias sobre niñas y niños maltratados y abandonados es un testimonio elocuente de la urgencia de actuar al respecto. Esto pondría fin a las discusiones en torno a prestaciones relacionadas con la maternidad, sin menospreciar la calidad del trabajo que se realiza en la educación y crianza de los hijos. Al contrario, precisamente la generalización –y no la asignación unilateral del trabajo de reproducción a mujeres y madres– posibilitaría considerarlo como un trabajo calificado; es decir, una actividad que hay que aprender como cualquier otro trabajo.

El concepto prevé, entonces, prolongar la vida activa de las personas a unas 16 horas por día y, al mismo tiempo, acortar rigurosamente la jornada laboral remunerada a aproximadamente cuatro horas. Eso, para ganar tiempo para las otras dimensiones o áreas que constituyen al ser humano vivo. Con este modelo no puede haber desempleo; el trabajo de reproducción y en el hogar formarían parte de la vida de cada persona; y, el involucramiento en la vida política, el desenvolvimiento de habilidades y talentos, y el aprendizaje de por vida, serían parte esencial de una vida humana plena.

El modelo de la “perspectiva cuatro en uno” evitaría que las cuatro áreas compitan entre ellas. Además, nos permitiría comprender que su entrelazamiento es la base necesaria para una política emancipatoria, y que buscar soluciones parciales para una u otra de las cuatro áreas es reaccionario y estúpido. Todo ello previene las soluciones unilaterales (por ejemplo, la de pelear únicamente por madre e hijos) y, al mismo tiempo, deja claro los derechos en la visión global. La rigurosa reducción del tiempo de trabajo remunerado es económicamente posible y constituye la solución para el problema del desempleo. Asimismo, resuelve el tema de la conciliación de actividades laborales y familiares, y el de la división unilateral del trabajo y, en especial, hace efectivos los derechos humanos referentes a la participación política y al desarrollo de todos los potenciales humanos.

El conjunto de las cuatro políticas genera otra perspectiva sobre la justicia. Partiendo de este nuevo concepto, casi todos los temas y problemas candentes se presentan bajo una luz nueva y diferente.⁵

Desde la “perspectiva cuatro en uno”, las mujeres aparecen de una manera diferente a la habitual: ocupan posiciones claves. De hecho, podemos formular la perspectiva desde el punto de vista de las mujeres, porque las mujeres asignan suficiente peso al área de reproducción —es decir, a la perspectiva de la vida—, como para no dejarla de lado en el momento de planificar su vida, y no dan tanta importancia al trabajo remunerado, como para considerar que es el centro y la esencia de todo. Es urgente que las mujeres dejen de autosacrificarse de esta manera y tomen las riendas del desarrollo de su personalidad. Es necesario que se involucren

5 He elaborado el modelo de la “perspectiva cuatro en uno”, a propósito del Congreso de “Frauenaufbruch der Linken in Esslingen” (noviembre de 2007). Junto con los textos de fondo provenientes de 30 años de trabajo científico en el área de la política femenina, en el año 2008 (3A 2011), lo publiqué en un libro con ese mismo título (editorial Argument-Verlag).

políticamente, pues para estructurar su vida y la de otros, deben “dar vuelta al Estado desde abajo hacia arriba”, como decía Bertolt Brecht (1930/1967).

La unión de las cuatro áreas apunta a una política y, al mismo tiempo, a una vida integral, activa, útil, de intervención y llena de gozo y disfrute. Claro que esta perspectiva no se impondrá de la noche a la mañana. Pero puede servirnos de brújula para definir objetivos políticos de corto plazo, de pauta para nuestros reclamos y reivindicaciones, de base para nuestras críticas, de esperanza, de utopía concreta que tome en cuenta a todas las personas y que, finalmente, defina al desarrollo del individuo como prerrequisito para el desarrollo de todas y todos.

Epílogo: la pregunta insistente

Una de las preguntas más frecuentes que se nos hace es: ¿Y quién pagaría todo eso, si todas las personas redujeran su tiempo de trabajo remunerado a la mitad? Esta pregunta firme y recalcitrante no tiene fundamento alguno; lo único que hace es demostrar que aquel que la plantea no ha aprendido nada de la historia, pues no toma en cuenta que la evolución de las fuerzas productivas ha avanzado tan velozmente que si pensáramos con sentido común e hiciéramos a conciencia los cálculos, nos percataríamos de que para garantizar el trabajo socialmente necesario, bastaría con mucho menos de la mitad. Lo que sí quedaría por resolverse es el uso social que se daría a este tiempo de trabajo ahorrado; la definición de lo que es socialmente necesario es objeto de disputas y luchas políticas. Hasta ahora, el tiempo de trabajo ahorrado sirve para maximizar las ganancias de los propietarios de capital y de su personal, que hoy día ya no encuentran suficientes campos rentables para todo este capital y que, por consiguiente, tropiezan de crisis en crisis. Si fueran otras las constelaciones y regulaciones sociales, sería cosa sencilla y justa devolver el tiempo de trabajo aho-

rrado a aquellos y aquellas que desempeñan un trabajo asalariado. Pero la pregunta “¿quién pagaría?” parte del supuesto de que existen desempleados, ex trabajadores asalariados que se vuelven superfluos si no se reducen los horarios de trabajo, y recibirán “injustamente” lo que otros generan. Sin más rodeos: evidentemente, la pregunta se fundamenta en el cálculo económico burgués que seguirá insistiendo y aferrándose al capitalismo, pese a todas las evidencias que prueban que no podemos seguir así; es decir, que demuestran que el modelo capitalista de regulación social quedó atrapado en un callejón sin salida. Cabe señalar que la pregunta se origina en una época pasada e históricamente obsoleta, en la que los pobres y “los que sobran” se depravaban y morían de hambre, y en la que no existía ningún tipo de seguridad social. Así que esta pertinaz pregunta supone que, en nuestras sociedades, las personas expulsadas del trabajo asalariado realmente no tienen otras posibilidades para asegurar su existencia. Entonces, a todos los que siguen repitiendo la misma pregunta, permítaseme explicarles que de lo que se trata es de determinar cuánto es necesario para garantizar la existencia de las personas y de asegurar que todas y todos tengan un trabajo asalariado o remunerado, de tal modo que nadie se vea en la obligación de recurrir a la ayuda de la sociedad. En todo ello, además, debe definirse qué puede ser un Buen Vivir para todos y todas pues, frente a los conceptos de crecimiento y consumo, debemos acotar críticamente que lo que hace la felicidad humana no es una variedad cada vez más grande de productos y más y más consumo, y que el carácter terminable de los recursos naturales y la indiscriminada explotación de la tierra requieren estructuras alternativas para la vida social. Entonces, al analizar el tema de esta forma más integral y amplia, todos quienes reiteradamente insisten en preguntar “¿y quién pagaría todo eso?” se darán cuenta de que su pregunta es de patas cortas y que la responsabilidad no se limita a quién paga, sino que se refiere a la

redistribución de la riqueza social y a la sobrevivencia misma de la humanidad y del planeta.

En conclusión, la pregunta es: ¿Puede la “perspectiva cuatro en uno” ser el punto de partida hacia una vida en la que todas y todos puedan vivir bien, lo que se considere bueno sea deseado democráticamente por todos y todas, y se adecue a las posibilidades del planeta?

Traducción del alemán: Cordi Thöny

Hay que dejar de crecer Acerca del postcrecimiento

Karin Gabbert⁶

*Este texto recibió los aportes y comentarios de Miriam Lang,
Alexandra Martínez y Claudia López.*

Voy a presentar mis aportes en dos momentos: primero, expondré un panorama de lo que está ocurriendo en la sociedad alemana en torno al crecimiento y postcrecimiento y, segundo, algunas posiciones académicas y políticas al respecto.

Desde el principio de la industrialización, existen críticas al crecimiento como credo central de las ciencias económicas. El Producto Interno Bruto (PIB), que hoy sirve de indicador para medir el crecimiento, fue creado en los años treinta del siglo pasado, como reacción a la crisis económica mundial, para tener un indicador comparativo que midiera el desarrollo económico. Fue recién en el contexto de la competencia entre los sistemas capitalista y socialista, en la época de la Guerra Fría, que el PIB fue establecido como el único indicador universal para medir el bienestar y el progreso. Luego, el Banco Mundial adoptó el crecimiento como fin absoluto para los países llamados en desarrollo y el PIB, como la herramienta para visibilizarlo.

En 1972, el informe del Club de Roma, titulado *Los límites al crecimiento*, planteó por primera vez la necesidad de revisar los procesos de crecimiento económico, pues de seguir en ese camino, se provocaría la destrucción del planeta. Después de esta primera discusión, se llevaron a cabo diversos debates sobre el tema. El último debate coyuntural se realizó después de la crisis financiera mundial de 2007. El colapso del Banco Lehman Bro-

6 Karin Gabbert es subdirectora del trabajo internacional de la Fundación Rosa Luxemburg, en Berlín, y dirige el trabajo en América Latina. Ella tiene un doctorado en sociología y estudió en Berlín, Buenos Aires y Bielefeld.

thers, de los convenios internacionales sobre el cambio climático, y la catástrofe atómica de Fukushima,⁷ son eventos significativos que marcaron estos debates. La crisis del capitalismo financiero, la crisis ambiental con el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad biológica y la creciente desertificación, se conectan con la dinámica y el efecto del crecimiento económico.

En este contexto—de un crecimiento basado en el uso de energías fósiles que destruye la Naturaleza, y de un modelo de crecimiento capitalista financiero inestable—, actualmente se discute sobre una economía más allá del crecimiento o, dicho de otra manera, un nuevo paradigma de economía. Nuevas y viejas propuestas —por ejemplo, el libro de Tim Jackson *Prosperidad sin crecimiento*— se están analizando intensamente en círculos académicos, medios de comunicación, y en organizaciones sociales y ecologistas.

Existen múltiples expresiones políticas, sociales y culturales que comparten esa postura, y que están buscando alternativas. No obstante, se debe subrayar que el término economía o sociedad postrecimiento es un término políticamente neutro: se emplea tanto desde posturas políticas que buscan construir sociedades social y ecológicamente justas, como desde posiciones políticas neoliberales y/o reaccionarias.

Impresiones desde Alemania

Existen varias señales en las sociedades europeas, por ejemplo, en la alemana, de inconformidad. Cada vez más personas no están

7 Fukushima influyó sobre las políticas energéticas de algunos gobiernos industrializados y emergentes, que actualmente están usando energía atómica. Se contextualiza en la “crisis civilizatoria”; al respecto, ver ponencia de Edgardo Lander “Un nuevo período histórico: Crisis civilizatoria y asaltos a la democracia”, presentada en el “Foro Vivir Bien Más Allá del Desarrollo”, 12 de abril de 2012. Una de sus expresiones es la dependencia de sociedades que están usando tecnologías incontrolables y formas de producir energías destructivas, con el objetivo de lograr constante crecimiento económico.

de acuerdo o están sufriendo a causa del modo de vida imperante. Me refiero al modo de vida que está dominado por el trabajo asalariado, en el que se debe trabajar cada vez más por el mismo salario; un trabajo asalariado que permite juntar riquezas materiales y ganar dinero para poder comprar y consumir. A esto se suma una creciente presión sobre la flexibilidad del tiempo y la eficiencia, que no deja espacio para lo social.

Este efecto de la economía capitalista transforma el tiempo en dinero; para expresarlo de otra manera: “el capitalismo tiene que intensificar cada vez el crecimiento y la aceleración del tiempo que ganamos en la producción de lo que tenemos que gastar en el consumo” (Assheuer, 2006). Esta aceleración tiene como resultado la precipitación del consumo; consumo que tiene que ser activado artificialmente, porque no se basa en necesidades reales. “Se está produciendo para la producción como fin en sí mismo, y el tiempo ahorrado se nos paga con desempleo” (Ibíd.).

Europa es una sociedad fuertemente saturada, con grandes posibilidades de consumo y varios sectores que –al menos parcialmente– pueden acceder a este consumo. Existe mucha gente excluida y empobrecida; por ejemplo, migrantes que no lograron legalizar sus papeles. No obstante, Europa es el modelo de desarrollo a seguir para los países del Sur. Sin embargo, el modo de vida hegemónico europeo no solamente se basa en la explotación del Sur global, sino que genera, en su propio territorio, múltiples resistencias, rechazos y crisis ideológica.

Según una encuesta del Instituto Emnid,⁸ solo 30% de los alemanes cree que el crecimiento económico mejora su calidad de vida. Dos tercios de los alemanes no creen en el mercado ni en el crecimiento económico, y consideran que ciertos valores inmateriales son fundamentales para su calidad de vida; por ejemplo,

8 Instituto especializado en realizar encuestas de opinión. Es uno de los más grandes de Alemania.

tener buena salud, un ambiente sano y mantener las relaciones sociales (Pinzler, 2012:21).

Pickett y Wilkenson, en una investigación reciente, demuestran que en sociedades del Norte global la satisfacción individual crece en la medida que la desigualdad disminuye. Las personas están más satisfechas en sociedades más equitativas, que en sociedades más ricas. Si la desigualdad es menor, la expectativa de vida es mayor, y la salud mental y psicológica mejora, así como también la educación. En cambio, cuando la desigualdad es mayor, hay más competencia por las riquezas materiales y los espacios de poder (Kate Pickett y Richard Wilkinson, 2010). De tal manera que, para reducir el uso de energía, se tendría que reducir la desigualdad y, con ello, disminuiría una parte del consumo que solo aporta al “prestigio” social.

Algunas iniciativas que cuestionan activamente el modo de vida imperante, se transforman en emprendimientos sobre todo en los ámbitos local y regional, donde participan jóvenes, migrantes, artistas, y vecinos, la mayoría no organizados.

Iniciativas de trueque, para regalar o intercambiar servicios y de apoyo mutuo, están creciendo en todas partes. En Berlín, la capital de Alemania, el año pasado se formó una red de huertos comunitarios urbanos, que aglutina a vecinos, ancianos, migrantes, sobre todo mujeres, desempleados y jóvenes, quienes trabajan la tierra en espacios ciudadanos y cultivan plantas que están prohibidas para la venta, ciertas variedades de papa, y se dedican a la producción de miel. Estas iniciativas de convivencia entre la gente tienen el objetivo de retomar la producción. No son para ganar dinero, sino para darle sentido a su vida. En 2011, en Berlín, Múnich y Frankfurt se realizaron campañas donde proliferaron las invitaciones por Internet, para la creación de espacios colectivos para la producción de ropa.

En otro ámbito, existe un pequeño movimiento, que se llama el movimiento de los recogedores de basura. Esta iniciativa

empezó en Nueva York y se está extendiendo en algunas ciudades alemanas. Se trata de gente joven, acomodada, que en las noches se dirige a los basureros donde los supermercados botan alimentos que son aún consumibles. Así, los recogedores de basura rescatan alimentos para que no sean desperdiciados. Estos alimentos les sirven para organizar ollas comunes en sus vecindarios. No se trata de una alternativa política ni de un nuevo modelo, sino de una protesta contra la cultura del consumo. Algunos datos mencionan que tan solo en Alemania, en un año, se tiran alimentos a la basura, cuyo valor asciende a 20 mil millones de euros, con el único objetivo de mantener los supermercados llenos y a los consumidores satisfechos. Por esa razón, se arrojan 500 mil toneladas de pan por año, y los panaderos desarrollaron una tecnología para calentar sus hornos y quemar los panes que no vendieron. En ese sentido, las leyes de la Unión Europea para la producción de alimentos provocan que 50% de los alimentos sean destruidos en el lugar de producción, solo porque no tienen el aspecto o tamaño requerido.

Existen ciertas conexiones entre estas iniciativas. Por ejemplo, desde septiembre del año pasado, hubo por lo menos dos ocasiones en que los huertos comunitarios se juntaron a cocinar para apoyar dos mítines en Berlín: una manifestación estudiantil y una protesta por la agricultura masiva e industrializada. Asimismo, en estas iniciativas participaron integrantes del movimiento de recogedores de basura y agricultores orgánicos de los alrededores, quienes llevaron alimentos. Allí se juntaron entre 200 a 300 personas, sobre todo jóvenes estudiantes, que cocinaron en ollas grandes para repartirla en las movilizaciones.

Las experiencias que estoy describiendo no tienen repercusión en la política organizada o en el ámbito nacional. Al contrario, en Europa priman los actores que llevan adelante el modelo neoliberal de crecimiento, dominado por el capitalismo financiero y el poder de los bancos que ha sido perfeccionándose. A raíz de

presiones del gobierno alemán, la política europea está cortando extremadamente sus gastos sociales y está imponiendo políticas de austeridad. Es un programa muy parecido al aplicado en los años ochenta en América Latina, en el que el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional marcaban las líneas: reducir los gastos sociales y los salarios, mientras unos pocos seguían teniendo ganancias irracionalmente elevadas. Esta política está cortando y destruyendo partes de la infraestructura social.

El camino hacia una política de postcrecimiento significaría colectivizar ciertos servicios para hacerlos más económicos, e implicaría el ahorro de energía. Sin embargo, las políticas de austeridad están teniendo el efecto contrario; por ejemplo, en Grecia, el transporte público de bus y tren se está reduciendo drásticamente; y en Irlanda, se están cerrando colegios públicos, con el argumento de la deuda.

La política alemana nacional se aferra al discurso del crecimiento. Se dice que Alemania es el país que salió mejor parado de la crisis del mercado financiero, y con ese argumento se legitiman los cortes en el gasto social y los salarios. Lo que se omite es que las exportaciones de Alemania justamente están generando deuda en los países importadores de esos productos; es decir, Alemania, de cierta forma, se aprovecha de la miseria de sus compradores. Esta estrategia dominante, a corto y mediano plazo, resulta muy difícil de contradecir, a pesar de que al interior de los partidos políticos existen personas que están conscientes de que este modelo es excluyente y no tiene futuro. Estas personas, aunque son una minoría, están presentes en todos los partidos, a excepción del partido liberal. Aunque su influencia es menor, logran tener cierta influencia discursiva al aliarse con los movimientos y organizaciones sociales mencionadas anteriormente.

Es evidente, sin embargo, que las discusiones políticas institucionales se organizan de manera que no se cuestionen temas fundamentales, como el crecimiento o el capitalismo; al contrario, se

plantean argumentos que terminan por defender el sistema económico y el crecimiento. Así, la comisión que creó el Parlamento Alemán hace un poco más de un año, encargada de discutir sobre bienestar, crecimiento y calidad de vida, no capta la atención de la sociedad alemana en general, porque no está tomando en serio las preocupaciones, discusiones e iniciativas que existen, para no atentar contra los intereses de los gobernantes.

Hay otras razones del por qué los gobernantes no acogen seriamente estas discusiones. Desde el triunfo del capitalismo en 1989, los Estados nacionales y sus parlamentos ya no parecen ser funcionales a la expansión del capitalismo –simplemente los gobiernos no parecen estar en condiciones de regular los flujos de capital, mercancías e informaciones–. Sería útil actualizar el análisis de Carlos Marx acerca de las fuerzas productivas que hacen estallar las relaciones de producción.

Discusiones académicas de postcrecimiento

El debate académico sobre el postcrecimiento se enfrenta a la dificultad de tener que ser necesariamente interdisciplinario. Esto es difícil de encontrar, sobre todo en las facultades de economía. Sin embargo, a partir de 2012, se formó un primer grupo interdisciplinario en la Universidad de Jena, bajo el título “Pensar el fin del capitalismo”, para investigar lo que llaman *sociedades en postcrecimiento*.

El grupo “Pensar el fin del capitalismo” investigará el tema en los siguientes ocho años y con un presupuesto de seis millones de euros. El sociólogo Klaus Dörre, quien impulsó esta iniciativa, dice: “Hay muchas señales de que el proceso de estabilización de sociedades –basadas– en el crecimiento material ya no está funcionando”. Para la discusión de inauguración, invitaron a cuatro personas con posiciones contrarias en el debate que se está dando en Alemania.

El conservador Meinhard Miegel dijo que “es tiempo de dejar atrás la visión de opulencia de Occidente”. El sindicalista Hans Jürgen Urban señaló que “el crecimiento debe ser cualitativo en vez de cuantitativo y se trata de redistribuir riquezas de arriba hacia abajo”. La profesora Birgit Mahnkopf, miembro de la Fundación Rosa Luxemburg y cofundadora de Attac Alemania, dijo que “hay que salir rotundamente del crecimiento y el capitalismo”. Mientras que Karl-Heinz Paque, economista y exministro liberal de finanzas del Estado alemán Sajonia-Anhalt, sostuvo que “existe la posibilidad de conciliar el crecimiento y la ecología”. Esas posiciones dan cuenta de distintas corrientes académicas y políticas en el debate actual sobre el postcrecimiento.⁹

Una primera posición es la *crítica conservadora al crecimiento*. Meinhard Miegel es el representante más conocido de esa vertiente. Que un conservador esté afirmando con palabras drásticas, que no podemos seguir el camino del crecimiento económico, porque estamos destruyendo el medio ambiente y el mundo en el que vivimos, dio mucho peso a este debate en los medios de comunicación, e incluso en círculos de gobierno. Miegel señala que no podemos seguir financiando el Estado de bienestar, porque éste constituye una de las razones fundamentales para la necesidad de crecimiento. Eso le lleva a la conclusión de que hay que recortar el gasto social. No obstante, su crítica al crecimiento legitima un proyecto conservador de redistribución desde abajo hacia arriba. Además, está apoyando a políticas y prácticas patriarcales, cuando propone que los servicios sociales de cuidado de niños o ancianos

9 Encontré muy útiles para resumir las discusiones políticas y académicas que constan en casi todos los artículos en Werner Rätz, Tanja Egan-Krieger, Barbara Muraca, Alexis Passadakis, Matthias Schmelzer, y Andrea Vetter, *Ausgewachsen! Ökologische Gerechtigkeit. Soziale Rechte. Gutes Leben*. VSA Verlag, Hamburg, 2011. Este libro junta posiciones acerca del debate de postcrecimiento desde una perspectiva crítica al modelo global neoliberal.

deben volver a ser responsabilidad familiar, lo que implica que estas tareas recaerían sobre las mujeres.

Por otro lado, está la *crítica tecnócrata al crecimiento*, que discute sobre indicadores alternativos para medir el bienestar. Muchas instancias gubernamentales europeas han financiado comisiones de expertos, para desarrollar nuevos indicadores para modelos de crecimiento mejores, más sociales o sostenibles.

Otra de las posturas es el *Green New Deal* o *Nuevo Acuerdo Verde*, que es una de las respuestas más exitosas en el marco de la crítica al crecimiento –y que en Alemania se origina en el ámbito del Partido Verde–, sobre todo entre las clases medias altas y eruditas. El *Green New Deal* ofrece una respuesta a la crisis civilizatoria, que promete que sí se puede conservar el medio ambiente sin necesidad de cambiar el modo de vida. Es una propuesta reformista que, al mismo tiempo, explora y encuentra nuevas fuentes de crecimiento, pero ecológicas. La idea central consiste en que se puede separar el crecimiento económico del uso de recursos, mediante el desarrollo de tecnologías cada vez más eficientes que permitan producir más usando menos recursos naturales y menos energía, y produciendo menos emisiones y desechos. La crítica a esta propuesta sostiene que la tecnología –que fue el motor de la industrialización– solo fue posible porque se partió de reservas interminables de energía fósil. Sin embargo, está demostrado que cada tecnología más eficiente –que requiere menos energía para un mismo resultado– lleva a un aumento cuantitativo de la producción y, así también, del uso de energía, lo que se conoce como el efecto *Rebound*. Por ejemplo, producir autos que consumen cada vez menos energía es una estrategia muy eficaz para aumentar la venta de vehículos, que en su totalidad consumen más energías; por tanto, se necesitan más carreteras y se producen más emisiones.

La idea del *Green New Deal* se consolidó en el ámbito internacional con el nombre de economía verde, en la conferencia

de Río+20, en junio de 2012. Detrás de la economía verde está una postura que refuerza la lógica capitalista de mercado. La propuesta de economía verde de Naciones Unidas para Río+20 implica prometer soluciones tecnológicas que no afectarán las relaciones de poder existentes.

La posición del decrecimiento

En Francia, España e Italia existen movimientos sociales muy activos que proponen el *decrecimiento*. Este concepto ataca fundamentalmente la visión de una economía basada en el crecimiento y el rédito. Propaga una visión igualitaria y democrática de una economía que primero tiene que *decrecer* para, después, terminar en una economía estable que no crece más (*steady state economy*). El decrecimiento, como tal, no es verdaderamente una alternativa concreta; sería, más bien, la matriz que daría lugar a la eclosión de múltiples alternativas.

Serge Latouche es uno de los padres de este concepto. Describió la utopía concreta del decrecimiento en ciertos principios: reevaluar lo que cuenta; reconceptualizar conceptos claves como riqueza, pobreza o valor; reestructurar el aparato productivo según estos nuevos conceptos; redistribuir la riqueza y el acceso a los recursos naturales entre Norte y Sur y entre las clases sociales; reducir producción y consumo, especialmente para bienes y servicios con gran consumo de energía o medio ambiente; reusar productos y reciclar basura.

En su perspectiva, existen biorregiones y pueblos urbanos autosuficientes y políticamente autónomos que intercambian ideas, pero pocos productos o capital. La visión para el Norte es que alimentos, energía y dinero solo se intercambian en el ámbito local. El Sur, según esta visión, puede crecer hasta llegar a satisfacer las necesidades de la población y, después, definir su propia transición. Latouche hace un llamado por liberar al Sur de la falsa promesa de seguir el ejemplo del Norte, y Baudrillard señala que

“lo único que hace seguir adelante la cultura occidental es que el resto del mundo quiere ser parte de ella”.

Propuestas desde la izquierda

Justamente porque tendría efectos sociales negativos, no se puede apoyar a un decrecimiento económico dentro de las estructuras existentes. Uno de los peligros más grandes de economías que no crecen, es que se combinen con políticas de desregulación y privatización. Por ejemplo, sería fatal reducir el sector de servicios públicos, para relegarlos al ámbito privado, la familia y con eso –relegar– a las mujeres, como lo proponen muchas propuestas conservadoras. Eso toca uno de los puntos claves de las posturas sobre postrecimiento desde la izquierda. Lo que se está discutiendo es la necesidad de análisis y propuestas que no subordinen ni lo ecológico a lo social, ni lo social a lo ecológico. Crear eso no es fácil, y el papel fundamental de la izquierda es conectar los conocidos límites ecológicos del crecimiento con el tema de la justicia social, de la equidad y, agregaría, de la democracia.

No hay un concepto consistente desde la izquierda para una economía postrecimiento, sino que existen múltiples conceptos y muchas prácticas que, a veces, son complementarias y, a veces, contradictorias. En la Fundación Rosa Luxemburg hablamos de una izquierda mosaico, en la que muchas piedras de muchos colores forman un todo (Übergänge, 2011).

Dentro de los sindicatos alemanes, se puede constatar cierta apertura a la crítica del crecimiento, pero al mismo tiempo ésta tiene sus límites, debido a que los sindicatos, generalmente, se aferran a la meta de que cada persona debe tener un empleo asalariado (ocupación plena). Según esta posición, esto sería posible –incluso con un reducido crecimiento económico–, si el eje central de la economía fuera el sector servicios. Así, todavía existiría el poder adquisitivo para activar la economía, mantener los estándares sociales alcanzados en Europa y cuidar el uso de energía,

porque el sector servicios solo usa 20% de la energía que necesita el sector productivo. De todos modos, desde esta perspectiva, se necesita crecimiento económico, aunque sea más moderado.

Ciertas posiciones feministas, al contrario de los sindicatos, mantienen y desarrollan la postura que hay que reducir el tiempo de trabajo asalariado para repartir, de manera más justa, el trabajo reproductivo, social y político, y así reducir el crecimiento económico de la esfera capitalista y, a la vez, combatir la división patriarcal del trabajo. Al mismo tiempo, se ganaría calidad de vida si cada persona asalariada trabaja menos horas, y se podría incluir a más gente –que ahora está en el desempleo– al trabajo asalariado. Hay muchas ideas de cómo reducir el tiempo de trabajo asalariado; una de las más conocidas es la de otorgar una renta básica incondicional a cada persona para vivir. El problema es que estas ideas todavía no encuentran una expresión potente organizada, que las promueva sistemáticamente.

También hay conceptos que ponen énfasis en la justicia global, que exigen que las personas que viven en el Norte consuman menos. Muchas veces, esto se traduce en demandas de desistimiento individual al consumo, que individualizan el problema, o en demandas de medidas políticas para reducir el consumo en un ámbito ecológicamente aceptable. Para dar un ejemplo, para cumplir con la meta de calentamiento global de 2°C (grado Celsius), el límite individual de emisiones para cada persona en el planeta sería de 2,7 toneladas de CO₂ por año, hasta 2050. En este momento, el promedio de emisiones para cada persona en Alemania por año, son 11 toneladas y un solo vuelo de Europa a Nueva York implica emisiones individuales de 4,2 toneladas.

Desde otras posturas, se critica que esta visión individualista obvia las relaciones de poder existentes, y deja de lado quién gana y quién pierde al producir, vender y consumir.

Otra propuesta para entrar en economías postcrecimiento consiste en dejar definitivamente atrás las tecnologías destruc-

tivas, como la producción de armas, la energía atómica y la ingeniería genética, que son gigantescas fuentes de crecimiento y destrucción.

Existen propuestas que exigen una desmonetización de la sociedad, aumentar los bienes comunes y, a la vez, reducir las esferas bajo dominio del mercado y del dinero; por ejemplo, vía el trueque. Otros optan por proyectos de economía solidaria. Los movimientos de los bienes comunes y del *software* libre han demostrado que es posible producir y ofrecer los bienes necesarios, más allá de la producción para fines de lucro. Además, existen iniciativas y un debate sobre la regionalización de la economía, para evitar la enorme inversión económica y ecológica en el transporte global de bienes. Otras propuestas exigen la organización del control democrático de las inversiones para una economía de uso, en vez de una economía basada en el lucro.

Y, ¿cómo se llega a implementar estas políticas? La respuesta aún no puede ser muy concreta. Más allá de los sentidos y actividades mencionadas, no existe una coalición de actores sociales y políticos con influencia, que propaguen un modo de vida solidario-ecológico y una economía postcrecimiento. Lo que sí existe son proyectos que pueden servir como propuestas iniciales:

- Energía local y democrática, con centrales de generación energética en manos ciudadanas, en donde se reduzca el consumo y, por ende, la producción de energía.
- Proyectos de agricultura solidaria, que se resistan a la cadena de creación de valores basados en el uso de energía fósil.
- Transporte público gratuito, en lugar de la movilidad individual en autos.
- Reducción del tiempo de trabajo asalariado –para que más gente pueda tener empleo, pero trabajando menos horas–.
- Programas de inversión pública en productos sociales y ecológicos necesarios, pero no rentables en el mercado, como el cuidado de niños y ancianos, o la educación.

Para ganar los espacios de incidencia real, hay que luchar globalmente por los pasos necesarios, como el derrocamiento de los mercados financieros y de la lógica accionista, un sistema democrático de bancos, un sistema tributario redistributivo, soberanía alimentaria en el Norte y en el Sur, la nacionalización de bienes y servicios públicos, y la generación de energía democrática, renovable y local, para solo mencionar algunos ejemplos.

En el ámbito internacional, el postcrecimiento solidario está estrechamente relacionado con el debate del postextractivismo y de la demanda de materia prima, que lleva a presiones del mercado global sobre los procesos de transformación, por ejemplo, en América Latina.

Si las izquierdas no logran organizar este debate y juntar las fuerzas para el cambio, terminaremos teniendo una sociedad postcrecimiento, por la fuerza de los hechos; pero esta será destructiva, tanto en lo social, como en lo ecológico. No se puede decretar el cambio desde arriba: el motor debe provenir desde las luchas sociales.

Crisis socioecológica y modo de vida imperial

Crisis y continuidad de las relaciones sociedad-Naturaleza en el capitalismo

Ulrich Brand¹⁰ y Markus Wissen¹¹

Agradecemos a Mario Rodríguez, Miriam Lang, Alexandra Martínez, Katu Arkonada, y Alejandra Santillana por sus valiosos e importantes comentarios.

Introducción: Acerca de la relación entre crisis económica y ecológica

En las sociedades capitalistas, las crisis económicas son particularmente relevantes porque tanto el capital en sus distintas facciones, como los asalariados y los que representan sus intereses, pueden ver afectadas sus bases materiales de reproducción. Luchan por opciones de aprovechamiento o empleos asalariados, así como por una estabilización social y posibilidades de planificación, para asegurar la reproducción, por lo menos a mediano plazo. A pesar de ello, el concepto según el cual “una crisis arranca lo conocido de sus fundamentos” y llama a “reorganizar las fuerzas” (Haug, 2010: 2121), nos parece limitado. Al menos en las

10 Ulrich Brand es profesor titular e investigador en política internacional de la Universidad de Viena. Trabaja sobre teoría crítica, teoría del Estado y teoría de regulación, economía política global, políticas medioambientales y de recursos, crítica a la globalización neoliberal. Miembro del comité de expertos del Parlamento alemán sobre “Crecimiento, Bienestar y Calidad de Vida” (enero 2011 a junio 2013), de la sede central de la Fundación Rosa Luxemburg, y del Consejo Asesor Científico de ATTAC, en Alemania.

11 Markus Wissen es doctor en ciencias políticas y trabaja actualmente como profesor asistente en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Viena, Austria. Sus temas de investigación son desarrollo sustentable en la ciudad, políticas internacionales de biodiversidad, agrobiodiversidad, infraestructuras de agua potable y aguas servidas, así como cambio climático y agua.

sociedades del Norte, esto solo aplica muy parcialmente a las manifestaciones de la crisis ecológica actual.

A diferencia de las consecuencias de la crisis económica y las formas predominantes de su manejo, el drama irrefutable del cambio climático y la radicalización de la protesta ecológica – tal como se manifestó, por ejemplo, en Copenhague durante la COP15,¹² o frente al transporte de contenedores de desechos nucleares Castor, en Alemania, en noviembre de 2010–, casi no llegan a la vida cotidiana de los habitantes del Norte. La catástrofe del reactor nuclear de Fukushima, por cierto, incrementó el malestar respecto de la megatecnología y generó –por lo menos en Alemania– declaraciones políticas, seguidas de leyes para abandonar la energía nuclear, en junio 2011. Sin embargo, hasta la fecha, esto no ha generado un cuestionamiento crítico acerca de los patrones de producción y consumo que se vuelven posibles, precisamente, gracias a la energía nuclear.

Aunqu los diversos fenómenos de crisis están interrelacionados –por ello se habla de “crisis múltiple”– y es evidente el carácter de clase y género de la crisis ecológica, parece que la evolución de esta última se basa en una dinámica singular que la diferencia de los otros fenómenos de crisis. Al mismo tiempo, la especificidad de la crisis ecológica tiene sus efectos sobre el desarrollo y el manejo de la crisis económica y/o energética.

A continuación, trataremos de analizar con mayor detalle, y desde la perspectiva de una ecología política, la relación entre continuidad y ruptura en la múltiple crisis actual. Para este fin, introducimos un término que consideramos importante desde la perspectiva de la teoría (anti)hegemónica: el “modo de vida imperial”. Este no se refiere simplemente a un estilo de vida practicado por diferentes clases sociales, sino a patrones dominantes

12 La Conferencia de los Estados Signatarios de la Convención sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que tuvo lugar en diciembre de 2009.

de producción, distribución y consumo, a imaginarios culturales y subjetividades fuertemente arraigados en las prácticas cotidianas de las mayorías en los países del Norte, pero también –y crecientemente– de las clases altas y medias en los países emergentes del Sur.

Según nuestra tesis, el concepto del modo de vida imperial permite, por un lado, explicar la contradicción (aparente) entre el aumento real y ampliamente reconocido de los fenómenos de crisis en las relaciones sociedad-Naturaleza, y, por otro lado, las medidas sociopolíticas insuficientes para combatir estos fenómenos de crisis.

Dicho de otra manera: si bien la crisis ecológica se politizó en los últimos tiempos, y fue percibida como un problema en el discurso dominante, al parecer los patrones de producción y consumo, así como los patrones culturales subyacentes, que la generan, se están consolidando y generalizando a nivel global, con el apoyo del Estado y de la esfera política.

Cuando hablamos de generalización, no insinuamos que todas las personas estén viviendo igual, sino que existe una especie de lógica de desarrollo ampliamente aceptada, que se inscribe en estructuras sociales y dispositivos de acción. Por consiguiente, la crisis de las relaciones sociedad-Naturaleza debe ser entendida en estrecha relación con las estructuras sociales dominantes, las relaciones de poder y de fuerzas, los contenidos de la política estatal, y la tendencia hacia las crisis, que es propia de las sociedades capitalistas.

Esta perspectiva de análisis nos permite distinguir algunas razones que suelen ser obviadas en los diagnósticos críticos de la crisis, y que explican por qué en el Norte existen tan pocas iniciativas emancipadoras frente a esta crisis múltiple (ver los textos de Karin Gabbert y Kristina Dietz, en este libro). Es decir, por qué la crisis innegable de funcionamiento del capitalismo financiero, en muchas regiones aún no se traduce en una crisis de legitimación.

Modo de vida y modo de desarrollo

Una categoría central de la teoría de la regulación es el “modo de desarrollo”. Significa la coherencia temporal entre el desarrollo histórico de unos patrones de producción y distribución, por un lado, y unos patrones de consumo, por el otro lado; coherencia que constituye un régimen de acumulación. La dinámica capitalista y la capacidad de lograr hegemonía se dan, sobre todo – aunque no exclusivamente –, cuando se cristaliza un régimen de acumulación más o menos “estable”.

Desde la teoría de la regulación, las diferentes ramas del proceso de producción (industrias de bienes productivos y de bienes de consumo), y sus respectivas normas deben ser más o menos compatibles con las condiciones del consumo final y las ideas socialmente dominantes de una “buena vida”. Al ocurrir crisis menores, éstas deben ser manejables. Un ejemplo: la industria automovilística, involucrada globalmente en una competencia brutal, en sus secciones de investigación y desarrollo tecnológico debe proyectarse a partir de una demanda global estimada, que recién se concreta en el momento de la venta. Esto genera sobrecapacidades y destrucción de capital, como podemos observar en la actualidad.

Los conceptos de patrones y normas de consumo, tomados de la teoría de la regulación, no solo hacen referencia al consumo de bienes y servicios, sino a todo un modo de desarrollo dinámico, cuya dimensión material estructura la existencia social y las relaciones sociales, como la alimentación, la vivienda y la movilidad; el trabajo asalariado y otras formas de trabajo socialmente necesarias; el tiempo libre; lo público en su sentido amplio y lo político en su sentido estrecho; así como la colectividad, la vida en familia y la individualidad. Al mismo tiempo, persiste la producción para la subsistencia, que si se da bajo condiciones espaciales

y de género sumamente desiguales, contribuye significativamente a la reproducción capitalista.

La forma concreta que adquiere el modo de desarrollo es el resultado de experiencias históricas, conflictos y acuerdos sociales, que terminan consolidándose en un determinado desarrollo tecnológico, ideológico e institucional. Al mismo tiempo, perdura la producción de subsistencia, que también contribuye significativamente a la reproducción de las sociedades capitalistas en espacios muy diferentes, y bajo la condición de relaciones de género en extremo desiguales.

Nuestro concepto de modo de vida se basa en los conceptos del patrón de producción y consumo de la teoría de la regulación; además, se apoya en el concepto del modo de desarrollo (que también utiliza la teoría gramsciana). Sin embargo, se diferencia de este último en la medida que asigna más importancia a las microprácticas cotidianas y al sentido común, rara vez abordados explícitamente por los teóricos de la regulación. Es decir, no son considerados factores autónomos que influyen en cómo determinados patrones de consumo llegan a generalizarse, o en cómo se crean ciertas condiciones para determinados patrones de producción; éstos solo suelen ser vistos en su funcionalidad y/o disfuncionalidad a la generación de una coherencia macroeconómica.

Para nuestro argumento, es central suponer que, en determinadas fases históricas y sobre la base de una congruencia entre los patrones de producción y de consumo, se genera un modo de vida hegemónico; es decir, un modo de vida ampliamente aceptado, amarrado institucionalmente y profundamente arraigado en las prácticas cotidianas de la gente; un modo de vida relacionado con determinadas ideas sobre el progreso. Por ejemplo, se espera que las computadoras sean cada vez más potentes y que los alimentos sean cada vez más baratos, sin importar las condiciones sociales y ecológicas en las que se producen.

Los patrones de producción y consumo que se convierten en hegemónicos en determinadas regiones o países, pueden generalizarse a escala global de forma “capilar”, irregular y con considerables diferencias en el espacio y en el tiempo. Esto tiene que ver con estrategias empresariales concretas e intereses de capital, con políticas estatales comerciales y de inversión, con geopolíticas, pero también con el poder adquisitivo y los imaginarios acerca de un modo de vida atractivo, en aquellas sociedades donde estos patrones de producción y consumo llegan por la vía del mercado mundial.

Cuando hablamos de “generalización” no significa que todas las personas vivan de la misma manera, sino que se generan determinados imaginarios profundamente arraigados acerca de lo que se entiende por calidad de vida, buena vida y desarrollo social; imaginarios que marcan la cotidianidad de un número creciente de personas, no solo a nivel simbólico, sino también material.

La dimensión simbólica no es solamente importante en tanto contribuye a la coherencia de un determinado régimen de acumulación, sino porque la creación y las prácticas cotidianas de un modo de vida tienen sus dinámicas propias (que, por cierto, no están del todo separadas de lo macroeconómico). Resulta, además, sustancial anotar que este proceso no es socialmente neutro; al contrario, es intermediado por inequidades globales, por las relaciones de clase, de género o étnicas, específicas en un territorio determinado .

Como lo demostraremos más adelante, es verdad que en el Norte el manejo de las contradicciones sociales se vuelve más fácil, a raíz de la externalización de los costos ecológicos que surgen en la reproducción de la fuerza laboral; al mismo tiempo, los patrones de consumo inherentes al modo de vida imperial son específicamente clasistas.

El carácter imperial del modo de vida del Norte

Se puede hablar de un “modo de vida imperial” a partir de la colonización, que arranca en el siglo XVI y el sistema-mundo liberal capitalista, instaurado en el siglo XIX. No obstante, durante dichos períodos, este modo de vida se limitaba a las clases altas. No era hegemónico en el sentido de caracterizar la vida de la mayoría de la población y, con ello, sus prácticas cotidianas. Fue recién, con el desarrollo del fordismo, a partir de la mitad del siglo XX, que se produjo una transformación amplia en las relaciones sociedad-Naturaleza y, en consecuencia, en el modo de vida. Es, entonces, cuando el modo de vida imperial se arraiga en la cotidianidad de las mayorías, particularmente de los países del Norte.

Dos fueron las bases del modo de desarrollo fordista: la primera, la profunda transformación taylorista de la organización del trabajo y el incremento correspondiente de la producción en los centros capitalistas; la segunda consistió en que la reproducción misma de los asalariados, progresivamente empezó a solucionarse a través de mercancías: la movilidad mediante el automóvil, la alimentación mediante productos de fabricación industrial, la vivienda mediante la construcción y adquisición de casas de familia.

Con la creciente productividad, se redujeron los costos de los bienes de consumo y, con ello, también los costos de la reproducción de la fuerza laboral. Los asalariados participaron de la creciente plusvalía con el incremento de sus salarios reales, resultado del compromiso de clases fordistas. Las innovaciones tecnológicas en áreas como la química, la agricultura, las telecomunicaciones, la construcción de maquinaria, la electrónica y el transporte, constituyeron elementos fundamentales de la dinámica fordista, y tuvieron implicaciones específicas sobre las relaciones sociedad-Naturaleza. El automóvil y la vivienda propia, equipados con

bienes de fabricación industrial y asegurados a través de políticas estatales y del sistema de crédito, fueron orientaciones hegemónicas de la producción y del consumo fordistas.

El modo de vida del Norte es “imperial” en la medida en que presupone un acceso, en principio ilimitado –normalmente, vía el mercado mundial, asegurado a través de políticas, leyes o mediante el ejercicio de la fuerza–, a los recursos, el espacio, las capacidades laborales y los sumideros del planeta entero.¹³ El desarrollo de la productividad y del bienestar de las metrópolis se basó en una repartición mundial de recursos muy favorable para estas (Altvater: 1992). El inmenso crecimiento experimentado durante el fordismo se logró gracias a la fuerte explotación de energías fósiles (primero, carbón y luego, sobre todo, petróleo) y al uso indiscriminado de los sumideros de todo el planeta. Lo importante fue disponer de una relativa abundancia permanente de recursos naturales baratos, en el mercado mundial (materias primas y productos agrarios). El predominio militar y político de los Estados Unidos y la guerra fría con la Unión Soviética generó cierta estabilización de la situación política mundial, reflejada, también, en el acaparamiento constante de recursos baratos, como el petróleo.

Después de la crisis del fordismo, en los años ochenta, surgió un modo de desarrollo postfordista, en el marco de un proceso de reestructuración duramente disputado. Si el fordismo puede ser entendido como una forma de acumulación intensiva, que hizo posible un incremento de la plusvalía relativa a través de la intensificación permanente del proceso laboral, a partir de 1980 y, más aún, en los noventa, predominó un modo de acumula-

13 Véase la crítica del enfoque de regulación de Thomas Barfuss: “El concepto de regulación presupone, para su uso, un nivel de abstracción que no permite tomar en cuenta fenómenos singulares del cine, la publicidad, literatura o cultura cotidiana sin relacionarles de una manera demasiado generalizada con un determinado régimen de acumulación” (2002: 30).

ción más bien extensivo, basado en el incremento de los horarios de trabajo pero, sobre todo, en el aumento mundial del número de asalariados en países como la China (Sablowski: 2009). Otros hitos que marcan este proceso de reestructuración (que puede ser calificado como la neoliberalización de la sociedad, con elementos conservadores y socialdemócratas), son los nuevos modelos de producción, una nueva división internacional del trabajo, la transformación del Estado en Estado competitivo internacionalizado, un corporativismo competitivo aceptado por muchos sindicatos y estructuras sociales, y subjetividades cambiantes (Candeias/Deppe: 2001).

Al calificar el modo de vida fordista y postfordista como “imperial”, no queremos negar o desestimar las estrategias basadas en la fuerza cruda o estructural que adquirieron nuevamente importancia después del 11 de septiembre de 2001. Tampoco queremos, en forma abstracta y con gesto moralizador, criticar a los asalariados de las metrópolis capitalistas y las clases medias y altas de los llamados países (semi-) periféricos, por sus hábitos de consumo y/o su estilo de vida. Las líneas de división se mantienen y son reproducidas en forma consciente o inconsciente. Pero consideramos que el término “modo de vida imperial” es adecuado para destacar el vínculo que existe entre las prácticas cotidianas hegemónicas, las estrategias estatales y empresariales, la crisis ecológica y las crecientes tensiones imperiales en la política internacional. “Modo de vida imperial” es un término *estructural*, que debe ser entendido en el sentido de la teoría de la hegemonía (por eso, este texto no se refiere de manera tan explícita a actores políticos y sociales aunque, por supuesto, son importantes). Este término permite analizar el carácter de la hegemonía en una sociedad determinada, sus consensos activos o al menos pasivos, y volver visibles las escasas fisuras, incluso en tiempos de “grandes crisis”, para a partir de ahí desarrollar estrategias emancipadoras.

Va más allá del concepto clásico o renovado de imperialismo, que no suele tomar en cuenta el modo de vida.

El carácter imperial del modo de vida del Norte se refleja, sobre todo, en el uso de la energía fósil, en su gran mayoría importada del Sur (en donde incluimos también a Europa del este). Su uso es la fuerza motriz del cambio climático que, a su vez, afecta más a la población en las sociedades del Sur.

Pero el carácter imperial del modo de vida del Norte se observa también en relación con los recursos de la “era de la información”; por ejemplo, en la explotación de las tierras raras, como se da en la China, en condiciones altamente peligrosas para la salud y el medioambiente, así como en el manejo de los desechos sólidos que genera el modo de desarrollo postfordista. Lo vemos, asimismo, cuando niños africanos arriesgan su salud al extraer los elementos reciclables de la chatarra electrónica europea.

Para nuestro propósito, el hecho decisivo es que la profundización del modo de vida imperial se dio en dos direcciones: en primer lugar, se reestructuró e intensificó el acceso a los recursos globales y a la fuerza laboral, vía el mercado global. Los patrones de consumo fosilistas (basados en energías fósiles), características del fordismo, no solo sobrevivieron a la crisis del fordismo sin sufrir ningún cambio, sino que salieron intensificados.

Una muestra de ello es la cantidad de vuelos en Alemania, a causa de la liberalización del mercado aéreo y la energía relativamente barata. La cantidad de vuelos dentro de Alemania, hacia o desde destinos en Alemania, creció de 24 millones en 1990, a 66 millones en 2006. Otra evidencia es la cantidad global de automóviles existentes al año 2010, en relación con 1999, con un incremento aproximado a 40% (800-900 millones de automóviles); y el pronóstico global estima que en el año 2030 existirán 1 600 millones. Si consideramos que por cada mil habitantes actualmente en Alemania hay 570 coches, en China, 10 (en Beijing ya existen 100 por cada mil), y en la India, 6 coches, podemos imaginar ya ciertas

dinámicas. De los más de 77 millones de coches producidos globalmente en el 2010 (después de los 61 millones producidos en el 2009, debido a la crisis), en China se produjeron más de 18 millones, en Japón casi 10 millones, en los EE.UU. aproximadamente 8 millones, y en Alemania 6 millones (cifras de OICA, 2011). Haberl et al. (2011) argumentan que todavía dos tercios de la humanidad se encuentran en la transición de economías y modos de vida basados fundamentalmente en la agricultura, hacia economías y modos de vida industriales.

Contrariamente al discurso de los años noventa, alusivo a la “virtualización” de la economía, las tecnologías de la comunicación moderna requieren muchísimos recursos –no solo en cuanto al consumo de electricidad, sino también a los insumos materiales necesarios para su producción, provenientes, en su mayoría, de los países del Sur–.

En segundo lugar, en algunos países, como China o India, se están formando amplias clases altas y medias, llamados “nuevos consumidores” (Norman Myers y Jennifer Kent: 2004), que asumen el modo de vida “occidental” como referente (en algunos países latinoamericanos, este fenómeno ya se dio durante el fordismo).

Modo de vida imperial y crisis de la gestión de problemas desde el Estado

El problema central que surge con el auge de los países emergentes, sobre todo de la India y la China, es la expansión de los patrones de consumo y producción fosilistas, así como los imaginarios de una vida atractiva del Norte, que tiende a propagar un modo de vida que, desde una perspectiva ecológica, no puede ser generalizado.¹⁴ Como consecuencia de ello, se incrementa la demanda

14 Son llamados sumideros los ecosistemas capaces de absorber emisiones; por ejemplo, en el caso del CO₂ los sumideros son los bosques y océanos.

de recursos desde estos países emergentes que, a su vez, reclaman el derecho a hacer uso de los sumideros globales. Es justamente por ello que el auge de países como la India y la China colisiona con el modo de vida imperial del Norte. Este necesita exclusividad en términos ecológicos, ya que presupone que no todos los habitantes acceden de la misma manera a los recursos y sumideros de la tierra; solo así sus costos pueden ser externalizados en el espacio y el tiempo.

Si nos referimos a la teoría imperialista clásica, se podría decir que el capitalismo desarrollado requiere un “afuera” no-capitalista o, en todo caso, menos desarrollado, para no sucumbir a sus contradicciones ecológicas (Luxemburg, 1967). Este “afuera” es la condición que permite el “arreglo medioambiental” (*environmental fix*) de la socialización capitalista.¹⁵

En la medida en que los cambios geopolíticos y geoeconómicos actuales cuestionan el uso exclusivo, por parte del Norte, de los recursos humanos y los naturales, así como de los sumideros del planeta, este “afuera” del capitalismo desarrollado se reduce. Con ello, disminuye también la posibilidad –espacial y en el tiempo– de externalizar sus costos ecológicos.

Esta tendencia tiene implicaciones importantes para toda la arquitectura política creada en los años noventa, para poder manejar la crisis ecológica. Es una arquitectura cuyo núcleo está conformado por las “instituciones de Río”, sobre todo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y el Protocolo de Kyoto, firmado en el marco del mismo, en 1997. Ambos se caracterizaron por una contradicción central desde su inicio. Por un lado, desde su base conceptual (no así en su formulación concreta y, mucho menos, en sus resultados desilusionantes), equivalían a un ataque

15 Véase Castree, 2008: 146 y ss.

gerencial contra el modo de vida imperial, ya que éste se basa precisamente en la idea de que el Norte, protegido por regulaciones jurídicas, puede disponer libremente de los sumideros de la tierra. El Protocolo de Kyoto limita este acceso, en la medida en que solo concede a los países industrializados una cuota de contaminación determinada.

Por otro lado, el modo de vida imperial está profundamente arraigado en las relaciones de fuerzas sociales, en el sentido común y en las prácticas cotidianas de los habitantes del Norte, así como en la orientación general hacia el crecimiento económico y la competitividad. Se inscribe en los aparatos estatales y determina los patrones de percepción y acción de los políticos. Estos defienden los patrones de producción y consumo, pilar fundamental del modo de vida imperial, cada vez que regatean los niveles de emisiones y vuelven a casa orgullosos de haber logrado negociar reducciones muy bajas para “su” país; cada vez que subvencionan la agroindustria o construyen centrales termoeléctricas a base de carbón, o gaseoductos.

Un ejemplo son los “bonos de chatarrización”,¹⁶ en Alemania. En la crisis 2008-2009, el gobierno alemán formuló varios paquetes de medidas para dinamizar la coyuntura, y el segundo paquete incluyó un “bono medioambiental”. Entre enero y septiembre de 2009, las personas recibían 2 500 EUR si cambiaban su automóvil por uno nuevo. Este paquete fue un éxito: 1,75 millones de personas participaron. Así, al 2010, existían 42 millones de automóviles personales de los cuales 40 000 poseían motores eléctricos o híbridos. Esta intervención política –acordada con las empresas y los sindicatos– aseguró la producción y puestos de trabajo en la industria, durante la crisis, y mantuvo la base económica de

16 Este bono implicaba que quien desechaba su carro y lo convertía en chatarra (para adquirir uno nuevo y, así, impulsar la producción) recibía un bono del gobierno a estos efectos.

un país que exporta muchos productos industriales: 25% de los ingresos de las exportaciones de Alemania, en los últimos años, provinieron de la industria del transporte; 15%, de la industria maquinaria; y, 15%, de la química.

Esta contradicción entre la defensa y el cuestionamiento implícito del modo de vida imperial es lo que ha caracterizado desde siempre el manejo estatal de la crisis ecológica. Por ello, no sorprende que Estados Unidos, hasta hace poco el mayor emisor mundial de CO₂ y, hasta ahora, el mayor emisor per cápita, nunca haya ratificado el Protocolo de Kyoto ni tampoco se haya comprometido a reducir sus emisiones.

Esta discrepancia característica, inherente a la arquitectura internacional de política ambiental, se mantuvo latente por mucho tiempo en el Norte. El hecho de que se haya agudizado en los últimos años se debe, por un lado, a que en la agenda política estatal se ha asignado mayor prioridad a la crisis ecológica, debido a la publicación de informes como el Informe Stern sobre la Economía y el Cambio Climático (Stern: 2006) y el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC: 2007).

Sin embargo, es posible que las implicaciones de los cambios geopolíticos y geoeconómicos hayan pesado más para las instituciones de Río. Estas últimas fueron establecidas en un momento en el que el predominio del Norte parecía estar más consolidado que nunca. Poco tiempo antes, el socialismo real de Europa del Este había renunciado a ser una alternativa sistémica al capitalismo, y muchos países del Sur sufrían los efectos de las crisis financieras de los años ochenta y noventa.

Como efecto de ello, las instituciones de Río nacieron con la impronta de las relaciones de fuerzas de la globalización neoliberal, marcadas por el Norte. Esto explica también su forma específica de definir y manejar la crisis: la crisis ecológica es representada como un problema global, cuyos efectos se sentirán, sobre

todo, en el futuro. Con ello, se ocultan las múltiples crisis y conflictos locales que ya está causando en el presente, y se favorece un enfoque de gestión empresarial de los recursos a nivel global y/o nacional (Bauhardt, 2009; Goldman, 1998), que pretende combatir la crisis ecológica con instrumentos de mercado (Brunnengräber, 2009; Lohmann, 2008), así como con nuevas tecnologías y productos. El dominio sobre las personas y la Naturaleza es normalizado y/o “naturalizado” mediante una política hegemónica, que se refugia en el imperativo de las circunstancias; lo que Erik Swyngedouw (2010) llama “condición post-política”. Tal como lo demuestran la producción forzada de agrocombustibles y el desplazamiento violento de las respectivas poblaciones de sus tierras, esta visión amenaza la existencia de formas alternativas de manejo de la Naturaleza.¹⁷

Si uno entiende las instituciones de Río en el contexto de las relaciones de fuerzas globales de las que surgieron, el cambio de estas relaciones de fuerza no pudo sino tener efectos sobre la arquitectura de la política ambiental y el modo de vida imperial sobre el cual está asentada. La dimensión de los cambios se distingue claramente al observarse la política ambiental actual, en el contexto de la profunda crisis económica, y se la compara con las crisis financieras de los años noventa. Mientras el epicentro de estas últimas se ubicaba en el Sur, y el Norte salía más bien fortalecido (véase Harvey, 2003; Panitch/Gindin), el epicentro de la crisis actual se encuentra en los Estados Unidos, seguidos por Europa y el Japón. Los países emergentes fueron mucho menos afectados y parecen estar recuperándose más rápidamente. Según Boris/Schmalz, “los pesos dentro de la economía global se desplazarán con mayor velocidad como efecto de la crisis” (2009: 636).

17 Véase Brand et al., 2009; Charkiewicz, 2009; así como la edición especial del *Journal of Peasant Studies* 37[4] [2010].

El auge de los países emergentes se desarrolla en un camino fosilista, lo que implica, a fin de cuentas, que ya no están dispuestos a renunciar a “su” parte de los recursos y sumideros globales. Por ello, los cambios geopolíticos y geoeconómicos se expresan, cada vez más, en forma de conflictos ecológicos. Esto implica un mayor peso de los aparatos estatales internacionales dedicados a la política ambiental, que se transforman en terrenos de disputa y reparto de las oportunidades de desarrollo fosilista, y determinan importantes orientaciones geopolíticas para el futuro. Al mismo tiempo, estos aparatos se encuentran sobreexigidos: los conflictos resultantes de estas decisiones están a punto de hacer reventar las instituciones de Río. Por ejemplo, en la COP16, Conferencia de Estados signatarios, organizada en diciembre de 2010, en Cancún, se logró, con muchísimo esfuerzo, salvar a la UNFCCC como espacio de negociación.

La contradicción entre el cuestionamiento implícito y el profundo arraigo social del modo de vida imperial, que caracterizó el manejo político de la crisis ecológica desde el comienzo, se está agudizando en la medida en que las relaciones de fuerzas inscritas en estas instituciones se desplazan. Esta contradicción se expresa en conflictos por recursos y en el bloqueo de las instituciones internacionales de política ambiental, en donde se lucha por la posibilidad y/o la limitación del desarrollo fosilista, mediante la asignación de “derechos de contaminación” (como sucedió, por ejemplo, en la Conferencia sobre el Clima de Copenhague, en diciembre de 2009) (Wissen, 2010).

Crisis y continuidad de las relaciones sociedad-Naturaleza en el capitalismo

En nuestra opinión, una clave que permite explicar no solo la crisis del manejo estatal del problema, sino también la simultaneidad de la crisis con la continuidad de las relaciones capitalistas con la Naturaleza, se encuentra en el modo de vida imperial.

Algunos aspectos que consideramos importantes serán esbozados a continuación.

La orientación de la sociedad hacia el crecimiento material, la base de un Estado dependiente de tributos fiscales, los compromisos institucionalizados entre el trabajo asalariado y el capital, así como la competencia entre capitales y diferentes sociedades, se basan tendencialmente en la destrucción de las bases vitales naturales. Ahí reside la vulnerabilidad estructural de las formas predominantes de apropiación de la Naturaleza. Sin embargo, es también una constelación que otorga una cierta permanencia a las dinámicas capitalistas y compromisos sociales y políticos, y contribuye al manejo de otros fenómenos de crisis.

Esto sucede, en primer lugar, en el marco de la sobreacumulación de capital que caracteriza también la crisis económica actual. Parece que este fenómeno de crisis se gestiona, entre otras cosas, a través de la inversión de capital excedente en la Naturaleza; es decir, en tierras, cultivos de alimentos y agrocombustibles, o también en certificados de emisión (Zeller, 2010; véase Dauvergne/Neville, 2009). La difusión y modernización ecológica selectiva de los patrones de producción y consumo (Jänicke, 2009) se convierte, así, en un medio para gestionar los problemas de acumulación. Esto es muy evidente en los documentos estratégicos más recientes de la Unión Europea (European Commission, 2011).

Otro aspecto es la reproducción de la fuerza laboral y la relacionada legitimación del modelo. Mediante una reestructuración de la división internacional de trabajo ³/₄núcleo de la “mundialización”³/₄ se logró intensificar el acceso imperial a la capacidad laboral de los países del Sur y a sus recursos. A ello contribuyeron, además, las políticas liberales de inversión y comercio, y la desregulación de los mercados de materias primas y productos, mediante la expiración de medidas de estabilización de precios o la creación de la Organización Mundial del Comercio. En la actualidad, las estrategias de materias primas que los Estados

implementan, en nombre de la seguridad energética, juegan un papel cada vez más importante.

A pesar de que, por ejemplo, el consumo total de recursos de la Unión Europea está estancado en un alto nivel desde mediados de los ochenta, no solo se observa un incremento de las importaciones de recursos, sino también de la “mochila ecológica” que estas importaciones generan en los países exportadores del Sur.¹⁸ El “intercambio ecológico desigual” que se expresa en estas cifras abastece a las economías del Norte con materias primas baratas, mientras contribuye a que los gastos de reproducción de la fuerza laboral se mantengan en un nivel bajo.¹⁹

Al hacer referencia al carácter hegemónico del modo de vida imperial, no se omite que la estructura social es diferenciada y que se pueden identificar diferentes medios sociales respecto del modo de vida. Especialmente para los círculos alternativos “post-materiales”, surgidos del movimiento ecológico, al menos política y culturalmente cercanos a éste, pero también para los entornos conservadores, los temas ecológicos se han transformado en asuntos importantes. Sin embargo, los estudios demuestran que, en materia de asuntos sociales y ecológicos, la conciencia y la acción no van necesariamente de la mano. Así, las personas de alto nivel educativo, de ingresos relativamente altos y una fuerte conciencia ecológica, tienen el consumo de recursos *per cápita* más alto; mientras que las clases o grupos de poca conciencia eco-

18 La “mochila ecológica” denomina el volumen total de recursos usados para la fabricación de un producto, menos el volumen propio del producto. Ver <http://www.apuestaportuplaneta.com/2012/05/03/huella-ecol%C3%B3gica/>

19 Se habla de un “intercambio ecológico desigual” si un país “importa a la larga un volumen de energía, sustancias e $\frac{3}{4}$ indirectamente $\frac{3}{4}$ superficies mayores al volumen que exporta” (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, 2005: 71).

lógica, pero también con un menor nivel de ingresos, consumen menos recursos (Wuppertal Institut, 2008: 144-154).

El anhelo y la internalización de visiones diferenciadas acerca de lo que es una Buena Vida, todas más o menos problemáticas desde el punto de vista social y ecológico –y, además, acopladas a estrategias empresariales y aseguradas por el Estado– nos permiten entender, desde la teoría de la hegemonía, por qué en la crisis múltiple “se hace tan poco” desde una perspectiva emancipatoria.

Esto aplica también a la crisis ecológica, en el sentido más estricto. Aquí, el modo de vida imperial tiene un efecto agudizante, pero a la vez brinda herramientas social y espacialmente limitadas para procesar la crisis. La normalidad del modo de vida imperial actúa como un filtro sobre la percepción misma de la crisis y se transforma en posibilidad de digerirla. Por lo menos en el Norte, la crisis ecológica es percibida como un problema “del ambiente”, y no de la sociedad en su conjunto.

Esto favorece una determinada forma de politización pública, tendencialmente catastrofista, y una gestión que, en el mejor de los casos, puede ser caracterizada como incremental: la crisis ecológica es una catástrofe que se debe a que “el ser humano” o la “civilización humana” ha irrespetado sus “límites naturales” y perturbado el equilibrio natural. Lo que se omite es el hecho de que las intervenciones del ser humano en la Naturaleza siempre han sido mediadas socialmente.

Con este artificio, se logra prácticamente naturalizar las intermediaciones sociales predominantes, de modo que no hay cabida para alternativa alguna o, en caso de haberlas, solo dentro del marco de lo existente. El resultado es el predominio de patrones de manejo de crisis basados en el mercado (por ejemplo, los mercados de carbono), que tampoco son cuestionados en sus principios por los defensores de una modernización ecológica más amplia y/o un *Green New Deal*. El discurso sobre la crisis predominante en el Norte reconoce la existencia de una crisis ecológica, pero la politiza

y maneja de una manera tal que no cuestiona los patrones de producción y consumo que la generan, sino que termina perpetuándolos, entre otros, mediante una selectiva modernización ecológica.

Esto se facilita porque muchos aspectos de la crisis ecológica son relativamente indirectos. El cambio climático no se manifiesta en forma directa como el aire contaminado y los ríos sucios; apenas se percibe puntualmente y en forma indirecta en la vida cotidiana; por ejemplo, en forma de tempestades o lluvias diluviales que, según los climatólogos, se deben al incremento de la temperatura promedio global. Además, al menos vistas desde el Norte, estas catástrofes parecen afectar a todos por igual, independientemente de su posición social. El cambio climático es, sobre todo, imaginado como una catástrofe futura y global. El hecho de que, por lo menos en el Norte, la crisis ecológica solo sea experimentada a través de descripciones científicas, que se presentan al público como inseguras hasta cierto grado, abre un campo de interpretación disputado, en el cual se trata de hacer coincidir las percepciones de crisis con las condiciones sociales fundamentales.

Los representantes de los subalternos que, ante la crisis económica, sí radicalizan sus argumentos cuando se trata de la política social y del mercado laboral (vgl. Candeias/Röttger, 2009), juegan un papel importante. Si los sindicatos alemanes estuvieron a favor y negociaron con el Gobierno alemán la introducción del “bono de chatarra”; o si Klaus Ernst, dueño orgulloso de un Porsche y, a la vez, hasta junio 2012, presidente del partido alemán “Die Linke”, reflexiona en un artículo programático del semanal “Freitag” sobre cómo la oposición puede salir de su posición defensiva, sin mencionar una sola palabra sobre el tema de la ecología, estamos hablando de estrategias u omisiones que reafirman exactamente la definición hegemónica de la crisis.²⁰

20 Véase “Klingt das wirklich so verrückt? Schwarz-Gelb wird von der Unfähigkeit der Opposition im Amt gehalten. Das muss sich ändern. Ein

De esta forma, la interrelación entre crisis ecológica y patrones fosilistas de producción y consumo y, con ello también, el carácter de la crisis ecológica como una cuestión global y de distribución social, son temas que ni siquiera los representantes de los asalariados y defensores de una política de redistribución, plantean para debate.

El modo de vida imperial hace que la crisis ecológica sea tratada como un fenómeno de menor importancia que los temas sociales, o bien como una catástrofe inminente. En ambos casos, su carácter social (su vínculo con las relaciones sociales de poder y dominación, así como sus efectos sociales y globales desiguales), es invisibilizado. De esta manera, se favorecen las soluciones de mercado, tecnocráticas y basadas en tecnologías, que abarcan desde los mercados de emisiones, hasta la fabricación de autos energéticamente más eficientes o la geoingeniería.²¹ En el fondo, se trata de eternizar, mediante su transformación, las relaciones capitalistas con la Naturaleza: justamente porque no son presentadas como tales, sino como un orden ineludible y sin alternativas de la apropiación de la Naturaleza por el ser humano.

Conclusiones

El término “modo de vida imperial” tiene una dimensión teórica y otra diagnóstica, referida al tiempo. Desde los inicios del mercado mundial capitalista, las condiciones de vida en los centros capitalistas se basaron en los recursos y la fuerza laboral de otras regiones. Sin hacer esta constatación, el carácter hegemónico de

Vorschlag“ (Aporte de Klaus Ernst en “Der Freitag“ del 20.08.2010. En <http://www.freitag.de/politik/1033-klingt-das-wirklich-so-verr-ckt>)

21 Se trata aquí de intervenciones técnicas (hasta la fecha aún poco practicadas), en procesos geoquímicos como la fertilización de los océanos, con el fin de incrementar su capacidad de absorción de CO₂, o el envío de dióxido de azufre a la estratósfera, para que los rayos del sol se reflejen en dirección del Universo.

las condiciones de producción y de vida capitalistas no sería explicable. A pesar de ello, desde mediados del siglo XX, muchas sociedades experimentaron una generalización social hacia este modo de vida; especialmente las del Norte, y, desde los años noventa, en forma cada vez más dinámica, también algunas del Sur.

El arraigo profundo del modo de vida imperial implica la reproducción cotidiana de estructuras que contribuyen a la crisis de las relaciones sociedad-Naturaleza, sin que esta crisis –y aquí está la diferencia con la crisis económica– haya justificado hasta el momento el planteamiento de una “ruptura”. Dicho de otra manera, el modo de vida imperial fundamenta la simultaneidad de continuidad y crisis en las relaciones capitalistas con la Naturaleza. Es “imperial” porque presupone, desde un principio, la apropiación ilimitada de los recursos y la capacidad laboral del Norte y Sur, al igual que el uso sobreproporcionado de los sumideros globales. Su expansión a los países emergentes del Sur global ha llevado el manejo gubernamental de la crisis ecológica a otra nueva crisis. El enorme impacto del modo de vida imperial puede explicarse, por un lado, por la reducción de los costes de reproducción de la fuerza laboral; por otro lado, se reproduce hegemónicamente no solo a través de las instituciones sociales, sino también en las microestructuras de la vida cotidiana. El modo de vida imperial favorece una politización del cambio climático (pero también de la pérdida de biodiversidad), de manera que vuelve invisible su mediación social específica, y hace aparecer a los principios estructurales del modo de producción capitalista ya no como causantes de la crisis, sino como mecanismos de solución sin alternativa.²²

22 Véase también Erik Swyngedouw (2010: 223): *While a proper analysis and politics would endorse the view that CO₂-as-crisis stands as the pathological symptom of the normal, one that expresses the excesses inscribed in the very normal functioning of the system (i.e. capitalism), the policy architecture around climate change insists that this ‘excessive’ state is not inscribed in the*

En nuestra opinión, la plusvalía política y científica del concepto de modo de vida imperial se refleja en los siguientes puntos: primeramente, su diagnóstico en el tiempo permite explicar que la “reestructuración ecológica”, muchas veces considerada como necesaria, no solo es frenada por poderosos grupos económicos y políticos, sino que se enfrenta también al hecho de que los factores determinantes de la crisis ecológica están anclados en las estructuras políticas, económicas y culturales cotidianas (el mercado global es una relación que organiza el modo de vida en el día a día). Por ello, el concepto del modo de vida imperial previene expectativas exageradas respecto a si las políticas estatales e intergubernamentales pueden llevar a una transformación fundamental de las relaciones sociedad-Naturaleza, porque estas se erigen sobre las relaciones (de fuerzas) sociales y las orientaciones predominantes, que no pueden ser superadas únicamente por las políticas estatales (Brand: 2012b).

Ello podemos observarlo, por ejemplo, en los gobiernos progresistas de América Latina que, hasta la fecha, prácticamente no han desarrollado alternativas al extractivismo; es decir, a la extracción incondicional de materias primas y al cultivo de productos agrícolas, orientado hacia el mercado global (Gudynas, 2009, 2011; www.otrodesarrollo.org). Como resultado de las luchas sociales, estos países quieren un pedazo más grande de la torta del mercado global, pero no cuestionan la torta misma ni las condiciones de su elaboración.

En segundo lugar, el concepto del modo de vida imperial relativiza nuestras expectativas frente a los efectos de una buena argumentación, frente a la posibilidad de discursos públicos racionales o una conciencia iluminada de “la humanidad”, acerca de sus

functioning of the system itself, but is an aberration that can be 'cured' by mobilizing the very inner dynamics and logic of the system (privatization of CO₂, commodification and market exchange via carbon and carbon-offset trading).

propios intereses. Estos, muchas veces, ni llegan a ser percibidos, debido a orientaciones profundas preconfiguradas, o porque son integradas solo selectivamente. El resultado es la consolidación de determinados patrones de consumo y producción, y no su cuestionamiento, precisamente porque son parcialmente modernizados. Algo similar sucede con muchos enfoques (aparentemente) alternativos, en los cuales los problemas de la hegemonía casi no son tomados en cuenta, como sucede en el proyecto de un *Green New Deal*. Hasta los años noventa, en Alemania éste era entendido como una estrategia de alianza social, capaz de conyugar las reivindicaciones sociales y las ecológicas, así como sus respectivos protagonistas: los sindicatos y la socialdemocracia por un lado, y el partido verde y los nuevos movimientos sociales, por el otro (Brüggen, 2001).

En la actualidad, el proyecto carece de esta orientación política de alianza; más bien se limita a partidarios verdes de tinte neoliberal y empresas con conciencia ecológica, deseosos de lograr una modernización, en lugar de superar los patrones de producción y consumo que constituyen la base del modo de vida imperial (véase Brand, 2012a; Candeias/Kuhn, 2008). Parece que la reciente repolitización de la crisis medioambiental, que se articula con la crisis económica, favorece la orientación hacia un “capitalismo verde” (véase algunos documentos claves: UNEP/PNUMA, 2009, 2011; DESA 2011; OECD 2011; críticas en Lander, 2011; Arkonada y Santillana, 2011; y, Kaufmann y Müller, 2009).

En tercer lugar, nuestra argumentación debería incidir en otros análisis de crisis que se dediquen a las dimensiones económicas en un sentido más estricto. Esto no se refiere únicamente a los mecanismos de manejo de crisis que mercantilizan la Naturaleza (como el acaparamiento de tierras, cultivos *offshore* o grandes proyectos de infraestructura con miras a la mercantilización de la Naturaleza), sino también al carácter hegemónico del modo de vida imperial que hemos descrito.

En cuarto lugar, el concepto del modo de vida imperial aclara las condiciones, los puntos de partida y las formas para llegar a una politización emancipatoria de la crisis ecológica. Nos parece importante oponerse al catastrofismo ecológico que termina siendo, como hemos visto, un instrumento más bien de consolidación de aquellas relaciones causantes de la catástrofe imaginada. Esto no significa que debamos cerrar los ojos ante los escenarios bien fundados del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Pero aún sí hay premura, por ejemplo por la inminencia de los llamados *tipping points* o puntos críticos del cambio climático (como el deshielo del permafrost que liberaría enormes cantidades de metano a la atmósfera). Lo importante es mantenerse firmes con el proyecto de la emancipación, por más complejo y contradictorio que sea, y oponerse a las formas autoritarias y tecnocráticas del manejo de las crisis.

Un aspecto central, en este contexto, es la superación de la dicotomía entre sociedad y Naturaleza, ampliamente difundida también en las fuerzas sociales y políticas progresistas. Políticamente, esta dicotomía se refleja en un manejo de la cuestión ecológica como si fuera opuesta a la cuestión social. La tendencia de declarar a la ecología como contradicción secundaria se manifiesta precisamente en la actual crisis económica, en la cual el catastrofismo ecológico (“Nos queda muy poco tiempo.”) y la indiferencia frente a problemas ecológicos (“Ahora no hay tiempo para eso.”) están formando una alianza peligrosa.

Sin embargo existen, al mismo tiempo, indicios claros de que la cuestión ecológica ya es politizada como cuestión social y viceversa. Esto sucede con el concepto de la justicia climática, promovido antes y después de la Conferencia sobre el Clima de Copenhague, por los movimientos sociales. Se trata de un concepto que concibe el cambio climático no como una catástrofe futura socialmente neutra, sino como un asunto social y global de

distribución.²³ Esto incluye también el debate sobre el concepto de suficiencia y las propuestas y prácticas relacionadas.

En el plano analítico se trata de identificar, explicar y evaluar, respecto de su potencial político, las selectividades estructurales de la política estatal, que privilegian determinados intereses y formas de conocimiento acerca de la crisis ecológica sobre otros. En lo político, consideramos que el desafío central consiste en formular objetivos y exigencias de una manera que permita una intervención concreta, a la vez que cuestione las reglas del juego existentes. La mejor manera de lograrlo es acoplar los conflictos sociales a las prácticas cotidianas de la gente. En el caso de las cuestiones ecológicas, existen algunos enfoques posibles; por ejemplo, en el ámbito de la movilidad, de la alimentación o del consumo de energía. En este sentido, el concepto del modo de vida imperial sirve para la sensibilización: si los factores determinantes centrales de la crisis ecológica y sus patrones de manejo desde el poder y el dominio, están arraigados en las relaciones de fuerzas sociales y en las prácticas cotidianas, entonces éstas son un campo importante para las luchas antihegemónicas.

Traducción del alemán: Birte Pedersen y Miriam Lang

23 En referencia al sur global, Bettina Köhler (2008) constata que “cada vez más, los conflictos sociales centrales se articulan en forma de conflictos por el control y las condiciones de acceso a los recursos naturales y/o de manera más generalizada, por la concepción de las relaciones sociedad-Naturaleza”.

Reacciones emancipatorias frente a la crisis

Kristina Dietz²⁴

Por sus comentarios y apoyos en la elaboración de los argumentos y del texto, agradezco a Markus Wissen, Alex Demirovic, Achim Brunnengräber, Klaus Meschkat y Miriam Lang.

En el contexto de la crisis múltiple del sistema capitalista –económica, financiera, ecológica, energética y social–, ha surgido en Europa una multiplicidad de debates y acciones alrededor de alternativas al crecimiento capitalista, a las políticas neoliberales, a la sobreexplotación de bienes naturales; y, finalmente, de límites planetarios del sistema mundo hegemónico. Estos debates abarcan una amplia gama de posiciones diversas y hasta contradictorias. Dependiendo del foco político-teórico y ontológico del sector –si son debates académicos o políticos–, o de la escala –si hablamos de debates que se están dando en Bruselas, en el Parlamento de Alemania o en espacios locales y sublocales de la izquierda alternativa–, se encuentra una gran variedad de perspectivas y propuestas, que incluyen desde la modernización ecológica o la economía verde, hasta propuestas de postcrecimiento, socialismo verde y prácticas que buscan una transición para disminuir la dependencia del mercado global, a través de iniciativas locales concretas. A continuación, se revisarán algunas de las principales tendencias bajo las cuales se han abordado la actual crisis múltiple y los límites planetarios en Europa. No se pretende analizar exhaustivamente todas las posturas, sino aquellas que aparecen como las prevalecientes, así como las que van

24 Kristina Dietz trabaja en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freien Universität Berlin. Sus temas focales son la ecología política, políticas energéticas y climáticas; crisis de las relaciones sociales con la Naturaleza; democracia y Naturaleza, y, conflictos socioambientales. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas, de la Universidad de Kassel, Alemania.

más allá de una modernización ecológica del sistema capitalista, y buscan una transformación profunda de los modos de producción, consumo y de vida, que implican una reestructuración del sistema mundo imperante, incluso de la división internacional del trabajo.

El texto plantea la siguiente ruta: inicialmente, se presentan conceptos recientes acerca de límites planetarios y consiguientes debates en torno a los límites de crecimiento y la regulación de la crisis ecológica. Pregunto si y en qué medida algunos aspectos y principios de los debates latinoamericanos sobre postextractivismo han sido retomados en aquellos debates europeos. Quiero advertir que en los debates europeos –en los mayoritarios y en los alternativos–, los conceptos de extractivismo o postextractivismo no han sido capturados con mucha frecuencia. En ese sentido, pondré énfasis en conceptos que apuntan a desacoplar el bienestar del consumo de bienes naturales, economía verde y postcrecimiento. En segundo lugar, voy a contextualizar estos debates en el panorama de la crisis financiera-económica que atraviesa Europa, con el propósito de destacar contradicciones inherentes y límites estructurales de estos debates. Finalmente, presentaré algunas prácticas alternativas y acciones de resistencia, que van más allá de los debates imperantes de desacoplamiento o de ecoeficiencia. Concluyo con un breve resumen y algunas reflexiones acerca de los retos futuros.

Límites planetarios y debates al respecto

Desde el inicio del debate sobre la crisis ecológica, en los años setenta, los problemas ambientales han sido conceptualizados en el contexto de los “límites de crecimiento”, como efectos de la pobreza, de la superpoblación o de la “tragedia de los comunes” (Hardin, 1968). En 1972, el informe del *Club of Rome* señaló que se había llegado a los “límites del crecimiento” (Meadows, 1972). Lo que destaca en este análisis es su carácter global y la

invisibilización de las dimensiones políticas y sociales de las relaciones entre sociedad y Naturaleza. Relaciones sociales –como las de clase, género y raza–, o relaciones desiguales Norte-Sur y la división internacional del trabajo, no fueron tomadas en cuenta como factores del deterioro ambiental. En este sentido, existen paralelas entre el debate de los setenta y la actual coyuntura de debates sobre los límites planetarios, en Europa.²⁵

Pero también hay diferencias. Hoy los debates alrededor de los límites enfocan menos el agotamiento de los recursos, y se centran en los impactos ambientales de su uso: la concentración del CO₂ en la atmósfera, la destrucción de los ecosistemas o, en otras palabras, la sobrecarga de las capacidades de sumideros naturales para absorber emisiones producidas por actividades humanas. Un ejemplo emblemático, en este sentido, es el concepto de *planetary boundaries* de Johan Rockström y otros (Rockström et al., 2009). Rockström y sus colegas identifican nueve límites planetarios.²⁶ Una vez rebasados, el sistema del planeta ya no puede continuar funcionando de forma estable. Según los autores, tres de estos nueve límites ya han sido rebasados: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el ciclo de nitrógeno (Ibíd). Estos hallazgos son alarmantes y deben ser tomados en cuenta dentro de los debates sobre postextractivismo y alternativas al desarrollo. Sin embargo, el carácter político y social de los límites –en relación con causas y vulnerabilidades– muchas veces es ignorado, sobre todo en las propuestas políticas imperantes, que se deducen de una conceptualización global de límites, en el sentido de Rockström et al.

25 Respecto a propuestas recientes que buscan la interconexión entre límites planetarios y la cuestión social (compárese Raworth, 2012).

26 Véase <http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html>, [Consulta, 5 de diciembre, 2012]

Una de las propuestas más discutidas en el marco de los debates de una economía verde o un crecimiento verde en Europa, es la de desacoplar el uso de los bienes naturales y los impactos ambientales, del crecimiento económico y bienestar humano. Demandas de desacoplamiento aparecen en propuestas de la Unión Europea (European Commission, 2011), del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2011), de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD, 2011)²⁷, o en informes de centros de pensamiento; por ejemplo, el informe del Consejo Consultivo Alemán sobre Cambio Ambiental Global (WBGU)²⁸ titulado “El mundo en transición. Un nuevo contrato social para la gran transformación”²⁹ (WBGU, 2011, traducción K.D.).

El objetivo principal del desacoplamiento es la transición hacia una economía verde carbono cero, a través de dos ejes principales: la desmaterialización de la economía, que implica la reducción de la demanda de materias primas y energía; y, el desacoplamiento de los impactos. Lo último significa aumentar el producto económico y reducir, al mismo tiempo, los impactos ambientales perjudiciales, a través de una mejor utilización de recursos, de forma más razonada o menos contaminante (PNUMA, 2011: 14-15). Las medidas propuestas para una transición de este tipo son: una mayor eficiencia en el uso de recursos, innovaciones tecnológicas sustentables, las llamadas ecoinnovaciones, nuevos mercados y políticas que promuevan inversiones y la creación de empleo en sectores verdes y, por último, la monetarización de la Naturaleza,

27 Siglas, por su nombre en inglés: *Organisation for Economic Co-operation and Development*.

28 Siglas por su nombre en alemán: *Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen*.

29 Título en alemán: *Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation*.

a través de una internalización de costos ambientales, con el fin de su protección. Como sujetos principales y pioneros de la transición, se identifica al denominado “Estado proactivo”; esto es, un Estado que defina prioridades para la transformación, junto con una amplia participación de la sociedad civil y de nuevos mercados y actores privados (WBGU, 2011).

El momento histórico para transitar hacia una economía verde, basada en el desacoplamiento, parece ser oportuno: por un lado, existen tecnologías renovables cada vez más eficientes (véase Brand, 2012a); y, por otro lado, a causa de la crisis, el capital está en permanente búsqueda de nuevos campos “verdes” de inversión.

Respecto de la pregunta si y en qué medida algunos aspectos y principios del postextractivismo han sido retomados dentro de estos debates, hay que destacar que, aunque se hable de la desmaterialización de la economía y de la reducción del uso de recursos, el extractivismo como modelo de desarrollo –en el cual el crecimiento económico, la valorización y apropiación capitalista de la Naturaleza predominan– no está cuestionado ni identificado como el principal problema que origina la crisis socioecológica. El enfoque principal apunta, sobre todo, al control de los impactos ambientales, desde una perspectiva neutra y tecnócrata, sin preguntar por las relaciones sociales que producen estos impactos y determinan quiénes son más o menos afectados en primera instancia. Finalmente, con la postura de la “internalización de los costos ambientales” y la monetarización de la Naturaleza, se acepta la apropiación de tierras y recursos, muchas veces con el objetivo de proteger al medio ambiente, bajo lógicas del capital.

La Comisión Bienestar, Crecimiento y Calidad, creada por el Parlamento alemán, a principios del 2011, es un ejemplo del alcance restringido de las propuestas de desacoplamiento en Europa. La tarea principal de dicha Comisión es debatir la importancia del crecimiento para la economía y la sociedad, y discu-

tir las posibilidades y límites del desacoplamiento. Los primeros resultados, publicados en septiembre de 2012 (Enquete-Kommission, 2012), son desalentadores, porque hasta el momento no han logrado captar la atención de la sociedad. Además, muestran que en la Comisión predomina una posición favorable a la regulación del uso de la Naturaleza, a través de mecanismos de mercado. Asimismo, el gremio, por lo pronto, no ha logrado elaborar alternativas fundamentales al paradigma dominante de crecimiento. En esa línea, uno de los miembros del comité de expertos, el politólogo Ulrich Brand (véase artículo en este libro), destaca que: “en el contexto de la crisis actual, aparentemente existen solo tres grandes objetivos: crecimiento, crecimiento, crecimiento” (Brand, 2012b: 18, traducción K.D.).

Mientras los debates dominantes respecto de los límites se están dando en el seno del paradigma de crecimiento y de la tecnocracia, existen, al mismo tiempo, otros debates que rompen con este credo económico-político. Son propuestas de postcrecimiento o decrecimiento, que van más allá de los límites y propagan visiones igualitarias y democráticas del Buen Vivir (véase artículo de Karin Gabbert, en este libro). En este contexto, destaca, entre otros, la propuesta de Niko Paech, economista alemán y miembro del Consejo Asesor de Attac-Alemania (véase Paech, 2012). Para Paech, una economía postcrecimiento implica cambios substanciales de los estilos de vida, de los patrones de consumo y de producción y, por último, de la idea del desarrollo y la modernidad. Para él, la modernidad ha fracasado porque se sostiene en un imaginario de desarrollo teleológico que siempre busca el incremento de las posibilidades disponibles. Es decir, desconoce la marcha atrás o hacia otro lado. La visión futura de Paech es una economía postcrecimiento, en la que el trabajo asalariado es reducido a un máximo de 20 horas; la economía especializada es reducida a un mínimo necesario; y, las prácticas sociales, como el trueque, el reciclaje y el uso común de artículos

de uso, ganan importancia. Lo que él propone con esto es un desmantelamiento cuantitativo y no cualitativo (Woynowski et al., 2012: 316-321).

Desde la teoría feminista surgen otros debates alternativos. Feministas críticas, como Christa Wichterich, Adelheid Biesecker o Uta von Winterfeld, discuten desde hace algunos años cuestiones de crecimiento, bienestar, relaciones sociedad-Naturaleza y reproducción social, sobre la base de una perspectiva feminista que trata de superar las estructuras y perspectivas dualistas imperantes en la economía, la sociedad y en las relaciones sociedad-Naturaleza. El punto de partida conceptual es la llamada *care economy* o economía de cuidado. *Care*, en un sentido amplio, abarca el cuidado de personas necesitadas, el cuidado de la Naturaleza y de las generaciones futuras. El concepto de *care economy* parte de una economía contextualizada social y ecológicamente, y coloca a las economías cotidianas en el centro de la atención. Con esto se logra una crítica de los fundamentos normativos del pensamiento económico imperante y de los conceptos de economía verde, que principalmente enfocan las contradicciones ecológicas del actual modelo de desarrollo, mientras las contradicciones sociales quedan invisibles (véase Biesecker et al., 2012; Gottschlich s.a.).

Vinculado con lo anterior, el reto de una transformación profunda consiste en conectar los conocimientos sobre límites del planeta con el tema de la igualdad, la justicia social y la democracia, y con una redefinición de las nociones de bienestar o calidad de vida que va más allá del bienestar basado en el crecimiento y consumo capitalista. Eso no es fácil, sobre todo cuando se toma en cuenta que existen dinámicas dominantes en la crisis europea así como intereses de enemigos poderosos, no muy dispuestos a tolerar la existencia de semejante proyecto de transformación fundamental.

La regulación de la crisis en Europa

Para los gobiernos europeos, y en primer lugar para el gobierno alemán, el crecimiento se ha convertido en la medida sagrada para la regulación de la crisis financiera y económica de Europa. La fe ciega en el crecimiento –sea marrón o verde–, como la única opción para resolver la crisis múltiple del sistema, representa una orientación profundamente occidental y poca cuestionada en las esferas dominantes. Además, esta orientación es reforzada por las nuevas constelaciones geopolíticas globales, y por la aparente amenaza que constituirían las llamadas economías emergentes con altas tasas de crecimiento, sobre todo China. Pero el imperativo de crecimiento y la consiguiente perpetuación e intensificación de modos de producción y de vida generan impactos negativos y contradicciones sociales, ecológicas y político-económicas en diferentes niveles. Un ejemplo es la creciente desigualdad social en Alemania. Mientras la producción ha alcanzado altos niveles en los últimos años, la cuota salarial ha disminuido constantemente. Es decir, del creciente pastel participan, sobre todo, los empresarios y las clases altas, mientras los asalariados tienen cada vez menos acceso a la creciente riqueza (Kaufmann, 2012). De esta manera, la actual crisis agudiza la constante redistribución desde abajo hacia arriba.

Al mismo tiempo, las estructuras existentes de división internacional de trabajo se intensifican con la crisis, lo que muestra el incremento en el comercio global de materias primas. En lo que Michael Klare llama “La carrera por lo que queda”³⁰ (Klare, 2012), Europa y Alemania juegan todavía, y a pesar del auge de China, un papel estratégico. Una gran parte del abastecimiento de materias primas convencionales (arena, gravilla, etc.) de Alemania proviene de yacimientos nacionales; pero en cuanto a minerales

30 *The race for what's left*, en el idioma original.

y metales depende casi en su totalidad de la importación. Simultáneamente, y bajo el lema de la seguridad energética, se está buscando avanzar masivamente hacia la explotación de carbón y del llamado “gas de esquisto”, con nuevas tecnologías; es decir, en la extracción de gas natural no convencional contenido en la roca del subsuelo, mediante fractura hidráulica o *fracking*—un método muy poco desarrollado y que produce una alta contaminación del agua. Este tipo de intervención está previsto, en especial, en Francia, Polonia, Inglaterra y Alemania, y está generando nuevos conflictos socioambientales.

Sin embargo, la mayor parte de las materias energéticas es de origen extranjero. Así, un tercio de los agrocombustibles para alimentar la flota automotriz europea, hoy en día, viene de Argentina (biodiesel a base de soya) (Lamers et al., 2011), y el país proveedor más importante de carbón para Alemania es, junto con Rusia, Colombia (BMWí, 2012).

Los anteriores ejemplos muestran el carácter contradictorio de la economía verde. Mientras se consigue reducir las emisiones de CO₂ en Europa, a través del aumento del uso de agrocombustibles y de energía renovable, al mismo tiempo se aumentan los impactos socioambientales en otros lugares del mundo, y con eso se perpetúa una división internacional de trabajo neocolonial. Una supuesta “economía verde” en Europa no puede existir sin la extracción de recursos en otros lados del mundo, y requiere instituciones que aseguren el acceso a materias primas estratégicas.

Por ello, la Unión Europea y el gobierno alemán formularon “estrategias de aseguramiento de materias primas”, que favorecieran el libre comercio como enfoque político-económico principal de las políticas europeas sobre materias primas (BMWí, 2010; EU-Kommission 2008, 2011). En esa misma línea, en los últimos dos años, el gobierno alemán firmó acuerdos bilaterales con Mongolia y Kazajstán que regulan el acceso a materias primas y la inversión extranjera alemana en estos países (Fuchs, 2012).

Actualmente, el gobierno está negociando acuerdos de este tipo con Chile, Perú, África del Sur, Zambia y Namibia; otros países en juego son Bolivia y Angola.

Prácticas de resistencia y alternativas emancipatorias

Al interior del escenario presentado, aparecen nuevos espacios tomados por actores e iniciativas que critican el modo de vida imperante, cuestionan el modo de producción capitalista, se oponen a actividades extractivistas y a la energía nuclear como la de carbón, y buscan otros modos de vida. Son innumerables las iniciativas y prácticas, sobre todo a escala local y regional. Voy a nombrar unos pocos ejemplos en el sector energético. A mediados de la década del dos mil, y sobre la base de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, en Copenhagen, en 2009, apareció primero en Inglaterra y luego en otros países europeos la práctica de organizar campamentos en contra de la política oficial del Cambio Climático y a favor de un cambio social para frenarlo. En agosto de 2012, se realizaron dos campamentos de este tipo en Alemania; ambos, con una clara posición en contra de la extracción de carbón y su uso en la generación de energía eléctrica, y en contra de la tecnología del llamado *Carbon Capture and Storage* (CCS; una tecnología para almacenar carbono bajo tierra, a fin de no soltarlo a la atmósfera). Unos de estos campamentos se llevó a cabo en Brandenburgo, en el lado este de Alemania, donde se encuentran los yacimientos más grandes de carbón y opera una de las centrales carboeléctricas más grandes del país, propiedad de la transnacional de energía sueca Vattenfall. Durante una semana, se hicieron bloqueos a la empresa y se organizaron debates entre grupos urbanos y la población local, para discutir alternativas productivas a la extracción de carbón en la región (Lausitzer Klima- und Energiecamp 2012). Al respecto, cabe destacar la existencia de una serie de iniciativas ciudadanas locales en contra de la construcción de nuevas plantas

carboeléctricas, en todo el país, y la conformación de una amplia red de estas iniciativas (Klima Allianz deutschland).

Respecto de las resistencias contra el *fracking*, la extracción del gas de esquisto, en Francia se creó una red que consiguió una moratoria y el aplazamiento de tres concesiones de este tipo de explotación de gas. Además, en septiembre de 2012, se logró concretar una movilización en diferentes lugares del planeta, para atacar simultáneamente esta práctica del *fracking*, que también se aplica en la Patagonia argentina, por ejemplo. Aunque se alcanzaron algunos objetivos, la red está en alerta permanente porque los planes de extracción siguen vigentes. Su lema principal es “¡ni hoy, ni mañana, ni aquí ni en otro lugar!” (Global Frackdown).

Otro campo de disputa es el de la energía nuclear. Alemania tiene una larga tradición de protestas antinucleares. Aunque se obtuvo una salida política frente a esta tecnología inhumana, desde el año 2011, a raíz de la catástrofe de Fukushima, persiste la lucha por el manejo de los desechos nucleares. El epicentro de esta lucha se ubica en Gorleben, un pueblo en el norte de Alemania. En los años ochenta, mediante decreto político, Gorleben fue designado como cementerio radiactivo provisional y, desde hace alrededor de 15 años, con la llegada de desechos nucleares, se convirtió en un cementerio radioactivo de hecho. La resistencia contra esta política de hecho no se ha detenido, y cada año culmina en el bloqueo de los trenes que traen la carga radioactiva desde Francia. El último de esos trenes llegó en noviembre de 2011.

Un ejemplo adicional de iniciativa alternativa es la mesa coordinadora de energía en Berlín, creada en 2011. En ella participan más de 40 organizaciones de base y de la sociedad civil. Entre sus demandas, se encuentra la redemocratización del suministro de energía, la ampliación del uso de energía renovable al 100%, la transparencia política, la participación ciudadana, etc. Para lograr estos objetivos, se está organizando una iniciativa popular:

se busca reestructurar el sector energético local, con prácticas de democracia directa.

Las experiencias descritas no están aisladas entre sí; al contrario, existen conexiones; por ejemplo, a través del movimiento Ciudades en transición (Transition Town Movement). Este es un movimiento que, desde el año 2006, en muchas ciudades y barrios europeos y de los Estados Unidos, trata de organizar la transición hacia una economía y sociedad independiente del uso de combustibles fósiles, y postextractivista. Las prácticas e iniciativas que surgen de este movimiento abarcan proyectos comunitarios y colectivos para la reducción del consumo energético, así como para la promoción de economías locales, a veces desmonetarizadas.

Conclusiones

¿Cómo se relacionan, entonces, los diferentes debates, prácticas y perspectivas y cómo se llega a implementar políticas que van más allá de una economía verde, es decir, que tengan en cuenta una transformación del sistema mundo y de las relaciones sociales de dominación, para finalmente llegar a un modelo de vida postextractivista? Mis respuestas no son muy concretas ni concluyentes.

Es necesario subrayar que las iniciativas y prácticas concretas de alternativas y de resistencia no encuentran respuesta en las propuestas y políticas oficiales; más bien, existen diferencias epistemológicas y ontológicas respecto de las relaciones sociedad-Naturaleza, del concepto de desarrollo, así como diferentes visiones acerca de los sujetos y la dirección de la transformación.

Por un lado, las propuestas dominantes buscan una transición desde arriba y no una transformación fundamental (Brand, 2012c). El sujeto principal de tal transición sería el “Estado proactivo”, entendido como actor homogéneo con un interés único: la solución de problemas colectivos y la generación del bien común. Las medidas propuestas –innovación tecnológica, reasignación del capital hacia sectores verdes, ecoeficiencia, monetarización de

la Naturaleza—, en el fondo, se basan en una visión modernista acerca de las relaciones sociedad-Naturaleza. En otras palabras, aunque se reconoce reflexivamente que las formas capitalistas y destructivas de apropiación de la Naturaleza son las que producen los problemas en primera instancia, no es cuestionada la convicción fundamental de la modernidad que sostiene que con cuantificación, cálculos y monetarización se logra la dominación y solución de problemas ambientales.

Por otro lado, el punto de partida común de las experiencias, iniciativas y prácticas alternativas concretas es la convicción compartida de que una transformación fundamental del sistema mundo imperante y de las relaciones de la sociedad con la Naturaleza es necesaria y requiere la acción social, que tiene que ser construida desde abajo. El objetivo común de las diferentes iniciativas, a escala local y regional, es la democratización de las relaciones de la sociedad con la Naturaleza y, de esta manera, la democratización de todas las relaciones sociales.³¹

Los pasos hacia una transformación del sistema mundo hegemónico y hacia un sistema postextractivista arrancan en estas prácticas concretas. El reto principal ahora es cómo vincular las prácticas y alternativas concretas de producción, consumo y gestión democrática de las relaciones de la sociedad con la Naturaleza, que se están dando en diferentes partes del mundo hacia un nuevo internacionalismo. Ya existen experiencias: movimientos a favor de una agricultura socioecológica y campesina en Europa, desde un principio, vincularon sus acciones con movimientos del Sur Global, como La Vía Campesina. La lucha contra el *fracking* se ha transformado en un asunto transnacional, pues desde diferentes lugares del mundo se están demandando, de manera concertada, moratorias y la paralización de cualquier tipo de exploración, en

31 Debo este argumento a Markus Wissen.

este sentido. Pueden ser pocos; sin embargo, creo que son proyectos que pueden servir de entrada a un internacionalismo que busca una transformación del extractivismo, no solo en una región del mundo, sino en muchas, y de manera conjunta y simultánea.

Bibliografía

- ADB-Asian Development Bank
2011 “Greening Growth in Asia and the Pacific”. <http://beta.adb.org/features/report-greening-growth-asia-and-pacific> [Consulta: 3 de julio, 2012]
- ACOSTA, ALBERTO
2011 “Los derechos de la Naturaleza. Una lectura sobre el derecho a la existencia”. En Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp.). *La naturaleza con derechos: de la filosofía a la política*. Abya-Yala, Quito.
2010 “El buen vivir, una utopía por (re)construir”. En *Enfoques sobre bienestar y buen vivir*. Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial), Madrid.
2009 *La maldición de la abundancia*. Abya-Yala, Quito.
- AGUIRREZÁBAL, GERARDO y Sergio Arelovich
2011 “Desmercantilización. Aproximaciones al estado del debate. El caso particular del sector energético”. Taller Ecologista, Rosario, inédito.
- ALADI, CAN, CEPAL, MERCOSUR, OTCA
2005 Foro de reflexión “Un nuevo tratamiento de las asimetrías en la integración sudamericana”. Secretaría del Mercosur, La Paz.
- ALAYZA, ALEJANDRA y Eduardo Gudynas (eds.)
2011 *Transiciones. Post Extractivismo y alternativas al extractivismo en Perú*. CEPES, RedGE y CLAES, Lima.
- ALAYZA, ALEJANDRA y Eduardo Gudynas
2012 *Sociedad civil y transiciones al postextractivismo: Ensayos, dinámicas y lecciones*. (En prensa).
- ALBA-TCP ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA
2008 Declaración de la III Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Consejo Político del ALBA, Caracas, 26 de noviembre de 2008.

ALMEIDA, ALEXANDRA

- 2010 “Exploración petrolera en la costa”. Enero. <<http://www.accionecologica.org/petroleo/petroleo-en-la-costa/1198-exploracion-petrolera-en-la-costa>>
[Consulta: 18 de diciembre de 2012]

ALTMANN, JOSETTE y Francisco Rojas (eds.)

- 2008 *Las paradojas de la integración en América Latina y el Caribe*. Fundación Carolina y Siglo XXI, Madrid.

ALTVATER, ELMAR.

- 1992 *Der Preis des Wohlstands - oder Umweltplünderung und neue Welt(un)ordnung*. Münster.

ÁLVAREZ, NACHO

- 2007 *Financiarización, nuevas estrategias empresariales y dinámica salarial: el caso de Francia entre 1980-2006*. Tesis de Doctorado, Departamento de Economía Aplicada, Universidad Complutense, Madrid.

ÁLVAREZ, VÍCTOR, CARLOS ARCEY PABLO OSPINA

- 2013 *Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina*. CEDLA, La Paz, en prensa.

AMERICAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

- 2004 “Task Force on Inequity and American Democracy”. <www.apsanet.org>

AMIN, SAMIR

- 1988 *La desconexión*. Iepala y Pensamiento Nacional, Buenos Aires.

ARELOVICH, SERGIO, Pablo Bertinat, Juan Salerno y Miguel Alberto Sánchez

- 2008 “Escenarios energéticos en América del Sur”. En Sergio Arelovich y Pablo Bertinat, *Escenarios energéticos en América del Sur. Integración, modelo productivo, energía: aportes para un debate necesario*, pp. 5-89, Inercia Comunicaciones, Santa Fe.

ARKONADA, KATU y Alejandra Santillana

- 2011 “Ecuador y Bolivia frente a la colonialidad del capitalismo verde”. En *América Latina en movimiento*, 468-469. Número especial “El cuento de la economía verde”. Sept/Oct 2011, 41-43.

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

- 2009 Resolución “A/RES/64/236, § 20, b”. s.d.

ASAMBLEA GENERAL DE NYC

- 2011 Declaración de principios de la ocupación de la Ciudad de Nueva York (documento consensuado por la Asamblea General de NYC), 29 de septiembre, 2011. <<http://www.nycga.net/resources/declaration>>

ASSHEUER, THOMAS

- 2006 “Atemlos”. En *Die Zeit*, edición de 26 de enero, Grupo Editorial Holtzbrinck, Hamburgo, Reseña del libro de Rosa Hartmut. *Die Veränderung der Zeitstruktur in der Moderne*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.

AUTY, RICHARD M (ed.)

- 2005 *Resource Abundance and Economic Development*, University Press, Oxford.

AVILÉS PAZMIÑO CARLOS

- 2010 *Análisis de los subsidios a combustibles en el Ecuador con sus posibles alternativas de focalización y control, en el período 2004-2009*. Tesis de disertación. PUCE, Quito.

BADHURI, AMIT

- 2009 “Desarrollo con dignidad: ninguna utopía”. En *Desarrollo con dignidad a favor del pleno empleo*, Prometeo Libros, Buenos Aires.

BANCO MUNDIAL

- 2010 *World Bank Low-Carbon Development Plans. Brasil*. Banco Mundial. <http://siteresources.worldbank.org/BRAZIL/EXTN/Resources/Brazil_LowcarbonStudy.pdf> [Consulta: 10 de diciembre, 2010]

BANKS, GLENN

- 2002 “Mining and the Environment in Melanesia: Contemporary Debates Reviewed”. En *The Contemporary Pacific*, vol. 14, No. 1, pp. 39-67, University of Hawai'i Press, primavera, Honolulu.

BARFUSS, THOMAS

- 2002 *Konformität und bizarres Bewusstsein. Zur Verallgemeinerung von Lebensweisen in der Kultur des 20. Jahrhunderts*. Hamburgo.

BAUHARDT, CHRISTINE

- 2009 “Ressourcenpolitik und Geschlechtergerechtigkeit. Probleme lokaler und globaler Governance am Beispiel Wasser”. En: *PROKLA* 39(3), 391-405.

BAUMAN, ZYGMUNT

1998 *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*. Gedisa, Barcelona.

BCG-BOSTON CONSULTING GROUP

2011 “2011 BCG Global Challengers. Companies on the Move. Raising Stars from Rapidly Developing Economies Are Reshaping Global Industries”. Boston, enero.
<www.bcg.com/documents/file70055.pdf>

BEBBINGTON, ANTHONY

2009 “Industrias extractivas actores sociales y conflictos”. En *Extractivismo, política y sociedad*, CAAP/CLAES, Quito.

2011 “Industrias extractivas, actores sociales y conflictos”
<<http://www.extractivismo.com/documentos/capitulos/BebbingtonExtractivismoSociedadDesarrollo09.pdf>>
[Consulta: 18 de diciembre de 2012]

BEBBINGTON, ANTHONY y Dense Humphries Bebbington

2009 “Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú”. *Íconos* 35:117-128.

BEBBINGTON, ANTHONY (ed.)

2007 *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas*, IEP, Lima.

BECKETT, SAMUEL

2011 *Esperando a Godot*. Tusquets, 15ª edición, Barcelona.

BELLO, WALDEN

2002 *Desglobalização. Idéias para uma economia mundial*. Vozes, Petrópolis.

BERMANN, CELIO

2011 “Notas sobre la energía incorporada en la exportación de bienes primarios en Brasil”. En *Energía y equidad*, No. 1, pp. 31-38, Taller Ecologista, Rosario.

BERTINAT, PABLO

2011 *Dimensiones, variables e indicadores para el análisis de la sustentabilidad energética*. Tesis para acceder al título de Magister en Sistemas Ambientales Humanos, Centro de Estudios Interdisciplinarios, Universidad Nacional de Rosario, Rosario.

BERTINAT, PABLO, Jorge Chemes y Laura Moya

2012 “Derecho y energía. Curso de formación en energía”. Rosario, inédito.

- BERTINAT, PABLO, et al.
 2002 *Desafíos para la sustentabilidad energética en el Cono Sur*. Programa Conosur Sustentable, Santiago.
- BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
 1966 *Factores para la integración latinoamericana*. Fondo de Cultura Económica, México.
- BID, CAF, FONPLATA
 2011 *IIRSA 10 años después: sus logros y desafíos*. BID-INTAL, Buenos Aires.
- BIESECKER, ADELHEID, Christa Wichterich y Uta v. Winterfeld
 2012 *Feministische Perspektiven zum Themenbereich Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Hintergrundpapier*. Bremen, Bonn, Wuppertal.
- BMWI-BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE
 2012 Energiestatistiken [en línea] <<http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energiestatistiken-energietraeger,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>> [Consulta 6 de diciembre 2012]
 2010 *Rohstoffstrategie der Bundesregierung. Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Deutschlands mit nicht-energetischen mineralischen Rohstoffen*. Berlin.
- BONASSO, MIGUEL
 2011 *El mal. El modelo K y la Barrick Gold*. Planeta, Buenos Aires.
- BORENSTEIN, SETH
 2011 “Biggest jump ever seen in global warming gases”. *The Associated Press*, 3 de noviembre.
- BP
 2011 *BP Statistical Review of World Energy*. <http://www.bp.com/statisticalreview> [Consulta 29 de mayo de 2012]
- BRAND, ULRICH
 2012a “After Sustainable Development: Green Economy as the Next Oxymoron?” En *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, n° 21, n° 1, pp. 28-32, Alemania.
 2012b “Die Wachstums-Enquete: Parlamentarische Sackgasse?” En *Blätter für deutsche und internationale Politik*, n° 57, n° 10, pp. 18-21, Alemania.

- 2012c “Transition und Transformation. Theoretical Perspectives on the Multiple Crisis”. En: *Journal für Entwicklungspolitik* 28(3).
- BRAND, ULRICH, Nicola Bullard, Edgardo Lander y Tadzio Müller
2009 “Radical climate change politics in Copenhagen and beyond: From criticism to action?” En *Critical currents* 6/2009, 9-16.
⟨http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Boletin%20ECOS/ECOS%20CDV/Boletin_9/Introduction.pdf⟩.
- BRAND, ULRICH y Christoph Görg
2008 “Sustainability and globalisation: A theoretical perspective”. En: *The crisis of global environmental governance. Towards a new political economy of sustainability*. Edited by K. Conca, et al. Routledge, 13-33, London.
- BRUNNENGRÄBER, ACHIM
2009 “Prima Klima mit dem Markt? Der Handel mit dem Recht, die Luft zu verschmutzen”. En *PROKLA* 39(3), 407-424.
- BRÜGGEN, WILLI
2001 “Grüner New Deal“. En Wolfgang-Fritz Haug (ed.), *Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus* 5, Hamburgo.
- BUONOMO, MARIELA y Eduardo Gudynas
2007 *Integración y comercio. Diccionario latinoamericano en términos y conceptos*. Claes/Oxfam, Montevideo.
- Buxton, Nick
s/f “End financial control of European governance” (entrevista a Susan George). Transnational Institute, Amsterdam. ⟨<http://www.tni.org>⟩.
- CAETANO, GERARDO
2009 “Integración regional y estrategias de reinserción internacional en América del Sur”. *Nueva Sociedad*, No. 219, pp. 157-172. Buenos Aires.
- CALMES, JACKIE
2011 “A U.S. Marine Base for Australia Irritates China”. *The New York Times*, 16 de noviembre.
- CAMPBELL, BONNIE
2004 *Enjeu des nouvelles réglementations minières en Afrique*. Nordiska Afrikainstitutet, Grama, Uppsala.
- CANDEIAS, MARIO y Frank Deppe (Hg.)
s/f. *Ein neuer Kapitalismus?* Hamburgo.

- CANDEIAS, MARIO y Kuhn Armin
 2008 “Grüner New Deal - kapitalistischer Weg aus der Krise?”
 En *Das Argument* 50(6).
- CANDEIAS, MARIO y Röttger Bernd
 2009 “Ausgebremste Erneuerung? Gewerkschaftspolitische
 Perspektiven in der Krise”. En *Das Argument* 51(6).
- CAPGEMINI Y MERRILL LYNCH WEALTH MANAGEMENT
 2010 *World Wealth Report*.
- CASTREE, NOEL
 2008 “Neoliberalising nature: the logics of deregulation and reregulation”. En *Environment and Planning A* 40(1), 131-152.
- CASTRO, MIGUEL
 2011 *Hacia una matriz energética diversificada en Ecuador*.
 CEDA, noviembre, Quito.
 <<http://www.ceda.org.ec/>> [Consulta: 18 de diciembre de 2012]
- CEBR-CENTRE FOR ECONOMICS AND BUSINESS
 RESEARCH LTD.
 2011 “Brazil has overtaken the UK’s GDP”. *The CEBR World
 Economic League Table*, 26 de diciembre, Londres.
- CECEÑA, ANA ESTHER, Paula Aguilar y Carlos Motto
 2007 “Territorialidad de la dominación: la integración de la
 infraestructura regional sudamericana (IIRSA)”. *Observatorio
 Latinoamericano de geopolítica*, Buenos Aires.
- CENTER FOR AMERICAN PROGRESS ACTION FUND
 2010 “Republicans Slam GOP’s Climate Change Denial as
 Incomprehensible and Embarrassing”. *Think Progress*.
 <<http://thinkprogress.org>>
- CEPAL
 2012a “Comercio intrarregional en la Unasur: caracterización, avances y desafíos”. Documento de Trabajo para Unasur, Santiago.
 2012b *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe-2011*. CEPAL, Santiago de Chile.
 2012c CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Noviembre 2012, p. 9.
 <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48594/P48594.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl>
 [Fecha de consulta: 17.01.2013]

2009 *Contribución de los servicios energéticos a los Objetivos del Milenio y a la mitigación de la pobreza en América Latina y el Caribe*. LC/W.281, Cepal, Santiago.

1994 *El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe*. CEPAL, Santiago.

CEPAL, OLADE, GTZ

2011 *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe*. En: www.cepal.org

2003 *Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe. Guía para la formulación de políticas energéticas*. Cepal, Santiago.

CERC-CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD

CONTEMPORÁNEA

2011 *Barómetro de la política*. Diciembre, Santiago de Chile. <http://www.cerc.cl>

CEREZAL, MANUEL, Ricardo Molero y Alberto Montero

2011 “De la ‘impertinencia’ de la Alianza Bolivariana de los Pueblos hacia la pertinencia de otra integración regional: Aportes del S.U.C.R.E.”. En *La Gaceta Económica*, Universidad Bolivariana de Venezuela, s.d., Centro de Estudios en Economía Política, Caracas.

CHANG, HA-JOON

2002 “Kicking Away the Ladder-Development Strategy in historical perspective”. *Anthem Press*, Londres.

2011 “23 things they don’t tell you about capitalism”. *Bloomburly Press*, New York.

CHARKIEWICZ, EWA

2009 “A feminist critique of the climate change discourse. From biopolitics to necropolitics?” En *Critical currents* 6/2009, 18-25.

http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Boletin%20ECOS/ECOS%20CDV/Boletin_9/Charkiewicz.pdf

CHINADAILY-APORREA

2011 “Fuera el dólar: China y Rusia usarán el Yen y el Rublo en su comercio bilateral”. *Chinadaily-Aporrea*, 25 de noviembre, Caracas.

www.aporrea.org/internacionales/n170213.html

- CICCANTELL, PAUL y David A. Smith
 2009 “Rethinking global commodity chains. Integrating extraction, transport, and manufacturing”. *International Journal Comparative Sociology* 50 (3-4), pp. 361-384.
- CIPER-CENTRO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA
 2011 “El último golpe de Wikileaks: mapa identifica a las empresas que tienen al mundo bajo vigilancia”. CIPER, Santiago de Chile.
 <<http://ciperchile.cl/2011/12/02/el-ultimo-golpe-de-wikileaks-mapa-identifica-a-las-empresas-que-tienen-al-mundo-bajo-vigilancia>>
- CLINTON, HILLARY
 2011 “America’s Pacific Century”. “Foreign Policy”. Noviembre.
 <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century>
- COLECTIVO VOCES DE ALERTA
 2011 *15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero*. Colección Cascotazos. Buenos Aires.
 <http://www.editorialelcolectivo.org/ed/index.php?option=com_content&view=article&id=245%3A15-mitos-y-realidades-sobre-la-mineria-transnacional-en-la-argentina&Itemid=1>
- COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO
 2010 “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013”. Parlamento Europeo, Bruselas.
- CONCA, KEN
 1993 “Environmental Change and the Deep Structure of World Politics”. En Lipschutz, Ronnie y Ken Conca (eds.). *The State and Social Power in Global Environmental Politics*. Nueva York.
- CONSEJO PATRIÓTICO SECTORIAL DE VIVIENDA, HÁBITAT Y CIUDAD
 2012 *Aportes al Programa de la Patria*.

CONSEJO DE PRESIDENTES DEL ALBA

- 2009 Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), suscrito en Cochabamba, 16 de octubre de 2009.

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

- 2011 “Establishment of an Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action”. Durban, diciembre. <unfccc.int/files/meetings/durban_nov.../pdf/cop17_durbanplatform.pdf>

COP 15 UNFCCC

- 1999 Quinta Conferencia de las Partes de la Convención Cuadro de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. <<http://unfccc.int/2860.php>> [Consulta: 3 de julio, 2012]

CORDEN, MAX y Neary Peter

- 1982 “Booming sector and de-industrialization in small open economy”. En *The Economic Journal*, vol. 92, p. 826-860. Royal Economic Society.

CORAGGIO, JOSÉ LUIS

- 2007 “Una perspectiva alternativa para la economía social”. En José Luis Coraggio, *La economía social desde la periferia. Contribuciones latinoamericanas*, Altamira, Buenos Aires.

CORPORATE ECOFORUM

- 2012 *The Business Logic of Investing in Natural Infrastructure*. <<http://corporateecoforum.com/assets/pdf/CEF%20Finance%20&%20Investment%20Summary.pdf>> [Consulta: 20 de octubre, 2012]

CREDIT SUISSE RESEARCH INSTITUTE

- 2011 *Global Wealth Report 2011*. Zurich.

DAALDER, IVO y James Goldgeier

- 2006 AGlobal NATO@, *Foreign Affairs*, septiembre-octubre.

DAUVERGNE, PETER y Kate J. Neville

- 2009 “The Changing North-South and South-South Political Economy of Biofuels”. En *Third World Quarterly* 30(6), 1087-1102.

DE ECHAVE, JOSÉ

- 2011 “La minería peruana y los escenarios de transición”. En Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas (eds.), *Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú*, CEPES, Lima.

- DE ECHAVE, JOSÉ et al.
 1989 “Long-run exchange rate variability and international trade”. En Svern Arndt y David Richardson (eds.), *Real Financial Linkages*, MIT University Press, Cambridge.
- DE SOUSA SANTOS, BOAVENTURA
 2009 *Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común del derecho*. ILSA, Colombia.
- De Sousa Silva, José
 2013 “La educación latinoamericana en el siglo XXI. Escenarios hacia las pedagogías de la alienación, domesticación y transformación”. Red “Nuevo Paradigma” para la Innovación Institucional en América Latina, San José de Costa Rica, 2004. http://www.migrante.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Souza-Educacion_Latinoamericana_en_el_SigloXXI.pdf [Fecha de consulta: 22.01.2013]
- DI MASI, J.R.
 2002 “La contribución del MERCOSUR a un proyecto de integración regional en América Latina”. En V. López Villafañe y J.R. di Masi (coords.). *Del TLC al MERCOSUR*, pp. 259-297, Siglo XXI, México.
- DYER NATHANIEL y Simon Counsell.
 2010 *McREDD: How McKinsey ‘cost-curves’ are distorting REDD*. UK, Rainforest Foundation. <http://rainforestfoundationuk.org/McREDD>.
- DELGADO-RAMOS, GIANCARLO
 2010 “América Latina y el Caribe como reservas estratégicas de minerales”. En Giancarlo Delgado-Ramos (coord.), *Ecología política de la minería en América Latina. Aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la mega minería*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, México DF.
- ¡Democracia real YA!
<http://www.democraciarealya.es/documento-transversal>
- DENECAULT, ALAIN, Delphine Abadie y William Sacher
 2008 *Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique*. Écosociété, Montreal.
- DESA-UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS
 2011 *The Great Green Technological Transformation. World Economic and Social Survey 2011*. DESA, New York.

DESCARTES, RENÉ (1637)

2002 *El discurso del método*. García Morente, Manuel (traductor), Tecnos, Madrid.

DIAMOND, JARED

2005 *Colapso*. Debate, Madrid.

DILLON, SAM

2010 “Top Test Scores From Shanghai Stun Educators”. *The New York Times*, 7 de diciembre.

DYER, NATHANIEL y Simon Counsell

2010 *McREDD: How McKinsey ‘cost-curves’ are distorting REDD*. Rainforest Foundation. UK.
<<http://rainforestfoundationuk.org/McREDD>> [Consulta: 10 de marzo, 2011]

EL PETRÓLEO EN ECUADOR, VERSIÓN 2010

<www.eppetroecuador.ec/BibliotecaVirtual/001138>.

<www.pge.gob.ec/es/patrocinio-internacional.html>.

Inventario de Pasivos Ambientales de Petroecuador, actualizado al 4 de mayo de 2012, facilitado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador dentro del trámite defensoría 5168-2011-JMR

ELIZALDE, ANTONIO

2002 “Satisfacción de necesidades humanas para una vida digna: línea de dignidad y necesidades humanas fundamentales”. En *Línea de dignidad. Desafíos sociales para la sustentabilidad*, p. 113-131, Programa Conosur Sustentable, Santiago.

ELIZALDE, ANTONIO, Martín Hopenhayn y Manfred Max-Neef.

1986 “Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro”. En *Development Dialogue*, número especial, CEPUR, Santiago.

EMERSON, MICHAEL

1992 *One Market, One Money: An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union*. Oxford University Press, Oxford.

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

2012 CIESPAL, Quito, 22 de agosto.

ENGELS, FEDERICO

1845 “La situación de la clase obrera en Inglaterra”. En http://www.archivochile.com/Mov_sociales/mov_mujeres/

- doc_gen_cl/MSdocgencl0007.pdf [Consulta: 10 de diciembre, 2012]
- ENGELS, FEDERICO y Karl Marx
1974 “La ideología alemana”. En *Obras escogidas*, T. I, Editorial Progreso, Moscú.
- ENQUETE-KOMMISSION WACHSTUM, Wohlstand, Lebensqualität
2012 *Berichtsentwurf Projektgruppe 3: Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischer Fortschritt – Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung*. Deutscher Bundestag, Kommissionsdrucksache 17(26)82, Berlin.
- ENS-Escuela Nacional Sindical
s/f. “La ‘locomotora’ minera arrastra un enorme vagón de discapacitados. Trabajadores enfermos se tomaron las calles de Bogotá para hacer visible su drama”.
⋈http://ens.org.co/apc-aa-files/... MinerosMuerte.pdf [Consulta: 10 de diciembre, 2012]
- ERBER, FABIO S.
2011 “As convenções de desenvolvimento no governo Lula: um ensaio de economia política”. *Revista Economia Política* 31 (1): 31-55, Sao Paulo.
- ESCOBAR, ARTURO
1988 *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Norma, Bogotá.
- EUROPEAN COMMISSION
2010 *Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*. Communication from the Commission. COM (2010) 2020.
⋈http://europa.eu/press_room/pdf/complet_en_barroso___007_-_europe_2020_-_en_version.pdf
- 2011a *A resource-efficient Europe-Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy*. Brussels, 2011.
- 2011b *Roadmap to a Resource Efficient Europe. Communication from the Commission to European Parliament, the Council, the European Social and Economic Committee and the Committee of the Regions*. Com (2011) 571 final.
⋈http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf⋈
- EU-KOMMISSION
2011 *Tackling the Challenges in Commodity Markets and on Raw Materials*. Brüssel.

- 2008 *The raw materials initiative. Meeting our critical needs for growth and jobs in Europe*. Brüssel.
- FAO-FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
- 2011 *The state of food insecurity in the world*. FAO, Roma.
- FASE / ETTERN
- 2011 *Projeto Avaliacao de Equidade Ambiental*. FASE / ETTERN, Río de Janeiro.
- FERRER, ALDO
- 2002 *Vivir con lo nuestro. Nosotros y la globalización*. Fondo Cultura Económica, Buenos Aires.
- FOLEY, STEPHEN
- 2012 “What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe”. *The Independent*, Londres, 18 de noviembre, 2012.
- FREELAND, CHRISTYA
- 2011 *The Atlantic*. Enero-febrero.
- FUCHS, PETER
- 2012 “Die Rohstoffpolitik Deutschlands und der EU. Nachschub für die imperiale Lebensweise”. En *politische ökologie*, n° 30, n° 129, pp. 43-47, Alemania.
- FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL y Terra de Direitos
- 2011 *Biodiversidade à venda*.
 <http://br.boell.org/downloads/pdf_teeb_final_05-12.pdf> [Consulta: 10/07/2012]
- G20
- s/f. “Resumen, sesión 5”. <<http://www.g20.org/index.php/es/component/content/article/39-g20/402-prueba>> [Consulta: 23 de julio, 2012]
- GALEANO, EDUARDO
- 2012 Intervención filmada en video (Transcripción) <<http://nuestrouniversovivo.blogspot.com/2012/04/megamineria-saqueo-e-indignacion-por.html>> [Consulta: 16.01.2013]
- GALLAI, NICOLA, Jean-Michel Salles, Josef Settele y Bernard Vaissière
- 2008 “Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline”. En *Press Info item, Ecological Economics*, septiembre.
 <http://www.international.inra.fr/research/some_examples/insect_pollination> [Consulta: 3 de noviembre, 2012]

GARCÍA LINERA, ÁLVARO

- 2012 *Geopolítica de la Amazonia. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista*. Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz.

GARIBAY OROZCO, CLAUDIO

- 2010 “Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual”. En Giancarlo Delgado-Ramos (coord.), *Ecología política de la minería en América Latina. Aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la mega minería*. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, México DF.

GILLIS, JUSTIN

- 2011 “U.N. Panel Finds Climate change Behind Some Extreme Weather Events”. *New York Times*, 18 de noviembre.

GIRALDO, JAVIER,

- 2004 En SINTRAMINERCOL, p. 17.

GOLDMAN, MICHAEL

- 1998 “Inventing the Commons: Theories and Practices of the ‘Commons’ Professionals”. En Michael Goldman (ed.). *Privatising Nature. Political Struggles for the Global Commons*. Pluto Press, 20-53. London.

GOLDMAN, SACHS

- 2011 “Building Better Global Economic BRICs”. Noviembre. <<http://www.goldmansachs.com/our-thinking/topics/brics/brics-reports-pdfs/build-better-brics.pdf>> [Consulta: 20 de julio, 2012]

GORDON, TODD y Jeffery Webber

- 2008 “Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin America”. En: *Third World Quarterly*, vol. 29, No. 1, p. 63-87.

GOTTSCHLICH, DANIELA

- s/f. *Nachhaltiges Wirtschaften: Zum Verhältnis von Care und Green Economy. Green Economy: Gender_Gerecht* [en línea] <http://www.frauenrat-brandenburg.de/seiten/dateien/Care%20Economy_finalx.pdf> [Consulta 6 de diciembre 2012]

GREENPEACE

- 2011 *Bad Influence: How McKinsey-inspired plans lead to rain-forest destruction*.

<<http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Bad-Influence/>>

[Consulta: 28 de julio, 2012]

GUDYNAS, EDUARDO

- 2012 “La dimensión continental y global de las transiciones hacia las alternativas al desarrollo”. En A. Alayza y E. Gudynas (eds.), *Transiciones y alternativas al extractivismo en la región Andina. Una mirada desde Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú*, RedGE y CLAES, En prensa, Lima.
- 2011a “Alcances y contenidos de las transiciones al postextractivismo”. En *Ecuador Debate*, No. 82, p. 61-80, abril, Quito.
- 2011b “Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al postextractivismo”. En *Más allá del desarrollo*, Fundación Rosa Luxemburg, Quito.
- 2011c “Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo”. En Fernanda Wanderley (coord.), *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina*. Oxfam / CIDES UMSA, La Paz.
- 2011d “Caminos para la transición postextractivista”. En Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas (eds.), *Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú*, CEPES, Lima.
- 2011e “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa”. En Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, M. Lang y D. Mokrani (eds.), *Más allá del desarrollo*. Fundación Rosa Luxemburg y AbyaYala, Quito.
- 2011f “Alcances y contenidos de las transiciones al post-extractivismo”. *Ecuador Debate* 82, Abril, 60-79.
- 2011g “Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al postextractivismo”. En Grupo permanente de trabajo sobre alternativas al desarrollo, *Más allá del desarrollo*, Abya-Yala y Fundación Rosa Luxemburg, Quito.
- 2009a *El mandato ecológico. Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales en la nueva constitución*. Abya Yala, Quito.
- 2009b “La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución del Ecuador”. En *Revista de Estudios Sociales*, No. 32, p 34-47, abril, Bogotá.
- 2009c “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano ac-

- tual”. En Varios autores, *Extractivismo, política y sociedad*, CAAP y CLAES, Quito.
- 2009d “Estado y mercado en América Latina: una pareja despareja. Cuando el mercado es plural y el Estado es heterogéneo”. En *Nueva Sociedad* 221, mayo/junio.
- 2005 “Dos caminos distintos: tratados de libre comercio y procesos de integración”. En Alberto Acosta y Fander Falconí (comp.), *TLC. Más que un tratado de libre comercio*. FLACSO e ILDES FES, Quito.
- 2004 *Ecología, economía y ética para el desarrollo sostenible*. CLAES, Coscoroba, Montevideo.
- 2002 “El concepto de Regionalismo Autónomo y el desarrollo sustentable en el Cono Sur”. En Eduardo Gudynas (ed.), *Sustentabilidad y regionalismo en el Cono Sur*, Coscoroba, Montevideo.
- GUDYNAS, EDUARDO (comp.)
2001 *Sustentabilidad y regionalismo en el Cono Sur*. Coscoroba, Montevideo.
- GUDYNAS, EDUARDO y Mariela Buonomo
2007 “Integración y comercio”. *Diccionario latinoamericano de términos y conceptos*. Coscoroba, Montevideo.
- GUSTERSON, HUGH
2009 “Empire of bases”. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 10 de marzo.
<http://www.thebulletin.org/print/web-edition/columnists/hugh-gusterson/empire-of-bases>
- HABERL, HELMUT et al.
2011 “A Socio-metabolic Transition towards Sustainability? Challenges for Another Great Transformation”. En *Sustainable Development* 19: 1-14.
- HARDIN, GARRETT
2003 *El nuevo imperialismo*. Akal, Madrid.
1977 “The Tragedy of Commons”. En Hardin y Baden (edit.), *Managing the Commons*. Trota, San Francisco.
1968 “The Tragedy of the Commons”. En *Science*, n° 162, pp. 1243-1248, Estados Unidos.
- HARVEY, DAVID
2011 Nuevo imperialismo y cambio social: Entre el despojo y la recuperación de los bienes comunes. Entrevista realizada

por Claudia Composto y Magalí Rabasa. Transcripción y Traducción por Isabel Harland De Benito.

⟨<http://www.herramienta.com.ar/entrevistas/entrevista-con-david-harvey-nuevo-imperialismo-y-cambio-social-entre-el-despojo-y-la-rec>⟩ [Consulta: 17 de enero, 2013]

2003 “The New Imperialism”. Oxford: Oxford University Press.

2001 *Espacios del capital*. Akal, Madrid.

HAUG, FRIGGA

2010 “Krise”. En Wolfgang Fritz, Frigga Haug y Peter Jehle (eds.), *Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus*. Band 7/II. Hamburgo.

HAYES, BEN

2009 *NeoConOpticon The EU Security-Industrial Complex*. Transnational Institute, Amsterdam, septiembre.

⟨<http://www.tni.org/report/neoconopticon>⟩

2006 *Arming Big Brother. The EU's Security Research Programme*. Transnational Institute y Statewatch, Amsterdam. ⟨www.tni.org/es/archives/act/3928⟩

HEGEL, FRIEDRICH

1935 “Fenomenología del espíritu”. Prólogo e introducción. *El saber absoluto*. Traducción de X. Zubiri, Madrid.

HENDERSON, JEFFREY, et al.

2002 “Global production networks and the analysis of economic development”. *Review of International Political Economy* 9 (3): 436-464.

HONTY, GERARDO

2012 “Energía en las transiciones”, documento presentado en el Taller “Dilemas del extractivismo, agua y minería en Bolivia”, Cochabamba, octubre de 2012, Cochabamba.

HOPKINS, ROB

2008 *The Transition Handbook: From oil dependency to local resilience*. Green Books, Foxhole, Reino Unido.

HORKHEIMER, MAX

1969 *Crítica de la razón instrumental*. Sur, Buenos Aires.

ICTSD-INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

2011 “China Reclaims Former Perch as World’s Biggest Manufacturer”. *China Programme*, volumen 15, número 9, 16 de marzo.

- IEA
2011 *World Energy Outlook*. París, editorial.
- IFG-THE INTERNATIONAL FORUM ON GLOBALIZATION
2011 *Outing the Oligarchy. Billionaires who benefit from today's climate crisis*. Diciembre.
⟨<http://ifg.org/programs/plutonomy.html>⟩
- IHRC-INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC
2007 *All that glitters: gold mining in Guyana. Human Rights Program*. Harvard Law Scholl, Cambridge.
- INSTITUT FÜR KRITISCHE THEORIE (eds.).
2012 *Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus*. En permanente actualización. Revisado en noviembre 2012.
⟨<http://www.inkrit.de/hkwm/hkwm-index.htm>⟩
- IPCC-INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE
2007 “Summary for Policymakers”. En *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge.
⟨<http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf>⟩
- JEVONS, WILLIAM STANLEY
1865 *The coal question, an inquiry concerning the progress of the nation, and the probable exhaustion of coal our mines*. Macmillan y Co., Londres.
- JOHNSON, CHALMERS
2004 “America’s Empire of Bases”. 15 de enero. ⟨www.TomDispatch.com⟩
- KAPSTEIN, ETHAN
2006 “The New Global Slave Trade”. *Foreign Affairs*, noviembre-diciembre.
- KAUFMANN, STEPHAN
2012 “Fragwürdige Verteilung”. En *Berliner Zeitung*, 07 de noviembre?.
- KAUFMANN, STEPHAN y Tadzio Müller
2009 *Grüner Kapitalismus. Krise, Klimawandel und kein Ende des Wachstums*. Dietz, Berlin.

KEYNES, JOHN MAYNARD

- 1943 “Proposición para una unión internacional de compensación”. En José Serulle Ramia y Jacqueline Boin, *FMI, deuda externa y crisis mundial*. IEPALA, Madrid, 1984.

KLARE, MICHAEL T.

- 2012 *The Race for What's Left. The Global Scramble for the World's last Resources*. Henry Holt and Company, New York.

KOCHHAR, RAKESH et al.

- 2011 “Wealth Gaps Rise to Record Highs Between Whites, Blacks and Hispanics”. *Pew Research Center*.
⟨www.pewresearch.org⟩

KÖHLER, BETTINA

- 2008 *Das Ökologische ist (wieder) politisch*. Malmö, 18.

KOUWENHOVEN, BILL

- 2011 “The gilded generation: What is it like to grow up as part of Russia's new power elite? Russia now has more billionaires than anywhere else on earth”. *The Independent*, Londres, 3 de julio.

KRASNER, S.D.

- 2011 *Soberanía, hipocresía organizada*. Paidós, Barcelona.

KRUGMAN, PAUL

- 2012 “America's Unlevel Field”. *The New York Times*, 8 de enero.

LA VÍA CAMPESINA

- 2012 *Conferencia Campesina Internacional: ¡Detengamos a los Acaparamientos de Tierras!* Cuaderno de la Vía Campesina No 3, Abril de 2012.

⟨<http://viacampesina.org/downloads/pdf/sp/mali-report-2012-es1.pdf>⟩

- 2011 *La agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo*. Febrero 2011. En: ⟨<http://viacampesina.org/downloads/pdf/sp/paper6-ES-FINAL.pdf>⟩.

s/f. *Los pequeños productores y la agricultura sostenible están enfriando el planeta*. Documento de posición de La Vía Campesina.

⟨<http://www.cloc-viacampesina.net/images/stories/documentos/paper5-SP.pdf>⟩

- LAMERS, PATRICK, Carlo Hamelinck, Martin Junginger y André Faaij
 2011 “*International bioenergy trade-A review of past developments in the liquid biofuel market*”. En *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, n° 15, pp. 2655-2676.
- LANDER, EDGARDO
 2012 “Un nuevo período histórico: Crisis civilizatoria y asaltos a la democracia”, presentada en el *Foro Vivir Bien Más Allá del Desarrollo*, Cochabamba, Fundación Rosa Luxemburg, 12 de abril.
 2011 “La economía verde: el lobo se viste con piel de cordero”. TNI, Ámsterdam.
 <<http://www.tni.org/es/report/la-economia-verde-el-lobo-se-viste-con-piel-de-cordero>> [Consulta: 5 de julio, 2012]
 2011 Public Citizen, “12 Months After The Effects of Citizens United on Elections and the Integrity of the Legislative Process”, Washington, enero 2011.
 <<http://www.citizen.org/12-months-after>>
 2000 Project for the New American Century. *Rebuilding America's Defenses. Strategy, Forces and Resources. For a New Century*.
 <<http://www.newamericancentury.org/>>
- LANG, MIRIAM
 2011 “Crisis civilizatoria y desafíos para las izquierdas”. En *Más allá del desarrollo*, Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburg, Abya-Yala, Quito.
- LAPAVITSAS, COSTAS, Gerlinde Kaltenbrunner, D. Lambrinidis, J. Lindo et al.
 2011 “La eurozona entre la austeridad e impagos”, segundo reporte, RME, Londres.
- LARREA, CARLOS
 s/f. “Yasuní ITT una iniciativa para cambiar la historia”. UNDP, GTZ (documento oficial de la iniciativa Yasuní ITT), Quito.
- LATORRE TOMÁS, SARA
 2010 “El ecologismo popular en el Ecuador: pasado y presente”. FLACSO/IEE, proyecto movimientos sociales en el Ecuador. Quito, inédito.

LATTES, ALFREDO E.

- 2000 “Población urbana y urbanización en América Latina”.
〈<http://www.flasco.org.ec/docs/sfcclates.pdf>〉
[Consulta: 17 de enero de 2013]

LEFF, ENRIQUE

- 2008 “Decrecimiento o desconstrucción de la economía hacia un mundo sostenible”. En *Polis*, No. 21, p. 81-90, Universidad Bolivariana, Santiago.
〈<http://www.revistapolis.cl/21/art04.htm>〉 [Consulta: 29 de diciembre de 2008]

LEONARD, ANNIE

- 2010 *La historia de las cosas*. FCE, México.

LIPTAK, ADAM

- 2010 “Justices, 5-4, Reject Corporate Spending Limit”, *The New York Times*, 21 de enero.

LOHMANN, LARRY

- 2008 “La política del cambio climático”. Entrevista para Republic, 6 de noviembre.
〈http://www.carbontradewatch.org/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=36〉 [Consulta: 6 de junio, 2009]
- 2006 “Carbon trading. A critical conversation on climate change, privatisation and power”. *Development Dialogue* Vol. 48. Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala.
〈<http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/carbonDDlow.pdf>〉

LÓPEZ RÍOS, VLADIMIR

- 2009 *Sistemas de pagos y complementación económica*. Banco Central de Venezuela, Caracas.

LUKIN, TOMÁS

- 2011 “Mentores intelectuales del crimen financiero”. *Página 12*, Buenos Aires, 10 de agosto.

LUXEMBURG, ROSA

- 1913 “La reproducción del capital y su medio ambiente”. En *La acumulación del Capital*, cap. XXVI. Sedov. 〈<http://www.grupgerminal.org/?q=node/450>〉
[Consulta: 12 de noviembre, 2012]
- 1967 *La acumulación del capital*. Grijalba, México D.F.

LYNN, KARL TERRY

- 1997 *The Paradox of Plenty - Oil Booms and Petro-States*. University of California Press, Berkeley.

MACAS, LUIS

- 2011 “El Sumak Kawsay”. En *Debate sobre cooperación y modelo de desarrollo. Perspectivas desde la sociedad civil en el Ecuador*. Centro de Investigaciones Ciudad, Quito.

MACHADO, HORACIO, Svampa, Maristella et al.

- 2012 *15 mitos y realidades de la minería transnacional*. Abya Yala, Quito.

MAE-WAN HO

- 2010 *Institute of Science in Society Dream Farm 2 – Integrated Food and Energy Rich Farm*. ISIS Report 10/07/07. En: <http://www.i-sis.org.uk/HowtoBeatClimateChange.php>

MAEGAARD, PREBEN

- 2010 “Transition to an energy-efficient supply of heat and power in Denmark”. En Kolya Abramsky, edit. *Sparking a worldwide energy revolution*. Ak Press, Oakland.

MALAMUD, A.

- 2009 “La crisis de la integración se juega en casa”. *Nueva Sociedad* 219: 97-112.
- 2004 *Regional integration in Latin América. Comparative theories and institutions*. Sociología, Portugal 44: 133-154.

MALDONADO TORRES NELSON

- 2006 “Aimé Césaire y la crisis del hombre europeo”. En Aimé Césaire, *Discurso sobre el colonialismo*. AKAL, Madrid.

MANTÁS, YIANNIS

- 2012 “S&P rebaja dos escalones a España y quita la triple A a Francia y Austria”. *Público*, Madrid, 14 de enero.

MARFULL, MIGUEL ÁNGEL

- 2011 “PSOE y PP pactan una reforma constitucional sin referéndum”. *Público*, Madrid, 23 de agosto.

MARTÍNEZ, ESPERANZA (ed.)

- 2000 *El Ecuador Post Petrolero*. Acción Ecológica; Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas (CCE), Quito.

MARTÍNEZ, ESPERANZA y Alberto Acosta

- 2010 *Yasuní: Entre el petróleo y la vida*. Abya-Yala y Universidad Politécnica Salesiana, Quito.

MARTÍNEZ ALIER, JOAN

- 2008 Entrevista realizada por Marc SaintUpéry, en *Le Monde Diplomatique*, Bolivia, diciembre.

MARX, KARL

- 2001 *El capital*, Tomo I, vol. I, Siglo XXI, Madrid.
1974 *Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán*. Progreso, Moscú.
1969 “Prólogo a la contribución de la crítica de la economía política”. En *Obras Escogidas*. Progreso, Moscú.

MCKINSEY

- 2010 *Estudio de Caso: Brasil*, 2010. <www.mckinsey.com.br/sao_paulo/carbono.pdf> [Consulta: 3 de marzo, 2011]

MEADOWS, DENNIS

- 1972 *Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit*. DVA, Stuttgart.

MELLO, CECILIA

- 2011 “Evaluación de equidad ambiental: una propuesta alternativa de toma de decisiones democrática”. En *Energía y Equidad*, No. 1, p. 55-62, Taller Ecologista, Rosario.

MILLER, ANDREW

- 2011 “China and Japan Agree to Far-Reaching Currency Pact”. 28 de diciembre. <<http://www.thetrumpet.com>>

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, VICEMINISTERIO DE MINAS

- 2007 “El ABC de la minería en el Ecuador”, Quito, junio. En: <<http://infomineria.org/fileadmin/download/ABCdela-Mineria.pdf>>

MORIN, RICH

- 2012 “Rising Share of Americans See Conflict Between Rich and Poor”. Pew Research Center. Pew Social & Demographic Trends, 11 de enero. <<http://www.pewsocialtrends.org/2012/01/11/rising-share-of-americans-see-conflict-between-rich-and-poor/?src=prc-headline>>

MUNDELL, ROBERT

- 1961 “A theory of optimum currency areas”. En *The American Economic Review*, No. 51, p. 657-665, AER, Pittsburg, noviembre.

MYERS, NORMAN y Jennifer Kent

- 2011 “The New Consumers. The Influence Of Affluence On The Environment”. Washington: *Island Press*. OECD.

2011. Towards Green Growth. <<http://www.oecd.org/dataoecd/37/34/48224539.pdf>>
- NADAL, ALEJANDRO
 2012 “Latinoamérica en la senda del neo-extractivismo”. En *La Jornada*, México, 25 abril.
- NACIONES UNIDAS. RIO +20.
 2012 Conferencias de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, *El futuro que queremos*. Río de Janeiro, junio. <<http://rio20.net/iniciativas/el-futuro-que-queremos-documento-final-de-la-conferencia-rio20>>
- NATIONAL CENTER FOR SCIENCE EDUCATION
 2012 “Climate Change Denial Is Affecting Education”. 5 de enero. <<http://ncse.com/climate/denial/denial-affecting-education>>
- NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2012
 2012 <<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:S.1867>>
- OBAMA, BARAK
 2012 “Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense”. Washington, enero.
 2011 “Remarks by President Obama to the Australian Parliament”. Camberra, Australia, 17 de noviembre. <<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>>
- O'BRIEN, KEVIN
 2012 “Top 1% of Mobile Users Consume Half of World’s Bandwidth, and Gap Is Growing”. *The New York Times*, 5 de enero.
- OECD
 2011 “Growing Income Inequality in OECD Countries: What Drives it and How Can Policy Tackle it?”, p.19, París, mayo. <www.oecd.org/els/social/inequality>
 2011 *Towards Green Growth*. París. <http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37465_44076170_1_1_1_37465,00.html> [Consulta: 12 de julio, 2012]
- OEINDRILA, DUBE y Juan Fernando Vargas
 2006 “Are All Resources Cursed? Coffee, Oil and Armed Conflict in Colombia”. En *Documentos de CERAC*, No. 002024, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Bogotá, diciembre.

OICA-INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS

- 2011 *Production Statistics 2010*. <<http://oica.net/category/production-statistics/>>

OIEA

- 2008 *Indicadores energéticos del desarrollo sostenible: directrices y metodología*. OIEA, Viena.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

- 2005 “Una alianza global contra el trabajo forzoso”, Ginebra, pp. 12, 14. <white.oit.org.pe/sindi/general/declarationweb.pdf>

OROZCO RAMÍREZ, SHIRLEY, Álvaro García Linera y Pablo Stefanoni

- 2006 “No somos juguetes de nadie...” Análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización. La Paz: NCCR Norte Sur, COSUDE y Plural.

OSPINA PERALTA, PABLO

- 2012 *La Revolución Ciudadana en Ecuador, los cambios en el modelo de acumulación, la redistribución y la democracia (2007-2012)*. Fundación Rosa Luxemburg, En prensa. Quito.
- 2009 *Transiciones. Ecuador después del referéndum*. Comité Ecuménico de proyectos, Quito.

PACE, JULIE

- 2012 “Obama signs defense bill despite ‘serious reservations’”. *The Christian Science Monitor*, 1 de enero.

PACKER, LARISSA

- 2012 “Capitalismo ‘Verde’ – Como os Novos Mecanismos Jurídicos e Financeiros Preparam o Mercado para a Economia”. En: Dawid Danilo Bartelt (org.), *Um Campeão visto de perto: Uma Análise do Modelo de Desenvolvimento Brasileiro*. Heinrich-Böell-Stiftung, Río de Janeiro.

PAECH, NIKO

- 2012 *Befreiung vom Überfuss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie*. Oekom-Verlag, München.

PAÉZ, PEDRO

- 2010 *El SUCRE y la nueva arquitectura financiera regional*. SELA, Reunión regional Reforma de la Arquitectura Financiera Internacional y Cooperación monetaria y financiera en América Latina y el Caribe, Caracas.

- PANITCH, LEO y Sam Gindin
 2003 “Global Capitalism and American Empire”. En Leo Panitch y Colin Leys (eds.), *The New Imperial Challenge*. Socialist Register 2004, Merlin Press, 1-42, Londres.
- PASCAL, BLAISE
 1670 “Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets”. Port-Royal (Desprez), París.
- PINZLER, PETRA
 2012 “Wachstums skeptisch”. En *Die Zeit*, p. 21. Grupo Editorial Holtzbrinck, edición de 19 de agosto de 2012. Hamburgo,.
- PICKETT, KATE y Richard Wilkinson
 2010 *Why Equality is better for everyone*. Penguin Books, Londres.
- Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero
 2011 <<http://observatorio.cdes.org.ec/politicas-publicas/industrias-extractivas/114-mineria/262-plan-nacional-de-desarrollo-minero>> [Consulta: 10 enero de 2012]
- PNUD
 2011 *Informes sobre desarrollo humano*. PNUD / Mundi-Prensa, Madrid.
- PNUMA
 2011 *Desacoplar el uso de los recursos naturales y los impactos ambientales del crecimiento económico*. París.
 2011 *Hacia una economía verde: guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza*. <<http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx>> [Consulta: 2 de diciembre, 2011]
- POLANYI, KARL
 2007 *La gran transformación*. Fondo de Cultura, Buenos Aires.
 1989 *La gran transformación. Crítica del liberalismo económico*. Ediciones La Piqueta, Madrid.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
 2011 “Enlace ciudadano 249”. Macas, 10 de diciembre.
- PRIEST, DANNA y William Arkin
 2010 “Top-Secret America: A hidden world, growing beyond control”. *The Washington Post*, 20 de julio.
- PÚBLICO
 2011 “Fitch reclama a Rajoy medidas adicionales de austeridad en España”. Madrid, 22 de noviembre.

RAMONET, IGNACIO

2011 “La gran regresión”. *Le Monde Diplomatique*, París, diciembre.

RÄTZ, WERNER, Tanja Egan-Krieger, et al.

2011 *Ausgewachsen! Ökologische Gerechtigkeit. Soziale Rechte. Gutes Leben*. VSA Verlag, Hamburg.

RAUBER, ISABEL

2010 *Dos pasos adelante, uno atrás: lógicas en la superación de la civilización regida por el capital*. Desde Abajo, Bogotá.

RAWORTH, KATE

2012 *A Safe and Just Space for Humanity. Can we Live within the Doughnut?* Oxfam International.

REUTERS, DPA y AFP

2011 “Plantea China una nueva divisa de reserva para sustituir al dólar”. *La Jornada*, México, 7 de agosto.

REYES, FERNANDO y César Ajamil

2005 *Petróleo, Amazonía y capital natural*. CCE, Quito.

RIBERA, MARCO

2010 *El sector minero. Análisis crítico y problemáticas socioambientales de: megaproyecto Mutún, cuenca del Poopó, cuenca del Pilcomayo, megaproyecto San Cristóbal*. Lidema. La Paz.

RIVAS, JOSÉ

2011 “¿Nueva integración para un viejo modelo de desarrollo?”. En *Revista de Economía Política Latinoamericana Tiempos de crisis*, año 2, No. 3, pp. 11-37, primer semestre, Caracas.

ROA AVENDAÑO, TATIANA

2012 “Palabras para narrar la resistencia. Las luchas por el agua y el territorio”. En C. Toro, T. Roa, J. Fierro y S. Coronado (eds.), *Minería, territorio y conflicto*. Universidad Nacional de Colombia, Censat Agua Viva, Plataforma Desc, Bogotá.

2009 “Entre el tunjo y la iguana. Una cronología algo comentada y algo intencionada”. *Ruiría*, pp. 33-42, Censat Agua Viva, Bogotá.

ROCKSTRÖM, JOHAN et al.

2009 “Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity”. En *Ecology and Society* 14(2).

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS

- 2008 *Ponencia en el Foro Social Catalán.* <<http://www.radiochango.com/castellano/konciencia/ponencia-de-Juan-Carlos-Rodr%C3%ADguez-al-Forum-Soc.html>> [Consulta: 15 de octubre, 2012]

RODRIK, DANI

- 2007 *One economics, many recipes. Globalization, institutions and economic growth.* Princeton University Press, Princeton.

ROMERO, MIGUEL y Pedro Ramiro

- 2012 *Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la cooperación al desarrollo.* Icaria/Más madera, Barcelona.

ROSALES, OSVALDO y M. Kuwayam

- 2012 *China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica.* CEPAL, Santiago de Chile.

SABLOWSKI, THOMAS

- 2009 Die Ursachen der neuen Weltwirtschaftskrise. En: *Kritische Justiz* (2).

SACHER, WILLIAM

- 2010 *Cianuro, la cara tóxica del oro: Una introducción al uso del cianuro en la explotación del oro.* 11.11.11 Bélgica / CORDAID, Holanda / OCMAL Quito.

SACHER, WILLIAM y Alain Deneault

- 2012 *Paradis sous terre. Comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale.* Ecosociété, Saint-Laurent.

SACHER, WILLIAM y Alberto Acosta

- 2012 *La minería a gran escala en el Ecuador.* Abya-Yala, Quito.

SACHS, GOLDMAN

- 2010 "Is this the BRICs Decade?" *BRICs Monthly*, 20 de mayo. <<https://360.gs.com>>
- 2009 "The Long-Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis". *Global Economics Paper* No. 192, diciembre.

SAPIR, JAQUES

- 2011 "La Zone Euro et l'Économie Française: Analyse des effets de la surévaluation de l'Euro". CEMI EHESS, Paris.

SCURRAH, MARTIN (ed.)

2008 *Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú.* Oxfam, Instituto Bien Común e IEP. Lima.

SECRETARÍA GENERAL DE ALADI, Secretaría General de la CAN, Secretaría del Mercosur, Secretaría Permanente de la OTCA, Ceoal CAF.

2005 “Un nuevo tratamiento a las asimetrías sudamericanas”. Foro de reflexión “Un nuevo tratamiento de las asimetrías en la integración sudamericana”, La Paz.

SCHMIDT, ALFRED

1983 *El concepto de naturaleza en Marx.* Siglo XXI, Madrid.

SENPLADES

2009 *Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.* SENPLADES, Quito.

SEOANE, JOSÉ y Emilio Tadei

2011 *Recolonización, bienes comunes de la Naturaleza y alternativas desde los pueblos.* Río de Janeiro: GEAL y Diálogo de los Pueblos.

SHEAR, JEFF

2011 “A Professional Military and the Privatization of Warfare”. *Miller-McCune*, 22 de abril.

SHERMAN, ARLOC and Chad Stone

2010 “Income gaps between very rich and everyone else more than tripled in last three decades, new data show”. Center on Budget and Policy Priorities, Washington, 25 de junio. <www.cbpp.org>

SINTRAMINERCOL

2004 *La gran minería en Colombia. Las ganancias del exterminio.* Sintraminercol, Bogotá.

SOTELO, VICENTE y Pedro Francke

2011 “Es económicamente viable una economía post extractivista en Perú”. En Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas (eds.), *Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú.* CEPES, Lima.

SPAKOVSKY, HANS

2010 “Citizens United and the Restoration of the First Amendment”, *Legal Memorandum no. 5.*, Heritage Foundation, 17 de febrero. <<http://www.heritage.org/research/reports/2010/02/citizens-united-and-the-restoration-of-the-first-amendment>>

STERN, NICOLAS

- 2006 “Stern Review on the Economics of Climate Change”.
 <www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm>

STIGLITZ, JOSEPH

- 2006 *Cómo hacer que funcione la globalización*. Taurus, Madrid.

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE

- 2010 *Background paper on SIPRI military expenditure data, 2010*. Estocolmo. <www.sipri.org>

SUPIOT, ALAIN

- 2011 *El espíritu de Filadelfia: La justicia social frente al mercado total*. Península, Barcelona.

SVAMPA, MARISTELLA y Mirta Antonelli

- 2009 *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Biblos, p. 19. Buenos Aires. <<http://doctoradosociales.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/Miner%C3%ACa+transnacional...51-101.pdf>> [Consulta: 20 de noviembre de 2012]

SWYNGEDOUW, ERIK

- 2010 “Apocalypse Forever? Post-political Populism and the Spectre of Climate Change”. En *Theory, Culture & Society* 27(2-3): 213-232.

TANAKA, MARTÍN

- 2002 *Minería y conflicto social*. Instituto Estudios Peruanos, CIPCA, CBC y CIES, Lima.

TAPIA, LUIS

- 2002 *La producción del conocimiento local: Historia y política en la obra de René Zavaleta*. Muela del Diablo, La Paz.

TERRA DE DIREITOS

- 2011 “Pagamento por Serviços Ambientais e Flexibilização do Código Florestal para um Capitalismo ‘Verde’”. Curitiba. <http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2011/08/Analise-PSA-CODIGO-Florestal-e-TEEB-_Terra-de-direitos.pdf> [Consulta: 12 de julio, 2012]

THE OECD PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA)

- <www.oecd.org/edu/pisa/2009>

THE UNITED NATIONS

- 2003 *Water for the People. Water for Life*. World Water Development Report. Executive Summary. UNESCO, París. <www.unesco.org/water/wwap>

TOBIN, DAMIAN

- 2011 “Inequality in China: Rural poverty persists as urban wealth balloons”. *BBC News Business*, 29 de junio. <<http://www.bbc.co.uk/news/business-13945072>>

TORNELL, AARON y Philip Lane

- 1999 “The Voracity Effect”. En *The American Economic Review*, vol. 89, No. 1, pp. 22-46.

TORRES, VÍCTOR

- 2007 “El desarrollo económico local en el Ecuador. Desafíos de política pública”. En *Ecuador dialoga*. FLACSO-Ecuador-Intercooperation, pp. 10-11, Quito, s.d.

ÜBERGÄNGE, GERECHTE

- 2011 “Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und Linke Praxis”. Berlín, Rosa-Luxemburg-Stiftung. No. 1.

UNASUR

- 2010 Estructura de las exportaciones intra y extrarregionales, 2010 (en porcentajes del total). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Base de datos Comtrade, p. 10.

UNCTAD

- 2010 *The Green Economy: Trade and Sustainable Development Implications*. <http://www.unctad.org/en/docs/ditcted20102_en.pdf> [Consulta: 28 de noviembre, 2011]

UNITED NATIONS. DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. POPULATION DIVISION

- 2011 *World Mortality 2011* <www.unpopulation.org>

UNITED STATES CENSUS BUREAU

- 2011 *Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States: 2010*. Septiembre. Cuadro 4.

UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF DEFENSE

- 2012 *Defense Budget Priorities and Choices*. Washington.

UNEP

- 2009 *Global Green New Deal Policy Brief*. UNEP. <http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf> [Consulta: 11 de octubre, 2011]

- 2011 *Towards Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. <<http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx>> [Consulta: 28 de noviembre, 2011]
- s/f. <<http://www.unep.org/greeneconomy/>> [Consulta: 7 de junio, 2011]
- UNEP-UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME
- 2009 *A Global Green New Deal. Executive Summary*. <www.unep.org/greeneconomy/docs/ggnd_Final%20Report.pdf>
- UNEP-UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME
- 2011 *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. <www.unep.org/greeneconomy/>
- UNEP/UNDP
- 2009 *Charting A New Low-Carbon Rout to Development*. <http://www.undp.org/eu/documents/Charting_carbon_route_web_final.pdf> [Consulta: 27 de noviembre, 2011]
- VALLEJO, MARÍA CRISTINA, Carlos Larrea, Rafael Burbano, Fander Falconí
- 2011 *La iniciativa Yasuní-ITT desde una perspectiva multicriterial*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Quito.
- VILLAVICENCIO, FERNANDO
- 2011 “Fin del nacionalismo petrolero”. <http://www.argenpress.info/2011/12/ecuador-fin-del-nacionalismo-petrolero.html> [Consulta: 10 enero de 2012]
- 2007 “La Amazonía ecuatoriana en disputa”. Argenpress, Quito.
- VILLAVICENCIO, ARTURO y Alberto Acosta (coord.)
- 2007 *Agenda energética 2007-2011 - Hacia un sistema energético sustentable*. Ministerio de Energía y Minas, Quito.
- VARELA PARACHE, MANUEL (1965)
- 1992 “La Unión Europea de Pagos como mecanismo de *clearing* multilateral”. En Manuel Varela Parache, *Organización Económica Internacional*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- VARGAS, HERNÁN
- 2012 Entrevista (no publicada).

VEGA CANTOR, RENAN, Luz Ángela Núñez Espinel y Alexander Pereira Fernández

2009 *Petróleo y protesta obrera. La USO y los trabajadores petroleros de Colombia*. USO, Bogotá.

VERDUM, RICARDO

2009 “Os riscos do neo-extrativismo progressista”. *Orçamento e Política Ambiental*, INESC, Brasília, No 23.

WALLERSTEIN, IMMANUEL

2010 “¿Guerra de divisas?, por supuesto”. *La Jornada*, México, 6 de noviembre.

WAR RESISTERS LEAGUE

2011 “Where your income tax money really goes”. Nueva York, 5 de julio. <<http://www.warresisters.org/pages/piechart.htm>>

WATSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

2011 *The Costs of War*. Eisenhower Study Group. Eisenhower Research Project, Brown University, junio. <<http://costsofwar.org/>>

WATT, LOUISE

2011 “China reveals its space plan up to 2016”. Salon, 30 de diciembre. <http://www.salon.com/2011/12/30/china_reveals_its_space_plans_up_to_2016_3_2/>

WB

2011 “Moving to a Green Growth Approach to Development”. <<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:22865936~menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282,00.html>> [Consulta: 6 de junio, 2012]

WBGU

2009 *Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation*. Berlin.

WEISBROT, MARK

2012 “Europeans’ economic future has been hijacked by dangerous ideologues”. En *The Guardian*, Inglaterra, 30 de mayo. <<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/30/eurozone-crisis-spain-debt>>

WEXELL, LUCIANO

2011 “Perspectivas de la integración productiva en América Latina”. En *Revista de Economía Política Latinoamericana*

- Tiempos de Crisis*, año 2, No. 3, pp. 113-142, primer semestre, Caracas.
- 2006 *Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century*. World Bank, Washington, DC. <www.teebweb.org> [Consulta: 11 de julio, 2012]
- WINTERS, JEFFREY
- 2011 “Oligarchy and Democracy”. *The American Interest*, noviembre-diciembre.
- WISSEN, MARKUS
- 2010 “Klimawandel, Geopolitik und ‘imperiale Lebensweise’. Das Scheitern von ‘Kopenhagen’ und die strukturelle Überforderung internationaler Umweltpolitik”. En: *Kurswechsel(2)*.
- WORLD BANK
- 2006 *Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century*. Washington, D. C., p. 123.
- 2012 “Uncertainties and vulnerabilities”. *Global Economic Prospects*, Vol 4, Washington.
- WORLD ECONOMIC FORUM
- 2012 *Global Risks 2012*. Ginebra, enero.
- WOYNOWSKI, BORIS et al. (eds.)
- 2012 *Wirtschaft ohne Wachstum?! Notwendigkeit und Ansätze einer Wachstumswende*. Reihe Arbeitsberichte des Instituts für Forstökonomie 59, Freiburg.
- WUPPERTAL INSTITUT FÜR KLIMA, UMWELT, ENERGIE.
- 2005 *Fair Future. Begrenzte Ressourcen und globale Gerechtigkeit*. Munich.
- YARDLEY, JIM.
- 2010 “Soaring Above India’s Poverty, a 27-Story Home”. *The New York Times*, 28 de octubre.
- ZELLER, CHRISTIAN
- 2010 “Die Natur als Anlagefeld des konzentrierten Finanzkapitals”. En Falko Schmieder (ed.), *Zur Kritik der Politischen Ökologie heute*. Berna.
- ZIBECHI, RAÚL
- 2012 “Las izquierdas y el fin del capitalismo”. *La Jornada*, México, 13 de enero.
- ZIBECHI, RAÚL
- 2012 Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo. Ediciones desde abajo, Bogotá.

ZIZEK, SLAVOJ

2011 “Now the field is open”. *Al Jazeera*, 29 de octubre. <www.aljazeera.net>

ZIBECHI, RAÚL

2011 “Extractivismos, segunda fase del neoliberalismo”, alocución pronunciada en Cuenca, 21 de junio.

ZIBECHI, RAUL

2012 *Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo*. Ediciones desde abajo, Bogotá.

Consultas en prensa

Diario El Heraldito. ECOCIFRAS 28-11-2012 (Editorial), en <http://www.elheraldito.com.ec/index.php?fecha=2012-11-28&seccion=Editoriales¬icia=20996> [Consulta: 13 de julio, 2012]

Diario El Comercio. China, deuda y condiciones (editorial). http://www.elcomercio.com/editorial/china-deuda-condiciones_0_754724692.html.

Asociación de Profesionales Independientes. *El Metroférico*. API, 2011. Ver también: <<http://iniciativametroferico.wordpress.com/tag/metroferico-quito-difusion/>>, [Consulta: 6 de diciembre de 2012].

Swampa, Maristella. “La minería a cielo abierto: de la protesta a nuevas leyes. Resistiré. En: <<http://www.maristellaswampa.net/archivos/period42.pdf>>.

Cueva, Edwin. “Desalojo a mineros deja siete heridos y tres detenidos en Paquisha Zamora Chinchipe”, *Diario El Universo*, 15 de septiembre de 2010. En: <<http://www.eluniverso.com/2010/09/15/1/1447/desalojo-mineros-deja-primeros-detenidos-paquisha.html>>

Diario El Comercio. “Fuerte operativo militar en dos zonas mineras de Esmeraldas, 23 de mayo de 2011. <http://www.elcomercio.com/pais/Operativo-militar-Esmeraldas_0_485351583.html>

Diario El Comercio. “Guerrilla se aprovecha de minería ilegal”. Quito, 19 de septiembre de 2012. En: <http://www.tvecuador.com/index.php?option=com_reportajes&view=showchannel&id=1698>

Consultas en redes

Galeano, Eduardo. Megaminería, saqueo e indignación (video).
 <<http://nuestrouiversovivo.blogspot.com/2012/04/megamineria-saqueo-e-indignacion-por.htm>> [Consulta: 16 de enero, 2013]

Otros enlaces consultados

Correa, Rafael. Enlace ciudadano del 11 de diciembre de 2011, Macas.
 <<http://www.youtube.com/watch?v=AVqTbetBY1Y>> [Fecha de consulta 17.01.2013] [Entrevista con David Harvey. Nuevo imperialismo y cambio social: Entre el despojo y la recuperación de los bienes comunes]. En: <<http://www.herramienta.com.ar/entrevistas/entrevista-con-david-harvey-nuevo-imperialismo-y-cambio-social-entre-el-despojo-y-la-rec>> [Fecha de consulta: 17.1.2013]
 <www.elcerrejon.com> [Consulta: 7 de diciembre, 2012] <<http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/>> [Consulta: 7 de diciembre, 2012]
 <www.sintracarbon.com> [Consulta: 7 de diciembre, 2012]
 Europarl. 2011. <<http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110929IPR27849/html/MEPs-call-for-global-green-economy-targets>> [Consulta: 2 de julio, 2012]
 <<http://blogs.worldbank.org/climatechange/low-carbon-growth-only-sustainable-way-overcome-world-poverty>> [Consulta: 2 de julio, 2012]
 <<http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC> y <<http://en.wikipedia.org/wiki/BRICS>> [Consulta: 2 de julio, 2012]
 <http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_equivalent> [Consulta: 12/10/2012]
 <<http://en.wikipedia.org/wiki/G8%2B5>> [Consulta: 21 de julio, 2012]
 <http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Stern> [Consulta: 20 de julio, 2012]
 <<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/brasil-cresce-2-7-em-2011-e-se-consolida-como-6a-economia-mundial>> [Consulta: 17 de julio, 2012]
 <http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/StateAndTrend_LowRes.pdf> [Consulta: 11 de julio, 2012]

- ⟨http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/decisions.php⟩ [Consulta: 10 de julio, 2012]
- ⟨<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSPANISH/0,,contentMDK:23190905~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html>⟩ [Consulta: 3 de julio, 2012]
- ⟨<http://www.bbc.co.uk/news/business-17272716>⟩ [Consulta: 29 de julio, 2012]
- ⟨http://www.direct.gov.uk/en/N11/Newsroom/DG_064854⟩ [Consulta: 29 de julio, 2012]
- ⟨<http://www.esmap.org/esmap/LowCarbonDevelopmentStudies>⟩ [Consulta: 22 de julio, /2012]
- ⟨http://www.esmap.org/filez/pubs/63200985854_529200911857_FINAL_LCCS-bro_lowres.pdf⟩ [Consulta: 19 de julio, 2012]
- ⟨<http://www.guardian.co.uk/environment/2007/nov/29/climatechange.carbonemissions>⟩.
- ⟨<http://www.guardian.co.uk/politics/2006/oct/30/economy.uk>⟩ [Consulta: 20 de noviembre, 2009]
- ⟨http://www.mckinsey.com/en/Client_Service/Sustainability/Latest_thinking/Pathways_to_a_low_carbon_economy.aspx⟩ [Consulta: 10 de noviembre, 2011]
- ⟨http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wp-content/uploads/2012/07/NCD_Roadmap.pdf⟩ [Consulta: 25 de julio, 2012]
- ⟨http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wpcontent/uploads/2012/04/natural_capital_declaration_es.pdf⟩ [Consulta: 25 de julio, 2012]
- ⟨<http://www.project-catalyst.info/about-us/mission-statement.html>⟩ [Consulta: 20 de julio, 2012]
- ⟨<http://www.project-catalyst.info/about-us/project-catalyst-is-and-isnt.html>⟩ [Consulta: 20 de julio, 2012]
- ⟨<http://www.project-catalyst.info/focus-areas/low-carbon-growth-planning.html>⟩ [Consulta: 20 de julio, 2012]
- ⟨<http://www.reuters.com/article/2012/07/30/carbon-market-idUSL6E8IU8Q820120730>⟩ [Consulta: 10 de octubre, 2012]
- ⟨<http://www.roadmap2050.eu/>⟩ [Consulta: 10 de octubre, 2012]
- ⟨http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/sdt_cc/cc_global_green_new_deal.pdf⟩
- ⟨<http://www.uncsd2012.org/>⟩ [Consulta: 9 de noviembre, 2012]
- ⟨<http://www.wavespartnership.org/waves/>⟩ [Consulta: 9 de noviembre, 2012]

- <http://www.worldbank.org/en/news/2012/06/20/massive-show-support-action-natural-capital-accounting-rio-summit>
 [Consulta: 10 de octubre, 2012]
- <http://www.wri.org/project/low-carbon-development/> [Consulta: 22 de julio, 2012]
- Shell. 2011. http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/shell_global_scenarios/signals_signposts/ [Consulta: 2 de febrero, 2012]
- UNDP. http://www.undp.org/content/undp/n/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/climate_strategies/green_lecrds_guidancemanualsandtoolkits.html. [Consulta: 26 de enero, 2012].
- UNDP, 2011 http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/climate_strategies/green_lecrds_guidancemanualsandtoolkits.html.
- <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/huelga-de-obreros-de-empresa-china-chone-569732.html>
- http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101342656/-1/Manab%C3%AD%3A_Trabajadores_de_la_compa%C3%B1%C3%ADa_china_Tiesiju_est%C3%A1_n_en_huelga.html#.UPgXrfJTXQ
- <http://www.conflictove.org.ve/laboral/carabobo-transnacional-china-sinohydro-no-cancela-beneficios-a-personal-venezolano-en-el-palito.html>
- http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=186105&umt=ministro_relaciones_laborales_comparecera_a_asamblea_miercoles_proximo_por_denuncias_trabajadores_coca_codo_sinclair
- <http://earthjustice.org/blog/2013-january/the-poverty-of-mountain-top-removal-mining> <http://hronlineph.com/2012/08/05/in-the-news-mining-causes-highest-poverty-incidence-sun-star/>
- www.transiciones.org
- <http://www.redextractivas.org/es/>
- <http://www.redge.org.pe/>; <http://www.olca.cl/oca/index.htm>
- Price Water House. 2012. En http://www.pwc.com/en_M1/m1/publications/Blueprint-Green.pdf
- B20. 2012. En <http://b20.org/documentos/B20-Complete-Report.pdf>. El B20 es la reunión del sector de las empresas de los paí-

ses miembros del G20; se reúnen paralelamente a los encuentros del G20, desde la reunión de este en Toronto, Canadá, en 2010.

Resumen, sesión 5. En <http://www.g20.org/index.php/es/component/content/article/39-g20/402-prueba>.

Resumen para formuladores de políticas, en http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf; informe completo, en http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/sdt_cc/cc_global_green_new_deal.pdf.

<http://www.unep.org/greeneconomy/>

<http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Bad-Influence/>

<http://www.wbcsd.org/vision2050.aspx>

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/decisions.php

<http://www.bbc.co.uk/news/business-17272716>

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUN-DIAL/NEWSPANISH/0,,contentMDK:23190905~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html>

http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2011/08/Analise-PSA-CODIGO-Florestal-e-TEEB-_Terra-de-direitos.pdf; Biodiversidade à venda?, en http://br.boell.org/downloads/pdf/teeb_final_05-12.pdf

http://elpais.com/diario/2008/11/16/economia/1226790018_850215.html

Movimiento por un Uruguay Sustentable. Véase www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/06/por-un-uruguay-sustentable/

<http://postextractivismo.blogspot.com/>

<http://www.juiciociudadano.org/mineria/>

UNCTAD, en <http://archive.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=5391&lang=1>

www.elcerrejon.com [Consulta: 7 de diciembre, 2012]

<http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/> [Consulta: 7 de diciembre, 2012]

www.sintracarbon.com [Consulta: 7 de diciembre, 2012]

<http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html>, [Consulta, 5 de diciembre, 2012]